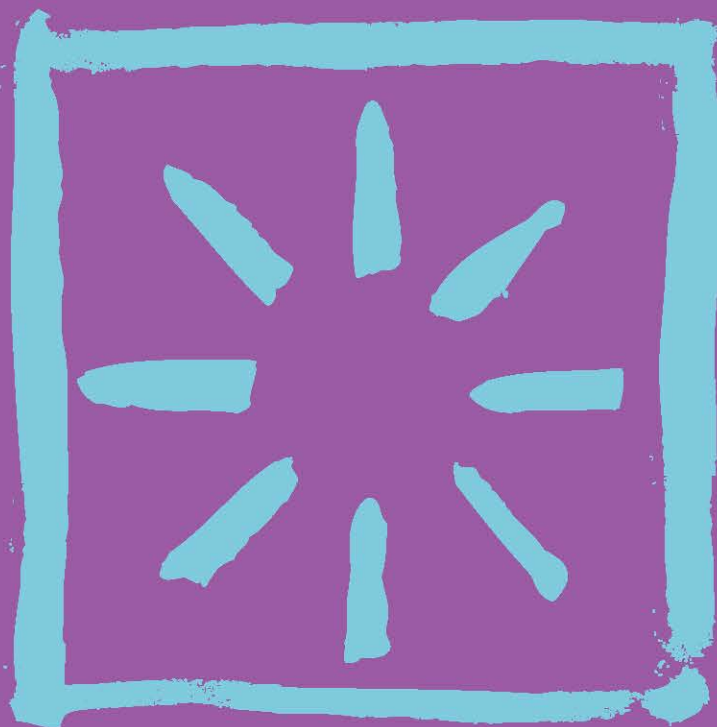


2011



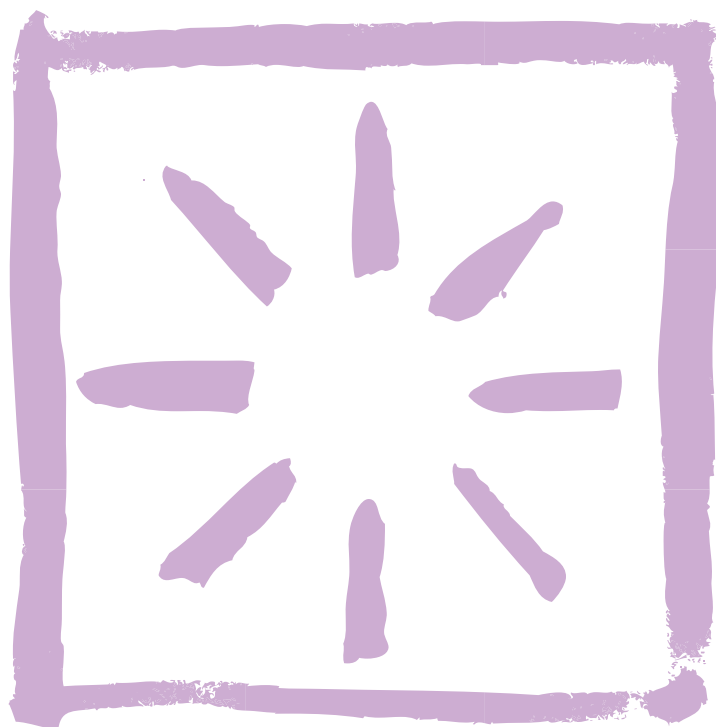
Panorama social
de América Latina



NACIONES UNIDAS

CEPAL

2011



Panorama social de América Latina



NACIONES UNIDAS

CEPAL

Alicia Bárcena

Secretaria Ejecutiva

Antonio Prado

Secretario Ejecutivo Adjunto

Martín Hopenhayn

Director de la División de Desarrollo Social

Luis Beccaria

Director de la División de Estadística y Proyecciones Económicas

Dirk Jaspers_Fajier

Director del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) -
División de Población de la CEPAL

Ricardo Pérez

Director de la División de Documentos y Publicaciones

El *Panorama social de América Latina* es preparado anualmente por la División de Desarrollo Social y la División de Estadística y Proyecciones Económicas, dirigidas por Martín Hopenhayn y Luis Beccaria, respectivamente, y cuenta con la participación del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) – División de Población de la CEPAL, dirigido por Dirk Jaspers_Fajier.

La edición de 2011 fue coordinada por Juan Carlos Feres y Martín Hopenhayn, quienes junto a Guimar Bay, Fabiana del Popolo, Ernesto Espíndola, Xavier Mancero, Ciro Martínez, Tim Miller, Jorge Rodríguez, Julio Rosado, Cecilia Rossel, Magda Ruiz, Paulo Saad y Pablo Villatoro, se encargaron de la redacción de los capítulos. En la preparación de insumos sustantivos y el procesamiento estadístico colaboraron Carlos Daroch, Ernesto Espíndola, Fabiola Fernández, Marco Galván, Carlos Howes, Xavier Mancero y Nora Ruedi.

Para la elaboración del capítulo II se contó con el apoyo de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).



Notas explicativas

En esta publicación, el término “país” se refiere a entidades territoriales, ya sean Estados conforme al derecho y a la práctica internacionales o territorios para los cuales se mantienen datos estadísticos en forma separada e independiente.

Tres puntos (...) indican que los datos faltan, no constan por separado o no están disponibles.

Dos rayas y un punto (-) indican que el tamaño de la muestra no resulta suficiente para estimar la categoría respectiva con una confiabilidad y precisión adecuadas.

La raya (-) indica que la cantidad es nula o despreciable.

Un espacio en blanco en un cuadro indica que el concepto de que se trata no es aplicable o no es comparable.

Un signo menos (-) indica déficit o disminución, salvo que se especifique otra cosa.

El guión (-) puesto entre cifras que expresen años, por ejemplo 1990-1998, indica que se trata de todo el período considerado, ambos años inclusive.

La barra (/) puesta entre cifras que expresen años (por ejemplo, 2003/2005) indica que la información corresponde a alguno de esos años.

La palabra “dólares” se refiere a dólares de los Estados Unidos, salvo indicación contraria.

Debido a que a veces se redondean las cifras, los datos parciales y los porcentajes presentados en los cuadros no siempre suman el total correspondiente.

Publicación de las Naciones Unidas

ISBN: 978-92-1-221087-2 • ISSN impreso: 1020-5152

E-ISBN: 978-92-1-055013-0

LC/G.2514-P • Número de venta: S.12.11.G.6

Copyright © Naciones Unidas, febrero de 2012. Todos los derechos están reservados

Impreso en Santiago de Chile • 2011-927

La autorización para reproducir total o parcialmente esta obra debe solicitarse al Secretario de la Junta de Publicaciones, Sede de las Naciones Unidas, Nueva York, N.Y. 10017, Estados Unidos. Los Estados miembros y sus instituciones gubernamentales pueden reproducir esta obra sin autorización previa. Solo se les solicita que mencionen la fuente e informen a las Naciones Unidas de tal reproducción.

Índice

Síntesis	13
Capítulo I	
Pobreza, desigualdad y percepciones sobre el mundo del trabajo en América Latina	43
A. Pobreza	43
1. Contexto económico	43
2. Evolución reciente de la pobreza	45
3. Factores detrás de los cambios en la pobreza	49
B. Desigualdad distributiva	51
1. Evolución reciente de la desigualdad	52
2. Factores relacionados con los cambios distributivos	55
3. Características de la distribución del ingreso	59
C. Percepciones sobre el funcionamiento del mercado de trabajo y las instituciones laborales	63
1. Percepciones sobre el desempleo y el empleo	64
2. Percepciones sobre el funcionamiento de las instituciones laborales	67
3. Sentimientos de incertidumbre y bienestar o malestar asociados al mundo del trabajo	70
Anexo	74
Capítulo II	
Panorama actual y perspectivas futuras de la fecundidad en América Latina	81
A. Introducción	81
B. Fecundidad en América Latina	82
1. Niveles y tendencias actuales en el contexto mundial	82
2. La sorprendente intensidad del descenso de la fecundidad en América Latina	83
3. Diferencias dentro de América Latina	84
C. Relación entre educación, intensidad y calendario de la fecundidad	86
1. Fecundidad y educación en América Latina	86
2. Iniciación sexual y maternidad: La educación como factor de divergencias estables	89

D. Perspectivas futuras de la fecundidad sobre la base de los cambios educativos	93
1. Los cambios en la distribución educativa de las mujeres en América Latina	93
2. La contribución de los cambios en la distribución educativa al descenso de la fecundidad	94
3. Evolución futura de la educación e impacto en la fecundidad	95
E. Fecundidad adolescente: Una prioridad para la acción y la investigación	98
1. Tendencias de la fecundidad adolescente	99
2. Determinantes de la fecundidad adolescente	100
3. Fecundidad adolescente en América Latina: Una expresión de las desigualdades sociales	103
F. Consideraciones finales	104

Capítulo III

Trabajo, empleo y mercados laborales: Fábricas, circuitos y núcleos duros

de reproducción de desigualdades	107
A. Introducción	107
B. Estructura productiva y mercados laborales: Otra cara del condicionamiento estructural de la desigualdad	109
1. Productividad y estructura económica	109
2. Heterogeneidad, desigualdad, rigidez distributiva y bienestar	111
C. Productividad, formalidad, informalidad y desigualdad: Más allá de las líneas divisorias	112
1. Estratificación progresiva y ensanchamiento de brechas	113
2. La desigualdad de género y su rigidez como posibles claves	116
D. Participación laboral y desempleo en clave de desigualdad	119
1. Participación laboral en la encrucijada: Algunas tendencias recientes	120
2. Desempleo: “afuera del afuera” y más lejos entre sí	122
E. El Estado en la intersección de mercados laborales y familias	127

Capítulo IV

Protección social y desigualdad: Fisuras, rigideces, márgenes y oportunidades

.....	131
A. Introducción	131
B. Lazos contributivos y protección social en América Latina	133
1. La protección de los trabajadores y sus familias	134
2. La protección de los adultos mayores vía transferencias: Entre la base contributiva y la compensación no contributiva	139
C. El pilar no contributivo: Alcance y adecuación a riesgos de las transferencias asistenciales	142
D. Fisuras y omisiones de los sistemas de protección social	144
E. La protección social y su desempeño sistémico frente a las desigualdades	151

Capítulo V

Tendencias del gasto social, dinámicas del gasto frente a la crisis y perspectivas de pisos universales de la seguridad social

.....	155
A. Introducción	155
B. El gasto social en América Latina	156
1. Tendencias de largo plazo	156
2. Evolución sectorial del gasto social	159
3. Prociclicidad del gasto social respecto del crecimiento económico	161
4. El gasto social en la región frente a la crisis financiera	163
C. La seguridad social en la región y las perspectivas para universalizar un piso mínimo de pensiones y jubilaciones	165
1. Los sistemas de seguridad social en la región	166
2. Niveles actuales de afiliación a la seguridad social y cobertura de las prestaciones de seguridad social y pensiones	167
3. Recaudación actual de contribuciones sociales (independiente del sistema) y recursos totales destinados al pago de pensiones y jubilaciones de adultos mayores	168

4. Ingresos potenciales por contribuciones sociales	169
5. Establecimiento de una pensión mínima universal para los adultos mayores	172
Capítulo VI	
La juventud en el Caribe: Núcleos de exclusión y vulnerabilidad	179
A. Introducción	179
B. Perfil demográfico, pobreza y salud de la juventud del Caribe	181
1. Dinámica y bono demográfico	181
2. Juventud y pobreza: Los riesgos de la emancipación juvenil temprana	183
3. Mortalidad juvenil	184
4. Salud sexual y reproductiva	185
C. Acceso a la educación	188
D. Desempleo juvenil	190
E. Juventud y políticas públicas	192
1. Marco de análisis	192
2. Enfoques e institucionalidad de los asuntos de juventud	192
3. Activos y capitales: Mapeo de la incidencia de las políticas públicas para la juventud	194
F. Conclusiones	196
Bibliografía	197
Anexo estadístico	207
Publicaciones de la CEPAL	249
Cuadros	
Cuadro I.1 América Latina (20 países): evolución de algunos indicadores socioeconómicos, 2000-2010	44
Cuadro I.2 América Latina (15 países): cambios en la pobreza y contribución de los efectos crecimiento y distribución, 2002-2008 y 2002-2010	50
Cuadro I.3 América Latina (15 países): variación anual observada y simulada de la brecha de ingresos entre quintiles, según determinantes del ingreso	57
Cuadro I.4 América Latina (18 países): aporte de cada fuente de ingresos al ingreso total y a la desigualdad total, alrededor de 2010	60
Cuadro I.5 América Latina (9 países) y países desarrollados: indicadores de sindicalización de los asalariados	67
Cuadro I.A-1 América Latina (18 países): indicadores de pobreza e indigencia, 1990-2010	74
Cuadro I.A-2 América Latina (18 países): distribución del ingreso de los hogares, 1990-2010	76
Cuadro I.A-3 América Latina (18 países): indicadores de concentración del ingreso, 1990-2010	78
Cuadro I.A-4 América Latina (18 países): predictores de preocupación por perder el empleo, regresión ordinal probit, 1996-2006	80
Cuadro II.1 América Latina (12 países): tasa global de fecundidad según nivel de educación, cifra más actual y diez años antes	87
Cuadro II.2 América Latina (6 países): edad mediana de inicio a la primera relación sexual, a la primera unión y al primer hijo según nivel de educación de las mujeres de 25 a 29 años y 45 a 49 años	90
Cuadro II.3 América Latina: principales características relacionadas con la baja fecundidad	97
Cuadro II.4 América Latina (11 países): mujeres de 15 a 19 años que son madres por primera vez o están embarazadas, encuestas de 1985-1999 y 2005-2010	100
Cuadro II.5 América Latina (11 países): mujeres de 20 a 24 años que se habían unido a los 15, 18 y 20 años, y que se habían iniciado sexualmente a esas edades, dos puntos en el tiempo	101
Cuadro V.1 América Latina y el Caribe (21 países): niveles de gasto público total, gasto público no social y gasto social, y tasas de variación anual, 2007-2010	164

Cuadro V.2	América Latina (17 países): proyección de los saldos anuales de ingresos y gastos en seguridad social, 2012, 2015, 2020, 2025 y 2030	172
Cuadro V.3	América Latina (18 países): situación de los adultos mayores, alrededor de 2009, y estimación del costo anual de pensiones universales y focalizadas, 2012	173
Cuadro V.4	América Latina (17 países): proyecciones del PIB, de las contribuciones potenciales a la seguridad social y de los pagos de jubilaciones y pensiones	177
Cuadro VI.1	El Caribe (países y territorios seleccionados): población de 15 a 29 años de edad y población total, 2010	182
Cuadro VI.2	El Caribe (países seleccionados): emigración por grupos de edad y sexo, 2000-2001	183
Cuadro VI.3	El Caribe (25 países y territorios): principales causas de mortalidad de la población joven y de la población adulta, 2009	185
Cuadro VI.4	Mundo y principales regiones: tasa específica de fecundidad de mujeres de 15 a 19 años, 2000-2015	186
Cuadro VI.5	El Caribe: tasa de fecundidad de las adolescentes y variación porcentual, alrededor de 1990 y 2000	186
Cuadro VI.6	El Caribe (8 países y territorios): jóvenes de 15 a 24 años desempleados	191
Cuadro A-1	América Latina y el Caribe: evolución de algunos indicadores económicos, 1990-2010.....	209
Cuadro A-2	América Latina y el Caribe: población total de la región por países, 1980-2020	212
Cuadro A-3	América Latina y el Caribe: tasas globales de fecundidad estimadas según quinquenios, por países, 1980-2020.....	213
Cuadro A-4	América Latina: magnitud de la pobreza y la indigencia, 1990-2010.....	214
Cuadro A-5	América Latina: líneas de indigencia (li) y de pobreza (lp)	216
Cuadro A-6	América Latina: tasa de participación de hombres y mujeres en la actividad económica, según tramos de edad, 1990-2010	218
Cuadro A-7	América Latina: distribución de la población económicamente activa ocupada, según inserción laboral, 1990-2010.....	220
Cuadro A-8	América Latina: población urbana ocupada en sectores de baja productividad del mercado de trabajo, 1990-2010	222
Cuadro A-9	América Latina: tasas de desempleo abierto, según sexo y edad, en zonas urbanas, alrededor de 1990, 1999, 2008, 2009 y 2010	224
Cuadro A-10	América Latina: ingreso medio de la población económicamente activa ocupada, según inserción laboral, zonas urbanas, 1990-2010	226
Cuadro A-11	América Latina: ingreso medio de las mujeres, comparado con el de los hombres, según grupos de edad, zonas urbanas, 1990-2010.....	228
Cuadro A-12	América Latina y el Caribe (21 países): gasto público social per cápita, 1990-2010	230
Cuadro A-13	América Latina y el Caribe (21 países): gasto público social como porcentaje del producto interno bruto, 1990-2010	231
Cuadro A-14	América Latina y el Caribe (21 países): gasto público social como porcentaje del gasto público total, 1990-2010.....	232
Cuadro A-15	América Latina y el Caribe : gasto público social en educación como porcentaje del producto interno bruto, 1990-2010	233
Cuadro A-16	América Latina y el Caribe (21 países): gasto público social en salud como porcentaje del producto interno bruto, 1990-2010	234
Cuadro A-17	América Latina y el Caribe (20 países): gasto público social en seguridad y asistencia social como porcentaje del producto interno bruto, 1990-2010	235
Cuadro A-18	América Latina y el Caribe (21 países): gasto público social en vivienda y otros rubros como porcentaje del producto interno bruto, 1990-2010	236
Cuadro A-19	América Latina y el Caribe: evaluación del progreso hacia el logro de las metas del milenio	237
Cuadro A-20	América Latina y el Caribe: evaluación del progreso hacia el logro de las metas del milenio	238
Cuadro A-21	América Latina y el Caribe: evaluación del progreso hacia el logro de las metas del milenio	239
Cuadro A-22	América Latina y el Caribe: evaluación del progreso hacia el logro de las metas del milenio	240

Cuadro A-23	América Latina y el Caribe: evaluación del progreso hacia el logro de las metas del milenio	241
Cuadro A-24	América Latina y el Caribe: evaluación del progreso hacia el logro de las metas del milenio	242
Cuadro A-25	América Latina y el Caribe: evaluación del progreso hacia el logro de las metas del milenio	243
Cuadro A-26	América Latina y el Caribe: evaluación del progreso hacia el logro de las metas del milenio	244
Cuadro A-27	América Latina y el Caribe: evaluación del progreso hacia el logro de las metas del milenio	245
Cuadro A-28	América Latina y el Caribe: evaluación del progreso hacia el logro de las metas del milenio	246
Cuadro A-29	América Latina y el Caribe: evaluación del progreso hacia el logro de las metas del milenio	247
Cuadro A-30	América Latina y el Caribe: evaluación del progreso hacia el logro de las metas del milenio	248

Diagramas

Diagrama III.1	América Latina: fábricas, circuitos y núcleos duros de reproducción de desigualdades en los mercados laborales	128
Diagrama IV.1	Protección social y desigualdad: fisuras, rigideces, márgenes y oportunidades	152

Gráficos

Gráfico I.1	América Latina: evolución de la pobreza y de la indigencia, 1980-2011	45
Gráfico I.2	América Latina: evolución de los precios de los alimentos y el resto de bienes	47
Gráfico I.3	América Latina (12 países): variación anual de las tasas de pobreza e indigencia, 2009-2010	47
Gráfico I.4	América Latina (18 países): variación anual de los indicadores de pobreza, 2002-2010	49
Gráfico I.5	América Latina (15 países): variación anual del ingreso total por persona y de cada fuente en los hogares pobres, 2002-2008 y 2008-2010	50
Gráfico I.6	América Latina (15 países): variación anual de los componentes del ingreso laboral por persona en los hogares pobres, 2002-2008 y 2008-2010	51
Gráfico I.7	América Latina y otras regiones del mundo: coeficiente de concentración de Gini, alrededor de 2009	52
Gráfico I.8	América Latina (18 países): participación en el ingreso por grupos de deciles, alrededor de 2010	53
Gráfico I.9	América Latina (18 países): desigualdad según diversos índices, alrededor de 2010	54
Gráfico I.10	América Latina (18 países): evolución del índice de Gini, 1990-2002, 2002-2008 y 2008-2010	54
Gráfico I.11	América Latina (15 países): evolución de la desigualdad, 2002-2010	55
Gráfico I.12	América Latina (15 países): variación de la tasa de ocupación y la brecha entre quintiles del ingreso laboral por adulto	58
Gráfico I.13	América Latina (15 países): cambio anual en el índice de Gini de los años de estudio y en la brecha de ingresos laborales por nivel educativo	59
Gráfico I.14	América Latina (18 países): nivel y evolución del índice de Gini por tipo de ingreso, 2002-2010	61
Gráfico I.15	América Latina (18 países): descomposición de la desigualdad del ingreso laboral de los ocupados por sexo, alrededor de 2002 y de 2010	61
Gráfico I.16	América Latina (18 países): descomposición de la desigualdad del ingreso laboral de los ocupados por años de estudio, alrededor de 2002 y de 2010	62
Gráfico I.17	América Latina (18 países): descomposición de la desigualdad del ingreso laboral de los ocupados por edad, alrededor de 2002 y de 2010	63
Gráfico I.18	América Latina (18 países): percepción del desempleo como problema principal del país y tasa media de desempleo, 1996-2009	65

Gráfico I.19	América Latina (18 países): percepción del desempleo como principal problema del país según la situación ocupacional de los entrevistados, 1996-2009	65
Gráfico I.20	América Latina (18 países): percepción de la falta de oportunidades para conseguir empleo en el país, por edad y tenencia de bienes, 2007, 2008 y 2009	66
Gráfico I.21	América Latina (18 países): percepción de la probabilidad de aceptación y promoción en un trabajo de un menor de 30 años en comparación con un mayor de 30 años, por tipo de ocupación, 2008	66
Gráfico I.22	América Latina (18 países): experiencia de participación en sindicatos o gremios por nivel educativo e inserción ocupacional, 2007	68
Gráfico I.23	América Latina (18 países): desconfianza en los sindicatos y percepción de conflicto entre empresarios y trabajadores, por tipo de ocupación, 1996-2009	69
Gráfico I.24	América Latina (18 países): percepción de cumplimiento de la ley laboral, según la inserción ocupacional de los entrevistados y la heterogeneidad estructural del país, 2006	69
Gráfico I.25	América Latina (18 países): percepción de que no hay garantías de seguridad social por grupos de edad y heterogeneidad estructural de país, 2007, 2008 y 2009	70
Gráfico I.26	América Latina (18 países): temor a perder el empleo en los próximos 12 meses, según la heterogeneidad estructural de los países, 1996-2009	71
Gráfico I.27	América Latina (18 países): temor a perder el empleo en los próximos 12 meses según nivel educacional, 1996-2009.....	71
Gráfico I.28	América Latina (18 países): temor a perder el empleo en los próximos 12 meses según situación ocupacional, 1996-2009.....	71
Gráfico I.29	América Latina (18 países): satisfacción con el empleo según el tipo de ocupación, 2007	72
Gráfico I.30	América Latina (18 países): satisfacción con el empleo por sexo, edad y escolaridad, 2007	73
Gráfico II.1	Mundo (regiones seleccionadas): tasa global de fecundidad, 1950-2010	83
Gráfico II.2	América Latina: tasa global de fecundidad (TGF) según diferentes ejercicios de proyección, 1950-2030	84
Gráfico II.3	América Latina (4 países): trayectoria de la fecundidad en países por debajo del nivel de reemplazo en 2005-2010.....	84
Gráfico II.4	América Latina (11 países): prevalencia actual en el uso de anticonceptivos en países con menores y mayores brechas según nivel educativo de la mujer	88
Gráfico II.5	América Latina (4 países): edad mediana a la primera relación sexual, la primera unión y el primer hijo de mujeres de 30 a 34 años, según nivel de educación.....	92
Gráfico II.6	México: distribución de las mujeres por grupo de edad y nivel educativo, 2010.....	94
Gráfico II.7	América Latina (20 países): promedio de escolaridad de las mujeres de 25 a 29 años, 1980 y 2010	94
Gráfico II.8	América Latina (4 países): descomposición de la disminución de la tasa global de fecundidad en efecto tasa y efecto composición, durante un período de 15 años	95
Gráfico II.9	América Latina (4 países): futuros escenarios de disminución de la fecundidad	96
Gráfico II.10	Mundo (12 regiones): tasa de fecundidad adolescente, 1990, 2000 y 2008.....	100
Gráfico II.11	América Latina (17 países): variación de la maternidad adolescente entre los censos de la década de 1990 y de 2000	100
Gráfico II.12	América Latina (11 países): evolución de la deseabilidad de los embarazos totales y de los embarazos antes de los 20 años, diversos períodos	102
Gráfico II.13	Panamá: mujeres de 15 a 19 años que son madres según nivel de educación, 1990 y 2010	104
Gráfico II.14	América Latina (12 países): variación en la maternidad adolescente por nivel de educación	104
Gráfico III.1	América Latina (18 países): indicadores de heterogeneidad estructural, alrededor de 2009	110
Gráfico III.2	América Latina (18 países): PIB por ocupado, alrededor de 2009.....	111
Gráfico III.3	América Latina (países seleccionados): ingreso per cápita por quintiles, alrededor de 2009	112

Gráfico III.4	América Latina (países seleccionados): convergencia interna y desigualdad, 1990, 1998, 2003 y 2008	112
Gráfico III.5	América Latina (18 países): ocupados en sectores de baja productividad y de productividad media y alta, zonas urbanas, 1990-2009	113
Gráfico III.6	América Latina (18 países): tendencias de las remuneraciones reales de los ocupados en áreas urbanas, según sector, alrededor de 1990, 2002, 2008 y 2009	114
Gráfico III.7	América Latina (17 países): población urbana ocupada según sectores de productividad y quintiles de ingreso, en promedio ponderado, alrededor de 1990, 2000 y 2009	114
Gráfico III.8	América Latina (17 países): población urbana ocupada en sectores de baja productividad, por categorías de pobreza, en promedio ponderado, alrededor de 1990, 2000 y 2009	115
Gráfico III.9	América Latina (17 países): índices de Gini de los ingresos laborales de los ocupados, según sector en el que trabajan, en promedio simple, alrededor de 1990, 2000 y 2009	116
Gráfico III.10	América Latina (17 países): población urbana ocupada en sectores de baja productividad, por sexo y quintiles de ingreso, en promedio ponderado, alrededor de 1990, 2000 y 2009	117
Gráfico III.11	América Latina (17 países): índices de Gini de los ingresos laborales de los ocupados, por sexo y productividad del sector de actividad, en promedio simple, alrededor de 1990, 2000 y 2009	117
Gráfico III.12	América Latina (14 países): empleo de mujeres de 15 a 49 años, por quintiles de ingreso y edad de menores en el hogar, en promedio ponderado, alrededor de 2009	118
Gráfico III.13	América Latina (13 países): variación del empleo en sectores de baja productividad entre mujeres en hogares con niños de 0 a 5 años, por quintiles de ingreso, en promedio ponderado, alrededor de 1990, 2000 y 2009	119
Gráfico III.14	América Latina (15 países): participación laboral de mujeres de 25 a 54 años, por quintiles de ingreso, en promedio ponderado, 1990-2009	121
Gráfico III.15	América Latina (14 países): participación laboral femenina de mujeres de 15 a 49 años de los quintiles I y V, por edad de los hijos, en promedio ponderado, 1990-2009	121
Gráfico III.16	América Latina (15 países): tasa de desempleo (población a partir de 15 años), por sexo, en promedio ponderado, 1990-2009	123
Gráfico III.17	América Latina (15 países): tasa de desempleo, por sexo y quintiles de ingreso, en promedio ponderado, 1990-2009	123
Gráfico III.18	América Latina (14 países): tasa de desempleo de mujeres de 15 a 49 años, por quintiles de ingreso y edad de los hijos, en promedio ponderado, alrededor de 1990, 1995, 2000, 2005 y 2009	124
Gráfico III.19	América Latina (15 países): tasa de desempleo por grupos de edad, en promedio ponderado, 1990-2009	124
Gráfico III.20	América Latina (15 países): tasa de desempleo de jóvenes de entre 15 y 24 años, por quintiles de ingreso, en promedio ponderado, 1990-2009	125
Gráfico III.21	América Latina (15 países): tasa de desempleo de jóvenes de entre 15 y 24 años, por quintiles de ingreso y sexo, en promedio ponderado, alrededor de 1990 y de 2009	126
Gráfico IV.1	América Latina (18 países): población ocupada afiliada a la seguridad social, por sector en que trabaja, promedio ponderado, 2009	134
Gráfico IV.2	América Latina (16 países): población ocupada afiliada a la seguridad social, promedio ponderado, alrededor de 1990, 2002, 2006 y 2009	135
Gráfico IV.3	América Latina (16 países): población ocupada afiliada a la seguridad social por sector en que trabaja, promedio ponderado, alrededor de 1990, 2002, 2006 y 2009	135
Gráfico IV.4	América Latina (18 países): tendencias de las remuneraciones reales de los ocupados en áreas urbanas, por afiliación a la seguridad social, promedio ponderado, alrededor de 1990, 2002, 2006 y 2009	136
Gráfico IV.5	América Latina (9 países): población ocupada afiliada a la seguridad social, por quintiles de ingreso, promedio simple, alrededor de 1990, 2000 y 2009	136
Gráfico IV.6	América Latina (18 países): población ocupada afiliada a la seguridad social, por quintiles de ingreso y sexo, promedio ponderado, 2009	137
Gráfico IV.7	América Latina (9 países): población ocupada afiliada a la seguridad social, por quintiles de ingreso y sexo, promedio simple, alrededor de 1990, 2000 y 2009	137

Gráfico IV.8	América Latina (18 países): hogares con algún tipo de afiliación a la seguridad social, por sexo del jefe, promedio simple, alrededor de 2009	138
Gráfico IV.9	América Latina (18 países): personas en hogares con algún tipo de afiliación a la seguridad social, por edad y área geográfica, promedio simple, alrededor de 2009	138
Gráfico IV.10	América Latina (17 países): población menor de 15 años de edad que vive en hogares con algún tipo de afiliación a la seguridad social, por quintiles extremos de ingreso, alrededor de 2009	139
Gráfico IV.11	América Latina (18 países): población de 65 años y más que recibe jubilación o pensión, alrededor de 2000 y 2009	140
Gráfico IV.12	América Latina (18 países): población de 65 años y más que recibe jubilación o pensión, por sexo, alrededor de 2009	140
Gráfico IV.13	América Latina (13 países): población de 60 años y más de áreas urbanas que no recibe ingresos propios, por sexo, alrededor de 2009	141
Gráfico IV.14	América Latina (18 países): distribución de la población de 65 años y más en quintiles de ingreso antes y después de jubilaciones y pensiones, alrededor de 2009	142
Gráfico IV.15	América Latina (13 países): sexo de los jefes de hogar del primer quintil en el total y en aquellos del mismo quintil que reciben transferencias asistenciales públicas y no tienen protección contributiva ni reciben jubilaciones o pensiones, promedio simple, alrededor de 2009	143
Gráfico IV.16	América Latina (13 países): condición de actividad de los jefes de hogar del primer quintil en el total y en aquellos del mismo quintil que reciben transferencias asistenciales públicas y no tienen protección contributiva ni reciben jubilaciones o pensiones, promedio simple, alrededor de 2009	144
Gráfico IV.17	América Latina (13 países): inserción laboral de los jefes de hogar del primer quintil en el total y en aquellos del mismo quintil que reciben transferencias asistenciales públicas y no tienen protección contributiva ni reciben jubilaciones o pensiones, promedio simple, alrededor de 2009	144
Gráfico IV.18	América Latina (13 países): distribución de hogares en tipología según combinaciones de las vías por las que acceden a la protección social, promedio simple, alrededor de 2009	147
Gráfico IV.19	América Latina (13 países): población que vive en hogares donde no hay afiliados a la seguridad social y no se perciben jubilaciones ni transferencias públicas asistenciales, por quintil de ingreso, promedio simple, alrededor de 2009	147
Gráfico IV.20	América Latina (13 países): perfil de la población de 15 a 59 años que vive en hogares donde no hay afiliados a la seguridad social y no se perciben jubilaciones ni transferencias públicas asistenciales, por sexo, según quintiles de ingreso, promedio simple, alrededor de 2009	148
Gráfico IV.21	América Latina (13 países): perfil de la población de 15 a 59 años que vive en hogares donde no hay afiliados a la seguridad social y no se perciben jubilaciones ni transferencias públicas asistenciales, por grupos de edad, según quintiles de ingreso, promedio simple, alrededor de 2009	148
Gráfico IV.22	América Latina (13 países): hogares donde no hay afiliados a la seguridad social y no se perciben jubilaciones ni transferencias públicas asistenciales, por sexo del jefe de hogar, según quintiles de ingreso, promedio simple, alrededor de 2009	148
Gráfico IV.23	América Latina (13 países): perfil de los jefes de hogar de 15 a 59 años que viven en hogares donde no hay afiliados a la seguridad social y no se perciben jubilaciones ni transferencias públicas asistenciales, por condición de actividad, según quintiles de ingreso, promedio simple, alrededor de 2009	149
Gráfico IV.24	América Latina (13 países): perfil de los jefes de hogar de 15 a 59 años de los quintiles I y II, por condición de actividad, según categorías de acceso a la protección social de sus hogares, promedio simple, alrededor de 2009	149
Gráfico IV.25	América Latina (13 países): perfil de los jefes de hogar de 15 a 59 años de los quintiles I y II, por inserción laboral, según categorías de acceso a la protección social de sus hogares, promedio simple, alrededor de 2009	149

Gráfico IV.26	América Latina (13 países): tamaño medio de los hogares según categorías de acceso a la protección social y quintiles de ingreso, promedio simple, alrededor de 2009	150
Gráfico V.1	América Latina y el Caribe (21 países): evolución del gasto público total, 1990-1991 a 2008-2009	156
Gráfico V.2	América Latina y el Caribe (21 países): evolución del gasto público social, 1990-1991 a 2008-2009.....	157
Gráfico V.3	América Latina y el Caribe (21 países): evolución del gasto público social, 1990-1991 a 2008-2009	159
Gráfico V.4	América Latina y el Caribe (21 países): evolución del gasto público social según sectores, 1990-1991 a 2008-2009.....	160
Gráfico V.5	América Latina y el Caribe (21 países): evolución del gasto público social per cápita según sectores y grupos de países, 1990 a 2009	161
Gráfico V.6	América Latina y el Caribe (21 países): variación anual del gasto público total, del gasto público no social, del gasto público social y del PIB, 1991-2010	162
Gráfico V.7	América Latina (18 países): niveles de afiliación a la seguridad social de los ocupados de 15 a 64 años y de 65 años y más, alrededor de 2009	167
Gráfico V.8	América Latina (17 países): cobertura de las prestaciones jubilatorias y de pensiones entre la población de 65 años y más, alrededor de 2009	168
Gráfico V.9	América Latina (17 países): relación entre los niveles de afiliación a la seguridad social de los ocupados y la cobertura de las prestaciones jubilatorias y de pensiones entre la población de 65 años y más, alrededor de 2009	168
Gráfico V.10	América Latina (19 países): ingresos públicos por contribuciones sociales y gastos públicos en seguridad y asistencia social, promedio de 2008-2009	169
Gráfico V.11	América Latina (17 países): proyección del volumen total de recursos recaudables para seguridad social y del pago de jubilaciones y pensiones, 2012	171
Gráfico V.12	América Latina (6 países): proyección de la acumulación de fondos en la seguridad social, 2011-2030	175
Gráfico VI.1	América Latina y el Caribe: proporción de jóvenes (15 a 29 años) en la población total, 1950-2050	182
Gráfico VI.2	El Caribe: extensión y estructura del bono demográfico.....	182
Gráfico VI.3	América Latina y el Caribe: defunciones de jóvenes (ambos sexos), 2005-2015	185
Gráfico VI.4	América Latina y el Caribe (11 países): uso de preservativos en la última relación sexual de alto riesgo declarado por mujeres de 15 a 24 años	187
Recuadros		
Recuadro I.1	Método utilizado para la medición de la pobreza	46
Recuadro I.2	Cambios recientes en las series de encuestas de hogares	48
Recuadro I.3	Indicadores para la medición de la pobreza	48
Recuadro I.4	Comparabilidad de las mediciones de ingreso	52
Recuadro I.5	Indicadores para la medición de la desigualdad distributiva	53
Recuadro I.6	Metodologías de descomposición	56
Recuadro II.1	Los determinantes próximos del cambio reproductivo en América Latina	85
Recuadro II.2	El aumento de la nuliparidad (mujeres que no tienen hijos)	91
Recuadro II.3	El proyecto de las cuentas nacionales de transferencias	98
Recuadro II.4	Las dificultades de acceso a los anticonceptivos de las adolescentes latinoamericanas	103
Recuadro III.1	Vulnerabilidades superpuestas y persistencia de la desigualdad: jefatura femenina, trabajo, cuidados y pobreza	126
Recuadro IV.1	Tipología para un análisis sistémico de la protección social y su vínculo con el empleo: aspectos metodológicos	145
Recuadro V.1	Actualización del gasto social	158
Recuadro V.2	Procedimiento de estimación y proyección del volumen total de contribuciones potenciales a la seguridad social a partir de encuestas de hogares	170
Recuadro V.3	Metodología de estimación del costo de una pensión mínima universal para adultos mayores....	174

Síntesis

En 2010 la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) condensó su propuesta de agenda para el desarrollo de América Latina y el Caribe bajo el título *La hora de la igualdad: brechas por cerrar, caminos por abrir*, documento principal presentado a su trigésimo tercer período de sesiones. A partir de ahí se propuso una visión integrada del desarrollo, a la altura de los tiempos, basada en las lecciones históricas aprendidas y con cambios profundos. Esa visión está calando hondo en la región y ha sentado las bases para seguir profundizando contenidos y propuestas de política dentro de la propia CEPAL. En el caso del *Panorama social de América Latina*, el desafío principal es ahondar en el análisis de las brechas sociales y sus mecanismos de reproducción y reducción.

En la versión anterior del *Panorama social* se puso gran énfasis en las brechas de desigualdad y su reproducción intergeneracional, y se prestó especial atención a las etapas formativas de los individuos y su transición a la vida adulta, así como al comportamiento del gasto social y de las transferencias en función de los requerimientos de las nuevas generaciones en sus etapas tempranas. Se mostró la forma en que el tránsito en el ciclo vital marca trayectorias diferenciadas por el desarrollo de capacidades, enquistando la desigualdad y la pobreza en el paso de una etapa a otra de la vida de las personas.

En el *Panorama social de América Latina 2011* que aquí presentamos se profundiza en la cadena de producción y reproducción de las brechas sociales y se abordan otros ámbitos. Se presta especial atención al modo en que se vinculan en esta cadena la heterogeneidad estructural (brechas de productividad en las economías nacionales), la segmentación laboral y los vacíos de la protección social. Se agregan también factores demográficos, como la fecundidad diferenciada por nivel educativo y de ingresos, y patrones más específicos de riesgo o exclusión, como los que afectan a la juventud en el Caribe.

Cabe destacar que la región enfrenta un escenario ambivalente en relación con esas brechas, ya que en él se combinan tendencias estructurales que las refuerzan pero también avances recientes, que resultan auspiciosos y abren nuevas posibilidades para encaminarse hacia sociedades menos desiguales y con un acceso más difundido al bienestar.

Así, por un lado, está disminuyendo la pobreza y la desigualdad en la región, y su principal causa es, en primer lugar, el incremento en los ingresos laborales y, en segundo, el aumento de las transferencias públicas hacia los sectores más vulnerables. Por otro, se mantiene la rigidez de las brechas productivas y la poca movilidad desde los sectores de baja productividad en grupos específicos (sobre todo mujeres de grupos socioeconómicos de menores recursos), cuyos ingresos no se han incrementado. También se reduce de manera importante la fecundidad, lo que augura mayores posibilidades de bienestar en familias con menor número de dependientes, pero por otra parte el calendario de la fecundidad sigue estratificado por niveles socioeconómicos y educativos, con mayor incidencia de maternidad adolescente entre las mujeres menos educadas. El aumento del gasto social es evidente, como también lo es la respuesta, desde el gasto y la protección social, para mitigar el impacto de la crisis de 2008-2009 en los sectores más vulnerables, pero por otro lado los sistemas de protección social distan de ser inclusivos y muestran vacíos que reproducen la vulnerabilidad y la estratificación en el acceso a la seguridad social.

Como es habitual, en el capítulo I se abordan las tendencias recientes en la evolución de la pobreza y la distribución del ingreso en América Latina, y se incorpora un subcapítulo sobre percepciones del mundo del trabajo por parte de los agentes que en él participan. La principal tendencia del período reciente muestra que en el año 2010 disminuyeron la pobreza y la indigencia en la región, en consonancia con la recuperación del crecimiento económico. Ambos

indicadores se sitúan en su nivel más bajo de los últimos 20 años. Si bien la caída de la pobreza se debe principalmente al crecimiento del ingreso medio de los hogares, la reducción de la desigualdad también ha incidido de manera significativa.

En 2010, el índice de pobreza de la región se situó en un 31,4%, incluido un 12,3% de personas en condiciones de pobreza extrema o indigencia. En términos absolutos, estas cifras equivalen a 177 millones de personas pobres, de las cuales 70 millones eran indigentes. Las cifras indican que, tras la crisis de 2009, la recuperación económica se ha reflejado (al menos en parte) en los indicadores de pobreza. Efectivamente, con respecto al año 2009 la tasa de pobreza se redujo 1,6 puntos porcentuales, y la de indigencia 0,8 puntos porcentuales. A partir de las proyecciones de crecimiento del PIB y de las previsiones de la evolución de la inflación en cada país, cabe esperar que en el año 2011 la tasa de pobreza se reduzca levemente. En cambio, la tasa de indigencia podría aumentar, ya que el alza del precio de los alimentos contrarrestaría el incremento previsto en los ingresos de los hogares.

En materia de distribución del ingreso, en años recientes se han observado cambios favorables hacia una menor concentración, debido sobre todo a un mejor reparto de los ingresos laborales y al papel redistributivo del Estado a través de las transferencias monetarias. Si bien la reducción de la desigualdad es leve, contribuye a configurar un escenario favorable, sobre todo en un contexto de ausencia prolongada de mejoras distributivas generalizadas.

En América Latina persisten los problemas de funcionamiento del mercado de trabajo y de las instituciones laborales. Según las encuestas de percepción, estas disfunciones generan sentimientos de incertidumbre y malestar en la población ocupada, sobre todo entre quienes tienen empleos precarios, poseen menos capital humano, se encuentran en peor situación socioeconómica y residen en países en que las brechas de productividad son mayores. En estos grupos son más frecuentes el temor a perder el empleo y las percepciones de falta de oportunidades de empleo, de incumplimiento de la ley laboral y de falta de garantías de seguridad social. El diálogo entre empresarios y trabajadores se ve obstaculizado por la bajo índice de afiliación sindical, especialmente de los trabajadores menos calificados, y por la desconfianza en los sindicatos, que es mayor entre directivos y gerentes de empresas.

En el capítulo II se muestra el acelerado descenso de la fecundidad en América Latina en las últimas cinco décadas, así como los factores que contribuyen a este fenómeno. La fecundidad sigue siendo invariablemente más elevada cuanto más bajo es el nivel de educación alcanzado por la mujer. Si bien en períodos recientes la fecundidad ha descendido en todos los niveles educativos, en muchos países el ritmo de descenso ha variado en los distintos grupos, siendo en general inferior en el grupo de mujeres con menor educación, lo que profundiza las diferencias relativas.

La baja de la fecundidad adolescente ha sido mucho más moderada que la caída de la fecundidad total. En muchos países de la región incluso se registró un aumento de la fecundidad adolescente durante la década de 1990, mientras la fecundidad total descendía de manera significativa. Asimismo, la desigualdad que se registra en los niveles de fecundidad de los distintos grupos educativos suele ser particularmente acentuada en el caso de la maternidad adolescente. La evidencia respecto de la reducción del porcentaje de nacimientos planeados entre las madres adolescentes es un aliciente y un poderoso argumento para redoblar las políticas y programas públicos de salud sexual y reproductiva dirigidos a este grupo.

Los gobiernos de la región enfrentan dos retos principales en el ámbito de la fecundidad. Por un lado, el desafío de redoblar esfuerzos para alcanzar la meta 5B de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de lograr, para el año 2015, el acceso universal a la salud reproductiva y, de esta manera, acotar las brechas importantes que se mantienen en el nivel de la fecundidad de los diferentes grupos sociales, en particular de la fecundidad adolescente. Y por otro, los desafíos que plantea el nuevo contexto de bajos niveles de fecundidad, que requieren una adecuación de las políticas y las instituciones para atender los cambios inexorables en la estructura familiar, social y económica de los países.

En el capítulo III se muestra cómo la heterogeneidad estructural (debida a las brechas de productividad), la estratificación del descenso de la fecundidad y la desigualdad de género operan como verdaderas fábricas de desigualdad en los mercados laborales latinoamericanos.

La alta heterogeneidad que pauta las estructuras productivas de la región genera grandes disparidades entre los aportes de cada sector productivo al producto y al empleo. Prevalece la estrecha vinculación entre heterogeneidad estructural y desigualdad de ingresos como un patrón rígido y estable en el tiempo. Si bien el empleo en sectores de baja productividad ha disminuido en las últimas dos décadas, su distancia respecto al empleo en sectores de productividad media y alta ha aumentado.

La incorporación estratificada de las mujeres latinoamericanas al mercado laboral hace que la brecha entre las mujeres de más y menos recursos no solo no se haya reducido en las últimas dos décadas, sino que se amplíe levemente. La mayor presión de cuidado infantil y la clara desprotección en esta materia en los sectores más vulnerables reflejan un rígido circuito de desigualdad. La carga de cuidado también incide en el aumento relativo del desempleo femenino respecto del masculino. La tasa de desempleo juvenil sigue siendo muy superior a la del desempleo entre los adultos, y la distancia que separa a los quintiles inferiores de los superiores no ha variado significativamente en los últimos 20 años.

En este marco de múltiples desigualdades en el mercado laboral, la intervención estatal debe plantearse con firmeza en el campo productivo, la regulación e institucionalidad laboral, las políticas de mercado de trabajo y la redistribución en el terreno del cuidado infantil.

En el capítulo IV se abordan los vacíos y desafíos presentes en los sistemas de protección social de los países latinoamericanos. La limitada cobertura de afiliación a la seguridad social y su asociación con el empleo formal hace que sean los hogares con mayor cantidad de miembros, con jefatura femenina y rurales los que tienen menor acceso a la protección contributiva. Además, la insuficiencia de la cobertura de la seguridad social se reproduce en la etapa de la vejez. La cobertura de jubilaciones y pensiones es todavía muy reducida y deja más desprotegida a la población femenina y de menores recursos.

Por otra parte, el pilar no contributivo de la protección social cubre aproximadamente un 12% de los hogares y representa el 0,25% del PIB. Sin embargo, estas transferencias sí parecen apuntar a los riesgos de la población y tienen un peso significativo en los hogares más pobres, lo que confirma que su distribución es altamente progresiva.

El análisis combinado de los pilares contributivo y no contributivo en los hogares latinoamericanos muestra que una parte importante de la población está excluida del modelo clásico de protección por la vía del empleo y, a la vez, no es alcanzada por las transferencias asistenciales públicas. Si bien es cierto que dentro de este grupo existe una porción de personas pertenecientes a hogares de mayores ingresos, poco menos de la mitad de este grupo se halla dentro del 40% más pobre de la población.

Se plantean desafíos redistributivos de gran envergadura para los débiles sistemas de protección social latinoamericanos, con limitada capacidad fiscal y —allí donde llegaron a desarrollarse— arquitecturas de bienestar relativamente rígidas. La mirada sistémica debería servirse al mismo tiempo del pilar contributivo y de políticas más o menos focalizadas para interconectar el disfrute de derechos y avanzar hacia verdaderos sistemas universales y solidarios de protección.

El capítulo V trata de la dinámica reciente del gasto social, su respuesta frente a la crisis, y la perspectiva de ampliación de jubilaciones y pensiones en el mediano y largo plazo en los países de la región.

A nivel regional, el gasto público, en especial el gasto social, ha registrado un aumento muy marcado en las últimas dos décadas. La partida que más se incrementó es la de seguridad y asistencia sociales (un 3% del PIB de aumento), seguida por la de educación. Pero entre los países de gasto social per cápita inferior a 1.000 dólares, la principal partida de gasto es la educación. Solo entre los países de mayor desarrollo relativo, la seguridad y la asistencia social tienen una mayor gravitación.

Ante la crisis financiera internacional, los países optaron por expandir transitoriamente sus gastos públicos en vez de contraerlos, como era lo tradicional. Sin embargo, la expansión no siempre tuvo un énfasis social, aunque las repercusiones en ese ámbito fueron importantes para prevenir incrementos del desempleo y de la vulnerabilidad social.

Dada la necesidad de desarrollar sistemas de protección social con enfoque de derechos y, por tanto, basados en mecanismos contributivos y no contributivos de financiamiento, así como con pilares solidarios para la distribución de sus recursos, se hace patente la necesidad en el mediano y sobre todo el largo plazo de volver a reformar muchos de los sistemas de seguridad social, tanto en ámbitos estructurales como en aspectos paramétricos, además de reforzar la afiliación a la seguridad social en mercados de trabajo cada vez más formalizados. De lo contrario, en el largo plazo, habrá progresivas dificultades para financiar una protección social de carácter universal en sociedades cada vez más envejecidas y con menor proporción de fuerza de trabajo.

En el capítulo VI se incorpora novedosamente al *Panorama social* un aspecto apremiante de la realidad social en los países del Caribe, a saber, la situación de la juventud en esa subregión en términos de dinámicas sociodemográficas, riesgos, desarrollo de capacidades y dinámicas de exclusión e inclusión social.

El Caribe, como América Latina, vive un momento de grandes desafíos en materia de inclusión juvenil. Es preciso adoptar nuevas medidas sobre educación y empleo para mejorar e igualar logros en la primera y tránsitos fluidos en el segundo, reduciendo así las brechas en cuanto a logros educativos entre los jóvenes y las brechas de desempleo entre jóvenes y adultos. La transición demográfica marca oportunidades para la juventud, pero debe aprovecharse en el corto plazo para expandir capacidades y productividad, así como reducir vulnerabilidades en esta generación. La juventud se desplaza geográficamente con mayor facilidad que la población infantil y la de mayor edad, muy especialmente en el Caribe, lo que puede ser tanto una fuente de oportunidades como de riesgos. La población joven caribeña está muy expuesta a riesgos por causas exógenas, sobre todo accidentes y agresiones, y a enfermedades de transmisión sexual, en especial el SIDA, pone una señal de alerta que es preciso atender con energía.

En el campo del reconocimiento público y político hay avances en las últimas décadas, con la creación de instituciones de gobierno encargadas del desarrollo de planes y programas para la juventud. Falta avanzar en enfoques integrales que puedan trascender las lógicas sectoriales en virtud de la naturaleza misma del “actor joven”, en quien se combinan dimensiones de riesgos, capacidades, oportunidades y formas de participación.

Pobreza, desigualdad y percepciones sobre el mundo del trabajo en América Latina

Avances en la reducción de la pobreza

Tras la crisis de 2009, la actividad económica y el empleo mostraron una rápida recuperación en 2010. El PIB per cápita de América Latina creció un 4,8%, mientras que la tasa de ocupación aumentó 0,6 puntos porcentuales y la de participación, 0,3 puntos porcentuales. A su vez, la tasa de desempleo urbano se redujo del 8,1% al 7,3%, situándose no solo por debajo del promedio 2000-2008, sino de los valores anuales de los últimos dos decenios. Por otra parte, también se verificó un aumento en las tasas de inflación en todos los países de la región, cuyo promedio simple se situó 2,8 puntos porcentuales por encima de lo registrado en 2009.

En este contexto, el índice de pobreza de la región se situó en un 31,4%, incluido un 12,3% de personas en condiciones de pobreza extrema o indigencia. En términos absolutos, estas cifras equivalen a 177 millones de personas pobres, de las cuales 70 millones eran indigentes. De esta manera, en el año 2010 se siguió avanzando en la reducción de la pobreza, cuya tasa disminuyó 1,6 puntos porcentuales en relación con 2009, mientras que la indigencia se redujo 0,8 puntos porcentuales (véase el gráfico 1).

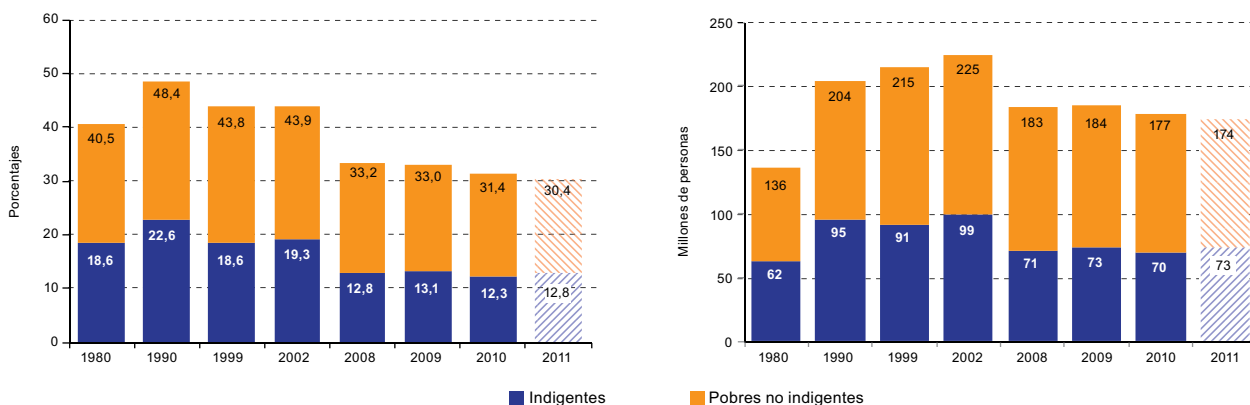
El balance respecto a finales de los años noventa continúa siendo favorable. La reducción de la pobreza acumulada desde 1999 alcanzó 12,4 puntos porcentuales,

a la vez que la indigencia se ha reducido 6,3 puntos porcentuales. Asimismo, la reducción de ambos indicadores con respecto a 1990 totalizaba 17,0 y 10,3 puntos porcentuales.

Los resultados descritos implican un progreso adicional hacia la consecución de la meta 1A del primer Objetivo de Desarrollo del Milenio, consistente en reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas en situación de pobreza extrema. América Latina tiene un porcentaje de avance del 91% si se calcula la reducción acumulada de indigencia entre 1990 y 2010 (10,2 puntos porcentuales) y se divide entre la reducción implícita en la meta (11,3 puntos porcentuales). Dicho porcentaje es mayor que el del tiempo transcurrido para el cumplimiento de la meta, equivalente a un 80%.

A partir de las proyecciones de crecimiento del PIB y de las previsiones de la evolución de la inflación en cada país, cabe esperar que en el año 2011 la tasa de pobreza se reduzca levemente y se sitúe en el 30,4%, alrededor de un punto porcentual por debajo de la tasa de 2010. En cambio, la tasa de indigencia podría aumentar, ya que el mayor alza del precio de los alimentos que los de los demás bienes de la canasta contrarrestaría el incremento previsto en los ingresos de los hogares (véase el gráfico 1).

Gráfico 1
AMÉRICA LATINA: EVOLUCIÓN DE LA POBREZA Y DE LA INDIGENCIA, 1980-2011^a
(En porcentajes y millones de personas)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

^a Estimación para 18 países de la región más Haití. Las cifras que aparecen sobre las secciones superiores de las barras representan el porcentaje y número total de personas pobres (indigentes más pobres no indigentes). Las cifras sobre 2011 corresponden a una proyección.

A 2010, la información disponible sobre 12 países de la región revela variaciones de la pobreza de distinto signo y magnitud con respecto al año previo. Cinco países registraron disminuciones significativas en sus tasas de pobreza: el Perú (-3,5 puntos), el Ecuador (-3,0 puntos), la Argentina (-2,7 puntos), el Uruguay (-2,0 puntos) y Colombia (-1,4 puntos). En estos países el cambio de las tasas de indigencia también tuvo signo negativo, con caídas entre 0,5 y 1,7 puntos porcentuales (véase el cuadro 1).

Por otra parte, Honduras y México fueron los únicos países con incrementos significativos en sus tasas de pobreza y de indigencia, de 1,7 y 1,0 puntos porcentuales

en el primer país y de 1,5 y 2,1 puntos porcentuales en el segundo. Debe tenerse presente que, en el caso de México, la comparación se realiza con respecto a la medición de 2008 y, por tanto, no refleja solamente la apreciable expansión de la economía mexicana en 2010, sino también la fuerte contracción del PIB per cápita observada en 2009 (-7,2%). A su vez, Panamá experimentó un incremento de la tasa de indigencia de 1,5 puntos porcentuales, mientras que los demás países con información disponible (El Salvador, el Paraguay y la República Dominicana) no registraron variaciones significativas en sus tasas de pobreza e indigencia.

Cuadro 1
AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA E INDIGENCIA, ALREDEDOR DE 2002, 2009 Y 2010
(En porcentajes)

País	Alrededor de 2002			Alrededor de 2009			2010		
	Año	Pobreza	Indigencia	Año	Pobreza	Indigencia	Año	Pobreza	Indigencia
Argentina ^a	2002	45,4	20,9	2009	11,3	3,8	2010	8,6	2,8
Bolivia (Estado Plurinacional de)	2002	62,4	37,1	2007	54,0	31,2
Brasil	2001	37,5	13,2	2009	24,9	7,0
Chile	2000	20,2	5,6	2009	11,5	3,6
Colombia ^b	2002	54,2	19,9	2009	45,7	16,5	2010	44,3	14,8
Costa Rica	2002	20,3	8,2	2009	18,9	6,9
Ecuador ^a	2002	49,0	19,4	2009	40,2	15,5	2010	37,1	14,2
El Salvador	2001	48,9	22,1	2009	47,9	17,3	2010	46,6	16,7
Guatemala	2002	60,2	30,9	2006	54,8	29,1
Honduras	2002	77,3	54,4	2009	65,7	41,8	2010	67,4	42,8
México	2002	39,4	12,6	2008	34,8	11,2	2010	36,3	13,3
Nicaragua	2001	69,4	42,5	2005	61,9	31,9
Panamá	2002	36,9	18,6	2009	26,4	11,1	2010	25,8	12,6
Paraguay	2001	59,7	31,3	2009	56,0	30,4	2010	54,8	30,7
Perú ^c	2001	54,7	24,4	2009	34,8	11,5	2010	31,3	9,8
República Dominicana	2002	47,1	20,7	2009	41,1	21,0	2010	41,4	20,9
Uruguay ^a	2002	15,4	2,5	2009	10,7	2,0	2010	8,6	1,4
Venezuela (República Bolivariana de)	2002	48,6	22,2	2009	27,1	9,8	2010	27,8	10,7

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

^a Áreas urbanas.

^b Cifras de la Misión para el empalme de las series de empleo, pobreza y desigualdad (MESEP). Estas cifras no incluyen las modificaciones en la medición de la pobreza realizadas en 2011 por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) de Colombia.

^c Cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) del Perú.

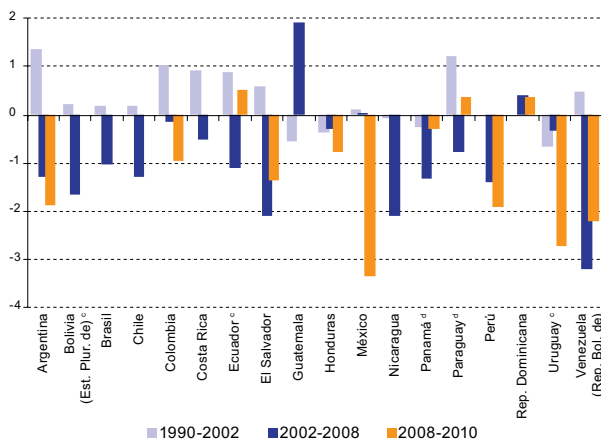
Avances en la reducción de la desigualdad distributiva

Es un hecho ampliamente difundido que la distribución de los ingresos en los países de América Latina es una de las más inequitativas del mundo. Además, durante la década de 1990 y hasta principios de la década de 2000, la desigualdad en la región se caracterizó ya sea por una marcada rigidez a la baja o por una leve tendencia al alza. Los años 2002 y 2003 representaron un punto

de inflexión a partir del cual la desigualdad empezó a mostrar una tendencia decreciente en numerosos países. Si bien la reducción de la desigualdad es de una magnitud leve, insuficiente para cambiar el *estatus* de América Latina como la región más desigual, resulta destacable en un contexto de ausencia prolongada de mejoras distributivas generalizadas.

La tendencia a la mejora distributiva en la región no se ha visto alterada después de la crisis económica. Hasta el año 2008, momento que refleja de manera aproximada la situación previa al inicio de la crisis, el índice de Gini se redujo a un ritmo del 1% o más por año en diez países y solo aumentó de manera apreciable en Guatemala (datos hasta el año 2006). A su vez, las cifras sobre 2010, que reflejan de un modo aproximado el escenario inmediatamente posterior a la crisis, indican que la desigualdad no se incrementó significativamente en ninguno de los 11 países de los que hay información. Al contrario, en tres de ellos (México, Venezuela (República Bolivariana de) y el Uruguay), el índice de Gini cayó a un ritmo superior al 2% anual, y en dos más (El Salvador y el Perú), en por lo menos un 1% por año (véase el gráfico 2).

Gráfico 2
AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE GINI, 1990-2002, 2002-2008^a Y 2008-2010^b



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

^a Corresponde a los periodos 2004-2006 en la Argentina, 2001-2008 en el Brasil, el Paraguay y el Perú, 2000-2006 en Chile, 2001-2004 en El Salvador y 2002-2007 en Honduras.

^b Corresponde a los periodos 2006-2010 en la Argentina, 2004-2010 en El Salvador y 2007-2010 en Honduras.

^c Áreas urbanas.

^d Áreas urbanas solamente en el período 1990-2002.

La disminución de la desigualdad en la región a lo largo de varios años ofrece un escenario propicio para explorar los factores a los que obedece. Los estudios sobre el tema tienden a coincidir en al menos dos aspectos. Uno es que la parte más importante de la reducción de la desigualdad se origina en el mercado laboral, básicamente a través de una distribución más equitativa de los ingresos laborales por ocupado. El segundo aspecto destacado es que las transferencias públicas en efectivo han sido una fuente de ingresos que ha contribuido a desconcentrar la distribución del ingreso per cápita.

Esos aspectos se evalúan en esta edición del *Panorama social* a partir de la evidencia disponible para los países de América Latina en la década de 2000. Los periodos analizados son aquellos en que la distribución del ingreso mejoró de manera más significativa en 15 países de la región. El análisis se concentra en la comparación de las brechas entre el primer y el quinto quintil con relación a un grupo de variables, en particular diversas corrientes de ingreso e indicadores del mercado laboral. El procedimiento adoptado consiste en descomponer el ingreso en función de distintos pares de factores, para luego simular qué hubiera sucedido con la desigualdad si uno de los elementos no se hubiera modificado durante el período analizado¹.

La primera descomposición, para la que se considera el ingreso per cápita del hogar como el producto de la proporción de adultos en el hogar y el ingreso percibido por cada adulto, permite evaluar qué parte de las modificaciones en la distribución del ingreso per cápita proviene de cambios distributivos en el monto de ingresos percibido o de alteraciones en la estructura demográfica de los hogares. Los resultados indican que, si bien el factor demográfico contribuyó a una reducción de las brechas entre quintiles, particularmente en los países con más mejoras distributivas, su efecto fue leve (véase el cuadro 2).

En concordancia con los hallazgos registrados en la literatura, el ingreso por adulto aparece como el principal factor detrás de la mejora distributiva del ingreso per cápita. Esta variable corresponde a la suma del ingreso laboral (por adulto) y el ingreso no laboral (por adulto) del hogar. En diez países el ingreso laboral tuvo un papel preponderante en la reducción de la desigualdad. En Colombia, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y Venezuela (República Bolivariana de), la variación de los ingresos laborales explica el 90% o más de la variación del ingreso total por adulto.

Por su parte, el cambio distributivo de los ingresos no laborales contribuyó en un 50% o más a la reducción de la desigualdad de los ingresos por adulto en Chile, el Ecuador, el Paraguay, la República Dominicana y el Uruguay, mientras que en la Argentina y el Brasil su contribución superó el 40%. Los ingresos no laborales proceden de fuentes de diversa índole. Los países en que estos ingresos jugaron un papel redistributivo más destacado comparten como característica que este se origina en las transferencias públicas, es decir, en la acción específica de los gobiernos a través de la política social.

¹ La descomposición de los cambios en el ingreso sigue la estructura descrita en Ricardo Barros y otros, "Uma análise das principais causas de queda recente na desigualdade de renda brasileira", *Econômica*, vol. 8, N° 1, junio de 2006.

Cuadro 2
AMÉRICA LATINA (15 PAÍSES): VARIACIÓN ANUAL OBSERVADA Y SIMULADA DE LA BRECHA DE INGRESOS ENTRE QUINTILES,
SEGÚN DETERMINANTES DEL INGRESO
(En porcentajes)

País	Período	Variación anual	Porcentaje atribuible a:		Variación anual	Porcentaje atribuible a:		Variación anual	Porcentaje atribuible a:	
		Brecha del ingreso per cápita	Cambio en el ingreso por adulto	Cambio en el porcentaje de adultos	Brecha del ingreso por adulto	Cambio en los ingresos laborales	Cambio en los ingresos no laborales	Brecha del ingreso laboral por adulto	Cambio en el ingreso por ocupado	Cambio en la tasa de ocupación
Argentina ^a	2002-2009	-4,4	82	18	-3,6	55	45	-2,5	150	-50
Brasil	2001-2009	-4,9	93	7	-4,5	58	42	-3,0	120	-20
Chile	2000-2006	-4,2	87	13	-3,6	45	55	-2,4	134	-34
Colombia	2002-2005	-5,2	114	-14	-5,9	95	5	-6,7	79	21
Costa Rica	2002-2005	-4,7	113	-13	-5,3	93	7	-6,2	66	34
Ecuador ^a	2005-2010	-3,6	98	2	-3,5	61	39	-2,6	107	-7
El Salvador	2001-2010	-5,8	97	3	-5,6	86	14	-6,3	103	-3
México	2000-2010	-3,1	93	7	-2,9	74	26	-3,0	120	-20
Nicaragua	2001-2005	-7,2	90	10	-6,5	146	-46	-10,7	72	28
Panamá	2002-2009	-5,0	109	-9	-5,4	76	24	-5,4	101	-1
Perú	2001-2010	-4,4	85	15	-3,8	70	30	-4,1	88	12
Paraguay	2001-2009	-2,7	52	48	-1,4	-27	127	0,8	42	58
República Dominicana	2004-2007	-2,1	119	-19	-2,5	-58	158	1,6	-71	171
Uruguay ^a	2004-2010	-3,6	101	-1	-3,6	24	76	-1,3	119	-19
Venezuela (República Bolivariana de)	2002-2010	-7,8	104	-4	-8,1	88	12	-8,8	97	3

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

^a Áreas urbanas.

El ingreso laboral por adulto puede expresarse, a su vez, como el producto de la remuneración por ocupado y la tasa de ocupación (cociente entre el número de ocupados y el de personas adultas). La reducción de la desigualdad observada en el ingreso laboral por adulto proviene casi exclusivamente del primero de ambos factores. De hecho, la brecha en la tasa de ocupación entre quintiles no solo se mantuvo prácticamente constante en varios países, sino que en algunos incluso aumentó.

La mejora distributiva del ingreso de los ocupados tiene su origen en factores de distinto tipo. Para explicar este resultado se mencionan la progresiva mejora de la distribución de la educación y la reducción de las brechas salariales entre los trabajadores más y menos calificados. En algunos países esta disminución de la desigualdad de los ingresos laborales de los ocupados también pudo haberse debido hasta cierto punto a políticas laborales y de otra índole aplicadas por los gobiernos en búsqueda de una mayor igualdad distributiva.

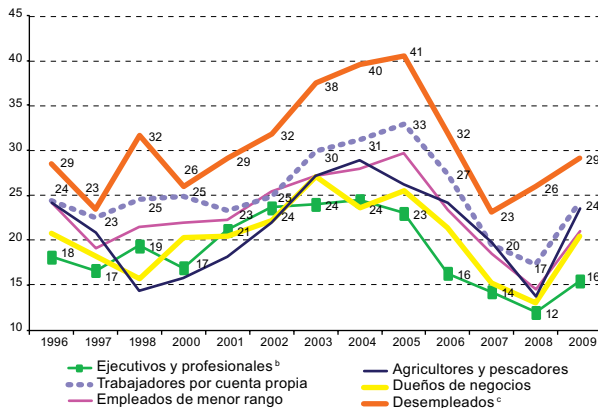
Percepciones sobre el funcionamiento del mercado de trabajo y las instituciones laborales

En América Latina, la percepción del desempleo como problema principal del país entre 1996 y 2009 varió más o menos en línea con la evolución del desempleo real, excepto en el tramo 2002-2005, cuando la caída del desempleo real fue acompañada por un deterioro en las percepciones, y del tramo 2005-2008, en que la percepción del desempleo como problema principal del país disminuyó más que el desempleo real².

A lo largo del periodo comprendido entre 1996 y 2009, la mención al desempleo como principal problema del país fue más frecuente entre los desempleados y los trabajadores por cuenta propia, y menos entre los altos ejecutivos y los ejecutivos de rango medio y los profesionales (véase el gráfico 3). A su vez, en 2007, la percepción de falta de oportunidades laborales era mayor entre las personas que se encontraban en una peor situación socioeconómica, en los desempleados y en los trabajadores por cuenta propia. En cuanto a la edad, los individuos de 46 años o más percibían que existían menos oportunidades laborales en el país que los sujetos más jóvenes.

² La información presentada en este subcapítulo se basa en tabulaciones especiales de las encuestas de Latinobarómetro realizadas entre 1996 y 2009 en 18 países de América Latina.

Gráfico 3
AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): PERCEPCIÓN DEL DESEMPEÑO COMO PROBLEMA PRINCIPAL DEL PAÍS SEGÚN LA SITUACIÓN OCUPACIONAL DE LOS ENTREVISTADOS^a, 1996-2009
(En porcentajes)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de datos de Latinobarómetro, 1996-2009.

^a Entre 1996 y 2003, los entrevistados debían seleccionar el problema principal de un listado de preguntas predefinidas. Desde 2004 se usa una pregunta abierta. Los datos sobre la República Dominicana están disponibles a partir de 2004.

^b Incluye altos ejecutivos, ejecutivos de rango medio, profesionales independientes y dependientes.

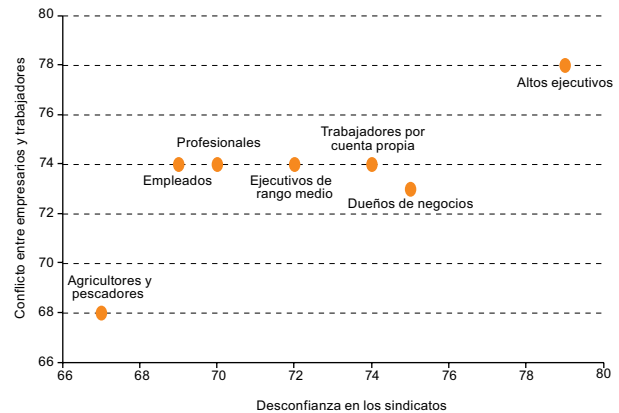
^c Incluye a las personas que declararon no tener temporalmente trabajo en el momento de la realización de la entrevista.

En la región, a la baja densidad sindical, al reducido tamaño de los sindicatos y a la escasa incidencia de la negociación colectiva se agrega que la experiencia de sindicalización es menos frecuente entre los ocupados con menor nivel educativo y entre los asalariados de empresas privadas. Asimismo, la desconfianza en los sindicatos se ha mantenido en niveles muy altos durante los últimos 15 años, y alcanza su mayor incidencia entre los gerentes y directores de empresas, grupo ocupacional que además tiende a percibir un mayor nivel de conflicto entre empresarios y trabajadores (véase el gráfico 4).

A su vez, las percepciones sobre el cumplimiento de la ley laboral (contratos de trabajo, despido e indemnización, duración de la jornada laboral, pago de horas extraordinarias y de salario mínimo) son más negativas entre quienes residen en países con heterogeneidad estructural severa³, entre los desempleados y los trabajadores por cuenta propia. Al mismo tiempo, las percepciones de falta de garantías de seguridad social son más prevalentes entre quienes residen en países con heterogeneidad estructural severa y entre las personas de mayor edad.

³ La heterogeneidad estructural se refiere a las profundas brechas de productividad de las economías nacionales y es un rasgo característico en los países de América Latina. Estas brechas se dan entre grandes empresas, pymes y lo que suele asociarse en gran medida al sector informal (microempresas, trabajadores por cuenta propia y empleo doméstico). Hemos distinguido aquí entre países

Gráfico 4
AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES^a): DESCONFIANZA EN LOS SINDICATOS^b Y PERCEPCIÓN DE CONFLICTO ENTRE EMPRESARIOS Y TRABAJADORES^c, POR TIPO DE OCUPACIÓN, 1996-2009^d
(En porcentajes)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de datos de Latinobarómetro, 1996-2009.

^a Datos sobre la República Dominicana disponibles a partir de 2004.

^b Pregunta usada en la encuesta Latinobarómetro: "¿Me podría decir cuánta confianza tiene Ud. en los sindicatos: mucha, algo, poca o ninguna confianza?". Los valores corresponden al porcentaje que declaró confiar poco o no tener ninguna confianza en los sindicatos.

^c Pregunta usada en la encuesta Latinobarómetro: "En todos los países hay diferencias o incluso conflictos entre diferentes grupos sociales. En su opinión, ¿cuán fuerte es el conflicto entre empresarios y trabajadores?: ¿Es muy fuerte, fuerte, débil o no existe conflicto?". Los valores corresponden al porcentaje que afirmó la existencia de conflicto muy fuerte o fuerte.

^d Para la pregunta sobre la confianza en los sindicatos, los datos que figuran se obtuvieron agregando las observaciones disponibles sobre 1996, 2003, 2004, 2005, 2008 y 2009. Para la pregunta sobre el conflicto entre empresarios y trabajadores, los datos se obtuvieron agregando la información sobre 2007 y 2008.

Los datos disponibles sobre 1996 y 2009 indican que los sentimientos de incertidumbre vinculados a la posibilidad de perder el empleo tienden a ser más prevalentes en momentos de contracción económica y menos en los años de expansión, y también se dan más entre las personas que viven en países con mayor heterogeneidad estructural, aun cuando esa brecha se haya reducido en los últimos años. También se debe notar que el temor al desempleo está más presente entre quienes poseen un nivel de escolarización más bajo, en los ocupados por cuenta propia y en los empleados de rango bajo o medio, y menor entre los hombres y en los sujetos de mayor edad.

con heterogeneidad estructural moderada (Argentina, Chile, Costa Rica, México y Uruguay), intermedia (Brasil, Colombia, Panamá y Venezuela (República Bolivariana de)) y países con heterogeneidad estructural severa (Bolivia (Estado Plurinacional de), Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú y República Dominicana).

Panorama actual y perspectivas futuras de la fecundidad en América Latina

Introducción

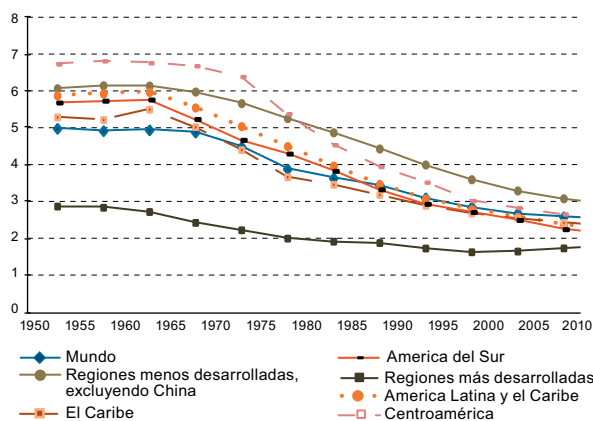
La evolución demográfica de América Latina, en especial la reducción de la fecundidad, proporciona una oportunidad sin precedentes para el avance económico y el mejoramiento de las condiciones de vida de los hogares de la región. Entre los efectos positivos de este cambio se cuenta el aumento relativo de la población potencialmente productiva y sus beneficios para la economía, mejoras en la salud sexual y reproductiva, y ampliación de las oportunidades de educación y empleo para la mujer. Sin embargo, los elevados niveles de pobreza

y desigualdad que persisten en la región y su estrecho vínculo con bajos niveles educativos plantean barreras al cambio reproductivo y a la consiguiente reducción de la fecundidad, situación que afecta de manera muy marcada a las adolescentes latinoamericanas, sobre todo a las de menor educación e ingresos. De ahí la importancia de revisar las tendencias de la fecundidad en la región y sus relaciones con el contexto económico, social y demográfico, para identificar los desafíos que enfrentarán los países en el futuro.

Fecundidad en América Latina

Desde mediados del siglo XX la fecundidad en América Latina experimentó grandes reducciones debido al proceso de desarrollo iniciado en los países de esa subregión y los cambios de comportamiento reproductivo relacionados. Así, la tasa global de fecundidad (TGF) en América Latina se alejó paulatinamente del promedio de las regiones menos desarrolladas y, durante el quinquenio de 1990 a 1994, pasó a ser inferior a la del promedio mundial (véase el gráfico 5)⁴. A mediados de la década de 1960, las mujeres de la región terminaban su período fértil con cerca de seis hijos por mujer, esto es, un hijo más que el promedio mundial y el doble de lo observado en los países más desarrollados. A partir de entonces, el rápido descenso de la fecundidad en la región ha atenuado considerablemente las diferencias: hacia 2015 la TGF de la región será de 2,1 hijos por mujer, frente al 1,7 de los países desarrollados.

Gráfico 5
MUNDO (REGIONES SELECCIONADAS): TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD, 1950-2010
(En número de hijos por mujer)



Fuente: Naciones Unidas, World Population Prospects: The 2010 Revision [CD-ROM], División de Población, Nueva York, 2011.

⁴ La tasa global de fecundidad (TGF) se interpreta como el número de hijos que, en promedio, tendría cada mujer de una cohorte hipotética de mujeres no expuestas al riesgo de muerte desde el inicio hasta el fin del período fértil y que, a partir del momento en que se inicia la reproducción, están expuestas a las tasas de fecundidad por edad de la población en estudio (Welti, 1998).

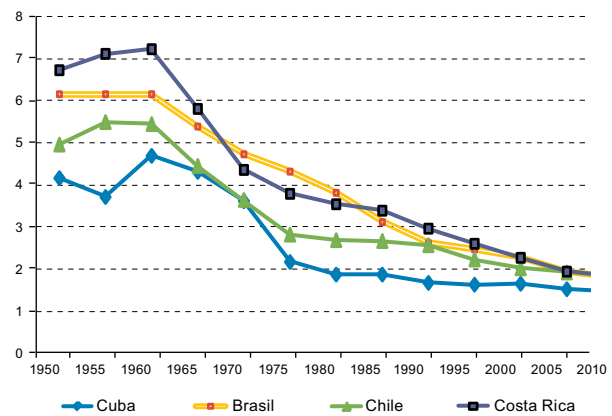
El descenso de la fecundidad en América Latina sorprendió a los estudiosos, pues reiteradamente sobrepasó sus estimaciones. Si en las primeras proyecciones se preveía un tímido descenso de 0,27 hijos por mujer y quinquenio, en la realidad, desde la década de 1960 —cuando se produce la inflexión de la tendencia de la fecundidad en América Latina— hasta el último quinquenio observado, el ritmo de descenso de la fecundidad fue de 0,41 hijos por mujer y quinquenio.

La tendencia descendente de la fecundidad fue generalizada en todos los países de América Latina pero, como es de esperar en una subregión con grandes desigualdades económicas y sociales, el momento de inicio y el ritmo de este fenómeno fueron muy diferentes en los distintos países. Las décadas de descenso más intenso fueron las de 1960 y 1970 y los países que tenían los niveles iniciales más altos fueron los que más redujeron su fecundidad, produciéndose una notoria tendencia convergente (véase el gráfico 6).

Los factores con mayor efecto reductor sobre la fecundidad han sido los relacionados con la exposición a las relaciones sexuales, como no entrar en unión o entrar tardíamente y las separaciones temporales o definitivas, que explican cerca del 50% de la reducción a partir de la fecundidad natural⁵. Pero el impacto del uso de

anticoncepción, que explica cerca del 40% de la reducción, muestra un rápido aumento, asociado no solo al incremento generalizado de la prevalencia anticonceptiva sino también al mayor uso de métodos anticonceptivos modernos.

Gráfico 6
AMÉRICA LATINA (4 PAÍSES): TRAYECTORIA DE LA FECUNDIDAD EN PAÍSES POR DEBAJO DEL NIVEL DE REEMPLAZO EN 2005-2010
(En número de hijos por mujer)



Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) – División de Población de la CEPAL sobre la base de Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), "Proyección de Población", *Observatorio demográfico* N° 7 (LC/G.2414-P), Santiago de Chile, 2009.

Relación entre educación, intensidad y calendario de la fecundidad

Si bien los niveles promedio de hijos alcanzados por todos los países son bajos, persisten diferencias significativas entre los distintos grupos sociales, lo que refleja las fuertes desigualdades socioeconómicas que prevalecen en América Latina.

En estrecha relación con las desigualdades socioeconómicas, un acceso limitado a la educación es un obstáculo para el avance en materia reproductiva. Por ese motivo la tasa global de fecundidad sigue siendo invariablemente mayor cuanto más bajo es el nivel de educación alcanzado por la mujer. En términos absolutos, los casos más notorios son Bolivia (Estado Plurinacional de), el Ecuador y Haití, con diferencias de más de tres hijos entre las mujeres sin educación y las que han alcanzado la secundaria. Esta desigualdad se acentúa si se considera a las mujeres que han alcanzado el nivel de educación

superior. Si bien en períodos recientes la fecundidad ha descendido en todos los niveles educativos, el ritmo de descenso ha sido diferente en los distintos grupos, siendo en general menor en el caso de las mujeres sin educación. Como consecuencia, las diferencias relativas se profundizan en la mitad de los países aquí examinados.

En todos los países considerados, las mujeres con menor nivel de instrucción tienen una menor prevalencia en el uso de anticonceptivos, lo que a su vez guarda una estrecha relación con la demanda insatisfecha de servicios de planificación familiar. En este sentido, los países latinoamericanos tienen el desafío de adoptar medidas y redoblar los esfuerzos para alcanzar la meta 5B de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que es lograr, para 2015, el acceso universal a la salud reproductiva.

En América Latina los cambios en la edad de inicio de la vida marital han sido lentos y permanecen con poca variación o leves aumentos. En contrapartida, el inicio de la actividad sexual muestra una tendencia general al rejuvenecimiento y a aumentar su distancia con la edad de

⁵ La fecundidad natural es el número de hijos que tendría una mujer fértil en ausencia de anticoncepción y otros factores limitantes. Para la región, se ha calculado en 21 hijos por mujer.

iniciación nupcial. Pero, sin duda, el cambio que merece especial atención es el rejuvenecimiento de la edad a la cual se tiene el primer hijo. Lo anterior constituye, en principio, una evidencia de que el modelo latinoamericano contrasta con los patrones de formación de uniones y de reproducción que surgieron en los países desarrollados a partir de la década de 1960 y que se consideran característicos de la llamada segunda transición demográfica.

Sin perjuicio de lo anterior, lo que sí es un hecho en América Latina es la existencia de patrones diversos respecto al matrimonio —formal o consensual— y al

inicio de la maternidad, influenciados fuertemente por la educación. De manera sistemática las mujeres con mayor nivel de educación inician su actividad sexual a edades más tardías que las mujeres con menor educación, así como también postergan la conformación de uniones y la maternidad. El hecho de que las mujeres de sectores sociales más privilegiados y más educados se caractericen por una postergación en la edad de la nupcialidad y la maternidad respalda la idea de que en estos sectores se ejerce una mayor autonomía frente a las decisiones sexuales y reproductivas.

Perspectivas futuras de la fecundidad sobre la base de los cambios educativos

En la mayoría de los países de América Latina, el acceso a la educación y el aumento de años de escolaridad han tenido una pronunciada progresión en las últimas décadas. En la medida en que los comportamientos económicos y demográficos suelen diferir a causa de los distintos niveles educacionales, las proyecciones de los logros educacionales constituyen importantes insumos para las proyecciones económicas y demográficas.

Se espera que la dinámica educativa conlleve un descenso más rápido de la fecundidad a medida que las mujeres alcancen mayores niveles de educación. En un número importante de países de América Latina la diferencia de fecundidad por nivel de educación no solo se mantiene, sino que también aumenta. Pese a esto, existen razones para sospechar que la magnitud de esas diferencias se reducirá en el largo plazo, en la medida en que la disminución de la fecundidad entre las mujeres más educadas podría eventualmente detenerse, mientras la fecundidad entre las menos educadas podría seguir cayendo.

Sobre la base de datos de las encuestas de demografía y salud, se determinó la contribución directa de los cambios en las brechas educacionales al descenso de la fecundidad en cuatro países (Brasil, Bolivia (Estado Plurinacional de), Perú y Colombia) durante un período de 15 años. Aun sin constituirse en la fuerza dominante en el descenso de la fecundidad, los cambios en la distribución de logros educacionales han contribuido sustancialmente a su reducción.

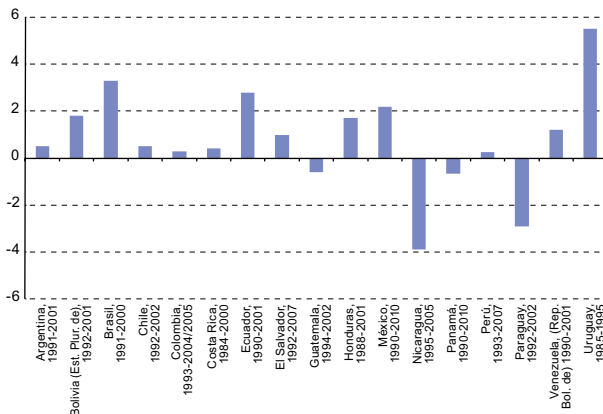
La proyección de la fecundidad sobre la base de esa distribución corrobora la conclusión obtenida con otras metodologías de que los bajos niveles de fecundidad dominarán, crecientemente, el futuro demográfico y económico de la región. Como consecuencia, se observará un descenso continuo en el número de nacimientos y una estructura etaria de la población gradualmente más envejecida. Estos cambios tienen fuertes implicancias en términos de economía del cuidado, participación laboral femenina y relaciones de dependencia en las familias.

Fecundidad adolescente: Una prioridad para la acción y la investigación

Llama la atención que el descenso de la fecundidad adolescente es mucho más bajo que la caída de la fecundidad total. Al analizar períodos más cortos y recientes se advierte que durante la década de 1990 casi todos los países de la región registraron un aumento de la fecundidad adolescente (véase el gráfico 7), mientras la fecundidad total caía de manera pronunciada.

Respecto de la actividad sexual, los indicadores más usados muestran un adelantamiento de su inicio durante la adolescencia, lo que tiende a elevar la probabilidad de embarazo en esa etapa. Esta mayor precocidad en la actividad sexual no ha ido acompañada de una unión más temprana, lo que implica un aumento de la actividad sexual premarital.

Gráfico 7
AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): VARIACIÓN DE LA MATERNIDAD ADOLESCENTE ENTRE LOS CENSOS DE LA DÉCADA DE 1990 Y DE 2000^a
 (En puntos porcentuales)



Fuente: J. Rodríguez, "Latin America: high adolescent fertility amid declining overall fertility", documento presentado en la reunión del Grupo de Expertos sobre adolescencia, juventud y desarrollo, Nueva York, 21 y 22 de julio de 2011 [en línea] http://www.un.org/esa/population/meetings/egm-adolescents/p01_rodriguez.pdf.

^a Porcentaje de mujeres de 15 a 19 años que declaran en el censo haber tenido uno o más hijos nacidos vivos.

La única manera de que las tendencias arriba descritas no se traduzcan en un alza de la fecundidad adolescente es mediante un aumento significativo del uso eficiente de anticonceptivos modernos durante la adolescencia. Y si bien los indicadores tradicionales de cobertura muestran un incremento, el análisis detallado de este uso lleva a una conclusión mucho menos alentadora ya que parte del aumento del uso de anticonceptivos corresponde a mujeres que comienzan a utilizarlos después de haber tenido su primer hijo, lo que obviamente no sirve para evitar la maternidad adolescente (aunque sí un segundo embarazo). Asimismo, el uso suele ser menos constante y eficiente entre los y las adolescentes, por lo que su aumento tiene un efecto protector menor que en otras edades. Por último, la iniciación sexual protegida, el indicador más relevante para pronosticar una adolescencia

sin hijos, aún registra niveles ínfimos en buena parte de los países.

En contraste con períodos anteriores, las encuestas de la década de 2000 evidencian una reducción sistemática de la deseabilidad de los hijos concebidos durante la adolescencia y menores niveles de deseabilidad entre los nacimientos en la adolescencia que entre el total de nacimientos en la mayoría de los países. La evidencia respecto de la reducción del porcentaje de nacimientos planeados entre las madres adolescentes es un aliciente y un poderoso argumento para redoblar las políticas y programas públicos de salud sexual y reproductiva dirigidos a este grupo.

La desigualdad que se registra en los niveles de fecundidad entre grupos educativos suele ser particularmente acentuada en el caso de la maternidad adolescente. Ciertamente la educación sigue siendo un factor protector frente a la maternidad adolescente, pero su capacidad preventiva se ha reducido y, sobre todo, el umbral educativo necesario para reducir al mínimo las probabilidades de maternidad adolescente se ha desplazado de la educación secundaria a la universitaria. En los países en los que solo una minoría accede a la educación secundaria, llegar a este nivel todavía genera una baja abrupta en la probabilidad de ser madre adolescente.

Dado que los avances hacia la universalización de la educación secundaria en América Latina no han supuesto un mejoramiento concomitante del mercado de trabajo ni una disminución de la desigualdad social, gran parte de esta población adolescente escolarizada tiene bajas expectativas respecto de los retornos y oportunidades que les deparará esta mayor cantidad de años de estudios en el futuro. Debido a ello, las pérdidas y costos derivados de una maternidad temprana no son percibidos plenamente por una buena parte de los y las adolescentes latinoamericanos. En tal sentido, junto con las mejoras educativas, el avance hacia sociedades más igualitarias y con más oportunidades para adolescentes y jóvenes favorecería la reducción de la alta fecundidad adolescente de la subregión.

Consideraciones finales

Las grandes desigualdades en la fecundidad según el nivel educativo, la persistencia de una elevada fecundidad adolescente y las evidentes restricciones para el uso de anticoncepción entre los y las adolescentes a pesar de su deseo de limitar la fecundidad, revelan insuficiencias preventivas y barreras de acceso a los medios de anticoncepción moderna. Como ha señalado la CEPAL

de manera reiterada, esto constituye un "núcleo duro" de reproducción intergeneracional de la exclusión y la desigualdad, donde se combina el bajo nivel educativo, la ausencia de apoyo en el cuidado de los hijos, trayectorias familiares de mayor vulnerabilidad, mayores dificultades para desarrollar actividades que generen ingresos y un acceso precario a redes de protección social. Como se

verá en el capítulo siguiente, son precisamente las madres con hijos pequeños y bajos niveles de ingresos quienes mayores dificultades tienen para acceder al empleo y, cuando lo hacen, se concentran en los empleos de menor

productividad. Por ello, la maternidad adolescente, con bajos niveles de educación e ingresos, constituye un tremendo obstáculo para las trayectorias productivas y el acceso al bienestar a lo largo de la vida.

Trabajo, empleo y mercados laborales: Fábricas, circuitos y núcleos duros de reproducción de desigualdades

Tal como se ha planteado en el capítulo I, los logros de la región desde el año 2002 en materia de reducción de pobreza y también de desigualdad (aunque en menor medida), así como la evidencia que confirma el peso que ha tenido el aumento de los ingresos laborales en estas tendencias ofrecen razones contundentes para ser optimistas.

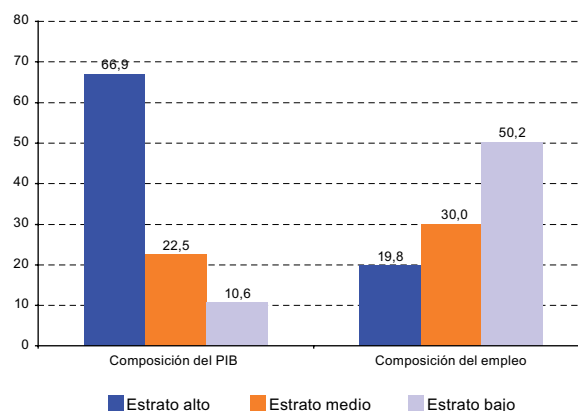
A fin de dimensionar los márgenes con que cuenta América Latina para poder seguir avanzando

significativamente en la reducción de la desigualdad, es preciso analizar las brechas de productividad, sus efectos sobre la segmentación de los mercados laborales y la forma que adoptan los circuitos de desigualdad en la articulación entre Estado, mercados y familias. Esta concatenación permite ver que, aun cuando los indicadores agregados muestran señales alentadoras en años recientes, la tendencia al distanciamiento entre sectores de más y menos recursos muestra fuertes rigideces.

Estructura productiva y mercados laborales: Otra cara del condicionamiento estructural de la desigualdad

Los mercados internos de las economías latinoamericanas son estructuralmente heterogéneos. Es decir, que están muy segmentados debido a la existencia de grandes brechas de productividad. La estructura económica de la región puede analizarse considerando la existencia de tres estratos de productividad (alto, medio y bajo), con diverso acceso a la tecnología y a los mercados. El estrato *alto*, compuesto por actividades de exportación y empresas de gran escala operativa (con más de 200 trabajadores) genera un 66,9% del producto y sólo un 19,8 % del empleo total. El estrato medio —que comprende a las pequeñas y medianas empresas (pymes)— genera un 22,5% del producto y su ocupación representa un 30% del total. Finalmente, el estrato bajo —estrechamente asociado a lo que comúnmente se denomina sector informal— concentra la mitad del empleo y aporta solo un 10,6% al producto (véase el gráfico 8).

Gráfico 8
AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): INDICADORES DE HETEROGENEIDAD ESTRUCTURAL, ALREDEDOR DE 2009
(En porcentajes)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de R. Infante, "América Latina en el "umbral del desarrollo". Un ejercicio de convergencia productiva", *Documento de trabajo*, N° 14, proyecto sobre desarrollo Inclusivo, Santiago de Chile, CEPAL, junio de 2011.

Las implicancias de esta gran disparidad entre los aportes de cada sector al producto y al empleo son evidentes: se produce una distribución muy desigual de la productividad (medida esta a través del PIB por ocupado). En última instancia, eso deja espacio a una apropiación muy heterogénea de las ganancias que de ella se derivan entre los trabajadores, lo que opera como parámetro

estructural para las disparidades y el acceso al bienestar en la región. Mientras que el empleo se concentra en el estrato bajo de productividad, la mayor apropiación de ganancias (participación en el PIB) se da en el estrato alto, que solo absorbe en torno a uno de cada cinco ocupados. Estas asimetrías son en gran medida responsables de la concentración del ingreso laboral en América Latina.

Productividad, formalidad, informalidad y desigualdad: Más allá de las líneas divisorias

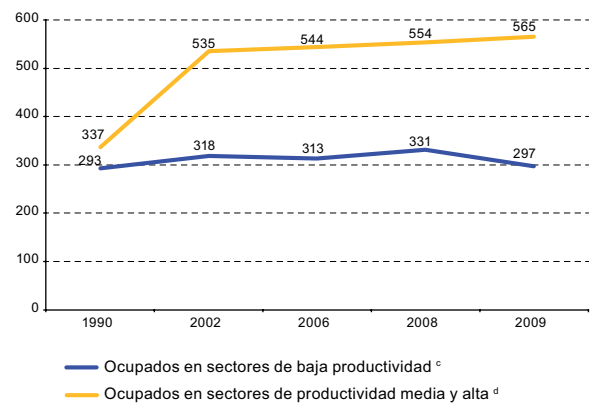
La concentración del ingreso es una consecuencia preocupante de la heterogeneidad estructural, pero no es la única: la “divergencia productiva” impone también una gran segmentación de los mercados laborales, que se manifiesta en la línea divisoria entre el empleo de alta y baja productividad, o entre el empleo formal (más cerca de la vanguardia tecnológica, con un nivel educativo superior, mejores condiciones laborales y mayor resguardo de la institucionalidad laboral) e informal (con menos ingresos, menor nivel educativo, inestabilidad, limitada cobertura de seguridad social y ausencia de contrato de trabajo).

Sin duda, es una buena noticia que la línea divisoria entre ambos sectores se haya desplazado en los últimos años: en 2009 los trabajadores en sectores de baja productividad representaban el 42,7% de la población urbana ocupada, un dato mejor que el registrado alrededor de 1990, cuando la población ocupada en este sector llegaba al 48,1%. Sin embargo, en las últimas dos décadas la línea divisoria entre el empleo formal y el informal está ahora más definida o. En otras palabras, la brecha que separa a los trabajadores de mayor de los de menor productividad se ha ensanchado (véase el gráfico 9).

El descenso de la informalidad no solo benefició claramente más a los hombres que a las mujeres, sino que además entre estas también ha sido más estratificado, concentrándose sobre todo en las mujeres de mayores ingresos. Como resultado de esta evolución, el 82% de las mujeres ocupadas del 20% más pobre de la población trabajan actualmente en sectores de baja productividad, una proporción que en el quintil de mayores ingresos se reduce a cerca del 33%. La distancia entre las ocupadas de los quintiles 1 y 5 alcanzó en 2009 su valor máximo.

Este ensanchamiento de las brechas entre las mujeres se explica en parte por las múltiples formas con que la desigualdad de género atraviesa la articulación entre mercados laborales y familias. La presión que ejerce sobre los hogares la carga de cuidados sigue una pauta muy regresiva, porque continúa recayendo básicamente sobre las distintas modalidades y recursos (económicos y familiares) con que los hogares cuentan para resolverla.

Gráfico 9
AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): TENDENCIAS DE LAS
REMUNERACIONES REALES DE LOS OCUPADOS
EN ÁREAS URBANAS ^a, SEGÚN SECTOR,
ALREDEDOR DE 1990, 2002, 2008 Y 2009 ^b
(En dólares de 2005)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

^a Ocupados urbanos mayores de 15 años que declararon ingresos laborales (no incluye trabajadores no remunerados).

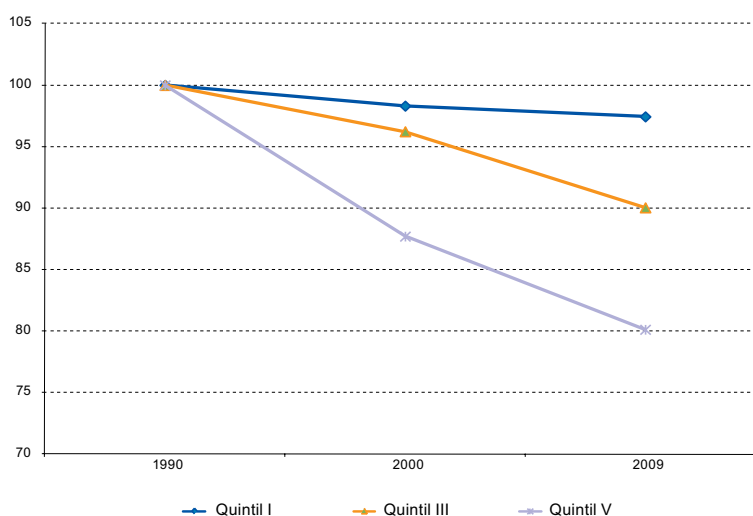
^b Promedio ponderado de los países sobre los que hay información de todos los períodos considerados. Hasta el año 2006, no se incluye a Colombia, país en que no se distingue el tamaño de la empresa. En el año 2008 los datos presentados pueden no coincidir con los publicados por CEPAL (2010c y 2009a), debido a que la División de Estadística y Proyecciones Económicas de la CEPAL realizó ajustes en las líneas de pobreza y en los ingresos para la base de datos de Colombia de ese año.

^c Hace referencia a ocupados en microempresas (establecimientos que dan empleo a un máximo de cinco personas), empleo doméstico y trabajadores independientes no calificados, entre los que se encuentran trabajadores por cuenta propia y familiares no remunerados sin calificación profesional o técnica.

^d Esta categoría incluye a los asalariados públicos, a los empleadores y asalariados privados en establecimientos con más de cinco trabajadores, así como a profesionales y técnicos independientes. Se excluye al servicio doméstico.

La presencia de niños pequeños en los hogares empuja a las mujeres de menos ingresos a insertarse en el empleo informal en mucha mayor medida que a las mujeres de ingresos superiores. Esa disparidad se ha agudizado en los últimos veinte años, ya que para las primeras el empleo en sectores de baja productividad prácticamente no se ha reducido, lo que contrasta con el notorio descenso del empleo en sectores de baja productividad entre mujeres de los quintiles superiores que tienen hijos pequeños (véase el gráfico 10).

Gráfico 10
AMÉRICA LATINA (13 PAÍSES): VARIACIÓN DEL EMPLEO EN SECTORES DE BAJA PRODUCTIVIDAD^a ENTRE MUJERES EN HOGARES CON NIÑOS DE 0 A 5 AÑOS, POR QUINTILES DE INGRESO, PROMEDIO PONDERADO, ALREDEDOR DE 2009^b
(En porcentajes de variación)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de encuestas de hogares de los respectivos países. No se incluyen los datos de Colombia, Guatemala, el Perú la República Dominicana ni El Salvador.

^a El sector de baja productividad incluye a ocupados en microempresas (establecimientos que dan empleo a un máximo de cinco personas), empleo doméstico y trabajadores independientes no calificados, entre los que se encuentran trabajadores por cuenta propia y familiares no remunerados sin calificación profesional o técnica.

^b Los datos de Bolivia (Estado Plurinacional de) corresponden a 2007, los de México y Venezuela (República Bolivariana de) a 2008. Los datos de la Argentina corresponden al Gran Buenos Aires, los de Bolivia (Estado Plurinacional de) a ocho ciudades principales y El Alto, los del Ecuador a las áreas urbanas, los del Paraguay a Asunción y Departamento Central, los del Uruguay a áreas urbanas, y los de Venezuela (República Bolivariana de) al total nacional.

Acceso al empleo y desigualdad: Una mirada de género y generación

El aumento de la participación laboral femenina es quizá uno de los cambios más drásticos que los mercados laborales latinoamericanos han experimentado en los últimos 20 años. Pero la marcada estratificación de este proceso revela, también en este caso, una pauta regresiva que está operando como un potente transmisor de desigualdades en la región.

La perspectiva de largo plazo muestra que, a partir de 2002, se ha ampliado la distancia que separa en términos de participación laboral a las mujeres de los sectores más pobres con niños más pequeños (de 0 a 5 años) de las que tienen niños de entre 6 y 14 años, lo que confirma la persistencia del obstáculo que la carga de cuidado de los hijos más pequeños impone a la inserción laboral de las mujeres más vulnerables. Además, la brecha que separa a las mujeres de quintiles superiores e inferiores que viven en hogares con carga infantil no ha dejado de

incrementarse desde 1994. Esto ha ocurrido tanto para las que tienen niños pequeños como para las que viven en hogares con niños de 6 a 14 años, y la disparidad ha alcanzado ahora en ambos casos su valor más alto desde 1994, lo que muestra una consolidación de este rígido circuito de desigualdad.

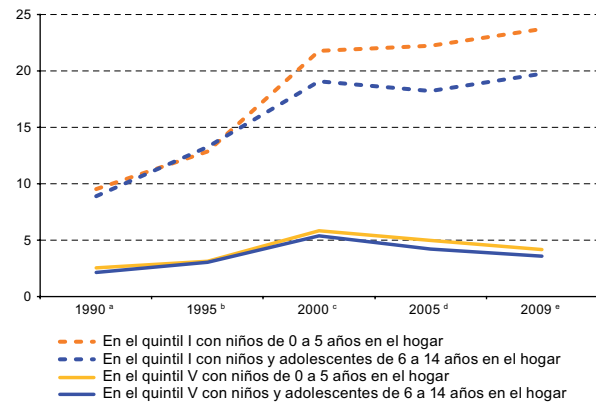
A diferencia de lo que ocurre con la participación laboral, el desempleo es un fenómeno más estrechamente asociado a los ciclos económicos y sus variaciones se vinculan directamente con las distintas etapas de estos. Pero quizá lo más relevante sea que, en el tránsito entre estos ciclos, algunos sectores aparecen sistemáticamente perjudicados. Esto refleja capacidades desiguales para enfrentar los efectos del desempleo o, en otras palabras, una mayor vulnerabilidad de ciertos grupos frente a las etapas bajas del ciclo económico y más capacidad de otros sectores para hacer frente a estas contracciones cíclicas.

El desempleo se concentra principalmente en las mujeres y, cada vez más, en las de menores ingresos. Como resultado de este proceso de divergencia, el desempleo de las mujeres de menores ingresos fue en el año 2009 cinco veces superior al de las mujeres del quintil de ingresos más alto.

Varios son los fenómenos que contribuyen a este aumento de la desigualdad. La incorporación de las mujeres al mercado de trabajo introduce presión para el empleo femenino, a lo que se suma el hecho de que las mujeres de menores niveles educativos encuentren más barreras para acceder al empleo, en un contexto de insuficiente creación de puestos de trabajo. Pero también las demandas de cuidado pueden estar operando en los sectores más vulnerables como un freno para el acceso al empleo. El desempleo tiende a ser mayor entre las mujeres que viven en hogares con niños más pequeños y, nuevamente, la distancia entre estas y las que tienen hijos en edades para las que existe una oferta escolar formal y más estructurada va aumentando levemente a medida que disminuyen los ingresos. Este fenómeno, además, se ha agudizado significativamente a partir del año 2000 (véase el gráfico 11).

El otro grupo en que el desempleo alcanza los niveles más preocupantes es el de los jóvenes. De acuerdo con datos de las encuestas de hogares, en 1990 la tasa de desempleo de los jóvenes de entre 15 y 24 años casi duplicaba la del conjunto de la población, una diferencia que no solo no se ha reducido, sino que a partir del año 2005 parece haber aumentado. Además, el desempleo es mucho más alto entre los jóvenes provenientes de hogares con menores ingresos que entre los de los quintiles superiores, y esa distancia no ha variado significativamente en los últimos veinte años.

Gráfico 11
AMÉRICA LATINA (14 PAÍSES): TASA DE DESEMPLEO DE MUJERES DE 15 A 49 AÑOS, POR QUINTILES DE INGRESO Y EDAD DE LOS HIJOS, PROMEDIO PONDERADO, ALREDEDOR DE 1990, 1995, 2000, 2005 Y 2009
(En porcentajes)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países. No se incluyen para ninguno de los años los datos de El Salvador, Guatemala, el Perú ni la República Dominicana.

^a No se incluyen datos de El Salvador, Nicaragua ni Venezuela (República Bolivariana de). Los datos de Bolivia (Estado Plurinacional de) y México corresponden a 1989, y los de Colombia y Panamá a 1991.

^b Los datos del Brasil y Nicaragua corresponden a 1993 y los de El Salvador y Venezuela a 1995.

^c Los datos de la Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), el Brasil, Colombia, Costa Rica, el Ecuador, El Salvador, Honduras, el Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de) corresponden a 1999, y los de Nicaragua a 2001.

^d Los datos de Honduras corresponden a 2003, los de Bolivia (Estado Plurinacional de) y el Salvador a 2004, los de la Argentina y Chile a 2006. Para 2007 no se incluye El Salvador. Los datos de Colombia y Nicaragua corresponden a 2005 y los de la Argentina, Chile y México a 2006. Los datos de la Argentina corresponden al Gran Buenos Aires, los de Bolivia (Estado Plurinacional de) a ocho ciudades principales y El Alto, los del Ecuador a áreas urbanas, los del Paraguay a Asunción y Departamento Central, y los del Uruguay a áreas urbanas.

^e Los datos de Bolivia (Estado Plurinacional de) corresponden a 2007, y los de México y Venezuela (República Bolivariana de) a 2008. Los datos de la Argentina corresponden al Gran Buenos Aires, los de Bolivia (Estado Plurinacional de) a ocho ciudades principales y El Alto, los del Ecuador a áreas urbanas, los del Paraguay a Asunción y Departamento Central, y los del Uruguay a áreas urbanas.

El Estado en la intersección de mercados laborales y familias

Ante el diagnóstico presentado, hay por lo menos cuatro aspectos en que es necesario plantearse la intervención estatal. El primero implica avanzar hacia una política integrada de desarrollo productivo asentada en regímenes macroeconómicos adecuados, políticas de desarrollo e incentivos microeconómicos de mercado, interviniendo con firmeza en iniciativas industriales, tecnológicas y de apoyo a las pymes.

El segundo aspecto corresponde a la regulación e institucionalidad de los mercados laborales. El modelo “dual” de regulación que existe en la región representa, sin duda, un obstáculo central para facilitar la apropiación de ganancias

de productividad por parte de los trabajadores de menores ingresos y para romper la barrera entre trabajadores incluidos y excluidos, que luego se traslada a la protección social.

El tercer eje relevante está vinculado a los esfuerzos que pueden realizar los Estados para desligar el acceso al bienestar de la posición de las personas en el mercado laboral, lo que implica promover una mayor igualdad entre distintos sectores. Medidas como la intermediación laboral, la certificación de competencias, las iniciativas de capacitación (y, en el caso de los jóvenes, las centradas en la transición desde el sistema educativo hacia el mundo

laboral), los seguros de desempleo y los mecanismos para facilitar el acceso de desempleados a redes no contributivas de protección son algunas de las opciones que permiten “desmercantilizar” el acceso al empleo.

Finalmente, los Estados deben jugar un rol activo orientado a la redistribución en materia de cuidado

infantil, lo que eliminaría una traba importante a la participación y el desempeño laboral de las mujeres con hijos menores. Es tarea de la protección social facilitar el acceso a una red de servicios de cuidado que todavía es muy limitada en buena parte de los países de la región y debería perfeccionarse y extenderse.

Protección social y desigualdad: Fisuras, rigideces, márgenes y oportunidades

Desde la década de 1990, se registra en América Latina un incremento sostenido del gasto público social (véase el capítulo V). Este gasto ha permitido en muchos países fortalecer la cobertura y dotar de estabilidad a las políticas sociales, aun cuando en muchos casos el ingreso tributario de los Estados es muy limitado. No obstante, los hallazgos presentados en el capítulo anterior colocan un signo de interrogación sobre la capacidad y el margen futuro de los sistemas de protección social para reducir los canales estructurales de transmisión de la desigualdad. El desafío para los sistemas de protección social de la región es

enorme y complejo. Sin embargo, quizás como nunca antes, la coyuntura actual brinda una nueva oportunidad para plantearse las transformaciones necesarias en la protección social a fin de constituir la en un instrumento más eficaz para quebrar la herencia de la desigualdad.

A fin de evaluar el desempeño sistémico de la protección social frente a la desigualdad, en las páginas siguientes se pone el foco en las fisuras y rigideces de los sistemas de protección social latinoamericanos, pero también en sus márgenes y oportunidades con respecto a las múltiples aristas de la desigualdad.

Lazos contributivos y protección social en América Latina

La protección de los trabajadores y sus familias

Desde hace bastante tiempo, existe acuerdo en que los mercados de trabajo de la región no han tenido la capacidad para convertirse en la puerta de entrada privilegiada para los sistemas de protección social. La alta informalidad y la debilidad de las regulaciones y la institucionalidad laboral condicionan el acceso de los ocupados a la cobertura de seguridad social en el empleo: en la actualidad, alrededor de la mitad de los ocupados están afiliados a la seguridad social, de los cuales la gran mayoría trabajan en el sector formal.

Un dato ilustrativo en este sentido es que la afiliación a la seguridad social descendió entre 1990 y 2002 (pasando del 52,4% al 49%) y a partir de allí comenzó a incrementarse, alcanzado en 2009 el 53,2%, lo que

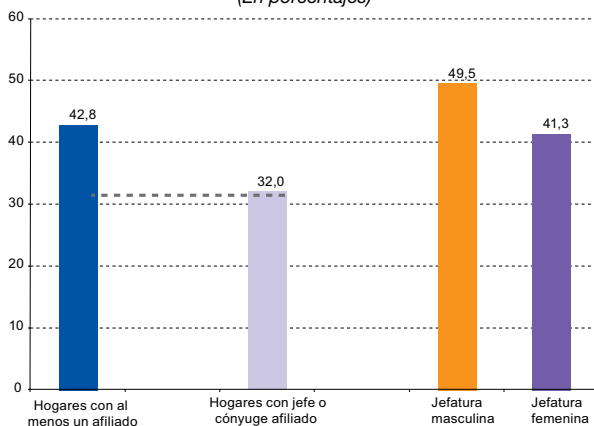
incluso supera levemente el nivel de 1990. Sin embargo, esta tendencia no fue idéntica de un sector a otro. En el período de disminución, la proporción de ocupados con protección contributiva en el sector de baja productividad descendió más que en el sector de productividad media y alta. Y cuando el ciclo económico fue permitiendo una recuperación de la afiliación, el sector formal se recuperó con más fuerza, mientras que en el sector informal esta tendencia fue bastante más moderada. Como resultado de esta evolución diferencial, el acceso a la protección social se ha convertido en un factor adicional que ha contribuido a ensanchar las distancias entre ambos sectores.

Más allá de la cobertura de los ocupados, la lógica contributiva está pensada no solo para otorgar protección a los trabajadores, sino también para proteger de alguna forma a sus familias por medio del aseguramiento de salud.

En este sentido, conviene recordar que quienes acceden a la protección social no son solamente los trabajadores de mayor nivel educativo y mejores salarios, sino también aquellos que cuentan con menor número de dependientes (o que pertenecen a hogares menos numerosos). En contraste, predominantemente, son los trabajadores de menos ingresos, las ocupadas con hijos pequeños, los trabajadores más jóvenes y de hogares más numerosos quienes no acceden a la seguridad social.

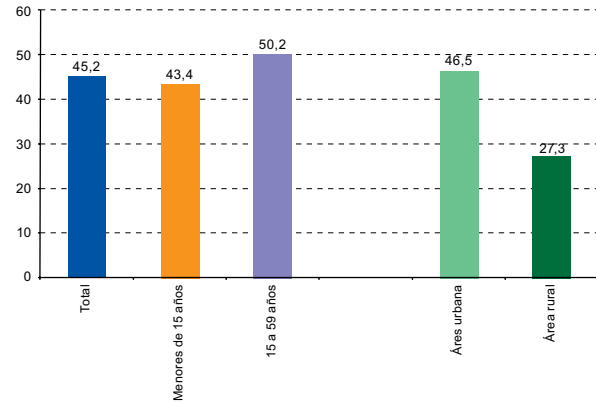
El análisis de los datos desde la óptica de los hogares no solo muestra niveles más bajos de cobertura de seguridad social (un 43% de los hogares tienen al menos un miembro que está afiliado y solamente el 32% del total de hogares tiene a su jefe o cónyuge afiliado) sino que, una vez más, pone de manifiesto brechas de género y de generaciones. En efecto, la cobertura de seguridad social en los hogares con jefatura masculina (49,5%) es significativamente mayor al promedio, mientras que los hogares con jefatura femenina tienen menor nivel de cobertura (41,3%) (véase el gráfico 12). Asimismo, al analizar la proporción de niños que viven en hogares cubiertos por la dinámica contributiva en comparación con la población activa, se observa que aparecen en sistemática desventaja: la mitad (50,2%) de la población de 15 a 59 años vive en hogares con al menos una persona afiliada a la seguridad social, un valor que entre la población menor de 15 años desciende al 43,4% (véase el gráfico 13). Diferencias más profundas se observan cuando se compara a la población de hogares urbanos con la de hogares rurales, en detrimento de estos últimos.

Gráfico 12
AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): HOGARES CON ALGÚN TIPO DE AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL POR SEXO DEL JEFE, PROMEDIO SIMPLE, ALREDEDOR DE 2009
(En porcentajes)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de encuestas de hogares de los respectivos países.

Gráfico 13
AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): PERSONAS EN HOGARES CON ALGÚN TIPO DE AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL POR EDADES Y ÁREA GEOGRÁFICA, PROMEDIO SIMPLE, ALREDEDOR DE 2009
(En porcentajes)



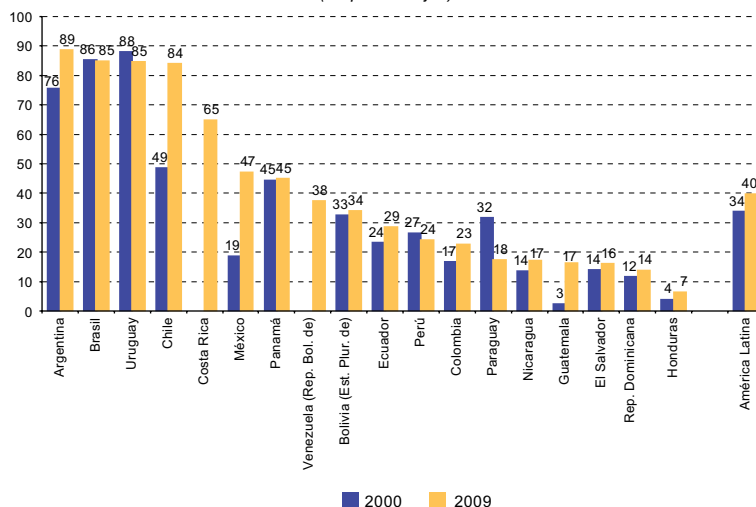
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de encuestas de hogares de los respectivos países.

La protección de los adultos mayores mediante transferencias: entre la base contributiva y la compensación no contributiva

Las limitaciones e insuficiencias de la cobertura de la seguridad social se reproducen en la etapa de la vejez. El resultado de esta lógica es que, en el promedio simple de los países de la región, en 2009 apenas cuatro de cada diez latinoamericanos de 65 años y más (40%) recibía jubilaciones o pensiones, aun en un contexto en que se registran aumentos considerables de la proporción de población cubierta por jubilaciones y pensiones en la última década.

Existen desigualdades entre mujeres y hombres en el acceso a jubilaciones y pensiones, resultado de la combinación de distintos factores. Las inserciones laborales diferenciales, la feminización de la informalidad, los déficits de afiliación a la seguridad social en algunos sectores con mayor presencia femenina y las todavía bajas tasas de actividad de las mujeres son algunos de los elementos que configuran las oportunidades de protección para las mujeres al llegar la vejez. Esto demuestra en forma contundente que las desigualdades de género que se acarrean desde la etapa activa se traducen en forma relativamente lineal en la vejez.

Gráfico 14
AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): POBLACIÓN DE 65 AÑOS Y MÁS QUE RECIBE JUBILACIONES O PENSIONES, ALREDEDOR DE 2000 Y 2009^a
 (En porcentajes)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de encuestas de hogares de los respectivos países.

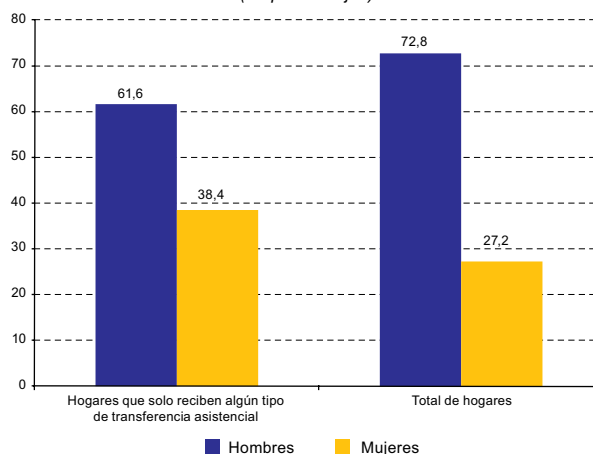
^a Promedio simple de los países que cuentan con información sobre los dos años considerados. Los datos de Bolivia (Estado Plurinacional de) corresponden a 2007 y los de México y Venezuela (República Bolivariana de) a 2008; los datos de la Argentina corresponden al Gran Buenos Aires; los de Bolivia (Estado Plurinacional de), a ocho ciudades principales y El Alto; los del Ecuador, a las áreas urbanas; los del Paraguay, a Asunción y Departamento Central, y los del Uruguay, a áreas urbanas.

El pilar no contributivo: Alcance y adecuación a riesgos de las transferencias asistenciales

Los altos niveles de pobreza y desigualdad, junto con la baja capacidad fiscal de los Estados, colocan a los países en una difícil situación, porque los requerimientos de gasto público son muy altos y todavía son insuficientes los esfuerzos reales para cubrir los amplios sectores de la población que no cuentan con garantías actuales de ingresos ni fuentes de aseguramiento para el futuro. El pilar no contributivo (transferencias asistenciales públicas) cubre aproximadamente el 12% de los hogares y representa el 0,25% del PIB. Sin embargo, estas transferencias sí parecen apuntar a los riesgos de la población y tienen un peso significativo en los hogares más pobres. Esto confirma que, pese a las limitantes en materia de cobertura, las transferencias asistenciales públicas tienen una distribución altamente progresiva.

Si se consideran exclusivamente los hogares de menores ingresos que reciben transferencias asistenciales públicas y que no cuentan con ningún integrante afiliado a la seguridad social, se evidencia la mayor presencia de mujeres jefas de hogar. En particular, casi cuatro de cada diez hogares (38,4%) del quintil más pobre que reciben transferencias y no tienen acceso a la seguridad social tienen jefatura femenina, un valor relativamente alto si se lo compara con el 27% de hogares de este quintil con mujeres como jefas de hogar (véase el gráfico 15).

Gráfico 15
AMÉRICA LATINA (13 PAÍSES): HOGARES DEL PRIMER QUINTIL DE INGRESOS QUE RECIBEN TRANSFERENCIAS ASISTENCIALES PÚBLICAS Y NO TIENEN PROTECCIÓN CONTRIBUTIVA NI RECIBEN JUBILACIONES O PENSIONES POR SEXO, DEL JEFE, ALREDEDOR DE 2009^a
 (En porcentajes)



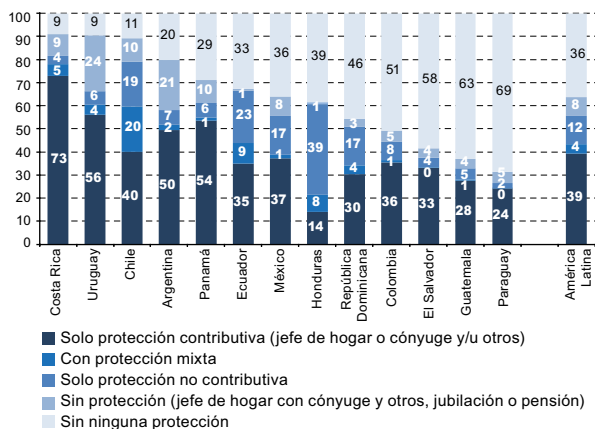
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de encuestas de hogares de los respectivos países.

^a Promedio simple. No se incluyen datos de Bolivia (Estado Plurinacional de), el Brasil, Nicaragua, el Perú ni Venezuela (República Bolivariana de). Los datos de la Argentina corresponden al Gran Buenos Aires y los del Ecuador a zonas urbanas. Los datos de Guatemala corresponden a 2006, los de Honduras a 2007 y los de México a 2008.

Fisuras y omisiones de los sistemas de protección social

La combinación de las distintas vías de la protección confirma, una vez más, la existencia de un sector relativamente integrado, ocupado y cubierto por la vía contributiva, que en el promedio regional representa a un 43% de los hogares. Dentro de este sector, una porción muy minoritaria (un 4% en el promedio regional) cuenta con cobertura mixta (tiene al menos algún miembro afiliado a la seguridad social y recibe a su vez algún tipo de transferencia pública asistencial) (véase el gráfico 16).

Gráfico 16
AMÉRICA LATINA (13 PAÍSES): DISTRIBUCIÓN DE HOGARES SEGÚN VÍAS POR LAS QUE ACCEDEN A LA PROTECCIÓN SOCIAL, PROMEDIO SIMPLE, ALREDEDOR DE 2009^a
(En porcentajes)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de encuestas de hogares de los respectivos países.

^a No se incluyen datos de Bolivia (Estado Plurinacional de), el Brasil, Nicaragua, el Perú y Venezuela (República Bolivariana de) porque estos países no cuentan con información suficiente sobre transferencias asistenciales públicas en los hogares para efectuar la construcción de la tipología o bien las variables correspondientes presentan inconsistencias. Los datos de la Argentina corresponden al Gran Buenos Aires y los del Ecuador a zonas urbanas. Los datos de Guatemala corresponden a 2006, los de Honduras a 2007 y los de México a 2008.

El análisis también muestra una proporción no menor de hogares (8%) que recibe exclusivamente jubilaciones o pensiones y que se concentra, como era de esperar, en los países con sistemas de jubilaciones y pensiones más avanzados (la Argentina, Costa Rica y el Uruguay).

Además, como se analizó en secciones anteriores, el 12% de los hogares de la región está protegido solo por la vía de transferencias asistenciales no contributivas.

Tal vez lo más relevante sea la elevada proporción de hogares que no reciben protección pública por ninguna de las vías señaladas: un 36% de los hogares en el promedio de los 13 países considerados no cuentan con miembros afiliados a la seguridad social, no reciben transferencias asistenciales públicas ni tampoco perciben ningún tipo de jubilación ni pensión. En los países con mayor nivel de desarrollo, el porcentaje de hogares sin protección oscila entre el 9% (Costa Rica y Uruguay) y el 20% (Argentina). En contrapartida, los países más pobres, con menos PIB per cápita, con menor capacidad fiscal y peores tasas de dependencia formal, se ubican en niveles más cercanos al promedio regional y, en algunos casos, lo superan ampliamente (en El Salvador, los hogares sin protección llegan al 58%, en Guatemala, al 63% y en el Paraguay, al 69%).

Estos hogares están claramente sobrerrepresentados en los quintiles de menores ingresos. Sin embargo, es significativo el porcentaje de población de sectores medios y altos que vive en estas condiciones. En promedio, para 14 países latinoamericanos, la exclusión de toda protección social pública afecta al 48% de la población en los dos primeros quintiles, al 38% en los dos quintiles siguientes y al 30% en el quinto quintil. La desprotección, por tanto, parece tener distintos significados. Uno de ellos —el que describe a quienes se ubican en los quintiles medios y superiores— es que posiblemente responda a un cierto “descreme hacia arriba” de los circuitos públicos de protección y que esta población se “autoprotege” por la vía del mercado y con gastos de bolsillo. Pero el significado más probable es que una proporción mayoritaria de los sectores medios y altos no protegidos esté reflejando a los trabajadores de sectores de productividad media y alta (en alguna medida, posiblemente también de baja productividad) que, como se analizó en secciones anteriores, no tienen acceso a la seguridad social o a una contratación laboral.

La protección social y su desempeño sistémico frente a las desigualdades

La primera conclusión que se deriva del análisis precedente es que la reducción de la desigualdad no puede correr por cuenta exclusiva de la protección social. Esta es el tercer eslabón de la secuencia de generación y reproducción de desigualdades, precedida en primer lugar por la “fábrica” de desigualdad que es la heterogeneidad estructural y por las rígidas segmentaciones del mercado laboral, en segundo lugar. Los tres eslabones son interdependientes y deben abordarse con un enfoque integrado.

La segunda conclusión es que el margen de maniobra de la protección social está limitado por su relativa rigidez, vinculada sin duda a las capacidades fiscales y los márgenes de los países para ampliar el gasto social, pero también a la capacidad de modificar las opciones distributivas realizadas en el pasado para estructuras de riesgos diferentes a las que hoy presentan la mayor parte de los países. Dentro de los márgenes de la protección social, distintas líneas de políticas pueden contribuir a estos objetivos.

En primer lugar, en varios países, es preciso robustecer el pilar contributivo mediante la introducción de reformas a la protección o nuevos dispositivos, el fortalecimiento de los seguros de desempleo y modificaciones importantes de los sistemas de jubilaciones y pensiones.

En segundo lugar, es clara la necesidad de fortalecer el pilar no contributivo. Por medio de las transferencias directas de ingresos a los más pobres se está logrando efectivamente focalizar los esfuerzos en los sectores más vulnerables; además, estas transferencias constituyen

un instrumento importante para detener la caída de los ingresos y de la capacidad de consumo de quienes están en situación de vulnerabilidad, así como para combatir la infantilización de la pobreza y reducir las desigualdades al inicio de la vida. También los subsidios a las contribuciones en los sistemas de aseguramiento, básicamente la seguridad social y la salud y la provisión de garantías para el acceso efectivo a servicios básicos cumplen un papel fundamental en este pilar.

Finalmente, los datos presentados revelan altos niveles de precariedad en la población adulta mayor de la región. Ante esta situación, no puede soslayarse la importancia de transferir ingresos a las personas de 65 años y más en situación de vulnerabilidad, y no abandonar la idea de avanzar hacia un sistema universal de transferencias en esta etapa de la vida, que se combine con las transferencias contributivas derivadas de los sistemas provisionales.

Las desigualdades identificadas a lo largo del capítulo reclaman una nueva mirada, asentada en un enfoque de derechos, cuyo desafío es la construcción de redes universales de protección social. Ese desafío debe plasmarse complementariamente en un pilar contributivo y en políticas que cubran los vacíos, poniendo énfasis en los grupos más vulnerables, para que se pueda ir completando el rompecabezas de la universalidad del derecho al bienestar. Dicho de otro modo, sobre la base de los datos aquí presentados, la universalización de niveles básicos de protección social debe guiar el fortalecimiento y las reformas a las arquitecturas de bienestar latinoamericanas.

Tendencias del gasto social, dinámicas del gasto frente a la crisis y perspectivas de pisos universales de la seguridad social

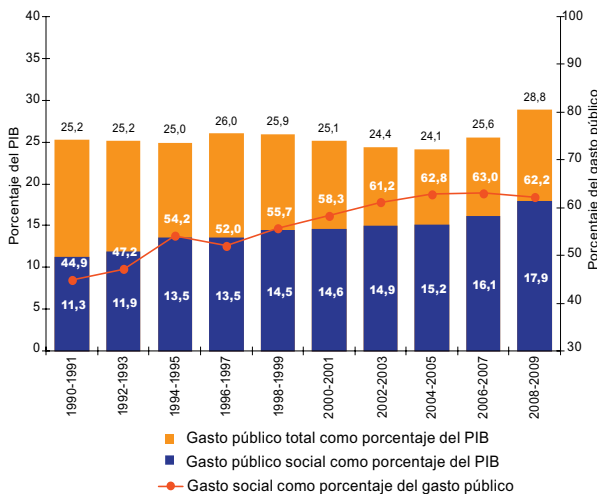
Tendencias de largo plazo

En América Latina, el gasto público y, en especial, el gasto social han registrado un aumento muy significativo en las últimas dos décadas: si bien hasta el período 2006-2007 la prioridad macroeconómica del gasto público se había

mantenido en un nivel relativamente estable, registró un marcado repunte tanto en 2008 como en 2009, debido a un intento temprano de hacer frente a los efectos de la crisis financiera mundial. El esfuerzo por aumentar el

gasto público significó que, al finalizar la primera década del nuevo siglo, la cantidad de recursos, así como su participación en el PIB, fuera la más alta registrada en las dos últimas décadas (véase el gráfico 17).

Gráfico 17
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (21 PAÍSES): EVOLUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO TOTAL Y DEL GASTO PÚBLICO SOCIAL, Y PARTICIPACIÓN DE ESTE EN EL GASTO TOTAL, 1990-1991 A 2008-2009^a
(En porcentajes del PIB y del gasto público total)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), base de datos sobre gasto social.

^a Las cifras del gasto público total corresponden a cifras oficiales provenientes de la clasificación funcional del gasto público y pueden no coincidir con las provenientes de la clasificación económica.

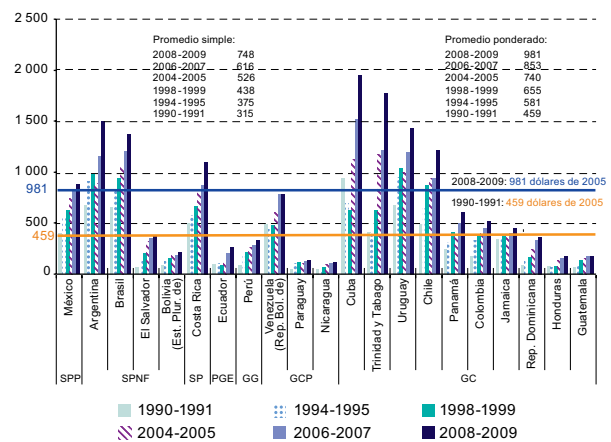
Dada la relativa estabilidad del gasto público total, el gasto social ha ido ganando significación en forma relativamente sistemática: mientras en 1990-1991 correspondía al 45% del gasto total, ya a comienzos del tercer milenio representaba el 58%, para llegar al 63% en 2006-2007. La leve caída de su participación en el último bienio examinado (2008-2009) se debe principalmente al mayor aumento relativo de los gastos no sociales, sobre todo en 2008. En 2009, el gasto público registró una nueva alza, con un repunte del gasto social (del 9,3% con respecto a 2008).

La situación de los países es bastante heterogénea. En el bienio 2008-2009 hay evidentes diferencias en la prioridad macroeconómica que le otorgan los países al gasto social, que va desde menos del 10% del PIB en el Ecuador, Guatemala, Panamá, el Paraguay, el Perú y la República Dominicana, hasta niveles que duplican la cifra anterior en la Argentina, el Brasil, Costa Rica, Cuba y el Uruguay. Esto ocurre pese a que casi todos los países han hecho esfuerzos por aumentar la prioridad macroeconómica del gasto social desde los años noventa.

Los diferentes niveles de desarrollo, así como la carga impositiva y el consecuente presupuesto público general y específicamente social, ocasionan grandes disparidades

en la cantidad de recursos por habitante que los Estados pueden destinar a áreas sociales como la educación, la salud, la seguridad y la asistencia social, entre otras. En el extremo de menor gasto por habitante (menos de 300 dólares por persona) se encuentran Bolivia (Estado Plurinacional de), el Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y el Paraguay. Por otra parte, los países con mayor gasto social per cápita (sobre 1.000 dólares) son la Argentina, el Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Trinidad y Tabago y el Uruguay. En promedio, los países de mayor gasto pueden destinar ocho veces los recursos por habitante respecto de los más restringidos en este ámbito (véase el gráfico 18).

Gráfico 18
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (21 PAÍSES): EVOLUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO SOCIAL, 1990-1991 A 2008-2009^a
(En dólares de 2005 por habitante)



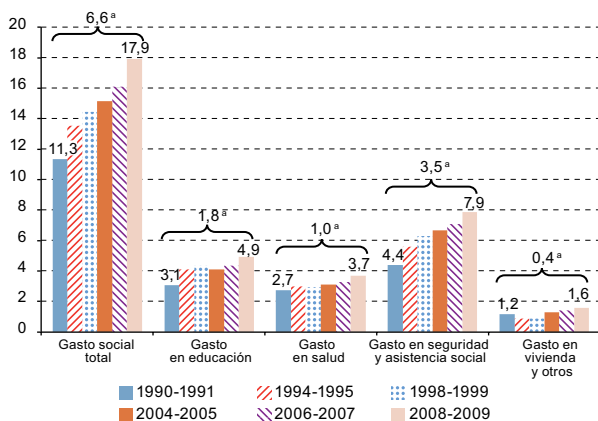
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), base de datos sobre gasto social.

^a SPP: sector público presupuestario; SPNF: sector público no financiero; SP: sector público; PGE: presupuesto general del Estado; GG: gobierno general; GCP: gobierno central presupuestario; GC: gobierno central.

Respecto de la evolución sectorial del gasto social, todas las grandes partidas han aumentado, por lo que también han estado sometidas en mayor o menor medida a las oscilaciones procíclicas asociadas al comportamiento de las economías de la región. Pese a lo anterior, este crecimiento ha sido dispar: la seguridad y la asistencia social son las que mayores crecimientos han anotado, de tres puntos porcentuales del PIB, más de la mitad de todo el incremento del gasto público social (véase el gráfico 19).

La segunda partida que ha registrado mayor crecimiento es el gasto en educación, cuya participación en el PIB se incrementó en poco más del 50%. Este incremento no ha estado exento de volatilidades, ya que el sector educativo junto con el de la salud suelen sufrir los embates de los ajustes fiscales, sobre todo mediante la restricción del gasto en inversión y el congelamiento de los gastos corrientes, principalmente los asociados al pago de remuneraciones de funcionarios públicos.

Gráfico 19
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (21 PAÍSES): EVOLUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO SOCIAL SEGÚN SECTORES, 1990-1991 A 2008-2009
 (En porcentajes del PIB)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), base de datos sobre gasto social.

^a Aumento del gasto en puntos porcentuales entre los períodos 1990-1991 y 2008-2009.

Por otra parte, la partida que financia los sistemas públicos de salud ha tenido un crecimiento bastante bajo en las últimas dos décadas. En parte, ello obedece a la tendencia en varios países a la expansión de los servicios de salud por parte del sector privado, en forma consistente con las reformas posteriores al ajuste estructural de los años ochenta. Pero también se debe a que es una partida altamente procíclica, con un componente significativo de gasto en inversión, que se ve fuertemente castigado en períodos de contracción económica o de crecimiento bajo. Finalmente, la partida de menor crecimiento relativo ha sido la de vivienda y otros gastos sociales (agua y saneamiento, entre otros), debido, entre otros factores, a la progresiva privatización de las inversiones en infraestructura sanitaria y externalización de la ejecución de programas de vivienda social, que han combinado tanto financiamiento público como privado (de los hogares, por medio del aumento del acceso a mecanismos hipotecarios).

Respecto del comportamiento del gasto público en función del ciclo económico, en la mayoría de los casos las oscilaciones del gasto público social y no social han estado condicionadas por la evolución de sus economías. De este modo, tanto la prociclicidad del gasto público (y una gran proporción del gasto social) como las rigideces en la asignación de partidas y la tendencia a la privatización de parte del gasto conspiran contra un avance más sostenido en las políticas sociales y en los sistemas de protección social en materia de reducción de desigualdades, perpetuando las brechas y fisuras que se plantearon en el capítulo precedente.

Aunque el manejo fiscal responsable es una pieza clave en el desarrollo económico de largo plazo, los sobreajustes que suelen registrarse en el gasto público y en el gasto social por disminuciones en el ritmo de crecimiento afectan negativamente los mismos procesos que se pretende salvaguardar mediante el manejo fiscal prudente. En términos generales, los episodios de reducción del gasto público social en la región son mayores que la caída del crecimiento: entre 1991 y 2009 se registraron 48 episodios de reducción absoluta del nivel de gasto público social en los distintos países y en un 88% de las ocasiones (42) la baja fue mayor a la registrada en el PIB (incluyendo períodos en que el PIB se mantuvo en aumento).

No obstante lo anterior, la sensibilidad del gasto social al ciclo económico es menor que la del presupuesto en su conjunto y la de los gastos públicos no sociales. Por ello, pese a su prociclicidad, el gasto social se vio menos perjudicado con las fluctuaciones económicas que el presupuesto público destinado a fines no sociales. Al respecto, el gasto público social debería tener un comportamiento asimétrico en cuanto a su contracíclicidad: más bien procíclico en las fases de prosperidad, expandiendo gastos que permitan generalizar el ejercicio de los derechos sociales —cuidando la sustentabilidad de su financiamiento en el largo plazo—, y más bien contracíclico en períodos de freno del crecimiento económico.

El gasto social en la región frente a la crisis financiera

En un intento inédito, por lo generalizado, para contrarrestar los efectos de la crisis financiera internacional, la mayoría de los países de la región tomaron medidas, la mayoría de las veces transitorias, de aumento del gasto público para enfrentar los embates de la crisis financiera global y sus posteriores consecuencias. En gran parte, estas medidas se adoptaron para aminorar los efectos de la crisis en las

economías reales, mantener activas las economías locales y regionales, contener el aumento del desempleo y, en definitiva, de la pobreza.

Entre las medidas fiscales más recurrentes, destacaron la disminución de impuestos, el aumento de subsidios y beneficios tributarios, y el aumento o anticipación del gasto. En el ámbito social y productivo, son relevantes el

incremento de los recursos destinados a la construcción de viviendas, agua y saneamiento, el fomento a las pequeñas y medianas empresas y al sector agropecuario (facilitación de créditos y plazos), así como el fortalecimiento de las políticas laborales (seguros de desempleo, subsidio a la contratación, programas de empleo) y de los programas sociales, especialmente los de transferencias condicionadas.

En cuanto a la elevación del gasto público, no todos los países tomaron medidas en esa línea durante 2009: Cuba, Jamaica, la República Dominicana, el Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de) lo redujeron,

aunque solo la República Dominicana lo hizo en forma realmente significativa (una reducción del 10,7% respecto de 2008). Cabe consignar, no obstante, que este país, junto con Cuba, había registrado una marcada expansión del gasto durante 2008, bastante superior a la caída del año siguiente. Varios de los restantes países registraron entre 2008 y 2009 un incremento de más del 10% del gasto, entre ellos, la Argentina, Chile, Colombia, El Salvador, el Paraguay y el Perú; otros, como el Brasil, el Ecuador y Honduras, lo aumentaron por sobre el 7% (véase el cuadro 3).

Cuadro 3
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (21 PAÍSES): TASAS DE VARIACIÓN ANUAL DEL PIB,
DEL GASTO PÚBLICO TOTAL, SOCIAL Y NO SOCIAL, 2009
(En porcentajes)

País	PIB	Componentes del gasto		Gasto público total
		Social	No social	
Argentina	0,9	16,8	8,5	13,7
Bolivia (Estado Plurinacional de)	3,4	2,9
Brasil	-0,6	8,3	9,7	8,7
Chile	-1,7	16,6	12,8	15,3
Colombia	1,5	16,4	16,3	16,4
Costa Rica	-1,3	14,7	-0,2	5,1
Cuba	1,4	1,5	-5,6	-1,9
Ecuador	0,4	28,5	4,5	9,8
El Salvador	-3,1	2,4	37,1	20,9
Guatemala	0,5	15,9	-7,0	4,7
Honduras	-2,1	11,6	2,7	7,0
Jamaica	-3,0	-3,7	-0,3	-1,1
México	-6,0	5,6	7,0	6,2
Nicaragua	-1,5	4,3	-0,7	2,0
Panamá	3,2	17,1	-5,6	4,8
Paraguay	-3,8	26,0	29,6	27,8
Perú	0,9	15,9	8,8	12,1
República Dominicana	3,5	-6,5	-14,0	-10,7
Trinidad y Tabago ^a	-3,5
Uruguay	2,6	10,5	-32,7	-0,1
Venezuela (República Bolivariana de)	-3,3	8,9	-8,3	-0,8

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), base de datos sobre gasto social.

^a No se dispone de información a 2009.

Sin embargo, el aumento del gasto fiscal se concentró principalmente en sectores sociales, salvo en el Brasil, El Salvador, México y el Paraguay, donde se expandió a un ritmo mayor el gasto no social. En tanto, en Cuba, el Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de) la contracción se centró en los gastos no sociales, lo que favoreció una expansión importante del gasto social. Jamaica y la República Dominicana contrajeron todos los gastos; en el primer país, fue mayor la reducción del gasto social y en el segundo, se enfatizó la contracción del gasto público no social. Por otra parte, Guatemala, Honduras, Nicaragua

y Panamá aumentaron su gasto público total aun tomando medidas de contracción del gasto social, y el resto de los países expandieron su gasto social a un ritmo menor que las restantes partidas de gasto.

Finalmente, de los diez países de los que hay información disponible en 2010 (Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Honduras, México, Paraguay, Perú y República Dominicana), solo cuatro habrían disminuido su gasto público (Chile, Colombia, Cuba y Honduras), mientras que los restantes habrían seguido expandiéndolo.

La seguridad social en la región y las perspectivas para universalizar un piso mínimo de pensiones y jubilaciones

Si bien en la mayoría de los países de la región, las contribuciones sociales que administra el sector público son insuficientes por sí solas para financiar la totalidad de beneficios jubilatorios y de pensiones a cargo del Estado, al analizar la recaudación potencial de los sistemas públicos y privados tomados en conjunto, se infiere que la mayoría de

los países de la región tendría una disponibilidad financiera superior o muy superior a los compromisos asociados al pago de pensiones y jubilaciones: con los niveles de afiliación a la seguridad social y cobertura actual de las jubilaciones y pensiones, solo cinco países generan o generarán un déficit anual hasta 2030, como se aprecia en el cuadro 4.

Cuadro 4
AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): PROYECCIÓN DE LOS SALDOS ANUALES DE INGRESOS Y GASTOS EN SEGURIDAD SOCIAL, 2012, 2015, 2020, 2025 Y 2030^a
(En porcentajes del PIB)

País	2012	2015	2020	2025	2030	Situación de largo plazo
Argentina	4,7	4,6	4,1	3,6	3,1	Baja superávit
Bolivia (Estado Plurinacional de)	1,5	1,5	1,5	1,4	1,3	Se mantiene superávit
Brasil	3,6	3,2	2,3	1,4	0,3	Baja superávit
Chile	0,4	0,2	-0,2	-0,7	-1,3	Déficit progresivo
Colombia	1,9	1,6	1,0	0,3	-0,4	Déficit progresivo
Costa Rica	0,7	0,5	0,0	-0,6	-1,3	Déficit progresivo
Ecuador	0,4	0,4	0,1	-0,1	-0,4	Déficit progresivo
El Salvador	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	Se mantiene superávit
Guatemala	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	Se mantiene superávit
Honduras	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	Se mantiene superávit
México	0,0	-0,1	-0,2	-0,4	-0,6	Déficit progresivo
Nicaragua	2,2	2,3	2,3	2,3	2,2	Se mantiene superávit
Panamá	1,2	1,0	0,7	0,4	0,0	Baja superávit
Paraguay	2,7	2,7	2,6	2,4	2,1	Baja superávit
Perú	1,0	0,9	0,8	0,6	0,4	Baja superávit
República Dominicana	0,8	0,7	0,7	0,6	0,5	Baja superávit
Uruguay	1,6	1,5	1,2	0,8	0,4	Baja superávit
Promedio	1,4	1,3	1,1	0,8	0,5	--

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países y Economist Intelligence Unit [en línea] www.eiu.org, para el PIB oficial de los países y proyecciones de crecimiento.

^a Las proyecciones se hicieron suponiendo los mismos niveles de afiliación y cobertura de la seguridad social observados en las encuestas, así como la misma tasa de participación y parámetros de contribución, con variaciones en el PIB, la cantidad de ocupados y de población adulta mayor, y con un incremento real de las remuneraciones equivalente a la mitad del crecimiento del PIB.

Dadas estas estimaciones, ¿en qué medida es posible utilizar una parte de los fondos acumulables de seguridad social para incorporar un pilar solidario no solo entre los mismos jubilados, sino también universalizando progresivamente una pensión mínima para todos los adultos mayores? Como se aprecia en el gráfico 20, el promedio del costo para un nivel universal de cobertura en 2012 es del 1,7% del PIB de dicho año, y este porcentaje bajaría al 1% del PIB en promedio al

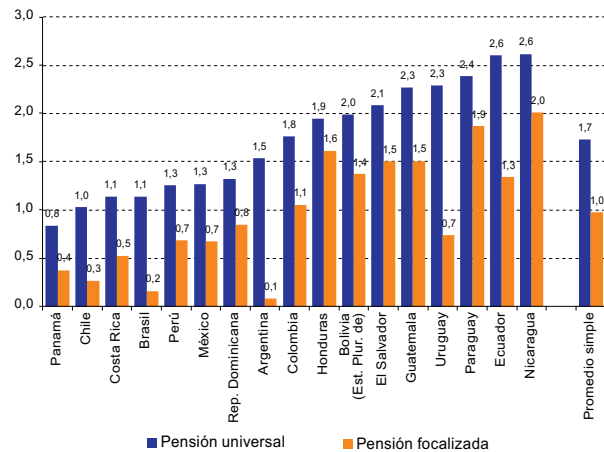
restringirlo al costo agregado de una pensión mínima de carácter focalizado, para adultos mayores en situación de vulnerabilidad.

Las diversas proyecciones y simulaciones de escenarios de financiamiento y gasto en seguridad social indican que, de acuerdo con los niveles actuales de recaudación potencial de contribuciones sociales, la gran mayoría de los países podría financiar en el corto plazo una pensión focalizada para adultos mayores en

situación de vulnerabilidad. Algunos podrían incluso universalizarla, pero esto requeriría reforzar los sistemas de seguridad social mediante el fortalecimiento del mercado de trabajo: el aumento de la participación laboral, de la formalización y de la afiliación a los sistemas de seguridad social.

Sin embargo, en el largo plazo, se requeriría necesariamente rediseñar los sistemas de seguridad social, por medio de una nueva reforma, sobre todo en los países que hicieron reformas estructurales privatizando parte o la totalidad de la seguridad social, y ampliando los recursos por otras vías mediante nuevos pactos fiscales. Esto facilitaría la introducción de pilares solidarios en los sistemas (redistribución entre jubilados, financiamiento de pensiones no contributivas, otorgamiento de pensión básica). Sin embargo, podría ser insuficiente: varios países requerirían reformas de carácter paramétrico, principalmente aumentando la carga contributiva (y, eventualmente, alterando la participación en ella de los trabajadores, los empleadores y el Estado) y evitando, en la medida de sus posibilidades, afectar negativamente el monto de los beneficios de vejez, invalidez y muerte, entre otros.

Gráfico 20
AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): COSTO DE UNA PENSIÓN
UNIVERSAL Y FOCALIZADA PARA ADULTOS MAYORES, 2012^a
(En porcentajes del PIB)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países y Economist Intelligence Unit [en línea] www.eiu.org, para el PIB oficial de los países y proyecciones de crecimiento.

^a Pensión equivalente al valor de la línea de pobreza nacional. La pensión focalizada está destinada a adultos mayores que residen en hogares con un ingreso per cápita igual o inferior a 1,8 líneas de pobreza.

La juventud en el Caribe: Núcleos de exclusión y vulnerabilidad

Perfil demográfico de la juventud en el Caribe

La población joven caribeña (de 15 a 29 años) representaba en 2010 un cuarto de la población total de la subregión, porcentaje apenas por debajo del promedio de América Latina, si bien en esta, oscila entre el 30% en el extremo superior (Belice y Haití) y alrededor del 20% en el inferior (Cuba y Puerto Rico). Las proyecciones para los próximos años indican que la proporción de población joven respecto del total disminuirá paulatinamente en la región.

Esta situación forma parte de lo que se conoce como bono demográfico (véase el capítulo I), fenómeno que ya se ha iniciado en todos los países del Caribe. En las Islas Vírgenes de los Estados Unidos ya ha concluido y se espera que solo en Guyana se extienda hasta 2050. Este bono

ofrece oportunidades únicas, que pueden aprovecharse mediante políticas que promuevan la inversión social en los sectores más jóvenes de la población para fortalecer decididamente su inclusión en las políticas de educación, salud y capacitación, entre otras.

Otro fenómeno con efectos significativos en los jóvenes y en la dinámica poblacional del Caribe es la migración. En general, si bien la emigración de jóvenes es muy alta en esta subregión, en términos relativos es menor que la de los adultos. Los datos de 2000 indican que las personas con edades comprendidas entre los 15 y los 24 años en Belice, Jamaica y Trinidad y Tabago representan casi un cuarto del total de la población migrante.

En materia de mortalidad juvenil, en el Caribe, poco más de la mitad de las muertes de jóvenes de 15 a 29 años corresponden a causas exógenas (homicidios, accidentes y suicidios). Esta subregión, junto con Centroamérica,

América del Sur y África meridional, es una de las que presenta mayores tasas de homicidios. Países como Jamaica, la República Dominicana y Trinidad y Tabago han sido especialmente afectados por este fenómeno.

Cuadro 5
EL CARIBE (PAÍSES SELECCIONADOS): EMIGRACIÓN POR GRUPOS
DE EDAD Y SEXO, 2000-2001
(En porcentajes)

Países seleccionados	Grupo etario masculino					Grupo etario femenino				
	Menos de 15 años	15-24 años	25-44 años	45-64 años	65 años y más	Menos de 15 años	15-24 años	25-44 años	45-64 años	65 años y más
Antigua y Barbuda	5	8	35	34	18	6	10	40	29	15
Bahamas	...	13	49	25	13	...	16	56	21	7
Barbados	...	4	20	38	38	...	4	21	41	34
Belize	...	22	46	24	8	...	25	49	19	7
Bermudas	...	7	41	38	14	...	7	40	38	15
Dominica	12	10	36	24	18	13	11	36	23	17
Granada	4	5	32	32	27	4	8	30	31	27
Jamaica	10	25	42	10	4	10	23	38	14	5
Montserrat	...	11	25	32	32	...	15	27	24	34
Saint Kitts y Nevis	...	8	39	33	20	...	11	38	29	22
Santa Lucía	...	13	37	29	21	...	16	39	26	19
San Vicente y las Granadinas	...	7	38	33	22	...	11	41	28	20
Islas Turcas y Caicos	...	8	42	38	12	...	12	47	29	12
Trinidad y Tabago	...	26	41	24	9	...	25	38	26	11

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de datos censales de la ronda 2000/2001, Elizabeth Thomas-Hope, "Regional special topic monography on international migration, based on the analysis of the 2000 round census data of eighteen Caribbean countries", Greater Georgetown, secretaría de la Comunidad del Caribe (CARICOM), 2009.

Juventud y pobreza: Los riesgos de la emancipación juvenil temprana

Al igual que en América Latina, la pobreza en el Caribe de habla inglesa, en general, tiene una mayor incidencia en la población infantil (menor de 15 años de edad). A modo de ejemplo, en Antigua y Barbuda el 25,4% del total de la población en extrema pobreza y el 22,6% del total de pobres tienen entre 15 y 29 años de edad. En Santa Lucía, poco más de la cuarta parte de los pobres son jóvenes (de 15 a 29 años). Este porcentaje es menor en las Islas Caimán (22%) pero no así en Granada y Trinidad y Tabago, donde una tercera parte de la población en situación de pobreza es joven (de 15 a 29 años). Para Belize, el 21% del total de pobres tiene entre 15 y 24 años de edad, pero poco más de la mitad de los beliceños de 14 a 17 años viven en condiciones de pobreza.

Desde la perspectiva del ciclo de vida, resulta muy importante considerar la correlación entre el incremento de la probabilidad de estar en situación de pobreza y la emancipación a edades tempranas de la etapa de juventud, acompañada de la adopción de la función de jefe o jefa de hogar o cónyuge. Los datos de algunos países muestran que en los primeros quintiles de ingresos la proporción de jóvenes con edades que rondan los 20 años que son jefes o jefas de hogar o cónyuges es muy superior al porcentaje de jóvenes con estas mismas edades de los quintiles superiores. Este fenómeno refuerza los hallazgos planteados en el capítulo IV, en el sentido de que la protección social presenta vacíos de cobertura en determinados segmentos de la población y del ciclo de vida en los que la vulnerabilidad es particularmente alta, y castiga a sectores de bajos ingresos.

Salud sexual y reproductiva

Se estima que cerca del 30% de los adolescentes de la subregión del Caribe de habla inglesa han tenido relaciones sexuales. En promedio, los hombres que tienen relaciones durante el período de adolescencia lo hacen a partir de la edad de 11 años y, en el caso de las mujeres, desde los 14 a 15 años. Además, cerca de la mitad de los adolescentes sexualmente activos manifiestan que su primera experiencia sexual fue forzada, y casi un tercio de los hombres y las adolescentes con sexualidad activa tienen múltiples parejas sexuales. Lo anterior plantea enormes desafíos en materia de políticas relativas a la adolescencia, tanto de información oportuna como de prevención de la violencia sexual y atención a las víctimas.

En cuanto a la maternidad adolescente, las dinámicas de América Latina y el Caribe se caracterizan por la resistencia a la baja, en contraste con las tasas de fecundidad para el conjunto de la población, como se planteó en el capítulo II. Sin embargo, la tasa de fecundidad en el Caribe de mujeres adolescentes (cociente entre el número de nacimientos y el número total de mujeres de ese grupo de edad) es notoriamente más baja que en América Latina: 17 de los 19 países de América Latina y el Caribe con tasas por debajo de 61 nacimientos por cada 1.000 habitantes entre mujeres de 15 a 19 años pertenecen a la subregión del Caribe y solo Belice, Guyana y San Vicente y las Granadinas están cerca del promedio latinoamericano.

El VIH/SIDA es un tema de máxima importancia para los países del Caribe, dada su alta incidencia. La prevalencia de VIH entre personas jóvenes y adultas (de 15 a 49 años)—equivalente al 1% de la población total— es la segunda mayor del mundo, solo por detrás del África subsahariana. La prevalencia en Cuba (0,1%) contrasta con

las de otros países que superan el 1%, como las Bahamas (3,1%), Barbados (1,4%), Belice (2,3%), Haití (1,9%), Jamaica (1,7%) y Trinidad y Tabago (1,5%). Si bien en el último decenio se han registrado leves descensos en el número de casos nuevos de personas infectadas con VIH en esta subregión, se calcula que entre 220.000 y 270.000 personas portan el virus, de las cuales aproximadamente el 53% son mujeres. Por ejemplo, en Trinidad y Tabago las mujeres constituyen el 75% de los nuevos casos ocurridos entre personas de 15 a 24 años, y en Jamaica la relación de mujeres infectadas para ese mismo grupo etario en relación con los hombres es de 3 a 1.

Para la población joven del Caribe, el VIH tiene particular relevancia. Aproximadamente el 83% de los casos de VIH son diagnosticados en personas con edades comprendidas entre los 15 y 54 años, y una tercera parte de los casos nuevos se da en personas de entre 25 y 34 años de edad. Si se considera un período de incubación de la enfermedad de ocho años, se infiere que cerca de un tercio de los casos nuevos de personas infectadas tienen entre 15 y 24 años de edad. En cuanto al uso del preservativo, estudios recientes indican que, aun cuando un 90% de los adolescentes de la subregión caribeña de habla inglesa con sexualidad activa dice haber usado preservativo, solo entre el 16% y el 25% manifiesta utilizarlo de forma recurrente. Circunscribiendo el grupo de análisis a las mujeres de entre 15 y 24 años de edad de países como Belice, Guyana, la República Dominicana y Trinidad y Tabago, se obtiene que cerca del 50% usaron preservativo en su última relación sexual, porcentaje relativamente alto en comparación con algunos países latinoamericanos, pero muy bajos al considerar el mayor riesgo de contagio del VIH/SIDA.

Desempleo juvenil

A inicios de la década pasada, los jóvenes (varones y mujeres) de 15 a 24 años de edad conformaban entre el 40% y el 60% del contingente desempleado en los países del Caribe, a pesar de representar entre el 20% y el 30% de la fuerza de trabajo. Del mismo modo, las tasas de

desempleo de los jóvenes (de 15 a 24 años) en algunos países de la subregión duplicaban o cuadruplicaban las registradas en la población adulta. Datos recientes indican que este escenario no ha sufrido variaciones significativas.

Cuadro 6
EL CARIBE (8 PAÍSES): JÓVENES DE 15 A 24 AÑOS DESEMPLEADOS
(En porcentajes del total de personas desempleadas)

País	Año	Porcentaje
Bahamas	2008	33,2
Barbados	2003	33,7
Islas Caimán	2008	26,9
Guadalupe	2006	16,4
Jamaica	2008	37,2
Martinica	2008	19,0
Santa Lucía	2004	40,0
Trinidad y Tabago	2008	42,0

Fuente: Organización Internacional del Trabajo (OIT), base de datos LABORSTA, 2011.

La incapacidad de crear las condiciones para la inserción de los jóvenes en trabajos dignos disminuye sus oportunidades, limita su desarrollo presente y futuro y exacerba en varios casos los niveles de desigualdad y pobreza. Por ejemplo, en Antigua y Barbuda, el 80% de los varones desempleados con edades entre 25 y 29 años viven en condiciones precarias, con menos de 2,51 dólares al día (a nivel general, el 30,6% del total de la población desempleada en ese país vive con un monto menor).

Institucionalidad política de cara a la juventud

La institucionalidad y las políticas públicas de juventud han tenido un fortalecimiento en las últimas dos décadas. Algunos países del Caribe cuentan con departamentos encargados de establecer vínculos con organismos gubernamentales y de la sociedad civil encargados de temas relativos a la juventud. Existen algunos ministerios que, si bien sus funciones no contemplan exclusivamente los asuntos relacionados con los jóvenes, consideran estos temas como parte de sus objetivos primarios. En algunos gobiernos caribeños, los asuntos de los jóvenes y la oferta institucional en

la materia son transversales al área de jurisdicción de varias dependencias y se rigen por planes de acción que articulan en una política pública de juventud las distintas acciones del gobierno y también, en algunos casos, las privadas. Sin embargo, en general, al igual que en América Latina, falta avanzar en enfoques integrales que puedan trascender las lógicas sectoriales en virtud de la naturaleza misma del actor joven, en quien se combinan dimensiones de riesgos, capacidades, oportunidades, sistemas de pertenencia y formas de participación.

Capítulo I

Pobreza, desigualdad y percepciones sobre el mundo del trabajo en América Latina

A. Pobreza

En 2010 disminuyeron la pobreza y la indigencia en la región, en consonancia con la recuperación del crecimiento económico. De esta manera, ambos indicadores se sitúan en su nivel más bajo de los últimos 20 años. Si bien la caída de la pobreza se debe principalmente al crecimiento del ingreso medio de los hogares, también es cierto que la reducción de la desigualdad ha tenido un papel cada vez más importante en esta evolución.

1. Contexto económico

En 2010, el PIB per cápita de América Latina y el Caribe aumentó un 4,9%, como resultado de la combinación de altas tasas de crecimiento en algunos países con caídas del producto en otros. Los mayores incrementos se registraron en el Paraguay (13,1%), la Argentina y el

Uruguay (8,1%), seguidos por el Perú (7,5%), el Brasil (6,8%) y la República Dominicana (6,3%). Por su parte, Haití y Venezuela (República Bolivariana de) registraron disminuciones del producto por habitante de un 6,6% y un 3,0%, respectivamente (véase el cuadro I.1).

Cuadro I.1
AMÉRICA LATINA (20 PAÍSES): EVOLUCIÓN DE ALGUNOS INDICADORES SOCIOECONÓMICOS, 2000-2010
(En porcentajes)

País/Año	PIB per cápita	Desempleo	Salario medio real ^c	Índice de precios al consumidor ^d	País/Año	PIB per cápita	Desempleo	Salario medio real ^c	Índice de precios al consumidor ^d
	<i>(tasa media anual de variación)^a</i>	<i>(promedio simple del período)^b</i>	<i>(tasa media anual de variación)</i>			<i>(tasa media anual de variación)^a</i>	<i>(promedio simple del período)^b</i>	<i>(tasa media anual de variación)</i>	
Argentina					Haití				
2000-2008	2,6	13,5	3,7	9,6	2000-2008	-1,1	17,2
2009	-0,2	8,7	11,7	7,7	2009	1,2	2,1
2010	8,1	7,7	12,9	10,9	2010	-6,6	6,2
Bolivia (Estado Plurinacional de)					Honduras				
2000-2008	1,7	7,8	-1,2	5,4	2000-2008	3,0	8,4
2009	1,6	7,9	3,8	0,3	2009	-4,1	4,9	...	3,0
2010	2,4	6,5	...	7,2	2010	0,8	6,4	...	6,5
Brasil					México				
2000-2008	2,4	9,5	-1,1	6,9	2000-2008	1,6	4,4	2,3	5,1
2009	-1,1	8,1	1,3	4,3	2009	-7,2	6,6	0,6	3,6
2010	6,8	6,7	2,1	5,9	2010	4,8	6,4	...	4,4
Chile					Nicaragua				
2000-2008	3,1	9,0	1,6	3,8	2000-2008	2,0	8,8	0,0	9,2
2009	-2,6	9,7	4,8	-1,4	2009	-2,7	10,5	5,8	1,8
2010	4,2	8,2	2,3	3,0	2010	3,2	9,7	1,3	9,1
Colombia					Panamá				
2000-2008	2,6	15,2	1,2	6,5	2000-2008	4,2	12,8	-1,5	2,7
2009	0,0	13,0	1,1	2,0	2009	2,2	7,9	2,7	1,9
2010	2,9	12,4	2,5	3,2	2010	5,9	7,7	1,9	4,9
Costa Rica					Paraguay				
2000-2008	2,7	6,0	0,3	11,3	2000-2008	0,9	9,8	0,2	8,8
2009	-2,6	8,5	7,7	4,0	2009	-5,5	8,2	4,5	1,9
2010	2,8	7,1	2,1	5,8	2010	13,1	7,8	0,7	7,2
Cuba					Perú				
2000-2008	5,9	2,7	5,0	2,8	2000-2008	4,2	9,0	0,7	2,7
2009	1,4	1,7	4,6	-0,1	2009	-0,3	8,4	3,1	0,2
2010	2,1	2,5	3,0	1,5	2010	7,5	7,9	2,6	2,1
Ecuador					República Dominicana				
2000-2008	3,7	8,7	...	16,5	2000-2008	3,7	16,1	...	13,5
2009	-0,7	8,5	...	4,3	2009	2,1	14,9	...	5,7
2010	2,5	7,6	...	3,3	2010	6,3	14,3	...	6,3
El Salvador					Uruguay				
2000-2008	2,1	6,3	...	4,0	2000-2008	2,4	13,0	-1,0	9,0
2009	-3,6	7,1	3,5	-0,2	2009	2,2	7,6	7,3	5,9
2010	0,9	...	1,0	2,1	2010	8,1	7,1	3,3	6,9
Guatemala					Venezuela (República Bolivariana de)				
2000-2008	1,2	5,0	-0,9	7,5	2000-2008	2,6	12,7	-1,8	21,0
2009	-1,9	...	0,1	-0,3	2009	-4,8	7,8	-6,6	26,9
2010	0,3	...	2,8	5,4	2010	-3,0	8,6	-5,2	27,4
América Latina									
2000-2008	2,3	9,5	...	8,6					
2009	-3,1	8,1	...	3,7					
2010	4,9	7,3	...	6,5					

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.

^a A partir del valor del PIB per cápita en dólares, a precios constantes de 2005.

^b En el período 2000-2008, de Guatemala solo se dispuso de datos para el trienio 2002-2004. Para Honduras, sobre el período 2000-2008 constan datos a partir de 2001. Los datos de desempleo del Perú corresponden a los de la ciudad de Lima.

^c Por lo general, la cobertura de este índice es muy parcial. En la mayoría de los países se refiere solo a los trabajadores formales del sector industrial.

^d Variaciones interanuales tomando diciembre como mes de referencia. El agregado regional corresponde al promedio simple de las variaciones.

El crecimiento del PIB se vio impulsado por la demanda interna, a través del aumento del consumo privado y la inversión, y la externa, que se manifestó con un significativo crecimiento de las exportaciones en varios países de la región (CEPAL, 2011a).

Por su parte, el panorama del empleo mostró una recuperación respecto a 2009. La tasa de ocupación (el cociente entre el número de ocupados y la población en edad de trabajar) aumentó 0,6 puntos porcentuales, situándose en un 54,9%, aunque no todos los países

siguieron esa tendencia. Mientras en América del Sur este indicador aumentó 0,4 puntos porcentuales, en México y Centroamérica se contrajeron 0,2 puntos porcentuales. Asimismo, durante 2010 se registró un incremento de la tasa de participación (cociente entre la población económicamente activa y la población en edad de trabajar) de 0,3 puntos porcentuales. De esta manera, se revirtió la tendencia a la baja de ambas variables que se venía observando desde mediados de 2008 (CEPAL, 2011a).

La tasa de desempleo urbano se redujo del 8,1% al 7,3%, situándose no solo por debajo del promedio 2000-2008, sino de los valores anuales de los últimos dos decenios. El desempleo disminuyó en torno a 1,4 puntos porcentuales en Bolivia (Estado Plurinacional de), el Brasil, Chile y Costa Rica, mientras que aumentó 0,8 puntos porcentuales o más en Cuba, Honduras y Venezuela (República Bolivariana de).

Los salarios medios tuvieron un crecimiento positivo en términos reales en 13 de los 14 países sobre los que había información disponible a 2010, con la única excepción de Venezuela (República Bolivariana de). No obstante, en nueve de ellos el incremento fue inferior al que se había observado en 2009.

El año 2010 se caracterizó por un aumento de las tasas de inflación en todos los países de la región. El promedio simple de las variaciones se situó en un 6,5%, 2,8 puntos porcentuales más que en 2009. En Venezuela (República Bolivariana de) se registró la tasa más elevada (27,4%), seguida de la Argentina (10,9%). Si bien en ningún otro caso la inflación no alcanzó los dos dígitos, el número de países con tasas de inflación inferiores al 5% se redujo de 16 a 8 entre 2009 y 2010. El aumento de la inflación estuvo impulsado principalmente por alzas de los precios de alimentos y bebidas, que en promedio fue 1,8 veces mayor que las del resto de productos, situación que es particularmente relevante para la medición de la indigencia, descrita más adelante.

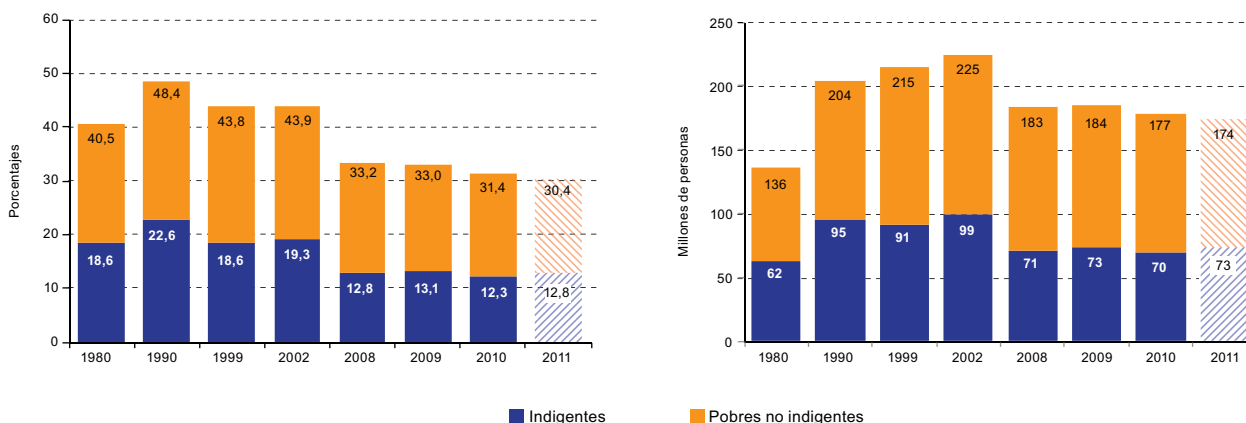
Para 2011 se proyecta que el PIB regional crezca a una tasa del 4,7%, lo que se traduciría en un aumento del 3,6% en el PIB por habitante. Continúa así el proceso de recuperación que la región ha venido experimentando desde mediados de 2009, aunque con una desaceleración del crecimiento con respecto a 2010. Asimismo, se prevé que se reduzca aún más la tasa de desempleo y que se mantenga la tendencia al alza de la inflación.

2. Evolución reciente de la pobreza

En 2010, el índice de pobreza de la región se situó en un 31,4%, lo que incluye a un 12,3% de personas en condiciones de pobreza extrema o indigencia. En términos

absolutos, estas cifras equivalen a 177 millones de personas pobres, de las cuales 70 millones eran indigentes (véase el gráfico I.1).

Gráfico I.1
AMÉRICA LATINA: EVOLUCIÓN DE LA POBREZA Y DE LA INDIGENCIA, 1980-2011^a
(En porcentajes y millones de personas)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

^a Estimación correspondiente a 18 países de la región más Haití. Las cifras que aparecen sobre las secciones superiores de las barras representan el porcentaje y el número total de personas pobres (indigentes más pobres no indigentes). Las cifras sobre 2011 corresponden a una proyección.

Recuadro I.1
MÉTODO UTILIZADO PARA LA MEDICIÓN DE LA POBREZA

El enfoque utilizado en este informe para estimar la pobreza consiste en clasificar a una persona como "pobre" cuando el ingreso por habitante de su hogar es inferior al valor de la "línea de pobreza", o monto mínimo necesario que le permitiría satisfacer sus necesidades esenciales. Las líneas de pobreza, expresadas en la moneda de cada país, se determinan a partir del valor de una canasta de bienes y servicios, empleando el método del "costo de las necesidades básicas".

En todos los casos en que se dispuso de los antecedentes necesarios, se estimó el costo de la canasta básica de alimentos correspondiente a cada país y zona geográfica; esa canasta abarca los bienes que se precisarían para cubrir las necesidades nutricionales de la población, tomando en consideración los hábitos de consumo, la disponibilidad efectiva de alimentos y los precios relativos de estos, así como las diferencias de precios entre áreas metropolitanas, otras zonas urbanas y zonas rurales.

A este valor, la "línea de indigencia", se agregó el monto requerido por los hogares para satisfacer las necesidades básicas no alimentarias, a fin de calcular el valor total de la línea de pobreza. Para ello, se multiplicó la

línea de indigencia por un factor constante: 2 para las zonas urbanas y 1,75 para las rurales^a.

En la mayoría de los casos, la información sobre la estructura del consumo de los hogares, tanto de alimentos como de otros bienes y servicios, proviene de las encuestas de presupuestos familiares que se llevan a cabo en los países^b. Dado que estas encuestas se realizaron en años anteriores a los de las estimaciones de pobreza, se ha actualizado el valor de las líneas de indigencia y pobreza de acuerdo con la variación acumulada del índice de precios al consumidor (IPC). Hasta diciembre de 2006, se aplicó la misma variación a ambas líneas. No obstante, a partir de 2007, la línea de indigencia se actualiza mediante la variación del IPC para alimentos, mientras que la parte de la línea de pobreza que corresponde al gasto en bienes no alimentarios se actualiza mediante la variación del IPC correspondiente. Por lo tanto, de 2007 en adelante, la diferencia entre las líneas de indigencia y de pobreza ya no es constante.

La información sobre el ingreso de las familias proviene de las encuestas de hogares realizadas en los respectivos países en los años correspondientes a las

estimaciones de pobreza presentadas en esta edición. Como es habitual en la práctica de la CEPAL, se aplicaron correcciones a los datos debido a la falta de respuesta a algunas preguntas sobre los ingresos por parte de los asalariados, los trabajadores independientes y los jubilados, así como para atenuar los probables sesgos por subdeclaración. Esta última operación se llevó a cabo mediante la comparación de las partidas de ingreso de la encuesta con las resultantes de una estimación de la cuenta de ingresos y gastos de los hogares del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN), elaborada para este propósito a partir de información oficial.

Las cifras sobre ingreso utilizadas corresponden al concepto de ingreso corriente total, es decir, al ingreso por concepto del trabajo asalariado, monetario y en especie; del trabajo independiente (incluidos el autosuministro y el valor del consumo de productos generados por el hogar), y de las rentas de la propiedad, las jubilaciones y pensiones y otras transferencias recibidas por los hogares. En la mayoría de los países, el ingreso de los hogares incluye, además, un valor imputado por concepto de arriendo de las viviendas habitadas por sus propietarios.

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

^a Las únicas excepciones a este criterio general son las del Brasil y el Perú. En el Brasil se utilizaron las líneas de indigencia estimadas para cada zona del país, en el marco de un trabajo realizado conjuntamente a fines de los años noventa por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), el Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA) y la CEPAL. En el Perú, en tanto, se emplearon las líneas de indigencia y de pobreza estimadas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el marco del Programa para el mejoramiento de las encuestas y la medición de las condiciones de vida en América Latina y el Caribe implementado en ese país.

^b Cuando no se disponía de datos derivados del procesamiento de una encuesta reciente de este tipo, se utilizaron otros antecedentes pertinentes sobre consumo familiar.

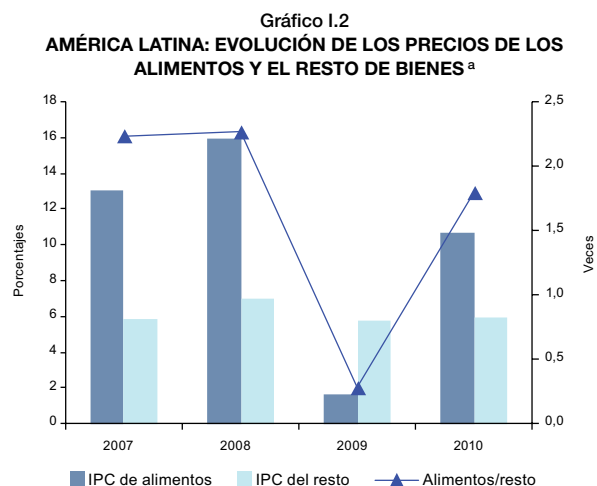
Las cifras indican que, tras la crisis de 2009, la recuperación económica se ha reflejado (al menos en parte) en los indicadores de pobreza. Efectivamente, con respecto al año 2009 la tasa de pobreza se redujo 1,6 puntos porcentuales, y la de indigencia 0,8 puntos porcentuales. Esto se traduce en siete millones menos de personas en situación de pobreza, y tres millones menos en situación de indigencia.

El balance respecto a finales de los años noventa continúa siendo favorable. La reducción de la pobreza acumulada desde 1999 alcanza 12,4 puntos porcentuales, a la vez que la indigencia se ha reducido 6,3 puntos porcentuales. Asimismo, la reducción de ambos indicadores con respecto a 1990 totaliza 17,0 y 10,3 puntos porcentuales, respectivamente.

A partir de las proyecciones de crecimiento del PIB y de las previsiones de la evolución de la inflación en cada país, cabe esperar que en el año 2011 la tasa de pobreza se reduzca levemente y se sitúe en el 30,4%, alrededor de un punto porcentual por debajo de la tasa de 2010. En cambio, la tasa de indigencia podría aumentar, ya que el alza del precio de los alimentos contrarrestaría el incremento previsto en los ingresos de los hogares (véase el gráfico I.1).

Las diferencias en la dinámica de la pobreza y la indigencia provienen, en parte, de la forma en que varían los precios de los alimentos en comparación con el resto de bienes y servicios. Ello se debe a que las líneas de indigencia, que muestran el costo de adquirir una canasta básica de alimentos, se actualizan año a año según la variación del IPC de los alimentos, mientras que el componente no alimentario de la línea de pobreza se actualiza según la variación del IPC correspondiente¹. De manera similar a lo ocurrido entre mediados de 2006 y mediados de 2008, los precios de los alimentos subieron en 2010 más que los del resto de bienes. No obstante, las diferencias en ese caso fueron un poco menos pronunciadas. Mientras que en 2007 y 2008 los precios de los alimentos se incrementaron 2,3 veces más que los de los bienes no alimentarios, en 2010 se incrementaron 1,8 veces más (considerando el promedio simple de los índices de precios de cada país) (véase el gráfico I.2).

¹ Esta forma de actualizar las líneas de indigencia y de pobreza se aplica desde 2007. Anteriormente ambas líneas se actualizaban mediante un mismo deflactor de precios, por lo que la relación entre ellas se mantenía constante en el tiempo.



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.
^a Promedio simple de los índices de precios de 18 países de la región. Variaciones interanuales tomando diciembre como mes de referencia.

Los resultados descritos implican un progreso adicional hacia la consecución de la primera meta del Milenio, consistente en reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas en situación de pobreza extrema. América Latina tiene un porcentaje de avance del 91%, resultado de dividir la reducción acumulada de indigencia entre 1990 y 2010 (10,2 puntos porcentuales) entre la reducción total esperada (11,3 puntos porcentuales). Dicho porcentaje es mayor que el del tiempo transcurrido para el cumplimiento de la meta, equivalente a un 80%.

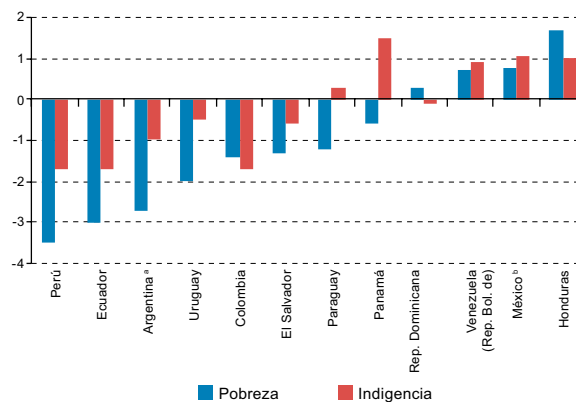
A 2010, la información disponible sobre 12 países de la región revela variaciones de la pobreza de distinto signo y magnitud con respecto al año previo². Cinco países registraron disminuciones significativas en sus tasas de pobreza: el Perú (-3,5 puntos), el Ecuador (-3,0 puntos), la Argentina (-2,7 puntos), Uruguay (-2,0 puntos) y Colombia (-1,4 puntos). En estos países la variación de las tasas de indigencia también tuvo signo negativo, con descensos de entre 0,5 y 1,7 puntos porcentuales.

Por otra parte, Honduras y México fueron los únicos países con incrementos significativos en sus tasas de pobreza y de indigencia, de 1,7 y 1,0 puntos porcentuales en el primer país y de 1,5 y 2,1 puntos porcentuales en el segundo. Debe tenerse presente que, en el caso de México, la comparación se realiza con respecto a la medición de 2008. Por tanto, no se refleja solamente la

² Se dispone además de datos sobre Costa Rica. No obstante, estos provienen de una nueva encuesta de hogares y no son estrictamente comparables con los anteriores (véase el recuadro I.2).

apreciable expansión de la economía mexicana en 2010, sino también la fuerte contracción del PIB per cápita observada en 2009 (-7,2%). A su vez, Panamá registró un incremento de la tasa de indigencia de 1,5 puntos porcentuales, mientras que en los demás países de los que hay información disponible (El Salvador, el Paraguay y la República Dominicana) no se registraron variaciones significativas de las tasas de pobreza e indigencia (véase el gráfico I.3).

Gráfico I.3
AMÉRICA LATINA (12 PAÍSES): VARIACIÓN ANUAL DE LAS TASAS DE POBREZA E INDIGENCIA, 2009-2010
(En puntos porcentuales)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.
^a Área urbana.
^b Corresponde a la variación anual entre 2008 y 2010.

Los índices de brecha de pobreza y brecha al cuadrado corroboran en la mayoría de casos las tendencias descritas sobre la base de las tasas de pobreza e indigencia, y la magnitud de sus variaciones es similar. El caso de Panamá destaca como una excepción, ya que, pese a la ausencia de cambios significativos en la tasa de pobreza, se registra un apreciable incremento del índice de brecha al cuadrado, lo que revela un agravamiento de la situación entre los más pobres. En México, el índice de brecha al cuadrado también aumentó algo más que la tasa de pobreza. A su vez, la brecha de pobreza y la brecha al cuadrado se redujeron más que la tasa de pobreza en los países donde este último indicador tuvo una caída ostensible. Cabe recordar que en el índice de brecha de pobreza no solo se contempla el porcentaje de personas pobres, sino también la brecha entre el ingreso medio de los pobres y la línea de pobreza, mientras que en la brecha de pobreza al cuadrado se toma además en consideración la forma en que dichos ingresos se distribuyen entre los pobres (véanse el recuadro I.3 y el cuadro I.A1 del anexo del capítulo I).

Recuadro I.2
CAMBIOS RECIENTES EN LAS SERIES DE ENCUESTAS DE HOGARES

Con el fin de mejorar los instrumentos disponibles para el diseño y monitoreo de las políticas públicas, cada cierto tiempo los institutos de estadística llevan a cabo modificaciones en las encuestas de hogares que implementan. Si bien los cambios introducidos representan generalmente un avance, la comparabilidad temporal de las series puede verse afectada. En años recientes, al menos tres países han efectuado modificaciones en sus encuestas.

En la Argentina, a partir de 2009, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) introdujo algunas modificaciones en el tratamiento de la información de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), para la serie que se inicia en 2003 (año en que la encuesta pasó de ser semestral a continua). Entre esos cambios se encuentran la calibración de factores de expansión, el método de corrección de la falta de respuesta a las preguntas sobre ingreso y la construcción de los agregados de ingreso para partidas de periodicidad no mensual.

La nueva serie de datos 2004-2010, en que se consideran dichos ajustes, se incluye en esta edición junto los datos hasta 2002, aun cuando ambas series no son estrictamente comparables.

En Colombia, a partir de julio de 2006, la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) reemplazó a la Encuesta Continua de Hogares (ECH) como fuente de información sobre las condiciones de vida de los hogares. Las modificaciones introducidas, como la ampliación de dominios de estudio, el cambio en el tipo de informante o el aumento de la cantidad de preguntas y la modificación de su redacción hicieron necesario empalmar las cifras sobre empleo, ingresos y pobreza de ambas fuentes, tarea que estuvo a cargo de la Misión para el empalme de las series de empleo, pobreza y desigualdad (MESEP). Asimismo, la MESEP revisó los criterios para la medición de la pobreza, lo que dio lugar a una nueva serie 2002-2010^a. Si bien las cifras de esta edición del Panorama social incorporan las modificaciones realizadas para

el empalme, se refieren a la estimación antigua de pobreza y no a la reciente actualización.

En Costa Rica, el Instituto Nacional de Estadística y Censos está implementando desde 2010 la Encuesta Nacional de Hogares (ENAH), en reemplazo de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM). Los cambios metodológicos introducidos impiden la comparación directa de los resultados de la nueva ENAH 2010 con los publicados a partir de la encuesta anterior. El país espera producir próximamente una serie histórica empalmada. Por tanto, las cifras acerca de Costa Rica relativas al año 2010 no son comparables con la serie hasta 2009.

En el Paraguay, la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC) reajustó los factores de expansión de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) para los años 2003 a 2008, como forma de atenuar la tasa de ausencia de respuesta observada en dicho período. Los datos incluidos en esta edición incorporan esos reajustes.

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

^a Véase [en línea] <http://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=DXInD1TENeU%3d&tabid=337>.

Recuadro I.3
INDICADORES PARA LA MEDICIÓN DE LA POBREZA

Las medidas de pobreza utilizadas en este documento corresponden a la familia de índices paramétricos propuestos por Foster, Greer y Thorbecke (1984) que se obtienen a partir de la siguiente expresión:

$$1) \quad FGT_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left(\frac{z - y_i}{z} \right)^{\alpha}$$

donde n representa el tamaño de la población, q equivale al número de personas con ingresos inferiores a la línea de pobreza o indigencia (z) y el parámetro $\alpha > 0$ asigna diferentes grados de relevancia a la distancia

entre los ingresos (y) de cada individuo pobre o indigente y la línea de pobreza o indigencia.

Cuando α toma el valor cero, la expresión 1) corresponde al índice de recuento (H), que indica el porcentaje de personas con ingresos inferiores a la línea de pobreza o indigencia:

$$2) \quad H = \frac{q}{n}$$

Cuando α es igual a uno se obtiene el indicador de brecha de pobreza (PG) (o de indigencia), que pondera el porcentaje de personas pobres (o indigentes) por el

déficit relativo sus ingresos con respecto al valor de la línea de pobreza (o indigencia):

$$3) \quad PG = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]$$

Por último, cuando α toma el valor dos se asigna un mayor peso relativo en el resultado final a quienes están más lejos de superar la pobreza (o indigencia), elevando al cuadrado el déficit relativo de ingresos:

$$4) \quad FGT_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left(\frac{z - y_i}{z} \right)^2$$

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de James Foster, Joel Greer y Erik Thorbecke, "A class of decomposable poverty measures", *Econometrica*, vol. 52, Nº 3, 1984.

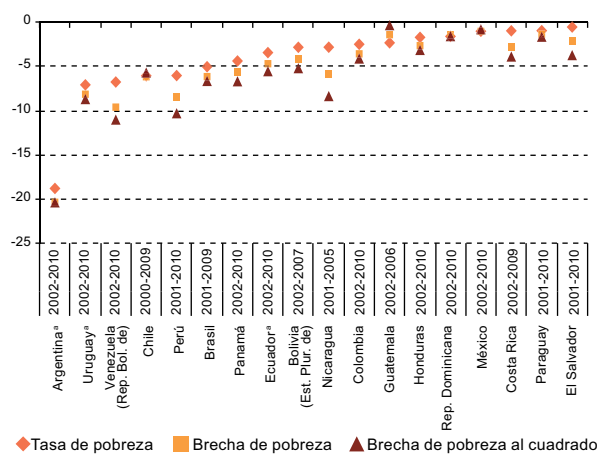
Los cambios en la tasa de pobreza regional provienen de las variaciones observadas en los países y descritas anteriormente, así como de las proyecciones

que se efectúan para los países de los que no hay datos disponibles. En esta ocasión, el agregado regional resulta particularmente sensible a las proyecciones, debido a que

estas tuvieron que aplicarse a los dos países de mayor población en la región (al Brasil en 2010 y a México en 2009). En efecto, casi la mitad de la reducción de la pobreza regional proviene de la caída esperada de la pobreza en el Brasil³. Por otra parte, alrededor de la tercera parte de la reducción de la pobreza regional entre 2009 y 2010 proviene de México, ya que, según la proyección utilizada para construir el agregado regional en 2009, la pobreza en el país se situó ese año alrededor de dos puntos porcentuales por encima de la cifra observada en 2010.

La evolución de la pobreza en un período más amplio, entre 2002 y la estimación más reciente disponible, muestra una tendencia generalizada a la reducción de la pobreza en los países de la región. De acuerdo con los índices de brecha de pobreza y brecha al cuadrado, la salida neta de personas de la pobreza y la indigencia que se produjo en ese período fue acompañada por un incremento en el promedio de ingresos de los pobres y una menor disparidad distributiva de estos (véase el gráfico I.4).

Gráfico I.4
AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): VARIACIÓN ANUAL DE
LOS INDICADORES DE POBREZA, 2002-2010
(En porcentajes)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.
* Áreas urbanas.

3. Factores detrás de los cambios en la pobreza

Se emplean dos aproximaciones metodológicas distintas para analizar los cambios ocurridos en la pobreza. En el primer caso se desagrega la variación de las tasas de pobreza e indigencia en dos componentes: el crecimiento del ingreso medio de las personas (“efecto crecimiento”) y los cambios en la forma en que se distribuye este ingreso (“efecto distribución”). En el segundo caso se evalúa el papel de las distintas fuentes que componen el ingreso de los hogares y se presta especial atención a los factores del mercado laboral que explican la variación de los ingresos del trabajo. En ambos casos se realiza una comparación entre el período 2002-2008, previo a la crisis económica, y el período 2002-2010, que incluye la crisis⁴.

Como se ha señalado en anteriores ediciones del Panorama social, la reducción de la pobreza ha sido

posible gracias a la complementariedad de los efectos crecimiento y distribución. Durante el período 2002-2010, nueve países redujeron la pobreza principalmente a partir del crecimiento de los ingresos medios, mientras que en seis predominó el efecto distributivo. En la Argentina, Colombia, el Ecuador, Honduras y la República Dominicana tuvo especial importancia el efecto crecimiento, ya que fue responsable de al menos un 80% de la caída de la pobreza. En cambio, el efecto distribución no suele tener tanto peso. Aun cuando sea el factor predominante, su contribución al descenso de la pobreza suele ser inferior al 60%. Si bien en El Salvador y México excedió el 100%, ambos son países en que la variación total de la tasa de pobreza fue muy leve (véase el cuadro I.2).

En la comparación de los períodos 2002-2008 y 2002-2010 se muestra un aumento del protagonismo de los cambios distributivos en la reducción de la pobreza en varios países. Tanto en el Brasil como en Venezuela (República Bolivariana de) el efecto distribución pasó a ser mayor que el efecto crecimiento, al aumentar su participación del 45% al 55%, y en otros tres países se incrementó significativamente.

³ En el Brasil no se realizó la Encuesta nacional de hogares (PNAD) en 2010, por ser año censal. Para la proyección de pobreza de ese año se utiliza, además del PIB per cápita y los índices de precios, la evidencia proveniente de la Encuesta mensual sobre el empleo de 2010.

⁴ El uso de períodos largos permite que las variaciones de la tasa de pobreza sean de magnitud suficiente para efectuar los análisis de descomposición descriptos.

Cuadro I.2
**AMÉRICA LATINA (15 PAÍSES): CAMBIOS EN LA POBREZA Y CONTRIBUCIÓN DE LOS EFECTOS CRECIMIENTO
 Y DISTRIBUCIÓN, 2002-2008 Y 2002-2010**
 (En porcentajes)

	2002-2008 ^a			2002-2010 ^b		
	Variación de la pobreza (puntos porcentuales)	Porcentaje de contribución a la variación total		Variación de la pobreza (puntos porcentuales)	Porcentaje de contribución a la variación total	
		CreCIMIENTO	DISTRIBUCIÓN		CreCIMIENTO	DISTRIBUCIÓN
Argentina ^c	-20,6	81	19	-36,8	80	20
Brasil	-11,7	56	44	-12,7	46	54
Chile	-6,5	33	67	-8,7	44	56
Colombia	-8,0	87	13	-9,9	83	17
Costa Rica	-3,8	23	77	-1,3
Ecuador ^c	-10,1	75	25	-11,9	78	22
El Salvador	-1,4	<0	>100	-2,3	<0	>100
Honduras	-8,4	71	29	-9,9	86	14
México	-4,6	90	10	-3,1	<0	>100
Panamá	-9,2	48	52	-11,1	46	54
Paraguay	-2,8	73	27	-4,9	66	34
Perú	-18,6	74	26	-23,4	73	27
República Dominicana	-2,8	>100	<0	-5,7	>100	<0
Uruguay ^c	-1,4	76	24	-6,8	56	44
Venezuela (República Bolivariana de)	-21,0	56	44	-20,8	45	55

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

^a Corresponde a los períodos 2002-2006 en la Argentina, 2001-2008 en el Brasil, el Paraguay y el Perú, 2000-2006 en Chile, 2001-2004 en El Salvador y 2002-2007 en Honduras.

^b Corresponde a los períodos 2001-2009 en el Brasil, 2000-2009 en Chile, 2002-2009 en Costa Rica y 2001-2010 en El Salvador, el Paraguay y el Perú.

^c Áreas urbanas.

Los resultados descritos implican que después de la crisis económica, cuyos mayores efectos se manifestaron en 2009, la pobreza no solamente se ha reducido más, sino que lo ha hecho de la mano de una mayor redistribución. Si bien las variaciones observadas son de pequeña magnitud, indican que los países cuentan con la posibilidad de hacer frente a los escenarios económicos complejos cuidando las condiciones de vida de la población menos favorecida.

Tanto en el período 2002-2008, previo a la crisis, como en el período 2008-2010, la reducción de la

pobreza ha provenido en su mayor parte de un incremento de los ingresos laborales. También han contribuido las otras fuentes de ingreso, particularmente las transferencias, pero en menor grado. No obstante, en el segundo período las transferencias han jugado un papel mucho más relevante. De hecho, constituyeron la principal fuente de reducción de la pobreza en Chile y Panamá y tuvieron una importante participación en la Argentina, Colombia y la República Dominicana (véase el gráfico I.5).

Gráfico I.5
**AMÉRICA LATINA (15 PAÍSES): VARIACIÓN ANUAL DEL INGRESO TOTAL POR PERSONA Y DE CADA FUENTE
 EN LOS HOGARES POBRES^a, 2002-2008 Y 2008-2010**
 (En porcentajes)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

^a El porcentaje de población analizado es el mismo en ambos períodos y corresponde a la tasa de pobreza de 2002.

^b Corresponde a los períodos 2002-2006 en la Argentina, 2001-2008 en el Brasil, el Paraguay y el Perú, 2000-2006 en Chile, 2001-2004 en El Salvador y 2002-2007 en Honduras. En Honduras, el rubro "otros ingresos" incluye todos los ingresos no laborales.

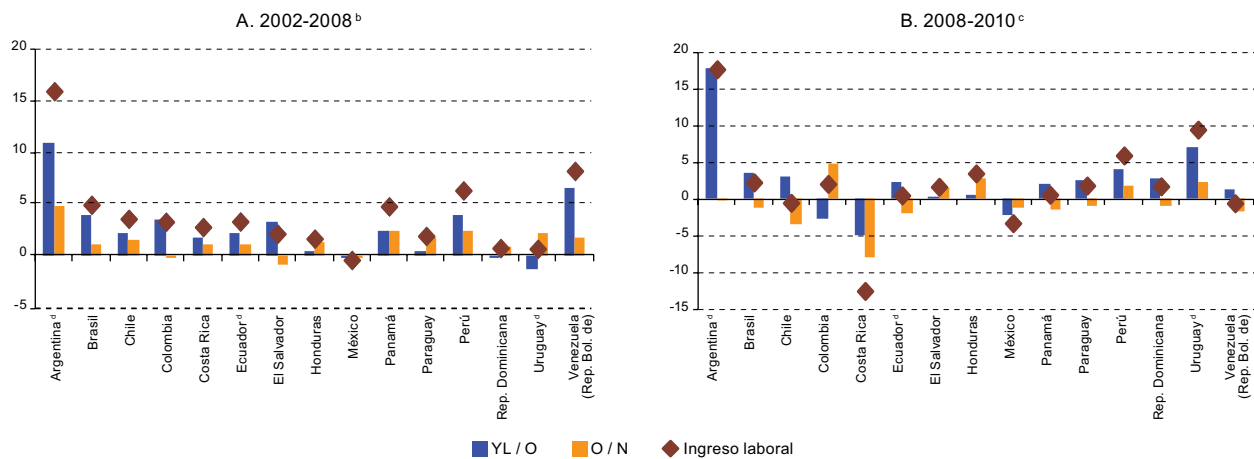
^c Corresponde a los períodos 2006-2010 en la Argentina, 2008-2009 en el Brasil, 2006-2009 en Chile, 2008-2009 en Costa Rica, 2004-2010 en El Salvador y 2007-2010 en Honduras.

^d Áreas urbanas.

La variación de los ingresos laborales por persona puede expresarse como el producto de las variaciones del ingreso laboral por ocupado y del porcentaje de personas ocupadas. En el período 2002-2008, el aumento de la ocupación contribuyó al incremento de los ingresos laborales, pero en menor grado que el cambio en las remuneraciones de los ocupados. A su vez, en el período

2008-2010, en que está comprendida la crisis económica, la ocupación se redujo en nueve países de la región, siendo contrarrestada en algunos de ellos por el aumento del ingreso laboral de los ocupados. Colombia, Honduras, el Perú y el Uruguay destacan como excepciones, ya que la ocupación en los hogares pobres muestra un aumento en el período reciente (véase el gráfico I.6).

Gráfico I.6
AMÉRICA LATINA (15 PAÍSES): VARIACIÓN ANUAL DE LOS COMPONENTES DEL INGRESO LABORAL
POR PERSONA EN LOS HOGARES POBRES^a, 2002-2008 Y 2008-2010
(En porcentajes)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

^a El porcentaje de población analizado es el mismo en ambos períodos y corresponde a la tasa de pobreza de 2002. YL = ingreso laboral; O = número de ocupados; N = población total.

^b Corresponde a los períodos 2002-2006 en la Argentina, 2001-2008 en el Brasil, Paraguay y el Perú, 2000-2006 en Chile, 2001-2004 en El Salvador y 2002-2007 en Honduras. En Honduras, el rubro "otros ingresos" contiene todos los ingresos no laborales.

^c Corresponde a los períodos 2006-2010 en la Argentina, 2008-2009 en el Brasil, 2006-2009 en Chile, 2008-2009 en Costa Rica, 2004-2010 en El Salvador y 2007-2010 en Honduras.

^d Áreas urbanas.

B. Desigualdad distributiva

Los países de América Latina se caracterizan por distribuciones del ingreso muy inequitativas.

En años recientes se han observado cambios que han propiciado que se redujera la desigualdad distributiva, debido sobre todo a una mejor distribución de los ingresos laborales, así como al papel redistributivo del Estado a través de las transferencias monetarias.

1. Evolución reciente de la desigualdad

Es un hecho ampliamente difundido que la distribución de los ingresos en los países de América Latina es una de las más desiguales del mundo. Si bien algunos detalles metodológicos limitan la comparabilidad de los indicadores de desigualdad entre países y regiones (véase el recuadro I.4), eso no altera el hecho de que el índice

de Gini promedio para esta región sea superior al resto. Aun cuando los países latinoamericanos muestran grados distintos de concentración del ingreso, todos exhiben índices de Gini que superan al promedio de cada una de las regiones analizadas, exceptuando el África subsahariana (véase el gráfico I.7).

Recuadro I.4
COMPARABILIDAD DE LAS MEDICIONES DE INGRESO

La medición de los ingresos en las encuestas de hogares presenta diversos desafíos que afectan particularmente la posibilidad de realizar comparaciones válidas y significativas de las cifras sobre desigualdad entre países.

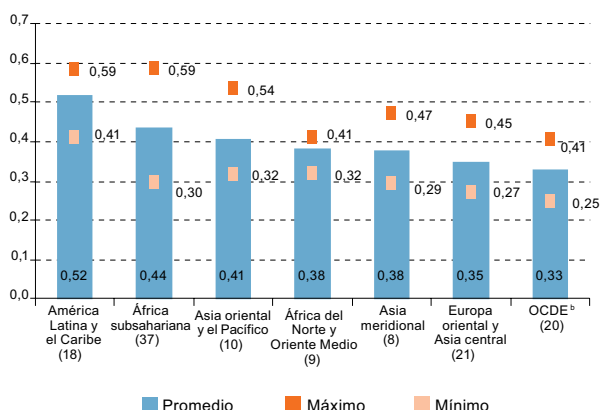
Una de las dificultades, particularmente relevante al hacer comparaciones con otras regiones del mundo, proviene de la utilización del gasto, en lugar del ingreso, como indicador de bienestar. Esta variable, de uso habitual en algunos países en vías de desarrollo, tiene una distribución menos desigual que la del ingreso.

Las distintas características de las encuestas de hogares utilizadas para medir los ingresos también son un factor muy relevante por lo que se refiere a la comparabilidad. El tipo de encuesta utilizada, el periodo de referencia de los ingresos o la cantidad y amplitud de las corrientes de ingreso medidas pueden tener un efecto significativo sobre los indicadores de desigualdad. Además, los países adoptan prácticas de imputación distintas para corregir la ausencia de respuesta a las preguntas sobre ingreso, cuyas características inciden de manera variable en las mediciones de desigualdad.

A su vez, en el caso de las estimaciones aquí presentadas, la CEPAL sigue un procedimiento de ajuste con objeto de aminorar el efecto de la subdeclaración del ingreso en las encuestas. El procedimiento consiste en multiplicar los ingresos de cada fuente por un factor igual a la discrepancia con el correspondiente ingreso per cápita indicado en las cuentas nacionales. Esta práctica eleva los ingresos medios y también suele modificar su distribución. En particular, se tiende a aumentar la desigualdad, sobre todo porque la brecha en los ingresos de capital se imputa exclusivamente al quintil más rico.

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Gráfico I.7
AMÉRICA LATINA Y OTRAS REGIONES DEL MUNDO:
COEFICIENTE DE CONCENTRACIÓN DE GINI,
ALREDEDOR DE 2009 ^a



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países; Banco Mundial, World Development Indicators [en línea] <http://databank.worldbank.org/ddp/home.do>.

^a Los datos regionales aparecen expresados en promedios simples. En el cálculo se consideró la última observación disponible en cada país sobre el periodo 2000-2009.

^b Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos.

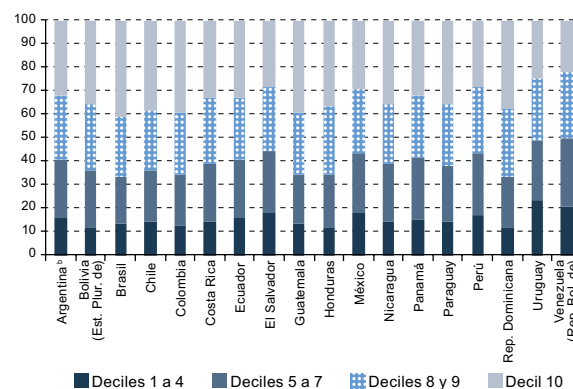
De acuerdo a las cifras más recientes, el 40% de la población con los ingresos más bajos capta, en promedio, el 15% del total del ingreso, mientras que el 10% de la población situado en el extremo superior de la distribución posee un tercio del ingreso total. Asimismo, el ingreso medio del quintil más rico supera en 18,3 veces al del quintil más pobre.

La desigualdad distributiva se manifiesta de manera heterogénea en los países de la región. Las mayores participaciones en el ingreso de los cuatro deciles más pobres se sitúan en torno del 20% (o levemente por encima), en Venezuela (República Bolivariana de) y el Uruguay, mientras que no superan el 12% en Bolivia (Estado Plurinacional de), Colombia, Honduras y la República Dominicana. A su vez, en los dos primeros países mencionados la participación del decil más rico no excede del 25%, mientras que en el Brasil y Guatemala bordea el 40% (véase el gráfico I.8).

Al igual que son limitadas las posibilidades de efectuar comparaciones de la desigualdad entre regiones, lo mismo ocurre con las comparaciones entre países.

Las diferencias en las características de las encuestas con que se miden los ingresos de los hogares, así como los criterios adoptados por los países para tratar valores extremos y corregir la falta de respuesta a las preguntas sobre ingreso, pueden incidir significativamente en las mediciones de la desigualdad (véase el recuadro I.4). Por otra parte, es común que entre las distribuciones del ingreso de los países no se presenten condiciones de “dominancia” estricta; es decir, una distribución puede ser más equitativa que otra en un subconjunto de la población y más inequitativa en otro, lo que da lugar a distintos ordenamientos entre países según cuál sea el indicador utilizado (véase el recuadro I.5). Teniendo en consideración estas limitaciones, el panorama regional de la desigualdad presenta a Venezuela (República Bolivariana de) y el Uruguay como los países con menor concentración del ingreso, mientras que en el extremo opuesto se sitúan Bolivia (Estado Plurinacional de), Colombia y Guatemala (véase el gráfico I.9).

Gráfico I.8
AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): PARTICIPACIÓN EN EL INGRESO POR GRUPOS DE DECILES, ALREDEDOR DE 2010^a



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

^a Los datos corresponden al año 2010, excepto en Bolivia (Estado Plurinacional de) (2007), el Brasil (2009), Chile (2009), Costa Rica (2009), Guatemala (2006) y Nicaragua (2005).
^b Áreas urbanas.

Recuadro I.5 INDICADORES PARA LA MEDICIÓN DE LA DESIGUALDAD DISTRIBUTIVA

El grado de concentración que presenta una distribución de ingresos puede medirse a

partir de un amplio conjunto de indicadores. En este capítulo se utilizan tres de los

indicadores de desigualdad más conocidos, que se detallan a continuación.

$$\text{Índice de Gini: } G = \frac{1}{2n^2 \mu} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |y_i - y_j| \quad \text{Índice de Atkinson: } A_\varepsilon = 1 - \left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{y_i}{\mu} \right)^{1-\varepsilon} \right]^{\frac{1}{1-\varepsilon}}$$

$$\text{Índice de Theil: } T = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{y_i}{\mu} \log \left(\frac{y_i}{\mu} \right)$$

donde n = tamaño de la población, y_i = ingreso per cápita del i -ésimo individuo, μ = ingreso medio y \log denota el logaritmo natural.

El índice de Theil se puede descomponer de manera aditiva para subgrupos de población, de la siguiente manera:

$$T = \sum_{j=1}^k \frac{Y_j}{Y} T_j + \sum_{j=1}^k \frac{Y_j}{Y} \log \left(\frac{Y_j / Y}{N_j / N} \right)$$

donde Y = ingreso total de la población, Y_j = ingreso total del grupo j , N = población total y N_j = población del grupo j . El primer componente representa la desigualdad intragrupal y el segundo, la desigualdad intergrupala.

El índice de Gini es el más conocido de los utilizados para el análisis de la distribución de ingresos. Su formulación se expresa en términos gráficos, puesto que corresponde al área comprendida entre la curva de Lorenz y la línea de equidistribución. Cuanto mayor sea la concentración de los ingresos, mayor

será esa área, lo que incrementa el valor del indicador.

Pese a su popularidad, el índice de Gini no satisface el axioma de sensibilidad a transferencias, una propiedad deseable de los indicadores de desigualdad. Según este principio la desigualdad debe disminuir más ante una transferencia de ingresos progresiva (es decir, de un hogar rico a un hogar pobre) entre individuos pobres que cuando la transferencia se produce entre individuos ricos. Por eso es conveniente complementar el análisis con otros indicadores que sí satisfagan esta propiedad, como los índices de Theil y Atkinson.

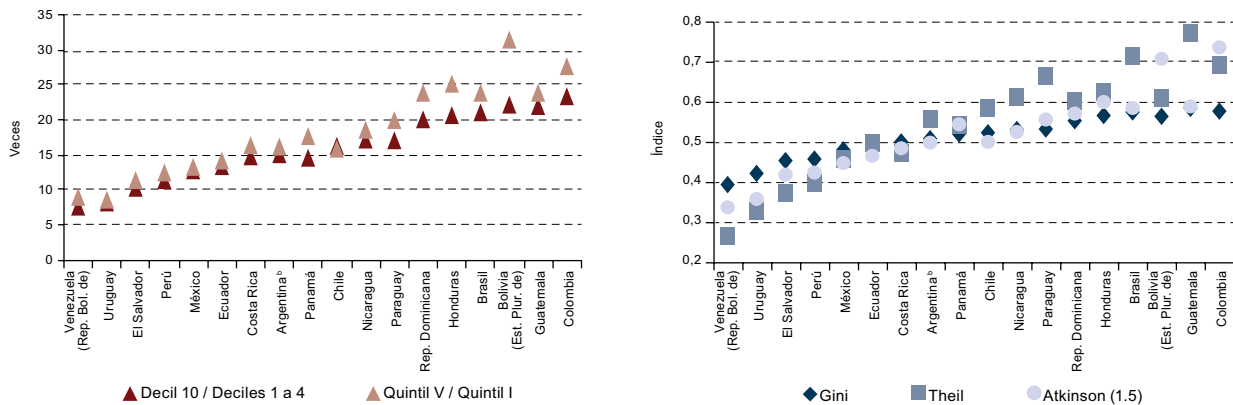
Para los tres indicadores, cuanto más alto es el valor, mayor es el grado de desigualdad. No obstante, mientras los índices de Gini y Atkinson toman valores en el rango $[0, 1]$ (donde 0 corresponde a la equidad absoluta y 1 a la inequidad absoluta), el valor máximo del índice de Theil es el logaritmo del tamaño de la población, que

excede el valor 1. A su vez, la formulación del índice de Atkinson emplea un parámetro adicional, denominado de “aversión a la desigualdad” (ε). Cuanto mayor sea el valor utilizado, más alta será la ponderación que reciben las observaciones ubicadas en la parte baja de la distribución, de modo que los valores más utilizados se encuentran entre 0,5 y 2,0.

Todos los indicadores de desigualdad tienen un carácter ordinal, por lo que sus valores no son equiparables. Es más, dado que cada uno de esos indicadores mide aspectos parciales de la desigualdad, es posible que generen distintos ordenamientos de las distribuciones. El ordenamiento de un grupo de distribuciones solamente puede considerarse definitivo si no varía ante cambios en el índice utilizado. Por consiguiente, lo más apropiado es utilizar los índices de desigualdad de manera complementaria y analizar sus resultados en conjunto.

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe, sobre la base de Frank Cowell, “Measuring Inequality”, *LSE Handbooks in Economics*, Prentice Hall, 2000.

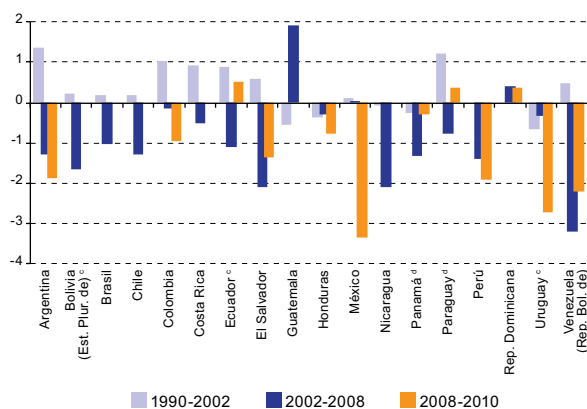
Gráfico I.9
AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): DESIGUALDAD SEGÚN DIVERSOS ÍNDICES, ALREDEDOR DE 2010^a



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.
^a Los datos corresponden al año 2010, excepto en los casos de Bolivia (Estado Plurinacional de) (2007), el Brasil (2009), Chile (2009), Costa Rica (2009), Guatemala (2006) y Nicaragua (2005).
^b Áreas urbanas.

Durante la década de 1990 y hasta principios de la década de 2000, la desigualdad en la región se caracterizó ya sea por una marcada rigidez a la baja o por una leve tendencia al alza. Durante ese período, la mayor reducción en el índice de Gini se produjo en el Uruguay, aunque con una tasa apenas superior al 0,5% anual. Sin embargo, en seis países se produjeron incrementos de la desigualdad iguales o superiores a medio punto porcentual por año (véase el gráfico I.10).

Gráfico I.10
AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE GINI, 1990-2002, 2002-2008^a Y 2008-2010^b



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.
^a Corresponde a los períodos 2002-2006 en la Argentina, 2001-2008 en el Brasil, el Paraguay y el Perú, 2000-2006 en Chile, 2001-2004 en El Salvador y 2002-2007 en Honduras.
^b Corresponde a los períodos 2006-2010 en la Argentina, 2004-2010 en El Salvador y 2007-2010 en Honduras.
^c Áreas urbanas.
^d Áreas urbanas solamente en el período 1990-2002.

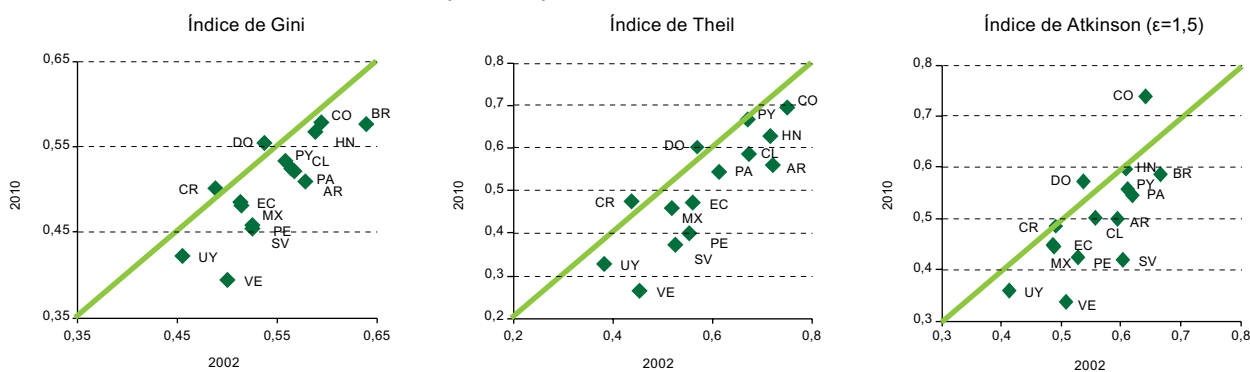
Los años 2002 y 2003 representaron un punto de inflexión a partir del cual la desigualdad empezó a mostrar

una tendencia decreciente en numerosos países, tanto en la comparación de los ingresos captados por los grupos que se encuentran en los extremos inferior y superior de la distribución, como haciendo uso de indicadores sintéticos de desigualdad. Si bien es de una magnitud leve, insuficiente para cambiar el estatus de América Latina como la región más desigual, la disminución de la desigualdad contribuye a configurar un escenario favorable, sobre todo en un contexto de ausencia prolongada de mejoras distributivas generalizadas.

La tendencia hacia la mejora distributiva en la región no se ha visto alterada después de la crisis económica. Hasta el año 2008, momento que refleja de manera aproximada la situación previa al inicio de la crisis, el índice de Gini se redujo a un ritmo del 1% o más por año en diez países y solo aumentó de manera apreciable en Guatemala (según los datos disponibles hasta el año 2006). A su vez, las cifras sobre 2010, que reflejan aproximadamente el escenario inmediatamente posterior a la crisis, indican que la desigualdad no se incrementó significativamente en ninguno de los 11 países de los que había información. Al contrario, en tres de ellos (México, el Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de)), el índice de Gini cayó a un ritmo superior al 2% anual, y en dos más (El Salvador y el Perú), por lo menos un 1% cada año (véase el gráfico I.10).

En consecuencia, cuando se consideran los cambios acumulados entre 2002 y 2010 (o 2009, según la disponibilidad de información), 11 países presentan mejoras distributivas dentro de sus niveles de desigualdad, independientemente del indicador utilizado para su medición: la Argentina, el Brasil, Chile, Colombia, el Ecuador, El Salvador, México, Panamá, el Perú, el Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de) (véase el gráfico I.11).

Gráfico I.11
AMÉRICA LATINA (15 PAÍSES): EVOLUCIÓN DE LA DESIGUALDAD, 2002-2010^a



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

^a Datos referidos a áreas urbanas en la Argentina, el Ecuador y el Uruguay. Los puntos de color celeste indican que la variación entre ambos años no es estadísticamente significativa. Los datos corresponden a los periodos 2001-2009 en el caso del Brasil, 2000-2009 en el de Chile, 2002-2009 en el de Costa Rica y 2001-2010 en los de El Salvador, el Perú y el Paraguay.

2. Factores relacionados con los cambios distributivos

La disminución de la desigualdad en la región a lo largo de varios años ofrece un escenario propicio, inédito en las décadas recientes, para explorar los factores a los que obedece esa tendencia. Los estudios sobre el tema, que han seguido distintas metodologías, tienden a coincidir en al menos dos aspectos. Uno es que la parte más importante de la disminución de la desigualdad se origina en el mercado laboral, básicamente a través de una distribución más equitativa de los ingresos del trabajo por ocupado. Para explicar este resultado se mencionan la progresiva mejora en la distribución de la educación y la reducción de brechas salariales entre los trabajadores más y menos calificados. El segundo aspecto destacado es que las transferencias públicas en efectivo representaron una fuente de ingresos que ha contribuido a desconcentrar la distribución del ingreso per cápita (Lustig, López-Calva y Ortiz-Juarez, 2011).

En efecto, en la Argentina la disminución de la desigualdad entre 2002 y 2009 se explica principalmente por una menor disparidad del ingreso laboral (debido a factores como la desvalorización del “premio” a la educación y la caída del desempleo, y el alza del ingreso mínimo, entre otros), seguida por el aumento de los ingresos no laborales en los hogares más pobres (básicamente por lo que respecta a un mayor acceso a beneficios jubilatorios, el aumento de las pensiones de jubilación mínimas y la extensión de los programas sociales) (Gasparini y Cruces, 2010).

En el Brasil, la reducción de la desigualdad entre 2003 y 2007 se deriva de una mejor distribución de los ingresos laborales de los ocupados y de los ingresos no laborales. Dependiendo del indicador de desigualdad utilizado, los ingresos laborales explican un 52% de la disminución de la desigualdad, medida con el índice de Gini, o un 41%, si se utiliza la razón entre quintiles extremos. A su vez, la mitad de la mejora distributiva de los ingresos laborales por ocupado se debe a la interacción de la menor desigualdad educacional y el acercamiento de las remuneraciones a trabajadores con distintos niveles educativos. La reducción de diversas formas de discriminación salarial (por raza y género) y de las diferencias salariales entre áreas geográficas y sectores de actividad son también factores relevantes para explicar la disminución de la desigualdad (Barros y otros, 2010a). Entre las transferencias públicas que más aportaron a la mejora distributiva se encuentran los beneficios de la seguridad social (30% de la reducción total) y las transferencias no contributivas, como el beneficio de prestación continuada y *Bolsa Família*, cada una de las cuales contribuyó en alrededor de un 10% a la reducción de la desigualdad (Barros y otros, 2010b).

En el caso de México, la reducción en la concentración de los ingresos laborales por ocupado fue el factor predominante en la reducción de la desigualdad en términos globales, llegando a representar un 66% de la variación del coeficiente de Gini en el período 2000-2006. Al igual que en los casos mencionados previamente, esta mejora

se asocia a una reducción de la brecha salarial entre trabajadores más y menos calificados. Por su parte, los ingresos no laborales explican un 15% de la reducción del coeficiente de Gini entre 2000 y 2006 (Esquivel, Lustig y Scott, 2010).

CEDLAS (2009) presenta un análisis de descomposición relativo a ocho países de la región. De acuerdo con los resultados, la generalidad de los cambios se origina en modificaciones en la distribución del ingreso por adulto, más que en cambios demográficos (número de adultos por hogar). A su vez, la distribución del ingreso por adulto está determinada principalmente por las variaciones en la distribución de las remuneraciones. Además de los países ya mencionados, esto se verifica en Bolivia (Estado Plurinacional de) y Chile, que mejoraron su situación distributiva entre inicios y mediados de la década de 2000.

En esta sección se ilustran algunos de los elementos identificados en la literatura a partir de la evidencia disponible para los países de América Latina en la década de 2000. Los períodos analizados son aquellos

en que la distribución del ingreso mejoró de manera más significativa en 15 países de la región. El análisis se concentra en la comparación de las brechas entre el primer y quinto quintil con relación a un grupo de variables, particularmente distintas corrientes de ingreso e indicadores del mercado laboral⁵.

El procedimiento adoptado consiste en descomponer el ingreso en función de distintos pares de factores, para luego simular qué hubiera sucedido con la desigualdad si uno de los elementos no se hubiera modificado durante el período analizado. Los factores considerados en la descomposición son los siguientes: el ingreso per cápita del hogar se descompone como la multiplicación de la proporción de adultos en el hogar por el ingreso percibido por cada adulto⁶; el ingreso por adulto se desagrega como la suma del ingreso laboral (por adulto) y el ingreso no laboral (por adulto) del hogar; finalmente, el ingreso laboral por adulto corresponde al producto de la remuneración por ocupado y la tasa de ocupación (cociente entre el número de ocupados y el número de adultos) (véase el recuadro I.6).

Recuadro I.6 METODOLOGÍAS DE DESCOMPOSICIÓN

Descomposición de las variaciones de la desigualdad

De acuerdo con Barros y otros (2006), el ingreso per cápita del hogar puede expresarse en función de sus determinantes inmediatos de la siguiente manera:

$$\text{Ingreso per cápita del hogar (y)} = \text{Proporción de adultos en el hogar (a)} * \text{Ingreso por adulto en el hogar (r)} \quad (1)$$

$$\text{Ingreso por adulto en el hogar (r)} = \text{Ingreso laboral (o)} + \text{Ingreso no laboral (t)} \quad (2)$$

$$\text{Ingreso laboral (t)} = \text{Remuneración por trabajador (w)} * \text{Proporción de personas ocupadas (u)} \quad (3)$$

El análisis de simulación se centra en qué sucedería con la distribución de la variable situada en el lado izquierdo de la ecuación si una de las variables del lado derecho no se hubiera modificado durante el período analizado. Para ello, se calcula cada una de las variables descritas a nivel agregado para cada quintil en dos momentos distintos, t_0 y t_1 . Luego se calcula la variable dependiente de una ecuación combinando una variable

independiente observada en el período t_1 con una variable independiente observada en el período t_0 , para cada quintil.

Por ejemplo, para simular el ingreso per cápita en el período t_1 , asumiendo que el ingreso por adulto del hogar se mantuvo constante, se calcula $y'_1 = a_1 * r_0$, para los quintiles primero y quinto. La diferencia entre la brecha entre quintiles resultante de esta variable simulada y la observada

efectivamente corresponde al aporte a la desigualdad de la proporción de adultos del hogar.

Descomposición del coeficiente de Gini por fuentes

Lerman y Yitzhaki (1985) proponen descomponer el índice de Gini como la suma de distintas fuentes de ingreso (k) del producto de tres factores, $G = \sum_k S_k R_k G_k$, donde:

$$S_k = \frac{y_k}{\sum_k y_k} \text{ es la participación de la fuente de ingreso } k \text{ en el total;}$$

$$R_k = \frac{\text{cov}[y_k, F(y)]}{\text{cov}[y, F(y)]} \text{ es el coeficiente de correlación de Gini entre la fuente de ingreso } k \text{ y el ingreso total, y}$$

G_k es el coeficiente de Gini de la fuente de ingreso k , medida para el conjunto de los hogares y no solo para los perceptores de la fuente.

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Ricardo Barros y otros, "Uma análise das principais causas de queda recente na desigualdade de renda brasileira", *Económica*, vol. 8, N° 1, junio de 2006; Fernando Medina y Marco Galvan, "Descomposición del coeficiente de Gini por fuentes de ingreso: Evidencia empírica para América Latina 1999-2005", *serie Estudios estadísticos y prospectivos*, N° 63 (LC/L.2911/E), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2008. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.08.II.G.45.

⁵ Con el fin de simplificar, para calcular la brecha de ingresos se suma primero el monto total de ingresos de cada quintil y se divide entre el número de personas del quintil, en lugar del método más habitual, que consiste en promediar los ingresos per cápita de las personas del quintil.

⁶ Se asimila los adultos a las personas en edad de trabajar, es decir, aquellas de 15 años en adelante.

Los resultados de la simulación se muestran en el cuadro I.3. Para cada una de las variables de ingreso que se deben descomponer se indica la variación anual

observada en la brecha entre quintiles extremos, entre el año inicial y el año final, así como el porcentaje de dicha variación atribuible a cada factor analizado.

Cuadro I.3
AMÉRICA LATINA (15 PAÍSES): VARIACIÓN ANUAL OBSERVADA Y SIMULADA DE LA BRECHA DE INGRESOS ENTRE QUINTILES, SEGÚN DETERMINANTES DEL INGRESO
(En porcentajes)

País	Periodo	Variación anual			Variación anual			Variación anual		
		Brecha del ingreso per cápita	Cambio en el ingreso por adulto	Cambio en el porcentaje de adultos	Brecha del ingreso por adulto	Cambio en los ingresos laborales	Cambio en los ingresos no laborales	Brecha del ingreso laboral por adulto	Cambio en el ingreso por ocupado	Cambio en la tasa de ocupación
Argentina ^a	2002-2009	-4,4	82	18	-3,6	55	45	-2,5	150	-50
Brasil	2001-2009	-4,9	93	7	-4,5	58	42	-3,0	120	-20
Chile	2000-2006	-4,2	87	13	-3,6	45	55	-2,4	134	-34
Colombia	2002-2005	-5,2	114	-14	-5,9	95	5	-6,7	79	21
Costa Rica	2002-2005	-4,7	113	-13	-5,3	93	7	-6,2	66	34
Ecuador ^a	2005-2010	-3,6	98	2	-3,5	61	39	-2,6	107	-7
El Salvador	2001-2010	-5,8	97	3	-5,6	86	14	-6,3	103	-3
México	2000-2010	-3,1	93	7	-2,9	74	26	-3,0	120	-20
Nicaragua	2001-2005	-7,2	90	10	-6,5	146	-46	-10,7	72	28
Panamá	2002-2009	-5,0	109	-9	-5,4	76	24	-5,4	101	-1
Perú	2001-2010	-4,4	85	15	-3,8	70	30	-4,1	88	12
Paraguay	2001-2009	-2,7	52	48	-1,4	-27	127	0,8	42	58
República Dominicana	2004-2007	-2,1	119	-19	-2,5	-58	158	1,6	-71	171
Uruguay ^a	2004-2010	-3,6	101	-1	-3,6	24	76	-1,3	119	-19
Venezuela (República Bolivariana de)	2002-2010	-7,8	104	-4	-8,1	88	12	-8,8	97	3

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.
^a Áreas urbanas.

La primera descomposición, para la que se considera el ingreso per cápita del hogar como el producto de la proporción de adultos en el hogar y el ingreso percibido por cada adulto, permite evaluar en qué medida las modificaciones en la distribución del ingreso per cápita provienen de cambios distributivos en el monto de ingresos percibido o de alteraciones en la estructura demográfica de los hogares.

Los resultados indican que, aunque el factor demográfico contribuyó a una reducción de las brechas entre quintiles, particularmente en los países con más mejoras distributivas, su efecto fue leve. El Paraguay fue el único país en que la variación en el porcentaje de adultos por hogar contribuyó en casi un 50% a la disminución de la brecha del ingreso per cápita. En los demás países la contribución de este factor no excedió el 20%, y en algunos incluso repercutió en un deterioro distributivo.

Este resultado puede resultar llamativo, por cuanto se ha destacado al factor demográfico como uno de los que más han contribuido a las mejoras en la situación de pobreza experimentadas por la región desde los años noventa (CEPAL, 2008). En efecto, en los países y periodos analizados, el porcentaje de adultos por hogar se ha incrementado alrededor de tres puntos porcentuales en promedio. Este aumento, equivalente a una disminución

de la tasa de dependencia demográfica, se traduce en un incremento del ingreso per cápita de los hogares que, efectivamente, ha contribuido a reducir la pobreza. Ahora bien, este cambio en las estructuras familiares se ha producido de manera relativamente homogénea en todos los grupos de ingreso, lo que explica su escaso efecto en la reducción de la brecha entre quintiles extremos.

En concordancia con los hallazgos registrados en la literatura citada, el ingreso por adulto aparece como el principal factor impulsor de la mejora distributiva del ingreso per cápita. Esta variable corresponde a la suma del ingreso laboral (por adulto) y el ingreso no laboral (por adulto) del hogar. En diez países el ingreso laboral tuvo un papel preponderante en la reducción de la desigualdad. En Colombia, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y Venezuela (República Bolivariana de), la variación de los ingresos laborales explica el 90% o más de la del ingreso total por adulto.

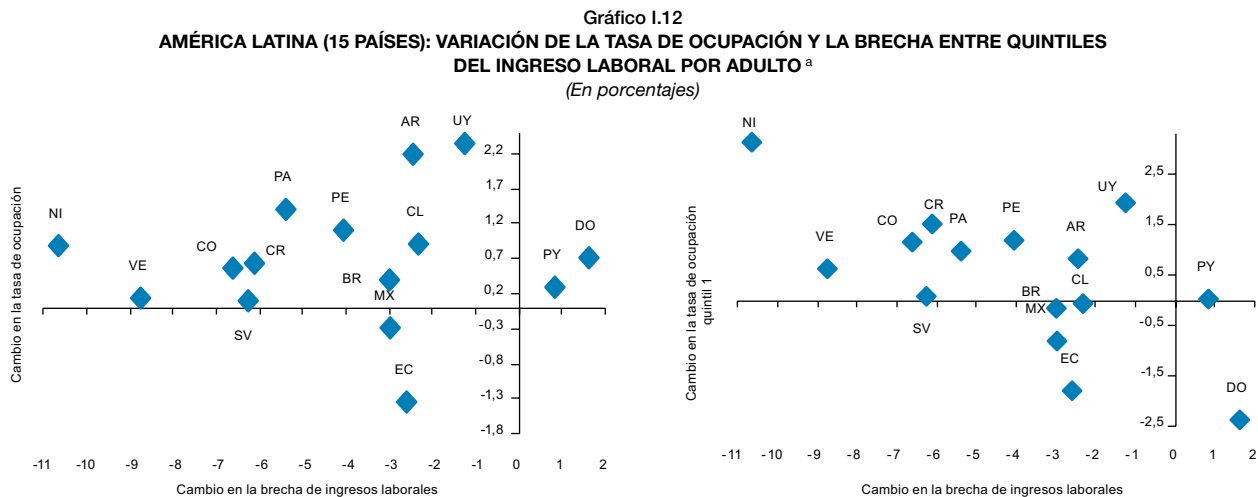
Por su parte, el cambio distributivo de los ingresos no laborales contribuyó en un 50% o más a la reducción de la desigualdad de los ingresos por adulto en Chile, el Ecuador, el Paraguay, la República Dominicana y el Uruguay, mientras que en la Argentina y el Brasil su contribución superó el 40%. Los ingresos no laborales proceden de fuentes de diversa índole e incluyen las transferencias públicas (jubilaciones y pensiones, subsidios y programas

de reducción de la pobreza, entre otros) y privadas (como transferencias de otros hogares y remesas), los ingresos de capital (rentas de la propiedad e intereses recibidos, por ejemplo) y el alquiler imputado. Los países en que estos ingresos jugaron un papel redistributivo más destacado comparten como característica que este se origina en las transferencias públicas, es decir, en la acción específica de los gobiernos a través de la política social. En el caso de la Argentina, la mejora distributiva de los ingresos no laborales se debe, casi exclusivamente, a una extensión de la cobertura y a un aumento del monto de las jubilaciones no contributivas. En el Brasil, la mayor parte del cambio proviene de las transferencias monetarias a los hogares en el marco del programa *Bolsa Familia*, en línea con lo que se ha constatado en otros estudios. En Chile, la mejora distributiva proviene tanto de las jubilaciones y pensiones como de los subsidios entregados por el Gobierno. En el Ecuador, toda la mejora distributiva proviene del Bono de Desarrollo Humano, mientras que en Panamá proviene de las jubilaciones y los subsidios públicos.

El ingreso laboral por adulto puede expresarse como el producto de la remuneración por ocupado y la tasa

de ocupación (cociente entre el número de ocupados y el de personas adultas). La reducción de desigualdad observada en el ingreso laboral por adulto proviene casi exclusivamente del primero de ambos factores. De hecho, la brecha en la tasa de ocupación entre quintiles no solo se mantuvo prácticamente constante en varios países, sino que en algunos incluso aumentó.

Durante los períodos de reducción de la desigualdad, la tasa de ocupación promedio aumentó en prácticamente todos los países, con las excepciones del Ecuador y México. Si bien no se observa una relación directa entre la magnitud de la disminución de las brechas en el ingreso laboral por ocupado y el aumento del empleo promedio, se registran mayores reducciones de la desigualdad precisamente en los países con incrementos superiores de la tasa de ocupación en el primer quintil. Por tanto, aun cuando el factor remuneración haya predominado en las mejoras distributivas observadas en el período reciente, se pone de manifiesto que la generación de empleo en los estratos más pobres ha tenido un beneficio directo en la reducción de la desigualdad (véase el gráfico I.12).



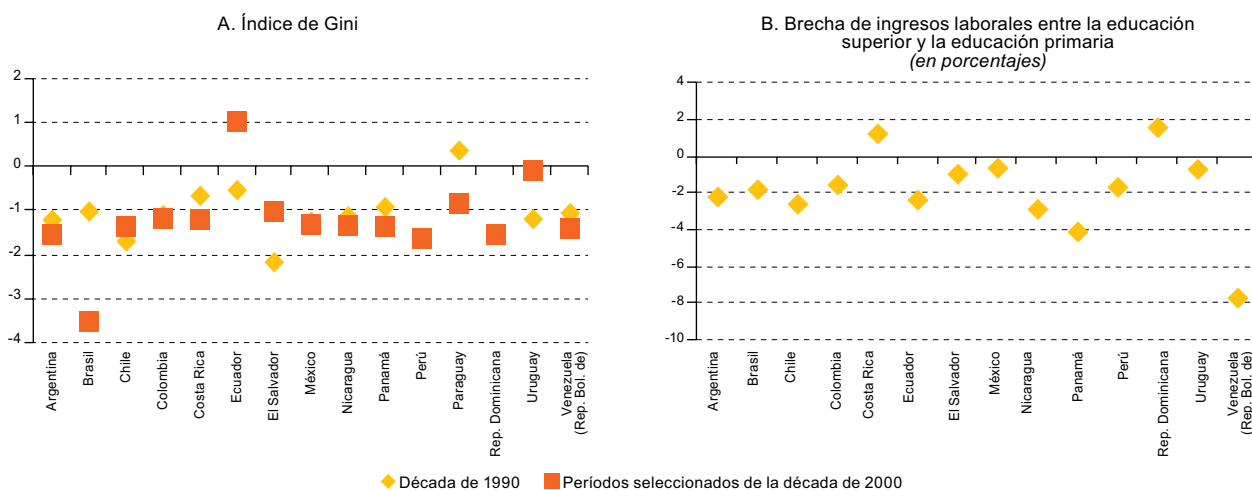
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

^a Los períodos y las coberturas geográficas de cada país corresponden a los detallados en el cuadro I.3.

La mejora distributiva del ingreso de los ocupados tiene su origen en factores de distinto tipo. En varios trabajos recientes se han puesto de relieve la reducción de la desigualdad educativa y de la brecha de remuneraciones entre niveles educativos. Efectivamente, el diferencial de ingresos laborales atribuible a un año adicional de estudio se ha ido reduciendo de manera sistemática en la región. Asimismo, en los períodos analizados se constató en la mayoría de los países una disminución del coeficiente de Gini de los años de estudio en un 1,2% de promedio. Si

bien este proceso no se registró exclusivamente durante el período de mejoramiento distributivo, sino que viene operando de manera sostenida desde hace más tiempo, se ha argumentado que, al menos en ciertos países, la oferta relativa de trabajo calificado se habría acelerado desde el inicio del siglo (López-Calva y Lustig, 2010). De cualquier manera, los períodos de mayor reducción de la desigualdad no necesariamente coinciden con aquellos en que la dispersión en los años de estudio se redujo más rápidamente (véase el gráfico I.13).

Gráfico I.13
AMÉRICA LATINA (15 PAÍSES): CAMBIO ANUAL EN EL ÍNDICE DE GINI DE LOS AÑOS DE ESTUDIO Y EN LA BRECHA DE INGRESOS LABORALES POR NIVEL EDUCATIVO^a



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

^a Los periodos y las coberturas geográficas de cada país corresponden a los detallados en el cuadro I.3.

En algunos países también se han desplegado políticas relacionadas con los salarios que pueden haber contribuido a la disminución de la desigualdad de los ingresos laborales de los ocupados. En el Brasil se incrementaron de manera significativa los salarios mínimos, lo cual habría tendido a mejorar en mayor medida las remuneraciones de los trabajadores más desfavorecidos por la distribución. En la

Argentina se verificó un proceso similar, aun cuando las políticas de determinación directa del salario al inicio de la fase de mejora y la intensificación de las negociaciones colectivas podrían haber jugado un papel más importante. En el caso de Venezuela (República Bolivariana de) se destaca la inclusión de transferencias públicas como parte del salario.

3. Características de la distribución del ingreso

La distribución del ingreso se puede caracterizar desde distintas perspectivas. En esta sección se tratan principalmente dos: la evaluación del aporte de cada fuente de ingresos a la desigualdad total y el análisis de la relación entre determinadas características individuales y la desigualdad de los ingresos generados en el mercado laboral.

a) Desigualdad por fuentes de ingresos

El ingreso total del hogar se construye como la suma de ingresos de distintas fuentes, que incluyen los ingresos laborales, los procedentes de transferencias, los de capital y, eventualmente, el alquiler imputado y otros ingresos. Es posible analizar el aporte de cada fuente

de ingresos a la desigualdad total mediante el modelo de Lerman y Yitzhaki (1985). De acuerdo con este, el aporte de una determinada fuente a la desigualdad total se obtiene como la multiplicación de tres factores: su peso relativo en el ingreso total, su índice de Gini y su “correlación de Gini” con el ingreso total (véase el recuadro I.6).

Los ingresos del trabajo remunerado constituyen la fuente más importante, puesto que representan en promedio el 77% del ingreso total. Por ello, no resulta sorprendente que la mayor parte de la desigualdad del ingreso corresponda a los ingresos laborales. En efecto, el 76% de la desigualdad, medida según el índice de Gini, se origina en esa fuente (véase el cuadro I.4).

Cuadro I.4
AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): APORTE DE CADA FUENTE DE INGRESOS AL INGRESO TOTAL
Y A LA DESIGUALDAD TOTAL, ALREDEDOR DE 2010
(En porcentajes)

País	Año	Ingresos laborales		Transferencias		Ingresos de capital		Otros ingresos	
		Ingreso	Desigualdad	Ingreso	Desigualdad	Ingreso	Desigualdad	Ingreso	Desigualdad
Argentina ^a	2010	75	74	11	5	8	15	6	6
Bolivia (Estado Plurinacional de)	2007	78	75	14	15	3	5	5	5
Brasil	2009	60	54	22	22	9	14	10	10
Chile	2009	81	86	11	5	4	6	4	3
Colombia	2010	78	74	13	15	3	4	6	6
Costa Rica	2009	83	82	11	9	4	6	2	2
Ecuador	2010	85	85	12	11	3	4
El Salvador	2010	83	87	16	13	1	1
Guatemala	2006	75	76	13	13	2	2	11	9
Honduras ^b	2010	76	76	24	24
México	2010	63	63	10	9	5	9	22	19
Nicaragua	2005	83	79	16	20	1	2
Panamá	2010	82	83	16	14	2	3
Paraguay	2010	88	88	10	9	2	3
Perú	2010	72	73	8	9	3	4	18	14
República Dominicana	2010	83	85	7	4	3	5	7	7
Uruguay	2010	60	61	20	20	6	5	13	14
Venezuela (República Bolivariana de)	2010	81	76	5	10	14	14
Promedio simple		77	76	13	12	4	6	6	6

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

^a Áreas urbanas.

^b El rubro "Otros ingresos" contiene todos los ingresos no laborales.

Por su parte, las transferencias, tanto públicas como privadas, representan el 13% del ingreso total de los hogares, aunque su peso relativo es bastante heterogéneo entre los países de la región. El aporte de esta fuente a la desigualdad total, cuyo promedio simple a nivel regional es del 12%, también difiere de manera apreciable entre países.

El caso de las transferencias ejemplifica cómo los factores involucrados en la descomposición pueden actuar en direcciones divergentes. Por una parte, las transferencias aparecen como una fuente de ingreso altamente concentrada, puesto que hay un considerable porcentaje de hogares cuyo ingreso es cero, debido a que no son beneficiarios de jubilaciones, pensiones, remesas ni programas de transferencias monetarias. Por tanto, este factor de la descomposición contribuye a aumentar la desigualdad total. Por otra parte, en la medida en que las transferencias estén dirigidas a los hogares de menos recursos, su correlación de Gini con el ingreso total será menor que la de las otras fuentes, con lo que se reducirá la contribución de esta fuente a la desigualdad total. En la práctica, los ingresos agrupan corrientes con distinta vocación redistributiva. Mientras que las jubilaciones tienden a ser regresivas, puesto que reproducen la desigualdad de ingresos en el mercado de trabajo, los programas de asistencia monetaria son altamente redistributivos. Por ello, la contribución de las transferencias a la desigualdad

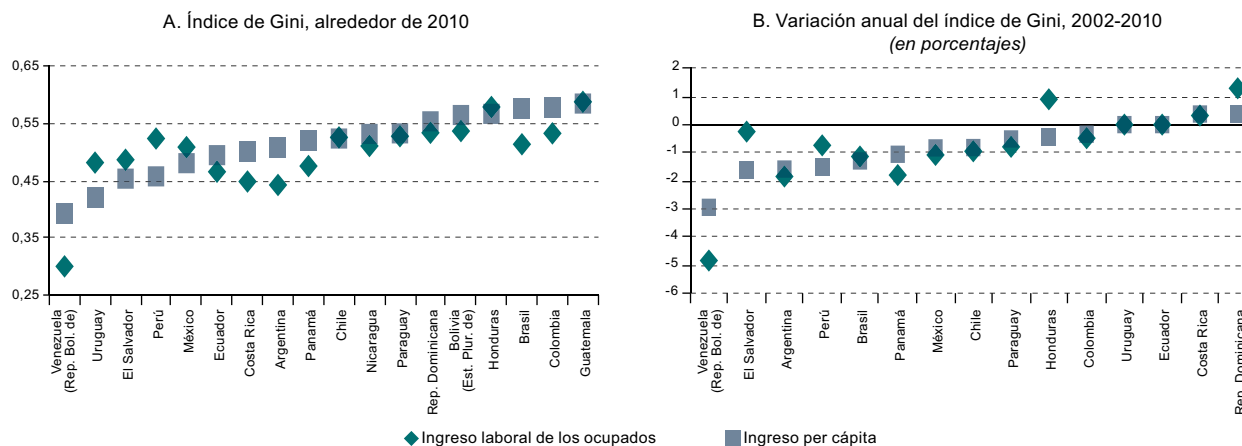
total no es muy distinta de su peso relativo en el ingreso, al menos en el promedio regional.

Los ingresos de capital representan en promedio un 4% del total de ingresos y un 6% de la desigualdad total. Al caracterizarse por una gran concentración, el aporte de esta fuente a la desigualdad total es mayor que su participación en los ingresos totales en todos los países. Finalmente, los otros ingresos tienen una participación similar tanto en el ingreso total como en la desigualdad total, que se sitúa en un 9% en promedio a nivel regional.

b) Desigualdad de los ingresos laborales

La desigualdad de los ingresos laborales de los ocupados, que es una variable cuya relación con las características de las personas ocupadas se analiza en esta sección, puede ser mayor o menor que la desigualdad del ingreso per cápita. En 11 países la desigualdad del ingreso per cápita es mayor, mientras que en 7 ocurre lo contrario. De cualquier forma, ambas variables presentaron una tendencia similar entre 2002 y 2010. Panamá y Venezuela (República Bolivariana de) se destacan como países donde la mejora de la distribución de ingresos laborales fue más pronunciada que la de los ingresos totales, mientras que Honduras y la República Dominicana ejemplifican el caso contrario (véase el gráfico I.14).

Gráfico I.14
AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): NIVEL Y EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE GINI POR TIPO DE INGRESO, 2002-2010



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

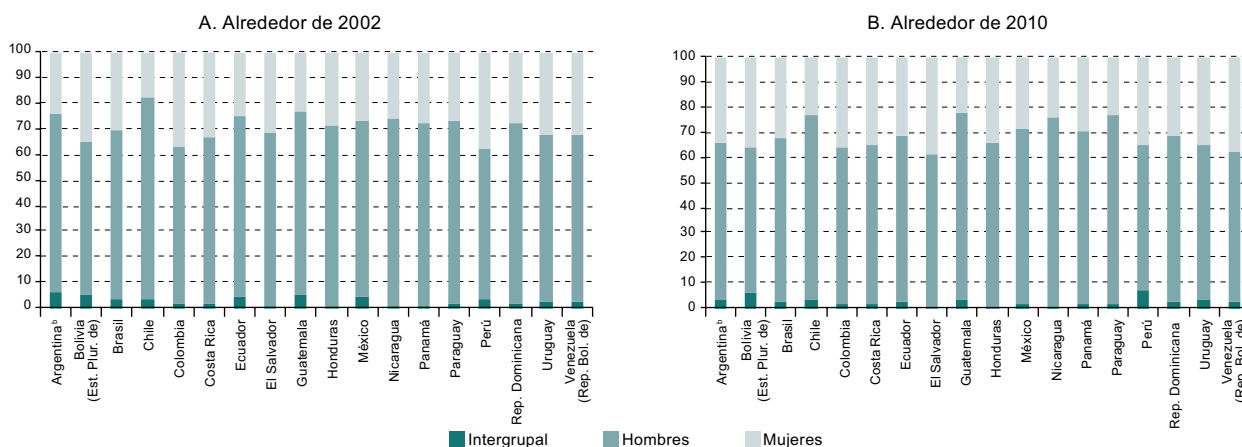
La forma en que se distribuyen los ingresos laborales guarda estrecha relación con las características de las personas ocupadas. Por ello, resulta de interés evaluar en qué medida la desigualdad en las remuneraciones proviene de las diferencias en características como el sexo, la edad y el nivel de escolaridad de las personas.

Para medir la desigualdad, en el análisis se usa el índice de Theil, ya que puede descomponerse de manera aditiva para distintos subgrupos de población, a diferencia del índice de Gini y otros indicadores. El aporte de cada grupo de población a la desigualdad total está determinado tanto por su nivel de desigualdad como por su participación en el ingreso total. La suma de los aportes de cada grupo da lugar al componente “intragrupal” de la desigualdad, es decir, al que proviene de la dispersión de los ingresos en cada grupo. Además existe un componente “intergrupal”,

que muestra la desigualdad proveniente de las diferencias entre los ingresos medios de los grupos. La suma de ambos componentes es igual al índice de Theil para la población total (véase el recuadro I.5).

La descomposición por sexo revela que, en promedio, un 66% de la desigualdad de los ingresos de los ocupados está relacionada con los ingresos recibidos por los hombres. Los niveles de desigualdad entre hombres y mujeres no son muy distintos, aun cuando en algunos países sí se observen diferencias importantes a favor de cualquiera de ambos grupos (véase el gráfico I.15). Si parece claro que el elevado aporte de la población masculina a la desigualdad se debe a su mayor participación en el mercado de trabajo y, por tanto, en el ingreso total. En efecto, la participación de los hombres en el total de ingresos laborales se sitúa en torno al 68%.

Gráfico I.15
AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): DESCOMPOSICIÓN DE LA DESIGUALDAD DEL INGRESO LABORAL DE LOS OCUPADOS POR SEXO, ALREDEDOR DE 2002 Y DE 2010^a
(En porcentajes)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

^a Ocupados de 15 años y más.

^b Áreas urbanas.

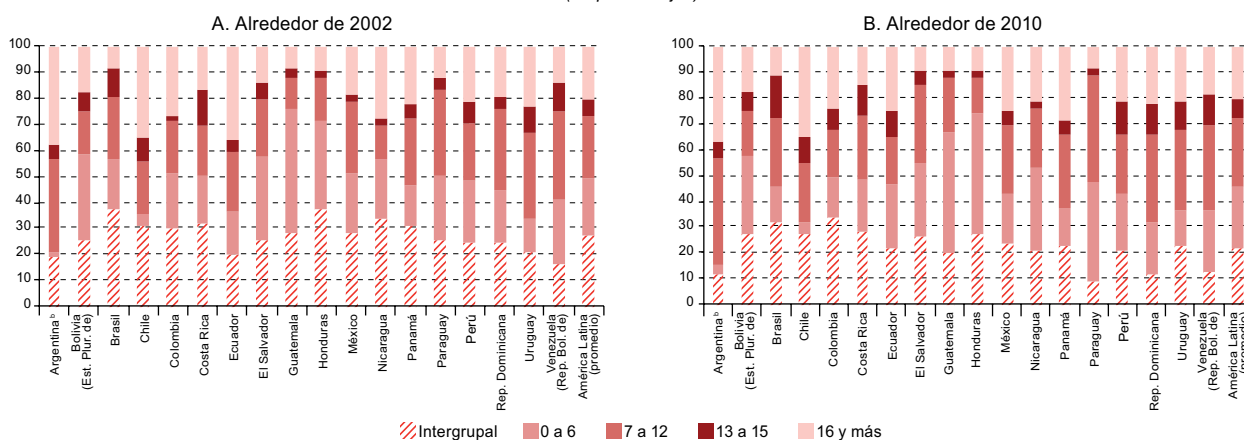
El factor intergrupal, es decir, la desigualdad por la diferencia del ingreso medio entre hombres y mujeres, supuso, en promedio, un 3% de la desigualdad total. No obstante, este reducido porcentaje no es representativo de la brecha de género en los ingresos laborales, puesto que no se toma en consideración el hecho de que las mujeres tienen un promedio de años de estudio más alto que los hombres en la mayoría de los países de la región. Al comparar los ingresos medios entre personas de distinto sexo con un nivel educativo similar, la brecha salarial en perjuicio de las mujeres se hace evidente (véase el cuadro A-23 del anexo estadístico).

En comparación con 2002, las cifras recientes muestran un leve aumento de la contribución de la población femenina a la desigualdad total de los ingresos laborales.

Esta obedece principalmente a la creciente participación de las mujeres en la generación de ingresos laborales, cuyo aumento promedió 2 puntos porcentuales. Aun cuando la relación entre los indicadores de desigualdad de hombres y mujeres no cambió en promedio, en diez países se registraron variaciones apreciables en un sentido u otro.

En la descomposición de la desigualdad de ingresos laborales según años de estudio, el factor intergrupal presenta una elevada heterogeneidad entre países. Mientras que en la Argentina, el Paraguay, la República Dominicana y Venezuela (República Bolivariana de) la diferencia de ingresos medios entre niveles educativos representa apenas un 12% o menos a la desigualdad total, este porcentaje supera el 30% en el Brasil, Colombia y Honduras (véase el gráfico I.16).

Gráfico I.16
AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): DESCOMPOSICIÓN DE LA DESIGUALDAD DEL INGRESO LABORAL DE LOS OCUPADOS
POR AÑOS DE ESTUDIO, ALREDEDOR DE 2002 Y DE 2010^a
(En porcentajes)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

^a Ocupados de 25 años y más.

^b Áreas urbanas.

La población ocupada se agrupó en cuatro niveles, según el número de años de estudio completados, que se corresponden aproximadamente con los ciclos primario (0 a 6 años), secundario (7 a 12 años), superior técnico (13 a 15 años) y universitario (16 años y más). De manera general, el aporte a la desigualdad de cada nivel de educación está determinado principalmente por la estructura educativa de la fuerza laboral. En países como la Argentina y Chile, donde la población con seis años de estudio o menos representa un bajo porcentaje de la fuerza laboral, este grupo aporta menos del 5% a la desigualdad total. En cambio, la participación en la desigualdad de este grupo supera el 30% en Bolivia (Estado Plurinacional de), El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y el Paraguay, países donde el 50% o más de los ocupados (de 25 años y más) no han estudiado más de seis años⁷.

El cambio más relevante en la comparación con los resultados en torno a 2002 es la reducción del peso específico del factor intergrupal. Es decir, la diferencia en los ingresos medios entre niveles educativos representa un aporte menor a la desigualdad total. Esto es coherente con lo planteado anteriormente, en referencia a la reducción de las brechas relacionadas con el premio a la educación como uno de los factores que contribuye a explicar la disminución de la desigualdad en los ingresos laborales.

La desigualdad distributiva de los ingresos laborales tiene un patrón relativamente definido en los países de la región. Los ingresos de los más jóvenes se distribuyen de manera más equitativa que los del resto y la desigualdad tiende a aumentar con la edad. En efecto, al nivel de la región, el índice de Theil para las personas de entre 30 y 44 años es un 6% más alto que el de las personas de 15 a

⁷ Se debe tener presente que los resultados de la descomposición por nivel educativo dependen del número y tamaño de las categorías que se construyan. Cuanto menor sea el número de categorías,

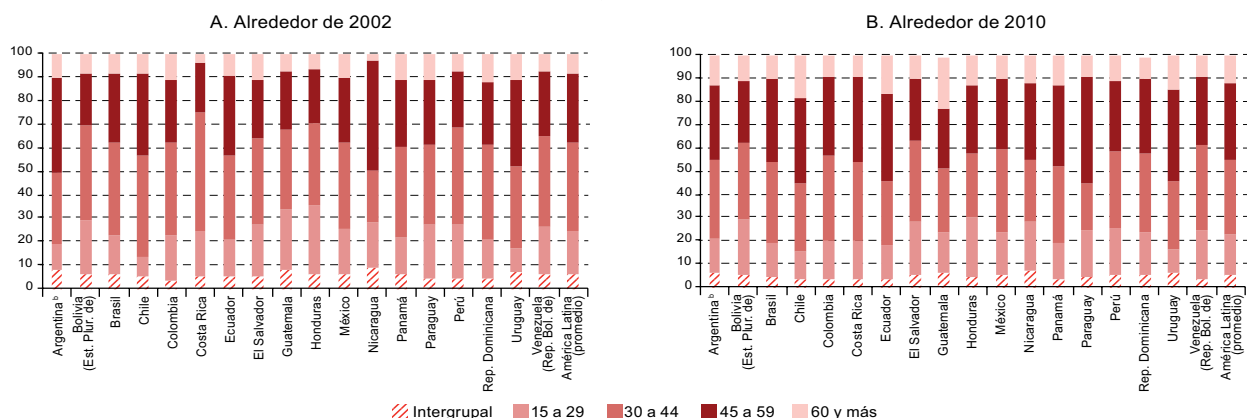
más amplio y diverso será el conjunto de personas en cada una, lo que se traducirá en un aumento del componente intragrupal y una disminución del intergrupal.

29 años. La desigualdad para las personas de 45 a 59 años es un 42% más alta que entre los jóvenes, y ese porcentaje aumenta hasta un 92% para las personas de 60 años y más cuya distribución de ingresos laborales es más desigual.

Además, a medida que aumenta la edad de las personas se produce un incremento de los ingresos laborales, tanto a consecuencia de una disminución en el desempleo como por un aumento en la remuneración media por trabajador. Los ingresos alcanzan su nivel más elevado entre las personas de 45 a 59 años, para luego decrecer entre quienes tienen edades mayores.

La conjunción de ambos factores se traduce en que el aporte a la desigualdad total de las personas más jóvenes (18% en promedio) sea muy inferior al porcentaje de ocupados en ese rango de edad (32% en promedio). El aporte a la desigualdad de quienes tienen entre 30 y 44 años (32% en promedio) es similar a su porcentaje de participación entre los ocupados (35% en promedio). Este grupo, junto con el de las personas con edades de entre 45 y 59 años, son los que contribuyen en mayor medida a la desigualdad de ingresos laborales. Por último, los ocupados de 60 años y más contribuyen en promedio al 12% de la desigualdad, mientras que representan el 9% de los ocupados (véase el gráfico I.17).

Gráfico I.17
AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): DESCOMPOSICIÓN DE LA DESIGUALDAD DEL INGRESO LABORAL DE LOS OCUPADOS POR EDAD, ALREDEDOR DE 2002 Y DE 2010^a



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

^a Ocupados de 15 años y más.

^b Áreas urbanas.

C. Percepciones sobre el funcionamiento del mercado de trabajo y las instituciones laborales

En América Latina persisten los problemas de funcionamiento del mercado de trabajo y de las instituciones laborales. Estos problemas generan sentimientos de incertidumbre y malestar en la población ocupada, sobre todo entre quienes tienen empleos precarios, poseen menos capital humano, se encuentran en peor situación socioeconómica y residen en países con heterogeneidad estructural severa. En estos grupos son más frecuentes el temor a perder el empleo y las percepciones de falta de oportunidades de trabajo, de incumplimiento de la ley laboral y de falta de garantías de seguridad social. El diálogo entre empresarios y trabajadores se ve obstaculizado por el bajo índice de afiliación sindical, especialmente de los trabajadores menos calificados, y por la desconfianza en los sindicatos, que es mayor entre directivos y gerentes de empresas.

A pesar de que en 2010 la recuperación económica influyó positivamente en el funcionamiento del mercado de trabajo, con un incremento del índice de ocupación y una caída del desempleo, el mundo laboral continúa siendo en América Latina uno de los principales eslabones en la reproducción de la desigualdad. En rigor, la heterogeneidad de la estructura productiva se expresa en un continuo, cuyos polos opuestos son, por una parte, un sector minoritario, con empleos de alta productividad, salarios y protección social, y por otra, un sector donde predominan las condiciones laborales precarias, las remuneraciones más bajas y un limitado acceso a la protección social. Por otra parte, tanto el desempleo como la ocupación en el sector de baja productividad siguen afectando sobre todo a los jóvenes y a las mujeres más pobres.

Las segmentaciones y brechas objetivas en los mercados laborales en América Latina se han examinado ampliamente. No ocurre lo mismo respecto a las diferencias en las percepciones sobre el mercado de trabajo que podrían derivarse de las distintas posiciones y experiencias de las personas en el mercado laboral. En esta sección se procura aportar algunos insumos sobre esta faceta del problema, abordando: a) las percepciones sobre la gravedad del desempleo y las oportunidades de obtención de un empleo; b) algunas percepciones relacionadas con la calidad de funcionamiento de las instituciones laborales (sindicalización, cumplimiento de

la ley laboral), y c) los sentimientos de incertidumbre y bienestar o malestar asociados al mundo del trabajo. En este examen se hace hincapié en la detección de brechas subjetivas relacionadas con la posición de los sujetos en el mercado de trabajo, ya sea a través de medidas directas (ocupación o tipo de empleo) o indirectas (sexo, edad o escolaridad, entre otras).

A modo de advertencia al lector, se debe observar que el propósito de este ejercicio es fundamentalmente exploratorio, debido a las limitaciones de los datos. La fuente de información subjetiva es el estudio Latinobarómetro 1996-2009, que no es una investigación concebida para medir las percepciones sobre el funcionamiento del mercado laboral. La falta de continuidad de algunas preguntas relevantes (que determina que se cuente con series incompletas o que en el caso de algunas variables únicamente se tenga información sobre un año), la introducción de cambios en la formulación de algunas preguntas de interés (que dificultan la comparación) y las restricciones en los tamaños de muestra (que no hacen aconsejable la desagregación por grupos dentro de cada país) son algunas de las limitaciones de la información disponible. Así, se ha preferido trabajar con análisis agregados a nivel regional —lo que plantea la dificultad de que ciertas conclusiones podrían no ser válidas para algunos países— y con indicadores que tengan la mayor cobertura temporal posible.

1. Percepciones sobre el desempleo y el empleo

Desde el punto de vista de la evolución económica, el período 1996-2009 puede dividirse en tres etapas: una de turbulencias (1996-2002), otra de crecimiento sostenido (2003-2008) y una, más reciente, en que se experimentaron los efectos de la crisis financiera global desencadenada a mediados de 2008. Dentro de la primera fase, el crecimiento se desaceleró en 1998, a lo que siguió un estancamiento en 1999 y una recuperación en 2000. Tras una expansión del 0,4% en 2001, el PIB descendió un 0,6% en 2002. Por otra parte, entre 2003 y 2008 se registró un período inédito en la historia regional, definido por seis años consecutivos de crecimiento económico sostenido. Este período llegó a su fin en 2009, en que, en el contexto de la crisis internacional, la región experimentó una caída del 3% del PIB por habitante.

En general, la evolución de las tasas de desempleo y de ocupación en la región ha seguido el comportamiento del ciclo económico. El desempleo aumentó entre 1998 y 2002, para decrecer sistemáticamente entre 2003 y 2008 (en este último año se verificó la tasa de desempleo más baja de todo el período objeto de estudio) y aumentar nuevamente

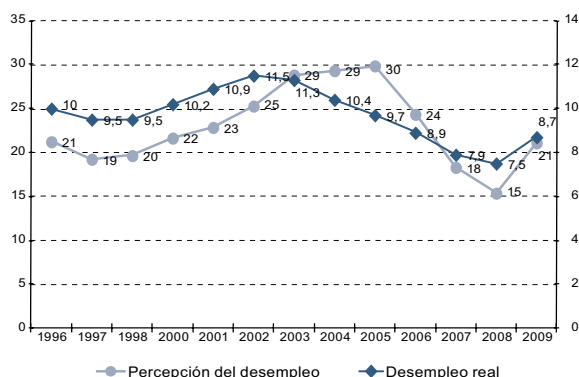
en 2009, aunque el impacto de la crisis internacional en el mercado laboral fue menor de lo que se había previsto inicialmente. Otros aspectos que se deben tener en cuenta son las mayores tasas de desempleo que afectan a las mujeres y a los jóvenes más pobres, ya que esas brechas se han mantenido e, incluso, profundizado en los últimos años (véase el capítulo III en este mismo documento).

Uno de los pocos indicadores subjetivos para el que existe información en casi todos los años del período 1996-2009 es la percepción del desempleo como principal problema del país⁸. En el gráfico I.18 se aprecia que esa percepción varió más o menos en línea con el desempleo real regional (correlación simple de 0,67), con la excepción del período

⁸ Con la formulación de una pregunta abierta sobre el problema principal del país se pone menos de relieve (se dificulta o se hace más lenta la recuperación de información) por parte de los entrevistados de los problemas del mercado de trabajo distintos al desempleo (bajos salarios, inestabilidad en el empleo) que si se usa una pregunta cerrada que incluya estos últimos aspectos. Por ejemplo, entre 1996 y 2003, el 9% de los entrevistados por Latinobarómetro mencionó

2002-2005, en que la percepción del desempleo como problema principal aumentó del 25,3% al 29,9%, mientras que el desempleo real disminuyó del 11,5% al 9,7%. A su vez, en el tramo de años inmediatamente posterior (de 2005 a 2008), la percepción del desempleo como problema principal se redujo más rápidamente que el desempleo real. Así, la recuperación que siguió a la crisis de 2001 y 2002 tuvo lugar inicialmente en un contexto de deterioro de las expectativas de la población sobre la capacidad de generación de empleos, y luego en un escenario de “ajuste acelerado” de las percepciones sobre el comportamiento del desempleo.

Gráfico I.18
AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): PERCEPCIÓN DEL DESEMPLEO COMO PROBLEMA PRINCIPAL DEL PAÍS^{a,b} Y TASA MEDIA DE DESEMPLEO^c, 1996-2009
(En porcentajes)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de datos de Latinobarómetro, 1996-2009 y la base de datos CEPALSTAT [en línea] <http://websie.eclac.cl/infest/ajax/cepalstat.asp?carpeta=estadisticas>.

^a Entre 1996 y 2003, los entrevistados debían seleccionar el problema principal a partir de un listado de preguntas predefinidas. De 2004 en adelante se comenzó a usar una pregunta abierta.

^b Los datos sobre República Dominicana están disponibles desde 2004.

^c Promedio simple para 18 países de América Latina.

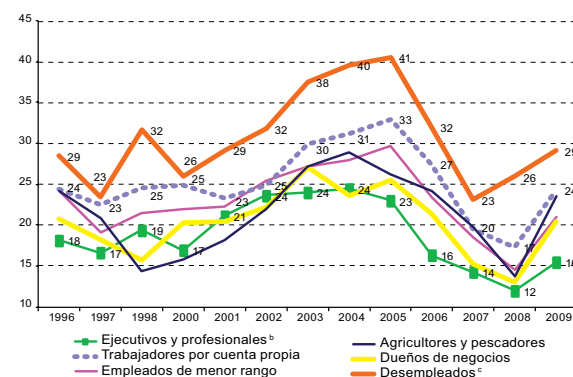
En contraste con el panorama que ofrecen las cifras objetivas de desempleo, la percepción de la falta de trabajo como problema principal no fue significativamente mayor entre las mujeres y los jóvenes más pobres que en el conjunto de la población. En efecto, entre 1996 y 2006, la percepción promedio del desempleo como principal problema del país llegó al 25,3% entre las mujeres con dos o tres necesidades básicas insatisfechas (NBI), y al 24,7% entre los individuos de 15 a 29 años con dos o tres NBI⁹,

los bajos salarios como el principal problema del país, mientras que entre 2004 y 2009 (años de pregunta abierta), este promedio fue solo de un 1,4%. Ocurre lo mismo con la inestabilidad del empleo (valores de 5,5% y 0,7% respectivamente). En cambio, las menciones al desempleo como problema principal no varían sustancialmente ante la modificación de la pregunta (22,7% y 23,1% en 1996-2003 y 2004-2009, respectivamente).

⁹ Las NBI son: nivel de escolarización inferior a la educación primaria y carencia de alcantarillado y de agua potable.

valores muy cercanos al 24,2% apreciado para toda la muestra de Latinobarómetro. En cambio, sí hay diferencias según la situación ocupacional: entre 1996 y 2009, los desempleados mencionaron más que todos los otros grupos el desempleo como principal problema del país, seguidos por los trabajadores por cuenta propia. Por el contrario, el grupo compuesto por ejecutivos de rango medio y alto y profesionales tendió a identificar el desempleo como problema principal del país en menor proporción que el resto de los grupos (véase el gráfico I.19).

Gráfico I.19
AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): PERCEPCIÓN DEL DESEMPLEO COMO PRINCIPAL PROBLEMA DEL PAÍS SEGÚN LA SITUACIÓN OCUPACIONAL DE LOS ENTREVISTADOS^a, 1996-2009
(En porcentajes de población)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de la base de datos de Latinobarómetro, 1996-2009.

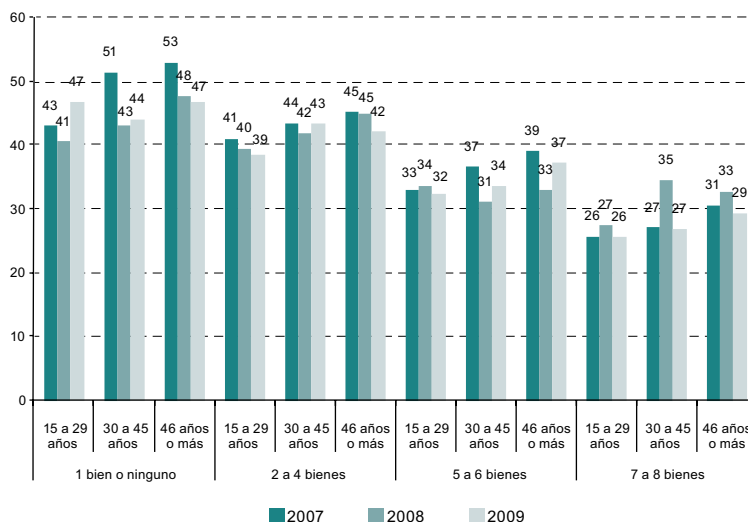
^a Entre 1996 y 2003, los entrevistados debían seleccionar el problema principal de un listado de preguntas predefinidas. Desde 2004 se usa una pregunta abierta. Los datos sobre la República Dominicana están disponibles desde 2004.

^b Incluye altos ejecutivos, ejecutivos de rango medio y profesionales independientes y dependientes.

^c Incluye a las personas que declararon no tener temporalmente trabajo en el momento de la realización de la entrevista.

Otro indicador es el de las percepciones de la población sobre las oportunidades para conseguir empleo en el país. Al ejecutar regresiones para los años 2007, 2008 y 2009, y considerando como predictores de la percepción de oportunidades de empleo el sexo, la edad, la situación socioeconómica, la escolarización y la situación ocupacional, se obtiene que la percepción de oportunidades laborales decae en la medida en que disminuye la tenencia de bienes en el hogar (véase el gráfico I.20). También se aprecia una reducción de la percepción de oportunidades de empleo entre los desempleados y, en menor medida, entre los ocupados por cuenta propia. Por otra parte, la percepción de oportunidades de empleo se incrementa entre los jóvenes de 15 a 29 años y también entre quienes tienen entre 30 y 45 años, en contraste con las personas de 46 años o más. No se aprecian diferencias estadísticas significativas por sexo.

Gráfico I.20
AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): PERCEPCIÓN DE LA FALTA DE OPORTUNIDADES PARA CONSEGUIR EMPLEO EN EL PAÍS^a, POR EDAD Y TENENCIA DE BIENES^b, 2007, 2008 Y 2009
 (En porcentajes de población que opinan que no hay garantías para conseguir empleo)



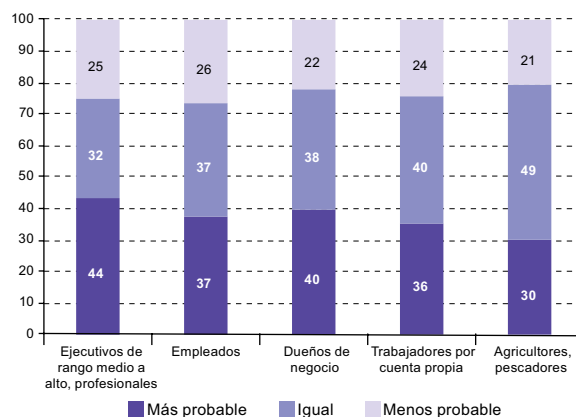
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de la base de datos de Latinobarómetro, 2007, 2008 y 2009.

^a El porcentaje incluye a las personas que eligieron la alternativa "nada garantizadas" ante la pregunta: "¿Hasta qué punto están garantizadas en su país las oportunidades de conseguir empleo? Las alternativas restantes de respuesta son: totalmente, algo o poco garantizadas".

^b En el indicador de tenencia de bienes y acceso a servicios básicos en el hogar se incluye la posesión de: 1) heladera/refrigerador, 2) lavarropas, 3) teléfono de red fija, 4) computador, 5) agua caliente de cañería, 6) auto, 7) alcantarillado y 8) teléfono celular.

Así, la situación socioeconómica del hogar y la inserción ocupacional se asocian con las percepciones sobre las oportunidades laborales y con la relevancia que se atribuye al desempleo como problema del país. Llama la atención que no parece haber diferencia entre sexos en las percepciones sobre las oportunidades laborales y la gravedad del problema del desempleo, lo que sugiere que, para una proporción importante de mujeres, los problemas del mercado de trabajo no serían todo lo acuciantes que sugieren los "datos duros", lo que podría explicarse por la persistencia de creencias y estereotipos de roles de género tradicionales¹⁰. A su vez, el mayor pesimismo de las personas de 46 años o más con respecto a las oportunidades de empleo puede explicarse porque, a igualdad de calificaciones, tendrían más dificultades a la hora de postular y conseguir empleo, por los límites de edad que usualmente se establecen en los requisitos de postulación a trabajos. La misma explicación puede servir para dar cuenta del mayor optimismo de los jóvenes (véase el gráfico I.21).

Gráfico I.21
AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): PERCEPCIÓN DE LA PROBABILIDAD DE ACEPTACIÓN Y PROMOCIÓN EN UN TRABAJO DE UN MENOR DE 30 AÑOS EN COMPARACIÓN CON UN MAYOR DE 30 AÑOS^a, POR TIPO DE OCUPACIÓN, 2008
 (En porcentajes de población)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de la base de datos de Latinobarómetro, 2008.

^a La pregunta usada en Latinobarómetro 2008 es la siguiente: "¿Diría usted que, ante iguales calificaciones o títulos, es más probable, igual de probable o menos probable que sea promovida o aceptada en un trabajo una persona menor de 30 comparada con una mayor de 30?".

¹⁰ En los modelos de roles de género tradicionales, el hombre es quien debe ser el proveedor principal (si no exclusivo) del hogar, y por tanto, para este será más imperiosa la necesidad de obtener empleo.

2. Percepciones sobre el funcionamiento de las instituciones laborales

Las percepciones sobre la calidad del funcionamiento de las instituciones laborales deben analizarse considerando no solo las inserciones y trayectorias ocupacionales que definen las experiencias de los sujetos en el mercado de trabajo, sino también algunos elementos contextuales relevantes para los países de la región, como la institucionalidad laboral y la heterogeneidad de la estructura productiva en los países de América Latina (para obtener información más detallada sobre este último tema, véase el capítulo III).

La heterogeneidad de la estructura productiva incide en el funcionamiento de las instituciones laborales. La segmentación se expresa en brechas de productividad y salariales entre los sectores integrados a la economía internacional y los orientados al mercado interno. En el primer sector se evidencian mayores niveles de formalización y acceso a la seguridad social, mientras que el segundo presenta la situación opuesta. Por su parte, las reformas a la institucionalidad laboral, implementadas mayoritariamente durante la década de 1990, fomentaron la desregulación y flexibilización de los mercados laborales con objeto de incrementar los niveles de eficiencia y creación de

empleo (Weller, 2009), y se vincularon con una tendencia hacia la precarización de las ocupaciones y del acceso a la protección social. Se debe tener en cuenta, sin embargo, que algunos países que impulsaron inicialmente reformas las revirtieron posteriormente.

Una consecuencia de las reformas debería ser la erosión del poder de negociación de los asalariados, expresada en una menor densidad sindical y en una menor capacidad de negociación colectiva, pero la información disponible no permite emitir un juicio concluyente. Lo más que se puede decir sobre América Latina es que una minoría de asalariados está sindicalizada, que la densidad sindical es más baja que la de los países desarrollados con Estados de bienestar de inspiración socialdemócrata, y que el tamaño de los sindicatos es mucho más reducido que en los países desarrollados (exceptuando el Japón y la República de Corea), lo cual sugiere una considerable fragmentación sindical (véase el cuadro I.5). Además, en la mayoría de los países de la región, la negociación colectiva solo cubre entre el 8% y el 10% de los asalariados (CEPAL, 2011b).

Cuadro I.5
AMÉRICA LATINA (10 PAÍSES) Y PAÍSES DESARROLLADOS: INDICADORES DE SINDICALIZACIÓN DE LOS ASALARIADOS

Países	Densidad sindical ^a				Tamaño medio de los sindicatos ^b	
	Año	En porcentajes	Año	En porcentajes	Años	Promedio
América Latina						
Argentina	2006	37,6
Bolivia (Estado Plurinacional de) ^c	2006	26,6
Brasil	1988	27,7	2007	20,9	1988 y 1992	1 677
Chile ^d	1990	13,4	2008	11,9	1991-2008	81
Colombia	1997	28,7	1984-1997	187
El Salvador	1992	21,7	2008	11,9
Guatemala	1991	10,4 ^e	2006	12,9	1980-1992	98
México	2008	17,0
Nicaragua	2006	4,1
Uruguay	2006	19,0
Países desarrollados						
Dinamarca	1994	93,6	2008	99,2	1987-2004	18 942
Finlandia	1990	88,1	2006	68,0	1989-2004	21 473
Suecia	1991	97,6	2007	73,6	1989-2005	59 149
Noruega	1996	73,3	2006	52,9
Alemania	1991	34,8	2007	19,9
España	2007	14,5
Estados Unidos	1990	16,1	2007	11,4
Reino Unido ^f	1992	36,2	2007	28,0	1980-1998	31 927
Nueva Zelanda	1992	28,8	2008	20,8	1985-2004	3 390
República de Corea	1990	18,4	2006	10,0	1980-2008	273
Japón	1990	25,2	2007	18,0	1980-2008	170

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Organización Internacional del Trabajo (OIT), *Negociación colectiva: la negociación por la justicia social. Reunión tripartita de alto nivel sobre la negociación colectiva*, Ginebra, 19-20 de noviembre de 2009, Ginebra, 2010 y la base de datos Dialogue Data [en línea] <http://www.ilo.org/public/english/dialogue/ifpdial/info/dialdata.htm>.

^a Porcentaje de la población asalariada.

^b Promedio interanual.

^c Porcentaje del empleo total.

^d Porcentaje de los asalariados en el sector privado.

^e Porcentaje de la población asalariada, estimación de la CEPAL, a partir de información de la base de datos Dialogue Data [en línea] <http://www.ilo.org/public/english/dialogue/ifpdial/info/dialdata.htm>.

^f Valor facilitado por el país.

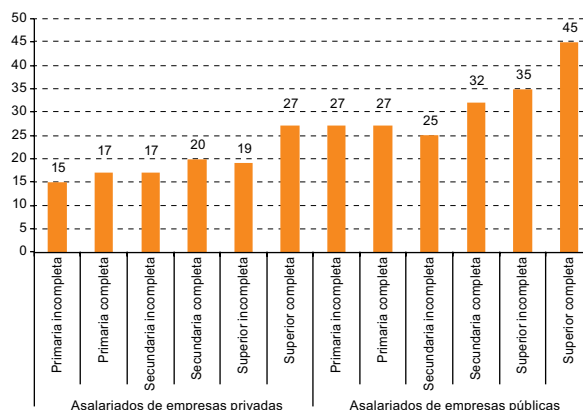
Dentro de la región, la Argentina y el Brasil son excepciones, dado que tienen mayores niveles de densidad sindical y negociación colectiva (CEPAL, 2011b). También se debe mencionar a Bolivia (Estado Plurinacional de), que es el segundo país con mayor densidad sindical de la región. La otra cara de la moneda es Chile, que fue pionero en las reformas laborales¹¹ y que, a fines de la década pasada, presentaba el índice de afiliación sindical más bajo (junto a El Salvador) y el tamaño medio de sus sindicatos era el menor de América Latina. En todos los países, los trabajadores del sector público disfrutaban de una mejor situación de sindicalización y negociación colectiva que el resto de la fuerza laboral (CEPAL, 2011b).

A la baja densidad sindical, el reducido tamaño de los sindicatos y la escasa incidencia de la negociación colectiva se suma que la experiencia de sindicalización es más frecuente entre los ocupados con mayor nivel educativo y entre los asalariados de empresas públicas (véase el gráfico I.22). Así, las personas que más requieren de la afiliación a sindicatos como un mecanismo para incrementar su poder de negociación y acceder a protección y derechos son quienes menos han tenido la experiencia de sindicalización. No obstante, el indicador que se presenta no es una medida de la afiliación presente a sindicatos, sino que ilustra la dificultad que enfrenta la organización sindical de los trabajadores menos escolarizados y que se insertan en empresas privadas. Al respecto, Katzman (2010) plantea que las brechas de sindicalización asociadas con los niveles de calificación expresan los procesos de segmentación de los mercados de trabajo, que amplifican las diferencias en las opciones de construcción de capital social colectivo¹².

¹¹ En Chile, las reformas laborales se implementaron entre 1978 y 1981. En ellas se reconocía el derecho de organización sindical en el marco único de la empresa y se promovía la voluntariedad de la afiliación y el pluralismo sindical, fomentando la creación de sindicatos dentro de las empresas. También se excluyó del campo de competencia de la negociación colectiva las materias que limitaban la facultad del empleador para dirigir y administrar su empresa, y se limitó el derecho de huelga a 60 días; después de ese período, se aplicaban las propuestas del empleador. En algunos sectores de actividad, como la salud, la seguridad nacional y otras, quedaba prohibido recurrir a huelga.

¹² Dado que la calificación se asocia positivamente con la capacidad para articular demandas colectivas, una mayor diversidad de las calificaciones en un mismo lugar de trabajo incrementaría las oportunidades para los no calificados de participar en organizaciones que les permitieran defender sus intereses y derechos. Por el contrario, ocuparse en empleos donde los pares tengan niveles de capital educativo homogéneamente bajos disminuirá las oportunidades de contar con respaldos organizacionales para acceder a protecciones y derechos (Katzman, 2010).

Gráfico I.22
AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): EXPERIENCIA DE PARTICIPACIÓN EN SINDICATOS O GREMIOS POR NIVEL EDUCATIVO E INSERCIÓN OCUPACIONAL, 2007^a
(En porcentajes)



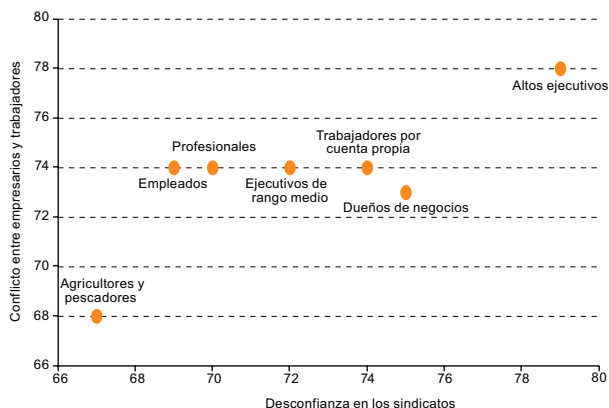
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de la base de datos de Latinobarómetro, 2007.

^a El valor registrado corresponde a la suma de los porcentajes de personas que declaran participar activamente en sindicatos, que declaran estar afiliados pero no participar activamente y que declaran haber participado alguna vez.

Un factor adicional es la desconfianza en las organizaciones sindicales, que se ha mantenido en un nivel muy alto durante los últimos 15 años en América Latina (en 1996, el porcentaje de personas que declaraba tener poca o ninguna confianza en los sindicatos llegaba al 70%, mientras que en 2009 este valor alcanzó el 67%). La desconfianza en los sindicatos¹³ no solo puede desincentivar la afiliación entre los trabajadores, sino también llevar a un clima negativo la formación de estas organizaciones en las empresas. En el gráfico I.23 se aprecia que los altos ejecutivos (gerentes o directores) son el grupo ocupacional que manifiesta una mayor desconfianza en los sindicatos y que percibe un mayor conflicto entre empresarios y trabajadores. En la práctica, constituiría una seria dificultad para el diálogo social, puesto que la predisposición de la patronal y de la gerencia ante los sindicatos es clave para que estos puedan constituirse y mantenerse. De cualquier modo, esos datos deben ser interpretados con precaución, tanto por las restricciones en los tamaños de muestra del grupo de altos ejecutivos, como porque se agrega información de varios años, lo cual puede ocultar la existencia de cambios en el período en estudio.

¹³ Esta tendencia es similar a la apreciada respecto a otras instituciones.

Gráfico I.23
AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES ^a): DESCONFIANZA EN LOS SINDICATOS ^b Y PERCEPCIÓN DE CONFLICTO ENTRE EMPRESARIOS Y TRABAJADORES ^c, POR TIPO DE OCUPACIÓN, 1996-2009 ^d
 (En porcentajes)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de la base de datos de Latinobarómetro, 1996-2009.

^a Los datos sobre la República Dominicana están disponibles a partir de 2004.

^b Pregunta usada en la encuesta Latinobarómetro: "¿Me podría decir cuánta confianza tiene usted en los sindicatos: mucha, algo, poca o ninguna confianza?". Los valores registrados corresponden al porcentaje que declaró confiar poco o no tener ninguna confianza en los sindicatos.

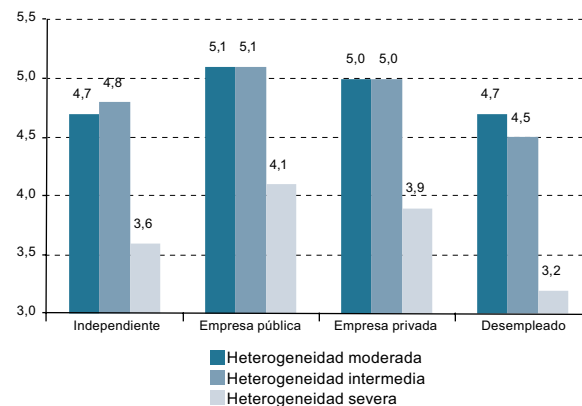
^c Pregunta usada en la encuesta Latinobarómetro: "En todos los países hay diferencias o incluso conflictos entre diferentes grupos sociales. En su opinión, ¿cuán fuerte es el conflicto entre empresarios y trabajadores?: ¿es muy fuerte, fuerte, débil o no existe conflicto?". Los valores registrados corresponden al porcentaje que afirmó la existencia de conflicto muy fuerte o fuerte.

^d En cuanto a la pregunta sobre la confianza en los sindicatos, los datos registrados se obtuvieron agregando las observaciones disponibles para 1996, 2003, 2004, 2005, 2008 y 2009. Para la pregunta sobre el conflicto entre empresarios y trabajadores, los datos registrados se obtuvieron agregando la información sobre 2007 y 2008.

En este escenario, no es extraño que las percepciones sobre el cumplimiento de la ley laboral (entre otras, las normas relativas a la firma de contratos de trabajo, a despido e indemnización, a duración de la jornada laboral, al pago de horas extraordinarias y al salario mínimo) sean más negativas entre quienes residen en países con heterogeneidad estructural severa y entre los desempleados y los trabajadores por cuenta propia. En cambio, las percepciones son más positivas entre quienes viven en países con heterogeneidad estructural moderada e intermedia y entre los asalariados. En todo caso, la similitud de los valores para los asalariados de los sectores público y privado contrasta con la mayor incidencia de la sindicalización y la negociación colectiva en el sector público, lo que debería expresarse en un mayor cumplimiento de la ley laboral en este sector. Quizás lo que nivela las percepciones es que los estándares utilizados para evaluar el cumplimiento de las leyes laborales por los asalariados en empresas públicas sean más exigentes que las que se aplican en el caso de los asalariados del sector privado.

Gráfico I.24
AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): PERCEPCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY LABORAL, SEGÚN LA INSERCIÓN OCUPACIONAL DE LOS ENTREVISTADOS Y LA HETEROGENEIDAD ESTRUCTURAL DEL PAÍS ^a, 2006

(En promedios simples, escala de 1 a 10, donde 1 = total incumplimiento de la ley laboral y 10 = total cumplimiento de la ley laboral ^b)



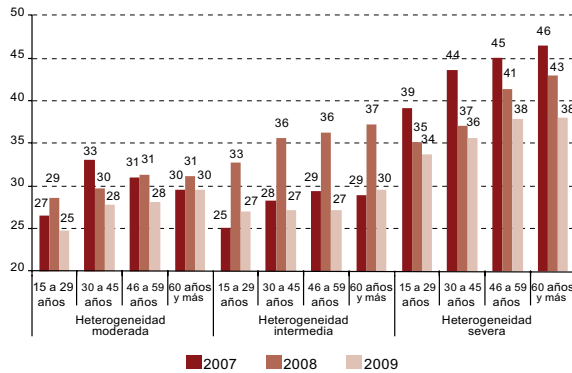
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de la base de datos de Latinobarómetro, 2006 y CEPAL, "Empleo y protección social. Borrador para comentarios", 2011, inédito.

^a Los países fueron clasificados por CEPAL (2011a) sobre la base de criterios como las brechas de productividad entre los sectores de actividad, los porcentajes de ocupación en estos, el aporte relativo de los sectores al PIB y algunos indicadores de desempeño (ingreso por habitante, empleo, desigualdad y pobreza) relacionados con la estructura del mercado de trabajo. Este ejercicio dio lugar a los siguientes grupos: heterogeneidad estructural moderada: la Argentina, Chile, Costa Rica, México y el Uruguay, heterogeneidad estructural intermedia: el Brasil, Colombia, Panamá y Venezuela (República Bolivariana de), y heterogeneidad estructural severa: Bolivia (Estado Plurinacional de), el Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, el Paraguay, el Perú y la República Dominicana.

^b Escala sumatoria no ponderada construida sobre la base de cuatro preguntas relativas al cumplimiento de la ley en: 1) la firma de un contrato de trabajo; 2) despido e indemnización; 3) jornada laboral y horas extraordinarias; 4) pago de salario mínimo. La consistencia interna de la escala alcanza 0,89 (coeficiente alfa); la escala es unidimensional; las preguntas se correlacionan en un factor que explica el 76% de la variabilidad.

A su vez, un elemento recurrente en las evaluaciones objetivas de la protección social contributiva, en contextos marcados por la heterogeneidad estructural, ha sido la constatación de una generalizada falta de acceso a la seguridad social (CEPAL, 2006, 2010). De hecho, a 2009 solo un 46% de los ocupados latinoamericanos estaba afiliado a la seguridad social, siendo más bajas las tasas en los países que presentan una heterogeneidad estructural severa (CEPAL, 2011b). Al respecto, en el gráfico I.25 se muestra una convergencia entre el diagnóstico basado en datos "objetivos" y el obtenido por las percepciones: las calificaciones negativas de la seguridad social son más frecuentes en la población de los países con heterogeneidad estructural severa, y menos en los países con heterogeneidad moderada e intermedia. Se debe notar también el incremento de las percepciones negativas en los grupos de mayor edad, situación más pronunciada en los países con heterogeneidad estructural severa.

Gráfico I.25
AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): PERCEPCIÓN DE QUE NO HAY GARANTÍAS DE SEGURIDAD SOCIAL^a POR GRUPOS DE EDAD Y HETEROGENEIDAD ESTRUCTURAL DE PAÍS^b, 2007, 2008 Y 2009
 (En porcentaje de población que opina que no hay garantías de seguridad social en el país)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de la base de datos de Latinobarómetro, 2007, 2008 y 2009; y CEPAL, "Empleo y protección social. Borrador para comentarios", 2011, inédito.

^a El porcentaje incluye a las personas que eligieron la alternativa "nada garantizadas" ante la pregunta: "¿Hasta qué punto están garantizadas en su país las oportunidades de conseguir empleo?". Las alternativas restantes de respuesta son: totalmente, algo o poco garantizadas.

^b Grupos de países: heterogeneidad estructural moderada: la Argentina, Chile, Costa Rica, México y el Uruguay; heterogeneidad estructural intermedia: el Brasil, Colombia, Panamá y Venezuela (República Bolivariana de), y heterogeneidad estructural severa: Bolivia (Estado Plurinacional de), el Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, el Paraguay, el Perú y la República Dominicana.

Aunque las diferencias por edades no son tan importantes en los países con niveles de heterogeneidad más bajos, existe la posibilidad de plantear algunas conjeturas que pueden servir para posteriores estudios y que tienen implicaciones de política. La mayor incidencia

de las calificaciones negativas de la seguridad social en la población de más edad no parece difícil de explicar, ya que esta población tiene que lidiar directamente con las dificultades de vida asociadas a no tener una pensión, o a contar con una jubilación insuficiente para satisfacer necesidades básicas o sostener el estándar de vida previo al retiro¹⁴. En cambio, para los más jóvenes los problemas relacionados con la seguridad social podrían no parecer tan relevantes, porque se encuentran en una etapa de la vida muy lejana a la jubilación, y también porque podrían subestimar las consecuencias futuras de no contar con un ingreso en el momento de dejar la fuerza de trabajo.

En suma, los problemas de funcionamiento de las instituciones del mercado de trabajo (que se manifiestan en bajos niveles de sindicalización, negociación colectiva y acceso a la seguridad social) tienen su correlato subjetivo en altas percepciones de conflicto entre empresarios y trabajadores, en la desconfianza en las organizaciones sindicales (particularmente por parte de los altos ejecutivos y gerentes), en la percepción de bajos niveles de cumplimiento de la ley laboral y en la creencia de que faltan garantías de seguridad social (principalmente entre quienes residen en los países con mayor heterogeneidad estructural). Estos datos contrastan con los avances en la ratificación de convenios internacionales de trabajo decente que muestran los países de la región¹⁵, lo que pone de relieve una brecha entre la situación *de jure* y la *de facto*, y con ello la necesidad de acciones que mejoren la institucionalidad laboral y la organización, el poder de negociación y el acceso a derechos de la fuerza laboral, con objeto de avanzar hacia un diálogo social efectivo entre empresarios y trabajadores.

3. Sentimientos de incertidumbre y bienestar o malestar asociados al mundo del trabajo

En los últimos años se ha venido prestando atención a los sentimientos de incertidumbre asociados al mundo del trabajo, que pueden erosionar la calidad de vida¹⁶. Las posibles fuentes de inseguridad son múltiples, operan a distintos niveles y pueden relacionarse entre sí. Una es la destrucción de empleos asociada al ciclo económico. Otra fuente, propia de las economías que se caracterizan por la segmentación y heterogeneidad estructural, es la ocupación en empleos de baja productividad, donde la desprotección, la inestabilidad laboral y los bajos ingresos son la norma. Una tercera fuente, estudiada por sus efectos psicosociales en las economías desarrolladas (Salama, 2005), proviene de los cambios en los modelos de organización del trabajo en el sector formal, que se concretan en la tecnología que sustituye al trabajo humano, en la externalización

de servicios y en la flexibilización salarial y del trabajo. Una última fuente de inseguridad tiene que ver con los cambios inducidos por la sociedad de la información, en

¹⁴ La intensificación de la percepción de falta de garantías de seguridad social en los adultos mayores no es una dificultad menor, puesto que en esta etapa del ciclo vital se erosiona la capacidad de organización, movilización y negociación (no se está hablando aquí de la "élite" de adultos mayores).

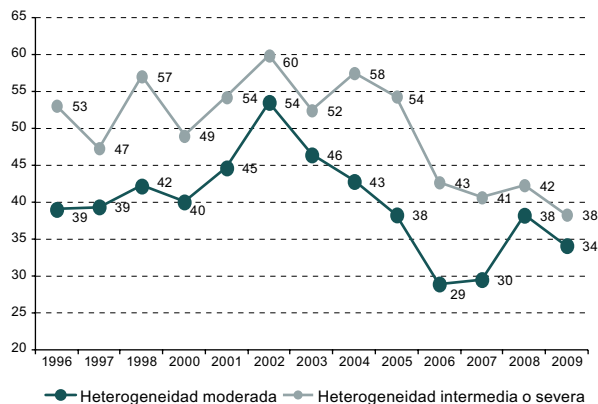
¹⁵ Si se toma como parámetro la noción de trabajo decente, la región muestra niveles muy avanzados de ratificación de convenios internacionales, así como tendencias recientes positivas. En 2010, los países latinoamericanos habían avanzado en este campo, al aumentar de un 93% a un 97% las ratificaciones de los ocho convenios fundamentales (CEPAL, 2011).

¹⁶ En los países desarrollados se ha obtenido evidencia de que una mayor inseguridad laboral se asocia a problemas de salud mental y a dificultades en las relaciones familiares (Burchell, 2005).

que la acumulación de capital humano se convierte en un activo fundamental para acceder a empleos más estables y mejor remunerados.

La incidencia de las dos primeras fuentes de incertidumbre se puede visualizar en el gráfico I.26. El temor a perder el empleo en los próximos 12 meses tiende a aumentar en momentos de contracción económica y se reduce en los años de expansión. A su vez, a lo largo de todo el período analizado, el temor es mayor en la población que vive en países con heterogeneidad estructural intermedia y severa, y menor en quienes habitan en países con heterogeneidad estructural moderada. No obstante, para ambos grupos de países la tendencia dominante ha sido una considerable remisión del temor a perder el empleo, situación más pronunciada en los países con heterogeneidad intermedia o severa. Esto último se ha traducido en una reducción de la brecha de temor al desempleo según la heterogeneidad estructural de los países.

Gráfico I.26
AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES^a): TEMOR A PERDER EL EMPLEO EN LOS PRÓXIMOS 12 MESES^b, SEGÚN LA HETEROGENEIDAD ESTRUCTURAL DE LOS PAÍSES^c, 1996-2009
(En porcentaje de población muy preocupada por la posibilidad de perder el empleo)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de la base de datos de Latinobarómetro, 1996-2009 y CEPAL, "Empleo y protección social. Borrador para comentarios", 2011, inédito.

^a Los datos sobre la República Dominicana están disponibles a partir de 2004.

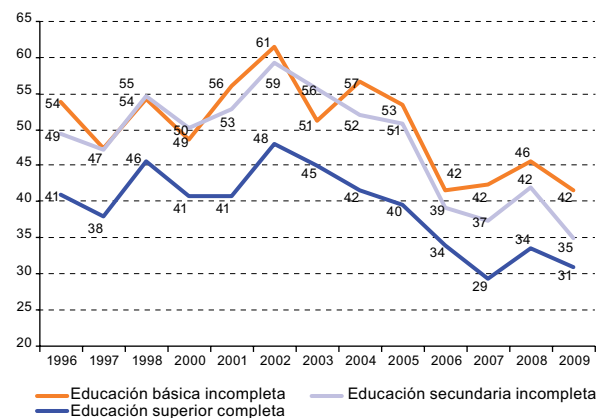
^b La pregunta usada en Latinobarómetro es la siguiente: "¿Cuán preocupado diría usted que está de quedar sin trabajo o de estar desempleado durante los próximos meses, o usted no tiene trabajo?". Se excluye del cálculo a la población que declaró no tener trabajo.

^c Grupos de países: heterogeneidad estructural moderada: la Argentina, Chile, Costa Rica, México y el Uruguay; heterogeneidad estructural intermedia: el Brasil, Colombia, Panamá y Venezuela (República Bolivariana de), y heterogeneidad estructural severa: Bolivia (Estado Plurinacional de), el Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, el Paraguay, el Perú y la República Dominicana.

El efecto de la inserción laboral precaria en el temor a perder el empleo puede analizarse a partir de microdatos, en conjunto con otros factores, como el nivel educativo, el sexo y la edad del entrevistado. Con ese fin se realizó una regresión considerando toda la muestra de Latinobarómetro de 1996 a 2006. El análisis permitió establecer que el temor a perder el empleo se incrementa significativamente en las

personas con menor escolarización, en los ocupados por cuenta propia y en los empleados de rango bajo o medio (véanse los gráficos I.27 y I.28). Asimismo, el temor a quedar desempleado disminuye entre los hombres y en las personas de mayor edad (véase el cuadro I.A-4 en el anexo del capítulo I).

Gráfico I.27
AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES^a): TEMOR A PERDER EL EMPLEO EN LOS PRÓXIMOS 12 MESES^b SEGÚN NIVEL EDUCACIONAL, 1996-2009
(En porcentaje de población muy preocupada por la posibilidad de perder el empleo)

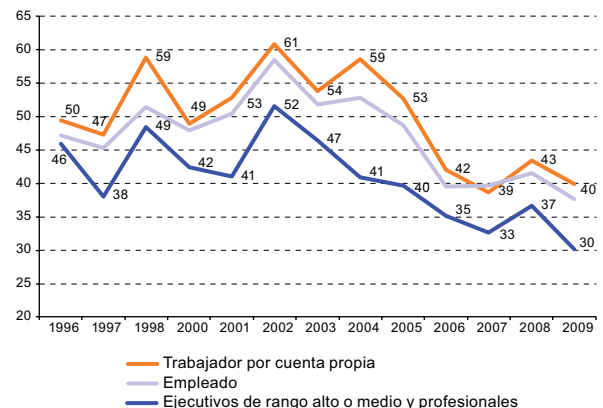


Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de la base de datos de Latinobarómetro, 1996-2009.

^a Los datos sobre la República Dominicana están disponibles a partir de 2004.

^b La pregunta formulada en Latinobarómetro es la siguiente: "¿Cuán preocupado diría usted que está de quedar sin trabajo o de estar desempleado durante los próximos meses, o usted no tiene trabajo?". Se excluye del cálculo a la población que declaró no tener trabajo.

Gráfico I.28
AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES^a): TEMOR A PERDER EL EMPLEO EN LOS PRÓXIMOS 12 MESES^b SEGÚN SITUACIÓN OCUPACIONAL, 1996-2009
(En porcentaje de la población muy preocupada por perder el empleo)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de la base de datos de Latinobarómetro, 1996-2009.

^a Los datos sobre la República Dominicana están disponibles a partir de 2004.

^b La pregunta formulada en Latinobarómetro es la siguiente: "¿Cuán preocupado diría usted que está de quedar sin trabajo o de estar desempleado durante los próximos meses, o usted no tiene trabajo?". Se excluye del cálculo a la población que declaró no tener trabajo.

En todo caso, el indicador del temor a perder el empleo es una aproximación a la incertidumbre “coyuntural” vinculada al funcionamiento del mercado laboral y a los ciclos económicos, y no basta para determinar si las nuevas modalidades de estructuración productiva están erosionando la construcción de proyectos de vida a partir de la expectativa de establecer un vínculo laboral permanente y con niveles de protección social sustanciales (Kaztman, 2010). Así, para tener una visión más definida con respecto a si algunos grupos —particularmente los más vulnerables— han dejado de lado la noción del “empleo de por vida” para la formulación de sus proyectos vitales, se requieren estudios adicionales. De cualquier modo, en los países de la región que se caracterizan desde hace tiempo por una heterogeneidad estructural severa, la garantía del empleo de por vida ha quedado limitada a grupos minoritarios y, por lo tanto, es posible que la hipótesis se aplique más a los países que en algún momento lograron que un segmento importante de la población accediera a empleos más o menos seguros y estables en el tiempo.

Otra cuestión de interés es la relación entre el empleo y algunos indicadores de bienestar subjetivo. En este caso hay dos elementos que se deben considerar: por una parte, la población ha interiorizado la noción de que las aspiraciones materiales se satisfacen con empleos bien pagados, estables y protegidos. Desde esta lógica, quienes se encuentran en situación de desempleo o sufren incertidumbres laborales encontrarían barreras para su integración social y para la afirmación de sus identidades y autoestima (Kaztman, 2010). Simultáneamente, estas personas podrían experimentar una brecha entre aspiraciones y expectativas, lo cual repercutiría en un menor bienestar subjetivo (CEPAL, 2007). Por otra parte, la experiencia laboral habría dejado de ser la fuente principal de mejoramiento del bienestar de modo autónomo, por la devaluación de los créditos socialmente otorgados a las competencias adquiridas en los lugares de trabajo (Kaztman, 2010).

En el estudio de Latinobarómetro de 2007 se incluyó por primera vez una pregunta sobre el grado de satisfacción con el trabajo, que puede servir para analizar la relación entre el tipo de empleo y el bienestar medido a través de indicadores subjetivos. A modo de advertencia, se debe considerar que esta no es la única vía para explorar dicha relación, pero fue seleccionada por ser la única pregunta disponible en la investigación de Latinobarómetro que permite abordar directamente esta asociación¹⁷. También

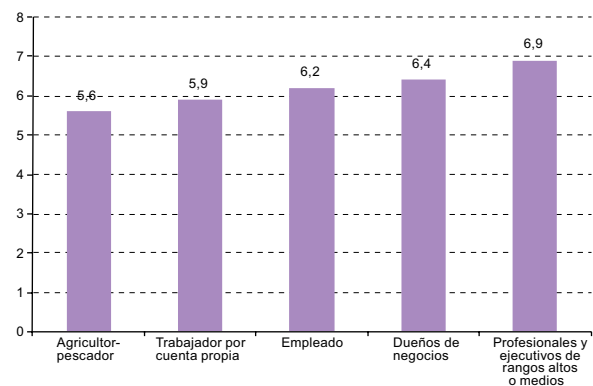
¹⁷ Las preguntas sobre el grado de satisfacción forman parte de la vertiente cognitiva de la tradición de bienestar subjetivo (la otra rama dentro de dicha vertiente analiza los flujos de placer y dolor). En paralelo, hay otra tradición, de bienestar psicológico, que se ocupa de los sentimientos de autorrealización (perspectiva de eudaimonía). A su vez, se debe notar que la satisfacción con el dominio laboral y con la vida como un todo no son idénticas: una persona puede estar satisfecha con su trabajo e insatisfecha con la vida. Para más detalles, véase Villatoro (2011).

se debe considerar que, en términos intrínsecos¹⁸, la evaluación de la satisfacción con el trabajo se refiere a la distancia que perciben los sujetos con respecto a algún umbral de comparación (que puede ser absoluto o relativo). Uno de los riesgos que amenaza la validez de este tipo de medidas es la adaptación de las expectativas (la reducción de la intensidad de la respuesta ante la reiteración de un estímulo o “tratamiento”). De materializarse este riesgo, sujetos con empleos muy diferentes presentarán niveles similares de satisfacción con su trabajo.

En los gráficos I.29 y I.30 pueden apreciarse diferencias significativas en los grados de satisfacción con el trabajo según el tipo de empleo y el nivel de escolarización, lo que indica que la adaptación no elimina el efecto de la calidad de los empleos obtenidos ni de la educación alcanzada. Así, la satisfacción con el trabajo es mayor entre los profesionales y ejecutivos de rango medio y alto, y menor entre los agricultores y pescadores. A su vez, quienes tienen educación superior incompleta o completa están más satisfechos que las personas con educación básica incompleta. En el gráfico I.30 también se constata que la brecha de satisfacción asociada a la escolaridad alcanza su mayor incidencia entre las mujeres de 15 a 29 años, lo que podría vincularse con una mayor precariedad de las inserciones laborales de las mujeres jóvenes con menos tiempo de escolarización, o bien con que estas podrían sentirse “forzadas” (por necesidad económica) a incorporarse tempranamente al mundo del trabajo. Este último tema requiere de investigación adicional.

Gráfico I.29
AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): SATISFACCIÓN CON EL EMPLEO
SEGÚN EL TIPO DE OCUPACIÓN^a, 2007

(En promedios, escala de 0 a 10, donde 0=completamente insatisfecho y 10=totalmente satisfecho)

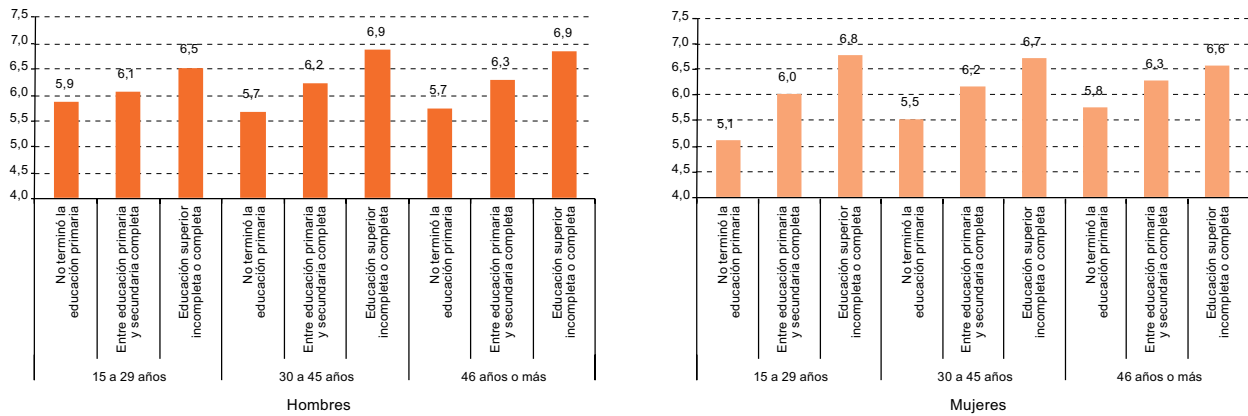


Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de la base de datos de Latinobarómetro, 2007.

^a La comparación post hoc de medias genera tres grupos que difieren significativamente en sus niveles de satisfacción laboral: 1) agricultores, pescadores y trabajadores por cuenta propia; 2) empleados de rango bajo y dueños de negocios, y 3) profesionales y ejecutivos de rango medio o alto.

¹⁸ La satisfacción extrínseca incluye la evaluación de aspectos relacionados con la organización del trabajo, como el horario, la remuneración o las condiciones físicas del trabajo (Moreno-Jiménez e Hidalgo, 2011).

Gráfico I.30
AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): SATISFACCIÓN CON EL EMPLEO POR SEXO, EDAD Y ESCOLARIDAD, 2007
 (En promedios, escala de 0 a 10, donde 0=completamente insatisfecho y 10=totalmente satisfecho)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de la base de datos de Latinobarómetro, 2007.

Anexo

Cuadro I.A-1
AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): INDICADORES DE POBREZA E INDIGENCIA, 1990-2010^a
(En porcentajes)

País	Año	Pobreza ^b				Indigencia			
		Hogares		Población		Hogares		Población	
		Incidencia (H)	Incidencia (H)	Brecha (PG)	Brecha al cuadrado (FGT2)	Incidencia (H)	Incidencia (H)	Brecha (PG)	Brecha al cuadrado (FGT2)
Argentina ^c	1990 ^d	16,2	21,2	7,2	3,4	3,5	5,2	1,6	0,8
	1999	16,3	23,7	8,6	4,3	4,3	6,6	2,1	1,1
	2002	34,9	45,4	21,1	12,8	13,9	20,9	8,4	4,6
	2009	8,1	11,3	4,7	2,9	3,0	3,8	1,9	1,4
	2010	6,3	8,6	3,4	2,1	2,4	2,8	1,4	1,0
Bolivia (Estado Plurinacional de)	1989 ^e	48,9	52,6	24,5	15,0	21,9	23,0	9,7	6,1
	1999	54,7	60,6	33,9	24,1	32,5	36,5	20,3	14,7
	2002	55,5	62,4	34,4	23,8	31,7	37,1	19,5	13,5
	2007	47,2	54,0	27,8	18,2	27,2	31,2	14,5	9,7
Brasil	1990	41,4	48,0	23,5	14,7	18,3	23,4	9,7	5,5
	1999	29,9	37,5	17,0	10,2	9,6	12,9	5,3	3,3
	2001	30,0	37,5	17,4	10,7	10,0	13,2	5,8	3,8
	2008	19,9	25,8	10,7	6,3	5,8	7,3	3,3	2,2
	2009	19,3	24,9	10,5	6,2	5,7	7,0	3,2	2,2
Chile	1990	33,3	38,6	14,9	8,0	10,7	13,0	4,4	2,3
	1998	17,8	21,7	7,5	3,8	4,6	5,6	2,0	1,1
	2003	15,3	18,7	6,3	3,2	3,9	4,7	1,7	1,0
	2006	11,3	13,7	4,4	2,2	2,7	3,2	1,1	0,7
Colombia	2009	9,8	11,5	4,0	2,2	3,3	3,6	1,5	1,0
	1994	47,3	52,5	26,6	17,5	25,0	28,5	13,8	9,1
	1999	48,7	54,9	25,6	15,7	23,2	26,8	11,2	6,9
	2002 ^f	48,2	54,2	26,3	16,5	17,6	19,9	8,8	5,6
Costa Rica	2009 ^f	39,3	45,7	20,8	12,7	14,3	16,5	7,2	4,6
	2010 ^f	37,8	44,3	19,7	11,8	12,8	14,8	6,4	4,0
	1990	23,6	26,3	10,7	6,5	10,0	10,1	4,8	3,4
	1999	18,2	20,3	8,1	4,8	7,5	7,8	3,5	2,3
	2002	18,6	20,3	8,4	5,2	7,7	8,2	3,9	2,7
Ecuador ^c	2008	14,8	16,4	5,8	3,1	5,2	5,5	2,2	1,4
	2009	16,8	18,9	6,9	3,9	6,4	6,9	3,0	2,0
	1990	55,8	62,1	27,6	15,8	22,6	26,2	9,2	4,9
	1999	58,0	63,5	30,1	18,2	27,2	31,3	11,5	6,3
	2002	42,6	49,0	20,8	11,8	16,3	19,4	6,9	3,7
El Salvador	2009	34,1	40,2	15,6	8,3	12,9	15,5	5,0	2,6
	2010	31,4	37,1	14,2	7,5	11,9	14,2	4,6	2,4
	1995	47,6	54,2	24,0	14,3	18,2	21,7	9,1	5,6
	1999	43,5	49,8	22,9	14,0	18,3	21,9	9,4	5,8
	2001	42,9	48,9	22,7	14,0	18,3	22,1	9,5	5,7
Guatemala	2009	41,8	47,9	19,4	10,5	14,1	17,3	5,7	2,7
	2010	40,2	46,6	18,8	10,0	13,3	16,7	5,2	2,3
	1989	63,0	69,4	35,9	23,1	36,7	42,0	18,5	11,2
	1998	53,5	61,1	27,3	15,4	26,1	31,6	10,7	5,1
Honduras	2002	52,8	60,2	27,0	15,4	26,9	30,9	10,7	5,5
	2006	46,7	54,8	25,5	15,2	22,7	29,1	11,3	5,8
	1990	75,2	80,8	50,2	35,9	53,9	60,9	31,5	20,2
	1999	74,3	79,7	47,4	32,9	50,6	56,8	27,9	17,5
	2002	70,9	77,3	45,3	31,2	47,1	54,4	26,6	16,2
México	2009	60,0	65,7	34,7	22,7	36,2	41,8	19,5	11,8
	2010	61,2	67,4	36,6	24,2	37,0	42,8	20,1	12,1
	1989	39,0	47,7	18,7	9,9	14,0	18,7	5,9	2,7
	1998	38,0	46,9	18,4	9,4	13,2	18,5	5,3	2,2
	2002	31,8	39,4	13,9	6,7	9,1	12,6	3,5	1,4
Nicaragua	2008	27,9	34,8	12,0	5,7	8,2	11,2	3,2	1,3
	1993	68,1	73,6	41,9	29,3	43,2	48,4	24,3	16,2
	1998	65,1	69,9	39,4	27,3	40,1	44,6	22,6	15,1
	2001	63,0	69,4	37,1	24,5	36,5	42,5	19,2	12,0
	2005	54,4	61,9	29,1	17,3	26,8	31,9	12,3	6,5

Cuadro I.A-1 (conclusión)

País	Año	Pobreza ^b				Indigencia			
		Hogares		Población		Hogares		Población	
		Incidencia (H)	Incidencia (H)	Brecha (PG)	Brecha al cuadrado (FGT2)	Incidencia (H)	Incidencia (H)	Brecha (PG)	Brecha al cuadrado (FGT2)
Panamá	1991 ^c	26,0	31,0	12,8	7,6	9,5	10,8	5,0	3,3
	1999 ^c	15,8	19,5	7,0	3,8	4,6	5,5	2,2	1,3
	2002	30,0	36,9	16,8	10,2	14,4	18,6	7,6	4,3
	2009	20,6	26,4	10,0	5,2	8,2	11,1	3,8	1,9
	2010	19,4	25,8	10,6	5,9	8,9	12,6	4,6	2,3
Paraguay	1990 ^g	36,8	43,2	16,1	8,0	10,4	13,1	3,6	1,5
	1999	50,3	59,0	29,1	18,4	25,0	31,8	14,1	8,6
	2001	50,7	59,7	28,7	18,0	25,2	31,3	13,7	8,2
	2009	50,1	56,0	26,0	15,8	26,7	30,4	12,7	7,4
	2010	48,0	54,8	25,4	15,5	26,0	30,7	12,9	7,6
Perú	1997	40,4	47,5	20,7	12,0	20,3	25,0	10,1	5,6
	1999	42,3	48,6	20,6	11,7	18,7	22,4	9,2	5,1
	2001 ^h	48,7	54,7	24,7	14,5	20,4	24,4	9,6	5,2
	2009 ^h	30,3	34,8	12,9	6,5	9,9	11,5	3,5	1,6
	2010 ^h	27,0	31,3	11,1	5,5	8,2	9,8	2,8	1,2
República Dominicana	2002	42,2	47,1	20,9	12,6	18,2	20,7	8,8	5,3
	2009	37,8	41,1	18,5	11,0	19,8	21,0	8,0	4,5
	2010	38,0	41,4	18,7	11,1	19,2	20,9	8,2	4,6
Uruguay ^c	1990	11,8	17,9	5,3	2,4	2,0	3,4	0,9	0,4
	1999	5,6	9,4	2,7	1,2	0,9	1,8	0,4	0,2
	2002	9,3	15,4	4,5	1,9	1,3	2,5	0,6	0,2
	2009	6,5	10,7	2,9	1,2	1,1	2,0	0,4	0,2
	2010	5,0	8,6	2,3	0,9	0,7	1,4	0,3	0,1
Venezuela (República Bolivariana de)	1990	34,2	39,8	15,7	8,5	11,8	14,4	5,0	2,4
	1999	44,0	49,4	22,6	13,7	19,4	21,7	9,0	5,5
	2002	43,3	48,6	22,1	13,4	19,7	22,2	9,3	5,7
	2009	23,3	27,1	9,9	5,4	8,8	9,8	3,8	2,4
	2010	23,7	27,8	9,9	5,3	9,3	10,7	3,9	2,4
América Latina ⁱ	1990	41,0	48,4	17,7	22,6
	1999	35,4	43,8	14,1	18,6
	2002	36,1	43,9	14,6	19,3
	2009	26,2	33,0	10,0	13,1
	2010	24,9	31,4	10,3	12,3

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

^a H = índice de recuento; PG = brecha de pobreza; FGT2 = índice de Foster, Greer y Thorbecke.

^b Incluye hogares (personas) en situación de indigencia o de extrema pobreza.

^c Áreas urbanas.

^d Gran Buenos Aires.

^e Ocho capitales departamentales más la ciudad de El Alto.

^f Cifras de la Misión para el empalme de las series de empleo, pobreza y desigualdad (MESEP). Estas cifras no incluyen las modificaciones a la medición de la pobreza realizadas en 2011 por la MESEP.

^g Área metropolitana de Asunción.

^h Cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) del Perú. Estos valores no son comparables con los de años anteriores debido al cambio del marco muestral de la encuesta de hogares.

ⁱ Estimación para 18 países de la subregión más Haití.

Cuadro I.A-2
AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO DE LOS HOGARES, 1990-2010 ^a

País	Año	Ingreso promedio ^b	Participación en el ingreso total (en porcentajes)				Relación del ingreso medio per cápita (en veces) ^c	
			40% más pobre	30% siguiente	20% anterior al 10% más rico	10% más rico	D ¹⁰ / D ^{1 a 4}	Q ⁵ / Q ¹
Argentina ^d	1990 ^e	10,6	15,0	23,7	26,7	34,6	13,5	13,5
	1999	11,3	15,8	22,1	25,3	36,8	16,2	16,6
	2002	7,3	14,4	20,5	24,6	40,5	19,0	20,7
	2009	16,1	15,5	24,6	27,8	32,1	15,0	16,6
	2010	17,9	16,0	24,4	27,0	32,6	15,1	16,2
Bolivia (Estado Plurinacional de)	1989 ^f	7,7	12,1	21,9	27,9	38,1	17,1	21,4
	1999	5,6	9,3	24,1	29,6	37,0	26,7	48,1
	2002	6,1	9,5	21,4	28,3	40,8	30,3	44,2
	2007	6,1	11,2	25,2	28,2	35,4	22,2	31,5
Brasil	1990	9,4	9,6	18,5	28,0	43,9	31,2	35,0
	1999	11,3	10,0	17,4	25,4	47,2	32,0	35,6
	2001	11,0	10,3	17,4	25,5	46,8	32,2	36,9
	2008	12,1	12,7	19,2	24,7	43,4	23,8	26,2
	2009	11,8	13,2	20,3	25,5	41,0	21,1	23,9
Chile	1990	9,5	13,2	20,8	25,3	40,7	18,2	18,4
	1998	13,7	13,0	20,4	26,6	40,0	19,1	19,7
	2003	13,6	13,8	20,8	25,6	39,8	18,8	18,4
	2006	14,4	14,6	21,6	26,7	37,1	15,9	15,7
	2009	14,5	14,4	21,2	26,0	38,4	16,3	15,9
Colombia	1994	7,7	9,9	21,3	27,0	41,8	26,8	35,2
	1999	6,7	12,4	21,6	26,0	40,0	22,3	25,6
	2002	6,9	10,9	21,2	27,2	40,7	27,1	32,9
	2009	7,1	11,8	22,5	26,3	39,4	23,1	28,0
	2010	7,3	12,0	22,3	26,6	39,1	23,4	27,7
Costa Rica	1990	9,5	16,7	27,4	30,2	25,7	10,1	13,1
	1999	11,4	15,3	25,7	29,7	29,3	12,6	15,3
	2002	11,7	14,4	25,6	29,7	30,3	13,7	16,9
	2008	11,1	15,4	25,2	28,4	31,0	12,5	13,5
	2009	11,5	14,3	24,3	28,5	32,9	14,8	16,4
Ecuador ^d	1990	5,5	17,1	25,4	26,9	30,6	11,4	12,3
	1999	5,6	14,1	22,7	26,5	36,7	17,2	18,4
	2002	6,7	15,5	24,3	26,1	34,1	15,7	16,8
	2009	7,4	16,4	25,1	26,6	31,9	13,6	14,3
	2010	7,7	16,5	24,7	26,9	31,9	12,6	13,2
El Salvador	1995	6,2	15,5	24,8	27,0	32,7	14,1	16,9
	1999	6,6	13,8	25,0	29,1	32,1	15,2	19,6
	2001	6,7	13,5	24,7	28,7	33,1	16,2	20,3
	2009	5,8	16,6	25,2	26,8	31,4	12,0	13,0
	2010	5,6	17,8	26,4	27,7	28,1	10,3	11,4
Guatemala	1989	6,0	11,8	20,9	26,9	40,4	23,6	27,4
	1998	7,1	14,3	21,6	25,0	39,1	20,4	19,8
	2002	6,8	14,1	22,4	27,3	36,2	18,6	19,3
	2006	7,6	12,8	21,8	25,7	39,7	22,0	23,9
Honduras	1990	4,3	10,2	19,7	27,1	43,0	27,4	30,7
	1999	3,9	11,8	22,9	29,0	36,3	22,3	26,5
	2002	4,3	11,4	21,7	27,6	39,3	23,6	26,3
	2009	5,1	12,0	23,8	29,5	34,7	18,7	23,3
	2010	5,1	11,4	22,7	29,3	36,6	20,7	25,2
México	1989	8,6	15,8	22,5	25,1	36,6	17,2	16,9
	1998	7,7	15,0	22,7	25,6	36,7	18,4	18,5
	2002	8,2	15,7	23,8	27,2	33,3	15,1	15,5
	2008	8,6	16,0	24,0	25,6	34,4	16,1	16,0
	2010	7,4	17,7	25,4	27,2	29,7	12,8	13,3
Nicaragua	1993	5,2	10,4	22,8	28,4	38,4	26,1	37,7
	1998	5,6	10,4	22,1	27,0	40,5	25,3	35,1
	2001	5,8	12,0	21,7	25,6	40,7	23,6	27,5
	2005	6,5	14,3	24,0	26,2	35,5	17,2	18,6

Cuadro I.A-2 (conclusión)

País	Año	Ingreso promedio ^b	Participación en el ingreso total (en porcentajes)				Relación del ingreso medio per cápita (en veces) ^c	
			40% más pobre	30% siguiente	20% anterior al 10% más rico	10% más rico	D ¹⁰ / D ^(1 a 4)	Q ⁵ / Q ¹
Panamá	1991 ^d	11,1	14,1	23,9	29,3	32,7	16,8	20,1
	1999 ^d	12,9	15,6	25,2	27,8	31,4	14,0	15,9
	2002	9,8	12,2	23,6	28,0	36,2	20,1	25,7
	2009	10,4	14,7	25,5	28,3	31,5	15,3	18,2
	2010	10,2	15,2	26,1	27,0	31,7	14,4	17,6
Paraguay	1990 ^g	7,7	18,7	25,7	26,8	28,8	10,2	10,6
	1999	6,3	13,2	23,5	27,6	35,7	19,1	23,2
	2001	6,3	13,5	23,6	26,2	36,7	19,5	23,2
	2009	5,6	13,7	25,3	28,3	32,7	14,7	18,3
	2010	5,8	13,8	24,3	26,2	35,7	17,1	20,0
Perú	1997	7,5	13,3	24,7	28,7	33,3	17,9	20,8
	1999	7,5	13,3	23,1	27,1	36,5	19,5	21,7
	2001	6,4	13,4	24,6	28,5	33,5	17,4	19,3
	2009	8,0	15,9	26,5	28,4	29,2	12,4	13,7
	2010	8,1	16,6	26,5	28,1	28,8	11,4	12,5
República Dominicana	2002	6,9	12,7	22,7	26,9	37,7	17,8	20,7
	2009	8,4	10,7	21,5	27,5	40,3	24,3	28,0
	2010	7,9	11,3	22,1	28,7	37,9	20,1	23,9
Uruguay ^d	1990	9,9	18,9	23,3	22,5	35,3	11,0	10,5
	1999	11,9	21,6	25,5	25,8	27,1	8,8	9,5
	2002	9,4	21,7	25,4	25,6	27,3	9,5	10,2
	2009	9,8	21,9	26,0	26,1	26,0	8,6	9,1
	2010	10,1	22,8	26,3	26,4	24,5	8,2	8,6
Venezuela (República Bolivariana de)	1990	8,9	16,7	25,7	28,9	28,7	12,1	13,4
	1999	7,2	14,5	25,0	29,0	31,5	15,0	18,0
	2002	7,1	14,3	25,0	29,5	31,2	14,5	18,1
	2009	8,6	18,9	27,9	28,3	24,9	8,6	10,2
	2010	7,9	20,3	29,0	28,6	22,1	7,6	9,0

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

^a Hogares del conjunto del país ordenados según su ingreso per cápita.

^b Ingreso promedio mensual de los hogares, en múltiplos de la línea de pobreza per cápita.

^c D^(1 a 4) representa el 40% de los hogares de menores ingresos, en tanto que D¹⁰ corresponde al 10% de los hogares de mayores ingresos. La misma notación se usa en el caso de los quintiles (Q), que representan grupos de un 20% de los hogares.

^d Total urbano.

^e Gran Buenos Aires.

^f Ocho ciudades principales y El Alto.

^g Área metropolitana de Asunción.

Cuadro I.A-3
AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): INDICADORES DE CONCENTRACIÓN DEL INGRESO, 1990-2010^a

País	Año	Porcentaje de personas con ingreso per cápita menor que el 50% de la mediana	Índices de concentración				
			Gini ^b	Theil	Atkinson		
					($\epsilon = 0,5$)	($\epsilon = 1,0$)	($\epsilon = 1,5$)
Argentina ^c	1990 ^d	20,5	0,501	0,555	0,216	0,360	0,473
	1999	22,2	0,539	0,667	0,250	0,410	0,530
	2002	24,3	0,578	0,724	0,282	0,464	0,593
	2009	21,4	0,510	0,549	0,219	0,377	0,509
	2010	20,9	0,509	0,559	0,220	0,373	0,499
Bolivia (Estado Plurinacional de)	1989 ^e	20,6	0,537	0,574	0,243	0,430	0,600
	1999	29,5	0,586	0,658	0,293	0,537	0,738
	2002	28,6	0,614	0,776	0,322	0,556	0,738
	2007	27,2	0,565	0,611	0,269	0,493	0,709
Brasil	1990	26,6	0,627	0,816	0,324	0,528	0,664
	1999	25,9	0,640	0,914	0,341	0,537	0,663
	2001	26,1	0,639	0,914	0,340	0,536	0,665
	2008	24,3	0,594	0,808	0,298	0,477	0,604
Chile	2009	23,9	0,576	0,716	0,277	0,455	0,586
	1990	20,4	0,554	0,644	0,255	0,422	0,546
	1998	21,0	0,560	0,654	0,261	0,430	0,553
	2003	19,5	0,552	0,674	0,257	0,418	0,535
	2006	18,5	0,522	0,568	0,228	0,381	0,497
Colombia	2009	17,4	0,524	0,585	0,231	0,384	0,501
	1994	26,0	0,601	0,794	0,308	0,517	0,684
	1999	21,8	0,572	0,734	0,275	0,450	0,603
	2002	24,8	0,594	0,753	0,293	0,487	0,640
Costa Rica	2009	24,3	0,578	0,706	0,279	0,469	0,702
	2010	23,8	0,578	0,694	0,278	0,468	0,738
	1990	19,4	0,438	0,328	0,152	0,286	0,412
	1999	20,7	0,473	0,395	0,179	0,328	0,457
	2002	21,2	0,488	0,440	0,193	0,349	0,491
Ecuador ^c	2008	18,5	0,473	0,427	0,183	0,323	0,439
	2009	20,3	0,501	0,474	0,204	0,358	0,485
	1990	17,4	0,461	0,403	0,173	0,306	0,422
	1999	18,8	0,526	0,567	0,228	0,381	0,498
	2002	19,6	0,513	0,563	0,222	0,371	0,487
El Salvador	2009	19,5	0,485	0,471	0,194	0,334	0,446
	2010	19,4	0,485	0,471	0,195	0,335	0,445
	1995	22,0	0,507	0,502	0,213	0,377	0,525
	1999	24,2	0,518	0,496	0,224	0,416	0,601
	2001	24,4	0,525	0,528	0,232	0,423	0,602
Guatemala	2009	20,3	0,478	0,440	0,189	0,333	0,449
	2010	20,1	0,454	0,372	0,168	0,304	0,419
	1989	22,7	0,582	0,736	0,282	0,460	0,590
	1998	20,0	0,560	0,760	0,273	0,428	0,534
	2002	17,9	0,542	0,583	0,239	0,401	0,515
Honduras	2006	24,7	0,585	0,773	0,291	0,467	0,590
	1990	26,1	0,615	0,817	0,317	0,515	0,649
	1999	25,7	0,564	0,636	0,263	0,451	0,603
	2002	26,5	0,588	0,719	0,288	0,476	0,608
	2009	27,7	0,548	0,581	0,249	0,437	0,584
México	2010	27,7	0,567	0,625	0,265	0,458	0,601
	1989	19,7	0,536	0,680	0,248	0,400	0,509
	1998	22,9	0,539	0,634	0,245	0,403	0,515
	2002	21,2	0,514	0,521	0,218	0,372	0,485
	2008	19,9	0,515	0,599	0,227	0,375	0,485
Nicaragua	2010	19,2	0,481	0,458	0,192	0,335	0,448
	1993	27,4	0,582	0,671	0,270	0,458	0,619
	1998	26,8	0,583	0,731	0,285	0,481	0,654
	2001	23,8	0,579	0,783	0,288	0,470	0,620
	2005	22,6	0,532	0,614	0,241	0,402	0,526

Cuadro I.A-3 (conclusión)

País	Año	Porcentaje de personas con ingreso per cápita menor que el 50% de la mediana	Índices de concentración				
			Gini ^b	Theil	Atkinson		
					($\epsilon = 0,5$)	($\epsilon = 1,0$)	($\epsilon = 1,5$)
Panamá	1991 ^c	22,0	0,530	0,543	0,228	0,398	0,534
	1999 ^c	21,7	0,499	0,459	0,202	0,361	0,490
	2002	26,6	0,567	0,616	0,266	0,466	0,618
	2009	24,8	0,523	0,522	0,226	0,398	0,533
	2010	25,4	0,519	0,529	0,226	0,401	0,543
Paraguay	1990 ^f	16,4	0,447	0,365	0,161	0,287	0,386
	1999	25,4	0,558	0,659	0,264	0,452	0,601
	2001	25,3	0,558	0,673	0,265	0,450	0,610
	2009	24,5	0,512	0,527	0,220	0,388	0,529
	2010	24,4	0,533	0,666	0,248	0,416	0,557
Perú	1997	25,5	0,532	0,567	0,238	0,414	0,553
	1999	23,6	0,545	0,599	0,249	0,424	0,560
	2001	23,9	0,525	0,556	0,231	0,397	0,527
	2009	21,8	0,469	0,414	0,181	0,325	0,442
	2010	21,3	0,458	0,399	0,174	0,311	0,424
República Dominicana	2002	22,1	0,537	0,569	0,236	0,404	0,536
	2009	24,3	0,574	0,677	0,273	0,455	0,589
	2010	25,2	0,554	0,603	0,253	0,433	0,572
Uruguay ^c	1990	17,4	0,492	0,699	0,227	0,349	0,441
	1999	19,0	0,440	0,354	0,158	0,286	0,393
	2002	19,6	0,455	0,385	0,169	0,301	0,412
	2009	17,9	0,433	0,352	0,154	0,276	0,375
	2010	16,9	0,422	0,327	0,145	0,262	0,359
Venezuela (República Bolivariana de)	1990	20,1	0,471	0,416	0,183	0,327	0,446
	1999	21,6	0,498	0,464	0,202	0,363	0,507
	2002	22,4	0,500	0,456	0,201	0,361	0,507
	2009	18,4	0,416	0,302	0,137	0,254	0,358
	2010	17,2	0,394	0,264	0,123	0,233	0,337

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

^a Calculados a partir de la distribución del ingreso per cápita de las personas del conjunto del país.

^b Incluye las personas con ingreso igual a cero.

^c Total urbano.

^d Gran Buenos Aires.

^e Ocho ciudades principales y El Alto.

^f Área metropolitana de Asunción.

Cuadro I.A-4
AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): PREDICTORES DE PREOCUPACIÓN POR PERDER EL EMPLEO,
REGRESIÓN ORDINAL PROBIT, 1996-2006

Variable dependiente: Preocupación por perder el empleo en los próximos 12 meses: 1 = Nada o poco preocupado 2 = Algo preocupado 3 = Muy preocupado	Coeficiente	Significación ^a
Sexo		
Masculino = 1	-0,065	0,000***
Femenino = 2	0,000	,
Escolarización		
Primaria incompleta = 1	0,319	0,000***
Primaria completa = 2	0,274	0,000***
Secundaria incompleta = 3	0,245	0,000***
Secundaria completa = 4	0,180	0,000***
Superior incompleta = 5	0,088	0,000***
Superior completa = 6	0,000	0,000***
Edad		
15 a 29 años = 1	0,128	0,000***
30 a 45 años = 2	0,113	0,000***
46 años o más = 3	0,000	,
Ocupación		
Agricultor, pescador = 1	0,020	0,302
Independiente, cuenta propia = 2	0,124	0,000***
Empleado = 3	0,057	0,000***
Dueño de negocio = 4	-0,015	0,313
Profesional, ejecutivo de rango medio o alto = 5	0,000	0,302
R cuadrado de Nagelkerke = 1,5%		
n = 100366 (casos válidos)		

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de la base de datos de Latinobarómetro, 1996-2006.

^a Los asteriscos (***) hacen referencia a un coeficiente significativo al 99,9%.

Capítulo II

Panorama actual y perspectivas futuras de la fecundidad en América Latina

A. Introducción

La reducción de la fecundidad en América Latina proporciona una oportunidad sin precedentes para el avance económico y el mejoramiento de las condiciones de vida de los hogares de la subregión. El impacto positivo del descenso de la fecundidad no se refiere a la simple ecuación derivada de un menor tamaño de los hogares, sino, lo que es más importante, a la total transformación de la estructura por edad de la población, que permite que los países cuenten, durante un período considerable, con un volumen significativo y creciente de población potencialmente productiva frente a una proporción decreciente de población económicamente dependiente.

Más allá de la reducción de los nacimientos, una menor fecundidad implica mejoras en la salud materno-infantil y aumento de las oportunidades de educación y empleo de la mujer, lo que se traduce en un menor grado de vulnerabilidad de los hogares, al tiempo que eleva la autonomía de las mujeres en la adopción de decisiones reproductivas y genera un círculo virtuoso entre la dinámica demográfica y el mejoramiento socioeconómico.

Al mismo tiempo, y como se verá en los capítulos siguientes de esta edición del *Panorama social*, el nuevo escenario demográfico que se avecina, caracterizado por una sociedad en continuo proceso de envejecimiento,

tiene fuertes implicancias en la economía del cuidado y las relaciones de dependencia en las familias.

La elevada incidencia de la pobreza y la desigualdad en la región y su estrecho vínculo con los bajos niveles educativos se conjugan para que núcleos todavía importantes de población enfrenten barreras de acceso a información y servicios de salud sexual y reproductiva, y mantengan una alta tasa de fecundidad no deseada. La situación es particularmente preocupante en el caso de las adolescentes latinoamericanas. En un contexto de vulnerabilidad de las familias y escaso apoyo para la crianza de los hijos, la alta y temprana fecundidad plantea dificultades para

insertarse en el mercado laboral, obtener empleos y acceder a mecanismos de protección social.

La educación es una variable clave de política para propiciar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y, de esta manera, romper la secuencia negativa de fecundidad, pobreza y exclusión. La educación contribuye al cambio del comportamiento reproductivo y es un factor protector frente a la maternidad adolescente. Deberán realizarse grandes esfuerzos no solo por aumentar la cobertura sino también

para lograr que la educación impacte eficazmente sobre la formación de decisiones reproductivas informadas y autónomas por parte de las mujeres y de las adolescentes en particular.

Todo lo anterior pone de manifiesto la importancia de revisar la tendencia de la fecundidad en América Latina y su relación con el contexto económico, social y demográfico para identificar los logros y, sobre todo, los desafíos que tendrán que enfrentar los países en el corto y mediano plazo en ese ámbito.

B. Fecundidad en América Latina

El descenso de la fecundidad en América Latina ha sobrepasado reiteradamente las estimaciones realizadas. Si bien los factores que más contribuyeron a este descenso están ligados a la exposición a las relaciones sexuales, el impacto del uso de anticonceptivos ha aumentado rápidamente, asociado no solo al incremento generalizado de la prevalencia anticonceptiva sino también al uso de métodos modernos. Aunque la tendencia descendente fue generalizada, el momento de inicio y el ritmo de este fenómeno han sido muy diferentes en los países de la región.

1. Niveles y tendencias actuales en el contexto mundial

Desde mediados del siglo XX la fecundidad en América Latina experimentó grandes reducciones debido al proceso de desarrollo iniciado en los países de esa subregión, los cambios de comportamiento reproductivo relacionados y la alta tasa de fecundidad registrada inicialmente, que ofrecía un gran potencial de descenso.

Como se aprecia en el gráfico II.1, la tasa global de fecundidad (TGF) de América Latina se alejó paulatinamente del promedio de las regiones menos desarrolladas y, durante el quinquenio de 1990 a 1994, pasó a ser inferior a la del promedio mundial¹. A mediados de la década de 1960, las mujeres de la región terminaban su período fértil con cerca

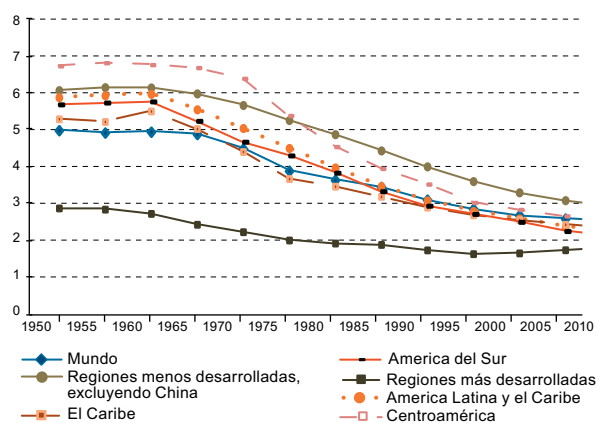
¹ La tasa global de fecundidad (TGF) se interpreta como el número de hijos que, en promedio, tendría cada mujer de una cohorte hipotética de mujeres no expuestas al riesgo de muerte desde el

inicio hasta el fin del período fértil y que, a partir del momento en que se inicia la reproducción, están expuestas a las tasas de fecundidad por edad de la población en estudio (Welti, 1998).

de 6 hijos por mujer, esto es, un hijo más que el promedio mundial y el doble de lo observado en los países más desarrollados. A partir de entonces, el rápido descenso de la fecundidad en la región ha atenuado considerablemente las diferencias: hacia 2015 la TGF de la región será de 2,1 hijos por mujer, frente al 1,7 de los países desarrollados. En general, se observa una convergencia de los niveles de fecundidad de las grandes regiones del mundo a partir de la década de 1950. Actualmente se ha reducido de manera significativa la gran distancia con los países desarrollados, que habían iniciado la transición demográfica a finales del siglo XVIII y que ya en 1950 tenían tasas inferiores a 3 hijos por mujer, cuando el promedio mundial se situaba alrededor de 5 hijos (véase el gráfico II.1)².

En el ámbito regional, si bien los descensos son generalizados, Centroamérica sigue presentando tasas mayores que el promedio regional, aunque similares a las del promedio mundial y menores que las del promedio de los países menos desarrollados.

Gráfico II.1
MUNDO (REGIONES SELECCIONADAS): TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD, 1950-2010
(En número de hijos por mujer)



Fuente: Naciones Unidas, World Population Prospects: The 2010 Revision [CD-ROM], División de Población, Nueva York, 2011.

2. La sorprendente intensidad del descenso de la fecundidad en América Latina

El descenso de la fecundidad en América Latina ha sorprendido a los estudiosos ya que reiteradamente sobrepasó sus estimaciones. Esto pudo constatare en sucesivos ejercicios de revisión de las proyecciones por componentes, en los que se encontró que los supuestos de descenso de la fecundidad se quedaban sistemáticamente cortos frente a lo observado (véase el gráfico II.2)³. En 1973, tomando en cuenta el nivel y la relativa constancia observada hasta entonces en la fecundidad de la subregión, se supuso que, si bien en adelante se produciría un descenso,

este sería paulatino, y se proyectó la TGF a 5,9 hijos por mujer en 1965-1970 y a 3,9 en 1995-2000. En la revisión de 1982 la estimación para 1995-2000 debió bajarse a 3,1 (casi un hijo menos de lo proyectado), pero aun así en el ámbito temporal de la proyección (hasta 2025) no se vislumbraba que se alcanzaría el nivel de reemplazo de la fecundidad⁴. Finalmente, en la revisión de 2008 se hizo evidente que la fecundidad observada había quedado por debajo de todas las previsiones y que ya en 2005-2010 la subregión alcanzaría el nivel de reemplazo.

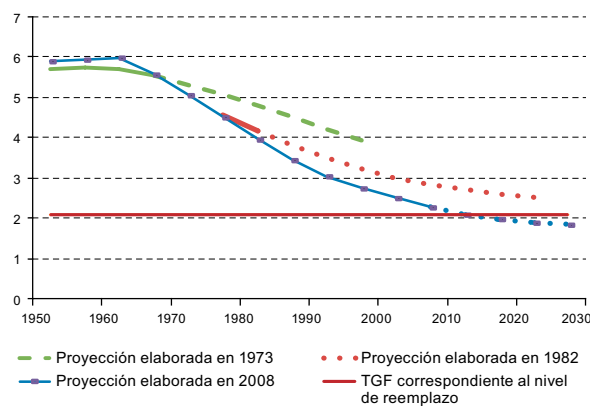
² La teoría de la transición demográfica trata de formular una explicación general del descenso de la mortalidad y de la fecundidad producido como resultado de la industrialización y la modernización. El proceso de industrialización y, en particular, el de modernización, provocan una mejora de las condiciones de vida y de salud de la población, con una baja subsecuente de la mortalidad. Este descenso se traduce en presiones demográficas dentro de las familias, ya que con un mismo nivel de fecundidad el número de hijos sobrevivientes aumenta. Esta constatación haría que en el mediano plazo las familias empezaran a reducir la fecundidad. (Welti, 1998).

³ El método de los componentes analiza la evolución histórica de las variables determinantes de la dinámica de la población (la fecundidad, la mortalidad y la migración) y plantea hipótesis acerca,

de su evolución futura. Mediante la ecuación compensadora, que establece el balance entre la población observada en un momento inicial más los nacimientos ocurridos en un período de tiempo menos las defunciones, más los inmigrantes, menos los emigrantes, se estima la población en el momento final. Este balance se desglosa por sexo y edad, y permite el seguimiento de cada cohorte desde un determinado punto de partida o año base del estudio y durante un determinado período (CEPAL, 2007).

⁴ La tasa global de fecundidad (TGF) igual a 2,1 hijos por mujer corresponde al nivel de reemplazo de una población porque, considerando que la proporción de nacimientos femeninos es ligeramente menor a 0,50, significa que por cada mujer queda una hija que la reemplaza.

Gráfico II.2
AMÉRICA LATINA: TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD (TGF) SEGÚN DIFERENTES EJERCICIOS DE PROYECCIÓN, 1950-2030
 (En número de hijos por mujer)



Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL sobre la base de Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), *Boletín demográfico*, N° 13, Santiago de Chile, 1974; *Boletín demográfico*, N° 31, 1983; y *Observatorio demográfico*, N° 7, 2009.

Nota: Las líneas continuas indican datos estimados y las punteadas datos proyectados.

3. Diferencias dentro de América Latina

Actualmente existe una tendencia generalizada de descenso de la fecundidad en todos los países de América Latina, pero, como es de esperar en una subregión con grandes desigualdades económicas y sociales, el momento de inicio y el ritmo de este fenómeno son bien diferentes en los distintos países. Los países con una tasa de fecundidad muy baja y que están por debajo del nivel de reemplazo —Brasil, Chile, Costa Rica y Cuba— ejemplifican la diversidad de trayectorias que ha tenido el descenso de la fecundidad. Por ejemplo, en Costa Rica la tasa de fecundidad pasó de ser superior a 7 hijos por mujer hacia 1965, cuando inició el descenso, a situarse en 2 hijos por mujer en la actualidad. Reducciones de esta magnitud implican no solo cambios significativos en términos macroeconómicos sino también transformaciones radicales en la vida de las familias, las cargas familiares y la organización misma de la sociedad.

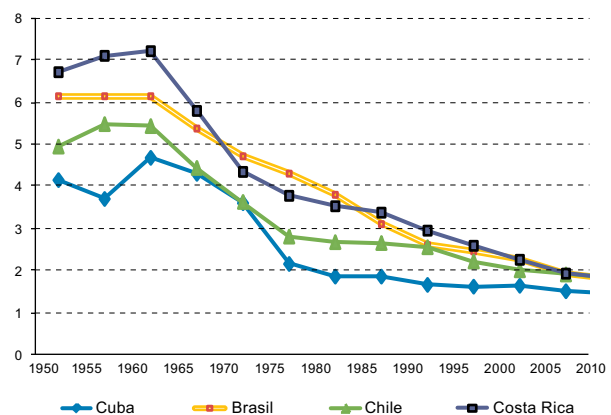
Por otro lado, la TGF de Cuba, que era de casi 4 hijos por mujer al iniciarse la segunda mitad del siglo XX, registró un fuerte descenso, particularmente entre 1970 y 1980, para situarse por debajo del nivel de reemplazo desde los años ochenta (véase el gráfico II.3). Cuando se elaboraron las proyecciones hace 30 años se suponía que ningún país alcanzaría el nivel de reemplazo antes de 2025, salvo Cuba. Pero aún en este caso la proyección fue bastante conservadora pues estimó para 2005-2010 una TGF de 2,1 hijos por mujer y en la práctica la tasa registrada fue de 1,5.

Si en las primeras proyecciones se preveía un tímido descenso de 0,27 hijos por quinquenio, en la realidad, desde la década de 1960 —cuando se produce la inflexión de la tendencia de la fecundidad en América Latina— hasta el último período observado (2005-2010), el ritmo de descenso de la fecundidad fue de 0,41 hijos por quinquenio.

Las consecuencias positivas de este acelerado descenso de la fecundidad han ido más allá de las expectativas, ya que al reducirse de manera más rápida las tasas de dependencia económica (relación entre la población en edades económicamente dependientes —jóvenes y personas mayores— y la población en edades económicamente activas) se potencian las posibilidades de inversión social⁵.

Entre los factores próximos determinantes del intenso descenso de la fecundidad en América Latina resaltan los que tienen que ver con la actividad sexual y la anticoncepción. En el recuadro II.1 se presenta una síntesis de esos factores, que se analizarán con mayor detalle en los apartados siguientes.

Gráfico II.3
AMÉRICA LATINA (4 PAÍSES): TRAYECTORIA DE LA FECUNDIDAD EN PAÍSES POR DEBAJO DEL NIVEL DE REEMPLAZO EN 2005-2010
 (En número de hijos por mujer)



Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL sobre la base de Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), "Proyección de población", *Observatorio demográfico*, N°7 (LC/G.2414-P), Santiago de Chile, 2009.

⁵ El período en que se reduce la tasa de dependencia —conocido como el bono demográfico— es transitorio y precede a un período en que las tasas vuelven a aumentar debido a la intensificación del proceso de envejecimiento de la población. Véase al respecto CEPAL (2008a, 2008b y 2010).

Recuadro II.1
LOS DETERMINANTES PRÓXIMOS DEL CAMBIO REPRODUCTIVO EN AMÉRICA LATINA

Los cambios en la fecundidad de las poblaciones han sido objeto de diversos análisis con el fin de identificar los comportamientos que los explican y determinan. A mediados del siglo pasado Davis y Blake (1956) definieron un conjunto de variables a las que llamaron variables intermedias de la fecundidad, las cuales están relacionadas con la exposición a las relaciones sexuales, el riesgo de concebir, la gestación y el éxito en el parto. Con el tiempo han surgido distintas variantes, tanto por el enfoque como por la posibilidad de contar con información para su medición, en las que cabe destacar la elaborada por Boongarts (1978) respecto a los determinantes próximos de la fecundidad^a.

Las encuestas de demografía y salud, actualmente disponibles para varios países de la región, permiten examinar el impacto de los distintos determinantes próximos en la

reducción de la fecundidad^b. De una manera general, los factores con mayor efecto reductor han sido aquellos relacionados con la exposición a las relaciones sexuales, como no entrar en unión o entrar tardíamente, y las separaciones temporales o definitivas. En simulaciones realizadas en varios países, este tipo de factores explica cerca del 50% de la reducción a partir de la fecundidad natural^c. El siguiente factor en importancia, el uso de anticoncepción, explica cerca del 40% de la diferencia, pero su efecto relativo muestra un rápido aumento, como es de esperar dado no solo el incremento generalizado de la prevalencia anticonceptiva sino también el mayor uso de métodos anticonceptivos modernos (véase el cuadro).

No obstante el gran avance que se observa en el uso de métodos anticonceptivos en la región, desde el punto

de vista de la meta 5B del quinto Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM) de acceso universal a la salud reproductiva, queda bastante por hacer en cuanto a propiciar la disponibilidad y el acceso universal a estos medios. De hecho, aún se observan en la región elevados índices de demanda insatisfecha de métodos anticonceptivos (véase el cuadro)^d. En el caso de Haití, por ejemplo, más de un tercio de las mujeres sexualmente activas que no estaban usando métodos anticonceptivos deseaban aplazar su último nacimiento o su último embarazo o no querían más hijos. En el caso de Bolivia (Estado Plurinacional de), esta misma relación era de una de cada cinco mujeres. Como se muestra en el cuadro, y se verá con más detalles en el apartado E del presente capítulo, esta situación se acentúa en el caso de las adolescentes de entre 15 y 19 años.

AMÉRICA LATINA (7 PAÍSES): PREVALENCIA ANTICONCEPTIVA Y DEMANDA INSATISFECHA DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

	Bolivia (Estado Plurinacional de)	Colombia	Haití	Honduras	Nicaragua	Perú	República Dominicana
	2008	2010	2004-2005	2005-2006	2001	2004-2008	2007
Prevalencia anticonceptiva en mujeres unidas							
No usa ningún método anticonceptivo	39,4	20,9	68,3	34,8	31,4	28,0	27,1
Total uso	60,6	79,1	31,7	65,2	68,6	72,0	72,9
Métodos modernos	33,7	72,7	23,5	56,1	64,3	47,5	69,6
Métodos tradicionales	27,0	6,4	8,2	9,1	4,3	24,4	3,3
Demanda insatisfecha de métodos anticonceptivos							
15 a 19 años	37,7	20,1	52,4	25,8	19,8	17,7	28,0
Total	20,2	7,0	37,5	16,9	14,6	8,1	11,4

Fuente: CELADE-División de Población de la CEPAL, sobre la base de tabulaciones elaboradas con las bases de datos de las encuestas de demografía y salud (DHS) más recientes disponibles.

^a Véanse Bongaarts (1978 y 1982) y Stover (1998). Un resumen de estos enfoques se encuentra en Ruiz y otros (2005).

^b El programa de encuestas demográficas y de salud se ha desarrollado desde 1984, para dar seguimiento a la Encuesta Mundial de Fecundidad y a las Encuestas de Prevalencia del Uso de Anticonceptivos (EPA), pero con componente importante de aspectos relacionados con la salud materno-infantil. En América Latina se han desarrollado 45 encuestas hasta el presente.

^c La fecundidad natural es el número de hijos que tendría una mujer fértil en ausencia de anticoncepción y otros factores limitantes. Para la región se ha calculado en 21 hijos por mujer.

^d La necesidad insatisfecha se refiere al uso de métodos anticonceptivos no solo para limitar los nacimientos sino que también para espaciarlos en el tiempo.

En general, se aprecia una asociación entre un mayor nivel inicial de la fecundidad y un mayor ritmo de descenso de la variable, aunque esta asociación ha ido cambiando en el tiempo. En la década de 1950, la mayoría de los países presentaban altos niveles de fecundidad y un bajo ritmo de cambio. Incluso se registró un aumento de la fecundidad en algunos de ellos —como en el caso de Costa Rica o la Argentina— mientras que en otros esta permaneció constante —Uruguay— o disminuyó levemente, dando como resultado un ligero aumento del promedio regional.

En las siguientes décadas, el descenso fue muy rápido en la mayoría de los países. En el caso particular de Costa Rica, se produjo una baja del 40% entre los

quinquenios de 1960-1964 y 1970-1974. En las décadas de 1980 y 1990 los países registraron tasas intermedias y bajas de fecundidad y los descensos se morigeraron, con una disminución de entre el 15% y el 30%, aunque Cuba siguió registrando descensos cercanos al 50%. En la década de 2000 la gran mayoría de los países ostentan niveles bajos o muy bajos de fecundidad y también un bajo ritmo de descenso. En suma, la década de mayor descenso generalizado de la fecundidad fue la de 1960 y, aunque siguen existiendo diferencias entre países, la asociación entre mayor nivel inicial y mayor ritmo de descenso ha llevado a una clara convergencia en el nivel de la fecundidad en América Latina.

C. Relación entre educación, intensidad y calendario de la fecundidad

La fecundidad continúa siendo invariablemente más elevada cuanto más bajo es el nivel de educación alcanzado por la mujer. Si bien en períodos recientes la fecundidad ha descendido en todos los niveles educativos, en muchos países el ritmo de descenso ha sido diferente para los distintos grupos, siendo en general inferior en el caso de las mujeres con menor educación. Como consecuencia de esto, las diferencias relativas se profundizan. En general, las mujeres con bajo nivel de instrucción tienen una menor prevalencia en el uso de anticonceptivos, lo que a su vez guarda una estrecha relación con la demanda insatisfecha de servicios de planificación familiar.

1. Fecundidad y educación en América Latina

Como se expuso en la sección previa, los países de América Latina han experimentado un sostenido descenso de los niveles de fecundidad y, si bien la intensidad de los cambios y los tiempos han sido diversos, en la actualidad se observa una tendencia a la convergencia. Sin embargo, dentro de los países persisten diferencias significativas en el promedio de hijos en los distintos grupos sociales, como expresión de las desigualdades socioeconómicas que continúan imprimiendo el carácter distintivo de América Latina, una de las subregiones más inequitativas del mundo.

Numerosos estudios han mostrado la relación que existe entre los factores estructurales y la fecundidad, de tal forma que los hogares (rurales o urbanos) de mujeres pobres marginales poseen en promedio un mayor número de hijos. Esto sucede también en el caso de los pueblos indígenas, que presentan sistemáticamente mayores tasas de fecundidad, aunque en este caso la lectura debe relativizarse ya que coexisten factores de inequidad junto con aspectos culturales asociados a ideales reproductivos más elevados.

Las condiciones estructurales de las sociedades latinoamericanas relativas a la situación socioeconómica de las parejas actúan sobre las variables próximas de la fecundidad (la edad a la unión, el uso de anticonceptivos, la práctica del aborto y los períodos de lactancia, entre los más relevantes) y contribuyen sin duda a mantener las

brechas en los niveles de esta variable. Sin perjuicio de ello, las últimas tres décadas han mostrado también una relativa independencia entre los factores socioeconómicos y el comportamiento demográfico. En efecto, durante las décadas de 1980 y 1990, poco se avanzó en la lucha contra la pobreza y los indicadores de distribución del ingreso se estancaron o incluso retrocedieron (CEPAL, 2003 y 2005); sin embargo, varios países experimentaron reducciones socialmente transversales de la fecundidad.

Junto con lo anterior, la subregión experimentó en dicho período un aumento de los niveles educativos (véase el apartado D), pese al estancamiento en materia de pobreza, reforzándose así la estrecha relación entre fecundidad y educación. Asimismo, en las última décadas las desigualdades de género se han reducido significativamente en cuanto a acceso y logros educativos, lo que contribuye al empoderamiento de la mujer y su mayor acceso a recursos y, por lo tanto, mejora la posibilidad de tomar decisiones individuales o negociadas sobre su vida sexual y reproductiva. Es evidente que no basta con aumentar la educación, sino que es necesario analizar también de qué manera esta eleva los niveles de decisión e información.

En vista del importante papel, ampliamente documentado, de la educación en la promoción de modificaciones en la

conducta reproductiva, interesa examinar entonces los avances logrados durante la última década, la medida en que la escolarización ha contribuido al descenso del número de hijos y la influencia que está teniendo sobre otros factores directos de la fecundidad, concretamente sobre el calendario⁶.

Como se aprecia en el cuadro II.1, la tasa global de fecundidad continúa siendo invariablemente más baja cuanto más elevado es el nivel de educación alcanzado por la mujer. En términos absolutos, los casos más notorios son Bolivia (Estado Plurinacional de), el Ecuador y Haití, con diferencias de más de 3 hijos entre las mujeres sin educación y las que han alcanzado la secundaria. Prestando atención a las encuestas más recientes de cada país, desde el punto

de vista relativo, el promedio de hijos de las mujeres sin instrucción formal al menos duplica el de las mujeres que alcanzaron la enseñanza secundaria, siendo el Brasil, Haití, Bolivia (Estado Plurinacional de), el Ecuador y Guatemala los países con mayores brechas. Estas desigualdades se profundizan aún más si se considera a las mujeres que han alcanzado el nivel superior. En efecto, según las últimas encuestas, la fecundidad de estas mujeres no llega a los 2 hijos en Bolivia (Estado Plurinacional de) (1,9 hijos), el Brasil (1 hijo), Colombia (1,4 hijos) y el Perú (1,9 hijos), con lo cual el número de hijos de las mujeres sin educación sería entre tres y cuatro veces superior al de las mujeres con nivel superior de estudios.

Cuadro II.1
AMÉRICA LATINA (12 PAÍSES): TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD SEGÚN NIVEL DE EDUCACIÓN,
CIFRA MÁS ACTUAL Y DIEZ AÑOS ANTES
(En número de hijos por mujer)

País	Año	Tasa global de fecundidad (TGF)			Brecha entre TGF de mujeres sin educación y con secundaria y más
		Sin educación	Primaria	Secundaria y más	
Bolivia (Estado Plurinacional de)	2008	6,1	4,7	2,6	2,3
	1998	7,1	5,7	2,9	2,4
Brasil	2006	4,2	2,8	1,7	2,5
	1996	4,9	3,3	2,1	2,3
Colombia	2010	4,3	3,2	2,0	2,2
	2000	4,0	3,6	2,2	1,8
Ecuador	2004	5,9	4,1	2,6	2,3
	1994	6,2	4,4	2,7	2,3
El Salvador	2008	3,7	3,0	2,0	1,9
	1998	4,8	3,6	3,0	1,6
Guatemala	2008	5,2	3,8	2,3	2,3
	1998	6,8	5,2	2,9	2,3
Haití	2005	5,9	4,3	2,4	2,5
	1994	6,1	4,8	2,5	2,4
Honduras	2005	4,9	3,8	2,2	2,2
	1996	7,1	6,1	4,3	1,7
Nicaragua	2006	4,4	3,2	2,0	2,2
	1998	5,7	4,2	2,5	2,3
Paraguay	2008	3,9	3,1	2,1	1,9
	1998	6,2	5,8	4,5	1,4
Perú	2009	4,4	3,6	2,3	1,9
	2000	5,1	4,1	2,2	2,3
República Dominicana	2007	3,9	3,0	2,2	1,8
	1996	5,0	3,7	2,5	2,0

Fuente: CELADE-División de Población de la CEPAL, sobre la base de encuestas de demografía y salud (DHS) y Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Por otra parte, cabe señalar que en períodos recientes la fecundidad ha seguido descendiendo de manera transversal respecto de la educación, destacándose el Paraguay y

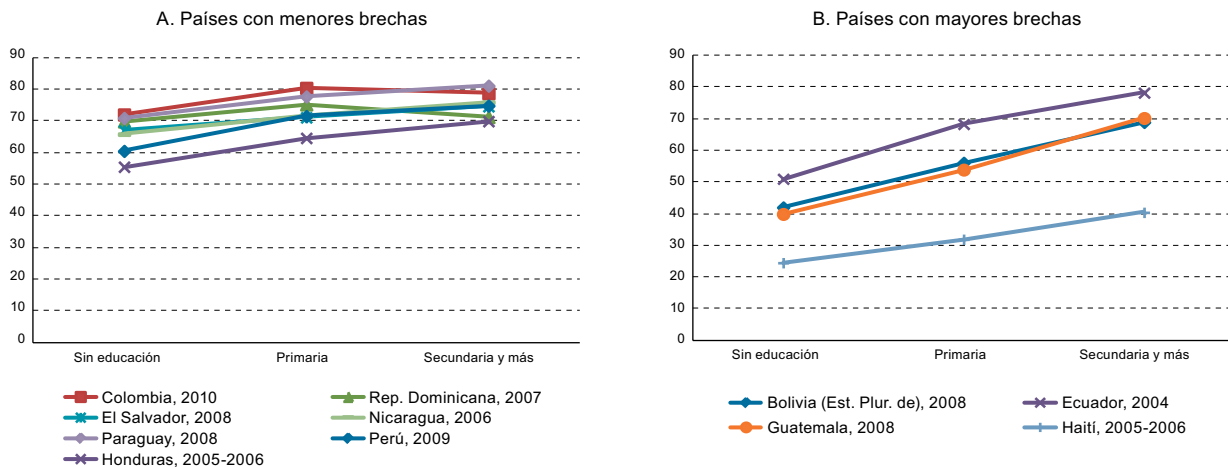
Honduras, países en los que la reducción ha sido de más de 2 hijos en cada uno de los tramos educativos considerados. No obstante, el ritmo de descenso ha sido diferente en cada grupo, en general de manera menos acentuada en las mujeres sin educación. Como consecuencia, las diferencias relativas no solo se mantienen en el tiempo sino que en la mitad de los países examinados se han profundizado (véase el cuadro II.1).

⁶ La forma como se distribuye la fecundidad a lo largo del período fértil se denomina el “calendario” de la fecundidad y está marcado por la edad en que se inicia la maternidad de una cohorte, las edades a las cuales se tienen los hijos y la edad en que se suspende la maternidad.

El conjunto de oportunidades culturales, económicas y sociales que trae consigo la educación, se refleja asimismo en los determinantes próximos de la fecundidad, siendo el más importante el uso de anticonceptivos. Esta relación se ilustra en el gráfico II.4, en el que se observa en diversos países una prevalencia significativamente mayor en el uso

de anticonceptivos entre las mujeres con mayor nivel de educación. En países donde estas tasas son relativamente más altas (véase el gráfico II.4A) la prevalencia en el uso de anticonceptivos varía entre un 55%-72% de las mujeres en unión sin educación hasta un 70%-80% de las mujeres con mayor instrucción⁷.

Gráfico II.4
AMÉRICA LATINA (11 PAÍSES): PREVALENCIA ACTUAL EN EL USO DE ANTICONCEPTIVOS EN PAÍSES CON MENORES Y MAYORES BRECHAS SEGÚN NIVEL EDUCATIVO DE LA MUJER
(En porcentajes)



Fuente: Encuestas de demografía y salud (DHS) y Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Por otra parte, aquellos países que mantienen brechas importantes en el nivel de la fecundidad según la educación de la mujer, también presentan fuertes inequidades en el acceso a los métodos de planificación familiar (véase el gráfico II.4B). Un caso extremo es Haití, donde a pesar de que la prevalencia general es muy baja, aun así alcanza al 40% de las mujeres con más educación mientras que tan solo un 25% de las mujeres sin instrucción formal utilizan algún método, lo cual sugiere un menor acceso a los servicios de planificación familiar. En Bolivia (Estado Plurinacional de) y Guatemala, solo el 40% de las mujeres en unión sin educación usan métodos anticonceptivos mientras que entre aquellas con mayor educación el uso alcanza el 70% de las mujeres. En el Ecuador la prevalencia varía entre un 50% y un 80%.

Los tres últimos países mencionados se caracterizan, a su vez, por la existencia de un volumen importante de pueblos indígenas, cuyas mujeres suelen ser las más perjudicadas, entre otros aspectos, en el acceso al sistema educativo. Sin embargo, en contra de los estereotipos, estudios cualitativos realizados en Bolivia (Estado Plurinacional de), Guatemala y el Ecuador dan cuenta de que las mujeres indígenas no rechazan la planificación familiar (existe un campo de conocimiento tradicional sobre anticoncepción, asociado principalmente a hierbas

medicinales) sino la ideología y forma en que esta se administra desde los programas estatales y biomédicos (Oyarce, Ribotta y Pedreros, 2010; Rodríguez, 2010; Schuler, Choque y Rance, 1994; Enge, 1998). Entre los principales obstáculos están la baja calidad de los servicios y la falta de adecuación cultural, aspecto que ya ha sido expresado por varias organizaciones de mujeres indígenas, quienes cada vez más están incluyendo en sus agendas los temas de salud sexual y reproductiva.

Más allá de la heterogeneidad de situaciones, lo cierto es que en todos los países las mujeres con menor nivel de instrucción tienen un mayor número de hijos y una menor prevalencia en el uso de anticonceptivos; a su vez, estudios previos han mostrado la estrecha relación que existe entre este último indicador y la demanda insatisfecha de servicios de planificación familiar. La posibilidad de

⁷ Se debe tomar en cuenta que el uso actual de anticonceptivos según nivel educativo puede ocultar otro tipo de desigualdades ligadas al tipo de métodos al cual tienen acceso las mujeres (tradicionales o modernos). También puede haber inequidades reflejadas en el calendario, por ejemplo, una menor prevalencia en el uso de métodos anticonceptivos en la primera relación sexual por parte de las mujeres con menos nivel de instrucción respecto de aquellas con más años de estudio.

determinar la cantidad y el espaciamiento de los hijos tiene múltiples ventajas. Más allá de la reducción del número de nacimientos, se mejora la salud de la madre y el niño, y se amplían las oportunidades de educación y empleo de la mujer, lo que, por ende, se traduce en una disminución de la pobreza. Por tanto, las cifras aquí expuestas aluden a las brechas que aún persisten en la implementación del

derecho a la salud sexual y reproductiva, y que, directa o indirectamente, limitan el ejercicio de otros derechos económicos y sociales. En este sentido, los países latinoamericanos tienen el desafío de adoptar medidas y redoblar los esfuerzos para alcanzar la meta 5B del quinto Objetivo de Desarrollo del Milenio, que es lograr, para 2015, el acceso universal a la salud reproductiva⁸.

2. Iniciación sexual y maternidad: La educación como factor de divergencias estables

En América Latina se constatan importantes transformaciones en el seno de las familias relacionadas con el descenso de la fecundidad y el alargamiento de la esperanza de vida, que se expresan en una disminución del tamaño medio de los hogares y un aumento de unidades domésticas nucleares sin hijos, unipersonales y conformadas por personas en etapas más avanzadas del ciclo de vida, por citar los más relevantes. Junto con ello, la unión conyugal continúa siendo la forma de vida adulta que elige la gran mayoría de mujeres y hombres de la subregión y la postergación de esta opción de gran trasfondo cultural sigue siendo paulatina.

Como ya se mencionó anteriormente, el nivel y la tendencia de la fecundidad están muy influidos por los factores que inciden sobre la exposición a las relaciones sexuales. Por lo tanto, resulta de interés examinar el comportamiento de la edad de inicio de las relaciones sexuales y la edad de inicio de la unión según el nivel de educación, y su relación con el inicio de la maternidad.

En América Latina los cambios del inicio de la vida marital permanecen con poca variación o leves aumentos. A modo ilustrativo, en Bolivia (Estado Plurinacional de) la edad mediana a la primera unión pasó de 20,3 años en 1989 a 20,6 años en 2008; en Colombia, pasó de 20,8 años en 1986 a 20,9 años en 2010, y en el Perú, tras un lapso de algo más de 20 años, se observó un escaso aumento, pasando de 20,5 años a 21,0 años.

En contrapartida, el inicio de la actividad sexual muestra una tendencia general al rejuvenecimiento y a aumentar su distancia con la edad de iniciación nupcial, aunque también se trata, en general, de cambios lentos. Se destacan algunos países para los cuales el inicio de las relaciones sexuales se ha adelantado de manera algo más acentuada, como Colombia donde la edad mediana al inicio de la actividad sexual pasa de 19,4 años en 1986 a 18,2 años en 2010, y Haití, donde pasa de 19 años en 1994 a 17,9 años en 2004-2005.

Pero sin duda un cambio que merece atención es el rejuvenecimiento de la edad a la cual se tiene el primer hijo. En efecto, en siete países de la región con encuestas recientes (Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Colombia, República Dominicana, Haití, Nicaragua y Perú), se observa que en los últimos años se ha producido una disminución de la edad mediana al primer hijo, con un rango de descenso que va de 0,2 a 1,4 años de edad, correspondientes a Haití y el Brasil, respectivamente. En este último país, en 1996 la mitad de las mujeres tuvieron hijos antes de los 22,4 años mientras que en 2006 esa edad fue de 21 años.

Lo anterior constituye, en principio, una evidencia de que el modelo latinoamericano contrasta con los patrones de formación de uniones y de reproducción que surgieron en los países desarrollados a partir de la década de 1960 y que se consideran característicos de la llamada segunda transición demográfica. Entre los elementos propios de la segunda transición están precisamente la postergación de las uniones y de la edad de inicio a la maternidad⁹.

Sin perjuicio de lo anterior, lo que sí es un hecho en América Latina es la existencia de patrones diversos respecto al matrimonio —formal o consensual— y al inicio de la maternidad, influenciados fuertemente por la educación. Como se aprecia en el cuadro II.2, de manera sistemática las mujeres con mayor nivel de educación inician su actividad sexual a edades más tardías que las mujeres con menor educación, así como también postergan la conformación de uniones y la maternidad.

⁸ Dentro de la ampliación de las metas de los ODM aprobada en 2005, se incluyó el acceso universal a la salud reproductiva.

⁹ Otros elementos característicos de la segunda transición demográfica son la mayor presencia de cohabitación, la procreación extramarital, así como el incremento de la disolución de uniones y las familias reconstruidas. No obstante, el análisis de estos componentes escapa al objetivo de este capítulo.

En términos de desigualdades, sobresalen los casos de Bolivia (Estado Plurinacional de), el Perú y Honduras. En estos países más de la mitad de las jóvenes de 25 a 29 años con educación superior aún no se ha unido ni ha tenido hijos, mientras que la mitad de las jóvenes sin educación ya se ha unido y ha tenido su primer hijo antes de los 18 años (Perú y Honduras) o 20 años (Bolivia

(Estado Plurinacional de)¹⁰. En Colombia, por ejemplo, la mitad de las jóvenes de 25 a 29 años con educación superior se unen por primera vez después de los 26 años y tienen su primer hijo cerca de los 29 años; en el otro extremo, la edad mediana de las jóvenes sin instrucción formal es de 17 años para la primera unión y de cerca de 18 años para el inicio de la maternidad.

Cuadro II.2
AMÉRICA LATINA (6 PAÍSES): EDAD MEDIANA DE INICIO A LA PRIMERA RELACIÓN SEXUAL, A LA PRIMERA UNIÓN Y AL PRIMER HIJO
SEGÚN NIVEL DE EDUCACIÓN DE LAS MUJERES DE 25 A 29 AÑOS Y 45 A 49 AÑOS
(En años)

País, fecha y nivel educativo	Primera relación sexual		Primera unión		Primer hijo	
	Edad actual		Edad actual		Edad actual	
	25 a 29	45 a 49	25 a 29	45 a 49	25 a 29	45 a 49
Bolivia (Estado Plurinacional de), 2008						
Sin educación	19,0	18,5	20,4	20,1	19,7	20,9
Primaria	17,6	18,1	19,0	19,9	19,4	20,5
Secundaria	18,6	19,3	20,9	21,5	20,9	21,8
Superior	21,7	21,8	^a	24,1	^a	24,7
Colombia, 2010						
Sin educación	14,9	16,2	17,0	18,3	17,9	19,3
Primaria	16,0	18,1	17,9	20,1	18,5	20,5
Secundaria	17,4	19,9	20,3	22,6	20,5	22,8
Superior	18,5	21,3	26,2	26,2	28,9	27,6
Brasil, 2006						
Sin educación	16,0	17,0	17,0	18,0	19,0	20,0
Primaria	16,0	17,5	16,5	18,5	18,0	19,5
Secundaria	17,1	19,1	18,5	21,0	19,6	22,1
Superior	18,0	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0
Honduras, 2005-2006						
Sin educación	16,4	16,8	17,7	17,9	18,7	19,0
Primaria (1-3)	16,9	17,2	17,5	17,7	18,6	18,9
Primaria (4-6)	17,7	18,3	18,4	18,7	19,4	20,0
Secundaria	19,7	21,0	20,5	21,4	21,6	22,6
Superior	22,7	23,1	^a	24,0	^a	25,3
Perú, 2009						
Sin educación	16,1	17,1	17,8	19,4	18,5	20,1
Primaria	16,7	17,6	18,4	19,3	18,7	20,1
Secundaria	18,4	19,0	20,9	21,7	21,2	22,1
Superior	20,8	22,1	^a	26,4	^a	27,3
República Dominicana, 2007						
Sin educación	15,8	15,7	16,2	16,2	17,7	19,0
Primaria (1-4)	15,6	16,9	15,8	17,5	17,5	19,2
Primaria (5-6)	16,2	17,4	16,6	18,0	18,3	20,1
Secundaria	18,0	19,9	18,8	20,7	20,7	22,8
Superior	20,1	23,6	22,9	24,5	^a	26,9

Fuente: CELADE-División de Población de la CEPAL, sobre la base de encuestas de demografía y salud (DHS) y Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).
^a La mediana no pudo calcularse porque la mitad de las mujeres de 25 a 29 años aún no se habían unido o no tenían hijos.

Al comparar en el cuadro II.2 las edades medianas de las cohortes de mujeres más jóvenes (25 a 29 años) con las de edades más avanzadas (45 a 49 años), se aprecia que en general ha habido un rejuvenecimiento en la edad de inicio a la primera relación sexual, independientemente del nivel educativo. Este rejuvenecimiento también se manifiesta en el inicio de la unión y de la maternidad,

tanto en mujeres sin educación como en aquellas que alcanzaron los niveles de educación primaria o secundaria,

¹⁰ Cabe destacar que en Bolivia (Estado Plurinacional de), el Perú y Honduras no ha sido posible determinar la edad mediana a la primera unión y al primer hijo de las jóvenes de entre 25 y 29 años con nivel de educación superior porque la mitad de ellas aún no se habían unido ni tenían hijos.

si bien se observa una clara postergación entre aquellas de nivel superior¹¹. A través de los censos de población puede examinarse el porcentaje de mujeres que aún no han tenido hijos, comparando dos momentos censales. Como se ilustra en el recuadro II.2, en México y Panamá

existe una tendencia hacia la postergación de la maternidad (o incluso hacia un aumento de la nuliparidad final) influenciada fuertemente por la educación, y en la que las mujeres con nivel de instrucción superior muestran las variaciones más significativas.

Recuadro II.2
EL AUMENTO DE LA NULIPARIDAD (MUJERES QUE NO TIENEN HIJOS)

Al analizar los cambios en el calendario de la fecundidad, un indicador complementario es el porcentaje de mujeres que no han tenido hijos. Los censos de población constituyen una fuente relevante para obtener este indicador porque permiten una amplia desagregación respecto a otras variables de interés, en este caso la educación y la edad de las mujeres, sin verse afectado por limitaciones en el

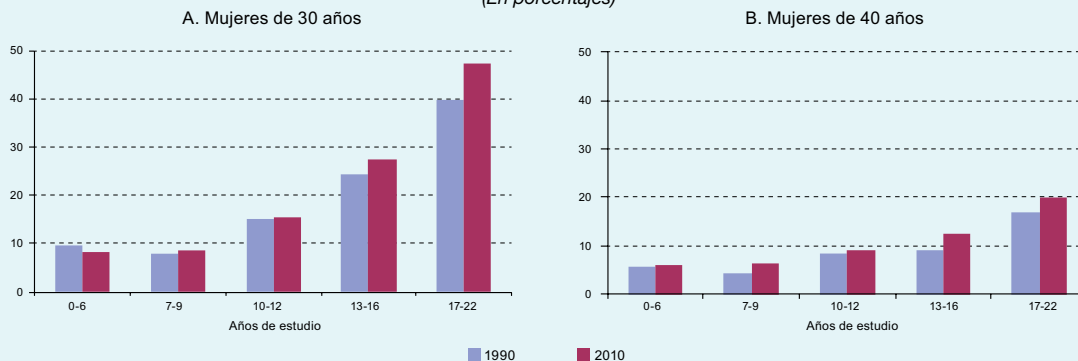
número de casos o errores de muestreo, como sucede con las encuestas. De acuerdo con los dos censos de México y Panamá, el porcentaje de mujeres sin hijos aumenta según el nivel de instrucción de las mujeres, independientemente de la edad de las mismas, aunque de manera más notoria entre las más jóvenes (véanse los gráficos 1 y 2). Asimismo, el acceso a la educación superior constituye el punto

de inflexión. En México, más de la mitad (54%) de las mujeres de 30 años con universidad completa —al menos 17 años de estudio— aún no ha tenido hijos frente a solo un 15% de aquellas con menos de 7 años de estudio; en Panamá, la nuliparidad se presenta en el 47% de las mujeres de 30 años con más alto nivel educativo, frente a un 8% para aquellas que tienen a lo sumo 6 años de estudio.

Gráfico 1
MÉXICO: MUJERES SIN HIJOS SEGÚN AÑOS DE ESTUDIO, CENSOS DE 2000 Y 2010
(En porcentajes)



Gráfico 2
PANAMÁ: MUJERES SIN HIJOS SEGÚN AÑOS DE ESTUDIO, CENSOS DE 1990 Y 2010
(En porcentajes)



Mientras que no se observan cambios significativos en la nuliparidad en las mujeres con 12 años o menos de estudio en los periodos intercensales considerados en los gráficos 1 y 2, sí se verifica un claro efecto temporal entre las mujeres con educación

superior (13 años o más). Es decir, ya se trate de mujeres más jóvenes o de edades más avanzadas dentro del período reproductivo, el porcentaje de mujeres con educación superior que aún no ha tenido hijos resulta más elevado en el último censo respecto

de un censo anterior. Estos cambios en el tiempo indican que estas mujeres postergan el inicio de su maternidad. Es probable que en el futuro esta postergación conduzca a un aumento de la nuliparidad final.

Fuente: CELADE-División de Población de la CEPAL.

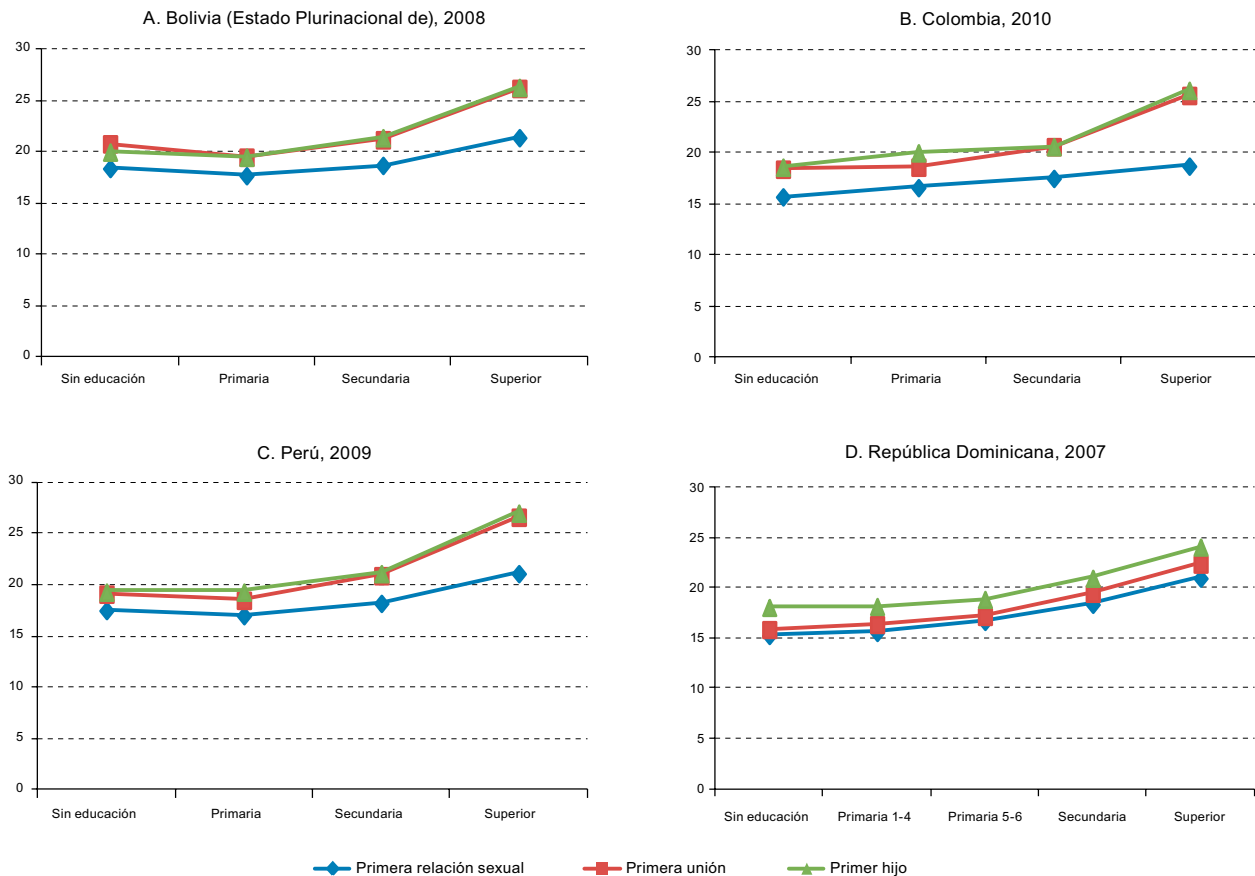
¹¹ En varios países no fue posible determinar la edad mediana a la primera unión y al primer hijo de las jóvenes entre 25 y 29 años con nivel de educación superior debido a que más de la mitad de

ellas aún no se habían unido o no tenían hijos. Esto significa que en esos casos, la edad mediana del grupo de 25 a 29 años es superior a la del grupo de 45 a 49 años.

Lo anterior supone una cierta polarización en el calendario de la fecundidad según la educación, donde la enseñanza superior marca el punto de inflexión. Por una parte, se visualiza una tendencia a la convergencia en el inicio de la actividad sexual, entre las jóvenes de mayor y menor educación y, simultáneamente, una clara divergencia en la edad al casarse y al tener hijos, que se va profundizando conforme aumenta el nivel educativo. En el gráfico II.5 se ilustra este comportamiento para las mujeres de 30 a 34 años de cuatro países de la región; las mayores brechas se presentan al comparar el inicio de la sexualidad respecto al de la maternidad.

El hecho de que las mujeres de sectores sociales más privilegiados y más educados se caractericen por una postergación en la edad a la que contraen matrimonio y tienen hijos respalda la idea de que en estos sectores se ejerce una mayor autonomía frente a las decisiones sexuales y reproductivas. Asimismo, cuando se observan los promedios nacionales se aprecia que las transformaciones en el inicio de la nupcialidad y de la maternidad han sido modestas. Sin embargo, en un contexto de creciente incorporación de las mujeres a la educación superior, es muy probable que en los próximos años se registren modificaciones más intensas y, por ende, un mayor impacto sobre los niveles de fecundidad de la región.

Gráfico II.5
AMÉRICA LATINA (4 PAÍSES): EDAD MEDIANA A LA PRIMERA RELACIÓN SEXUAL,
LA PRIMERA UNIÓN Y EL PRIMER HIJO DE MUJERES DE 30 A 34 AÑOS,
SEGÚN NIVEL DE EDUCACIÓN
(En años)



Fuente: CELADE-División de Población de la CEPAL, sobre la base de encuestas de demografía y salud (DHS) y Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

D. Perspectivas futuras de la fecundidad sobre la base de los cambios educativos

En la mayoría de los países de América Latina, la distribución educativa ha evolucionado rápidamente a lo largo de las últimas décadas. Al mismo tiempo, la diferencia de fecundidad por nivel de educación no solo se ha mantenido, sino que incluso ha aumentado en algunos países. Como consecuencia, cabría esperar descensos más rápidos de la fecundidad conforme una proporción creciente de mujeres alcancen mayores niveles de educación. La proyección de la fecundidad sobre la base de la distribución educativa de la población refuerza la conclusión de que los bajos niveles de fecundidad dominarán, crecientemente, el futuro demográfico y económico de la región, con fuertes implicancias en términos de economía del cuidado, participación laboral femenina y relaciones de dependencia en las familias.

1. Los cambios en la distribución educativa de las mujeres en América Latina

En la mayoría de los países de América Latina, la distribución educativa ha evolucionado rápidamente a lo largo de las últimas décadas. Diversas fuentes de datos y estudios respaldan la existencia de esta tendencia (UNESCO, 2011; Barro y Lee, 2010; Lutz y Samir, 2011). Los cambios en el nivel educativo son evidentes en los censos nacionales de población, que constituyen la fuente de información principal para las estimaciones elaboradas por el Instituto Internacional para el Análisis de Sistemas Aplicados (IIASA) y por Barro y Lee (2010)¹². Sobre la base de datos de un único censo, es posible observar diferencias en los niveles de educación por edad, logros que son reflejo de una expansión previa del sistema educacional. Estos datos ofrecen no solo un registro de cambios pasados, sino que también sirven de insumo para proyectar cambios futuros (véase Miller, 2006).

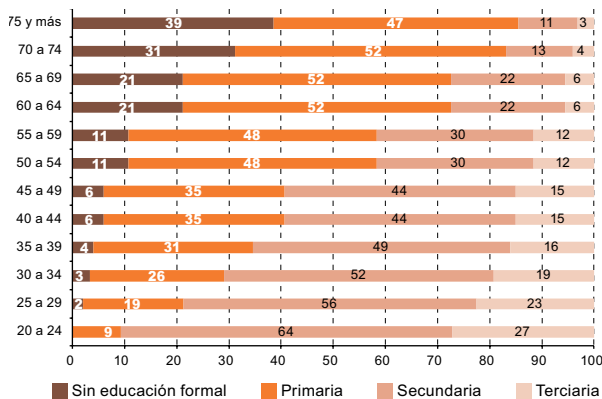
Utilizando estimaciones de Barro y Lee (2010), en el gráfico II.6 se presenta la distribución de los niveles educativos de las mujeres mexicanas en 2010 por grupos quinquenales de edad. Es posible observar un gran cambio en la distribución educativa por edad. Un porcentaje importante de las mujeres mayores nunca asistió a la escuela; en particular, el 39% del

grupo de 75 años y más. Esta proporción fue disminuyendo en las cohortes más jóvenes, hasta llegar a 0 en la cohorte de menos edad, entre los 20 y los 24 años. Por su parte, se observa una trayectoria contraria en la proporción de mujeres que asiste a la universidad. Entre las mujeres mayores, el porcentaje es muy escaso, menos de un 3% entre las mayores de 75 años, pero ha aumentado de manera constante entre las cohortes más jóvenes alcanzando su punto máximo en la cohorte de 20 a 24 años, donde más de una de cada 4 mujeres jóvenes poseen alguna educación más allá de la secundaria. Estas diferencias por edad son principalmente reflejo de la expansión del sistema educativo a través del tiempo, aunque también de las tasas más altas de supervivencia de personas con mayor educación y diferencias en los patrones migratorios.

La rápida transición educativa observada en México es una característica que comparten varios países de la región. La experiencia de los países de América Latina ha sido variada en los últimos 30 años. Algunos países, líderes en el logro educativo en 1980 mostraron poco progreso posterior, mientras que otros que partieron con bajos niveles educativos tuvieron un rápido progreso durante las tres últimas décadas. En consecuencia, el crecimiento de los sistemas nacionales educativos desde 1980 ha sido bastante heterogéneo en la región.

¹² Los estudios de Barro y Lee presentan estimaciones de los niveles de educación por edad y sexo de 146 países, entre 1950 y 2010.

Gráfico II.6
MÉXICO: DISTRIBUCIÓN DE LAS MUJERES POR GRUPO DE EDAD Y NIVEL EDUCATIVO, 2010
(En porcentajes)



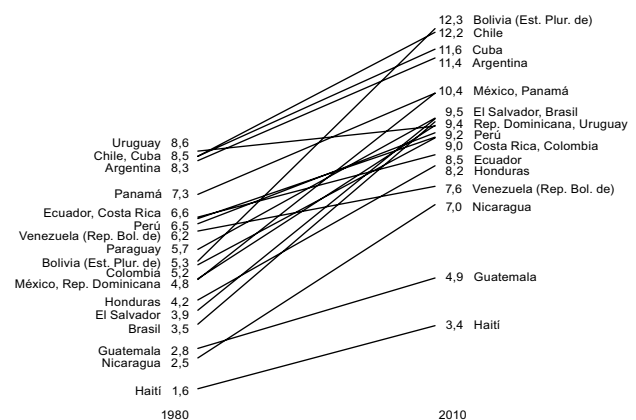
Fuente: R. Barro y J.W. Lee, "A new data set of educational attainment in the world, 1950-2010", *NBER Working Paper*, N° 15902, 2010.

En el gráfico II.7 se ilustra esta heterogeneidad al mostrar para diversos países de la región el número promedio de años de educación de las mujeres de 25 a 29 años (el grupo de edad cúspide de la maternidad en estos países) en 1980 y una generación más tarde, en 2010, sobre la base de los datos de Barro y Lee (2010). En la mayoría de los países, se observa que los sistemas educativos se expandieron rápidamente, lo que se ve reflejado en el aumento promedio de 3,5 años en la escolarización de las mujeres de 25 a 29 años. Las fuentes de datos para estas estimaciones suelen ser distintas de un país a otro y, como se señaló anteriormente, las estimaciones elaboradas por Barro y Lee y por el IIASA en cuanto a los niveles de educación y cambios en el tiempo suelen diferir¹³. Sin embargo, el patrón general de rápida transformación de la educación en América Latina y, en particular, su rápido crecimiento en algunos países, se registra en ambas fuentes. En este sentido, cabe destacar el caso de Bolivia (Estado Plurinacional de), que mostró un aumento en la escolaridad media de 7 años entre las mujeres de 25 a 29 años desde

1980, así como los del Brasil y México que mostraron incrementos de 6 años y 5,5 años, respectivamente.

En la medida en que los comportamientos económicos y demográficos suelen diferir a causa de los distintos niveles educacionales, las proyecciones de la distribución que tendrá la educación constituyen importantes insumos para las proyecciones económicas y demográficas. Por ejemplo, los cambios en la distribución de la educación de la fuerza laboral generan condiciones favorables para un aumento más rápido del crecimiento económico, ya que una fuerza laboral más educada suele ser también más productiva. Del mismo modo, es probable que los cambios en la distribución de la educación conlleven un descenso más rápido de la fecundidad, puesto que las tasas de fecundidad son menores en las mujeres con mayores niveles de educación. En la siguiente sección se analiza el grado en que los cambios en la distribución de la educación han contribuido a aumentar la velocidad de descenso de la fecundidad.

Gráfico II.7
AMÉRICA LATINA (20 PAÍSES): PROMEDIO DE ESCOLARIDAD DE LAS MUJERES DE 25 A 29 AÑOS, 1980 Y 2010
(En número de años)



Fuente: R. Barro y J.W. Lee, "A new data set of educational attainment in the world, 1950-2010", *NBER Working Paper*, N° 15902, 2010.

2. La contribución de los cambios en la distribución educativa al descenso de la fecundidad

Al mismo tiempo que los niveles educacionales de las mujeres han ido en aumento en la región, la fecundidad ha venido disminuyendo rápidamente, como se mostró en las secciones anteriores. También se mostró que los niveles educativos se correlacionan inversamente con la

fecundidad, de modo que las mujeres con mayores niveles de educación poseen índices más bajos de fecundidad.

Una teoría acerca de las causas de la diferencia en la fecundidad por nivel educacional se centra en la modernización. La idea es que la diferencia observada es temporal y refleja discrepancias en el acceso y la participación en la vida moderna. Las fuerzas de la modernización se concentran inicialmente en las zonas urbanas, entre aquellos con un nivel de educación más alto, para luego extenderse

¹³ Los estudios de IIASA ofrecen estimaciones de los niveles de educación por edad y sexo para 120 países desde 1970 hasta 2000 y, además, presentan varios escenarios de proyección entre 2005 y 2050.

a toda la sociedad. Así, los niveles bajos de fecundidad se observan primero entre los estratos más educados de la sociedad, pero con el tiempo se vuelven comunes a todos los demás grupos. De este modo, al observar el comportamiento reproductivo actual de las mujeres con educación universitaria, es posible entender el curso futuro de la fecundidad para todas las mujeres. En esta teoría, las diferencias que se observan hoy eventualmente desaparecerán, en la medida que la modernización se extienda a todos los sectores de la sociedad.

Una teoría alternativa es la que considera la educación como un mecanismo de estratificación. En este caso, la educación es vista como una institución que, a la larga, clasifica a la población en diferentes tipos de trabajo. Las oportunidades laborales para las mujeres con bajo nivel educacional tienden a recaer en ocupaciones que no compiten de manera directa con la maternidad, mientras que los trabajos en que se enfocan las mujeres con alto nivel de educación sí lo hacen. En esta teoría, se espera que las diferencias en los niveles de fecundidad persistan en el tiempo según los distintos niveles de educación.

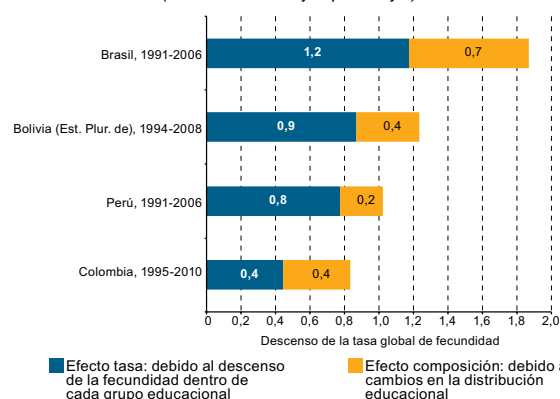
En realidad, ambos tipos de mecanismos suelen operar al mismo tiempo y, de hecho, como se muestra en el cuadro II.1, en un número importante de países de América Latina, la diferencia de fecundidad por nivel de educación no solo se mantiene, sino que también aumenta. Pese a esto, existen razones para sospechar que la magnitud de esas diferencias se reducirá en el largo plazo, en la medida en que la disminución de la fecundidad entre las mujeres más educadas podría eventualmente detenerse, mientras la fecundidad entre las menos educadas podría seguir cayendo.

Utilizando datos de las encuestas de demografía y salud, se determinó la contribución directa de los cambios en la distribución educativa al descenso de la fecundidad en cuatro países (Brasil, Bolivia (Estado Plurinacional de), Perú y Colombia) durante un período de 15 años. Para cada país se calculan dos niveles de fecundidad hipotética. El primero es el nivel de fecundidad que se alcanzaría si solo cambiase la distribución de la educación, mientras que los patrones de fecundidad en cada grupo de educación permanecen constantes. El segundo es el nivel de fecundidad que se alcanzaría si la distribución de la educación se mantuviera constante, y solo cambiaran los

patrones de fecundidad dentro de cada grupo educativo. De esta manera, se puede valorar la magnitud del efecto tasa (debido al descenso de la fecundidad en cada grupo educacional) y del efecto composición (debido a los cambios en la distribución educacional) en las variaciones observadas en los niveles de fecundidad.

En el gráfico II.8 se presentan los resultados de este ejercicio para los cuatro países. El descenso de la tasa global de fecundidad fue más rápido en el Brasil —de 1,9 hijos por mujer—, pero igualmente importante en los demás países —en Bolivia (Estado Plurinacional de) el descenso fue de 1,3 hijos; en el Perú de 1,0 y en Colombia de 0,8. En el Brasil, Bolivia (Estado Plurinacional de) y el Perú, el descenso de la fecundidad se ha debido principalmente a cambios en las tasas de fecundidad de los grupos educativos (efecto tasa), mientras que en Colombia, ambos efectos (tasa y composición) tuvieron la misma magnitud. Aun sin constituirse en la fuerza dominante en el descenso de la fecundidad, los cambios en la distribución educativa (efecto composición) han contribuido sustancialmente a la reducción: 0,7 nacimientos en el caso del Brasil, 0,4 nacimientos en el caso de Bolivia (Estado Plurinacional de) y Colombia, y 0,2 nacimientos en el caso del Perú.

Gráfico II.8
AMÉRICA LATINA (4 PAÍSES): DESCOMPOSICIÓN DE LA DISMINUCIÓN DE LA TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD EN EFECTO TASA Y EFECTO COMPOSICIÓN, DURANTE UN PERÍODO DE 15 AÑOS
(En número de hijos por mujer)



Fuente: CELADE-División de Población de la CEPAL, sobre la base de encuestas de demografía y salud (DHS).

3. Evolución futura de la educación e impacto en la fecundidad

Las proyecciones realizadas por la División de Población de las Naciones Unidas ofrecen una respuesta a la posible evolución futura de la fecundidad. Estas se basan en la tendencia general de descenso de la fecundidad observada

en todos los países, otorgando una ponderación adicional a los patrones específicos observados en el país de interés (específicamente, utilizan un modelo jerárquico bayesiano para modelar la tasa de cambio en la tasa global de

fecundidad a partir de su nivel actual). Las proyecciones para América Latina apuntan a un número creciente de países que pronto tendrán niveles de fecundidad inferiores al nivel de reemplazo¹⁴.

Otra manera de estudiar el futuro de la fecundidad en América Latina es a través de la proyección de la fecundidad basada en la distribución educativa de la población. A modo de ejemplo, se presentan a continuación proyecciones de este tipo para el Brasil, Colombia, el Perú y Bolivia (Estado Plurinacional de). Estas proyecciones se basan tanto en los futuros cambios en la distribución educativa de la población, como en los cambios en las tasas de fecundidad experimentados por cada grupo de educación. Los cambios en la composición educacional de la población femenina en edad reproductiva se obtienen a partir de las proyecciones elaboradas por el IIASA. Por otro lado, se asume que en cada grupo educativo las tasas de fecundidad seguirán disminuyendo al ritmo observado en los últimos 15 años y dirigiéndose hacia las tasas de fecundidad más bajas observadas en la población con mayor educación.

En el Brasil, los índices de fecundidad entre las mujeres con educación universitaria, con edades comprendidas entre los 40 y los 49 años, fueron de 1,5 hijos por mujer en 2006, mientras que las tasas actuales de fecundidad son de un solo hijo por mujer.

Para este ejercicio, se considerara que esta tasa de 1,0 es temporal, debido al retraso en la maternidad y que la tasa de estas cohortes será finalmente de 1,5 hijos por mujer. Para el resto de los grupos educativos, se asume que las tasas de fecundidad descenderán hacia este

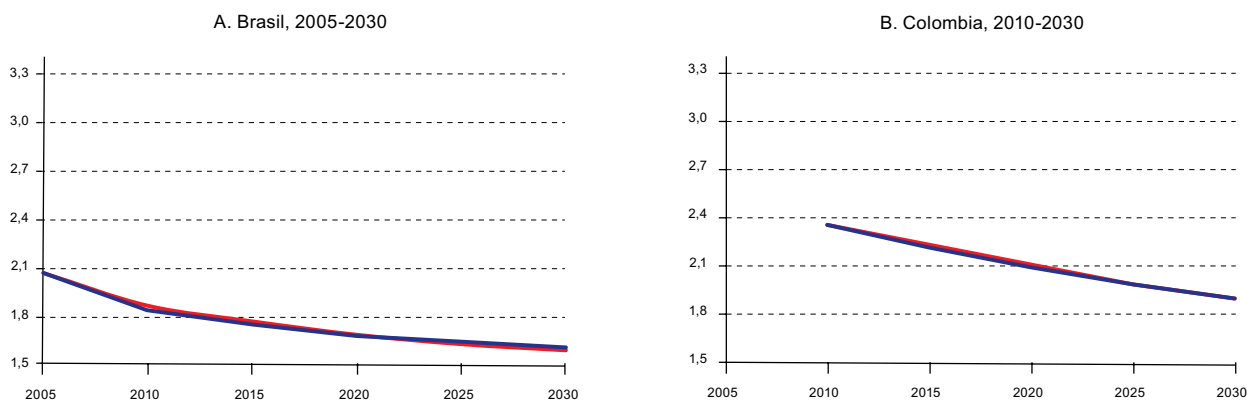
mismo valor de 1,5 hijos por mujer, al ritmo observado históricamente en el Brasil.

De hecho, para los cuatro países considerados en este ejercicio, se estableció 1,5 como el nivel de fecundidad mínimo admisible para el grupo con educación universitaria. En los cuatro países, los niveles actuales de fecundidad de las mujeres con educación universitaria son inferiores al nivel de reemplazo: 1,5 hijos por mujer en Colombia; 1,6 en el Perú, y 1,9 en Bolivia (Estado Plurinacional de).

En el gráfico II.9 se presentan los resultados de este ejercicio de proyecciones (líneas rojas) junto con las proyecciones oficiales de las Naciones Unidas (líneas azules). Por lo general, los resultados de las dos metodologías coinciden acerca de la acentuada disminución futura de la fecundidad. En ambos casos se constató una reducción de la fecundidad, a 1,6 nacimientos en el Brasil y 1,9 nacimientos en Colombia, en los próximos 20 años.

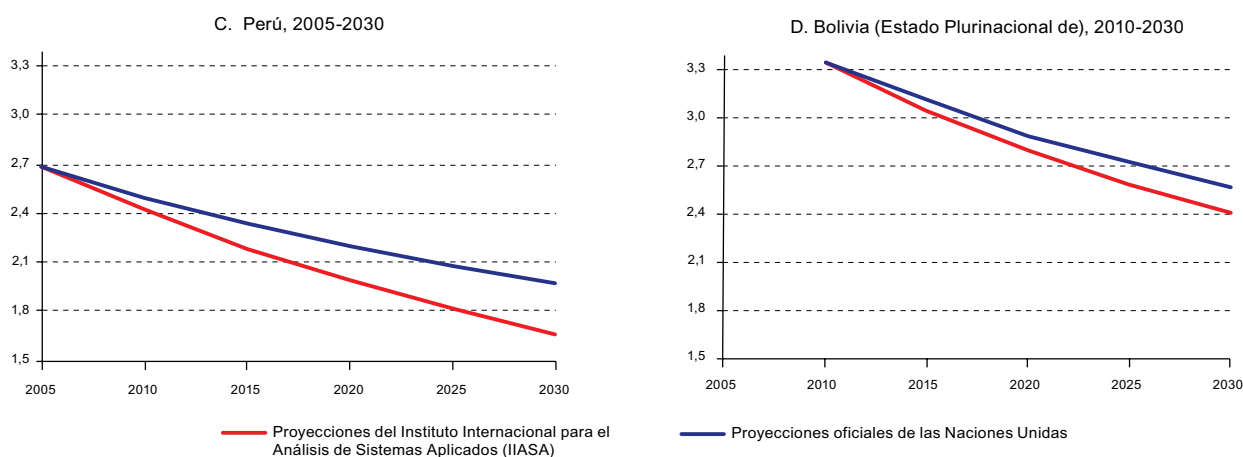
En el caso de Bolivia (Estado Plurinacional de) y el Perú, se encontró que, teniendo en consideración los rápidos cambios en la distribución de la educación, la disminución de la fecundidad seguirá un proceso aun más rápido, para situarse en 2030 en 2,4 hijos por mujer en Bolivia (Estado Plurinacional de) —alrededor de 0,2 nacimientos por debajo de la previsión de las Naciones Unidas— y 1,65 hijos por mujer en el Perú —alrededor de 0,3 nacimientos por debajo de la previsión de las Naciones Unidas. Pero la principal conclusión que se extrae de este análisis es que los resultados refuerzan la idea de que los bajos niveles de fecundidad dominarán, crecientemente, el futuro demográfico y económico de la región.

Gráfico II.9
AMÉRICA LATINA (4 PAÍSES): FUTUROS ESCENARIOS DE DISMINUCIÓN DE LA FECUNDIDAD
(En número de hijos por mujer)



¹⁴ Nivel al cual una generación no tendría la capacidad de reproducirse a sí misma. Véase la nota de pie de página núm. 4.

Gráfico II.9 (conclusión)



Fuente: Naciones Unidas, "World Population Prospects: The 2010 Revision" [CD-ROM], División de Población, 2011; Proyecciones basadas en educación: CEPAL sobre la base del modelo del CELADE-División de Población de la CEPAL para proyección de la fecundidad basada en la distribución educativa de la población.

En el cuadro II.3 se presentan varias características sobresalientes de este futuro de baja fecundidad. En la actualidad, hay cinco países en América Latina con una fecundidad por debajo del nivel de reemplazo: Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba y Uruguay. En los próximos 15 años, siete países más cruzarán este umbral: Argentina, Colombia, El Salvador, Ecuador, México, Nicaragua, Perú y Venezuela (República Bolivariana de). Dentro de una generación, prácticamente todos los países de América Latina alcanzarán niveles de fecundidad por debajo del nivel de reemplazo.

La emergencia de bajos niveles de fecundidad en la región tendrá diversas consecuencias. En términos demográficos se

observa un descenso continuo en el número de nacimientos. Los nacimientos ya han alcanzado sus niveles máximos en la mayoría de los países de la región y actualmente están disminuyendo. Por ejemplo, el año en que mayor número de nacimientos hubo en Cuba fue 1965, en el Brasil 1983 y en el Perú 1991 (véase el cuadro II.3). Estas cohortes numerosas son reemplazadas por cohortes en las que cada vez se producen menos nacimientos, lo que envejece gradualmente la población. Estos cambios, como se verá en los capítulos siguientes, tienen fuertes implicancias en términos de economía del cuidado, participación laboral femenina y relaciones de dependencia en las familias.

Cuadro II.3
AMÉRICA LATINA (20 PAÍSES): PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS RELACIONADAS CON LA BAJA FECUNDIDAD

País	Año en que los nacimientos alcanzan su máximo nivel	Año en que la fecundidad cae por debajo del nivel de reemplazo ^a	Año en que el país se convierte en economía envejecida ^b
Cuba	1965	1979	2005
Chile	1962	2000	2022
Brasil	1983	2005	2026
Costa Rica	1989	2005	2026
Uruguay	1974	2009	2019
El Salvador	1979	2016	2041
México	1991	2017	2033
Argentina	1993	2018	2025
Colombia	2007	2021	2031
Ecuador	2000	2024	2036
Perú	1991	2024	2038
Nicaragua	1992	2025	2044
Venezuela (República Bolivariana de)	2010	2025	2037
República Dominicana	2006	2027	2040
Panamá	2005	2027	2034
Haití	1996	2040	2050
Honduras	2018	2040	2049
Paraguay	2020	2042	2048
Bolivia (Estado Plurinacional de)	2028	2053	2050
Guatemala	2053	2071	2050

Fuente: Columnas 1 y 2: Naciones Unidas, "World Population Prospects: The 2010 Revision" [CD-ROM], División de Población, 2011; Columna 3: CEPAL sobre la base de datos de las cuentas nacionales de transferencias.

^a Tasa global de fecundidad menor que 2,1 hijos por mujer.

^b Año en que el consumo de los adultos mayores (más de 60 años) supera el de los niños (de 0 a 14 años).

Un dato que ilustra cabalmente el impacto económico del envejecimiento de la población es el año en el cual los países se convertirán en economías envejecidas, o sea en el que el consumo económico de los adultos mayores excederá el de los niños. Utilizando proyecciones basadas en los datos del proyecto de las cuentas nacionales de transferencias se observa que en el caso de Cuba esta fecha ya pasó hace varios años (véase el cuadro II.3).

Dentro de los próximos 15 años, se espera que otros cinco países destinen más recursos a los adultos mayores que a los niños: Chile, Brasil, Costa Rica, Uruguay y Argentina. En los 15 años siguientes, se espera que otros siete países pasen este umbral, mientras que dentro de una generación, la economía envejecida se convertirá en la forma dominante de economía en América Latina, así como en casi todo el resto del mundo.

Recuadro II.3

EL PROYECTO DE LAS CUENTAS NACIONALES DE TRANSFERENCIAS

Desde 2007, el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL coordina el proyecto regional para América Latina y el Caribe de las cuentas nacionales de transferencias (véase [en línea] http://www.cepal.org/celade/transferencias_intergeneracionales) con el apoyo financiero del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (CIID) del Canadá y de la Universidad de California en Berkeley. El proyecto cuenta con la participación de la Argentina, el Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Jamaica, México, el Perú y el Uruguay, y se desarrolla en el marco del proyecto global de cuentas nacionales de transferencias (National Account Transfers) coordinado por el Centro sobre la Economía y Demografía del Envejecimiento de la Universidad de California en Berkeley y el Programa de Estudios sobre Población y Salud del Centro Este-Oeste de Estudios sobre Población y Desarrollo en Hawái. En

la actualidad, el proyecto global (véase [en línea] <http://www.ntaccounts.org>) cuenta con la participación de 34 países de diferentes regiones del mundo.

El sistema de las cuentas nacionales de transferencias (CNT) proporciona un enfoque integral para medir la totalidad de los flujos económicos agregados en las distintas edades y a través del tiempo. Las cuentas incluyen flujos relativos a acumulación de capital y a transferencias, y distinguen las transferencias mediadas por las instituciones públicas de las que tienen lugar en el ámbito privado. Las estimaciones se basan, en gran medida, en las encuestas de hogares sobre ingresos, gastos, activos, fuerza de trabajo y transferencias, además de registros administrativos detallados disponibles en diferentes organismos gubernamentales. Asimismo, los flujos agregados se estiman de manera coherente con el Sistema de Cuentas Nacionales de las Naciones Unidas.

Debido a que la actividad económica varía considerablemente según la edad, los cambios en la estructura de edades en las próximas décadas tendrán un impacto significativo en las economías nacionales, los presupuestos públicos y la deuda nacional. La metodología de las cuentas nacionales de transferencias permite realizar pronósticos fiscales de largo plazo, que son de especial interés para los gobiernos debido a: i) la importancia de las inversiones de largo plazo, como la educación pública; ii) la necesidad de un enfoque de largo plazo con miras a abordar muchos de los problemas sociales, cuya resolución puede llevar décadas de esfuerzos concertados, como sucede con la desigualdad, y iii) los cambios o correcciones marginales que promueve este enfoque, que no solo son políticamente más factibles de implementar, sino que evitan la imposición de una carga injusta para cualquier generación en particular y permiten transiciones suaves en las políticas fiscales y de gasto público.

Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL.

E. Fecundidad adolescente: Una prioridad para la acción y la investigación

La baja de la fecundidad adolescente ha sido mucho más moderada que la caída de la fecundidad total. En muchos países de la región incluso se registró un aumento de la fecundidad adolescente durante la década de 1990, mientras la fecundidad total descendía significativamente. Asimismo, la desigualdad en los niveles de fecundidad de los distintos grupos educativos suele ser particularmente acentuada en el caso de la maternidad adolescente. La evidencia respecto de la reducción del porcentaje de nacimientos planeados entre las madres adolescentes es un aliciente y un poderoso argumento para redoblar las políticas y programas públicos de salud sexual y reproductiva dirigidos a este grupo.

1. Tendencias de la fecundidad adolescente

a) Las tendencias regionales: África subsahariana y América Latina

La ampliación del listado de metas de los ODM —aprobada políticamente en la Cumbre Mundial de 2005 e implementada operativamente desde 2007—, incluyó la incorporación de una meta sobre acceso universal a la salud reproductiva, entre cuyos indicadores figura la tasa de natalidad entre las adolescente¹⁵. Desde entonces, la subregión que aparece con mayor fecundidad adolescente del mundo en los informes de seguimiento de los ODM es el África subsahariana, con tasas que bordean el 120 por 1.000. Le sigue América Latina, con una tasa actual todavía superior al 80 por 1.000, y el Caribe, con una tasa del 70 por 1.000. La media actual de los países desarrollados es del 24 por 1.000 y la de los países en desarrollo del 54 por 1.000 (véase el gráfico II.10).

A diferencia del África subsahariana, donde la fecundidad total aún es elevada, en América Latina la tasa global de fecundidad ha caído fuertemente en las últimas décadas. De ahí que la alta fecundidad adolescente de América Latina pueda considerarse una “anomalía” en el concierto mundial. Cabe destacar que esta situación es común a casi todos los países

de la región, que sobresalen por una fecundidad adolescente bastante superior a la que cabría esperar considerando sus tasas globales de fecundidad (Rodríguez, 2011). De manera general, estos resultados sugieren que los cambios socioeconómicos estructurales, las transformaciones culturales y los programas públicos que impulsaron el descenso rápido y sostenido de la fecundidad total, no tuvieron el mismo efecto en la fecundidad adolescente.

b) Las tendencias nacionales: Diversidad de casos y variaciones según períodos

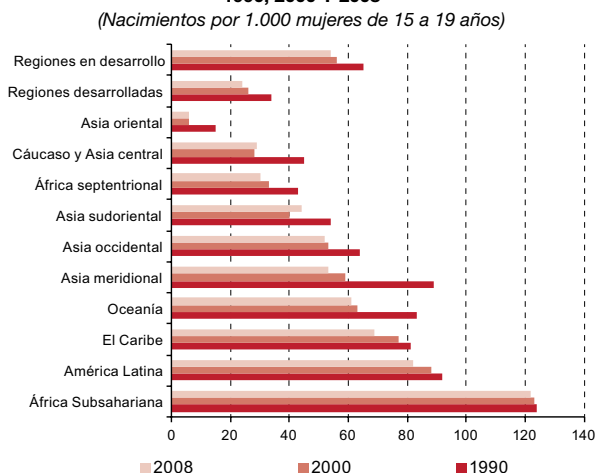
El descenso de la fecundidad en América Latina ha afectado a todas las edades y no hay duda de que la fecundidad adolescente actual de la región es más baja que al inicio de la caída sostenida de la fecundidad a mediados de la década de 1960.

Ahora bien, cuando se comparan las caídas de la fecundidad total y de la fecundidad adolescente emerge un patrón indiscutible: la baja de la fecundidad adolescente ha sido mucho más moderada. Incluso en algunos pocos países, en particular aquellos donde disminuyó primero la fecundidad total como la Argentina y el Uruguay, la fecundidad adolescente es actualmente más alta que la registrada en 1960 (Rodríguez, 2011). Adicionalmente, cuando se examinan las tendencias para períodos más cortos y recientes se advierte que durante la década de 1990 casi todos los países de la región registraron un aumento de la fecundidad adolescente, mientras la fecundidad total caía de manera pronunciada. En el gráfico II.11 se presenta el cambio en la maternidad adolescente entre las décadas de 1990 y de 2000. Los censos de la década de 2010 permitirán actualizar el diagnóstico respecto de la tendencia de la maternidad adolescente. En lo inmediato, los resultados de Panamá y México 2010 muestran evoluciones dispares: un ligero aumento entre 2000 y 2010 en el caso de México, y una reducción en el caso de Panamá en el mismo período.

Si se usa el porcentaje de adolescentes madres o embarazadas por primera vez registrado en encuestas especializadas de las décadas de 1980 o de 1990, por una parte, y de la década de 2000, por la otra, se aprecia un panorama más matizado: en seis países se registra un descenso de la maternidad adolescente y en cinco un aumento (véase el cuadro II.4). En suma, estas cifras ratifican la trayectoria distintiva y resistente a la baja de la reproducción adolescente en gran parte de los países de la región en las últimas dos décadas.

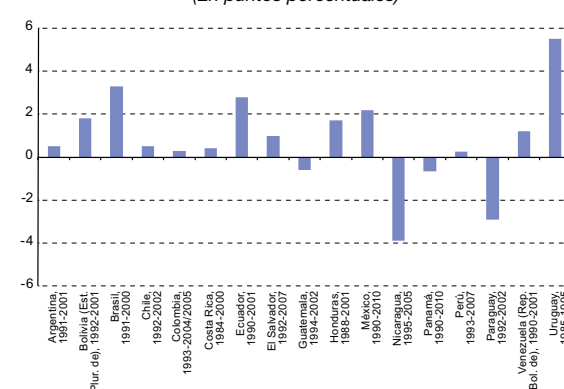
¹⁵ La fecundidad adolescente se mide mediante una tasa demográfica clásica que capta la intensidad de la reproducción entre las adolescente durante un año calendario. Esta tasa se calcula como el cociente entre los nacidos vivos de ese año cuyas madres tenían entre 15 y 19 años de edad (numerador) y la población media de mujeres de 15 a 19 años de edad de ese mismo año. Típicamente los nacidos vivos de madres menores de 15 años se incorporan al numerador, por lo cual su valor sobreestima esta fecundidad aunque casi siempre de manera ligera porque son pocos los nacimientos de madres menores de 15 años. En términos de interpretación, un valor del 70 por 1.000, por ejemplo, significa que, suponiendo que una mujer no puede tener más de un hijo en un año calendario, 70 de cada 1.000 adolescentes (mujeres de 15 a 19 años de edad) fueron madres durante ese año calendario. La maternidad adolescente, en cambio, se mide mediante una proporción que capta la frecuencia relativa de este atributo (haber sido madre) entre las adolescentes en un momento dado del tiempo. Su valor evidencia el riesgo relativo del evento maternidad para dicha población. Si se calcula para la edad exacta 20 indica la probabilidad de ser madre durante la adolescencia. Cuando se usan censos como fuente, el numerador son las mujeres de 15 a 19 años que declaran haber tenido uno o más hijos nacidos vivos. Cuando se usan encuestas especializadas (encuestas de demografía y salud y encuestas de salud sexual y reproductiva) este numerador normalmente corresponde a las mujeres de 15 a 19 años que declaran haber tenido uno o más hijos nacidos vivos y las mujeres que están embarazadas por primera vez. En ambos casos el denominador son todas las mujeres de 15 a 19 años de edad.

Gráfico II.10
MUNDO (12 REGIONES): TASA DE FECUNDIDAD ADOLESCENTE,
1990, 2000 Y 2008



Fuente: Naciones Unidas, *Objetivos de Desarrollo del Milenio. Informe de 2011*, Nueva York, 2011 [en línea] [http://www.un.org/es/comun/docs/?path=/spanish/millenniumgoals/pdf/11-31342\(S\)MDG_Report_2011_Book_LR.pdf](http://www.un.org/es/comun/docs/?path=/spanish/millenniumgoals/pdf/11-31342(S)MDG_Report_2011_Book_LR.pdf).

Gráfico II.11
AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): VARIACIÓN DE LA MATERNIDAD
ADOLESCENTE ENTRE LOS CENSOS DE LA DÉCADA
DE 1990 Y DE 2000^a



Fuente: J. Rodríguez, "Latin America: high adolescent fertility amid declining overall fertility", documento presentado en la reunión del Grupo de Expertos sobre adolescencia, juventud y desarrollo, Nueva York, 21 y 22 de julio de 2011 [en línea] http://www.un.org/esa/population/meetings/egm-adolescents/p01_rodriguez.pdf.

^a Porcentaje de mujeres de 15 a 19 años que declaran haber tenido uno o más hijos nacidos vivos en el censo.

Cuadro II.4
AMÉRICA LATINA (11 PAÍSES): MUJERES DE 15 A 19 AÑOS QUE SON MADRES POR PRIMERA VEZ O ESTÁN EMBARAZADAS,
ENCUESTAS DE 1985-1999 Y 2005-2010

País y fecha de las encuestas	Encuestas de 1985 a 1999	Encuestas de 2005 a 2010	Variación ^a
	(1)	(2)	(2) - (1)
	<i>(en porcentajes)</i>		<i>(en puntos porcentuales)</i>
Bolivia (Estado Plurinacional de): Encuestas de demografía y salud (DHS) 2008 y 1989	17,2	17,9	0,7
Brasil: Encuesta nacional de demografía y salud (PNDS) 2006, DHS 1986	13,3	22,3	9,8
Colombia: DHS 2010, DHS 1986	13,6	19,5	5,9
República Dominicana: DHS 2007, DHS 1996	22,7	20,6	-2,1
Ecuador: Encuesta Demográfica y de Salud Materna e Infantil (ENDEMAIN) 2004, DHS 1987	17,0	19,4	2,4
El Salvador: Encuesta Nacional de Salud Familiar (FESAL) 2008, DHS 1985	26,6	22,8	-3,8
Guatemala: DHS 2008, DHS 1987	22,8	21,8	-1,0
Haití: DHS 2005-2006, DHS 1994-1995	14,5	14,0	-0,5
Nicaragua: Encuesta de salud sexual y reproductiva (IRHS) 2006, DHS 1998	27,0	25,2	-1,8
Paraguay: IRHS 2008, DHS 1990	16,8	11,6	-5,2
Perú: Encuesta Nacional Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) continua 2009, DHS 1986	12,7	13,7	1,0

Fuente: Macro International Inc, "MEASURE DHS STATcompiler", mayo de 2011 [en línea] <http://www.measuredhs.com>; Brasil: Ministerio de Salud, "Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher (PNDS), 2006. Relatório", Brasília, 2008, pág. 126; Colombia: PROFAMILIA "Informe de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) 2010", Bogotá, 2011, pág. 114; Perú: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), "Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) Continua, 2009. Informe principal", Lima, 2010, pág. 88.

^a Un valor positivo significa un aumento.

2. Determinantes de la fecundidad adolescente

a) Los determinantes próximos

En el caso de la fecundidad adolescente, el análisis de los determinantes próximos de la fecundidad presentan algunas limitaciones importantes, debido principalmente a las dificultades para estimar la intensidad de la actividad sexual y la efectividad del uso de anticonceptivos (Rodríguez, 2009).

Respecto de la actividad sexual, los indicadores más usados, ninguno de los cuales logra captar con rigor la exposición al riesgo en toda su magnitud, sugieren un aumento de su frecuencia durante la adolescencia, lo que tiende a elevar la probabilidad de embarazo adolescente. En el cuadro II.5 se presentan los porcentajes acumulados de mujeres con actividad sexual al inicio, al medio y al final de las edades consideradas como "adolescencia" en este

texto. Casi sin excepción los porcentajes tienden a aumentar en todas las edades entre la década de 1980 y la de 2000, siendo una excepción el caso de Guatemala. Se verifica, además, que este adelantamiento de la actividad sexual no ha ido acompañado de una unión más temprana, lo que implica un aumento en la actividad sexual premarital. Esta creciente desvinculación entre la iniciación de la actividad

sexual en la adolescencia, por una parte, y, por otra, la unión en esa etapa, lleva a concentrar el análisis y los cálculos en los y las adolescentes sexualmente activos, independiente de la condición de unión. No obstante, el patrón de unión todavía sigue siendo clave, por cuanto la actividad sexual en su marco suele tener muchas más probabilidades de transformarse en un embarazo y un nacimiento.

Cuadro II.5
AMÉRICA LATINA (11 PAÍSES): MUJERES DE 20 A 24 AÑOS QUE SE HABÍAN UNIDO A LOS 15, 18 Y 20 AÑOS,
Y QUE SE HABÍAN INICIADO SEXUALMENTE A ESAS EDADES, DOS PUNTOS EN EL TIEMPO
(En porcentajes)

Países, años y variación ^a en el período de referencia	Mujeres unidas			Mujeres iniciadas sexualmente		
	15 años	18 años	20 años	15 años	18 años	20 años
Bolivia (Estado Plurinacional de) 2008	3,2	21,7	35,8	6,6	40,1	62,5
Bolivia (Estado Plurinacional de) 1989	5,1	23,7	40,7	9,5	36,9	56,9
Variación 1989-2008	-1,9	-2,0	-4,9	-2,9	3,2	5,6
Brasil 2006	10,5	35,6	50,1	14,4	58,4	78,7
Brasil 1986	3,7	21,8	39,5	6,1	29,8	48,1
Variación 1986-2006	6,8	13,8	10,6	8,3	28,6	30,6
Colombia 2010	5,6	23,0	37,2	13,8	60,3	82,2
Colombia 1986	4,3	23,3	37,2	6,1	30,9	49,0
Variación 1986-2010	1,3	-0,3	0,0	7,7	29,4	33,2
Ecuador 2004	3,8	22,2	40,9	9,2	37,6	58,1
Ecuador 1987	5,8	26,0	43,9	8,4	32,1	50,9
Variación 1987-2004	-2,0	-3,8	-3,0	0,8	5,5	7,2
El Salvador 2008	5,0	25,4	42,4	10,7	40,4	60,5
El Salvador 1985	6,2	37,7	58,5	6,7	32,9	48,6
Variación 1985-2008	-1,2	-12,3	-16,1	4,0	7,5	11,9
Guatemala 2002	8,1	35,0	50,4	12,2	41,7	57,6
Guatemala 1987	12,4	41,2	60,0	13,9	44,7	62,5
Variación 1987-2002	-4,3	-6,2	-9,6	-1,7	-3,0	-4,9
Haití 2006	5,6	29,9	47,9	13,5	53,4	72,9
Haití 1995	4,8	23,8	44,8	9,2	40,8	61,8
Variación 1995-2006	0,8	6,1	3,1	4,3	12,6	11,1
Honduras 2006	10,8	38,8	54,4	12,3	45,4	64,0
Honduras 1996	7,9	36,8	55,8	10,4	44,1	63,1
Variación 2006-1996	2,9	2,0	-1,4	1,9	1,3	0,9
Paraguay 2008	1,8	17,0	33,7	8,1	47,8	76,6
Paraguay 1990	3,1	24,2	40,5	5,3	38,6	60,8
Variación 1990-2008	-1,3	-7,2	-6,8	2,8	9,2	15,8
Perú 2009	3,4	19,0	34,2	7,1	38,7	61,1
Perú 1986	2,3	19,9	35,8	5,7	28,8	47,5
Variación 1986-2009	1,1	-0,9	-1,6	1,4	9,9	13,6
República Dominicana 2007	13,8	39,6	53,7	16,3	51,0	70,8
República Dominicana 1996	10,8	37,6	53,4	12,5	42,1	59,3
Variación 1996-2007	3,0	2,0	0,3	3,8	8,9	11,5

Fuente: Macro International Inc, "MEASURE DHS STATcompiler", mayo de 2011 [en línea] <http://www.measuredhs.com>; Brasil, primera unión: Ministerio de Salud, "Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde de Criança e da Mulher (PNDS), 2006. Relatório", Brasília, 2008, pág. 161; primera relación sexual: procesamiento especial de la base de datos; El Salvador: Asociación Demográfica Salvadoreña (ADS), "Informe final FESAL 2008", San Salvador, 2009, pág. 69; Paraguay: Centro Paraguayo de Estudios de Población (CEPEP), "Informe Nacional de Demografía y Salud Sexual y Reproductiva (ENDSSR) 2008", pág. 115; Perú: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), "Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) Continua, 2009. Informe principal", Lima, 2010, pág. 123 (primera unión) y pág. 126 (primera relación sexual).

^a En puntos porcentuales.

La única manera de que las tendencias de las dos variables intermedias antes descritas no se traduzcan en un alza de la fecundidad adolescente es mediante un aumento significativo del uso eficiente de anticonceptivos modernos durante la adolescencia. Y si bien los indicadores tradicionales de cobertura muestran un aumento, el análisis detallado de este uso lleva a una conclusión mucho menos alentadora. Primero, porque parte del aumento del uso de anticonceptivos corresponde a mujeres que comienzan a utilizarlos después de haber tenido su primer hijo, lo que obviamente no sirve para evitar la maternidad adolescente (aunque sí un segundo

embarazo). Asimismo, el uso suele ser menos constante y eficiente entre los y las adolescentes, por lo cual su aumento tiene un efecto protector menor que en otras edades. Por último, la iniciación sexual protegida, el indicador más relevante para pronosticar una adolescencia sin hijos, aún registra niveles ínfimos en buena parte de los países¹⁶.

¹⁶ Por ejemplo, en El Salvador en 2008 menos de una cuarta parte de las mujeres de 15 a 24 años usaron anticonceptivos modernos en su primera relación sexual (Informe final FESAL 2008). En el Ecuador en 2004 esta proporción fue inferior al 10% (véase [en línea] <http://www.measuredhs.com>).

Finalmente, respecto del aborto, la evidencia en la región es escasa y fragmentaria. Solo recientemente las encuestas internacionales de demografía y salud (DHS) y de salud sexual y reproductiva (IRHS) han incluido consultas sobre abortos inducidos pero las validaciones técnicas de sus resultados aún están pendientes. Las estadísticas oficiales de Cuba, donde el aborto es legal, sugieren que tiene un efecto importante sobre el nivel de la fecundidad adolescente y que, pese a ello, la maternidad temprana es mayor de lo que cabría esperar a la luz de los bajos índices de fecundidad de ese país¹⁷. En Chile, donde el aborto es ilegal, datos recientes revelan que se ha practicado al menos un aborto en un 6% de las mujeres que han tenido embarazos no planificados (INJUV, 2010). El porcentaje es mucho más alto en la declaración masculina, pero las respuestas de los hombres en estos temas suelen ser menos confiables y consistentes. Pese a su importancia, la escasez de información obliga a excluir este determinante próximo del análisis que se presenta en este capítulo.

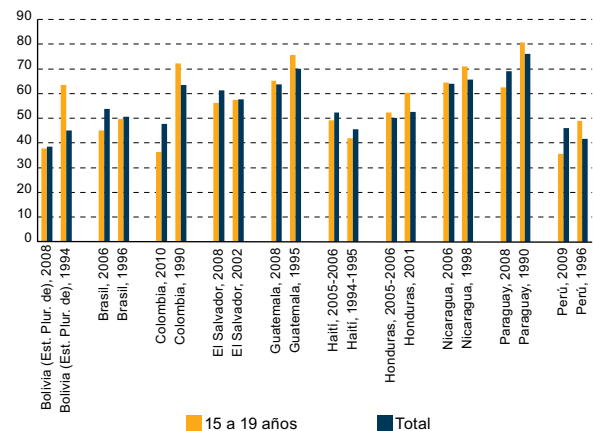
b) Fecundidad no deseada y derechos sexuales y reproductivos: una cuestión crítica

En América Latina hay una larga tradición de estudios e investigadores que sugieren que la reproducción adolescente es deseada, en particular más deseada que a otras edades¹⁸. Los argumentos para justificar esta posición van desde la demografía (por el orden de nacimiento, ya que los nacimientos de orden uno son más deseados, y la gran mayoría de los nacimientos de madres adolescentes son de orden uno) hasta la antropología (la existencia de pautas culturales que valoran la reproducción temprana), pasando por la sociología (la maternidad temprana como opción que da sentido y genera un proyecto de vida, en particular en contextos de escasos o nulos proyectos alternativos) (Oliveira y Vieira, 2010; Binstock y Pantelides, 2006; UNFPA/CENEP, 2005; Stern, 1997).

Estos argumentos, probablemente válidos en el pasado, chocan con la evidencia actual. En el gráfico II.12 se muestra cómo ha cambiado la deseabilidad de los nacimientos en los cinco años previos a la encuesta, tanto para las adolescentes como para el total de mujeres de 15 a 49 años. Las encuestas de las décadas de 1980 y 1990 validan la hipótesis de la mayor deseabilidad

ya que en todos los países el porcentaje de nacimientos que calificaban como “deseados cuando ocurrieron” era mayor cuando correspondían a nacimientos en mujeres menores de 20 años. Las encuestas de la década de 2000, en cambio, evidencian: i) una reducción sistemática y significativa en algunos países de la deseabilidad de los hijos concebidos durante la adolescencia y ii) niveles de deseabilidad menores entre los nacimientos en la adolescencia que en el total de nacimientos en la mayoría de los países.

Gráfico II.12
AMÉRICA LATINA (11 PAÍSES): EVOLUCIÓN DE LA DESEABILIDAD^a DE LOS EMBARAZOS TOTALES Y DE LOS EMBARAZOS ANTES DE LOS 20 AÑOS, DIVERSOS PERÍODOS
(En porcentajes)



Fuente: ICF Macro, "Demographic and Health Surveys, Measure DHS Statcompiler" [en línea] <http://www.measuredhs.com> [fecha de consulta: 7 de junio de 2011]; Ministerio de Salud del Brasil, "Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher (PNDS) 2006. Relatório", Brasília, 2008, cuadro 6; Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú (INEI), "Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES). Continua, 2009. Informe principal", Lima, 2009, cuadro 6.11.

^a Se refiere al momento del nacimiento.

Estos hallazgos son de la mayor relevancia para efectos de política, pues anticipan mayores necesidades en materia de servicios de salud sexual y reproductiva —en particular acceso a anticonceptivos (véase el recuadro II.4)— y sugieren un terreno propicio para los programas destinados a promover conductas preventivas en materia de embarazo adolescente. En la década de 1960 los altos niveles de fecundidad no deseada que detectaron las encuestas del Programa de Encuestas Comparativas de Fecundidad en América Latina (PECFAL) entre las mujeres de varias ciudades de América Latina (CELADE/CFSC, 1972) sirvieron para justificar los programas de planificación familiar en la subregión. Ahora, la evidencia respecto de la reducción del porcentaje de nacimientos planeados entre las madres adolescentes es un aliciente y un poderoso argumento para redoblar las políticas y programas públicos de salud sexual y reproductiva dirigidos a este grupo.

¹⁷ En 2000 la tasa de fecundidad adolescente era del 50 por 1.000, baja para el contexto latinoamericano, pero alta si se compara con la tasa global de fecundidad de ese año de 1,6 hijos. La tasa de embarazo adolescente correspondiente a ese mismo año se estimó en casi el 200 por 1.000; prácticamente toda la diferencia entre la tasa de embarazo y la de fecundidad se debe al aborto inducido (Rodríguez, 2005).

¹⁸ "...con pocas excepciones, el grupo etario de madres de 15-19 años tiene el mayor porcentaje de hijos deseados, e incluso planificados" (Guzmán y otros, 2011, pág. 43).

Recuadro II.4

LAS DIFICULTADES DE ACCESO A LOS ANTICONCEPTIVOS DE LAS ADOLESCENTES LATINOAMERICANAS

Las razones para no usar anticonceptivos en la primera relación sexual constituyen un insumo relevante para las políticas y programas de salud sexual y reproductiva dirigidos a adolescentes. En efecto, si esta ausencia de uso se debiera a deseos explícitos de tener hijos, las políticas deberían centrarse más en esas expectativas, ya que los programas de ampliación de acceso a medios anticonceptivos no tendrían mayor éxito mientras ellas persistieran. Ahora bien, de acuerdo con los datos esto no parece ser el caso ya que las razones para no usar anticoncepción en la primera relación sexual tienen poca relación con el deseo de tener hijos y se vinculan, en cambio, con la insuficiencia preventiva y las barreras de acceso a anticonceptivos. La insuficiencia preventiva corresponde a respuestas como “no esperaba tener relaciones” (32,2%, El Salvador 2008, Informe final de la Encuesta Nacional de Salud Familiar (FESAL) 2008, cuadro 7.12), “descuido” (44,1%, Paraguay 2008, Informe final de la Encuesta Nacional de Demografía y

Salud Sexual y Reproductiva (ENDSSR) 2008, cuadro 7.13) o “irresponsabilidad” (28,1%, Chile, 2009, procesamiento especial de la base de datos de la Encuesta Nacional de Juventud (ENAJU) 2009)^a. Las barreras de acceso se reflejan en respuestas del tipo “no conocía métodos”, (15,2% en el Paraguay y 15% en El Salvador), “el compañero se opuso” (8,2% en El Salvador) o “no pudo conseguir un método” (Chile, 9,3% en el caso de mujeres y 16% en el de hombres). El porcentaje de casos en que el deseo de tener hijos fue la razón para no utilizar métodos anticonceptivos fue del 12,2% en El Salvador, el 4,6% en el Paraguay y el 5,7% en Chile. Cabe destacar que en los casos del Paraguay, El Salvador y el Ecuador se distingue entre iniciación sexual marital (en una unión) y premarital (sin unión), siendo bastante diferente entre ambas la estructura de las razones para no usar métodos anticonceptivos, pues en las maritales es más alto el deseo de tener hijos, de hecho, es la razón principal en el Salvador 2008^b.

Estos datos, refuerzan las intrincadas relaciones entre actividad sexual, unión y embarazo en la adolescencia. Por un lado, aumenta la actividad sexual previa a la unión, lo que en principio reduce la relevancia de la unión para explicar la fecundidad adolescente. Pero, por otro, gran parte de las adolescentes latinoamericanas, en particular las pobres, se unen temprano y al hacerlo muchas ya tienen expectativas de reproducción temprana explícitas, con lo cual el inicio de la unión sigue anticipando una reproducción pronta. Esto es particularmente claro en el caso de las uniones tempranas producto de pautas culturales, como ocurre en muchas poblaciones indígenas. Pero también parece ser el caso de algunas adolescentes urbanas pobres, que ven en la unión y la formación de familia —es decir, tener hijos— la posibilidad de adquirir un espacio propio y un sentido vital, en un marco de escasas opciones alternativas^c.

Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la CEPAL.

^a En el caso de Chile 2009 (INJUV, 2010) se aceptaron hasta tres razones, por lo cual la suma de los porcentajes puede superar el 100%.

^b La iniciación sexual premarital no significa iniciación con parejas casuales. En el caso de El Salvador 2008, por ejemplo, la pareja sexual de las mujeres de 15 a 24 años iniciadas premaritalmente fue en un 91,4% de los casos el novio y solo en un 1,5% se trató de una relación casual (FESAL 2008, cuadro 7.7).

^c No obstante, no está claro que gracias a la unión y reproducción tempranas se adquiera un espacio propio o se inicie un proyecto de vida. De hecho, la evidencia disponible sugiere que la tendencia va en dirección contraria, ya que ha aumentado la proporción de madres adolescentes solteras o de madres adolescentes que viven con sus padres sin constituir hogares propios.

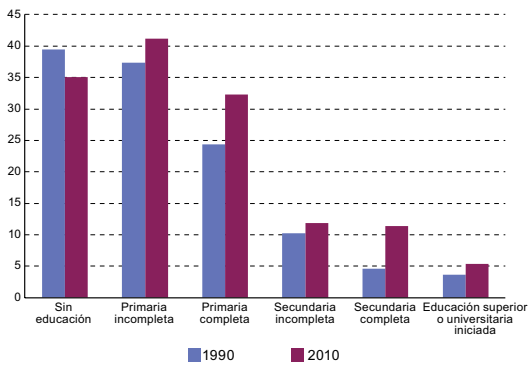
3. Fecundidad adolescente en América Latina: Una expresión de las desigualdades sociales

La desigualdad que se registra en los niveles de fecundidad entre grupos educativos suele ser particularmente acentuada en el caso de la maternidad adolescente. Esta estrecha vinculación entre educación y maternidad adolescente ha alentado expectativas de un descenso sostenido de la fecundidad adolescente en concomitancia con la previsible expansión de la cobertura de la educación secundaria y universitaria de la región. Solo por un efecto estadístico de composición, el aumento de la escolaridad tiende a reducir los niveles agregados de la fecundidad y maternidad adolescentes (Rodríguez, 2009). Este efecto se observa, por ejemplo, en datos recientes del censo de Panamá de 2010. Este último censo muestra que un 15,5% de las mujeres de 15 a 19 años de edad ya había sido madre, valor inferior al 17,2% registrado en 2000 y al 16% de 1990 (véase el gráfico II.11). Sin embargo, cuando este porcentaje se desagrega según nivel educativo se observa un aumento en todos los niveles, salvo en el grupo “sin

educación” (véase el gráfico II.13). La explicación para estas tendencias contradictorias es justamente el efecto composición. De no ser por el aumento de la escolaridad entre 1990 y 2010 —la proporción de adolescentes con baja escolaridad, es decir sin estudios de educación secundaria, disminuyó del 34% al 17%— la maternidad adolescente habría sido del 20,8% en 2010, mucho más alta que el 15,5% registrado ese año y el 16% de 1990.

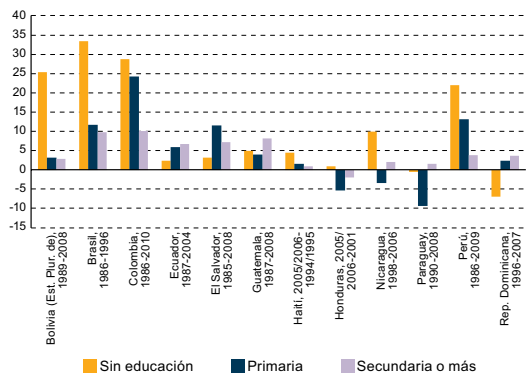
El caso de Panamá no es excepcional. En el gráfico II.14 se muestra que en la mayoría de los países de la subregión la maternidad adolescente aumenta cuando esta se segmenta según grupos educativos. Si la tendencia del porcentaje de madres adolescentes nacional es más matizada, es justamente por el efecto de composición, que deriva de la proporción decreciente de adolescentes con baja educación, quienes, como ya se indicó y mostró, siguen teniendo niveles de maternidad adolescente mucho más elevados que las adolescentes de educación alta.

Gráfico II.13
**PANAMÁ: MUJERES DE 15 A 19 AÑOS QUE SON MADRES
 SEGÚN NIVEL DE EDUCACIÓN, 1990 Y 2010**
 (En porcentajes)



Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) – División de Población de la CEPAL sobre la base de microdatos censales.

Gráfico II.14
**AMÉRICA LATINA (12 PAÍSES): VARIACIÓN EN LA MATERNIDAD
 ADOLESCENTE^a POR NIVEL DE EDUCACIÓN**
 (En puntos porcentuales)



Fuente: ICF Macro, "Demographic and Health Surveys, Measure DHS Statcompiler" [online] <http://www.measuredhs.com> [fecha de consulta: 5 de mayo de 2011]; Profamilia, "Informe de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) 2010", Bogotá, 2011, cuadro 5.9.1; Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú (INEI), "Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES). Continua, 2009. Informe principal", Lima, 2009, cuadro 6.11.

^a Mujeres de 15 a 19 años que son madres o están embarazadas.

Estos datos representan una señal de alerta para América Latina. Ciertamente la educación sigue siendo un factor protector frente a la maternidad adolescente, pero su capacidad preventiva se ha reducido y, sobre todo, el umbral educativo necesario para tener probabilidades cercanas a un nivel cero de maternidad adolescente se ha desplazado de la educación secundaria a la universitaria. Esto es mucho más significativo en los países donde la educación secundaria está ampliamente extendida ya que las diferencias socioeconómicas en ellos se expresan crecientemente como distinción entre las adolescentes que ingresan y las que no ingresan a la universidad. En cambio, en los países en los que solo una minoría accede a la educación secundaria, llegar a este nivel todavía genera una baja abrupta en la probabilidad de ser madre adolescente.

Dado que los avances hacia la universalización de la educación secundaria en América Latina no han supuesto un mejoramiento concomitante del mercado de trabajo ni una disminución de la desigualdad social (CEPAL, 2010b), gran parte de esta población adolescente escolarizada tiene bajas expectativas respecto de los retornos y oportunidades que les deparará esta mayor cantidad de años de estudios en el futuro. Asimismo, les resulta difícil conseguir buenos empleos y complicado o inviable económicamente entrar a la universidad; además, quedan fuera de su alcance alternativas de realización personal basadas en la emancipación doméstica y económica. Todo esto hace que las pérdidas y costos derivados de una maternidad temprana no sean tan significativos para una parte de los y las adolescentes latinoamericanos. En tal sentido, avanzar hacia sociedades más igualitarias y con más oportunidades para adolescentes y jóvenes supondría un cambio estructural que favorecería netamente la reducción de la alta fecundidad adolescente de la subregión.

F. Consideraciones finales

A pesar de la reducción generalizada de la fecundidad, persisten diferencias significativas entre grupos sociales dentro de los países, como expresión de las desigualdades socioeconómicas que continúan imprimiendo el carácter distintivo de América Latina, una de las subregiones más inequitativas del mundo. En particular, la fecundidad continúa siendo invariablemente más baja cuanto más elevado es el nivel de educación alcanzado por la mujer.

Dado que el nivel educativo está fuertemente asociado al nivel de ingresos de las familias, la tendencia a la mayor fecundidad en mujeres de bajos ingresos, como se verá en los dos capítulos siguientes, marca desigualdades significativas en el acceso al empleo y a la protección social. Las mujeres con mayor número de hijos dependientes, sobre todo de 0 a 5 años de edad, y sobre todo pertenecientes a los quintiles más bajos, encuentran mayores dificultades para insertarse en el mercado laboral, obtener empleos y acceder a mecanismos de protección social. Se consagra así una secuencia negativa de desigualdad y exclusión, donde los patrones diferenciados de fecundidad van ligados a circuitos de exclusión social a lo largo del ciclo de vida. De este modo, las brechas se refuerzan entre sí y aumentan las desigualdades.

Si bien se mantienen importantes diferencias en las tasas de fecundidad según los niveles de educación en América Latina, en la mayoría de los países la distribución educativa de las mujeres ha evolucionado rápidamente durante las últimas décadas y ha contribuido de forma notoria a reducir los niveles globales de la fecundidad. De hecho, en un contexto de creciente incorporación de las mujeres a la educación secundaria y superior, es muy probable que en los próximos años se registren aún reducciones intensas en los niveles de fecundidad reforzando así la percepción de que los bajos niveles de fecundidad dominarán de manera creciente el futuro demográfico y económico de la región.

El cambio de comportamiento reproductivo que impulsó el descenso rápido y sostenido de la fecundidad total no ha tenido la misma intensidad a lo largo del ciclo de vida de las mujeres latinoamericanas. La reducción de la fecundidad en la adolescencia ha sido particularmente modesta. En efecto, la fecundidad de las mujeres de 15 a 19 años en América Latina es más de 3 veces superior al promedio de los países desarrollados y 1,5 veces mayor que la del promedio de los países en desarrollo y, lo que es más grave aún, en casi todos los países de la

región su nivel aumentó durante la década de 1990. Las restricciones del uso de anticoncepción entre los y las adolescentes, pese a su deseo de limitar la fecundidad, revelan insuficiencias preventivas y barreras de acceso a los medios de anticoncepción moderna.

Esta rigidez en el descenso de la fecundidad adolescente es mucho más marcada en adolescentes de menor nivel educacional y de familias de ingresos bajos. Como ha señalado la CEPAL de manera reiterada, esto constituye un “núcleo duro” de reproducción intergeneracional de la exclusión y la desigualdad, donde se combina el bajo nivel educativo, la ausencia de apoyo en el cuidado de los hijos, trayectorias familiares de mayor vulnerabilidad, mayores dificultades para desarrollar actividades que generen ingresos y un acceso precario a redes de protección social.

En suma, los gobiernos de la región enfrentan dos retos principales en el ámbito de la fecundidad. Por un lado, el desafío de redoblar los esfuerzos para alcanzar la meta 5B de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de lograr, para el año 2015, el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y, de esta manera, acotar las brechas importantes que se mantienen en el nivel de fecundidad de los diferentes grupos sociales. En este sentido, el mejoramiento en la cobertura y estructura de la educación debería ser una prioridad indiscutible. La educación contribuye a modificar el comportamiento reproductivo de toda la población y es un factor protector frente a la maternidad adolescente. Sin embargo, es evidente que no basta con aumentar la educación, sino que también es necesario analizar de qué manera esta eleva los niveles de decisión e información.

Por otro lado, los gobiernos deberían anticiparse a los desafíos que plantea el nuevo contexto de bajos niveles de fecundidad en la subregión y sus consecuencias, adecuando las políticas y las instituciones para atender los cambios inexorables en la estructura familiar, social y económica de los países.

Capítulo III

Trabajo, empleo y mercados laborales: Fábricas, circuitos y núcleos duros de reproducción de desigualdades

A. Introducción

Los recientes logros en materia de reducción de pobreza y concentración del ingreso hacen necesario dimensionar los márgenes con que cuenta América Latina para poder seguir avanzando significativamente en la reducción de uno de sus principales lastres: la desigualdad. La heterogeneidad estructural, la estratificación del descenso de la fecundidad y la desigualdad de género operan como verdaderas fábricas de desigualdad en los mercados laborales latinoamericanos. En la articulación entre estos componentes existen varios circuitos de reproducción de desigualdades: el que opera en las distancias entre trabajadores formales e informales, el que asocia esa desigualdad con disparidades de género, los que configuran comportamientos diferenciales de ciertos grupos —como las mujeres y los jóvenes— frente al desempleo, el que estructura desigualdades en la participación laboral. Como resultado de esta dinámica, son notorios los núcleos duros de desigualdad y vulnerabilidad que se alojan en ciertos sectores, como las mujeres jóvenes de bajos ingresos y con hijos pequeños, personas jóvenes de bajos ingresos, trabajadores (especialmente mujeres) en áreas de baja productividad.

Tal como se ha planteado en el capítulo I, los logros de la región desde el año 2002 en materia de reducción de pobreza y también de desigualdad (aunque en menor medida), así como la evidencia que confirma el peso del aumento de los ingresos laborales en estas tendencias, ofrecen razones contundentes para ser optimistas.

En los mercados laborales, la participación de las mujeres se ha incrementado notoriamente y la productividad ha ido aumentando y aproximándose cada vez más a los niveles que la región presentaba antes del inicio de la “década perdida” (Weller, 2009). A su vez, tras los críticos primeros años de la década de 2000, el dinamismo económico se tradujo en un crecimiento sostenido de la tasa de ocupación, un descenso de la tasa de desempleo y una leve expansión del empleo formal (CEPAL, 2009). En ese contexto, aunque los efectos de la última crisis se sintieron con fuerza en 2008 (CEPAL/OIT, 2009), a finales de 2009 los mercados laborales comenzaron a mostrar claros signos de recuperación, en buena medida gracias a políticas que varios países de la región pusieron en marcha con el objetivo de mantener el empleo (CEPAL/OIT, 2011).

El análisis de las implicancias presentes y futuras de este escenario favorable merece dos miradas complementarias. Sin duda es preciso reflexionar sobre las fórmulas que han permitido estos logros, los instrumentos de política que han mostrado ser más eficaces y, sobre todo, la pertinencia y sostenibilidad de los esfuerzos que los países de la región han realizado para contener los efectos de la última crisis. Pero también es necesario dimensionar los márgenes con que cuenta América Latina para poder seguir avanzando significativamente en la reducción de uno de sus principales lastres: la desigualdad.

Para ello, deben identificarse adecuadamente las fuentes de las desigualdades y los circuitos a través de los que se transmiten. En ese sentido, en el presente capítulo se muestra que el avance registrado durante esta década en materia de ingresos laborales, su impacto distributivo y la consiguiente reducción de la pobreza encuentran sus “límites duros” en rasgos estructurales asociados a las tremendas brechas de productividad de la población ocupada, así como en las dificultades de acceso y desempeño en mercados laborales muy segmentados. Por eso mismo, profundizar hacia la convergencia y el incremento de los ingresos laborales requiere también de una mayor igualación de los niveles de productividad y de mayores posibilidades de acceso al empleo de calidad, especialmente para grupos específicos que se encuentran en situaciones de clara desventaja.

En esta edición del *Panorama social* se plantea que las razones fundamentales de la relativa rigidez que ha caracterizado a la desigualdad en contextos de crecimiento se encuentran, siguiendo la clásica idea de Esping-Andersen (1990 y 1999), en los mecanismos y circuitos que operan en la dinámica y articulación entre Estado, mercado y familias. Y en este capítulo se ilustran algunos de esos mecanismos y circuitos, reflejados en el funcionamiento de los mercados laborales y en las desigualdades que en ellos se alojan, fruto de la articulación de los componentes estructurales y coyunturales de las esferas del bienestar.

Uno de estos componentes estructurales, analizado en profundidad en el capítulo anterior, es la generación de desigualdades por transformaciones en la fecundidad y la pauta estratificada que ha acompañado a esos cambios. Esta dinámica está dando lugar a condiciones diferenciadas en las relaciones de dependencia dentro de las sociedades latinoamericanas, exponiendo a algunos sectores a situaciones de mayor vulnerabilidad y, en ciertos planos, aumentando las distancias entre la población de mayores ingresos y la más vulnerable.

Pero no cabe duda de que la desigualdad en América Latina responde también a claves productivas y laborales de larga data. El mercado de trabajo es una fuente central de provisión de bienestar y generación de riesgos para la población latinoamericana, y los fenómenos estructurales han contribuido asimismo a la rigidez de los mecanismos de generación y reproducción de desigualdades (Filgueira, 2007; Infante, 2011).

En este capítulo se analizan las herencias de la desigualdad en la esfera productiva, destacándose los efectos de la heterogeneidad estructural en la segmentación de los mercados laborales. A partir de ahí, y siguiendo la línea analítica esbozada ya en ediciones anteriores del *Panorama social*, se detalla la articulación entre Estados, mercados y familias, poniendo la mirada en la inelasticidad relativa que la desigualdad viene mostrando en América Latina. Se argumenta que esta inelasticidad responde a factores estructurales que no son nuevos y, justamente por ello, es visible al examinar los indicadores agregados e incorporar otras variables clave en el análisis. Con ello, se ofrece evidencia para comprender mejor qué circunstancias explican que, aun cuando los indicadores agregados (básicamente la concentración del ingreso) muestran señales alentadoras en los últimos años, la distancia entre los sectores de más y menos recursos no solo no se ha reducido, sino que en varios aspectos parece ir aumentando.

En el análisis que aquí se presenta se asumen tres supuestos fundamentales:

El primero, ya esbozado, es que los procesos demográficos y productivos que han pautado la trayectoria histórica de América Latina tienen que ver, y mucho, en la generación y la rígida reproducción de desigualdades. La traslación de ambos procesos a los mercados laborales acarrea viejas desigualdades y, al combinarse, genera otras nuevas. La mirada diacrónica es, por tanto, ineludible.

El segundo supuesto es que la intervención del Estado puede resultar muy eficaz para reducir las desigualdades estructurales que se acarrean a los mercados laborales. Por lo tanto, la ausencia de esa intervención o los sesgos

que pueda presentar son en buena parte responsables del surgimiento de fábricas y circuitos de desigualdad en la articulación entre mercados y familias.

El tercer y último supuesto es que en el nudo central de la articulación entre familias y mercados laborales la desigualdad de género juega un papel clave. La distribución de roles entre hombres y mujeres, las ecuaciones entre trabajo remunerado y no remunerado, la discriminación y las pautas históricas de dominación atraviesan la articulación entre Estados, mercados y familias, generalmente reforzando la herencia estructural de la desigualdad y abriendo espacios para nuevas brechas.

B. Estructura productiva y mercados laborales: Otra cara del condicionamiento estructural de la desigualdad ¹

La alta heterogeneidad estructural que pauta las estructuras productivas de la región genera grandes disparidades entre los aportes de cada sector productivo al producto y al empleo. Como resultado, se produce una distribución muy desigual de la productividad y, en última instancia, una apropiación muy desigual de las ganancias entre los trabajadores. La vinculación entre heterogeneidad estructural y desigualdad de ingresos muestra un patrón rígido y estable en el tiempo.

Las características del mercado de trabajo reflejan estructuras subyacentes de carácter relativamente durable, derivadas de procesos históricos de transformación demográfica (como los analizados en el capítulo anterior) y, al mismo tiempo, productiva. En este segundo componente del condicionamiento estructural se encuentran muchas de las explicaciones a las desigualdades que hoy delinean el funcionamiento de los mercados laborales latinoamericanos.

Sin embargo, aunque con frecuencia se menciona en los análisis como una arista, pocas veces se articula con los análisis sobre bienestar y desigualdad social en la región. En esta sección se intenta superar ese enfoque, retomando lo ya planteado en *La hora de la igualdad: Brechas por cerrar, caminos por abrir* (CEPAL, 2010a) y volviendo a poner en primer plano la noción de heterogeneidad estructural, un concepto clave en el pensamiento histórico de la CEPAL.

1. Productividad y estructura económica

En todos los países el progreso técnico ocurre a velocidades distintas en los diferentes sectores; la tecnología y las oportunidades de innovación no se distribuyen de manera

uniforme (CEPAL, 2010a). Pero en América Latina estas diferencias son mucho mayores que en las economías desarrolladas, sin que haya una tendencia —incluso cuando la productividad media ha ido en aumento— a que los sectores y agentes rezagados se aproximen a los “líderes”.

¹ Los contenidos de esta sección se basan en Infante (2011).

Aun dentro de sectores que en términos agregados podrían considerarse de productividad mediana o alta persisten estratos de empresas y de empleo de productividad extremadamente baja. En definitiva, los mercados internos de las economías latinoamericanas no son homogéneos o, en otras palabras, son estructuralmente heterogéneos².

Ya en los años sesenta y setenta, investigaciones realizadas por la CEPAL revelaban profundas diferencias de productividad entre estratos y sectores productivos, así como dentro de cada uno de ellos. Esos contrastes se asociaban al bajo ritmo del progreso técnico y a la desigualdad con que este se difunde en los distintos sectores (Pinto, 1965 y 1975). Cuatro décadas más tarde, y aunque con rasgos algo distintos, la evidencia sigue confirmando el fenómeno (CEPAL, 2010a): la estructura económica de la región puede analizarse considerando la existencia de tres estratos de productividad, con diverso acceso a la tecnología y a los mercados, y con características dispares.

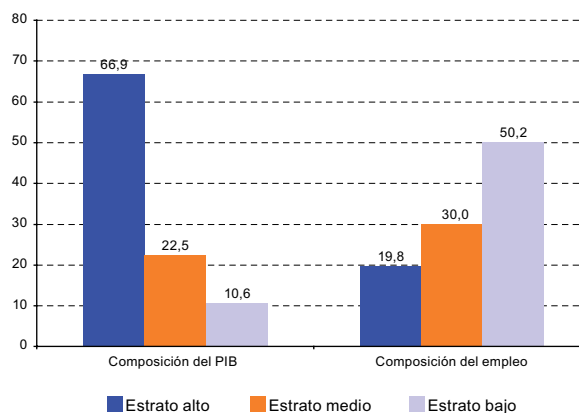
Un primer estrato, el *alto*, está compuesto por actividades de exportación y empresas de gran escala operativa (con más de 200 trabajadores), que captan una fracción determinante del mercado local y cuya productividad por ocupado es similar a la media de las economías desarrolladas. Las actividades modernas en este estrato se expanden dinámicamente muy por encima del promedio, aunque su incidencia en la creación de empleos y la articulación con el resto de los estratos productivos es poco significativa. Este estrato se caracteriza por una mayor intensidad en el uso del capital y la tecnología (por lo que destaca en términos de productividad), así como por unas relaciones laborales más formalizadas. Entre los ocupados del estrato alto se encuentran trabajadores y empleadores de grandes empresas de los sectores público y privado, además de profesionales y técnicos por cuenta propia. En la actualidad, genera un 66,9% del producto y solo un 19,8 % del empleo total (véase el gráfico III.1).

El estrato *mediano* se sitúa un escalón por debajo en cuanto a adelantos técnicos y de productividad. Los segmentos de mediana productividad corresponden a actividades de lento crecimiento, que tienen escasos vínculos con los sectores de productividad alta y participan solo tangencialmente en el crecimiento (por tanto, por más elevado que este sea, no permite obtener los resultados esperados en materia de producción y empleo para el segmento). Este estrato comprende a las pequeñas y medianas empresas (pymes) y la

productividad de los ocupados es semejante a la del promedio de los países. Como se ilustra en el gráfico III.1, genera un 22,5% del producto y su ocupación representa un 30% del total.

Finalmente, existe un estrato *bajo*, en que se registran niveles mínimos de productividad e ingreso. Corresponde al sector informal, que incluye a unidades económicas de reducida productividad, que trabajan casi sin ningún tipo de mecanización, presentan una muy baja densidad de capital y se basan en tecnologías extraordinariamente atrasadas. En esta categoría se inscriben empresas de hasta cinco trabajadores, ocupados por cuenta propia no calificados, ayudantes familiares y servicio doméstico. El acceso a las actividades informales se caracteriza por la libre entrada y salida de los trabajadores, pues cualquier persona puede incorporarse o dejar de trabajar, de ahí que las relaciones laborales sean poco estructuradas. Incluso en el caso de las microempresas familiares, los papeles de trabajador y empresario se suelen confundir en la práctica. Este estrato concentra hoy la mitad del empleo y aporta solo un 10,6% al producto (véase el gráfico III.1).

Gráfico III.1
AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): INDICADORES DE
HETEROGENEIDAD ESTRUCTURAL,
ALREDEDOR DE 2009
(En porcentajes)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de R. Infante, "América Latina en el "umbral del desarrollo": Un ejercicio de convergencia productiva", *Documento de trabajo*, N° 14, proyecto sobre desarrollo inclusivo, Santiago de Chile, CEPAL, junio de 2011.

Esto significa que una considerable proporción de los ocupados pertenece al estrato bajo, que aporta una parte ínfima del producto, mientras que el estrato alto o de las grandes empresas, que ocupa a una fracción muy reducida de los trabajadores, genera un porcentaje muy elevado del producto. Esta distribución desigual de la fuerza laboral entre los distintos estratos productivos se debe a la escasa capacidad de los sectores más modernos y avanzados de absorber fuerza de trabajo, de modo

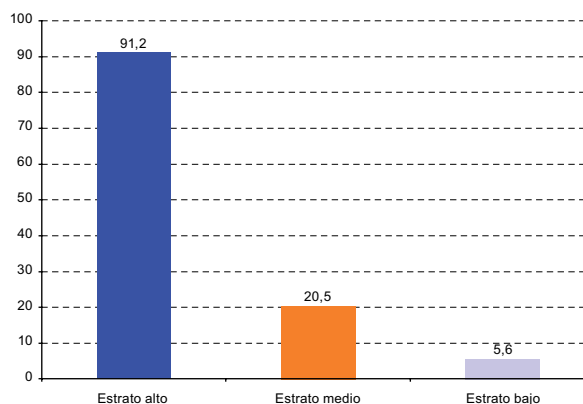
² Véase Durán (2011) para una reconstrucción del desarrollo conceptual de la noción de heterogeneidad estructural.

que la mano de obra excedentaria se ve expulsada hacia los sectores de menor productividad. Esa dinámica se profundiza aún más cuando la oferta de trabajo en la economía es relativamente elástica (es decir, cuando por las transformaciones de la demanda se mantienen los salarios en niveles muy bajos) (Durán, 2011).

Las implicancias de esta gran disparidad entre los aportes de cada sector al producto y al empleo son evidentes: se produce una distribución muy desigual de la productividad (medida esta a través del PIB por ocupado) lo que, en última instancia, deja espacio a una apropiación muy desigual de las ganancias entre los trabajadores.

Los datos presentados en el gráfico III.2 muestran que el producto por ocupado del estrato alto supera en 16,3 veces al del estrato bajo y en 4,5 veces al del estrato medio, mientras que el producto por ocupado del estrato medio es 3,7 veces mayor que el de baja productividad.

Gráfico III.2
AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): PIB POR OCUPADO,
ALREDEDOR DE 2009
(En miles de dólares en PPA)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de R. Infante, "América Latina en el "umbral del desarrollo". Un ejercicio de convergencia productiva", *Documento de trabajo*, N° 14, proyecto sobre desarrollo inclusivo, Santiago de Chile, CEPAL, junio de 2011.

2. Heterogeneidad, desigualdad, rigidez distributiva y bienestar

El proceso antes analizado opera como parámetro estructural para las disparidades y el acceso al bienestar en la región, lo que explica en parte la relativa inelasticidad de la desigualdad a los períodos de mayor crecimiento.

El mecanismo es simple. En cada quintil el ingreso per cápita está formado por el ingreso por ocupado y la razón empleo-población respectiva. Por su parte, el ingreso por ocupado depende de la productividad, que a su vez está en función de la composición del empleo por estrato productivo en cada quintil. Así, por ejemplo, el empleo en los quintiles inferiores se caracteriza por una elevada proporción de ocupados del estrato de baja productividad y, por el contrario, en los quintiles superiores un alto porcentaje de los ocupados se sitúa en el estrato de alta productividad. La secuencia descrita explicaría en gran parte el diferencial de ingresos y su desigual distribución.

Esta relación es notoria cuando se observa la distribución del ingreso per cápita en tres grupos de países, clasificados según su nivel de heterogeneidad estructural³. En aquellos en que la heterogeneidad estructural es moderada (la Argentina, Chile, Costa Rica, México y el Uruguay) la relación del ingreso per cápita del quinto quintil respecto al primero llega a 13,1. Por otro lado, en los países con

heterogeneidad estructural intermedia (el Brasil, Colombia, Panamá y Venezuela (República Bolivariana de)), el ingreso per cápita del quintil 5 es 15,8 veces mayor que el del primer quintil. Finalmente, en el grupo con heterogeneidad estructural severa (Bolivia (Estado Plurinacional de), el Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, el Paraguay, el Perú y la República Dominicana) la relación llega a 18,5 (véase el gráfico III.3).

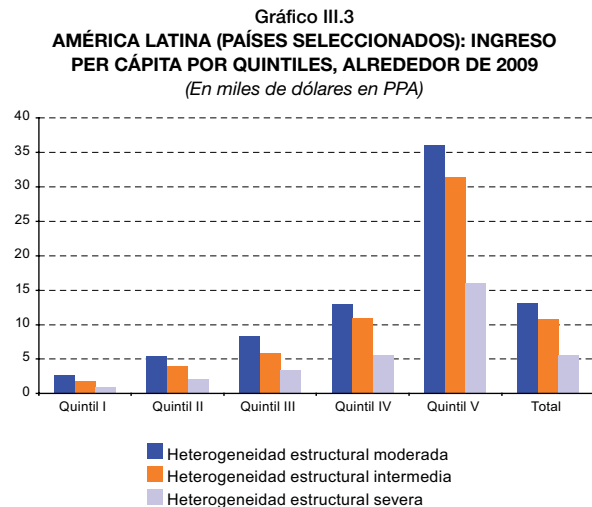
De acuerdo con lo anterior, en los países de heterogeneidad estructural moderada el índice de Gini es el más bajo de los tres grupos (49,7), en el grupo de heterogeneidad estructural moderada llega a 52,2 y en los países con heterogeneidad estructural severa alcanza 53,3.

La rigidez de este mecanismo se confirma al observar la evolución conjunta de la heterogeneidad estructural y la concentración del ingreso a lo largo del tiempo. Como se ilustra en el gráfico III.4, la dispersión de la productividad en la región (un indicador que refleja la desigualdad sectorial) entre 1990 y 2008 y el índice de Gini muestran un patrón de evolución muy similar.

La heterogeneidad estructural aumentó durante los primeros años de la década de los noventa (el índice de dispersión pasó de 0,94 a 1,24) y, aunque entre 1998 y 2008 se redujo levemente (1,14 en 2003 y 1,05 en 2008), se mantuvo por encima del nivel de 1990. Esto ocurrió en un contexto de aumento agregado de la productividad media, a partir de la segunda mitad de la década de los noventa. Idéntico patrón mostró el índice de Gini: evolucionó al

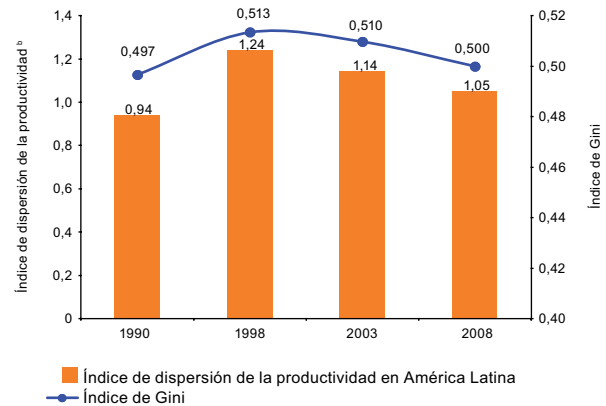
³ Esta clasificación fue realizada sobre la base de distintos indicadores de desempeño económico, empleo y heterogeneidad estructural: PIB per cápita, PIB por ocupado, tasa de empleo/población, composición del PIB y del empleo por estrato productivo, y productividad por estrato productivo.

alza y alcanzó niveles más elevados en 1998, mostró un descenso apenas perceptible en la década de 2000 y se redujo en forma más clara en 2008 (0,50).



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de R. Infante, "América Latina en el "umbral del desarrollo". Un ejercicio de convergencia productiva", *Documento de trabajo*, N° 14, proyecto sobre desarrollo inclusivo, Santiago de Chile, CEPAL, junio de 2011, y tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

Gráfico III.4
AMÉRICA LATINA (PAÍSES SELECCIONADOS): CONVERGENCIA INTERNA Y DESIGUALDAD, 1990, 1998, 2003 Y 2008^a



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), *La hora de la igualdad: Brechas por cerrar, caminos por abrir* (LC/G.2432(SES.33/3)), Santiago de Chile, 2010, y *Panorama social de América Latina 2009* (LC/G.2423-P), Santiago de Chile, 2010.

^a Promedios simples de 11 países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Perú, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de).
^b El índice de dispersión —o coeficiente de variación— de la productividad es un cociente entre la desviación estándar y la media aritmética de los índices de productividad de los distintos sectores de la economía. Valores más altos en el índice reflejan una mayor desigualdad sectorial de la productividad o, en otros términos, una mayor distancia entre los niveles de productividad de distintos sectores.

C. Productividad, formalidad, informalidad y desigualdad: Más allá de las líneas divisorias⁴

La concentración del ingreso impone también una gran segmentación de los mercados laborales, una de cuyas manifestaciones es la línea divisoria entre el empleo de media y alta productividad y el empleo de baja productividad. El empleo en sectores de baja productividad ha disminuido en las últimas dos décadas, pero la distancia respecto al empleo en sectores de productividad media y alta ha aumentado. El empleo en sectores de baja productividad tiene un perfil cada vez más femenino, pues ocupa a una proporción creciente de mujeres, sobre todo con carga de cuidados y de bajos recursos, y encierra una fuerte concentración de los ingresos laborales. Estas pautas no solo no se han corregido, sino que en varios ámbitos parecen haberse acentuado.

⁴ Siguiendo el enfoque empírico adoptado por la CEPAL desde hace ya varios años, en el presente documento se considera la medición del trabajo en sectores de baja productividad como una aproximación a la informalidad en América Latina. Esta definición se basa en el argumento de que la "heterogeneidad de la estructura productiva genera y mantiene el sector informal" (CEPAL, 2009, pág. 109). Es cierto que este indicador no tiene en consideración importantes dimensiones de la noción de informalidad, entre ellas

la protección social y la subcontratación, ambas vinculadas a una visión de la informalidad como fuente de vulneración de derechos básicos de los trabajadores (CEPAL, 2009). Esto implica que no existe una coincidencia perfecta —aunque sí muy alta— entre baja productividad como aquí se mide y la noción más amplia de informalidad. Teniendo presente esa salvedad, y a fin de facilitar la argumentación y la lectura, en esta sección se manejan ambos términos indistintamente.

La concentración del ingreso es una consecuencia preocupante de la heterogeneidad estructural, pero no la única: la “divergencia productiva” impone también una gran segmentación de los mercados laborales, una de cuyas manifestaciones es la línea divisoria entre el empleo de media y alta productividad y el de baja productividad⁵.

Los rasgos de cada uno de estos sectores y las distancias entre ambos han sido ampliamente estudiados en el caso de América Latina⁶. Distintas investigaciones indican que el sector de media y alta productividad suele ubicarse más cerca de la vanguardia tecnológica y concentra a trabajadores con mayores niveles educativos y capacidades acumuladas, con mejores condiciones laborales (acceso a seguridad social y contrato de trabajo) y mayor resguardo por parte de la institucionalidad

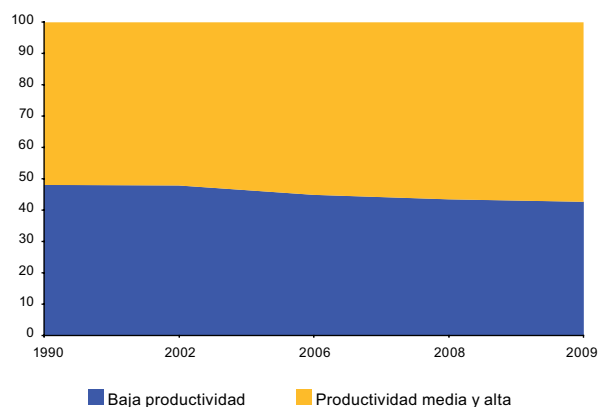
laboral. También suelen acceder a ingresos más elevados, aunque la retribución que reciben está todavía muy por debajo de sus niveles de productividad (Durán, 2011). El sector de baja productividad, en contraste, aloja trabajadores con menor nivel educativo. Según datos recientes, casi tres de cada cuatro (73,5%) ocupados con enseñanza primaria incompleta trabajaban en este sector, una proporción que apenas alcanza a poco más de uno de cada diez (13,6%) de los ocupados de niveles educativos más avanzados⁷. Los ingresos entre los ocupados de este sector suelen ser bastante más bajos que los de los ocupados formales, y las condiciones laborales están marcadas por la inestabilidad, la limitada cobertura de seguridad social, la ausencia de contrato formal y la precariedad⁸.

1. Estratificación progresiva y ensanchamiento de brechas

Sin duda es una buena noticia que la línea divisoria entre ambos sectores se haya desplazado en los últimos años: en el año 2009 los trabajadores en sectores de baja productividad representaban el 42,7% de la población urbana ocupada, un dato mejor que el registrado alrededor de 1990, cuando la población ocupada en este sector llegaba al 48,1% (véase el gráfico III.5).

Sin embargo, esta evolución no debe ocultar otras señales, bastante menos alentadoras, que los datos revelan. En las últimas dos décadas, la línea divisoria entre el empleo en sectores de mayor y menor productividad está ahora más definida o, en otras palabras, la brecha que separa a unos de otros se ha ensanchado.

Gráfico III.5
AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): OCUPADOS EN SECTORES DE BAJA PRODUCTIVIDAD Y DE PRODUCTIVIDAD MEDIA Y ALTA^a, ZONAS URBANAS, 1990-2009^b
(En porcentajes)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

^a Los sectores de baja productividad incluyen a ocupados en microempresas (establecimientos que dan empleo a un máximo de cinco personas), empleo doméstico y trabajadores independientes no calificados, entre los que se encuentran trabajadores por cuenta propia y familiares no remunerados sin calificación profesional o técnica. Los sectores de productividad media y alta incluyen a los asalariados públicos, a los empleadores y asalariados privados en establecimientos con más de cinco trabajadores y a los profesionales y técnicos independientes. Se excluye de esta categoría al servicio doméstico.

^b Promedio ponderado de los países de los que consta información sobre los períodos considerados.

⁷ Datos del año 2008, países seleccionados.

⁸ Según datos del año 2009, la afiliación a la seguridad social en este sector apenas alcanzaba el 22%, y la contratación formal entre los asalariados cubría poco más de uno de cada cuatro trabajadores (un 28,5%) (CEPAL, 2011b).

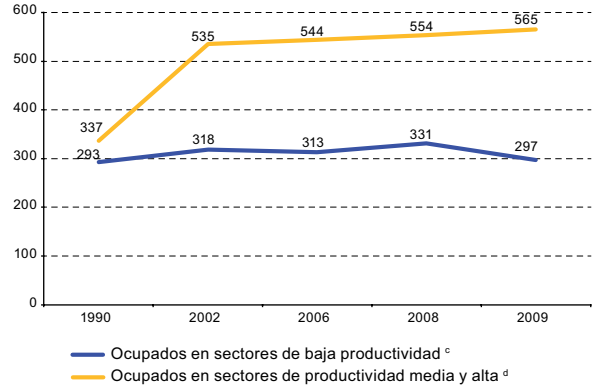
⁵ Es importante señalar que los datos utilizados en la sección anterior para definir los tres estratos productivos son distintos de los empleados para la medición del número de trabajadores en sectores de media-alta y baja productividad utilizada en esta sección. En el primer caso, el indicador se construyó a partir de datos agregados provenientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), mientras que en el segundo se realizaron tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países (razón por la cual no es posible discriminar el estrato medio del alto, pues no lo permite la forma en que se revela en esas encuestas el tamaño de la empresa).

⁶ Véase, por ejemplo, PREALC (1987), OIT (2002 y 2009), Tokman (2006 y 2007).

Como se ha reseñado en otras publicaciones de la CEPAL, en comparación con los niveles de 1990 la distancia entre las remuneraciones en ambos sectores ha aumentado (CEPAL, 2009 y 2010c). En promedio, los ingresos laborales de los ocupados en sectores de baja productividad se ubicaban en 2009 en 297 dólares, mientras que entre los ocupados en sectores de media y alta productividad eran de 565 dólares. Esto confirma, en realidad, que en el período de crecimiento económico de años recientes, la tendencia al alza de las remuneraciones reales de los ocupados y los asalariados se explica en buena medida por el comportamiento de los ingresos en los sectores de mayor productividad, en que se han registrado aumentos que prácticamente no han permeado al sector informal (CEPAL, 2010c) (véase el gráfico III.6).

La clave para entender esta evolución agregada parece estar en lo que ocurrió en cada sector. Entre 1990 y 2009, la proporción de ocupados en sectores de baja productividad pasó del 40% al 32% en el quintil de mayores ingresos (quintil 5), mientras que en el quintil inferior (quintil 1) el descenso fue bastante menor, ya que se pasó del 72% al 69%. La reducción del peso de la baja productividad entre la población ocupada ocurre sobre todo en los últimos diez años, salvo en el quintil superior, donde ya entre 1990 y el 2000 se registró una caída importante. En otras palabras, la disminución de la población ocupada en sectores de baja productividad registrada en estas dos últimas décadas favoreció en mayor medida a los sectores de ingresos superiores (véase el gráfico III.7.A).

Gráfico III.6
AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): TENDENCIAS DE LAS REMUNERACIONES REALES DE LOS OCUPADOS EN ÁREAS URBANAS^a, SEGÚN SECTOR, ALREDEDOR DE 1990, 2002, 2006, 2008 Y 2009^b
 (En dólares de 2005)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

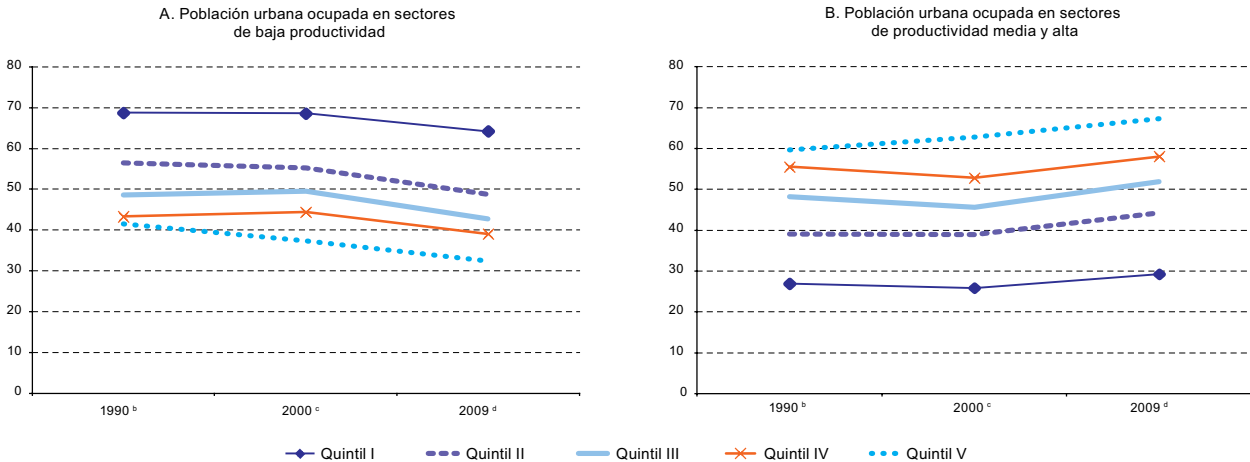
^a Ocupados urbanos mayores de 15 años que declararon ingresos laborales (no incluye trabajadores no remunerados).

^b Promedio ponderado de los países que tienen información de todos los períodos considerados. Hasta el año 2006, no se incluye a Colombia, país en que no se distingue el tamaño de la empresa. Para el año 2009 se excluye a Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Venezuela (República Bolivariana de).

^c Hace referencia a ocupados en microempresas (establecimientos que dan empleo a un máximo de cinco personas), empleo doméstico y trabajadores independientes no calificados, entre los que se encuentran trabajadores por cuenta propia y familiares no remunerados sin calificación profesional o técnica.

^d Esta categoría incluye a los asalariados públicos, a los empleadores y asalariados privados en establecimientos con más de cinco trabajadores, así como a profesionales y técnicos independientes. Se excluye al servicio doméstico.

Gráfico III.7
AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): POBLACIÓN URBANA OCUPADA SEGÚN SECTORES DE PRODUCTIVIDAD^a Y QUINTILES DE INGRESO, PROMEDIO PONDERADO, ALREDEDOR DE 1990, 2000 Y 2009
 (En porcentajes)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de encuestas de hogares de los respectivos países. No se incluyen datos de Colombia.

^a El sector de baja productividad incluye a ocupados en microempresas (establecimientos que dan empleo a un máximo de cinco personas), empleo doméstico y trabajadores independientes no calificados, entre los que se encuentran trabajadores por cuenta propia y familiares no remunerados sin calificación profesional o técnica. En los sectores de productividad media y alta se incluye a los asalariados públicos, a los empleadores y asalariados privados en establecimientos con más de cinco trabajadores y a los profesionales y técnicos independientes. No se excluye el servicio doméstico.

^b Los datos de México corresponden a 1989, los de Panamá a 1991, los de Nicaragua a 1993 y los de El Salvador a 1995.

^c Los datos de Chile corresponden a 2000 y los del Brasil, El Salvador y Nicaragua a 2001.

^d Los datos de Nicaragua corresponden a 2005, los de Bolivia (Estado Plurinacional de) y Honduras a 2007, los de México y Venezuela (República Bolivariana de) a 2008. Los datos de la Argentina corresponden al Gran Buenos Aires, los de Bolivia (Estado Plurinacional de) a ocho ciudades principales y El Alto, los del Paraguay a Asunción y Departamento Central, y los de Venezuela (República Bolivariana de) al total nacional.

La evidente contracara de esta tendencia es la ampliación de la brecha entre los quintiles superiores y los inferiores en los sectores de mayor productividad. En las dos últimas décadas, la distancia entre el porcentaje de población ocupada en sectores de productividad media y alta en el quintil superior y el quintil inferior pasó de 32 a 38 puntos porcentuales (véase el gráfico III.7.B).

En definitiva, el ensanchamiento de la línea divisoria que separa al empleo en sectores de mayor y menor productividad parece responder a una mayor estratificación dentro de estos. En el primer caso, al ampliarse aún más la proporción de la población de mayores ingresos; en el segundo, con un descenso que se concentró sobre todo en los quintiles superiores y que fue menos notorio entre los ocupados de menores recursos.

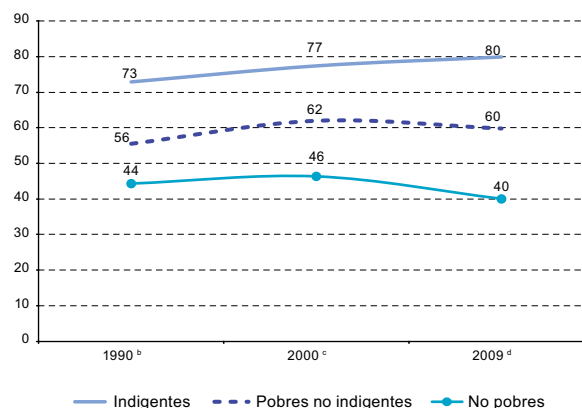
Este proceso, que obedece a ciertos sesgos en la dinámica de generación de empleo y su combinación con la gran disparidad en el desarrollo de capacidades (CEPAL, 2011a) se evidencia en dos fenómenos preocupantes: i) la asociación de la informalidad a las categorías de pobreza e indigencia, y ii) pautas diferenciadas entre ambos sectores en la concentración de los ingresos laborales.

En efecto, no es de extrañar que la baja productividad se asocie a la pobreza en mayor medida que el empleo productivo, si en el primer caso los ingresos generados por trabajo a menudo no son suficientes para eludir la (CEPAL, 2010c)⁹. Pero, sobre todo, no sorprende que esa relación sea más fuerte hoy que hace 20 años, aun en un contexto de descenso agregado de la pobreza en la región: entre 1990 y 2009 se produjo un significativo aumento de la proporción de ocupados en sectores de baja productividad entre los ocupados indigentes y pobres (del 73% al 80% y del 56% al 60%, respectivamente), y una reducción del porcentaje de trabajadores en esos sectores entre quienes no son pobres (del 44% al 40%) (véase el gráfico III.8).

A su vez, la mayor distancia entre empleo de mayor y menor productividad se refleja también en una diferente concentración de los ingresos laborales entre el sector de productividad media y alta y el de baja productividad. Los cálculos del índice de Gini para el primer caso muestran un comportamiento al alza entre 1990 y el año 2000 (de 0,45 a 0,48) y un descenso en la última década, de modo que el valor actual se sitúa levemente por debajo del que presentaba a inicios de los años noventa (0,44). En contraste, el índice de Gini de los ingresos laborales de los ocupados en sectores de baja productividad se ha mantenido prácticamente estable, situándose hoy ligeramente por debajo del valor de 1990 (0,56).

⁹ Depende en parte de la cantidad de dependientes (que en los hogares de estos trabajadores tiende a ser mayor), pero también responde a los niveles de ingresos que los ocupados logran alcanzar, así como a la ecuación que opera en los hogares (especialmente para las mujeres) respecto a la correlación entre el empleo remunerado, los ingresos procedentes de este y la carga de cuidado (CEPAL, 2010b).

Gráfico III.8
AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): POBLACIÓN URBANA OCUPADA EN SECTORES DE BAJA PRODUCTIVIDAD^a, POR CATEGORÍAS DE POBREZA, PROMEDIO PONDERADO, ALREDEDOR DE 1990, 2000 Y 2009
(En porcentajes)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de encuestas de hogares de los respectivos países. No incluye datos de Colombia.

^a Incluye a ocupados en microempresas (establecimientos que dan empleo a un máximo de cinco personas), empleo doméstico y trabajadores independientes no calificados, entre los que se encuentran trabajadores por cuenta propia y familiares no remunerados sin calificación profesional o técnica.

^b Los datos de Guatemala, Bolivia (Estado Plurinacional de) y México corresponden a 1989, los de Panamá a 1991, los de Nicaragua a 1993 y los de El Salvador a 1995.

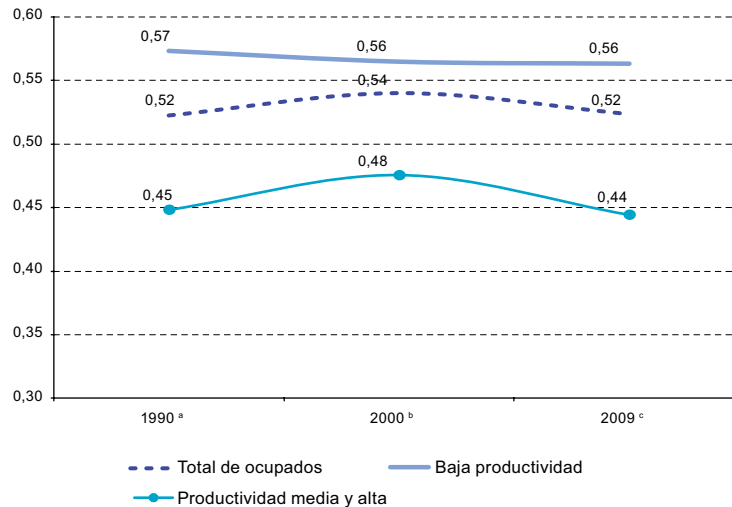
^c Los datos de la Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), el Brasil, Costa Rica, el Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, el Perú, el Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de) corresponden a 1999, los de Nicaragua a 2001 y los de la República Dominicana a 2002.

^d Los datos de Nicaragua corresponden a 2005, los de Guatemala a 2006, los de Bolivia (Estado Plurinacional de) y Honduras a 2007, y los de México y Venezuela (República Bolivariana de) a 2008. Los datos de la Argentina corresponden al Gran Buenos Aires, los de Bolivia (Estado Plurinacional de) a ocho ciudades principales y El Alto, los del Paraguay a Asunción y Departamento Central, y los de Venezuela (República Bolivariana de) al total nacional.

Lo más importante, sin embargo, es la constatación de dos hechos: i) la concentración de los ingresos laborales en el sector informal supera en mucho a la registrada en el formal, y ii) respecto de 1990, la distancia entre ambos no ha variado, y cuando lo hizo (en el año 2000) fue por un empeoramiento del índice de Gini entre los trabajadores formales, y no por una disminución de la desigualdad en el sector informal. Esta, de hecho, se redujo apenas un punto en la década de los noventa y hoy se mantiene en el mismo nivel que en el año 2000 (véase el gráfico III.9).

Estas tendencias estarían indicando que las variaciones en la concentración del ingreso laboral en la región siguen la misma pauta que las experimentadas en el sector formal o, en otras palabras, se explican básicamente por la evolución de los ingresos laborales en ese sector. En cambio, la concentración de los ingresos laborales en el sector de baja productividad apenas se ha modificado y muestra una gran rigidez a lo largo del tiempo.

Gráfico III.9
AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): ÍNDICES DE GINI DE LOS INGRESOS LABORALES DE LOS OCUPADOS, SEGÚN SECTOR EN EL QUE TRABAJAN, PROMEDIO SIMPLE, ALREDEDOR DE 1990, 2000 Y 2009
 (En valores del índice de Gini)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de encuestas de hogares de los respectivos países. No incluye datos de Colombia.

^a Los datos de Guatemala, Bolivia (Estado Plurinacional de) y México corresponden a 1989, los de Panamá a 1991, los de Nicaragua a 1993 y los de El Salvador a 1995.

^b Los datos de la Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), el Brasil, Costa Rica, el Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, el Perú, el Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de) corresponden a 1999, los de Nicaragua a 2001 y los de la República Dominicana a 2002.

^c Los datos de Nicaragua corresponden a 2005, los de Guatemala a 2006, los de Bolivia (Estado Plurinacional de) y Honduras a 2007, y los de México y Venezuela (República Bolivariana de) a 2008. Los datos de la Argentina corresponden al Gran Buenos Aires, los de Bolivia (Estado Plurinacional de) a ocho ciudades principales y El Alto, los del Paraguay a Asunción y Departamento Central, y los de Venezuela (República Bolivariana de) al total nacional.

2. La desigualdad de género y su rigidez como posibles claves

El análisis presentado hasta aquí muestra la importancia de explorar las bases laborales de la desigualdad. Pero, como se señaló al inicio del capítulo, detrás de las tendencias antes reseñadas se esconde otra clave que está operando en la rigidez distributiva de la región: la línea divisoria entre empleo en sectores de baja productividad y de media y alta productividad está atravesada por otra línea, la que divide a hombres y mujeres.

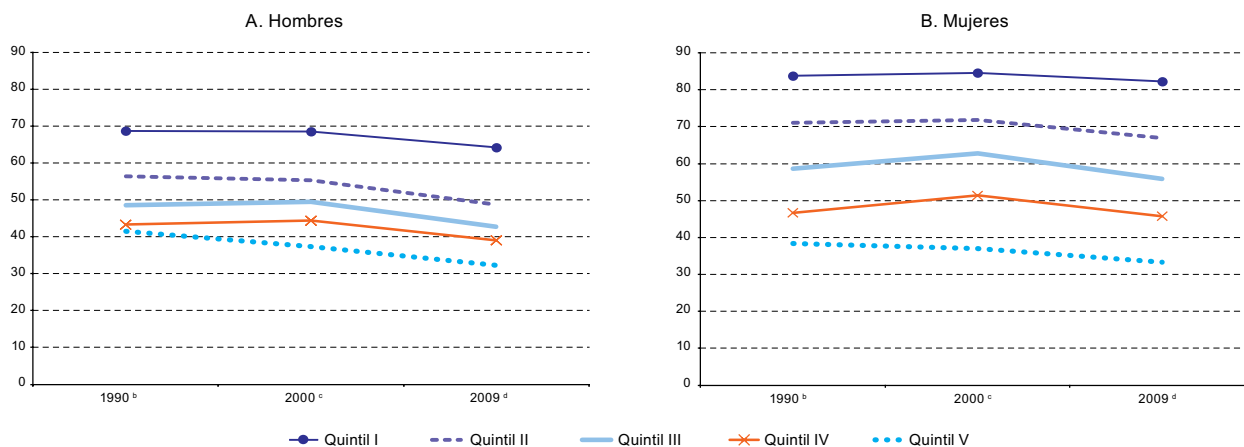
Un dato que vale la pena recordar es que, en la actualidad, la proporción de mujeres ocupadas en sectores de baja productividad es del 52,5%, frente al 44,1% entre los hombres, lo que refleja una distancia entre ambos sexos que, lejos de disminuir, se ha acentuado levemente en las últimas dos décadas. El descenso de la informalidad benefició claramente más a los hombres que a las mujeres.

El otro dato que es preciso reafirmar es que el empleo informal está muy estratificado y, como se adelantó antes,

se concentra sobre todo en los trabajadores de ingresos y niveles educativos inferiores. Estas dos señales se combinan en la base de un proceso de ensanchamiento de brechas entre quintiles superiores e inferiores que se ha acentuado y que, aunque afecta a ambos sexos, tiene una mayor incidencia entre las mujeres.

Como puede observarse en el gráfico III.10, la estratificación del empleo en sectores de baja productividad aumentó tanto entre los hombres como entre las mujeres, incrementándose la distancia entre quintiles de más y menos ingresos. En 1990 los diferenciales de informalidad entre los hombres trabajadores de los quintiles 1 y 5 eran de cerca de 27 puntos porcentuales. Veinte años después, esa distancia es cuatro puntos porcentuales mayor. Entre las mujeres la variación es similar, pero la desigualdad llega a niveles mucho más preocupantes (45 puntos en 1990 y 49 en 2009).

Gráfico III.10
AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): POBLACIÓN URBANA OCUPADA EN SECTORES DE BAJA PRODUCTIVIDAD^a, POR SEXO Y QUINTILES DE INGRESO, PROMEDIO PONDERADO, ALREDEDOR DE 1990, 2000 Y 2009
 (En porcentajes)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países. No se incluyen datos de Colombia.

^a El sector de baja productividad incluye a ocupados en microempresas (establecimientos que dan empleo a un máximo de cinco personas), empleo doméstico y trabajadores independientes no calificados, entre los que se encuentran trabajadores por cuenta propia y familiares no remunerados sin calificación profesional o técnica.

^b Los datos de Guatemala, Bolivia (República Bolivariana de) y México corresponden a 1989, los de Panamá a 1991, los de Nicaragua a 1993 y los de El Salvador a 1995.

^c Los datos de la Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), el Brasil, Costa Rica, el Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, el Perú, el Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de) corresponden a 1999, los de Nicaragua a 2001 y los de la República Dominicana a 2002.

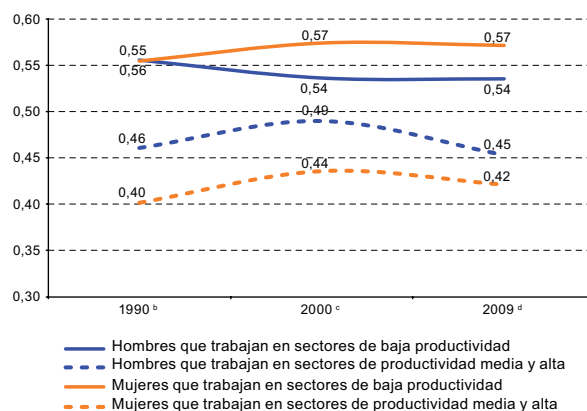
^d Los datos de Nicaragua corresponden a 2005, los de Guatemala a 2006, los de Bolivia (Estado Plurinacional de) y Honduras a 2007, los de México y Venezuela (República Bolivariana de) a 2008. Los datos de la Argentina corresponden al Gran Buenos Aires, los de Bolivia (Estado Plurinacional de) a ocho ciudades principales y El Alto, los del Paraguay a Asunción y Departamento Central, y los de Venezuela (República Bolivariana de) al total nacional.

Como resultado de esta evolución, el 82% de las mujeres ocupadas del 20% más pobre de la población trabajan actualmente en sectores de baja productividad, una proporción que en el quintil de mayores ingresos se reduce a cerca del 33%. La distancia entre las ocupadas de los quintiles 1 y 5 alcanzó en 2009 su valor máximo.

Estas tendencias se reflejan en niveles muy altos de concentración de ingresos laborales entre las ocupadas de sectores de baja productividad, con un índice de Gini que entre 1990 y 2009 aumentó dos puntos (de 0,55 a 0,57). Este dato contrasta con el índice de Gini de ingresos laborales de los hombres que trabajan en el mismo sector, que no solo es menor, sino que además descendió entre 1990 y 2009 (véase el gráfico III.11). Por otro lado, si bien la concentración de los ingresos por trabajo entre las ocupadas en el sector formal es más baja que la de los hombres ocupados en el mismo sector, el índice de Gini de las primeras se incrementó más cuando aumentó la desigualdad (año 2000), pero luego se redujo menos en la última medición disponible. En definitiva, fue más elástico a la etapa baja del ciclo económico, pero menos a la etapa de crecimiento.

Aquí se sostiene que este aumento y la mayor rigidez en la concentración del ingreso laboral de las mujeres se explican en parte por las múltiples aristas —combinadas en forma superpuesta— con que la desigualdad de género atraviesa la articulación entre mercados laborales y familias.

Gráfico III.11
AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): ÍNDICES DE GINI DE LOS INGRESOS LABORALES DE LOS OCUPADOS, POR SEXO Y PRODUCTIVIDAD^a DEL SECTOR DE ACTIVIDAD, PROMEDIO SIMPLE, ALREDEDOR DE 1990, 2000 Y 2009
 (En valores del índice de Gini)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de encuestas de hogares de los respectivos países.

^a No se incluyen datos de Colombia.

^b Los datos de Guatemala, Bolivia (Estado Plurinacional de) y México corresponden a 1989; los de Panamá a 1991; los de Nicaragua a 1993, los de El Salvador a 1995.

^c Los datos de la Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), el Brasil, Costa Rica, el Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, el Perú, el Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de) corresponden a 1999, los de Nicaragua a 2001 y los de la República Dominicana a 2002.

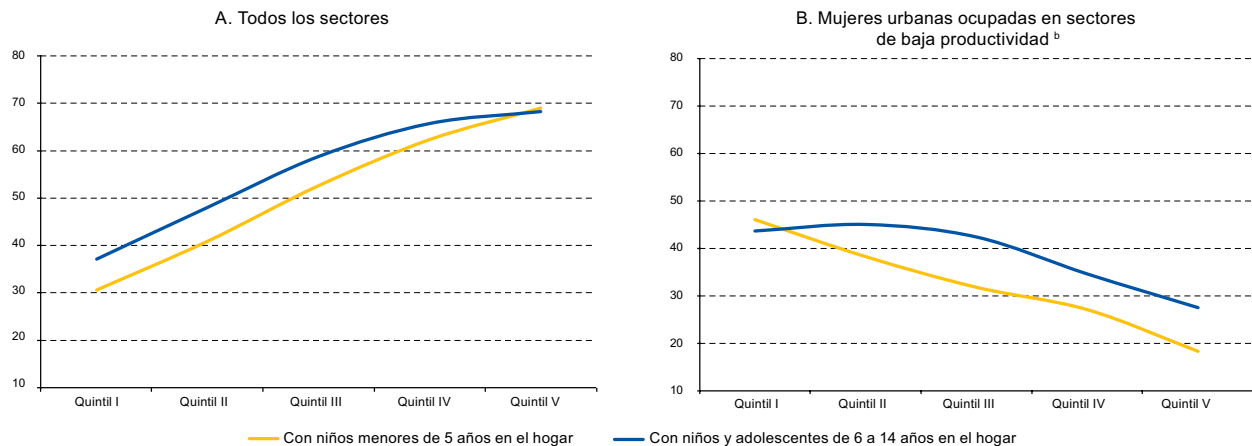
^d Los datos de Nicaragua corresponden a 2005, los de Guatemala a 2006, los de Bolivia (Estado Plurinacional de) y Honduras a 2007, los de México y Venezuela (República Bolivariana de) a 2008. Los datos de la Argentina corresponden al Gran Buenos Aires; los de Bolivia (Estado Plurinacional de) a ocho ciudades principales y El Alto; los del Paraguay a Asunción y Departamento Central; los de Venezuela (República Bolivariana de) al total nacional.

En efecto, la presión que ejerce sobre los hogares la carga de cuidados sigue una pauta muy regresiva, porque continúa recayendo básicamente sobre las distintas modalidades y recursos (económicos y familiares) con que los hogares cuentan para resolverla. Como ya se analizó en la edición 2009 del *Panorama social*, la demanda de cuidado opera como una severa restricción en los niveles de participación laboral y ocupación de las mujeres de los sectores más vulnerables (CEPAL, 2010b). En los sectores intermedios, la disminución de la tasa de fertilidad o el recurso a redes familiares o sociales para el cuidado de los dependientes se convierten en estrategias de adaptación muy frecuentes. En los sectores altos, la demanda de cuidado puede satisfacerse a través de apoyos familiares o de la contratación en el mercado de servicios para el cuidado en el hogar o fuera de este (CEPAL, 2010b). Es más, la edad de los niños que viven en el hogar parece no generar apenas diferencias en el empleo en los sectores

de mayores ingresos, condiciona el de las mujeres en los sectores intermedios y, claramente, empieza a operar como un serio obstáculo entre las mujeres más pobres (CEPAL, 2010b) (véase el gráfico III.12).

Pero la pauta varía cuando se observa la distribución del empleo en sectores de baja productividad: no opera en el estrato de menos ingresos y sí parece incidir entre las mujeres ocupadas en el sector informal de los quintiles superiores. En efecto, como revela el gráfico III.12.B, en el quintil de menores ingresos la ocupación en sectores de baja productividad entre mujeres que viven en hogares con niños pequeños es incluso levemente superior a la de aquellas que viven en hogares con menores de entre 6 y 14 años (46% y 43%). Pero esta tendencia cambia significativamente a partir del quintil 2, donde la presencia de carga de cuidado de niños más pequeños vuelve a operar como un factor restrictivo para el empleo, incluso el de baja productividad.

Gráfico III.12
AMÉRICA LATINA (14 PAÍSES): EMPLEO DE MUJERES DE 15 A 49 AÑOS, POR QUINTILES DE INGRESO Y EDAD DE MENORES EN EL HOGAR, PROMEDIO PONDERADO, ALREDEDOR DE 2009^a
(En porcentajes)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países. No se incluyen los datos de Guatemala, el Perú, la República Dominicana ni El Salvador.

^a Los datos de Bolivia (Estado Plurinacional de) corresponden a 2007, los de México y Venezuela (República Bolivariana de) a 2008, los de la Argentina corresponden al Gran Buenos Aires, los de Bolivia (Estado Plurinacional de) a ocho ciudades principales y El Alto, los del Ecuador a áreas urbanas, los del Paraguay a Asunción y Departamento Central, los del Uruguay a áreas urbanas, los de Venezuela (República Bolivariana de) al total nacional.

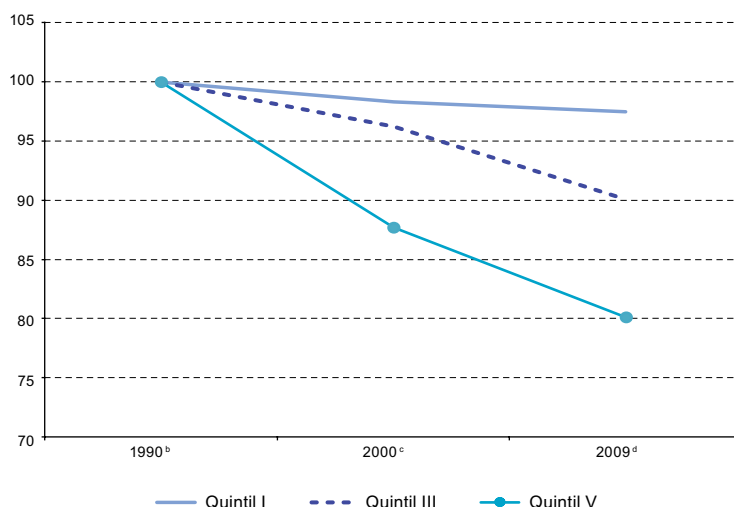
^b El sector de baja productividad incluye a ocupados en microempresas (establecimientos que dan empleo a un máximo de cinco personas), empleo doméstico y trabajadores independientes no calificados, entre los que se encuentran trabajadores por cuenta propia y familiares no remunerados sin calificación profesional o técnica.

Esto podría revelar que la presencia de menores de 5 años suele ser un obstáculo para la inserción al empleo, pero en los quintiles inferiores operaría en sentido inverso, empujando a las mujeres de menores ingresos a insertarse en el empleo informal (OIT/PNUD, 2009). Es posible que el empleo informal ofrezca, en principio, ciertas facilidades para la conciliación de la vida laboral y doméstica, tanto en términos de tiempos y horarios como de movilidad (OIT/PNUD, 2009). Pero es básicamente la inexistencia de facilidades y servicios públicos y, en particular, de sistemas públicos de cuidados tanto para niños como para adultos mayores y personas con discapacidad, lo que claramente opera en los sesgos que se advierten. Estas tareas, que

recaen fundamentalmente sobre las mujeres, sobre todo en las de menores ingresos, convierten la informalidad y las ocupaciones de baja productividad en las únicas alternativas de empleo viables en estos sectores.

La rigidez de este mecanismo se pone en evidencia al observarse la evolución de este dato en el mediano plazo. Como se refleja en el gráfico III.13, los niveles de empleo informal entre mujeres de bajos ingresos con niños pequeños prácticamente no se han modificado en los últimos 20 años, en contraste con un notorio descenso registrado en los sectores intermedios (un 10% menos entre 1990 y 2009) y, sobre todo, en los sectores altos (un 20% de reducción durante el período).

Gráfico III.13
AMÉRICA LATINA (13 PAÍSES): VARIACIÓN DEL EMPLEO EN SECTORES DE BAJA PRODUCTIVIDAD^a ENTRE MUJERES EN HOGARES CON NIÑOS DE 0 A 5 AÑOS, POR QUINTILES DE INGRESO, PROMEDIO PONDERADO, ALREDEDOR DE 1990, 2000 Y 2009
(En porcentajes de variación)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de encuestas de hogares de los respectivos países. No se incluyen los datos de Colombia, Guatemala, el Perú, la República Dominicana ni El Salvador.

^a El sector de baja productividad incluye a ocupados en microempresas (establecimientos que dan empleo a un máximo de cinco personas), empleo doméstico y trabajadores independientes no calificados, entre los que se encuentran trabajadores por cuenta propia y familiares no remunerados sin calificación profesional o técnica.

^b Los datos de Bolivia (Estado Plurinacional de) y México corresponden a 1989, y los de Colombia y Panamá a 1991.

^c Los datos de la Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), el Brasil, Colombia, Costa Rica, el Ecuador, el Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de) corresponden a 1999, y los de Nicaragua a 2001.

^d Los datos de Bolivia (Estado Plurinacional de) corresponden a 2007, los de México y Venezuela (República Bolivariana de) a 2008, los de la Argentina corresponden al Gran Buenos Aires, los de Bolivia (Estado Plurinacional de) a ocho ciudades principales y El Alto, los del Ecuador a áreas urbanas, los del Paraguay a Asunción y Departamento Central, los del Uruguay a áreas urbanas y los de Venezuela (República Bolivariana de) al total nacional.

D. Participación laboral y desempleo en clave de desigualdad

La estratificación del proceso de incorporación de las mujeres latinoamericanas al mercado laboral hace que la distancia entre las mujeres de más y menos recursos no solo no se haya reducido en las últimas dos décadas, sino que haya aumentado levemente. La mayor presión de cuidado infantil y la clara desprotección en esta materia en los sectores más vulnerables reflejan un rígido circuito de desigualdad que está lejos de quebrarse. La carga de cuidado también incide en el aumento relativo del desempleo femenino respecto del masculino. La tasa de desempleo juvenil parece estar cada vez más alejada de la del desempleo adulto, y la distancia que separa a los quintiles inferiores de los superiores no ha variado significativamente en los últimos 20 años.

En la sección anterior se mostraron algunas caras de la desigualdad en la población empleada. Se ilustró el condicionamiento que impone la segmentación laboral, así como la rigidez con que esta opera cuando se articula con diversas desigualdades (de activos, de capital humano y social, entre otras) en el ámbito de las familias. Pero este

análisis explica solo una parte de la situación. También hay que tener en cuenta la forma en que la heterogeneidad estructural opera en la capacidad de los mercados de trabajo para absorber fuerza laboral desempleada o inactiva y los nudos de desigualdad que se originan en ese proceso. En las próximas dos secciones se abordan estos temas.

1. Participación laboral en la encrucijada: Algunas tendencias recientes

El aumento de la participación laboral femenina es quizá uno de los cambios más drásticos que los mercados laborales latinoamericanos han experimentado en los últimos 20 años. Considerando las edades típicamente activas —de los 25 a los 54 años—, en las últimas dos décadas se observa un incremento de cerca de 18 puntos en la participación laboral femenina. En contraste, la participación de los hombres en el mercado laboral ha experimentado una leve disminución. Esta tendencia ha permitido ir reduciendo la distancia entre unos y otras, que entre 1990 y 2009 pasó de 47 a 28 puntos porcentuales.

Ya en la edición 2009 del *Panorama social* planteábamos que este avance es indispensable porque representa un aumento significativo del aporte de las mujeres al volumen total de ingresos de sus hogares, que en muchos casos es lo que les permite no caer en la pobreza (CEPAL, 2010b). Asimismo, el proceso es irreversible, porque refleja profundas transformaciones culturales y demográficas de largo aliento —autonomía femenina, descenso de la fecundidad, expansión de las credenciales educativas— que tienen un gran peso (CEPAL, 2010b). Y en esa oportunidad también se enfatizaba que se trata de un fenómeno considerablemente estratificado que se refleja en una pauta muy regresiva: las mujeres de menores ingresos —que además son las que suelen tener un mayor número de hijos (véase el capítulo II)— presentan niveles de participación laboral significativamente menores a los de otras mujeres de quintiles más altos.

Las principales explicaciones a la estratificación de la participación laboral son las mismas que se señalaban en relación con el sesgo femenino y de bajos ingresos que se asocia al empleo de baja productividad. La presión de la demanda de cuidados se traduce en los sectores más pobres en una distribución desigual del trabajo remunerado y no remunerado en los hogares, de modo que la responsabilidad de la atención a los dependientes

recae sobre las mujeres y las retrae de insertarse en el mercado laboral (CEPAL, 2010b).

El examen de los datos ilustra este fenómeno con claridad: en el año 2009, un 48% de las mujeres de 25 a 54 años de menores ingresos participaba en el mercado laboral. Entre mujeres de las mismas edades pero del quintil superior de ingresos, la proporción alcanzaba el 79%. No obstante, en el gráfico III.14 también se muestra que esta distancia es la mayor registrada desde 1990 y no ha dejado de incrementarse desde el año 2000. En definitiva, también en este caso la desigualdad “amenaza con echar raíces” e ir en aumento.

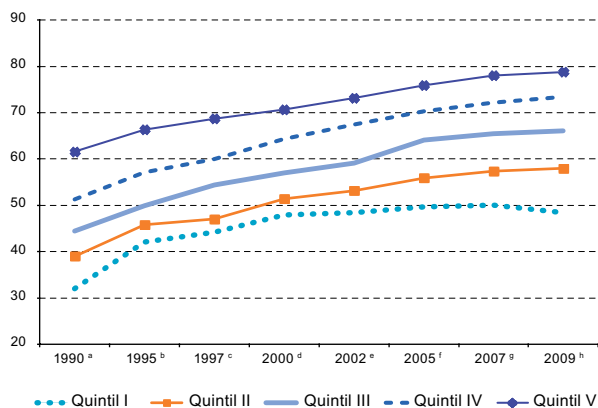
Esta pauta es resultado de dos fenómenos combinados: i) un estancamiento en el ritmo de crecimiento que afectó a todos los sectores sociales, y ii) un reciente cambio de tendencia en los quintiles de menores ingresos, donde por primera vez en casi 20 años la última medición disponible muestra que la participación laboral no solo no crece, sino que disminuye levemente.

La interpretación de estas tendencias es compleja y, sin duda, supera el objetivo de este capítulo. Sin embargo, vale la pena aventurar algunas reflexiones sobre sus implicancias y posibles causas.

Por un lado, la evolución del indicador en los sectores más vulnerables obliga a dar una señal de alerta. Si se considera que la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo representa un aumento significativo del aporte de estas al volumen total de ingresos de sus hogares¹⁰—lo que en muchos casos permite a ese hogar salir de la pobreza (CEPAL, 2010b)— sería preocupante que en el mediano plazo se detuviera este proceso tan indispensable para el acceso a mínimos de bienestar en las familias más pobres.

¹⁰ En un estudio recientemente publicado por la CEPAL se revela que el porcentaje de hogares donde el principal aporte de ingresos recae en una mujer aumentó levemente en los últimos años (Rico y Maldonado, 2011).

Gráfico III.14
AMÉRICA LATINA (15 PAÍSES): PARTICIPACIÓN LABORAL DE MUJERES DE 25 A 54 AÑOS, POR QUINTILES DE INGRESO, PROMEDIO PONDERADO, 1990-2009
 (En porcentajes)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países. No se incluyen para ninguno de los años los datos de Guatemala, el Perú ni la República Dominicana.

^a No se incluyen los datos de El Salvador, Nicaragua ni Venezuela (República Bolivariana de). Los datos de Bolivia (Estado Plurinacional de) y México corresponden a 1989, y los de Colombia y Panamá a 1991.

^b Los datos del Brasil y Nicaragua corresponden a 1993; los de El Salvador y Venezuela (República Bolivariana de) a 1995.

^c Los datos del Brasil, Chile y México corresponden a 1996, los de Nicaragua a 1998.

^d Los datos de la Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), el Brasil, Colombia, Costa Rica, el Ecuador, El Salvador, Honduras, el Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de) corresponden a 1999, y los de Nicaragua a 2001.

^e Los datos del Paraguay corresponden a 2000, los del Brasil, El Salvador y Nicaragua a 2001, y los de Chile a 2003.

^f Los datos de Honduras corresponden a 2003, los de Bolivia (Estado Plurinacional de) y el Salvador a 2004, y los de la Argentina y Chile a 2006.

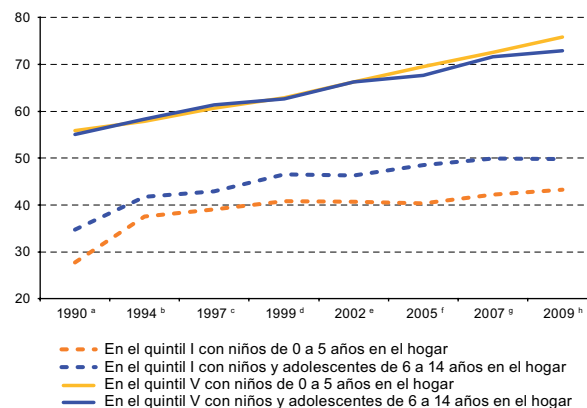
^g No se incluyen los datos de El Salvador. Los datos de Colombia y Nicaragua corresponden a 2005, los de la Argentina, Chile y México a 2006. Los datos de la Argentina corresponden al Gran Buenos Aires, los de Bolivia (Estado Plurinacional de) a ocho ciudades principales y El Alto, los del Ecuador a áreas urbanas, los del Paraguay a Asunción y Departamento Central, y los del Uruguay a áreas urbanas.

^h Los datos de Bolivia (Estado Plurinacional de) corresponden a 2007, los de México y Venezuela (República Bolivariana de) a 2008, los de la Argentina corresponden al Gran Buenos Aires, los de Bolivia (Estado Plurinacional de) a ocho ciudades principales y El Alto, los del Ecuador a áreas urbanas, los del Paraguay a Asunción y Departamento Central, y los del Uruguay a áreas urbanas.

El problema es que, cuando se examina con más detenimiento la relación entre la participación laboral y la carga de cuidado infantil, la perspectiva de largo plazo no resulta alentadora. Como puede observarse en el gráfico III.15, a partir de 2002 la distancia que separa a las mujeres de los sectores más pobres que tienen niños más pequeños (de 0 a 5 años) de aquellas que tienen niños de entre 6 y 14 años en esos sectores se ha ampliado, lo que confirma la persistencia del obstáculo que la carga de cuidado de los hijos más pequeños impone a la inserción laboral de las mujeres más vulnerables (CEPAL, 2010b). Además, la brecha que separa a las mujeres de quintiles superiores e inferiores que viven en hogares con carga infantil no ha dejado de incrementarse desde 1994. Esto ha ocurrido tanto para las que tienen niños pequeños como para las que viven en hogares con niños de 6 a 14

años, y la diferencia ha alcanzado ahora en ambos casos su valor más alto desde 1994 (véase el gráfico III.15).

Gráfico III.15
AMÉRICA LATINA (14 PAÍSES): PARTICIPACIÓN LABORAL FEMENINA DE MUJERES DE 15 A 49 AÑOS DE LOS QUINTILES I Y V, POR EDAD DE LOS HIJOS, PROMEDIO PONDERADO, 1990-2009
 (En porcentajes)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países. No se incluyen para ninguno de los años los datos de El Salvador, Guatemala, el Perú ni la República Dominicana.

^a No se incluyen los datos de El Salvador, Nicaragua ni Venezuela (República Bolivariana de). Los datos de Bolivia (Estado Plurinacional de) y México corresponden a 1989 y los de Colombia y Panamá a 1991.

^b Los datos del Brasil y Nicaragua corresponden a 1993, y los de El Salvador y Venezuela (República Bolivariana de) a 1995.

^c Los datos del Brasil, Chile y México corresponden a 1996, y los de Nicaragua a 1998.

^d Los datos de la Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), el Brasil, Colombia, Costa Rica, el Ecuador, El Salvador, Honduras, el Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de) corresponden a 1999, y los de Nicaragua a 2001.

^e Los datos del Paraguay corresponden a 2000, los del Brasil, El Salvador y Nicaragua a 2001, y los de Chile a 2003.

^f Los datos de Honduras corresponden a 2003, los de Bolivia (Estado Plurinacional de) y el Salvador a 2004, y los de la Argentina y Chile a 2006.

^g No se incluye El Salvador. Los datos de Colombia y Nicaragua corresponden a 2005, los de la Argentina, Chile y México a 2006. Los de la Argentina corresponden al Gran Buenos Aires, los de Bolivia (Estado Plurinacional de) a ocho ciudades principales y El Alto, los del Ecuador a áreas urbanas, los del Paraguay a Asunción y Departamento Central, y los del Uruguay a áreas urbanas.

^h Los datos de Bolivia (Estado Plurinacional de) corresponden a 2007, los de México y Venezuela (República Bolivariana de) a 2008, los de la Argentina corresponden al Gran Buenos Aires, los de Bolivia (Estado Plurinacional de) a ocho ciudades principales y El Alto, los del Ecuador a áreas urbanas, los del Paraguay a Asunción y Departamento Central, y los del Uruguay a áreas urbanas.

En definitiva, la pauta estratificada que “castiga” más a las mujeres sometidas a mayor presión de cuidado infantil y que tienen menores ingresos no es nueva y no parece haberse corregido en las últimas dos décadas. Lejos de eso, los datos están mostrando que se acentúa en este rígido circuito de desigualdad.

Por otro lado, es posible que la reciente crisis económica sea uno de los factores que explican las últimas tendencias, quizá al alterar las expectativas sobre la posibilidad de ingresar al mercado laboral. Dado el incremento del desempleo —especialmente en las mujeres—, esta perspectiva puede dar lugar a desaliento, a desincentivo para trabajar, o bien a una categoría de inactividad pero con disponibilidad de trabajar si surgiera la oportunidad

de hacerlo. Es cierto que hasta ahora el indicador no había sido sensible, al menos en términos agregados, a crisis económicas previas. Pero en tanto que la participación aumenta y se acerca más a un “techo”, las variaciones asociadas al crecimiento económico podrían comenzar a ser más frecuentes.

Finalmente, no hay que olvidar que en los últimos años han cobrado fuerza los programas de transferencias condicionadas. El debate se ha instalado en torno a la orientación de varios de estos programas a las mujeres como receptoras del beneficio económico, lo que las obliga a asumir los compromisos de cumplimiento de las condicionalidades (por ejemplo, la atención sanitaria y la vacunación de los menores del hogar). Es cierto que con la elección de las mujeres como receptoras de las transferencias se busca favorecer su acceso directo a ingresos y, en última

instancia, promover su autonomía económica. También se argumenta que deben ser las mujeres quienes reciban los ingresos, en la medida en que son ellas quienes están al cuidado de los niños y toman las decisiones relacionadas con ese cuidado. Sin embargo, este enfoque ha sido objeto de un amplio debate (Molyneux, 2008; Martínez Franzoni y Voreend, 2010). El planteo contrasta con el hecho de que las contraprestaciones exigidas, así como la gestión del acceso al beneficio, comprometen el tiempo de las mujeres y pueden desincentivar su ingreso al mercado laboral cuando enfrentan obstáculos sistemáticos para ello (CEPAL, 2010d). Aunque todavía hay pocos estudios sobre la materia y se requeriría contar con mayor evidencia, no debería descartarse que estas iniciativas puedan estar operando como un nuevo e inesperado obstáculo a la participación laboral.

2. Desempleo: “afuera del afuera” y más lejos entre sí

El desempleo es un fenómeno estrechamente asociado a los ciclos económicos y sus variaciones se vinculan directamente con las distintas etapas de estos. En la región, esa relación se ha sido extensamente estudiada, y se ha ilustrado cómo las sucesivas crisis han repercutido directamente en incrementos de la tasa de desempleo, que luego ha tendido a bajar en los períodos de recuperación económica. Pero quizá lo más relevante a efectos del estudio de la desigualdad es que, en el tránsito entre estos ciclos, algunos sectores aparecen sistemáticamente perjudicados. Esto refleja capacidades desiguales para enfrentar los efectos del desempleo o, en otras palabras, una mayor vulnerabilidad de ciertos grupos frente a las etapas bajas del ciclo económico y más capacidad de otros sectores para hacer frente a estas contracciones cíclicas.

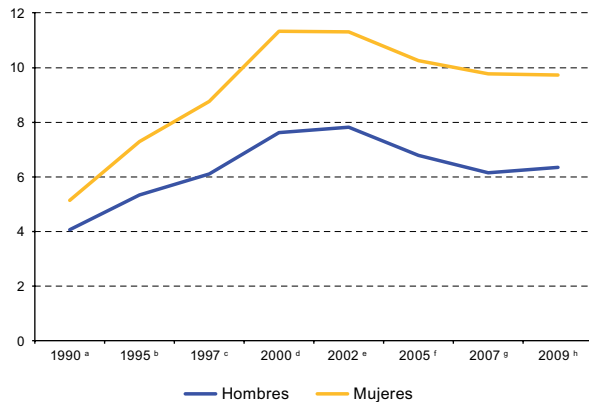
Por un lado, el desempleo se concentra principalmente en las mujeres. En efecto, no solo el desempleo femenino tiende a ser mayor que el de los hombres, sino que, en los últimos años, la distancia que separa a unas de otras en ese aspecto ha aumentado en forma sistemática. En 1990, el desempleo masculino equivalía, aproximadamente, a un 80% del desempleo femenino. Casi 20 años después, y tras varias oscilaciones, el desempleo masculino representa apenas un 65% del femenino (o en otras palabras, el

desempleo entre las mujeres es un 35% más alto que entre los hombres) (véase el gráfico III.16).

La tendencia de largo plazo indica, además, una profundización en la desigualdad del desempleo entre las mujeres. Más allá de las oscilaciones asociadas a los ciclos de las economías de la región, en la década de los noventa la brecha entre las mujeres de los quintiles superiores e inferiores se reduce levemente, pero a partir de 2000 comienzan a ampliarse. Como resultado de este proceso, en el año 2009 el desempleo de las mujeres de menores ingresos fue cinco veces superior al de las mujeres del quintil más alto (un 21% frente a un 4%) (véase el gráfico III.17).

Varios son los fenómenos que operan en este aumento de la desigualdad. El mencionado proceso de incorporación de las mujeres al mercado de trabajo introduce presión para el empleo femenino, a la que se suma el hecho de que las mujeres de menores niveles educativos encuentren más barreras para acceder al empleo, en un contexto de insuficiente creación de puestos de trabajo. En esta dinámica inciden claramente los déficits en la calificación, así como la definición social de las ocupaciones y su segmentación por sexo, que dificulta el acceso de las mujeres a ciertas profesiones (CEPAL, 2010d).

Gráfico III.16
AMÉRICA LATINA (15 PAÍSES): TASA DE DESEMPLEO
(POBLACIÓN A PARTIR DE 15 AÑOS), POR SEXO,
PROMEDIO PONDERADO, 1990-2009
(En porcentajes)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países. No se incluyen para ninguno de los años los datos de Guatemala, el Perú ni la República Dominicana.

^a No se incluyen los datos de El Salvador, Nicaragua ni Venezuela (República Bolivariana de). Los datos de Bolivia (Estado Plurinacional de) y México corresponden a 1989, y los de Colombia y Panamá a 1991.

^b Los datos del Brasil y Nicaragua corresponden a 1993, los de El Salvador y Venezuela (República Bolivariana de) a 1995.

^c Los datos del Brasil, Chile y México corresponden a 1996, los de Nicaragua a 1998.

^d Los datos de la Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), el Brasil, Colombia, Costa Rica, el Ecuador, El Salvador, Honduras, el Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de) corresponden a 1999, y los de Nicaragua a 2001.

^e Los datos del Paraguay corresponden a 2000, los del Brasil, El Salvador y Nicaragua a 2001, y los de Chile a 2003.

^f Los datos de Honduras corresponden a 2003, los de Bolivia (Estado Plurinacional de) y el Salvador a 2004, los de la Argentina y Chile a 2006.

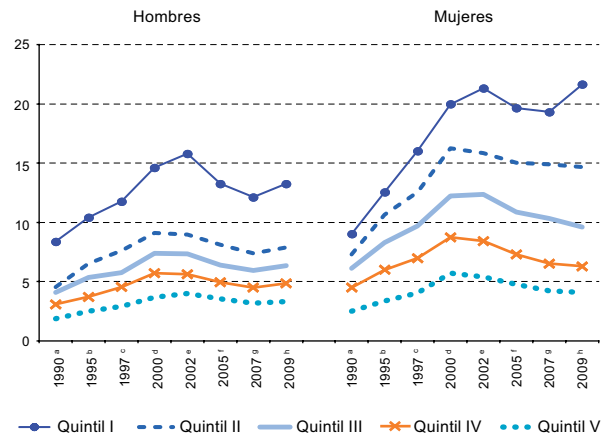
^g No se incluye El Salvador. Los datos de Colombia y Nicaragua corresponden a 2005, los de la Argentina, Chile y México a 2006. Los datos de la Argentina corresponden al Gran Buenos Aires, los de Bolivia (Estado Plurinacional de) a ocho ciudades principales y El Alto, los del Ecuador a áreas urbanas, los del Paraguay a Asunción y Departamento Central, y los del Uruguay a áreas urbanas.

^h Los datos de Bolivia (Estado Plurinacional de) corresponden a 2007, los de México y Venezuela (República Bolivariana de) a 2008. Los datos de la Argentina corresponden al Gran Buenos Aires, los de Bolivia (Estado Plurinacional de) a ocho ciudades principales y El Alto, los del Ecuador a áreas urbanas, los del Paraguay a Asunción y Departamento Central, los del Uruguay a áreas urbanas.

Pero también las demandas de cuidado pueden estar operando en los sectores más vulnerables como un freno para el acceso al empleo¹¹. Como se observa en el gráfico III.18, el desempleo tiende a ser mayor entre las mujeres que viven en hogares con niños más pequeños y, nuevamente,

¹¹ Tradicionalmente, ha sido visible el impacto que la carga de cuidado tiene sobre el comportamiento de la participación laboral. Pero las tendencias que muestran los efectos de esta variable sobre el desempleo de mujeres en quintiles de menores ingresos ponen de manifiesto la necesidad de seguir perfeccionando la medición de la participación laboral y sus distintos significados. Esta consideración

Gráfico III.17
AMÉRICA LATINA (15 PAÍSES): TASA DE DESEMPLEO,
POR SEXO Y QUINTILES DE INGRESO,
PROMEDIO PONDERADO, 1990-2009
(En porcentajes)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países. No se incluyen para ninguno de los años los datos de Guatemala, el Perú ni la República Dominicana.

^a No se incluyen los datos de El Salvador, Nicaragua ni Venezuela (República Bolivariana de). Los datos de Bolivia (Estado Plurinacional de) y México corresponden a 1989, y los de Colombia y Panamá a 1991.

^b Los datos del Brasil y Nicaragua corresponden a 1993, y los de El Salvador y Venezuela (República Bolivariana de) a 1995.

^c Los datos del Brasil, Chile y México corresponden a 1996, y los de Nicaragua a 1998.

^d Los datos de la Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), el Brasil, Colombia, Costa Rica, el Ecuador, El Salvador, Honduras, el Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de) corresponden a 1999, y los de Nicaragua a 2001.

^e Los datos del Paraguay corresponden a 2000, los del Brasil, El Salvador y Nicaragua a 2001, y los de Chile a 2003.

^f Los datos de Honduras corresponden a 2003, los de Bolivia (Estado Plurinacional de) y el Salvador a 2004, y los de Argentina y Chile a 2006.

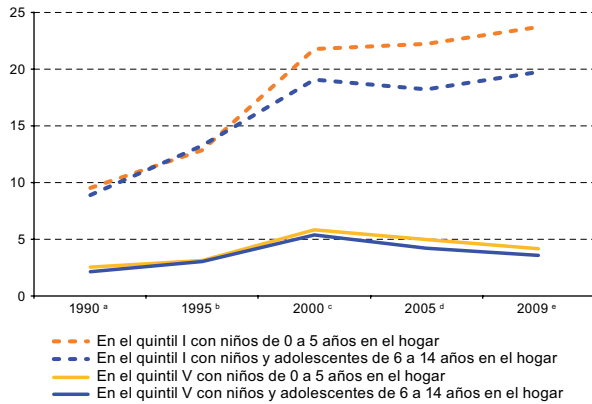
^g No se incluye El Salvador. Los datos de Colombia y Nicaragua corresponden a 2005, los de la Argentina, Chile y México a 2006. Los datos de la Argentina corresponden al Gran Buenos Aires, los de Bolivia (Estado Plurinacional de) a ocho ciudades principales y El Alto, los del Ecuador a áreas urbanas, los del Paraguay a Asunción y Departamento Central, y los del Uruguay a áreas urbanas.

^h Los datos de Bolivia (Estado Plurinacional de) corresponden a 2007, los de México y Venezuela a 2008. Los datos de la Argentina corresponden al Gran Buenos Aires, los de Bolivia (Estado Plurinacional de) a ocho ciudades principales y El Alto, los del Ecuador a áreas urbanas, los del Paraguay a Asunción y Departamento Central, y los del Uruguay a áreas urbanas.

la distancia en ese aspecto entre estas y las que tienen hijos en edades para las que existe una oferta escolar formal y más estructurada va aumentando levemente a medida que disminuyen los ingresos. Este fenómeno, además, se ha agudizado significativamente a partir del año 2000.

implica captar mejor las múltiples formas en que el trabajo no remunerado de las mujeres se combina con actividades que están en el límite de lo que suele considerarse como participación laboral, la forma en que el cuidado puede operar como desincentivo a la posibilidad de encontrar un empleo o los distintos grados de disposición a trabajar dentro de la inactividad.

Gráfico III.18
AMÉRICA LATINA (14 PAÍSES): TASA DE DESEMPLEO DE MUJERES DE 15 A 49 AÑOS, POR QUINTILES DE INGRESO Y EDAD DE LOS HIJOS, PROMEDIO PONDERADO, ALREDEDOR DE 1990, 1995, 2000, 2005 Y 2009
 (En porcentajes)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países. No se incluyen para ninguno de los años los datos de El Salvador, Guatemala, el Perú ni la República Dominicana.

^a No se incluyen datos de El Salvador, Nicaragua ni Venezuela (República Bolivariana de). Los datos de Bolivia (Estado Plurinacional de) y México corresponden a 1989, los de Colombia y Panamá a 1991.

^b Los datos del Brasil y Nicaragua corresponden a 1993, y los de El Salvador y Venezuela (República Bolivariana de) a 1995.

^c Los datos de la Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), el Brasil, Colombia, Costa Rica, el Ecuador, El Salvador, Honduras, el Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de) corresponden a 1999, y los de Nicaragua a 2001.

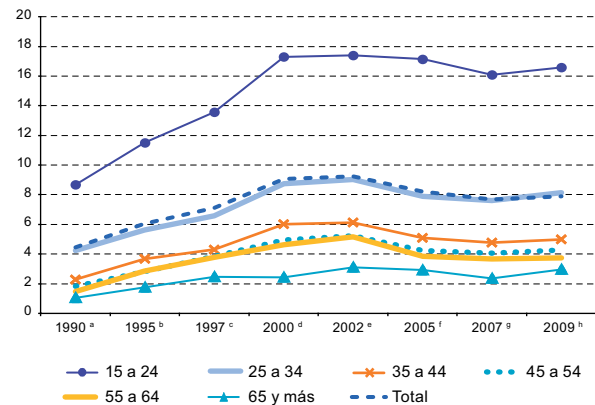
^d Los datos de Honduras corresponden a 2003, los de Bolivia (Estado Plurinacional de) y el Salvador a 2004, los de la Argentina y Chile a 2006. Para 2007 no se incluye El Salvador. Los datos de Colombia y Nicaragua corresponden a 2005, los de la Argentina, Chile y México a 2006. Los datos de la Argentina corresponden al Gran Buenos Aires, los de Bolivia (Estado Plurinacional de) a ocho ciudades principales y El Alto, los del Ecuador a áreas urbanas, los del Paraguay a Asunción y Departamento Central, y los del Uruguay a áreas urbanas.

^e Los datos de Bolivia (Estado Plurinacional de) corresponden a 2007, y los de México y Venezuela (República Bolivariana de) a 2008. Los datos de la Argentina corresponden al Gran Buenos Aires, los de Bolivia (Estado Plurinacional de) a ocho ciudades principales y El Alto, los del Ecuador a áreas urbanas, los del Paraguay a Asunción y Departamento Central, y los del Uruguay a áreas urbanas.

El otro grupo en el que el desempleo alcanza los niveles más preocupantes es el de los jóvenes¹². Como se ha planteado en algunos estudios, el desempleo juvenil parece ser el primero en aumentar en épocas de crisis económica y, a la vez, el último en disminuir en fases de crecimiento (Tokman, 1997; CEPAL, 2010c), lo que lo ha convertido en un núcleo especialmente duro en la cadena de reproducción de desigualdades (CEPAL, 2010b).

De acuerdo con datos de las encuestas de hogares, en 1990 la tasa de desempleo de los jóvenes de entre 15 y 24 años casi duplicaba la del conjunto de la población, una distancia que no solo no se acortó significativamente, sino que a partir del año 2005 parece haber aumentado (véase el gráfico III.19).

Gráfico III.19
AMÉRICA LATINA (15 PAÍSES): TASA DE DESEMPLEO POR GRUPOS DE EDAD, PROMEDIO PONDERADO, 1990-2009
 (En porcentajes)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países. No se incluyen para ninguno de los años los datos de Guatemala, el Perú ni la República Dominicana.

^a No se incluye El Salvador, Nicaragua ni Venezuela (República Bolivariana de). Los datos de Bolivia (Estado Plurinacional de) y México corresponden a 1989, y los de Colombia y Panamá a 1991.

^b Los datos del Brasil y Nicaragua corresponden a 1993, y los de El Salvador y Venezuela (República Bolivariana de) a 1995.

^c Los datos del Brasil, Chile y México corresponden a 1996, y los de Nicaragua a 1998.

^d Los datos de la Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), el Brasil, Colombia, Costa Rica, el Ecuador, El Salvador, Honduras, el Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de) corresponden a 1999, y los de Nicaragua a 2001.

^e Los datos del Paraguay corresponden a 2000; los del Brasil, El Salvador y Nicaragua a 2001, y los de Chile a 2003.

^f Los datos de Honduras corresponden a 2003, los de Bolivia (Estado Plurinacional de) y el Salvador a 2004, y los de la Argentina y Chile a 2006.

^g No se incluye El Salvador. Los datos de Colombia y Nicaragua corresponden a 2005, los de la Argentina, Chile y México a 2006. Los datos de la Argentina corresponden al Gran Buenos Aires, los de Bolivia (Estado Plurinacional de) a ocho ciudades principales y El Alto, los del Ecuador a áreas urbanas, los del Paraguay a Asunción y Departamento Central, y los del Uruguay a áreas urbanas.

^h Los datos de Bolivia (Estado Plurinacional de) corresponden a 2007, y los de México y Venezuela (República Bolivariana de) a 2008. Los datos de la Argentina corresponden al Gran Buenos Aires, los de Bolivia (Estado Plurinacional de) a ocho ciudades principales y El Alto, los del Ecuador a áreas urbanas, los del Paraguay a Asunción y Departamento Central, y los del Uruguay a áreas urbanas.

¹² En este capítulo se centra la atención en el desempleo juvenil como un circuito clave para la generación y reproducción de desigualdades que se ponen de manifiesto en los mercados de trabajo, pero tienen su origen en pautas históricas que dejan a este sector poblacional especialmente desprotegido y se traducen en múltiples tensiones

asociadas a la emancipación juvenil. Si bien aquí no se exploran en detalle estos núcleos duros de desigualdad, existen numerosos estudios que muestran claramente la complejidad del fenómeno. Desde la CEPAL se han realizado aportes significativos en esa línea (véanse, por ejemplo, CEPAL/OIJ (2004 y 2008) y CEPAL (2011a)).

La elevación de las credenciales educativas juega un rol clave en el aumento de las tasas de desempleo juvenil (PNUD, 2001; CEPAL, 2011a). La CEPAL ha mostrado evidencias concluyentes que confirman que, desde hace ya bastante tiempo, el ciclo medio de la educación no opera como puente para el acceso al empleo (CEPAL/OIJ, 2004 y 2008; CEPAL, 2004; CEPAL, 2011a). Esto tiene un fuerte correlato en la estabilidad de la estructura productiva y la heterogeneidad estructural, de modo que no se crean nuevos puestos de trabajo ajustados a los logros educativos que la región ha ido alcanzando (CEPAL, 2010c).

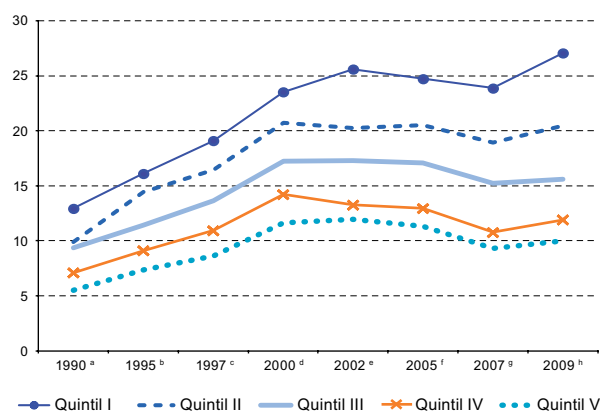
De más está decir que los altos niveles de desempleo entre los jóvenes pueden generar una gran frustración. En el mediano y largo plazo, es posible que eso altere el sentido básico de integración de las nuevas generaciones al conjunto de la sociedad y la cohesión social (Naciones Unidas, 2003, CEPAL/OIJ, 2008), en la medida en que se hace muy difícil el acceso al empleo y, por ende, a la protección social, en un momento clave en el calendario vital de las personas (cuando se inicia el proceso de emancipación).

Pero además, como el desempleo en estas edades está muy estratificado y afecta especialmente a los sectores de menores ingresos, constituye un obstáculo notorio a la acumulación de capacidades y, en última instancia, al incremento de la productividad en las nuevas generaciones. El desempleo es mucho más alto entre los jóvenes provenientes de hogares con menos ingresos que entre los de los quintiles de ingresos superiores. Nuevamente, lo más preocupante es que la distancia que separa a los quintiles inferiores de los superiores no ha variado significativamente en los últimos 20 años. En otras palabras, la brecha que separa a los grupos de menores ingresos de los de mayores ingresos no se ha reducido. Por el contrario, en 2009 alcanza su punto más alto (17 puntos porcentuales) (véase el gráfico III.20). Esto se debe a que el leve aumento que se registra en el desempleo juvenil a nivel agregado es el resultado de un aumento diferencial entre quintiles, donde los sectores de menores ingresos parecen llevar la peor parte (entre 1990 y 2009, el desempleo en este grupo pasó del 13% al 27%).

La complejidad de las tendencias analizadas aumenta aún más si se tiene en cuenta que, al igual que ocurre en otros tramos etarios, también en el caso de los jóvenes de 15 a 24 años el desempleo es más alto entre las mujeres

que entre los hombres. De hecho, lejos de reducirse, entre 1990 y 2009 la brecha de género (la distancia entre las curvas de desempleo de hombres y mujeres jóvenes) se incrementó (véase el gráfico III.21).

Gráfico III.20
AMÉRICA LATINA (15 PAÍSES): TASA DE DESEMPEÑO DE JÓVENES DE ENTRE 15 Y 24 AÑOS, POR QUINTILES DE INGRESO, PROMEDIO PONDERADO, 1990-2009
(En porcentajes)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países. No se incluyen para ninguno de los años los datos de Guatemala, el Perú ni la República Dominicana.

^a No se incluyen El Salvador, Nicaragua ni Venezuela (República Bolivariana de). Los datos de Bolivia (Estado Plurinacional de) y México corresponden a 1989, los de Colombia y Panamá a 1991.

^b Los datos para 1994 del Brasil y Nicaragua corresponden a 1993, y los de El Salvador y Venezuela (República Bolivariana de) a 1995.

^c Los datos del Brasil, Chile y México corresponden a 1996, y los de Nicaragua a 1998.

^d Los datos de la Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), el Brasil, Colombia, Costa Rica, el Ecuador, El Salvador, Honduras, el Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de) corresponden a 1999, y los de Nicaragua a 2001.

^e Los datos del Paraguay corresponden a 2000, los del Brasil, El Salvador y Nicaragua a 2001, y los de Chile a 2003.

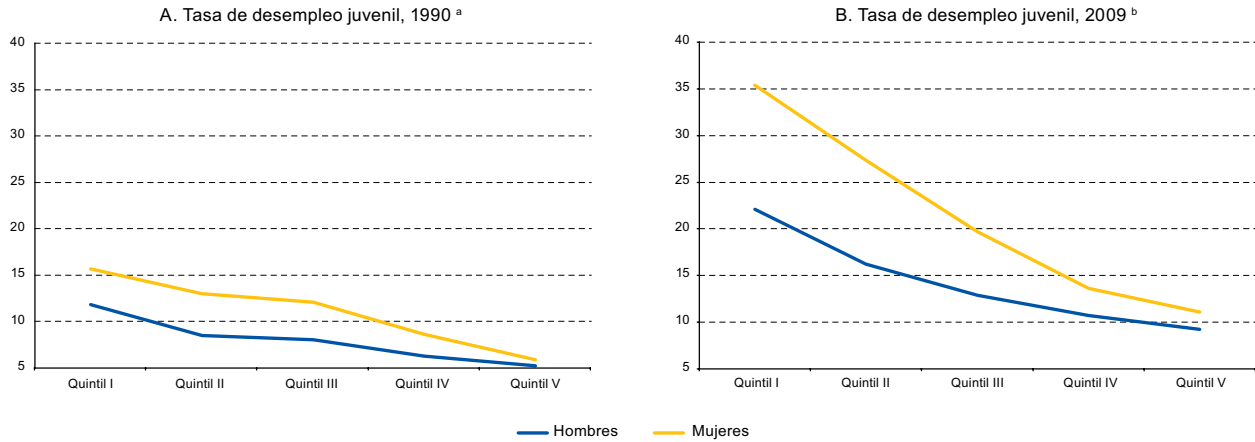
^f Los datos de Honduras corresponden a 2003, los de Bolivia (Estado Plurinacional de) y el Salvador a 2004, y los de la Argentina y Chile a 2006.

^g No se incluye El Salvador. Los datos de Colombia y Nicaragua corresponden a 2005, y los de la Argentina, Chile y México a 2006. Los datos de la Argentina corresponden al Gran Buenos Aires, los de Bolivia a ocho ciudades principales y El Alto, los del Ecuador a áreas urbanas, los del Paraguay a Asunción y Departamento Central, y los del Uruguay a áreas urbanas.

^h Los datos de Bolivia (Estado Plurinacional de) corresponden a 2007, y los de México y Venezuela (República Bolivariana de) a 2008. Los datos de la Argentina corresponden al Gran Buenos Aires, los de Bolivia (Estado Plurinacional de) a ocho ciudades principales y El Alto, los del Ecuador a áreas urbanas, los del Paraguay a Asunción y Departamento Central, y los del Uruguay a áreas urbanas.

En realidad, al igual que ocurre con la población adulta, el desempleo juvenil femenino está más estratificado que el masculino. Los datos no solo confirman una mayor desigualdad (las pendientes de las curvas son más pronunciadas en el caso de las mujeres), sino que revelan que entre 1990 y 2009 esta tendencia se ha profundizado en mucho mayor medida entre las mujeres que entre los hombres.

Gráfico III.21
AMÉRICA LATINA (15 PAÍSES): TASA DE DESEMPLEO DE JÓVENES DE ENTRE 15 Y 24 AÑOS, POR QUINTILES DE INGRESO Y SEXO, PROMEDIO PONDERADO, ALREDEDOR DE 1990 Y DE 2009
 (En porcentajes)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países. No se incluyen para ninguno de los años los datos de Guatemala, el Perú ni la República Dominicana.

^a No se incluyen datos de El Salvador, Nicaragua ni Venezuela (República Bolivariana de). Los datos de Bolivia (Estado Plurinacional de) y México corresponden a 1989, y los de Colombia y Panamá a 1991.

^b Los datos de Bolivia (Estado Plurinacional de) corresponden a 2007, los de México y Venezuela (República Bolivariana de) a 2008. Los datos de la Argentina corresponden al Gran Buenos Aires, los de Bolivia (Estado Plurinacional de) a ocho ciudades principales y El Alto, los del Ecuador a áreas urbanas, los del Paraguay a Asunción y Departamento Central, y los del Uruguay a áreas urbanas.

Recuadro III.1 **VULNERABILIDADES SUPERPUESTAS Y PERSISTENCIA DE LA DESIGUALDAD: JEFATURA FEMENINA, TRABAJO, CUIDADOS Y POBREZA**

Las mujeres latinoamericanas se encuentran en una situación desfavorable en el mercado laboral, donde la división sexual del trabajo, la desigual distribución del no remunerado y la segmentación ocupacional operan como factores determinantes de la interrelación entre empleo, género y pobreza (Arriagada, 1998). Estas variables inciden en la incorporación estratificada de las mujeres al mundo laboral, al empleo y también a ocupaciones de productividad media y alta. En efecto, la evidencia presentada a lo largo del capítulo confirma los obstáculos que enfrentan las mujeres de menores ingresos, lo que las distancia de sus pares de quintiles superiores y, por supuesto, de los hombres (CEPAL, 2010d).

En estos mismos sectores, además, se suelen tener más hijos que en los de mayores ingresos y, por ende, las mujeres viven en hogares con mayor número de niños y adolescentes. Como se mostraba en el capítulo anterior, la tasa global de fecundidad es significativamente más baja entre las mujeres que cuentan con

educación secundaria o superior que entre las que no han completado el ciclo primario, y en algunos países (Bolivia (Estado Plurinacional de), el Ecuador, Haití) las diferencias entre unas y otras llegan incluso a más de tres hijos (véase el capítulo II).

Como resultado de tales configuraciones, estas mujeres no solo deben asumir una mayor carga de cuidado, sino que, en tanto viven en hogares más numerosos, cuentan con un ingreso per cápita menor. Esto dificulta seriamente las posibilidades de resolver a través del mercado las necesidades de cuidado de sus miembros.

El panorama se complica aún más si se considera que estas mujeres experimentan una mayor vulnerabilidad a la pobreza cuando son jefas de hogares monoparentales, una categoría en aumento, sobre todo en los sectores de menores ingresos, precisamente. Según datos de un estudio reciente, los hogares monoparentales con jefatura femenina del primer quintil de ingresos pasaron de representar un 13,8% en 1990

a un 18,8% en 2008 (Rico y Maldonado, 2011, pág. 38).

Ante este entramado de variables y de comportamientos que vienen mostrándose en esos sectores, no es llamativo que se experimenten tensiones mayores que las que afectan al resto de las mujeres, porque debe conciliarse el trabajo remunerado con las responsabilidades familiares, pero para ello estas mujeres disponen de menos recursos monetarios y familiares (muchas veces no cuentan con ayuda de un cónyuge dentro del hogar para distribuir el trabajo no remunerado). Si a esto se suma que, en general, su nivel educativo es menor y tienden a carecer de las calificaciones adecuadas, el panorama se vuelve muy preocupante.

El análisis de este capítulo ofrece una evidencia concluyente respecto a la necesidad de seguir situando este núcleo duro de desigualdad en el centro de los debates sobre políticas públicas para combatir la pobreza y reducir la desigualdad.

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Irma Arriagada, "Familias latinoamericanas: Convergencias y divergencias de modelos y políticas", *Revista de la CEPAL*, N° 65 (LC/G.2033-P/E), Santiago de Chile, CEPAL, 1998; CEPAL, *¿Qué Estado para qué igualdad?* (LC/G.2450(CRM.11/3)), Santiago de Chile, 2010; y N. Rico y C. Maldonado, "¿Qué muestra la evolución de los hogares sobre la evolución de las familias en América Latina?", *Las familias latinoamericanas interrogadas. Hacia la articulación del diagnóstico, la legislación y las políticas, serie Seminarios y conferencias*, N° 61 (LC/L.3296-P), Santiago de Chile, CEPAL, 2011.

E. El Estado en la intersección de mercados laborales y familias

En el mapa de fábricas, circuitos y núcleos duros de desigualdad, el Estado ocupa un lugar central. La robustez de la intervención estatal y su orientación son las que permiten hacer frente a las desigualdades y las que dejan más o menos espacio para contrarrestar la herencia estructural. La intervención estatal debe plantearse con firmeza en el campo productivo, la regulación e institucionalidad laboral, las políticas de mercado de trabajo y la redistribución en materia de cuidado infantil.

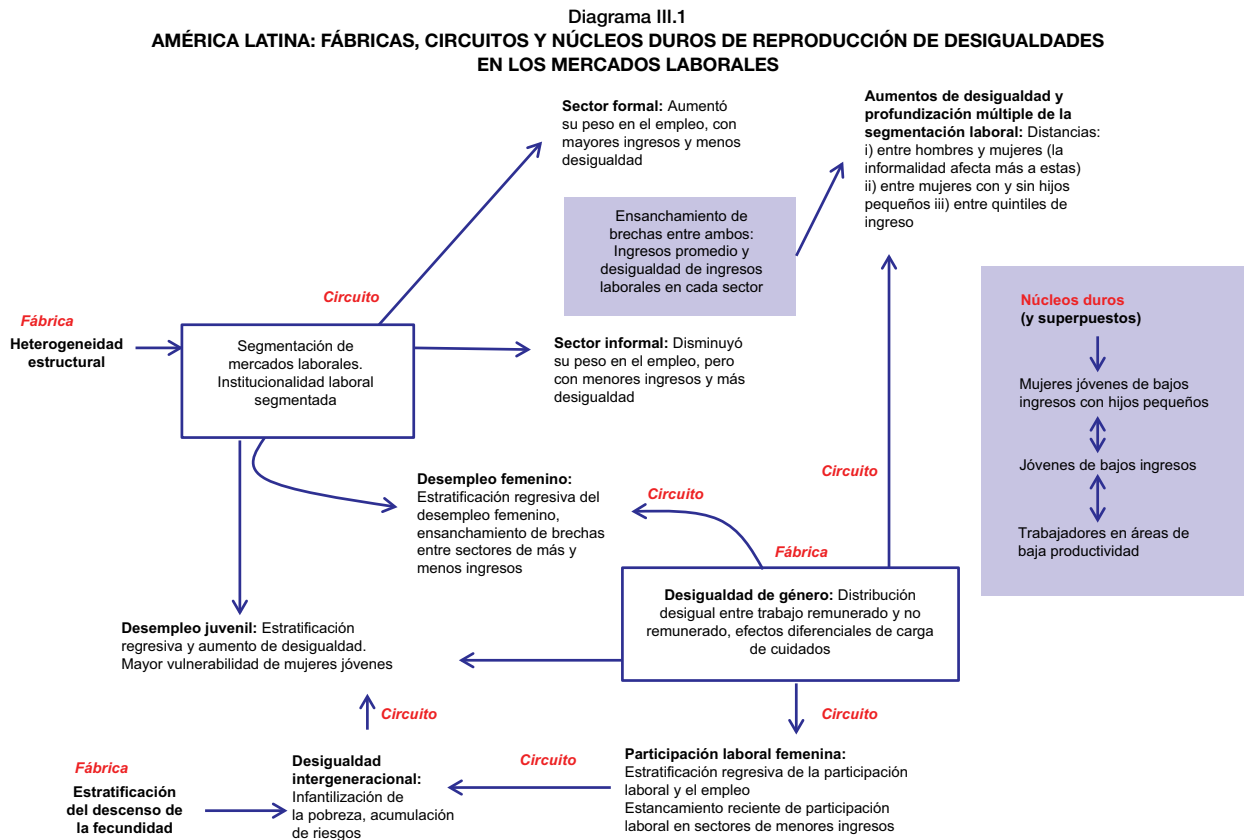
En las páginas anteriores se examinaban las desigualdades laborales en América Latina. En ese análisis se muestra el rol de la heterogeneidad estructural, la estratificación del descenso de la fecundidad y la desigualdad de género como fábricas de desigualdad. En la articulación entre estos componentes se confirma la existencia de varios circuitos de reproducción de desigualdades: el que opera en las distancias entre trabajadores formales e informales, el que asocia esa desigualdad con disparidades de género, los que configuran comportamientos diferenciales de ciertos grupos —como las mujeres y los jóvenes— frente al desempleo, o el que estructura desigualdades en la participación laboral. Como resultado de esta dinámica, son notorios los núcleos duros de desigualdad y vulnerabilidad que se alojan en ciertos sectores, como las mujeres jóvenes de bajos ingresos y con hijos pequeños, personas jóvenes de bajos ingresos y trabajadores (especialmente mujeres) en áreas de baja productividad. Los principales hitos de esta secuencia se ilustran a continuación (véase el diagrama III.1).

En este mapa de fábricas, circuitos y núcleos duros de desigualdad, el Estado ocupa un lugar central. Más allá de los procesos antes reseñados, la robustez de la intervención estatal y su orientación son las que permiten hacer frente a las desigualdades y las que dejan más o menos espacio para contrarrestar la herencia estructural.

Desde esta perspectiva, hay por lo menos cuatro aspectos en que, a la luz del diagnóstico presentado, es necesario plantearse la intervención estatal.

El primero se refiere a la gran heterogeneidad estructural que existe en la región y a la imperante

necesidad de intervenir en este primer eslabón de la cadena de reproducción de desigualdades hacia el mercado laboral. Para ello, es preciso avanzar hacia una política integrada de desarrollo productivo, asentada en regímenes macroeconómicos adecuados, políticas de desarrollo e incentivos microeconómicos de mercado. Además, es necesario intervenir con firmeza en tres planos: i) políticas industriales, que promuevan la consolidación de encadenamientos productivos y la inversión que requieren, además de permitir un mejor aprovechamiento del potencial de aprendizaje que se deriva de las etapas de mayor crecimiento; ii) políticas tecnológicas que promuevan el acceso a la innovación y la tecnología, sobre la base de orientaciones de largo plazo, y que contribuyan a “generar un ambiente de rápido aprendizaje y de cambio estructural en favor de sectores tecnológicamente más dinámicos” (CEPAL, 2010a), y iii) políticas de apoyo a las pymes, que fomenten el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas favoreciendo el acceso de este sector a la innovación y la tecnología, y facilitando el apoyo financiero y el acceso al crédito. La experiencia latinoamericana en el desarrollo de estas políticas muestra luces y sombras. Si bien existen experiencias auspiciosas, los logros están todavía lejos de ser evidentes. Estos resultados ponen de manifiesto la necesidad de fortalecer las capacidades institucionales de los Estados de la región para mejorar el diseño, la implementación y la evaluación de las políticas, así como para incidir en la estructura de precios y en un acceso más horizontal a la innovación.



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

El segundo aspecto corresponde a la regulación e institucionalidad de los mercados laborales. En América Latina existen serios déficits en la institucionalidad laboral y varias asignaturas pendientes en materia de regulación de los mercados laborales. Hay importantes sesgos de género y etarios, además de amplios sectores de trabajadores que no se benefician de las normas laborales fundamentales. El modelo “dual” de regulación que existe en la región representa, sin duda, un obstáculo central para facilitar la apropiación de ganancias de productividad por parte de los trabajadores de menores ingresos y para romper la barrera entre incluidos y excluidos, que luego se traslada a la protección social.

Quienes ejecutan políticas públicas deben considerar que la segmentación de los mercados laborales se encuentra estrechamente relacionada con la heterogeneidad estructural. Cuando se omite este vínculo, la institucionalidad laboral se diseña de forma desarticulada entre los distintos estratos productivos y las políticas se elaboran como si el mercado laboral fuese homogéneo, por lo que no contribuyen a la convergencia productiva, sino que, por el contrario, exacerban las brechas entre

productividad y remuneraciones e imposibilitan una auténtica justicia distributiva.

Además, un crecimiento económico elevado y una productividad laboral ascendente crean condiciones para la generación de empleo de calidad y con derechos, pero no la garantizan. Más bien, la institucionalidad laboral debe diseñarse de manera que se originen y potencien círculos virtuosos entre ambos factores (Weller y Roethlisberger, 2011). Esto implica, por un lado, reforzar la repercusión de una parte de las ganancias de productividad en las condiciones laborales (en forma de mejores salarios y otros beneficios monetarios, así como de aspectos no monetarios relacionados con la calidad del empleo) y, por otro lado, fortalecer aspectos objetivos y subjetivos de la calidad del empleo que redunden en una productividad creciente, como por ejemplo la capacitación laboral y otros factores que inciden en la satisfacción de los empleados y el compromiso personal con el trabajo. La regulación legal o por medio de la negociación colectiva se constituyen en mecanismos que favorecen esas metas.

El tercer eje relevante está vinculado a los esfuerzos que pueden realizar los Estados por desligar el acceso al

bienestar de la posición de las personas en el mercado laboral, lo que supone promover una mayor igualdad entre sectores. Las políticas de mercado de trabajo tienen un importante rol que desempeñar en ese campo, por ejemplo, como un instrumento que puede ser muy eficaz para combatir el desempleo en los sectores más afectados. Medidas como la intermediación laboral, la certificación de competencias, las iniciativas de capacitación (y, en el caso de los jóvenes, las centradas en la transición desde el sistema educativo hacia el mundo laboral), los seguros de desempleo y los mecanismos para facilitar el acceso de desempleados a redes no contributivas de protección son algunas de las opciones que permiten “desmercantilizar” el acceso al empleo. Idéntica función cumplen los programas de empleo público de emergencia y las obras públicas intensivas en mano de obra (CEPAL/OIT, 2009), así como las medidas de apoyo a la autogeneración de empleo. Particularmente importante es el desarrollo de políticas activas para facilitar el acceso al primer empleo, que introducen incentivos en el mercado laboral a través de acciones positivas orientadas a un mayor acceso juvenil al empleo.

Finalmente, los hallazgos presentados indican que los Estados de la región tienen todavía una gran deuda pendiente en cuanto a intervención en aspectos básicos de la protección y el bienestar que tradicionalmente se han dejado en manos de las familias. Avanzar hacia una “desfamiliarización” es fundamental para reducir las desigualdades que existen entre hombres y mujeres, pero también para combatir las crecientes brechas que, por el lastre que las anteriores diferencias han impuesto, se están abriendo entre las mujeres.

En muchos hogares latinoamericanos se mantiene una división del trabajo que adscribe al hombre el papel de jefe de hogar y generador de los ingresos requeridos para el mantenimiento de este, y a la mujer el papel de madre y ama de casa, lo que se traduce en profundas desigualdades entre hombres y mujeres. Y como el acceso de las familias a las distintas “soluciones” a esta tensión está muy estratificado por ingresos, la desigualdad entre las mujeres de mayores recursos y aquellas que se ubican en los quintiles inferiores de ingreso no solo no se ha reducido, sino que en algunos ámbitos ha aumentado.

En clara relación con lo anterior, la protección social puede desempeñar un papel clave, fortaleciendo la acción y la función redistributiva del Estado en materia de cuidado infantil. Es tarea de la protección social facilitar el acceso a una red de servicios de cuidado, que todavía es muy limitada en buena parte de los países de la región y debería perfeccionarse y extenderse (Pautassi y Rico, 2011). Pero las iniciativas tendrían que ir más lejos y promover la construcción de sistemas nacionales públicos para el cuidado.

De esa forma se lograría corregir hasta cierto punto la pauta desigual de la participación femenina en el mercado laboral. Pero, además, se reducirían los efectos que la crisis del cuidado está teniendo sobre el desempleo en mujeres de menores ingresos, así como la presencia predominante de estas en el empleo informal, al generarse las condiciones para que pudieran delegar las tareas de cuidado de dependientes en servicios especializados. La evidencia internacional respecto a los impactos positivos que la expansión de la oferta de servicios de cuidados tiene sobre la liberación de fuerza de trabajo femenina y su mejor inserción laboral (y consecuente mejora en los ingresos) es concluyente y reafirma la importancia de avanzar en esa dirección.

Los esfuerzos de los países de la región en materia de servicios de cuidado infantil deberían basarse en tres premisas. En primer lugar, es clara la necesidad de empezar focalizando las medidas en los sectores más vulnerables, que son los que sufren principalmente la tensión entre trabajo remunerado y no remunerado. Sin embargo, esta tensión está presente también en sectores de ingresos medios y medios-altos, obstaculizando la inserción en empleos del sector formal y de mejor calidad. En segundo lugar, parece necesario alinear la creación y ampliación de la oferta de servicios de cuidado con las necesidades de los distintos estratos productivos y, dentro de los sectores de baja productividad, con aquellos en que permitan lograr mejores resultados en términos de inserción laboral femenina. Finalmente, es preciso involucrar a las empresas en la oferta de cuidado, estableciendo la obligatoriedad de la provisión de servicios (Pautassi y Rico, 2011).

Capítulo IV

Protección social y desigualdad: Fisuras, rigideces, márgenes y oportunidades

A. Introducción

En los últimos años, se observan en gran parte de los países latinoamericanos avances significativos en materia de gasto social. Sin embargo, el lastre estructural que arrastra la región conduce a la cautela al momento de formular conclusiones sobre el desempeño de la protección social en el objetivo de romper los canales de transmisión de la desigualdad. Por ello, es importante construir una mirada que recoja el desempeño sistémico de la protección social frente a la desigualdad en América Latina, poniendo el foco en las fisuras y las rigideces de los sistemas de protección, pero también en los márgenes y oportunidades que se abren frente a las múltiples aristas de la desigualdad.

En el capítulo anterior se analizaron algunos de los mecanismos que parecen explicar la generación y reproducción de desigualdades laborales en América Latina. La combinación de alta heterogeneidad estructural, estratificación del descenso de la fecundidad y desigualdad

de género configura superposiciones viciosas en que tienden a coincidir pobreza, informalidad del trabajo, carga de cuidados y brechas generacionales. Se pone así de manifiesto la pesada ancla que debe levar la región para reducir la desigualdad en los mercados laborales.

Frente a este panorama, existen ciertas señales auspiciosas. Desde los años noventa se registra en la región un incremento sostenido del gasto público social. Este gasto ha permitido en muchos países fortalecer la cobertura y dotar de estabilidad a las políticas sociales, aun cuando en muchos casos el ingreso tributario de los Estados es muy limitado (CEPAL, 2010a y 2010b). Pero los hallazgos presentados en el capítulo anterior llaman a la cautela al formular conclusiones sobre el desempeño de la protección social ante el reto de quebrar los canales de transmisión de la desigualdad y sobre el margen que tiene para seguir avanzando en esa dirección.

En definitiva, el desafío para los sistemas de protección social de la región es enorme y muy complejo. Sin embargo, quizás como nunca antes, la coyuntura actual brinda una nueva oportunidad para reflexionar a fondo sobre la protección social y plantearse las transformaciones necesarias para que esta se convierta en un instrumento más eficaz para superar la herencia de la desigualdad.

Abordar esta tarea ahora es oportuno por varias razones.

En primer lugar, es indiscutible que en los últimos años ha existido un escenario favorable para poner en marcha estrategias de desarrollo de largo plazo. En la región se ha producido un sostenido crecimiento y un fortalecimiento de los equilibrios macroeconómicos. Además, se registra una evolución positiva de los principales indicadores socioeconómicos (véase el capítulo I).

En segundo lugar, América Latina todavía tiene chances de sacar provecho del bono demográfico generado por la reducción de la tasa de dependencia demográfica, es decir, el aumento de la proporción de población activa en relación a la población dependiente, lo que también impacta sobre el tamaño de los hogares (CEPAL, 2005 y 2009a; Bertranou, 2008).

En tercer lugar, también existe un escenario relativamente propicio para introducir cambios profundos en las políticas sociales. En los últimos años se observa que la ortodoxia de las décadas de 1980 y 1990 parece ir cediendo ante nuevas formas de pensar el rol del Estado frente a la protección social, la pobreza y la desigualdad (CEPAL, 2010a). La señal más clara de esto es que

en la última década se han puesto en marcha políticas destinadas a fortalecer el pilar no contributivo de la protección social y, en una lógica más universalista, se han realizado esfuerzos por extender derechos y prestaciones de salud y pensiones, así como la cobertura de servicios básicos (CEPAL, 2010b).

Finalmente, surge una nueva oportunidad con el rastro que la crisis de 2008 dejó en los instrumentos y políticas. Esta última crisis parece haber impulsado la orientación que venía incubándose en relación al nuevo rol del Estado, básicamente a través de políticas contracíclicas de contención de los costos sociales durante los períodos bajos de los ciclos y de fortalecimiento de las capacidades para reaccionar rápidamente a fin de evitar pérdidas de activos de los sectores más vulnerables (CEPAL, 2009b y 2010b; CEPAL/OIT, 2011). Esta herencia y los aprendizajes que se derivan de ella ofrecen un nuevo espacio para la innovación y la mejora en el campo de las políticas que no debería desaprovecharse.

En este capítulo se ofrecen pistas sobre cómo es posible aprovechar esta coyuntura, buscando aportar a la construcción de una mirada integradora y abordando —como se indicó antes— tanto los rasgos que dificultan la acción de los sistemas de protección social, como los espacios que se ofrecen para seguir dando pasos hacia la superación de los diversos aspectos de la desigualdad.

El capítulo se inicia con el análisis del alcance y la estratificación del vínculo contributivo a partir de la afiliación de los trabajadores a la seguridad social y su impacto sobre los hogares, para luego dedicar un apartado a examinar la protección de los adultos mayores en la etapa de retiro. A continuación, se analiza brevemente el alcance que está teniendo el pilar no contributivo y su grado de adecuación a los riesgos de la población. Asimismo, con el objetivo de avanzar hacia una mirada sistémica de estos pilares, se estudia su cobertura combinada, con foco en los sectores que en la actualidad están quedando fuera de esta combinación. En la última sección del capítulo se intenta mostrar el desempeño sistémico que la protección social está teniendo frente a distintas dimensiones de la desigualdad y plantear alternativas de políticas orientadas a corregir sus principales fisuras y omisiones.

B. Lazos contributivos y protección social en América Latina

El vínculo estrecho entre empleo y protección social viene enfrentando profundos desafíos en América Latina, donde pese a que el punto de partida ha estado muy lejos de aquel de los países europeos se apostó con firmeza por la emulación de ese modelo contributivo. La limitada cobertura de afiliación a la seguridad social y su asociación con el empleo formal hacen que sean justamente los hogares con mayor cantidad de miembros, jefatura femenina y rurales los que tienen menor acceso a la protección contributiva. Por otro lado, las insuficiencias de la cobertura de la seguridad social se reproducen en la etapa de la vejez. La cobertura de jubilaciones y pensiones es todavía muy limitada y deja más desprotegida a la población femenina y de menores recursos.

El origen de la estrecha vinculación entre empleo y protección social está en el proceso de consolidación de los estados de bienestar de postguerra en Europa. Dicho vínculo se basa en un modelo en que, en familias predominantemente biparentales, el hombre empleado tenía un trabajo que le permitía brindar sustento económico al grupo familiar, mientras las mujeres en forma mayoritaria se hacían cargo del cuidado de los niños y adultos mayores, accediendo a la protección social como dependientes. Así se consolidó la noción de protección asociada al empleo (Tokman, 2006, pág. 40) o basada en el empleo formal (Cecchini y Martínez, 2011), que buscaba proteger a los trabajadores y sus familias frente a riesgos derivados del empleo o la falta de este, el ciclo de vida y en particular el retiro, a través de las jubilaciones y pensiones, y las enfermedades, a través de la cobertura de salud.

Varias son las dificultades que se le han presentado a este modelo en el mundo desarrollado. A partir de los años setenta, el golpe que significó el aumento del precio del petróleo impactó en las capacidades fiscales de los gobiernos. Simultáneamente, se fueron transformado las estructuras productivas y ocupacionales (OCDE, 2007a), surgieron crecientes disparidades regionales en los mercados de trabajo, aumentó el desempleo y se diversificaron las formas de empleo (trabajo temporal, de medio tiempo, autoempleo) (OCDE, 1999 y 2010). Por último, la incorporación de las mujeres al mercado laboral –y por ende, la posibilidad de acceso a la

protección social como titulares– coincidió en el tiempo con profundas transformaciones en la composición de las familias (OCDE, 2007b), el descenso de la fecundidad y un aumento significativo de la esperanza de vida (OCDE, 2009). Estas transformaciones configuraron nudos de vulnerabilidad para los que el modelo clásico contributivo de empleo y protección no estaba preparado. Poco a poco, en muchos países se hizo notorio el desfase entre la arquitectura de bienestar vigente y los riesgos de la población (Esping-Andersen, 1999; Esping-Andersen y otros, 2002; Pierson, 2001).

Estas dificultades también han surgido, incluso agravadas, en el contexto latinoamericano. A pesar de la distancia existente con respecto a los países europeos en términos de urbanización, industrialización y consolidación de mercados laborales formales, en América Latina se optó por reproducir ese modelo contributivo (Tokman, 2006; Filgueira, 2007). Pero las dificultades han sido en este caso bastante más profundas porque las desigualdades estructurales que aquejan a la región no solo no han permitido el éxito de este modelo, sino que en varios planos lo han convertido en un catalizador de inequidades.

La alta heterogeneidad de la estructura productiva latinoamericana y su traslación a mercados laborales segmentados y asimétricos, la alta informalidad, los niveles de desempleo y la desigualdad asociada a la incorporación laboral de las mujeres se han traducido en forma bastante lineal en desigualdades en el acceso a la

protección social, reflejadas en una clara línea divisoria entre incluidos y excluidos de la dinámica contributiva, entre quienes quedan dentro y quienes quedan fuera de la principal vía de acceso a la protección del Estado.

Como resultado, en América Latina apenas se ha logrado una débil correlación entre empleo y protección social, que redundo no solo en serias dificultades de las políticas para atenuar desigualdades heredadas de la estructura productiva

y los mercados laborales, sino también en nuevos circuitos que, lejos de ello, parecen más bien contribuir a rigidizarlas. En esta sección se analizan algunos rasgos centrales de este modelo contributivo en dos aspectos: la protección de los trabajadores y sus familias (a partir del análisis de la afiliación a la seguridad social) y la protección a los adultos mayores (a partir de la cobertura de transferencias mediante jubilaciones y pensiones).

1. La protección de los trabajadores y sus familias ¹

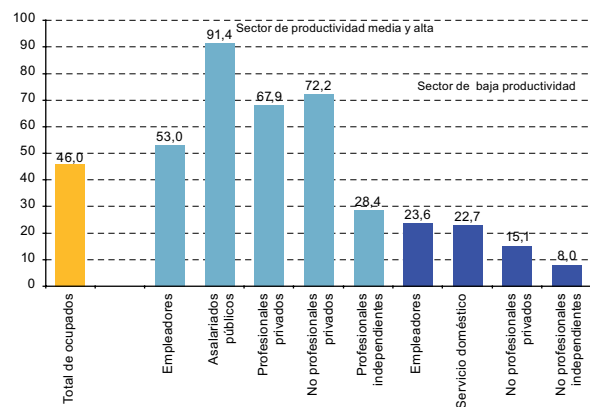
Desde hace ya bastante tiempo la evidencia viene mostrando que los mercados de trabajo de la región no han tenido capacidad para convertirse en la puerta de entrada privilegiada hacia los sistemas de protección social (Marco, 2004; CEPAL, 2006; Tokman, 2006; Bertranou, 2008). La

alta informalidad y la debilidad de las regulaciones y de la institucionalidad laboral condicionan el acceso de los ocupados a la cobertura de seguridad social en el empleo: en la actualidad menos de la mitad de los ocupados (46%) están afiliados a la seguridad social.

¹ Pese a que el acceso a servicios de salud es un componente fundamental del modelo contributivo de protección social (Mesa-Lago, 2005), como ha sido señalado por la CEPAL en distintas oportunidades, la organización del sector salud en la región involucra un abanico muy variado de instituciones, modelos de financiamiento y regulaciones, que combinan a actores públicos y privados con los sistemas de seguridad social. En algunos países el reconocimiento de la seguridad social como derecho universal de los trabajadores transformó la salud en un derecho igualmente universal. Esto ha resultado en una estructura de prestación heterogénea entre los sectores público y privado pero conjugados en un único sistema, que integra financiamiento de rentas generales con financiamiento no contributivo. El Brasil es un ejemplo paradigmático en este sentido. Un segundo modelo de financiamiento integra rentas generales y cotizaciones a la seguridad social. Dentro de este esquema se ubica, por ejemplo, el modelo de Costa Rica, en el que se establece un sistema integrado que mantiene el financiamiento contributivo y un nivel único de cobertura a cargo de la seguridad social (Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS)) que complementa las cotizaciones de trabajadores y empleadores, cubre un porcentaje de la contribución de los trabajadores independientes e integra a los sectores de menores recursos sin capacidad contributiva. Aunque con características diferentes (en términos de integración de pilar contributivo y pilar solidario) también los de Chile y Colombia pueden considerarse sistemas con cierto nivel de integración. Las reformas recientes impulsadas en México y el Uruguay van también en esta dirección. Un tercer tipo de sistema corresponde a aquellos con baja o nula articulación entre financiamiento público y seguridad social. En estos países conviven sistemas de seguridad social relativamente fragmentados. Países como Bolivia (Estado Plurinacional de), El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá presentan modelos más cercanos a este tipo (CEPAL, 2006). Esta diversidad de modelos dificulta la identificación de la cobertura sanitaria por vía contributiva sobre la base de las encuestas de hogares, fuente fundamental para el análisis en este capítulo. Por esta razón, en esta sección se toma como referencia la afiliación a la seguridad social (y no la cobertura sanitaria) y se trabaja con el supuesto de que ella permite el acceso a cobertura sanitaria de algún tipo para los trabajadores y sus familias.

La afiliación es especialmente alta entre los asalariados que trabajan en los sectores público (91,4%) y privado (67,9% en el caso de profesionales y 72,2% en el caso de no profesionales); entre los empleadores del sector formal alcanza a poco más de la mitad (53%) y entre los profesionales independientes llega apenas al 28,4%. Entre los ocupados en sectores de baja productividad, la afiliación a la seguridad social alcanza al 23,6% en el caso de los empleadores (pequeñas y medianas empresas) y al 22,7% en el caso de los ocupados en el servicio doméstico y desciende a niveles mínimos entre los trabajadores independientes no calificados (8%) (véase el gráfico IV.1).

Gráfico IV.1
AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): POBLACIÓN OCUPADA AFILIADA A LA SEGURIDAD SOCIAL, POR SECTOR EN QUE TRABAJA, PROMEDIO PONDERADO, 2009
(En porcentajes)

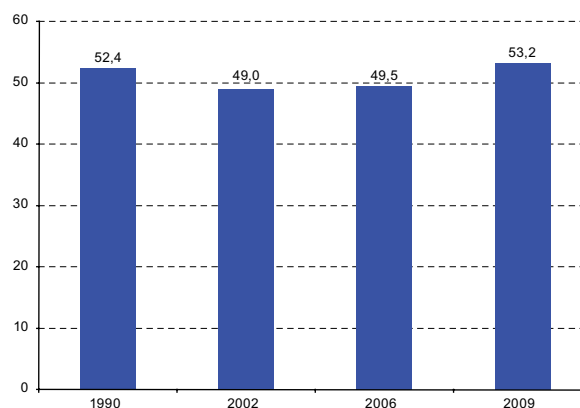


Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

La cobertura de seguridad social está fuertemente asociada a la formalidad del empleo². Este hecho es reflejo del funcionamiento dual que resulta de la articulación de dos eslabones centrales en la cadena de la desigualdad, ya explorados antes: heterogeneidad estructural y segmentación de mercados laborales (véase el capítulo III). Pero esta raíz estructural no explica el hecho de que, aun cuando el empleo formal se ha incrementado levemente en las últimas dos décadas, esto no se ha traducido en un aumento similar de la afiliación a la seguridad social, que en 2009 registró un nivel cercano pero todavía inferior al de 1990. Distintos factores han contribuido, sin duda, a este desfase, como los ciclos económicos, los sesgos en la creación de nuevos empleos y la debilidad de la regulación y de la institucionalidad laboral, en especial en lo referente a las reglas y condiciones para la formalización y los aportes a la seguridad social³.

Un dato ilustrativo en este sentido es que al considerar los 16 países para los cuales se tienen datos de cuatro mediciones (1990, 2002, 2006 y 2009), se observa que la afiliación a la seguridad social descendió entre 1990 y 2002 (pasando de 52,4% a 49%) y desde entonces comenzó a incrementarse (alcanzado en 2009 un 53,2%, que incluso supera levemente el nivel de 1990) (véase el gráfico IV.2). Sin embargo, esta tendencia no fue idéntica en los sectores formal e informal. En el período de baja, la proporción de ocupados con protección contributiva en el sector de baja productividad descendió más que en el sector de productividad media y alta. Y cuando el ciclo económico fue permitiendo una recuperación de la afiliación, el sector formal se recuperó con más fuerza, mientras que en el sector informal este proceso fue bastante más moderado. Como resultado de esta evolución diferencial, el acceso a la protección social se ha convertido en un factor adicional que contribuye a aumentar la distancia entre ambos sectores (véase el gráfico IV.3).

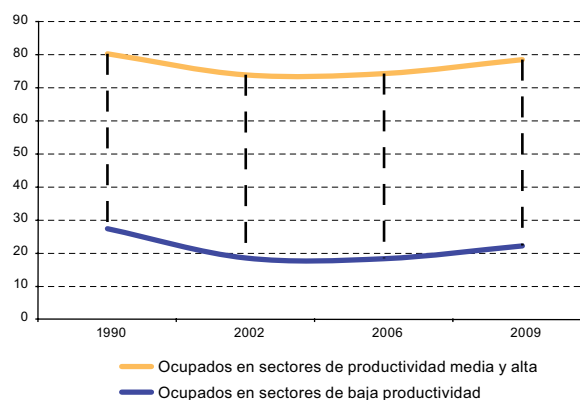
Gráfico IV.2
AMÉRICA LATINA (16 PAÍSES): POBLACIÓN OCUPADA
AFILIADA A LA SEGURIDAD SOCIAL, PROMEDIO PONDERADO,
ALREDEDOR DE 1990, 2002, 2006 Y 2009^a
(En porcentajes)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

^a Promedio ponderado de los países que tienen información de todos los períodos considerados. Se excluye a la Argentina y Colombia.

Gráfico IV.3
AMÉRICA LATINA (16 PAÍSES): POBLACIÓN OCUPADA
AFILIADA A LA SEGURIDAD SOCIAL POR SECTOR
EN QUE TRABAJA, PROMEDIO PONDERADO,
ALREDEDOR DE 1990, 2002, 2006 Y 2009^a
(En porcentajes)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

^a Promedio ponderado de los países que tienen información de todos los períodos considerados. Hasta 2006 no se incluye a Colombia, ya que en los datos no se distinguía el tamaño de la empresa. Se excluye a la Argentina y Colombia.

² Tal como en el capítulo anterior, para facilitar el argumento y la lectura se utilizan aquí indistintamente las clasificaciones de trabajadores en sectores de baja productividad y en sectores de media y alta productividad o bien trabajadores formales e informales. Como se adelantara en el capítulo III, los datos utilizados se basan en la primera clasificación (desarrollada por la CEPAL). Aunque se considera que esta es una buena aproximación a las nociones de formalidad e informalidad, es claro que dimensiones importantes del fenómeno de la informalidad no están siendo consideradas en los datos aquí utilizados.

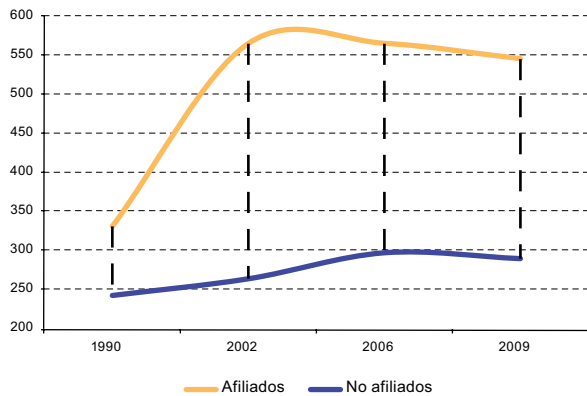
³ Aunque con distinto nivel de desarrollo, existen en la región algunas experiencias interesantes tendientes a avanzar hacia una mayor formalización. En el Brasil, por ejemplo, se han desarrollado políticas para la formalización de microempresas (Supersimples) y de trabajadores no profesionales independientes (microemprendedor individual (MEI)).

Es relevante recordar que este comportamiento dual que divide a los sectores de mayor y de menor productividad no es neutro y que la frontera que separa el acceso a la seguridad social tiene sesgos importantes.

El primer sesgo evidente es que la afiliación a la seguridad social se asocia a mayores ingresos: en la actualidad, los ocupados que no están afiliados perciben remuneraciones equivalentes a poco más de la mitad de las de aquellos que sí están afiliados (288 dólares

frente a 545 dólares, respectivamente). Esta distancia es algo menor que la registrada en 2002 y 2006, pero se encuentra todavía muy por encima de la brecha de ingresos que se asociaba al vínculo contributivo a inicios de los años noventa (cuando la remuneración media de los no afiliados equivalía al 73% de la de los afiliados) (véase el gráfico IV.4).

Gráfico IV.4
AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): TENDENCIAS DE LAS REMUNERACIONES REALES DE LOS OCUPADOS EN ÁREAS URBANAS, POR AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL, PROMEDIO PONDERADO, ALREDEDOR DE 1990, 2002, 2006 Y 2009^a
(En dólares de 2005)

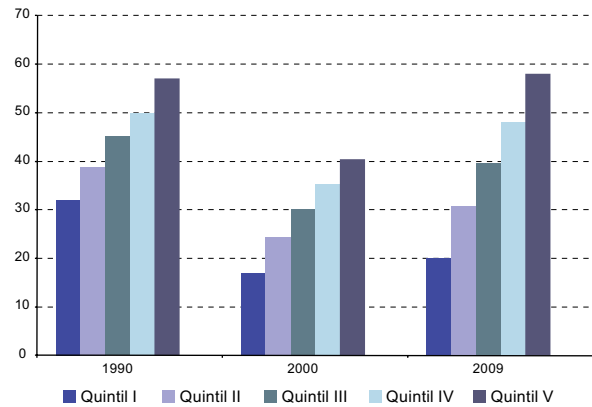


Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.
^a Promedio ponderado de los países que tienen información de todos los períodos considerados.

Pero más allá de la evolución agregada de las remuneraciones medias y la reciente disminución de la brecha entre afiliados y no afiliados, la asociación de los ingresos a la afiliación muestra una pauta extremadamente rígida. Si se considera un grupo de países para los que se cuenta con información de 1990, 2000 y 2009, se observa que después del notorio descenso de la afiliación a la seguridad social en los años noventa, la posterior recuperación durante la última década no redundó en una disminución de la estratificación del acceso a la seguridad social. Por el contrario, la brecha entre los sectores de mayores y de menores ingresos parece haberse ampliado. Dicho de otro modo, en 1990 la proporción de afiliados del quintil I representaba el 56% de la proporción de afiliados del quintil V. En 2000, esta relación empeoró (42%) pero esto se dio en un contexto de declive generalizado de la afiliación. Sin embargo, los datos de 2009 confirman lo señalado en párrafos anteriores: la recuperación agregada fue notoria, pero afectó en mucho menor medida a los

trabajadores del primer quintil que al resto, lo que contribuyó a profundizar la brecha entre los sectores de mayores y de menores ingresos (ese año, la proporción de afiliados del quintil I representaba apenas el 34% de la proporción de afiliados del quintil V) (véase el gráfico IV.5).

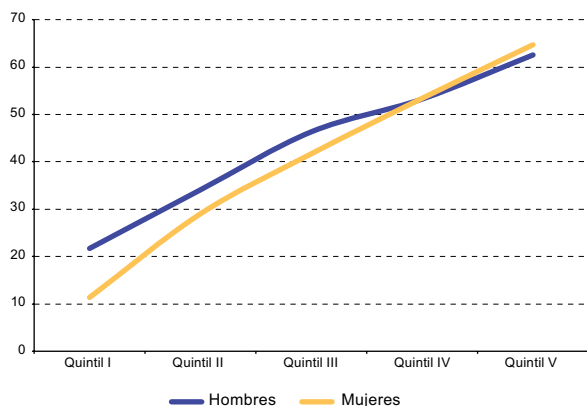
Gráfico IV.5
AMÉRICA LATINA (9 PAÍSES): POBLACIÓN OCUPADA AFILIADA A LA SEGURIDAD SOCIAL, POR QUINTILES DE INGRESO, PROMEDIO SIMPLE, ALREDEDOR DE 1990, 2000 Y 2009^a
(En porcentajes)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.
^a No incluye datos de Colombia, Guatemala, Honduras, Panamá, el Paraguay, el Perú, la República Dominicana, el Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de). 1990: los datos de Bolivia (Estado Plurinacional de) y México corresponden a 1989 y los de Nicaragua a 1993. 2000: los datos de la Argentina, el Brasil, Costa Rica y El Salvador corresponden a 1999 y los de Nicaragua a 2001. 2009: los datos de Bolivia (Estado Plurinacional de) corresponden a 2007 y los de México a 2008. Los datos de la Argentina corresponden al Gran Buenos Aires, los de Bolivia (Estado Plurinacional de) a ocho ciudades principales y El Alto, y los del Ecuador a las áreas urbanas.

El otro sesgo relevante se asocia a la desigualdad de género. La feminización del empleo informal analizada en el capítulo anterior explica que en los sectores de menores ingresos los niveles de afiliación de las mujeres ocupadas se ubiquen casi 10 puntos por debajo de los niveles de los hombres ocupados, mientras que la brecha tiende a disminuir a medida que aumentan los ingresos, desapareciendo prácticamente entre los ocupados de los quintiles más altos (véanse los gráficos IV.6 y IV.7). Como resultado, no solo los valores agregados de afiliación son menores entre las trabajadoras que entre los trabajadores —lo que afecta a las primeras en la etapa activa y repercute también negativamente sobre sus posibilidades de acceso a jubilaciones—, sino que además entre ellas el lazo contributivo se distribuye en forma más desigual. Los riesgos y las desigualdades para las mujeres están claramente concentrados y superpuestos (CEPAL, 2010b).

Gráfico IV.6
AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): POBLACIÓN OCUPADA AFILIADA A LA SEGURIDAD SOCIAL, POR QUINTILES DE INGRESO Y SEXO, PROMEDIO PONDERADO, 2009
 (En porcentajes)



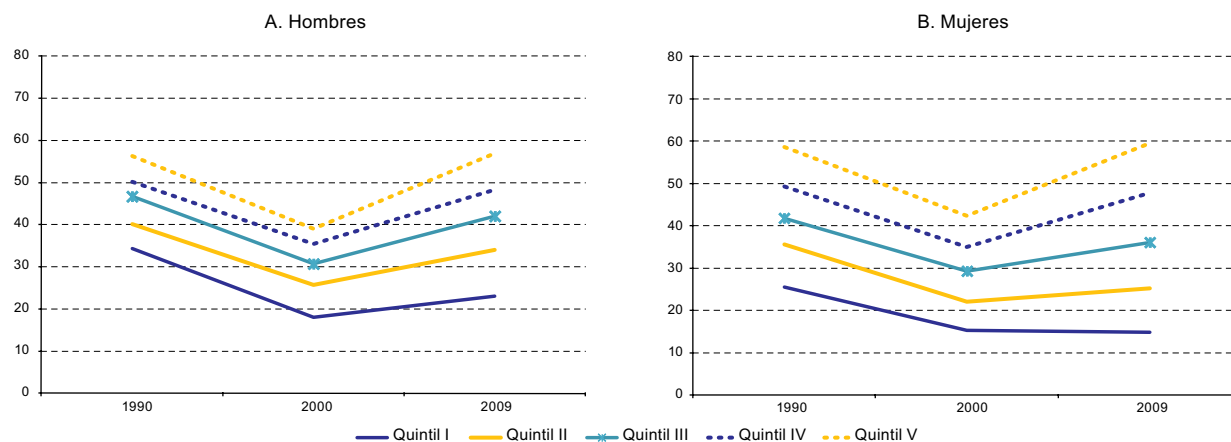
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

La mirada de largo plazo en relación a este fenómeno indica que, en los últimos 20 años, la brecha que separa a las mujeres ocupadas de mayores ingresos de aquellas

que viven en hogares del quintil inferior se ha ensanchado, muy especialmente en el período de recuperación de la cobertura de seguridad social entre la población ocupada: la afiliación en el quintil I pasó de representar el 43% de la del quintil V en 1990, al 36% en 2000 y el 24% en 2009. Esta tendencia también se verifica entre los hombres, pero en forma menos marcada: en este caso, la afiliación en el quintil I pasó de ser equivalente al 60% de la del quintil V en 1990, al 46% en 2000 y el 40% en 2009. En definitiva, tienden a ensancharse las brechas existentes tanto entre los hombres como entre las mujeres, pero entre estas el proceso adquiere niveles mucho más preocupantes (véase el gráfico IV.7).

La menor participación laboral, las tasas más altas de desempleo, los sesgos en algunas regulaciones laborales y la ausencia de políticas que permitan conciliar las demandas del trabajo remunerado y no remunerado inciden negativamente en la cobertura de protección contributiva de las mujeres (CEPAL, 2010d). De esta manera, se reproducen en forma ampliada las múltiples brechas laborales que separan a hombres y mujeres, y que han contribuido a ensanchar la desigualdad entre las mujeres.

Gráfico IV.7
AMÉRICA LATINA (9 PAÍSES): POBLACIÓN OCUPADA AFILIADA A LA SEGURIDAD SOCIAL, POR QUINTILES DE INGRESO Y SEXO, PROMEDIO SIMPLE, ALREDEDOR DE 1990, 2000 Y 2009^a
 (En porcentajes)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.
^a No incluye datos de Colombia, Guatemala, Honduras, Panamá, el Paraguay, el Perú, la República Dominicana, el Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de). 1990: los datos de Bolivia (Estado Plurinacional de) y México corresponden a 1989 y los de Nicaragua a 1993. 2000: los datos de la Argentina, el Brasil, Costa Rica y El Salvador corresponden a 1999 y los de Nicaragua a 2001. 2009: los datos de Bolivia (Estado Plurinacional de) corresponden a 2007 y los de México a 2008. Los datos de la Argentina corresponden al Gran Buenos Aires, los de Bolivia (Estado Plurinacional de) a ocho ciudades principales y El Alto, y los del Ecuador a las áreas urbanas.

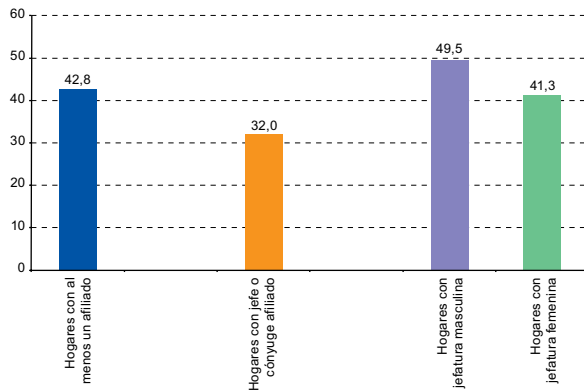
El tercer sesgo importante se vincula con el hecho de que, más allá de la cobertura de los ocupados, la estructura contributiva está diseñada no solo para otorgar protección a los trabajadores, sino también para proteger de alguna forma a sus familias a través del aseguramiento de salud. En este sentido, conviene recordar que, de acuerdo con lo

analizado en el capítulo anterior, quienes acceden en mayor proporción a la protección social no son solamente los trabajadores de mayor nivel educativo y mejores salarios, sino también aquellos que cuentan con un menor número de dependientes (o viven en hogares menos numerosos). En contraste, son predominantemente los trabajadores

de menores ingresos, las mujeres ocupadas con hijos pequeños, los trabajadores más jóvenes y de hogares más numerosos quienes no acceden a la seguridad social.

El análisis de los datos desde la óptica de los hogares muestra niveles más bajos de cobertura de seguridad social: únicamente en el 43% de los hogares existe al menos un miembro que está afiliado y solo en el 32% de los hogares está afiliado el jefe de hogar o su cónyuge. Además, esta perspectiva pone de manifiesto nuevas brechas de género y generacionales. En efecto, la cobertura de seguridad social en los hogares con jefatura masculina (49,5%) es significativamente mayor al valor medio, mientras que en los hogares con jefatura femenina alcanza un nivel menor (41,3%) (véase el gráfico IV.8).

Gráfico IV.8
AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): HOGARES CON ALGÚN TIPO DE AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL, POR SEXO DEL JEFE, PROMEDIO SIMPLE, ALREDEDOR DE 2009
(En porcentajes)

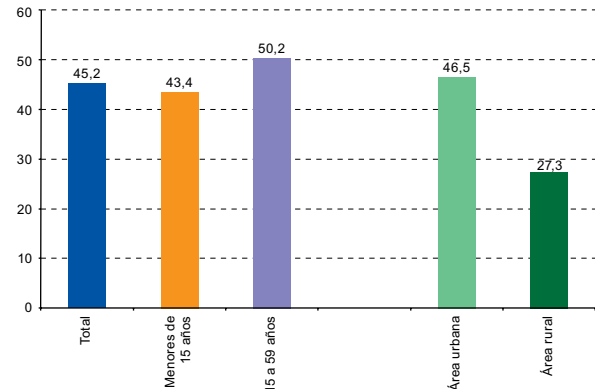


Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

Si se analiza la proporción de niños que viven en hogares cubiertos por la protección contributiva en comparación con la población activa, se observa que los primeros se encuentran en clara desventaja. La mitad (50,2%) de la población entre 15 y 59 años vive en hogares con al menos una persona afiliada a la seguridad social, valor que entre la población con menos de 15 años desciende al 43,4% (véase el gráfico IV.9). Esta brecha se suma al menor acceso femenino y juvenil al empleo formal y protegido, a la regresividad con que funciona la dinámica contributiva y a la estratificación de las transformaciones demográficas, principalmente del descenso de la fecundidad (CEPAL, 2010b).

Por otra parte, los datos confirman una vez más las disparidades territoriales asociadas a la cobertura del modelo contributivo: el 46,5% de la población urbana vive en hogares donde se cuenta con al menos un miembro afiliado a la seguridad social, mientras que en el medio rural apenas el 27,3% de la población se encuentra en esta situación (véase el gráfico IV.9).

Gráfico IV.9
AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): PERSONAS EN HOGARES CON ALGÚN TIPO DE AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL, POR EDAD Y ÁREA GEOGRÁFICA, PROMEDIO SIMPLE, ALREDEDOR DE 2009
(En porcentajes)



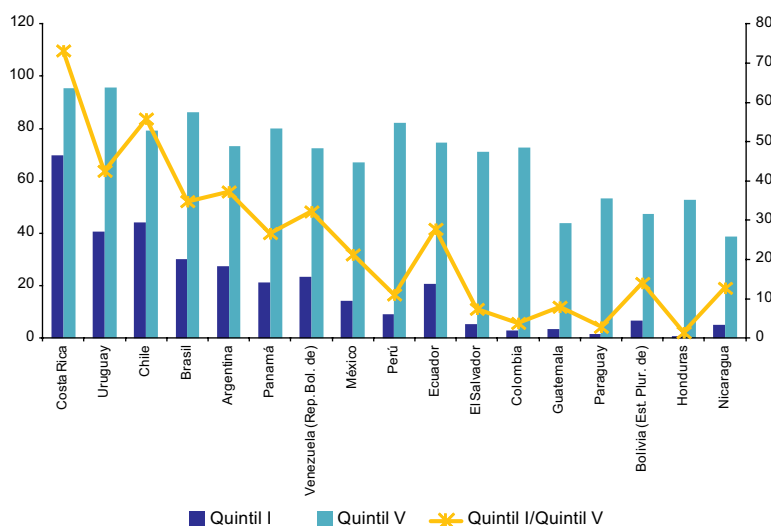
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

En definitiva, factores como la jefatura femenina y la edad de los miembros del hogar están estrechamente relacionados con la dinámica contributiva y con las posibilidades de acceso a la protección social por esa vía. No es casualidad, por tanto, que la desigualdad opere allí de manera exacerbada y que la distancia entre sectores de ingresos más altos y más bajos sea mayor en los hogares con jefatura femenina que en aquellos con jefatura masculina, así como en la población infantil y adolescente (de 0 a 15 años de edad) que en el grupo de 15 a 59 años de edad.

En el caso de la población menor de 15 años, la mirada a la desigualdad en los distintos países de la región permite observar que, como es esperable, esta tiende a aumentar considerablemente en los países donde los sistemas contributivos están menos extendidos. Pero incluso en aquellos con sistemas más consolidados (con excepción de Costa Rica) la distancia entre el quintil de menores ingresos y los restantes cuatro refleja un comportamiento fuertemente estratificado, que castiga especialmente a los más desfavorecidos (véase el gráfico IV.10).

En el Uruguay, por ejemplo, la proporción de menores de 15 años que viven en hogares del quintil inferior de ingresos donde hay al menos un afiliado a la seguridad social equivale a apenas el 40% de la proporción que se encuentra en igual situación en el quintil superior de ingresos. En el Perú la cobertura del quintil superior equivale a 9 veces la del quintil inferior. En Colombia el valor que se registra en el quintil superior equivale a 26 veces el del quintil inferior y en el Paraguay a 35 veces (véase el gráfico IV.10).

Gráfico IV.10
AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): POBLACIÓN MENOR DE 15 AÑOS DE EDAD QUE VIVE EN HOGARES CON ALGÚN TIPO DE AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL, POR QUINTILES EXTREMOS DE INGRESO, ALREDEDOR DE 2009^a
 (En porcentajes)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.
^a No se incluyen datos de la República Dominicana. Los datos de Guatemala y México corresponden a 2006, los de Honduras a 2007 y los de Venezuela (República Bolivariana de) a 2008.

2. La protección de los adultos mayores vía transferencias: Entre la base contributiva y la compensación no contributiva

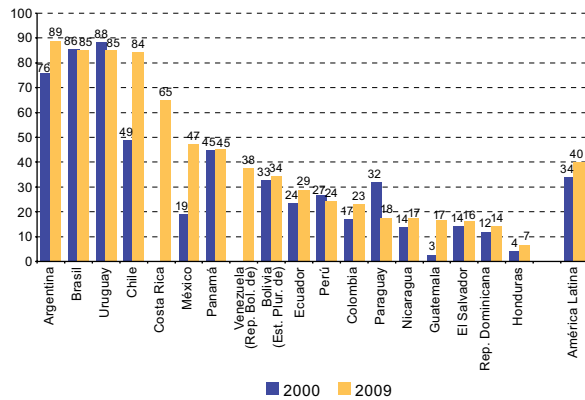
En el diseño del modelo contributivo, la protección social de los adultos mayores se derivaba del beneficio diferido del vínculo con el empleo, que garantizaba la posibilidad de un reemplazo salarial en la etapa de retiro. De este modo, en principio, la protección en esta etapa de la vida sigue la misma lógica que la protección contributiva en edades activas: las limitaciones e insuficiencias de la cobertura de la seguridad social se reproducen en la etapa de la vejez. El resultado de esta lógica es que, como promedio simple de los países de la región, en 2009 apenas cuatro de cada diez latinoamericanos de 65 años y más (el 40%) recibía una jubilación o pensión (véase el gráfico IV.11).

De los datos se desprende que existen entre los países grandes distancias en las coberturas de jubilaciones y pensiones. En los países del cono sur la cobertura supera el 80% (en la Argentina alcanza incluso el 89%), en Costa Rica llega al 65%, en México y Panamá se encuentra levemente por debajo del 50%. En un segundo grupo, con coberturas entre el 20% y el 40%, se encuentran Venezuela (República Bolivariana de), Bolivia (Estado Plurinacional de), el Ecuador, el Perú y Colombia. Finalmente, en el

Paraguay, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, la República Dominicana y Honduras la proporción de personas de 65 años y más que perciben una jubilación o pensión no llega al 20% (en Honduras, de hecho, apenas alcanza al 7% de la población) (véase el gráfico IV.11). Así, con la excepción de muy pocos países, la posibilidad de ser un jubilado está fuera del horizonte para gran parte de los adultos mayores latinoamericanos. Más remota aún parece la posibilidad de ser un jubilado exclusivo (Bertranou, 2008).

Frente a este panorama, es preciso señalar que en la última década se registra un aumento considerable del porcentaje de población de 65 años y más cubierta por jubilaciones o pensiones. En 2000, el promedio de cobertura de los países era de 34%. Si se analiza la evolución en la última década, se observa que en 11 de los 16 países de los que se cuenta con información se registran aumentos de la cobertura. Dentro de este grupo, en Chile y la Argentina los incrementos fueron muy notorios. En contrapartida, en el Brasil, el Uruguay, el Perú y el Paraguay se registraron descensos, pero solo en el último caso es posible observar una reducción significativa de la cobertura.

Gráfico IV.11
AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): POBLACIÓN DE 65 AÑOS
Y MÁS QUE RECIBE JUBILACIÓN O PENSIÓN,
ALREDEDOR DE 2000 Y 2009^a
(En porcentajes)



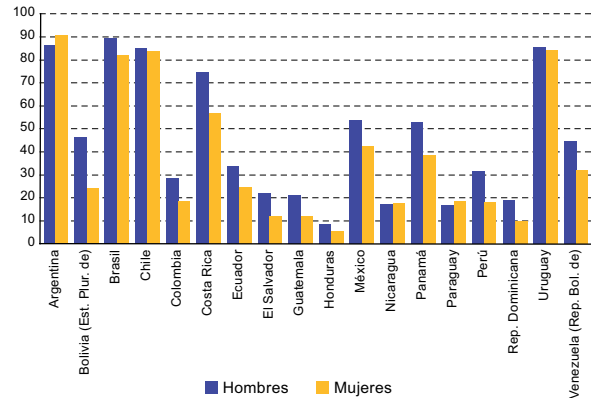
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.
^a Promedio simple de los países que tienen información de los dos años considerados. Los datos de Bolivia (Estado Plurinacional de) corresponden a 2007 y los de México y Venezuela (República Bolivariana de) a 2008. Los datos de la Argentina corresponden al Gran Buenos Aires, los de Bolivia (Estado Plurinacional de) a ocho ciudades principales y El Alto, los del Ecuador a las áreas urbanas, los del Paraguay a Asunción y el Departamento Central y los del Uruguay a áreas urbanas.

También es importante tener en cuenta que los valores graficados incluyen transferencias y beneficios compensatorios no contributivos que varios países de la región han desplegado para compensar los déficits de aportes a la seguridad social de las mujeres en su etapa activa, así como para hacer frente a la alta precariedad de aquellos sectores que fueron quedando excluidos del modelo contributivo⁴. Estos componentes han redundado en que, en algunos países, la traslación de las disparidades que existen entre hombres y mujeres en la etapa activa no sea del todo lineal. Sin embargo, no parecen ser suficientes para eliminar la distancia que separa sus posibilidades de acceso a la protección social. Tal distancia está presente prácticamente en todos los países de la región (véase el gráfico IV.12).

La diferencia entre los valores correspondientes a mujeres y hombres es el resultado evidente de la combinación de distintos factores, varios de ellos adelantados en el capítulo III y en la sección anterior del presente capítulo. Las inserciones laborales dispares, la feminización de la informalidad, los déficits de afiliación a la seguridad social en algunos sectores con mayor presencia femenina y las tasas todavía bajas de actividad de las mujeres son algunos de los elementos que limitan las posibilidades de las mujeres de contar con protección al llegar la vejez.

⁴ Las transferencias contributivas y no contributivas son analizadas aquí en conjunto dentro de la corriente de transferencias de jubilaciones y pensiones debido a que no pueden ser discriminadas en las encuestas de hogares de todos los países.

Gráfico IV.12
AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): POBLACIÓN DE 65 AÑOS
Y MÁS QUE RECIBE JUBILACIÓN O PENSIÓN,
POR SEXO, ALREDEDOR DE 2009^a
(En porcentajes)



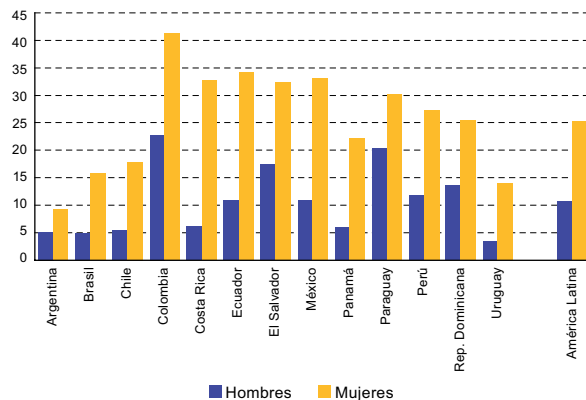
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.
^a Los datos de Bolivia (Estado Plurinacional de) corresponden a 2007 y los de México y Venezuela (República Bolivariana de) a 2008. Los datos de la Argentina corresponden al Gran Buenos Aires, los de Bolivia (Estado Plurinacional de) a ocho ciudades principales y El Alto, los del Ecuador a las áreas urbanas, los del Paraguay a Asunción y el Departamento Central y los del Uruguay a áreas urbanas.

Pero no todo se debe al mercado laboral. En muchos países de la región, las leyes previsionales contienen disposiciones expresamente discriminatorias. El uso de tablas actuariales en que se establecen distinciones entre la expectativa de vida masculina y femenina para el cálculo de las prestaciones sigue vigente. De esta forma, una de las pocas ventajas de las mujeres se transforma en un perjuicio que se agrava en los países donde la jubilación femenina es más temprana, ya que un monto acumulado menor dividido por un número mayor de años resulta en una pensión inferior. Además, la gran proporción de mujeres que se dedican en forma exclusiva al trabajo de cuidado, crianza y doméstico quedan excluidas del sistema previsional, salvo que hayan estado casadas o hayan convivido con un varón por largo tiempo y siempre que se cumplan una serie de requisitos tales como no haber contraído un nuevo matrimonio o tener hijos con el cotizante o pensionado. La opción que queda para estas mujeres es recibir una pensión asistencial que, cuando existe, suele representar un monto significativamente más bajo (Marco, 2004).

Otra muestra clara del significado de las disparidades de género en el acceso a jubilaciones y pensiones es la considerable proporción de adultas mayores que no reciben ingresos propios. En efecto, el 25% de las mujeres mayores de 60 años que residen en áreas urbanas se encuentran en esta situación. Especialmente preocupante es el porcentaje de mujeres sin ingresos propios en países como Colombia,

el Ecuador, El Salvador y México, y también llama la atención la fuerte disparidad de género que se observa incluso en aquellos países donde la cobertura de jubilaciones y pensiones es relativamente alta, como el Brasil, Chile, Costa Rica o el Uruguay (véase el gráfico IV.13).

Gráfico IV.13
AMÉRICA LATINA (13 PAÍSES): POBLACIÓN DE 60 AÑOS
Y MÁS DE ÁREAS URBANAS QUE NO RECIBE INGRESOS
PROPIOS, POR SEXO, ALREDEDOR DE 2009^a
(En porcentajes)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de datos publicados por el Observatorio de igualdad de género de América Latina y el Caribe.

^a Promedio simple de los países. Proporción de la población de 60 años y más que no percibe ingresos monetarios individuales (sueldos, salarios y ganancias de los trabajadores independientes provenientes del mercado de trabajo; jubilaciones y pensiones; transferencias entre hogares y provenientes del exterior; compensaciones sociales otorgadas por el gobierno; inversiones a plazo fijo y renta de la propiedad; otras percepciones de ingresos). Los datos de México y Venezuela (República Bolivariana de) corresponden a 2008.

Las dificultades para lograr la autonomía económica en esta etapa de la vida impactan en última instancia sobre el bienestar, ya que condicionan en forma muy diferencial la posibilidad de contar con ingresos —un activo fundamental para acceder a la vez a alimentación, bienes básicos de consumo, servicios de salud, servicios de cuidado, pago de vivienda— cuando la posibilidad de obtenerlos por la vía del empleo disminuye (Mesa-Lago, 2009). Para una gran proporción de adultos mayores el empleo no es una opción y, muy especialmente, no es una opción posible o viable para las mujeres. Como es esperable, las tasas de empleo de la población masculina de 65 años y más son más altas allí donde los sistemas de jubilaciones y pensiones tienen menor cobertura. Sin embargo, salvo algunas excepciones, en esos mismos países el empleo femenino en estas edades se mantiene en niveles relativamente bajos. Y cuando las mujeres en esta etapa de la vida trabajan en empleos remunerados, en forma mayoritaria lo hacen en sectores de baja productividad prácticamente en todos los estratos sociales. Esto las deja en una situación de especial vulnerabilidad, sin acceso a la protección social y a la cobertura sanitaria por la vía del empleo.

La evidencia analizada hasta aquí muestra cómo las desigualdades de las trayectorias laborales y la estructuración de los sistemas de protección social producen nuevas desigualdades en el acceso a bienestar en la vejez. Los sesgos superpuestos de estas desigualdades se combinan —y a veces se profundizan— con sistemas de pensiones basados en marcos legales y supuestos que, lejos de corregir los sesgos, los perpetúan. Varios puntos deben ser resaltados a partir de esta reflexión.

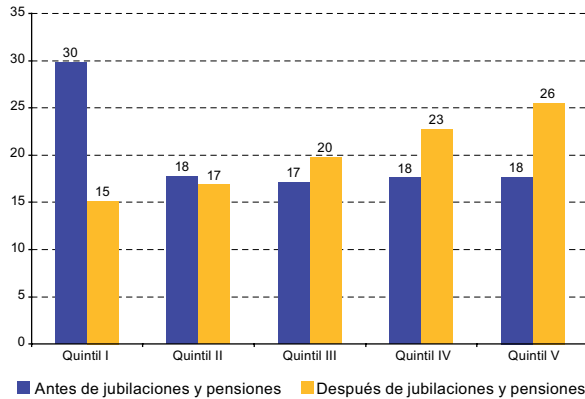
El primero es que las desigualdades de género que se arrastran desde la etapa activa se traducen en forma relativamente lineal en la vejez. La matriz “familista” que está en la base del diseño de los regímenes de bienestar de la región estructura desigualdades entre hombres y mujeres, en especial en los países con menor desarrollo (Martínez Franzoni, 2008; Bertranou, 2008). Estas tendencias operan en un contexto demográfico en que el proceso de envejecimiento de la población contribuye a que cada vez existan más adultos mayores —y sobre todo mujeres— que viven solos y por más tiempo (Huenchuan, 2009). Como resultado, las crecientes demandas de cuidado en la vejez plantean desafíos inéditos a los sistemas de protección social, al acceso a servicios básicos, especialmente salud, y al diseño de las políticas orientadas a la población adulta mayor en general (Huenchuan y Guzmán, 2007; Huenchuan, 2009; Jaccoud, 2010).

El segundo punto se refiere a cómo operan los sistemas de jubilaciones y pensiones en la reducción de la desigualdad de ingresos que se observa en la edad activa. Como ya fuera destacado en la edición de 2009 del *Panorama social de América Latina*, algunos países están realizando esfuerzos significativos para garantizar ingresos en esta etapa de la vida. Estos esfuerzos son altamente progresivos al considerar la distribución primaria del ingreso, en particular en aquellos países donde los sistemas de jubilaciones y pensiones han alcanzado mayor desarrollo (CEPAL, 2010b). No sorprende que el posicionamiento por nivel de ingreso de los adultos mayores en el conjunto de la población mejore en forma significativa tras la recepción de estas transferencias. Una simulación de cómo sería la distribución de las personas de 65 años y más por quintiles de ingreso si carecieran de jubilación y/o pensión muestra que el 30% de ellas se ubicarían en el primer quintil si en sus hogares no se contara con esas transferencias y que, debido al efecto de esos recursos, apenas el 15% se encuentra efectivamente dentro del 20% más pobre de la población (véase el gráfico IV.14).

El tercer punto se refiere a los esfuerzos que se deben hacer en los países de la región en materia de gasto social para reducir las desigualdades en esta etapa de la vida, así como en lo referente a la orientación de

ese gasto y a las reglas que están en la base del diseño de la protección social a la vejez (Prado y Sojo, 2010). La información presentada contribuye al debate que surge de este cuestionamiento en al menos dos planos.

Gráfico IV.14
AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE 65 AÑOS Y MÁS EN QUINTILES DE INGRESO ANTES Y DESPUÉS DE JUBILACIONES Y PENSIONES, ALREDEDOR DE 2009^a
 (En porcentajes)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

^a Promedio simple de los países. Los datos de Bolivia (Estado Plurinacional de) corresponden a 2007 y los de México y Venezuela (República Bolivariana de) a 2008. Los datos de la Argentina corresponden al Gran Buenos Aires, los de Bolivia (Estado Plurinacional de) a ocho ciudades principales y El Alto, los del Ecuador a las áreas urbanas, los del Paraguay a Asunción y el Departamento Central y los del Uruguay a áreas urbanas.

Por un lado, se ilustran desde otro ángulo las limitaciones que presenta la incompleta adaptación realizada en América Latina del modelo de protección basada en el empleo formal. La mayor parte de los adultos mayores latinoamericanos no transitan de la condición de empleo cubierto a la jubilación contributiva; la permanencia en el mercado de trabajo es frecuente y suele estar caracterizada por altos niveles de informalidad.

Por otro lado, se hacen evidentes los problemas futuros de los sistemas de protección social a la vejez, en la medida en que dichos problemas se vinculan a falencias que se siguen acumulando a lo largo de todo el ciclo de vida. Así, la pobreza y la vulnerabilidad en la niñez, las trayectorias laborales atravesadas por la baja productividad y las dificultades de acceso a la protección social en la etapa activa, se traducirán en generaciones de adultos mayores más vulnerables.

Las restricciones a la cobertura contributiva en la vejez ejercen una presión creciente y cada vez más difícil de sostener sobre el gasto social. Si a ello se suma el proceso de envejecimiento de la población, se hacen aun más evidentes y urgentes los desafíos que se les plantean a los sistemas de protección social de los países de la región. Para sostener a las generaciones de adultos mayores a través del tiempo, la región debe invertir sin demora en su población más joven, ya que será la productividad de esta la que permita financiar y sostener los dispositivos de protección social del futuro.

C. El pilar no contributivo: Alcance y adecuación a riesgos de las transferencias asistenciales⁵

Si se analiza exclusivamente a través de transferencias, el pilar no contributivo de la protección social cubre alrededor del 12% de los hogares y representa el 0,25% del PIB. Pese a las limitantes en materia de cobertura, estas transferencias parecen apuntar en efecto a los riesgos de la población y tienen un peso significativo en los hogares más pobres, confirmando una distribución altamente progresiva. Dentro de los hogares del primer quintil de ingresos, la protección de este pilar llega en mayor medida a aquellos con jefatura femenina y presencia de población infantil y adolescente.

⁵ Se excluyen de este análisis las pensiones no contributivas y otros instrumentos destinados a atender a la población adulta mayor vulnerable, que han sido incluidos en el análisis de la protección

a este sector de la población. Tampoco se incluyen aquí otros componentes que podrían considerarse parte del pilar no contributivo, como el acceso a prestaciones de salud.

El pilar no contributivo de la protección social fue pensado originalmente para cubrir a un sector residual de la población que por diversos motivos no se ajustaba al modelo anterior, facilitando para ello el acceso a servicios sanitarios o bien otorgando transferencias. Aunque por razones muy diferentes de las analizadas en las secciones anteriores, el desarrollo de este pilar exhibe a la vez luces y sombras.

Los altos niveles de pobreza y desigualdad y la baja capacidad fiscal de los Estados colocan a los países en una difícil tensión, porque los requerimientos de gasto público son muy elevados y todavía resultan insuficientes los esfuerzos para cubrir a los amplios sectores de la población que no cuentan con garantías actuales de ingresos ni fuentes de aseguramiento para el futuro (CEPAL, 2010b).

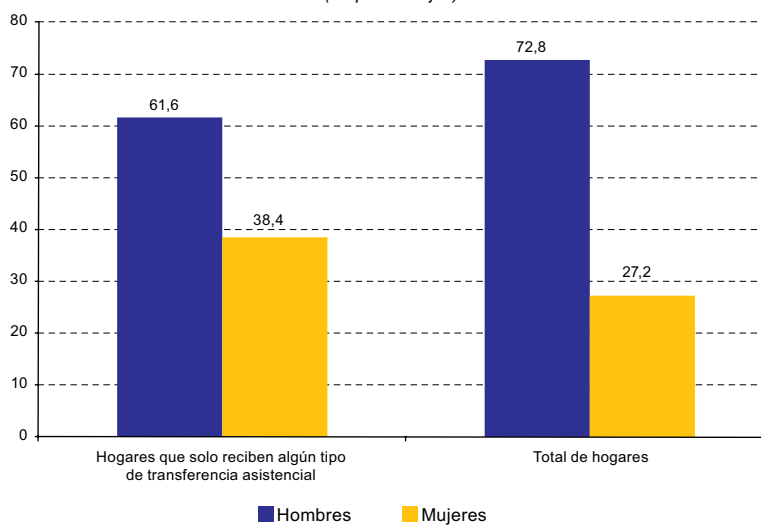
La cobertura del pilar no contributivo, examinada únicamente a través de transferencias, alcanza a una proporción aproximada del 12% de los hogares y representa el 0,25% del PIB (CEPAL, 2010b). Estas transferencias parecen apuntar a los riesgos de la población y en los hogares del primer decil duplican los ingresos (CEPAL, 2010b), lo que evidencia el peso significativo que tienen en los hogares más pobres. Esto confirma que, pese a las

limitantes en materia de cobertura, estas transferencias tienen una distribución altamente progresiva (CEPAL, 2010b).

La proporción de personas del primer quintil de ingresos que viven en hogares a los que llega algún tipo de transferencia pública asistencial alcanza al 41%, mientras que en el quintil III bordea el 15%. Considerando el primer quintil de ingresos, la cobertura de transferencias asistenciales entre los tramos de 10 a 14 años y de 15 a 24 años alcanza al 45% de la población. Algo similar ocurre con el grupo de 25 a 34 años, etapa en que se concentran buena parte de los hitos de transición a la vida adulta, entre ellos, la emancipación y la reproducción.

Si se considera exclusivamente a aquellos hogares de menores ingresos que reciben transferencias asistenciales públicas y que no cuentan con ningún integrante afiliado a la seguridad social, se hace evidente la mayor presencia de mujeres jefas de hogar. En particular, casi cuatro de cada diez hogares (38,4%) del quintil más pobre que reciben transferencias y no disponen de acceso a la seguridad social tienen jefatura femenina, un valor relativamente alto si se lo compara con el 27% de hogares de este quintil en que una mujer es la jefa de hogar (véase el gráfico IV.15).

Gráfico IV.15
AMÉRICA LATINA (13 PAÍSES): SEXO DE LOS JEFES DE HOGAR DEL PRIMER QUINTIL EN EL TOTAL Y EN AQUELLOS DEL MISMO QUINTIL QUE RECIBEN TRANSFERENCIAS ASISTENCIALES PÚBLICAS Y NO TIENEN PROTECCIÓN CONTRIBUTIVA NI RECIBEN JUBILACIONES O PENSIONES, PROMEDIO SIMPLE, ALREDEDOR DE 2009^a
(En porcentajes)



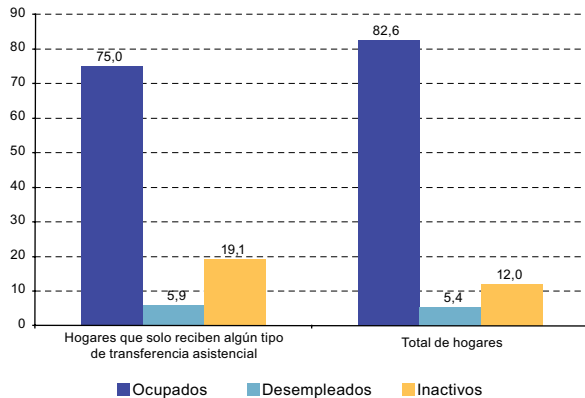
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

^a No se incluyen datos de Bolivia (Estado Plurinacional de), el Brasil, Nicaragua, el Perú y Venezuela (República Bolivariana de). Los datos de la Argentina corresponden al Gran Buenos Aires y los del Ecuador a zonas urbanas. Los datos de Guatemala corresponden a 2006, los de Honduras a 2007 y los de México a 2008.

En estos hogares existe una mayor proporción de jefes de hogar que se declaran inactivos (el 19,1% frente al 12% del total de hogares del quintil). La protección exclusiva por la vía de transferencias asistenciales no parece estar cubriendo en mayor medida a los jefes de hogar desempleados de menores ingresos; de hecho, tres de cada cuatro jefes de estos hogares (el 75%) están ocupados (véase el gráfico IV.16).

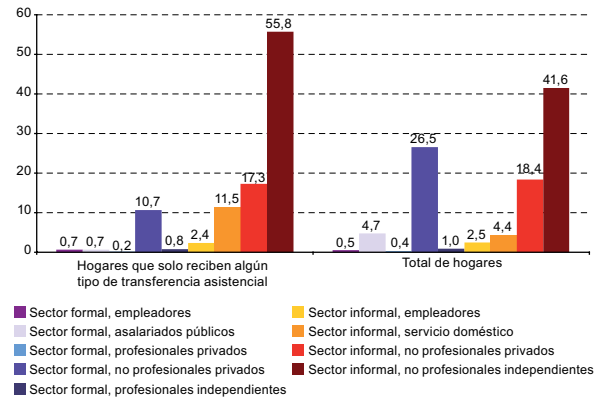
El perfil de estos jefes de hogar ocupados del quintil inferior que están cubiertos exclusivamente por transferencias asistenciales públicas muestra, en comparación con el conjunto de jefes de hogar ocupados del mismo quintil, un predominio del empleo en sectores de baja productividad, en particular como trabajadores independientes no calificados, en empleo asalariado de baja calificación y servicio doméstico (véase el gráfico IV.17).

Gráfico IV.16
AMÉRICA LATINA (13 PAÍSES): CONDICIÓN DE ACTIVIDAD DE LOS JEFES DE HOGAR DEL PRIMER QUINTIL EN EL TOTAL Y EN AQUELLOS DEL MISMO QUINTIL QUE RECIBEN TRANSFERENCIAS ASISTENCIALES PÚBLICAS Y NO TIENEN PROTECCIÓN CONTRIBUTIVA NI RECIBEN JUBILACIONES O PENSIONES, PROMEDIO SIMPLE, ALREDEDOR DE 2009^a
 (En porcentajes)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.
^a No se incluyen datos de Bolivia (Estado Plurinacional de), el Brasil, Nicaragua, el Perú y Venezuela (República Bolivariana de). Los datos de la Argentina corresponden al Gran Buenos Aires y los del Ecuador a zonas urbanas. Los datos de Guatemala corresponden a 2006, los de Honduras a 2007 y los de México a 2008.

Gráfico IV.17
AMÉRICA LATINA (13 PAÍSES): INSERCIÓN LABORAL DE LOS JEFES DE HOGAR DEL PRIMER QUINTIL EN EL TOTAL Y EN AQUELLOS DEL MISMO QUINTIL QUE RECIBEN TRANSFERENCIAS ASISTENCIALES PÚBLICAS Y NO TIENEN PROTECCIÓN CONTRIBUTIVA NI RECIBEN JUBILACIONES O PENSIONES, PROMEDIO SIMPLE, ALREDEDOR DE 2009^a
 (En porcentajes)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.
^a No se incluyen datos de Bolivia (Estado Plurinacional de), el Brasil, Nicaragua, el Perú y Venezuela (República Bolivariana de). Los datos de la Argentina corresponden al Gran Buenos Aires y los del Ecuador a zonas urbanas. Los datos de Guatemala corresponden a 2006, los de Honduras a 2007 y los de México a 2008.

D. Fisuras y omisiones de los sistemas de protección social

El análisis combinado de los pilares contributivo y no contributivo de la protección social a los hogares latinoamericanos muestra profundas fisuras, por donde se “cuelan” importantes sectores de la población. En la región todavía existe una elevada proporción de personas excluidas del modelo clásico de protección por medio del empleo y que tampoco están siendo cubiertas por las transferencias asistenciales públicas. Si bien es cierto que este grupo incluye una porción de personas pertenecientes a hogares de mayores ingresos, casi la mitad de quienes lo integran pertenecen al 40% más pobre de la población.

El examen de los pilares contributivo –tanto frente a las personas activas como frente a los adultos mayores– y no contributivo realizado en las secciones anteriores brinda pistas sobre cómo opera y qué significados tiene

la desigualdad en la protección social. Las perspectivas sobre el modelo contributivo basado en el vínculo entre empleo y protección social parecen más preocupantes que auspiciosas: las profundas brechas que genera la dinámica

contributiva imponen metas demasiado altas para los crecientes pero incipientes pilares no contributivos que la región viene desplegando. Por otra parte, los datos confirman las múltiples grietas de la protección a los adultos mayores.

Sin embargo, tal como ocurre en la mayoría de los estudios disponibles, el examen desarrollado hasta aquí

presenta una debilidad: no permite dimensionar cómo llegan —y como se combinan y superponen— los distintos tipos de protección a los hogares, que son el espacio donde se articula finalmente el acceso al bienestar.

Al combinar estos componentes en una tipología se confirman hallazgos que otros análisis ya mostraban, pero surgen también algunos datos novedosos (véase el recuadro IV.1).

Recuadro IV.1
TIPOLOGÍA PARA UN ANÁLISIS SISTÉMICO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL Y SU VÍNCULO CON EL EMPLEO:
ASPECTOS METODOLÓGICOS

En América Latina existe una importante acumulación de estudios que analizan la protección social. En términos metodológicos, la mayor parte de las investigaciones disponibles ponen el foco en el análisis de la cobertura, tanto del pilar contributivo (cobertura de jubilaciones, porcentaje de trabajadores que cotizan en la seguridad social) como no contributivo (cobertura de pensiones no contributivas, cobertura de transferencias públicas asistenciales). Estos análisis han aportado mucho a la comprensión del alcance de la protección social y su vinculación con el empleo en la región. Sin embargo, esta lógica de análisis no ha permitido

dimensionar cómo llegan ambos tipos de protección a los hogares, en el sentido de cómo se combinan estas dos modalidades de protección en la realidad y cuál es el resultado de esta combinación.

Estas preguntas parten de la preocupación por analizar empíricamente el alcance combinado de los dos pilares fundamentales de la protección social en la región y, sobre todo, su relación con el empleo.

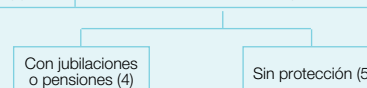
Para la elaboración de la tipología se toma como unidad de análisis a los hogares y se combina la afiliación a la seguridad social (incluyendo cobertura de desempleo) de los miembros del hogar, la recepción de

transferencias asistenciales públicas y, en última instancia, la recepción de jubilaciones y pensiones.

A partir de ello, es posible definir cinco categorías o tipos de hogar: (1) hogares que solo cuentan con protección contributiva, (2) hogares que cuentan con protección contributiva y no contributiva (mixta), (3) hogares que solo cuentan con protección no contributiva (transferencias asistenciales públicas), (4) hogares donde no se cumplen las condiciones anteriores pero algún miembro recibe jubilaciones o pensiones y (5) hogares sin protección (donde no se cumple ninguna de las cuatro condiciones anteriores).

Cuadro 1
TIPOLOGÍA DE HOGARES SEGÚN COMBINACIONES DE LAS VÍAS POR LAS QUE ACCEDEN A LA PROTECCIÓN SOCIAL

		Afiliación a la seguridad social	
		Algún miembro afiliado a la seguridad social o en seguro de desempleo	Ningún miembro afiliado a la seguridad social
Recibe transferencias asistenciales públicas	Sí	Con protección mixta (2)	Solo con protección no contributiva (3)
	No	Solo con protección contributiva (1)	Sin afiliación ni transferencias públicas



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Como se observa en la figura, el ejercicio prioriza la clasificación de la población en la etapa activa, con el objetivo de poder analizar luego la vinculación de las categorías con variables de inserción laboral. Por esta razón, la categoría de hogares con jubilaciones o pensiones no incluye a todos los que reciben esas transferencias, sino solo a aquellos donde eso ocurre en forma simultánea con la ausencia de algún miembro afiliado a la seguridad social o de recepción de transferencias asistenciales públicas.

Cuatro advertencias metodológicas deben tenerse en cuenta al interpretar los resultados del análisis en base a este ejercicio.

En primer lugar, pese a que para la elaboración de la tipología se partió, cuando fue posible, de variables de ingreso (véase el detalle en el cuadro), el ejercicio solo refleja cobertura y no calidad o intensidad de esta cobertura. Por esta razón, el que un hogar

esté cubierto, por ejemplo, por transferencias no contributivas no implica necesariamente que se encuentre en mejores condiciones de ingresos o acceso a bienestar que uno que no está recibiendo protección alguna. En otras palabras, no se asocian montos de ingresos a este análisis; lo que el ejercicio busca mostrar es simplemente qué proporción de hogares está quedando dentro y fuera de la protección, independientemente de su calidad.

En segundo lugar, vale recordar que el análisis solo permite reflejar la situación de los hogares sobre la base de lo que se encuentra medido en las encuestas de hogares. Esto es lo que explica que algunos países no hayan sido incluidos en el análisis (principalmente porque no miden recepción de transferencias asistenciales o incluyen algunas variables pero no todas las que sería importante considerar para dimensionar el alcance de este pilar).

En tercer lugar, es necesario tener en cuenta que el análisis de las jubilaciones y pensiones recibe en este ejercicio un tratamiento específico y excluyente del resto de las categorías porque el objetivo central de la tipología es vincular protección social con inserción laboral. Debe mencionarse además que, como no todas las encuestas de hogares permiten discriminar el carácter contributivo o no contributivo de las jubilaciones y pensiones, estas fueron tratadas indistintamente.

Finalmente, es preciso señalar que el ejercicio es una aproximación global a la forma en que la afiliación a la seguridad social y las transferencias de distinto tipo se combinan y llegan a los hogares. Se excluyen aquí otras dimensiones que constituyen activos fundamentales en el acceso al bienestar de los hogares (vivienda, salud, educación y acceso a servicios sociales en general).

Recuadro IV.1 (conclusión)

Cuadro 2
TRANSFERENCIAS UTILIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TIPOLOGÍA DE HOGARES SEGÚN COMBINACIONES DE LAS VÍAS POR LAS QUE ACCEDEN A LA PROTECCIÓN SOCIAL^a

	Seguro de desempleo (se suma a activos aportantes)	Jubilaciones y pensiones	Transferencias asistenciales públicas
Argentina	Ingreso por indemnización por despido y/o seguro de desempleo	Ingreso por concepto de jubilaciones o pensiones	Ingreso del hogar por concepto de subsidios o ayuda social del gobierno, iglesias y otros
Chile	Ingreso por seguro de desempleo o cesantía	Ingreso por concepto de jubilaciones o pensiones Ingreso por concepto de pensión de invalidez, montepío, viudez, orfandad, alimentos y otro tipo de pensiones Ingreso por Pensión Básica Solidaria de vejez o invalidez, aporte solidario de vejez o invalidez	Ingreso del hogar por subsidio familiar, subsidio a la discapacidad, bono de protección familiar, subsidios al agua potable y eléctrico, otros subsidios
Colombia	Ingreso por cesantías	Ingreso por concepto de jubilaciones y pensiones	Ingreso del hogar por concepto de subsidios en dinero o especies para la compra, construcción o mejora de las viviendas. Ingresos en dinero o especies por programa Familias en Acción, Programa Jóvenes en Acción y programas Familias de Guardabosques
Costa Rica		Ingreso por concepto de jubilaciones y pensiones Ingreso por pensiones del régimen no contributivo (RNC)	Ingreso del hogar por asistencia del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y otros subsidios
Ecuador		Ingreso por concepto de jubilaciones y diversos tipos de pensiones	Ingreso del hogar correspondiente al Bono de Desarrollo Humano
El Salvador	Ingreso por indemnización de retiro o despido	Ingreso por concepto de jubilaciones y pensiones	Ingreso del hogar por ayuda del gobierno en efectivo
Guatemala		Ingreso por concepto de jubilaciones y pensiones	Ingreso del hogar por donaciones de instituciones públicas
Honduras		Ingreso por concepto de jubilaciones y pensiones	Ingreso del hogar por concepto de subsidios, bonos o merienda escolar
México	Ingresos por indemnizaciones de despido o retiro voluntario	Ingreso por jubilaciones o pensiones originadas dentro del país Ingresos Programa Adultos Mayores	Ingresos del hogar por beneficios del programa de desarrollo humano Oportunidades, Plan de Desarrollo Agrícola (PROCAMPO), otros programas sociales
Panamá		Ingreso por jubilaciones o pensiones	Ingreso del hogar por Fondo de Asistencia Habitacional (FASHABI), Subsidio habitacional no retornable (PARVIS mejorado), Red de oportunidades, subsidios Secretaría Nacional para el Plan de Seguridad Alimentaria Nacional de Panamá (SENAPAN), otros subsidios
Paraguay		Ingreso por jubilaciones o pensiones	Ingresos por transferencias Tekoporá
República Dominicana		Ingreso por jubilaciones o pensiones	Ingreso del hogar por ayuda del gobierno
Uruguay	Ingreso por seguro de paro	Ingreso por jubilaciones o pensiones de caja de la industria y comercio, caja civil y escolar, servicio doméstico y rural del Banco de Previsión Social (BPS). Ingreso por jubilaciones de unión postal, militar, policial o profesional, notarial	Ingresos del hogar por asignaciones familiares (plan de equidad), becas, subsidios, donaciones, tarjeta alimentaria

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de las encuestas de hogares de los respectivos países.

^a Se incluye solo a los países que cuentan con información suficiente sobre transferencias asistenciales públicas en los hogares como para la construcción de la tipología. Las celdas vacías en la columna de seguros de desempleo indican ausencia de variables sobre estos instrumentos en las encuestas de hogares.

En primer lugar es preciso destacar que la combinación de las distintas vías de la protección confirma una vez más la existencia de un sector relativamente integrado, ocupado y cubierto por la vía contributiva, que en el promedio regional corresponde al 43% de los hogares. En este sector, una porción muy minoritaria de hogares, un 4% del promedio regional, cuentan con cobertura mixta (tienen al menos algún miembro afiliado a la seguridad social y reciben a su vez algún tipo de transferencia pública asistencial) (véase el gráfico IV.18).

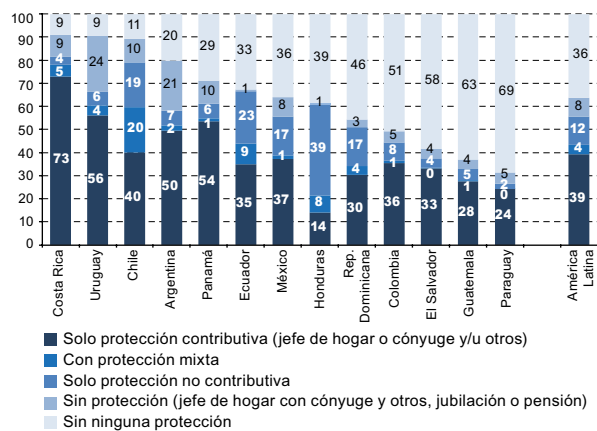
El análisis también muestra una proporción no menor (8%) de hogares que reciben (exclusivamente) jubilaciones o pensiones y que se concentran, como era de esperar, en los países con sistemas de jubilaciones

y pensiones más avanzados (Costa Rica, el Uruguay y la Argentina). Además, como se analizó en secciones anteriores, el 12% de los hogares de la región están siendo protegidos solo por la vía de transferencias asistenciales no contributivas.

Pero quizás lo más relevante es la importante proporción de hogares que no reciben protección pública por ninguna de las vías señaladas: en promedio el 36% de los hogares de los trece países considerados no cuentan con miembros afiliados a la seguridad social, no reciben transferencias asistenciales públicas y tampoco reciben algún tipo de jubilación o pensión. En los países con mayor nivel de desarrollo los hogares sin protección representan entre el 9% (Costa Rica y el Uruguay) y el 20% (la Argentina).

En contrapartida, en los países más pobres, con PIB per cápita más bajo, con menor capacidad fiscal y tasas más altas de dependencia formal, la proporción de hogares sin protección alguna es más cercana al promedio regional y en algunos casos lo supera ampliamente (en El Salvador los hogares sin protección llegan al 58%, en Guatemala al 63% y en el Paraguay al 69%).

Gráfico IV.18
AMÉRICA LATINA (13 PAÍSES): DISTRIBUCIÓN DE HOGARES EN TIPOLOGÍA SEGÚN COMBINACIONES DE LAS VÍAS POR LAS QUE ACCEDEN A LA PROTECCIÓN SOCIAL, PROMEDIO SIMPLE, ALREDEDOR DE 2009^a
(En porcentajes)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

^a No se incluyen datos de Bolivia (Estado Plurinacional de), el Brasil, Nicaragua, el Perú y Venezuela (República Bolivariana de) porque estos países no cuentan con información suficiente sobre transferencias asistenciales públicas en los hogares como para la construcción de la tipología o porque las variables correspondientes presentan inconsistencias. Los datos de la Argentina corresponden al Gran Buenos Aires y los del Ecuador a zonas urbanas. Los datos de Guatemala corresponden a 2006, los de Honduras a 2007 y los de México a 2008.

Es importante reafirmar que estos hogares están quedando fuera de los circuitos que han construido los sistemas de protección social pública de la región combinando distintos componentes. Pero ¿cómo son estos hogares desprotegidos?

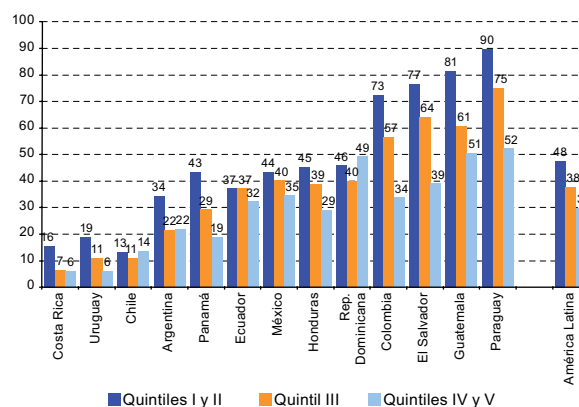
Como promedio de los países considerados, viven en hogares a los que no llega protección social por ninguna vía el 48% de la población de los quintiles I y II, el 38% de la población de los sectores medios y el 30% de la población de los quintiles IV y V (véase el gráfico IV.19).

Como se observa en el gráfico, esta pauta se repite en todos los países, con intensidad variable. Las excepciones son Chile y la República Dominicana, donde se registra una mayor presencia relativa de sectores altos entre los hogares que no cuentan con afiliados a la seguridad social, no reciben transferencias asistenciales ni disponen de transferencias por jubilaciones y/o pensiones.

De este modo, la desprotección parece tener distintos significados. Uno de ellos —el que se asocia a quienes se ubican en los quintiles medios y superiores— posiblemente responda a un cierto “descreme hacia arriba” de los

circuitos públicos de protección, que se “autoprotege” vía el mercado⁶. Pero el significado más probable es que una proporción mayoritaria de los sectores medios y altos no protegidos incluye a los trabajadores de sectores de productividad media y alta (en alguna medida, posiblemente también de baja productividad) que, como fue analizado en secciones anteriores, no tienen acceso a la seguridad social o a una contratación laboral. En cualquier caso, este “descreme” complejiza las apuestas de mediano y largo plazo por la construcción de sistemas universales de protección, socavando los pilares de solidaridad vertical (entre sectores de más y menos recursos) —y también amenazando el financiamiento— al interior de los sistemas de seguridad social.

Gráfico IV.19
AMÉRICA LATINA (13 PAÍSES): POBLACIÓN QUE VIVE EN HOGARES DONDE NO HAY AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y NO SE PERCIBEN JUBILACIONES NI TRANSFERENCIAS PÚBLICAS ASISTENCIALES, POR QUINTIL DE INGRESO, PROMEDIO SIMPLE, ALREDEDOR DE 2009^a
(En porcentajes)



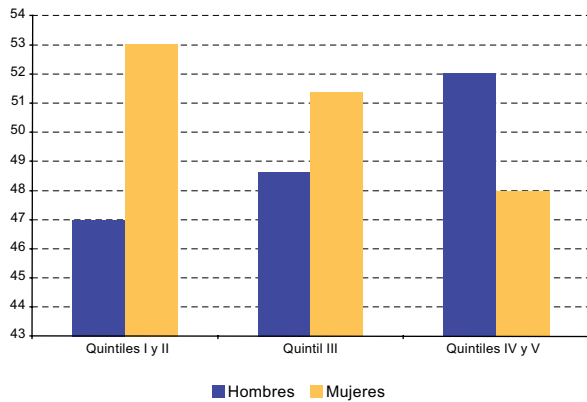
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

^a No se incluyen datos de Bolivia (Estado Plurinacional de), el Brasil, Nicaragua, el Perú y Venezuela (República Bolivariana de) porque estos países no cuentan con información suficiente sobre transferencias asistenciales públicas en los hogares como para la construcción de la tipología o porque las variables correspondientes presentan inconsistencias. Los datos de la Argentina corresponden al Gran Buenos Aires y los del Ecuador a zonas urbanas. Los datos de Guatemala corresponden a 2006, los de Honduras a 2007 y los de México a 2008.

El aspecto más preocupante de la desprotección, sin embargo, es el relativo a la porción de hogares pertenecientes al 40% más pobre. En estos hogares se observa una mayor presencia de mujeres que en los hogares desprotegidos de ingresos más altos (53% en los quintiles I y II frente a 48% en los quintiles IV y V), así como también una mayor presencia de jóvenes de 15 a 24 años (35% en los quintiles I y II frente a 30% en los quintiles IV y V) (véanse los gráficos IV.20 y IV.21).

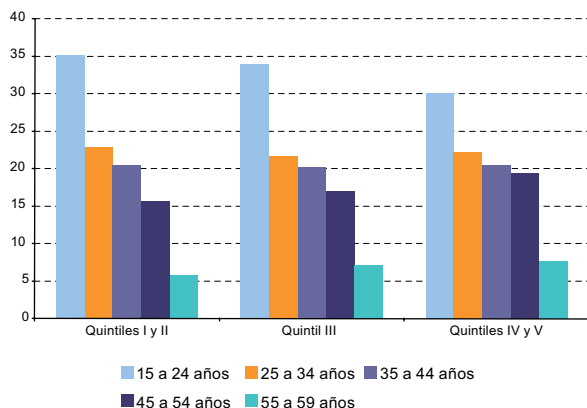
⁶ Se entiende por descreme la salida de los sectores de mayores ingresos desde el sistema público hacia el privado.

Gráfico IV.20
AMÉRICA LATINA (13 PAÍSES): PERFIL DE LA POBLACIÓN DE 15 A 59 AÑOS QUE VIVE EN HOGARES DONDE NO HAY AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y NO SE PERCIEN JUBILACIONES NI TRANSFERENCIAS PÚBLICAS ASISTENCIALES, POR SEXO, SEGÚN QUINTILES DE INGRESO, PROMEDIO SIMPLE, ALREDEDOR DE 2009^a
 (En porcentajes)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.
^a No se incluyen datos de Bolivia (Estado Plurinacional de), el Brasil, Nicaragua, el Perú y Venezuela (República Bolivariana de) porque estos países no cuentan con información suficiente sobre transferencias asistenciales públicas en los hogares como para la construcción de la tipología o porque las variables correspondientes presentan inconsistencias. Los datos de la Argentina corresponden al Gran Buenos Aires y los del Ecuador a zonas urbanas. Los datos de Guatemala corresponden a 2006, los de Honduras a 2007 y los de México a 2008.

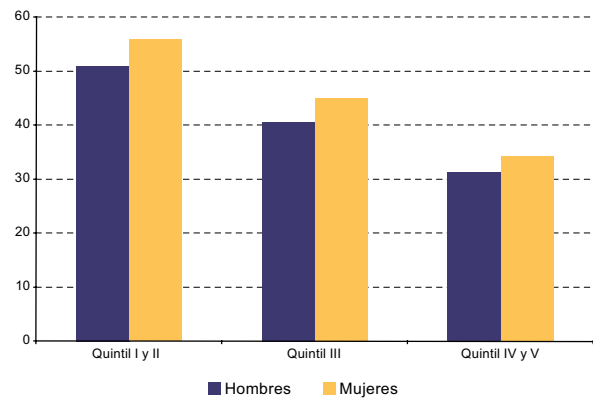
Gráfico IV.21
AMÉRICA LATINA (13 PAÍSES): PERFIL DE LA POBLACIÓN DE 15 A 59 AÑOS QUE VIVE EN HOGARES DONDE NO HAY AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y NO SE PERCIEN JUBILACIONES NI TRANSFERENCIAS PÚBLICAS ASISTENCIALES, POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN QUINTILES DE INGRESO, PROMEDIO SIMPLE, ALREDEDOR DE 2009^a
 (En porcentajes)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.
^a No se incluyen datos de Bolivia (Estado Plurinacional de), el Brasil, Nicaragua, el Perú y Venezuela (República Bolivariana de) porque estos países no cuentan con información suficiente sobre transferencias asistenciales públicas en los hogares como para la construcción de la tipología o porque las variables correspondientes presentan inconsistencias. Los datos de la Argentina corresponden al Gran Buenos Aires y los del Ecuador a zonas urbanas. Los datos de Guatemala corresponden a 2006, los de Honduras a 2007 y los de México a 2008.

Otro dato relevante es que la desprotección es más frecuente en hogares con jefatura femenina. Es cierto que esto ocurre tanto en los quintiles de mayores como de menores ingresos —en otras palabras, incluso en los quintiles de mayores ingresos los hogares con jefatura femenina están más desprotegidos—, pero es en los hogares más pobres donde esta situación adquiere niveles más altos. En efecto, el 56% de los hogares del 40% más pobre que tienen jefatura femenina no cuentan con afiliados a la seguridad social, no reciben transferencias asistenciales públicas ni están recibiendo jubilaciones o pensiones (véase el gráfico IV.22).

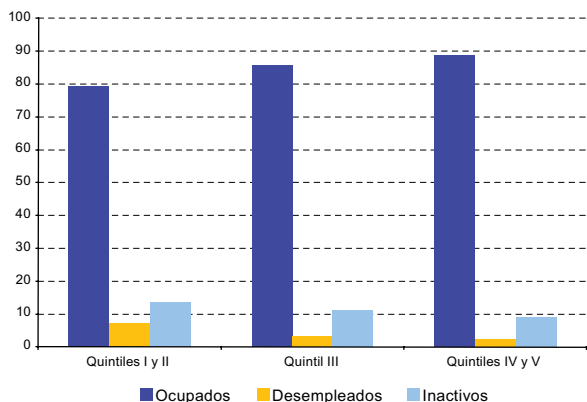
Gráfico IV.22
AMÉRICA LATINA (13 PAÍSES): HOGARES DONDE NO HAY AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y NO SE PERCIEN JUBILACIONES NI TRANSFERENCIAS PÚBLICAS ASISTENCIALES, POR SEXO DEL JEFE DE HOGAR, SEGÚN QUINTILES DE INGRESO, PROMEDIO SIMPLE, ALREDEDOR DE 2009^a
 (En porcentajes)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.
^a No se incluyen datos de Bolivia (Estado Plurinacional de), el Brasil, Nicaragua, el Perú y Venezuela (República Bolivariana de) porque estos países no cuentan con información suficiente sobre transferencias asistenciales públicas en los hogares como para la construcción de la tipología o porque las variables correspondientes presentan inconsistencias. Los datos de la Argentina corresponden al Gran Buenos Aires y los del Ecuador a zonas urbanas. Los datos de Guatemala corresponden a 2006, los de Honduras a 2007 y los de México a 2008.

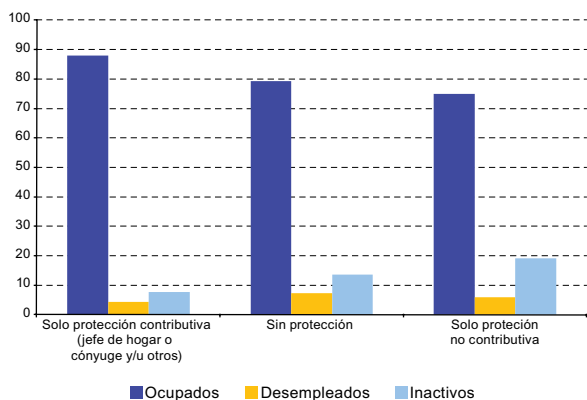
El otro elemento importante es que casi el 80% de los jefes de estos hogares sin protección de los quintiles I y II están ocupados, aunque en comparación con los quintiles de mayores ingresos en estos hogares se registra una mayor presencia de desempleados y de inactivos. Al compararlos con los hogares que cuentan exclusivamente con protección no contributiva, dentro de los quintiles I y II, se observa que los hogares desprotegidos presentan mayor proporción de ocupados (79% frente a 74%), menor presencia de inactivos (13% frente a 19%) y mayor presencia de desempleados (véanse los gráficos IV.23 y IV.24).

Gráfico IV.23
AMÉRICA LATINA (13 PAÍSES): PERFIL DE LOS JEFES DE HOGAR DE 15 A 59 AÑOS QUE VIVEN EN HOGARES DONDE NO HAY AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y NO SE PERCIEN JUBILACIONES NI TRANSFERENCIAS PÚBLICAS ASISTENCIALES, POR CONDICIÓN DE ACTIVIDAD, SEGÚN QUINTILES DE INGRESO, PROMEDIO SIMPLE, ALREDEDOR DE 2009^a
(En porcentajes)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.
^a No se incluyen datos de Bolivia (Estado Plurinacional de), el Brasil, Nicaragua, el Perú y Venezuela (República Bolivariana de) porque estos países no cuentan con información suficiente sobre transferencias asistenciales públicas en los hogares como para la construcción de la tipología o porque las variables correspondientes presentan inconsistencias. Los datos de la Argentina corresponden al Gran Buenos Aires y los del Ecuador a zonas urbanas. Los datos de Guatemala corresponden a 2006, los de Honduras a 2007 y los de México a 2008.

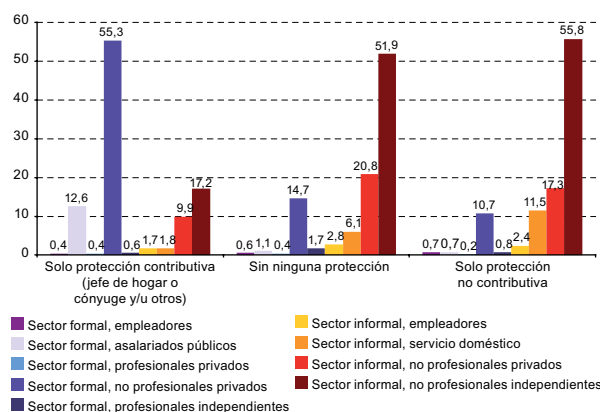
Gráfico IV.24
AMÉRICA LATINA (13 PAÍSES): PERFIL DE LOS JEFES DE HOGAR DE 15 A 59 AÑOS DE LOS QUINTILES I Y II, POR CONDICIÓN DE ACTIVIDAD, SEGÚN CATEGORÍAS DE ACCESO A LA PROTECCIÓN SOCIAL DE SUS HOGARES, PROMEDIO SIMPLE, ALREDEDOR DE 2009^a
(En porcentajes)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.
^a No se incluyen datos de Bolivia (Estado Plurinacional de), el Brasil, Nicaragua, el Perú y Venezuela (República Bolivariana de) porque estos países no cuentan con información suficiente sobre transferencias asistenciales públicas en los hogares como para la construcción de la tipología o porque las variables correspondientes presentan inconsistencias. Los datos de la Argentina corresponden al Gran Buenos Aires y los del Ecuador a zonas urbanas. Los datos de Guatemala corresponden a 2006, los de Honduras a 2007 y los de México a 2008.

El análisis presentado ofrece pistas sobre los factores que inciden en que hogares con el mismo nivel de ingresos queden dentro o fuera de la red de protección social. Al analizar la inserción laboral de los jefes de los hogares que no tienen protección, se hace evidente el peso que tiene el empleo informal —independiente y de baja calificación—, así como el empleo asalariado de baja calificación en el sector formal (véase el gráfico IV.25).

Gráfico IV.25
AMÉRICA LATINA (13 PAÍSES): PERFIL DE LOS JEFES DE HOGAR DE 15 A 59 AÑOS DE LOS QUINTILES I Y II, POR INSERCIÓN LABORAL, SEGÚN CATEGORÍAS DE ACCESO A LA PROTECCIÓN SOCIAL DE SUS HOGARES, PROMEDIO SIMPLE, ALREDEDOR DE 2009^a
(En porcentajes)



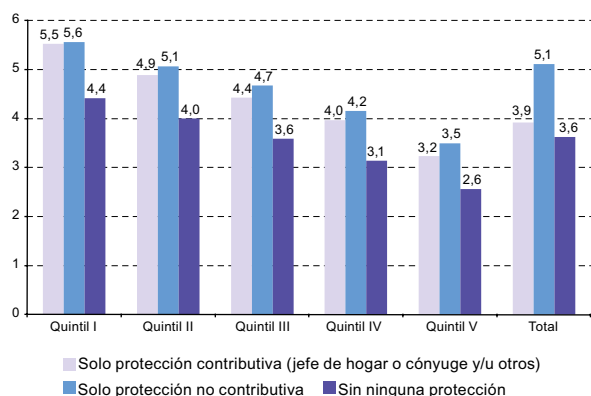
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.
^a No se incluyen datos de Bolivia (Estado Plurinacional de), el Brasil, Nicaragua, el Perú y Venezuela (República Bolivariana de) porque estos países no cuentan con información suficiente sobre transferencias asistenciales públicas en los hogares como para la construcción de la tipología o porque las variables correspondientes presentan inconsistencias. Los datos de la Argentina corresponden al Gran Buenos Aires y los del Ecuador a zonas urbanas. Los datos de Guatemala corresponden a 2006, los de Honduras a 2007 y los de México a 2008.

En comparación con los hogares de los mismos quintiles (I y II) que solo reciben protección no contributiva, los hogares desprotegidos muestran mayor presencia de jefes trabajadores no profesionales privados, tanto en el sector informal como en el formal, mientras que en los hogares que solo reciben pensión no contributiva se registra una mayor proporción de trabajadores del servicio doméstico e independientes no calificados.

Además, los hogares protegidos por vía no contributiva están en promedio integrados por un mayor número de personas que los protegidos por vía contributiva. Pero los hogares desprotegidos tienden a ser menos numerosos. En efecto, considerando el total de hogares, se observa que en promedio los hogares

con protección no contributiva están integrados por 5,1 personas, los hogares con protección contributiva por 3,9 personas y los hogares sin protección por 3,6 personas. Esta pauta se cumple tanto en el total de hogares como en cada uno de los quintiles de ingreso (véase el gráfico IV.26).

Gráfico IV.26
**AMÉRICA LATINA (13 PAÍSES): TAMAÑO MEDIO DE LOS
 HOGARES SEGÚN CATEGORÍAS DE ACCESO A LA
 PROTECCIÓN SOCIAL Y QUINTILES DE INGRESO,
 PROMEDIO SIMPLE, ALREDEDOR DE 2009^a**
 (En número de personas)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

^a No se incluyen datos de Bolivia (Estado Plurinacional de), el Brasil, Nicaragua, el Perú y Venezuela (República Bolivariana de) porque estos países no cuentan con información suficiente sobre transferencias asistenciales públicas en los hogares como para la construcción de la tipología o porque las variables correspondientes presentan inconsistencias. Los datos de la Argentina corresponden al Gran Buenos Aires y los del Ecuador a zonas urbanas. Los datos de Guatemala corresponden a 2006, los de Honduras a 2007 y los de México a 2008.

Esto último puede responder a dos fenómenos. Los hogares desprotegidos tienen mayor presencia de personas mayores de 60 años que el resto de los hogares, un dato que no llama la atención si se considera la importante proporción de adultos mayores que no reciben jubilaciones o pensiones. Además, estos hogares tienen menor presencia relativa de población infantil que los hogares con protección no contributiva y quizás sea esta una de las razones por las que en algunos países no están accediendo a transferencias asistenciales públicas, ya que este factor se incluye frecuentemente entre los criterios de elegibilidad de los programas de transferencias.

La identificación del sector de la población que está quedando fuera de la cobertura combinada de componentes contributivos y no contributivos de la protección ofrece nuevos elementos para la reflexión sobre el vínculo entre empleo y protección social, sobre las políticas que deberían aplicarse en la región para reducir la desigualdad en esa articulación y sobre los espacios que deberían cubrirse si se pretende avanzar hacia la consolidación de sistemas más universales de protección.

Los datos antes presentados sugieren que en América Latina todavía existe una importante proporción de personas excluidas del modelo clásico de protección a través del empleo y a las que tampoco están llegando las transferencias asistenciales públicas. Y si bien es cierto que este grupo incluye una proporción de personas pertenecientes a hogares de mayores ingresos, cerca de la mitad de sus integrantes pertenecen al 40% más pobre de la población.

Este último grupo, que parece quedar perdido entre los dos componentes básicos de la protección social, cuenta con una mayor presencia de personas en edad activa y de adultos mayores que los hogares cubiertos por la vía no contributiva. A su vez, los jefes de estos hogares aunque incluyen en forma aproximada un 10% de inactivos, cuentan con una importante proporción de ocupados (superior a la que presentan los hogares que solo reciben transferencias públicas), básicamente en empleos de baja productividad, pero con un perfil menos vulnerable que sus pares que sí están recibiendo transferencias asistenciales públicas.

Aunque se requiere profundizar el análisis, es razonable plantear la hipótesis de que existe, al menos en algunos países (con mayor desarrollo de los sistemas de protección social), un grupo intermedio ubicado entre la cobertura contributiva y la no contributiva que no cotiza y no logra acceder a la seguridad social, pero que está empleado –mayoritariamente en el sector informal–, tiene ciertos ingresos y no cumple con los criterios de elegibilidad de los programas de transferencias asistenciales públicas. En los países con menor desarrollo, en cambio, es posible que en este grupo tengan una mayor presencia los sectores marginados que están incluso por debajo del pilar no contributivo, en condiciones más claras de marginación, y que sistemáticamente quedan fuera del alcance de las políticas de transferencias asistenciales.

E. La protección social y su desempeño sistémico frente a las desigualdades

La evaluación del desempeño sistémico de los sistemas de protección de América Latina revela debilidades e insuficiencias notorias que adquieren significados distintos en el marco de la gran heterogeneidad regional. Se plantean desafíos redistributivos de gran envergadura a los sistemas de protección social latinoamericanos, débiles y con limitada capacidad fiscal y —allí donde llegaron a desarrollarse— con arquitecturas de bienestar relativamente rígidas. La mirada sistémica debería servirse al mismo tiempo del pilar contributivo y de políticas más o menos focalizadas para interconectar el disfrute de derechos y avanzar hacia verdaderos sistemas universales —y solidarios— de protección.

Mediante este análisis se ha examinado cómo opera el acceso estratificado a la dinámica contributiva, haciendo evidente una preocupante secuencia de transmisión de desigualdad desde la heterogeneidad estructural hasta el mercado de trabajo y desde este hacia la protección social. Esta secuencia configura un mapa en que es posible identificar claramente a quienes quedan dentro y quienes quedan fuera del modelo de protección asociado al empleo.

En el capítulo también se muestra que la estructuración de las brechas laborales y de los lazos contributivos se traslada en forma muy clara desde la etapa activa hacia la etapa de retiro. Así queda de manifiesto en las claras desigualdades de acceso a jubilaciones y pensiones que existen entre ciertos sectores de la población y en las fuertes disparidades que persisten entre hombres y mujeres. Esto ocurre aun cuando en varios países de la región operan instrumentos como las pensiones no contributivas o solidarias, mediante las cuales se busca específicamente compensar el déficit de protección generado por la ausencia o la debilidad del vínculo contributivo en la etapa activa.

Finalmente, la evidencia presentada ilustra el alcance de un creciente pero aún limitado pilar no contributivo de transferencias asistenciales públicas, en el que se confirma una importante adecuación a los riesgos de la población. Estas transferencias están, efectivamente, llegando a hogares con jefatura femenina y con mayor presencia de niños y adolescentes.

El recorrido que se realiza en el capítulo a través de datos de afiliación a la seguridad social y transferencias de distinto tipo por componentes centrales de la protección

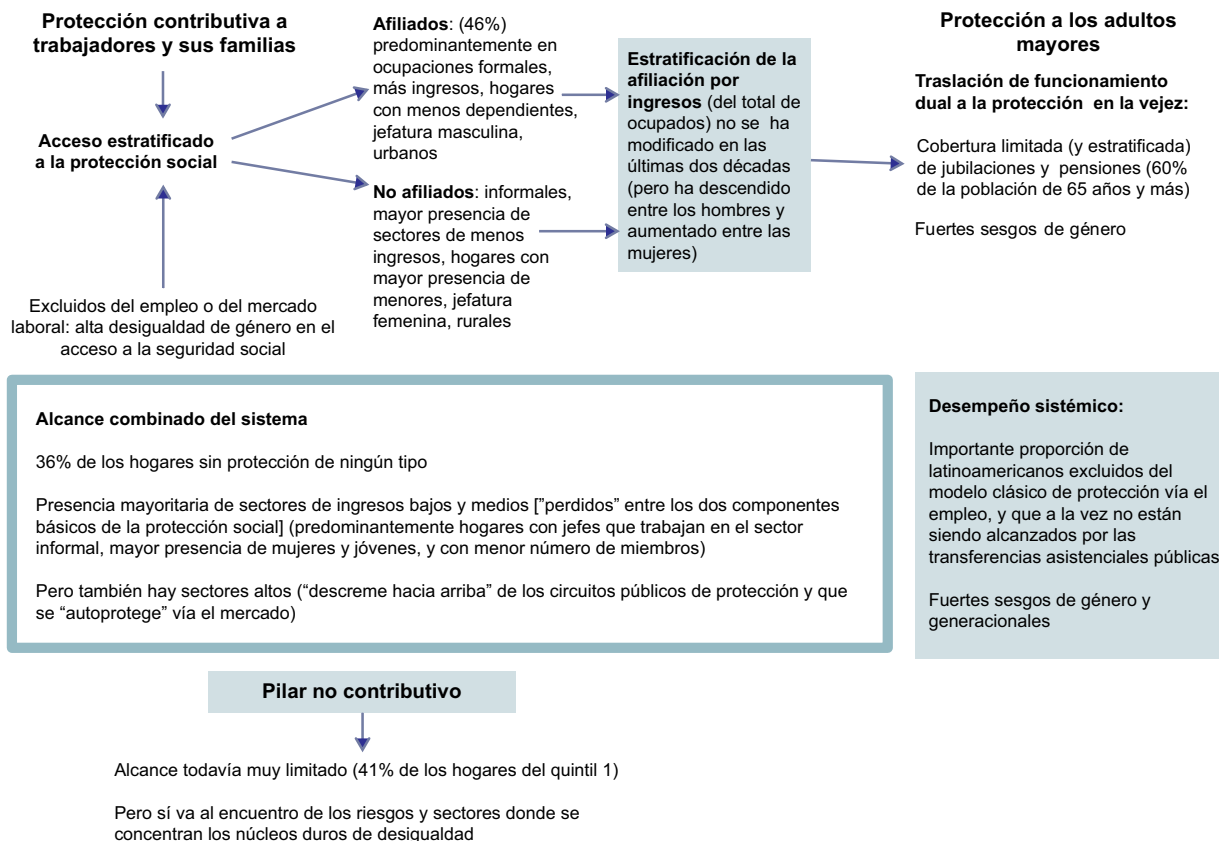
social, así como el ejercicio tendiente a combinarlos en una tipología, ofrecen elementos interesantes para avanzar hacia la construcción de una mirada sistémica de la protección social en la región.

Esta mirada indica que los sistemas de protección latinoamericanos enfrentan serias debilidades. En primer lugar, muestran profundas fisuras, por donde se “cuelan” importantes sectores de la población. En segundo lugar, adolecen de una insuficiencia que adquiere significados distintos en la gran heterogeneidad regional. En los países menos desarrollados de la región la protección social se traduce en cobertura a una proporción relativamente baja de la población. En aquellos con mayor nivel de desarrollo la cobertura combinada es mayor, pero persisten sectores que todavía no están siendo alcanzados por ninguno de los componentes considerados aquí (véase el diagrama IV.1).

La primera conclusión es que la tarea de reducción de la desigualdad no puede ser únicamente asumida por la protección social. Si se aborda solo el tercer eslabón de la secuencia de generación y reproducción de desigualdades (heterogeneidad estructural, mercado laboral, protección social), los logros pueden ser muy magros o, al menos, encontrar muy rápidamente su techo.

La segunda conclusión es que el espacio de maniobra de la protección social está limitado por su relativa rigidez, vinculada sin duda con las capacidades fiscales y los márgenes de los países para ampliar el gasto social, pero también con la capacidad de modificar las opciones distributivas que se realizaron en el pasado para hacer frente a estructuras de riesgos diferentes a las que hoy presentan la mayor parte de los países.

Diagrama IV.1
PROTECCIÓN SOCIAL Y DESIGUALDAD: FISURAS, RIGIDECES, MÁRGENES Y OPORTUNIDADES



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Dentro del ámbito de la protección social, distintas líneas de políticas pueden contribuir a estos objetivos:

En primer lugar, en varios países el pilar contributivo requiere de un fortalecimiento que supone la introducción de reformas o de nuevos dispositivos a la protección. Tal es el caso de los seguros de desempleo, instrumento fundamental para sostener el ingreso de los trabajadores, que ha tenido un desarrollo todavía insuficiente en la región y que debería extenderse para cubrir a porciones más amplias de trabajadores.

También los sistemas de jubilaciones y pensiones requieren transformaciones importantes y al menos dos ejes plantean debates inevitables para una posible agenda de cambios. El primero es la evaluación de alternativas de carácter público y solidario frente a los sistemas de capitalización individual.

El segundo es la necesidad de avanzar hacia la igualdad entre hombres y mujeres. En este plano es preciso incorporar la perspectiva de género, a fin de establecer iguales condiciones de acceso a derechos y beneficios contributivos: edades tope para acceder a ciertos beneficios, reconocimiento de derechos en

familias con uniones de hecho, flexibilización para el reconocimiento de períodos intermitentes de cotización, reconocimiento del trabajo no remunerado y de los hijos a cargo, en el caso de las mujeres⁷. La introducción de políticas de discriminación positiva hacia ellas, con justas compensaciones en aspectos clave de los sistemas de jubilaciones y pensiones, constituye un instrumento central para reducir las desigualdades de partida —heredadas del período activo— y de trato en la normativa actuarial vigentes todavía en los diseños de los sistemas de seguridad social. También es preciso revisar las normas que consagran la permanencia de las mujeres en el ámbito del trabajo no remunerado, para promover el cambio cultural que se requiere respecto a su papel social.

En segundo lugar, el capítulo reafirma la necesidad de fortalecer las transferencias directas de ingresos a los más pobres y profundizar su orientación al empleo. Tales mecanismos, que se canalizan a través de transferencias

⁷ Un ejemplo interesante en este sentido es la última reforma previsional impulsada en Chile.

monetarias y otras prestaciones, permiten garantizar ingresos mínimos a quienes viven en situación de pobreza y detener la caída de los ingresos y de la capacidad de consumo de quienes están en situación de vulnerabilidad. Como fuera planteado por la CEPAL en otras oportunidades (CEPAL, 2010a y 2010b) estas transferencias constituyen un instrumento especialmente relevante para combatir la infantilización de la pobreza y reducir las desigualdades al inicio de la vida, un núcleo duro de desigualdad que, además, tiende a reproducirse a lo largo del ciclo de vida, configurando (o profundizando) desigualdades en etapas posteriores. Las estimaciones realizadas por la CEPAL confirman los importantes efectos que estos instrumentos podrían tener sobre los niveles de pobreza.

En tercer lugar, es necesario fortalecer otros componentes del pilar no contributivo que son fundamentales para garantizar el acceso a niveles mínimos de bienestar. El diagnóstico presentado muestra al menos dos áreas en que se requiere trabajar. La primera son los subsidios a las contribuciones en los sistemas de aseguramiento, básicamente seguridad social y salud, para otorgar protección a los sectores que están quedando fuera de la dinámica contributiva. En esta línea es relevante considerar la situación de vulnerabilidad en que se encuentran los trabajadores informales, los jóvenes y las mujeres de bajos recursos y, entre ellos, especialmente las mujeres jóvenes y con hijos pequeños. La segunda son las condiciones para garantizar el acceso efectivo a servicios básicos. Las tarifas sociales de ciertos servicios prioritarios y las políticas de transporte público (CEPAL, 2010b) deberían pasar a formar parte de la agenda de transformaciones en el área de la protección, articulándose con los programas de transferencias de ingresos a los sectores más vulnerables.

Finalmente, los datos presentados revelan altos niveles de precariedad de la población adulta mayor de la región. Estos niveles son más elevados en los países con menor grado de desarrollo, pero incluso

allí donde los sistemas de protección social a la vejez han alcanzado mayor cobertura, persisten núcleos de desprotección y desigualdad. Ante esta situación parece necesario apelar a la opción de transferir ingresos a las personas de 65 años y más en situación de vulnerabilidad y no abandonar la idea de avanzar hacia un sistema de transferencias universal en esta etapa de la vida, que se combine con las transferencias contributivas derivadas de los sistemas previsionales y que garantice “un nivel básico de renta en forma sostenible desde el punto de vista fiscal y justa desde el punto de vista intergeneracional” (CEPAL, 2010a, pág. 217).

Las desigualdades identificadas a lo largo del capítulo conforman una nueva mirada sobre los distintos instrumentos que hoy componen —no siempre en forma sistémica— la protección social en los distintos países. Esta mirada debería estar orientada por un enfoque de derechos y considerar las líneas de políticas antes señaladas en el marco de una apuesta fuerte por la construcción de redes universales de protección social. Para ello, debiera servirse al mismo tiempo del pilar contributivo y de políticas más o menos focalizadas tendientes a transitar hacia verdaderos sistemas universales y solidarios de protección. Los datos aquí presentados indican que lejos de salir de escena, la universalización de niveles básicos de protección social debería guiar el fortalecimiento y las reformas a las arquitecturas de bienestar latinoamericanas.

Un objetivo de esta naturaleza requiere inevitablemente el retorno del papel central del Estado, como garante, regulador y eventualmente prestador. También necesita fuertes coaliciones redistributivas, algo que la política latinoamericana no suele facilitar. Por esta razón, el análisis presentado en este capítulo lleva a retomar los planteamientos ya realizados en *La hora de la igualdad: brechas por cerrar, caminos por abrir* (CEPAL, 2010a) y reafirmar, una vez, más, el espacio central de la política para mejorar el desempeño de los sistemas de protección social frente a la desigualdad.

Capítulo V

Tendencias del gasto social, dinámicas del gasto frente a la crisis y perspectivas de pisos universales de la seguridad social

A. Introducción

Tras un período de ajuste estructural que afectó prácticamente a todas las economías de la región y que significó una drástica contracción del gasto público —en particular el orientado a los sectores sociales—, en las últimas dos décadas los países de la región han hecho un significativo esfuerzo por aumentar nuevamente los recursos disponibles para la ejecución de la política social. Casi todas las partidas de gasto público social han registrado un incremento no solo en términos relativos, sino también absolutos, con contadas excepciones de países y períodos.

Buena parte de este esfuerzo ha tenido una estrecha relación con el crecimiento económico, que facilitó la expansión paulatina pero bastante sistemática de los recursos. Los aumentos en los presupuestos totales, y de los sectores sociales en particular, han sido mayores que los del PIB —sobre todo en la década de 1990—; pero también contracciones menores del PIB han provocado caídas presupuestarias mayores a lo esperado. Si bien el comportamiento procíclico de las ejecuciones presupuestarias se guía en general por principios de responsabilidad fiscal y recomendaciones internacionales, en algunas áreas del gasto, como educación, salud o asistencia social, la contracción presupuestaria, principalmente de los gastos corrientes, puede tener altos costos económicos y sociales. Aunque

el recorte puntual de los gastos de inversión de un sector en particular puede no tener mayores repercusiones en las economías nacionales, un ajuste de mediano y largo plazo tiene consecuencias en el deterioro de la infraestructura y los insumos materiales muchas veces necesarios para la producción de los servicios sociales.

En un intento inédito, por lo generalizado, de contrarrestar la tendencia procíclica del gasto en momentos en que esto significa su caída, la mayoría de los países de la región tomaron medidas de aumento del gasto público, en general transitorias, para enfrentar los embates de la crisis financiera global y sus posteriores consecuencias. En gran parte, estas medidas se adoptaron para aminorar los efectos de la crisis en las economías reales, mantener activas las economías locales y regionales, contener el

aumento del desempleo y, en definitiva, de la pobreza. En las próximas páginas se revisan las tendencias de largo plazo, como también los últimos cambios de la expansión del gasto público social en los países, desde que se vislumbró el impacto que podía tener la crisis

económica internacional. Finalmente, se revisa y proyecta la situación de la seguridad social y las posibilidades financieras, en el corto y largo plazo, de implementar una pensión mínima para los adultos mayores basada en un enfoque de derechos.

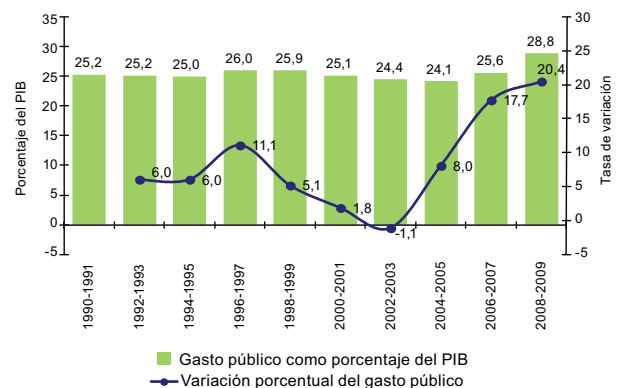
B. El gasto social en América Latina

A nivel regional, el gasto público, en especial el gasto social, ha registrado un aumento muy marcado en las últimas dos décadas. La partida que más se incrementó fue la de seguridad y asistencia social (con un aumento equivalente al 3,5% del PIB seguida por la de educación. Pero entre los países de gasto social per cápita inferior a 1.000 dólares, la principal partida de gasto es la educación. Solo entre los países de mayor desarrollo relativo, la seguridad y la asistencia social tienen una mayor gravitación. Estas tendencias no se alteraron ante la crisis financiera internacional, pero sí el comportamiento tradicionalmente procíclico del gasto social. En forma generalizada, ante la crisis, los países optaron por expandir transitoriamente sus gastos en vez de contraerlos, como era lo tradicional. Sin embargo, la expansión no siempre tuvo un énfasis social, aunque las repercusiones en ese ámbito fueron significativas.

1. Tendencias de largo plazo

El reconocimiento progresivo de la importancia del gasto público social como instrumento para canalizar recursos hacia la población más pobre y la relevancia del desarrollo social para potenciar el desarrollo económico han conducido a los países de la región a aumentar paulatinamente ese gasto. A nivel regional, el gasto público y, en especial, el gasto social han registrado un incremento muy significativo en las últimas dos décadas: si bien hasta el período 2006-2007 la prioridad macroeconómica del gasto público se había mantenido en un nivel relativamente estable, con leves disminuciones entre 2002 y 2005, registró un marcado repunte del 20% en 2008 y 2009, debido a un intento temprano de hacer frente a los efectos de la crisis financiera mundial. El esfuerzo por aumentar el gasto público significó que, al finalizar la primera década del nuevo siglo, la cantidad de recursos, así como su participación en el PIB, fuera la más alta registrada en las dos últimas décadas (véase el gráfico V.1).

Gráfico V.1
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (21 PAÍSES): EVOLUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO TOTAL, 1990-1991 A 2008-2009^a
(En porcentajes del PIB y tasas de variación entre subperíodos)



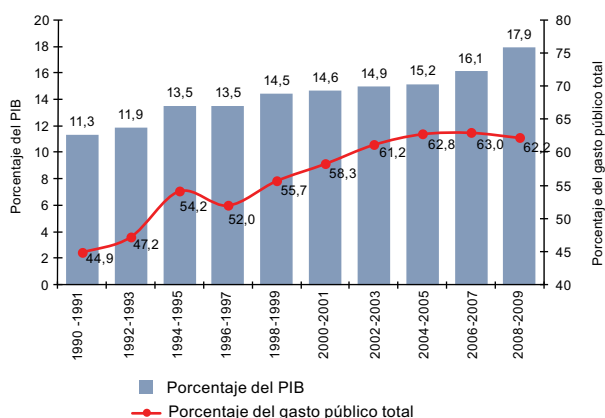
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), base de datos sobre gasto social.

^a Las cifras del gasto público total corresponden a cifras oficiales provenientes de la clasificación funcional del gasto público y pueden no coincidir con las provenientes de la clasificación económica.

Por otra parte, pese a la relativa estabilidad del gasto público total durante el período 1990-2009, es notable su alza en términos absolutos: aun considerando la caída absoluta registrada en 2002 (de un 3,7% a nivel regional solo ese año), el gasto público casi se duplicó entre 1990 y 2009, para situarse actualmente en torno a los 900.000 millones de dólares en la región.

Sin embargo, el gasto público social ha registrado un crecimiento constante a nivel regional, con algunas desaceleraciones asociadas a diversas crisis subregionales como la del “tequila” en 1994-1995 o la de la Argentina y el Uruguay en 2002-2003 (véase el gráfico V.2). Dada la relativa estabilidad del gasto público total, el gasto social ha ido ganando terreno de forma relativamente sistemática: mientras en 1990-1991 correspondía al 45% del gasto total, ya a comienzos del tercer milenio representaba el 58%, para llegar al 63% en 2006-2007. La leve caída de su participación en el último bienio examinado (2008-2009) se debe principalmente al mayor aumento relativo de los gastos no sociales, sobre todo en 2008. En 2009, el gasto público registró una nueva alza, con un repunte del gasto social (del 9,3% con respecto a 2008).

Gráfico V.2
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (21 PAÍSES): EVOLUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO SOCIAL, 1990-1991 A 2008-2009
(En porcentajes del PIB y del gasto público total)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), base de datos sobre gasto social.

Además, es preciso reconocer la enorme heterogeneidad de la situación de los países, no tanto en términos de aumento del gasto social, sino de los niveles relativos y absolutos de ese aumento. En el bienio 2008-2009 hay evidentes diferencias en la prioridad macroeconómica que otorgan los países al gasto social, que va desde menos del 10% del PIB en el Ecuador, Guatemala, Panamá, el Paraguay, el Perú y la República Dominicana, hasta niveles que duplican la cifra anterior en la Argentina, el Brasil, Costa Rica, Cuba y el Uruguay (véanse las coberturas institucionales del gasto público social en el recuadro V.1). Esto ocurre pese a que casi todos los países han hecho

esfuerzos por aumentar la prioridad macroeconómica del gasto social desde los años noventa.

En ambas décadas, hay contadas excepciones de disminución del gasto social como porcentaje del PIB: Cuba, que lo redujo drásticamente a partir de 1994 y hasta 1998, no cambió esta tendencia, debido al fuerte ajuste estructural que debió realizar en el llamado “período especial”, asociado a la pronunciada caída del PIB ocurrida en los años que precedieron al ajuste del gasto social, y Jamaica, que ha mantenido su gasto social relativamente estable desde 2000, con leves oscilaciones y una tendencia al alza en 2008 y 2009.

En términos generales, entre los períodos 1990-1991 y 2000-2001, en la mayoría de los países los esfuerzos por aumentar el gasto social como porcentaje del PIB fueron levemente más significativos que en el período posterior: en el primer período, el aumento de la prioridad macroeconómica del gasto fue en promedio de 3 puntos porcentuales del PIB, mientras que entre 2000-2001 y 2008-2009 fue solo de 2,9 puntos porcentuales. La excepción más notable a esta tendencia fue, como ya se señaló, la de Cuba, país al que se agregaron, aunque con menor magnitud, la Argentina (con un aumento del 2,7% y el 4,1% del PIB en los respectivos períodos), Costa Rica (2,4% y 2,9% del PIB), Honduras (2,0% y 3,1% del PIB), Nicaragua (1,5% y 4,5% del PIB) y Trinidad y Tabago (2,2% y 3,0% del PIB).

Pero las diferencias entre países no están relacionadas solamente con la participación del gasto social en el PIB, sino también con el nivel de riqueza de cada país. Los diferentes niveles de desarrollo, así como la carga impositiva y el consecuente presupuesto público general y específicamente social, ocasionan grandes disparidades en la cantidad de recursos por habitante que los Estados pueden destinar a áreas sociales como la educación, la salud, la seguridad y la asistencia social, entre otras. En el extremo de menor gasto por habitante (menos de 300 dólares por persona) se encuentran Bolivia (Estado Plurinacional de), el Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y el Paraguay (el Ecuador, Guatemala y el Paraguay registran además una baja prioridad macroeconómica del gasto social). Por otra parte, los países con mayor gasto social per cápita (sobre 1.000 dólares) son la Argentina, el Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Trinidad y Tabago y el Uruguay (solo Chile y Trinidad y Tabago registran una prioridad macroeconómica de su gasto social de carácter intermedio). En promedio, los países de mayor gasto pueden destinar ocho veces los recursos por habitante respecto de los más restringidos en este ámbito (véase el gráfico V.3).

Con todo, la gran mayoría de los países han aumentado de forma sistemática el gasto social por habitante, y todos registraron un aumento en el período 2008-2009, dominado por los efectos de la crisis financiera internacional.

**Recuadro V.1
ACTUALIZACIÓN DEL GASTO SOCIAL**

Para la actualización del gasto social a los efectos de la presente edición del *Panorama social de América Latina*, se obtuvieron datos sobre la clasificación funcional del gasto público, en concordancia con las series de gasto total y sectorial difundidas en ediciones anteriores de esta publicación. Dado que se consiguió información hasta 2010 en 10 de los 21 países considerados, se optó por publicar esas cifras debido a la importancia de contar con datos recientes, aunque fueran de carácter provisional, estimativo o parcial. Los datos

se actualizaron durante el tercer trimestre de 2011 y el proceso se cerró a mediados de septiembre.

En la mayoría de los casos, se logró reunir datos sobre la ejecución presupuestaria de la administración central, y en varios de ellos se accedió a las cifras correspondientes al gasto efectivo de las entidades de organización presupuestaria autónoma, los gobiernos locales y las empresas públicas no financieras. Aunque las diferencias en materia de cobertura institucional dificultan la comparación entre los países, se optó por

publicar los datos más amplios disponibles sobre cada país, salvo cuando estos presentaban restricciones significativas para la construcción de una serie relativa al período 1990-2010. Esto obedece a que el interés primordial de la Comisión es establecer, con la mayor exactitud posible, el monto de gasto público social de cada país, a fin de representar el esfuerzo de los Estados en esta materia.

A continuación se clasifican los países según la cobertura institucional de las series de gasto social utilizadas:

Sector público total (SPNF + EPF): Costa Rica

Sector público no financiero (GG + EPNF): Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil y El Salvador

Gobierno general (GC + GL): Perú

Gobierno central (GCP + EA): Colombia, Chile, Cuba, Guatemala, Honduras, Jamaica, Panamá y República Dominicana

Presupuesto general del Estado (sector público menos seguridad social, EPF, EPNF y gobiernos autónomos y descentralizados): Ecuador (la Constitución aprobada en 2008 establece el presupuesto general del Estado como instrumento de determinación y gestión de los ingresos y egresos del Estado), Trinidad y Tabago y Uruguay

Gobierno central presupuestario: Nicaragua, Paraguay y Venezuela (República Bolivariana de)

Sector público presupuestario: México

donde SPNF = sector público no financiero; EPF = empresas públicas de carácter financiero; GG = gobierno general; EPNF = empresas públicas no financieras; GC = gobierno central; GL = gobiernos locales; GCP = gobierno central presupuestario, y EA = entidades estatales autónomas.

Dado que la adopción del sistema clasificatorio del *Manual de estadísticas de finanzas públicas 2001* del Fondo Monetario Internacional (FMI) —armonizado con el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) de 1993— es muy reciente en varios países, la serie 1990-2010 no siempre es compatible a nivel de subfunciones o subgrupos. La mayoría de los países publican la clasificación funcional agregada y utilizan clasificaciones propias.

En cuanto a los problemas de continuidad de las cifras, en algunos casos particulares, el cambio se tradujo en falta de información sobre la serie completa o respecto de ciertos años o funciones. Por ejemplo, no hay información comparable para Bolivia (Estado Plurinacional de) entre 1990 y 1994, y se carece de datos actualizados sobre el SPNF posteriores a 2008; la serie de El Salvador se inicia en 1993 y hay un cambio metodológico y de cobertura desde 2004, por lo que a partir de dicho año los datos no son estrictamente comparables con los de años anteriores. La serie del Ecuador se refiere a la administración central hasta 2007 y al presupuesto general del Estado desde 2008, y no incluye cifras sobre seguridad social (función de protección social); esto también ocurre con la serie de Nicaragua. En Jamaica y Trinidad y Tabago no fue posible construir la serie completa de 1997 a 1999 debido a la falta de información sobre los

períodos intermedios. En Colombia hay un cambio metodológico y una modificación de la base del PIB, por lo que la serie no es comparable entre los períodos 1990-1999 y 2000-2010. En el Perú, mientras la serie del período 1990-1999 corresponde al gobierno central presupuestario, la de 2000 en adelante se refiere al gobierno general. Por último, cabe señalar que en el caso de Venezuela (República Bolivariana de) se dispone de las series correspondientes al gasto público acordado (ley de presupuesto y sus modificaciones al 31 de diciembre de cada año) y al gasto público pagado que se iniciaron en 1999. La cobertura institucional de las cifras de este país corresponde al gobierno central presupuestario. Como se trata de un país federal, es posible que en las cifras publicadas se haya subestimado el gasto social total en mayor medida que en otros países que consignan esta cobertura. De manera similar, las cifras para México corresponden al gasto programable del sector público presupuestario de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal; los antecedentes disponibles sobre el alto grado de descentralización de la ejecución del gasto en este país indican que es necesario considerar las cifras con mayor precaución que en otros casos, dado que podría haber una subestimación del nivel de gasto social (véanse ejemplos de la ejecución centralizada y descentralizada del gasto social en CEPAL (2002)).

Al igual que en las ediciones anteriores, en el *Panorama social de América Latina 2011* se presentan los datos del gasto social a partir de promedios bienales. Los indicadores publicados son el gasto público social total y las funciones o sectores que lo componen —educación, salud, seguridad y asistencia social, vivienda, saneamiento y otras funciones no incluidas en las categorías anteriores— como porcentaje del PIB, en dólares por habitante y como porcentaje del gasto público total. En el caso de este último indicador, se utiliza la información oficial respectiva de los países, pero es posible que estas cifras difieran de las publicadas sobre la base de otros sistemas, como la clasificación económica o administrativa de los gastos, tanto porque incluyen o no el pago de intereses de la deuda pública como porque al clasificar las erogaciones se emplean distintas opciones metodológicas.

A diferencia de los años anteriores, en esta edición se incluye el cambio efectuado por la CEPAL en el año básico del PIB en dólares constantes. De ahora en adelante, todos los cálculos en dólares constantes del gasto social estarán expresados a precios de 2005.

Para el cálculo de las relaciones porcentuales se utilizan las cifras anuales a precios corrientes de cada país. Estas proporciones se aplican luego a las series del PIB en dólares de 2005, lo que permite derivar el gasto social per cápita expresado

Recuadro V.2 (conclusión)

en dicha moneda. Es posible que con ello se produzcan algunas variaciones respecto de los datos en moneda constante informados por los países, lo que depende del grado de apreciación o depreciación cambiaria implícito en la paridad oficial pertinente en relación con el año 2005, así como de los datos de población en que se base el recuento por habitante.

Los datos en moneda corriente sobre el gasto público total y social, así

como la desagregación sectorial de este último, corresponden a cifras oficiales proporcionadas por las respectivas instituciones gubernamentales. Según el país de que se trate, estas pueden ser direcciones, departamentos, secretarías o subsecretarías de planificación, de presupuestos o de políticas sociales de los ministerios de hacienda, finanzas o economía. También se obtuvieron datos de ejecución presupuestaria de las contadurías generales de la nación,

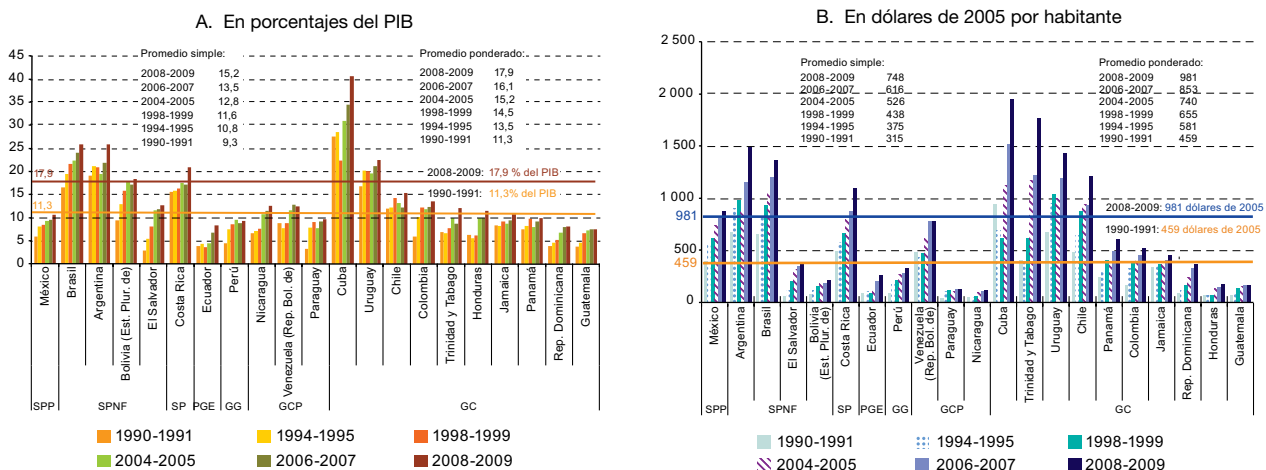
los tesoros nacionales y, ocasionalmente, los bancos centrales, institutos nacionales de estadísticas y sistemas de información social y económica de los países.

Los datos sobre el PIB en dólares constantes de 2005 corresponden a cifras oficiales de la CEPAL y las cifras de población provienen de las proyecciones del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL.

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.

Gráfico V.3

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (21 PAÍSES): EVOLUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO SOCIAL, 1990-1991 A 2008-2009^a



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), base de datos sobre gasto social.

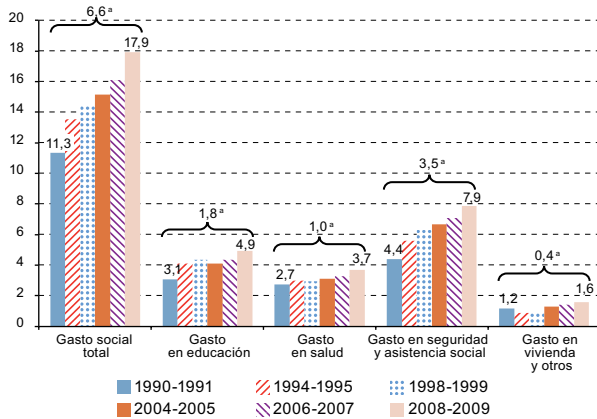
^a SPP = sector público presupuestario; SPNF = sector público no financiero; SP = sector público; PGE = presupuesto general del Estado; GG = gobierno general; GCP = gobierno central presupuestario; GC = gobierno central.

2. Evolución sectorial del gasto social

Todas las grandes partidas de gasto social han aumentado, por lo que también han estado sometidas en mayor o menor medida a las oscilaciones procíclicas asociadas al comportamiento de las economías de la región. Pese a lo anterior, este crecimiento ha sido dispar: la seguridad y asistencia social registró el mayor crecimiento, de 3,5 puntos porcentuales del PIB, más de la mitad de todo el incremento del gasto público social. Esto se debe, en alguna medida, al auge de las políticas de lucha contra la

pobreza y, en particular, de los programas de transferencias condicionadas. Pero, sin duda, el envejecimiento poblacional y los compromisos públicos asociados de financiamiento y pago de jubilaciones y pensiones, así como la mejoría de los sistemas de seguridad social de varios países de la región, incluido el fortalecimiento de sus componentes no contributivos, han favorecido un incremento mayor de este sector respecto de los restantes (véase el gráfico V.4).

Gráfico V.4
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (21 PAÍSES): EVOLUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO SOCIAL SEGÚN SECTORES, 1990-1991 A 2008-2009
 (En porcentajes del PIB)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), base de datos sobre gasto social.

^a Aumento del gasto en puntos porcentuales entre los periodos 1990-1991 y 2008-2009.

La segunda partida que ha registrado mayor crecimiento es el gasto en educación, acorde con los diversos compromisos internacionales que han suscrito los países de la región. La participación de este gasto en el PIB ascendió poco más del 50%. Sin embargo, este incremento significativo de recursos no ha estado exento de volatilidades, ya que el sector educativo junto con el de la salud suelen sufrir los embates de los ajustes fiscales, sobre todo mediante la restricción del gasto en inversión y el congelamiento de los gastos corrientes, principalmente los asociados al pago de remuneraciones de funcionarios públicos. Los gastos en seguridad y asistencia social, junto con el gasto en educación, representan el 80% del incremento del gasto social total entre los periodos 1990-1991 y 2008-2009.

Por otra parte, de los sectores que se pueden distinguir en el conjunto de países analizados, la partida que financia los sistemas públicos de salud ha tenido un crecimiento bastante bajo en las últimas dos décadas. En parte, ello obedece a la tendencia en varios países a la expansión de los servicios de salud por parte del sector privado, en forma consistente con las reformas posteriores al ajuste estructural de los años ochenta. Pero también se debe a que es una partida altamente procíclica, con un componente significativo de gasto en inversión, que se ve fuertemente castigado en periodos de contracción económica o de crecimiento bajo (CEPAL, 2008). Finalmente, la partida de menor crecimiento relativo ha sido la de vivienda y otros gastos sociales (agua y saneamiento, entre otros), debido, entre otros factores, a la progresiva privatización de las inversiones en infraestructura sanitaria y la externalización de la ejecución de programas de vivienda social, que han combinado tanto financiamiento público como privado (de los hogares, por medio del aumento del acceso a mecanismos hipotecarios).

Sin embargo, la relevancia de los sectores en los distintos países es diversa, así como la evolución del gasto en cada una de estas partidas. Por ejemplo, al agrupar a los países según sus niveles de gasto social per cápita actual, se pueden apreciar notables diferencias (véase el gráfico V.5).

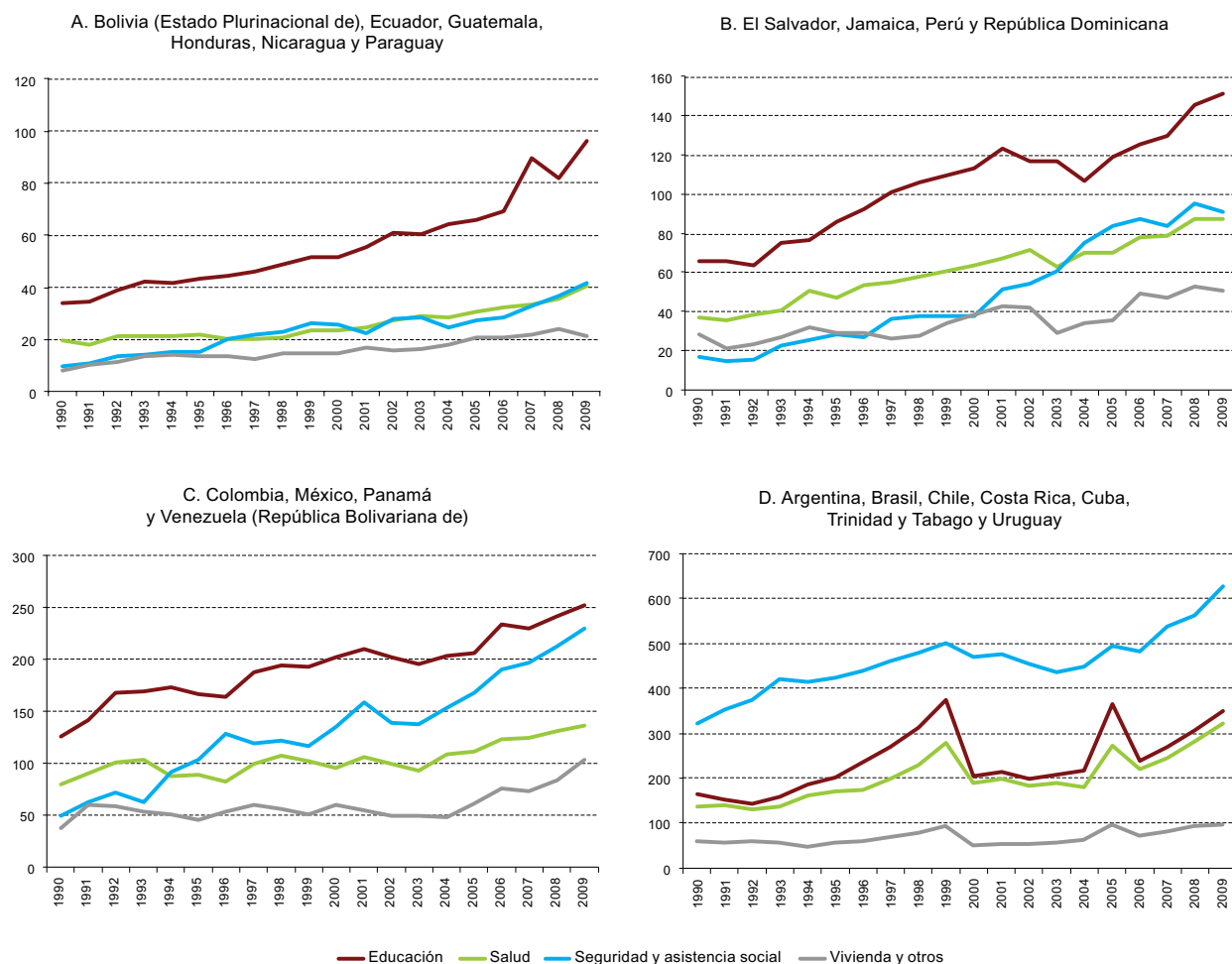
El primer grupo, conformado por Bolivia (Estado Plurinacional de), el Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y el Paraguay, cuyo gasto actual es inferior a los 300 dólares per cápita (véase el gráfico V.5.A), concentra la gran mayoría de los recursos del área social en el gasto en educación, que además ha sido el de mayor expansión absoluta (de 34 a 96 dólares per cápita en todo el período). Las restantes partidas de gasto registran niveles per cápita más moderados, aunque en el caso de la seguridad y asistencia social ha habido una expansión relativa mayor (un 8% anual en todo el período, para llegar a un nivel de 42 dólares por persona).

Un segundo grupo, conformado por países que hoy destinan entre 300 y 500 dólares por habitante a los sectores sociales (El Salvador, Jamaica, Perú y República Dominicana), también registra una tendencia similar al anterior: el mayor gasto lo concentra el sector de la educación (actualmente 152 dólares per cápita), pero con mayor ritmo de expansión en la seguridad y asistencia social (9,4% anual) alcanza un nivel de 93 dólares per cápita. Estas últimas partidas de gasto han ido convergiendo con el gasto en salud, que a principios de los años noventa tenía mayor significación relativa (véase el gráfico V.5.B).

En el tercer grupo, cuyos gastos fluctúan entre 500 y 900 dólares per cápita (Colombia, México, Panamá y Venezuela (República Bolivariana de)), si bien la educación todavía predomina como el sector que concentra mayores recursos, la expansión del gasto en seguridad y asistencia social ha sido también notable (un 8,5% anual en comparación con el 3,7% anual en el primer sector mencionado), para llegar a un nivel de 229 dólares por habitante, levemente inferior a los 252 destinados a la educación (véase el gráfico V.5.C). También se aprecia que en el conjunto de estos países, el sector de la salud es el que menos aumento ha registrado (2,9% anual).

Finalmente, el cuarto grupo, conformado por países cuyos gastos per cápita superan los 1.000 dólares por persona (Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Trinidad y Tabago y Uruguay), registran una tendencia diferente a los restantes grupos: el gasto en seguridad y asistencia social es, por mucho, el más significativo, y hacia 2008-2009 prácticamente duplica el gasto en educación (351 dólares por persona en 2009), que es el segundo más relevante. Pese a lo anterior, su ritmo de expansión ha sido notablemente más bajo que el de los restantes grupos de países (3,6% anual), siendo superado por la expansión relativa del sector de la salud (4,6% anual), aunque con menos de la mitad de recursos por persona (322 dólares en comparación con los 629 destinados a seguridad y asistencia social).

Gráfico V.5
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (21 PAÍSES): EVOLUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO SOCIAL PER CÁPITA SEGÚN SECTORES Y GRUPOS DE PAÍSES^a, 1990 A 2009
 (En dólares de 2005)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), base de datos sobre gasto social.

^a Promedios simples de los datos de gasto de los distintos países.

3. Prociclicidad del gasto social respecto del crecimiento económico

No obstante la persistencia de los países de la región en aumentar el presupuesto público, y en particular el social, en la mayoría de los casos, las oscilaciones de ambos han estado condicionadas por la evolución de sus economías.

Si bien el comportamiento presupuestario ligado al ciclo económico refleja en general una dirección fiscal responsable, en ocasiones puede lesionar procesos de desarrollo económico y social que dependen de un flujo estable de recursos. Esto obedece a que muchos de los procesos de producción de los servicios públicos implican

una alta proporción de gastos recurrentes que derivan de compromisos legales o contractuales (por ejemplo, salarios, jubilaciones y pensiones). En algunos casos, las fluctuaciones presupuestarias pueden afectar la continuidad y los niveles de remuneraciones del personal requerido para mantener los servicios públicos y, en otros, la obligatoriedad de las erogaciones públicas conlleva ajustes drásticos en las inversiones (por ejemplo, la construcción, el mantenimiento y la renovación de establecimientos públicos como escuelas y hospitales y el equipamiento respectivo).

Aunque el manejo fiscal responsable es una pieza clave del desarrollo económico de largo plazo, los sobreajustes que suelen registrarse en el gasto público y en el gasto social por disminuciones del ritmo de crecimiento afectan negativamente los mismos procesos que se pretende salvaguardar mediante el manejo fiscal prudente. En términos generales, los episodios de reducción del gasto público social en la región son mayores que la caída del crecimiento: entre 1991 y 2009 se registraron 48 episodios de reducción absoluta del nivel de gasto público social en los distintos países, y en un 88% de las ocasiones (42) la baja fue superior a la registrada en el PIB (incluidos períodos en los que el PIB se mantuvo en aumento).

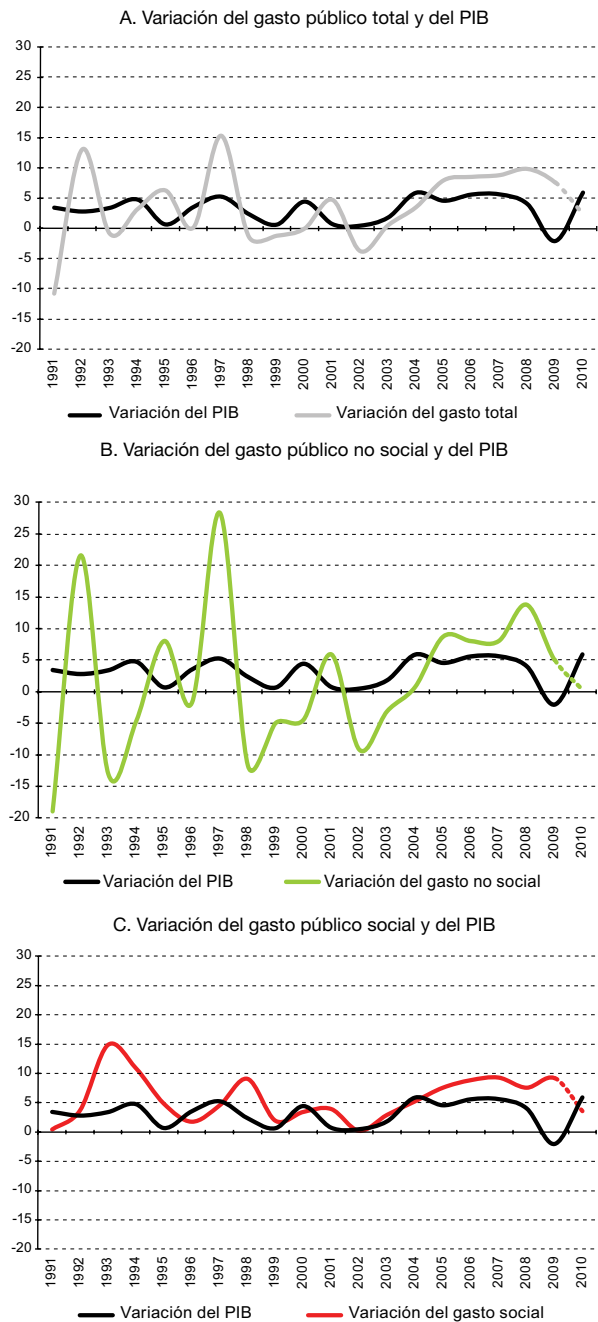
No obstante lo anterior, la sensibilidad del gasto social al ciclo económico es inferior a la del presupuesto en su conjunto y, obviamente, a la de los gastos públicos no sociales, como se puede apreciar en el gráfico V.6. En este sentido, pese a su prociclicidad, el gasto social ha sido más defendido de las fluctuaciones económicas que el presupuesto público destinado a fines no sociales.

Una vez más, la realidad regional no necesariamente refleja las particularidades existentes. Mientras países como la Argentina, el Brasil, México, Panamá, la República Dominicana y el Uruguay exhiben una alta correlación entre la evolución del PIB y la del gasto social, otros como Bolivia (Estado Plurinacional de), Costa Rica, Guatemala, Honduras, Jamaica, el Paraguay y Trinidad y Tabago registran una evolución del gasto social más bien desvinculada del crecimiento, aunque esto implica no solo defensa del presupuesto de los servicios sociales en momentos de contracción económica, sino también expansiones de este que no se condicen con el nivel de crecimiento (muy inferiores o muy superiores) (CEPAL, 2010a).

Por último, cabe considerar que los criterios de evaluación basados en el comportamiento presupuestario, según su grado de apego a los ciclos del crecimiento económico, solo constituyen una referencia general, ya que el hecho de que el gasto social no sea altamente procíclico tampoco implica una baja valoración del área social, pues en la mayoría de las ocasiones ha significado una expansión efectiva del gasto. Un comportamiento inercial del gasto social puede ser poco sensible a las contracciones económicas, pero también a la expansión económica, y no es deseable un gasto social por completo contracíclico, pues esto conllevaría su reducción precisamente en períodos de crecimiento económico. Es esperable que algunas partidas específicas de gasto sean contracíclicas, como las que financian programas de emergencia en períodos de crisis y aumento de la pobreza, que disminuyen en períodos de auge económico. Otras pueden ser más estables, asociadas a compromisos regulares de pago, como la seguridad social y, en otros casos, es esperable que, dentro de márgenes que no produzcan desequilibrios macroeconómicos ni tendencias al déficit fiscal, se expandan cuando hay crecimiento. En definitiva, el gasto público social debería tener un comportamiento asimétrico en cuanto a su contraciclicidad:

más bien procíclico en las fases de prosperidad, con el incremento de gastos que permitan generalizar el ejercicio de los derechos sociales —cuidando la sustentabilidad de su financiamiento en el largo plazo— y más bien contracíclico en períodos de freno del crecimiento económico.

Gráfico V.6
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (21 PAÍSES): VARIACIÓN ANUAL DEL GASTO PÚBLICO TOTAL, DEL GASTO PÚBLICO NO SOCIAL, DEL GASTO PÚBLICO SOCIAL Y DEL PIB, 1991-2010^a
(En porcentajes)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), base de datos sobre gasto social.

^a Promedios ponderados. Las cifras de gasto de 2010 son estimaciones realizadas a partir de datos de diez países.

4. El gasto social en la región frente a la crisis financiera

Ante la crisis financiera de 2008 y 2009, los países de la región pusieron en marcha medidas de diversa índole. A diferencia de otras ocasiones similares (como las crisis de las décadas de 1980 y 1990), las medidas no apuntaron a la contracción del gasto, sino a su expansión transitoria (véase el gráfico V.6). Tales medidas incluyeron acciones en materia de política monetaria y financiera, política fiscal, política cambiaria y de comercio exterior, políticas sectoriales, laborales y sociales, y financiamiento multilateral (CEPAL, 2010a).

Las diversas medidas de política económica tomadas se pueden dividir, a grandes rasgos, entre las orientadas a restaurar la confianza y poner en funcionamiento los mercados financieros y las destinadas a apuntalar la debilitada demanda agregada y la capacidad de generación de empleos. En un primer momento, los bancos centrales de la región impulsaron una serie de medidas de diversa índole con el fin de garantizar un nivel adecuado de liquidez en los mercados financieros locales. La disminución generalizada de la tasa de inflación, favorecida por la baja de los precios de los alimentos y la energía, facilitó la flexibilización de la política monetaria, tanto en países que se ajustan a metas explícitas de inflación como en los que siguen la evolución de algún agregado monetario o algún otro criterio operativo. El descenso de las tasas de interés de referencia de la política monetaria fue acompañado de una flexibilización de los requisitos de liquidez y de un incremento de la expansión monetaria, en especial del crédito interno, al tiempo que disminuían los activos de reserva, situación que fue revirtiéndose a lo largo de 2009.

Sin embargo, los bajos grados de monetización y la escasa densidad de los mercados financieros de la región, así como la incertidumbre que caracterizó a la actividad financiera desde fines de 2008 y durante buena parte de 2009, limitaron el efecto de estas medidas sobre el nivel de actividad. En algunos casos, se procuró compensar la falta de dinamismo de la oferta de financiamiento por medio de un papel activo de la banca pública, instrumento cuya eficacia depende de la importancia del crédito en la economía y de la participación de la banca pública en el crédito total, lo que restringe su significación a un número limitado de países.

De manera más general, y sobre todo a partir del primer trimestre de 2009, los países anunciaron y fueron implementando gradualmente una estrategia basada en el aumento del impulso fiscal, tanto por medio de una disminución temporal y selectiva de impuestos como

de una elevación del gasto público. De este modo, se observó, en especial, un incremento del gasto corriente —en general, asociado al aumento de las transferencias directas— y, en menor medida, un mayor gasto de capital (CEPAL, 2010c).

En cuanto a la elevación del gasto público, no todos los países tomaron medidas en esa línea durante 2009: Cuba, Jamaica, la República Dominicana, el Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de) lo redujeron, aunque solo la República Dominicana lo hizo de forma realmente significativa (una reducción del 10,7% respecto de 2008). No obstante, cabe consignar que este país, junto con Cuba, había registrado una marcada expansión del gasto durante 2008, bastante superior a la caída del año siguiente. Varios de los restantes países registraron entre 2008 y 2009 un incremento de más del 10% del gasto, entre ellos la Argentina, Chile, Colombia, El Salvador, el Paraguay y el Perú; otros, como el Brasil, el Ecuador y Honduras, lo aumentaron por sobre el 7% (véase el cuadro V.1).

Sin embargo, el aumento del gasto fiscal se concentró principalmente en sectores sociales, salvo en el Brasil, El Salvador, México y el Paraguay, donde se expandió a un ritmo mayor el gasto no social. En tanto, en Cuba, el Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de) la contracción se centró en los gastos no sociales, lo que favoreció una expansión pronunciada del gasto social. Jamaica y la República Dominicana contrajeron todos los gastos; en el primer país, fue mayor la reducción del gasto social y en el segundo, se enfatizó la contracción del gasto público no social. Por otra parte, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá aumentaron su gasto público total aun tomando medidas de contracción del gasto social, y el resto de los países expandieron su gasto social a un ritmo menor que las restantes partidas de gasto.

Entre las medidas fiscales más recurrentes, destacaron la disminución de impuestos, el aumento de subsidios y beneficios tributarios y el aumento o anticipación del gasto. En el ámbito social y productivo, son relevantes el incremento de los recursos destinados a la construcción de viviendas, agua y saneamiento, el fomento a las pequeñas y medianas empresas y al sector agropecuario (facilitación de créditos y plazos), y el fortalecimiento de las políticas laborales (seguros de desempleo, subsidio a la contratación y programas de empleo) y de los programas sociales, especialmente los de transferencias condicionadas.

Cuadro V.1
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (21 PAÍSES): NIVELES DE GASTO PÚBLICO TOTAL, GASTO PÚBLICO NO SOCIAL
Y GASTO SOCIAL, Y TASAS DE VARIACIÓN ANUAL, 2007-2010
(En porcentajes del PIB y tasas de variación anual)

	Gasto público total				Gasto público social				Gasto público no social			
	2007	2008	2009	2010	2007	2008	2009	2010	2007	2008	2009	2010
En porcentajes del PIB												
Argentina	36,0	38,3	43,2	...	22,9	24,0	27,8	...	13,1	14,3	15,4	...
Bolivia (Estado Plurinacional de)	41,9	45,1	45,0	...	17,4	18,4	24,5	26,7
Brasil	33,4	33,7	36,8	...	24,4	24,8	27,1	...	8,9	8,8	9,8	...
Chile	18,7	21,2	24,8	23,5	12,3	14,1	16,7	15,6	6,4	7,1	8,1	7,8
Colombia	17,5	18,1	20,8	19,8	12,7	12,6	14,5	13,6	4,8	5,5	6,3	6,2
Costa Rica	47,4	54,2	57,7	58,5	17,4	19,3	22,4	22,9	30,0	34,9	35,3	35,5
Cuba	68,2	78,1	75,6	70,0	36,9	40,7	40,7	38,2	31,3	37,5	34,9	31,8
Ecuador	...	33,1	36,2	37,4	8,8	7,3	9,4	9,8	...	25,8	26,9	27,6
El Salvador	25,2	26,5	33,1	...	11,3	12,3	13,0	...	13,9	14,2	20,0	...
Guatemala	14,3	13,6	14,2	...	7,2	7,0	8,1	...	7,1	6,6	6,1	...
Honduras	18,8	22,2	24,3	23,2	10,2	10,7	12,2	12,0	8,6	11,5	12,1	11,2
Jamaica	42,6	49,9	50,9	...	9,0	10,7	10,7	...	33,6	39,1	40,2	...
México	16,9	18,3	20,7	20,2	9,6	10,0	11,2	11,3	7,4	8,3	9,5	8,9
Nicaragua	22,8	22,8	23,6	...	11,8	12,3	13,0	...	11,0	10,6	10,6	...
Panamá	19,4	20,3	20,6	...	9,3	9,3	10,5	...	10,1	11,0	10,0	...
Paraguay	18,6	16,3	21,6	21,6	9,2	8,4	11,0	11,0	9,4	7,9	10,6	10,6
Perú	17,6	18,7	20,8	21,5	8,8	8,7	10,0	10,0	8,7	10,0	10,8	11,6
República Dominicana	17,7	19,7	17,0	16,4	8,0	8,6	7,7	7,3	9,6	11,2	9,3	9,2
Trinidad y Tabago	27,4	35,1	8,9	12,1	18,5	23,0
Uruguay	30,8	28,7	28,0	...	22,0	21,7	23,3	...	8,8	7,1	4,6	...
Venezuela (República Bolivariana de) ^a	26,4	26,9	27,5	...	12,0	11,7	13,2	...	14,3	15,2	14,4	...
América Latina y el Caribe	26,0	27,4	30,2	...	16,4	17,0	18,9	...	9,6	10,5	11,3	...
Tasas de variación anual, en dólares de 2005												
Argentina	19,9	13,5	13,7	...	19,5	11,9	16,8	...	20,8	16,4	8,5	...
Bolivia (Estado Plurinacional de)	26,5	14,4	2,9	...	7,8	12,5	44,3	15,8
Brasil	9,8	6,2	8,7	...	9,1	7,0	8,3	...	11,8	4,0	9,7	...
Chile	8,1	17,3	15,3	-0,6	7,0	18,5	16,6	-1,7	10,3	15,1	12,8	1,6
Colombia	10,0	7,1	16,4	-0,6	12,8	2,8	16,4	-1,7	3,5	18,3	16,3	2,0
Costa Rica	6,5	17,5	5,1	5,5	11,0	14,0	14,7	6,4	4,0	19,5	-0,2	4,9
Cuba	15,8	19,2	-1,9	-5,5	23,6	14,7	1,5	-4,3	7,8	24,5	-5,6	-6,9
Ecuador	9,8	7,0	28,5	9,0	4,5	6,4
El Salvador	-4,2	6,3	20,9	...	-4,5	10,0	2,4	...	-3,9	3,2	37,1	...
Guatemala	3,5	-1,3	4,7	...	-1,2	0,0	15,9	...	8,8	-2,7	-7,0	...
Honduras	9,1	23,1	7,0	-1,9	12,0	9,2	11,6	1,3	5,8	39,6	2,7	-5,1
Jamaica	-8,7	16,5	-1,1	...	-7,5	19,3	-3,7	...	-9,1	15,7	-0,3	...
México	8,3	9,8	6,2	2,8	3,7	5,9	5,6	6,0	14,9	14,9	7,0	-1,0
Nicaragua	2,7	2,9	2,0	...	8,6	7,2	4,3	...	-3,0	-1,7	-0,7	...
Panamá	9,6	15,0	4,8	...	15,0	10,0	17,1	...	5,0	19,6	-5,6	...
Paraguay	-1,5	-7,1	27,8	15,0	5,6	-3,1	26,0	15,0	-7,5	-11,1	29,6	15,0
Perú	4,5	16,9	12,1	12,4	7,8	8,4	15,9	8,1	1,3	25,6	8,8	16,4
República Dominicana	20,3	17,5	-10,7	4,1	10,5	12,1	-6,5	1,3	29,8	22,1	-14,0	6,4
Trinidad y Tabago	-10,3	31,0	10,5	39,0	-17,7	27,2
Uruguay	2,9	1,2	-0,1	...	15,5	7,0	10,5	...	-19,0	-13,1	-32,7	...
Venezuela (República Bolivariana de) ^a	-6,7	6,2	-0,8	...	-3,2	1,3	8,9	...	-9,4	10,3	-8,3	...
América Latina y el Caribe	5,4	14,3	3,5	...	9,3	7,7	9,3	...	0,3	23,8	-3,6	...

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), base de datos sobre gasto social.

^a Cifras estimadas para 2009 a partir de la información sobre gasto social pagado.

En una evaluación global, si bien a nivel regional se aprecia que frente a la crisis financiera el gasto social tuvo un comportamiento abiertamente contracíclico, incluso más pronunciado que el gasto no social y, en consecuencia, que el gasto total (véase el gráfico V.6), cuando se examinan las cifras de cada país, la conclusión

no sigue dicha línea: si bien el gasto público total tuvo un comportamiento contracíclico, esto se debió sobre todo a la considerable expansión del gasto público no social, muchas veces incluso en desmedro del gasto social. No obstante, cabe tener en cuenta que la expansión del gasto público no social tuvo efectos sociales, principalmente

por la generación de empleos y el aumento de los salarios, que no se computan como gastos sociales.

Finalmente, cabe consignar que de los diez países para los cuales hay información disponible en 2010 (Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Honduras, México, Paraguay, Perú y República Dominicana), cuatro habrían disminuido su gasto público (Chile, Colombia, Cuba y Honduras), mientras que los restantes habrían seguido expandiéndolo, aunque en diversos grados: el Ecuador incrementó en mayor medida su gasto social; el Perú y la

República Dominicana aumentaron más su gasto no social; el Paraguay elevó ambos al mismo ritmo, en tanto que México, en un contexto de expansión fiscal, disminuyó sus gastos sociales. Cabe consignar que de los cuatro países que contrajeron su gasto en 2010, Chile y Colombia lo hicieron reduciendo los gastos sociales pero expandiendo los no sociales. En cambio, Honduras hizo lo contrario: expandió levemente su gasto social y contrajo de manera más marcada su gasto no social. Cuba contrajo ambos gastos, aunque en menor medida los sociales.

C. La seguridad social en la región y las perspectivas para universalizar un piso mínimo de pensiones y jubilaciones

El mercado de trabajo no ha mostrado una capacidad suficiente para recaudar recursos provenientes de contribuciones sociales en la medida necesaria para introducir componentes solidarios de carácter no contributivo en los sistemas de protección social. Estas dificultades se intensificaron debido a las reformas de los sistemas de seguridad social, que los han fragmentado, privatizando la administración de sus fondos en buena parte de los países. Ante la necesidad de desarrollar sistemas de protección social con enfoque de derechos y, por tanto, basados en mecanismos contributivos y no contributivos de financiamiento, y con pilares solidarios para la distribución de sus recursos, se hace patente la necesidad en el mediano y sobre todo en el largo plazo de volver a reformar muchos de los sistemas de seguridad social, tanto en el ámbito estructural como en aspectos paramétricos, además de reforzar la afiliación en mercados de trabajo cada vez más formalizados. De lo contrario, en el largo plazo, habrá progresivas dificultades para financiar una protección social de carácter universal en sociedades cada vez más envejecidas y con menor proporción de fuerza de trabajo.

Uno de los desafíos permanentes de los países de la región consiste en generar sinergias positivas entre el crecimiento económico y la equidad social. Este desafío se plantea en el contexto de la modernización y convergencia productiva dirigida a la formación extendida de capacidades humanas, el empleo productivo y la participación ciudadana.

En este marco, la política social tiene un papel fundamental, pero es necesario un cambio de enfoque

en los sistemas de protección social ante el nuevo orden global y su efecto en las sociedades nacionales. Al respecto, es preciso reconocer que el mercado del trabajo no ha mostrado una capacidad incluyente ni en términos de generación de empleo de calidad ni en lo que se refiere a los niveles contributivos. Los mercados laborales de la región no han logrado transformarse en una puerta de entrada universal y dinámica a los esquemas de protección social (CEPAL, 2006).

Por lo mismo, la protección social no puede quedar restringida a los mecanismos contributivos del mundo laboral. Además de buscar formas de mejorar la capacidad de las economías nacionales para generar empleos aceptables y ampliar la base contributiva, se debe avanzar en lo que respecta a garantizar un financiamiento adecuado y estable para complementar la protección por la vía laboral con mecanismos solidarios de protección no contributiva.

Por lo tanto, el gran desafío es pensar en la solidaridad para la protección social de manera integral, vale decir, dentro y fuera del mundo del trabajo, en sistemas que combinen mecanismos contributivos y no contributivos. De ahí la importancia de potenciar los mecanismos de protección social no contributivos, que hoy en día se encuentran limitados por recursos fiscales generalmente escasos, lo que hace que, en la práctica, amplios sectores de la población queden excluidos de los sistemas formales de protección.

No obstante lo anterior, es preciso reconocer la significación de los recursos provenientes de modalidades contributivas para financiar la protección social, en particular, las prestaciones de seguridad social. Con esto, es posible tener noción de las posibilidades y restricciones de estos recursos para incorporar componentes solidarios de protección social para el adulto mayor, específicamente

apuntando a la propuesta reciente de la CEPAL de una pensión mínima universal (CEPAL, 2010d). Naturalmente, este margen de recursos destinable al financiamiento no contributivo de la seguridad social dependerá en buena medida de los esquemas actuales de funcionamiento de los sistemas de seguridad y la necesidad de reformarlos, si corresponde. Asimismo, parte de los recursos adicionales que se podrían recaudar por medio del fortalecimiento del mercado de trabajo pueden destinarse a otros componentes no contributivos de la protección social, por ejemplo, fomentar la solidaridad intergeneracional destinando parte de los aportes a la infancia.

En las páginas siguientes, se analizan las capacidades actuales y potenciales de financiamiento contributivo de la seguridad social. Esto se contrasta con el volumen total de transferencias de jubilaciones y pensiones y con los retos de financiamiento de una pensión básica universal para todos los adultos mayores. Se analizan así las posibilidades que tienen los diversos países de financiar un sistema de protección social universal para los adultos mayores, que combine tanto componentes contributivos como solidarios, desde el mercado de trabajo. Además, esto podría permitir mayor holgura de recursos provenientes de otras fuentes de financiamiento para construir un sistema de protección social que cubra a otros segmentos de la población.

1. Los sistemas de seguridad social en la región

Durante las décadas de 1990 y 2000, los países de la región implementaron reformas estructurales y paramétricas en los sistemas de pensiones y de salud. Las reformas estructurales consistieron en cerrar los sistemas públicos (o de seguro social) o privatizar, parcial o completamente, elementos fundamentales de estos. Las reformas paramétricas (no estructurales) están orientadas a fortalecer los sistemas públicos a largo plazo, regulándolos, aumentando las contribuciones, mejorando la eficiencia, controlando los gastos y, en las pensiones, aumentando la edad de retiro, restringiendo la fórmula de cálculo o combinando dichos cambios.

En América Latina, diez países sustituyeron total o parcialmente el sistema de pensiones caracterizado por una prestación definida, una contribución indefinida, el régimen financiero de reparto o la capitalización parcial colectiva, y la administración pública, por un sistema tipificado por la contribución definida, la prestación no definida (determinada por el monto salarial, las

contribuciones aportadas, la rentabilidad de la inversión y las variables macroeconómicas), el régimen financiero de capitalización plena con cuentas individuales y la administración privada.

Dichas reformas han conformado al menos tres modelos: i) el sustitutivo, presente en Chile (pionero en 1981), Bolivia (Estado Plurinacional de), El Salvador, México y la República Dominicana (donde no se ha completado), consiste en cerrar la afiliación al sistema público (no permite nuevos afiliados) y sustituirlo por uno privado; ii) el paralelo, (Colombia y Perú) en el que no se cierra la afiliación al sistema público, sino que se reforma paraméricamente, se crea un nuevo sistema privado y los dos compiten entre sí, y iii) el mixto, implementado en la Argentina (donde volvió a ser público en 2008), Costa Rica, Panamá (desde 2008) y el Uruguay, en el que se integra un programa público, no se cierra la afiliación y se otorga una pensión básica (primer pilar), con un programa privado que ofrece una pensión complementaria (segundo pilar).

En 2008, Chile introdujo una nueva reforma previsional integral que infundió mayor solidaridad social al sistema privado, mientras que la Argentina cerró el sistema privado y traspasó a todos sus asegurados y fondos al sistema público; Bolivia (Estado Plurinacional de) está estudiando una nueva reforma, y la República Dominicana permitió el retorno al sistema

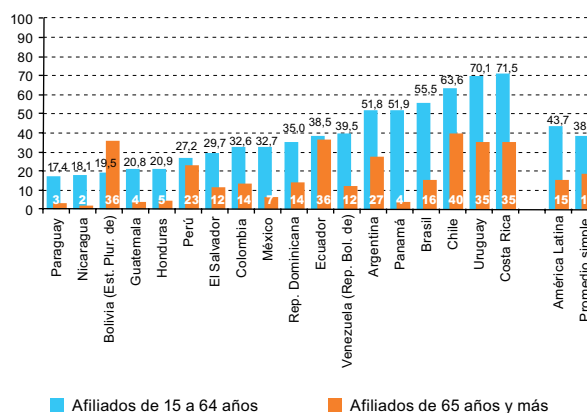
público de las personas que se pasaron al privado. Los restantes diez países latinoamericanos mantienen sistemas enteramente públicos y varios han introducido reformas paramétricas, las más recientes en el Brasil y Cuba. Los países del Caribe de habla inglesa tienen también sistemas públicos y no han efectuado reformas estructurales (Mesa-Lago, 2009).

2. Niveles actuales de afiliación a la seguridad social y cobertura de las prestaciones de seguridad social y pensiones

Los niveles de afiliación a la seguridad social entre los ocupados registraron un marcado descenso durante la década de 1990, no solo debido a las reformas de los sistemas de seguridad social sino, principalmente, a las reformas de los mercados laborales, orientadas a la flexibilización de las contrataciones, lo que en la mayoría de los países implicó una cierta precarización de estas, sobre todo en lo referido a prestaciones sociales. Sin embargo, durante la primera década del siglo XXI, tanto la gravitación del sector formal de la economía como la afiliación a la seguridad social han experimentado una leve mejoría (CEPAL, 2008). Actualmente, en la región, menos del 44% de los ocupados de hasta 64 años de edad declaran estar afiliados a la seguridad social¹ (un 39% como promedio simple de los países), lo que corresponde a alrededor de 91 millones de trabajadores (se proyecta un número de casi 102 millones para 2012). Por los niveles de afiliación relativamente altos destacan Chile, Costa Rica y el Uruguay (sobre el 60%); en el otro extremo, se encuentran Bolivia (Estado Plurinacional de), Guatemala, Honduras, Nicaragua y el Paraguay (un 20% o menos de afiliación).

Por otra parte, es notorio que, aun después de la edad típica de jubilación (65 años), existe una proporción relativamente significativa de población activa y, dentro de esta, trabajadores que pagarían contribuciones sociales: alrededor del 15% de los adultos mayores ocupados sigue afiliado a la seguridad social como cotizante (un millón y medio de trabajadores). La cotización en edades posjubilatorias da cuenta en muchos casos de la necesidad que tienen los adultos mayores de mantenerse trabajando para asegurar ciertos niveles de bienestar, ya que las prestaciones sociales a las que tienen derecho les resultarían abiertamente insuficientes (véase el gráfico V.7).

Gráfico V.7
AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): NIVELES DE AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS OCUPADOS DE 15 A 64 AÑOS Y DE 65 AÑOS Y MÁS, ALREDEDOR DE 2009^a
(En porcentajes)



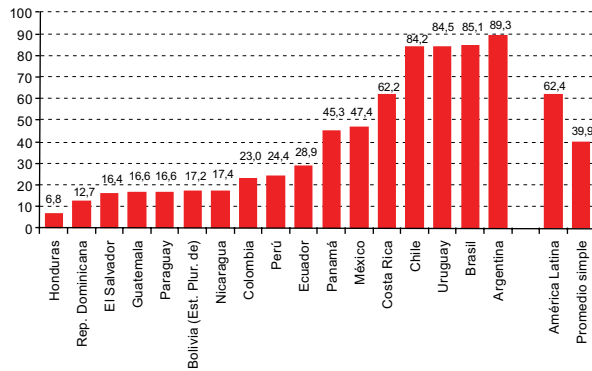
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

^a Los promedios no incluyen a Venezuela (República Bolivariana de), ya que la encuesta de este país no permite distinguir jubilaciones y pensiones respecto de otras transferencias. Los datos de la Argentina corresponden a zonas urbanas.

Como contrapartida, a nivel regional, el 62% de los adultos mayores reciben alguna jubilación o pensión (23,5 millones de personas proyectadas para 2012). Destaca la alta cobertura que se registra en la Argentina, el Brasil, Chile y el Uruguay, seguidos un poco más atrás por Costa Rica. Por el contrario, Bolivia (Estado Plurinacional de), El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, el Paraguay y la República Dominicana registran niveles de cobertura de la seguridad social y pensiones para adultos mayores inferiores al 20% (véase el gráfico V.8).

¹ Esto no implica necesariamente que tengan continuidad contributiva y, en el largo plazo, los años de aporte requeridos por ley.

Gráfico V.8
AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): COBERTURA DE LAS PRESTACIONES JUBILATORIAS Y DE PENSIONES ENTRE LA POBLACIÓN DE 65 AÑOS Y MÁS, ALREDEDOR DE 2009^a
 (En porcentajes)



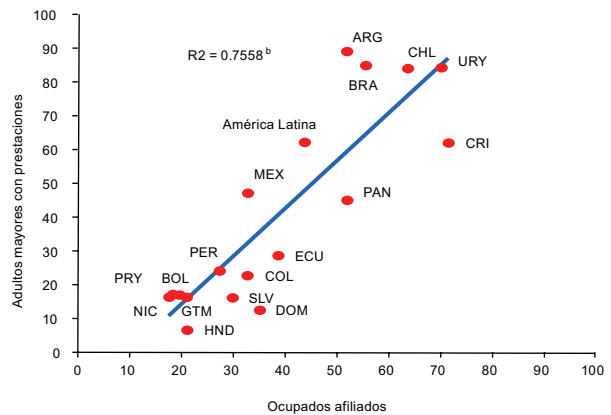
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

^a Los datos de la Argentina corresponden a zonas urbanas.

Es esperable que haya una elevada relación entre los niveles de afiliación a la seguridad social y la cobertura entre los adultos mayores, como se puede apreciar en el gráfico V.9. Sin embargo, es necesario considerar que, como ya se vio, una proporción de los adultos mayores siguen trabajando y continúan afiliados a la seguridad social, producto de las insuficientes prestaciones de las cuales serían beneficiarios (además de los adultos mayores que compensan sus jubilaciones o pensiones con una ocupación), lo que, *ceteris paribus*, implicaría una cobertura inferior

a los niveles de afiliación observados, como es el caso de Colombia, el Ecuador, El Salvador, Honduras y la República Dominicana. Por otra parte, en los países de cobertura más amplia, debe tenerse en cuenta la mayor extensión de las pensiones no contributivas, esto es, un sistema más desarrollado de protección social al adulto mayor, lo que se expresa en mayores niveles de cobertura respecto de la afiliación registrada (Argentina, Brasil y Chile).

Gráfico V.9
AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): RELACIÓN ENTRE LOS NIVELES DE AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS OCUPADOS Y LA COBERTURA DE LAS PRESTACIONES JUBILATORIAS Y DE PENSIONES ENTRE LA POBLACIÓN DE 65 AÑOS Y MÁS, ALREDEDOR DE 2009^a
 (En porcentajes)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

^a Los datos de la Argentina corresponden a zonas urbanas.

^b Coeficiente de correlación de Pearson al cuadrado.

3. Recaudación actual de contribuciones sociales (independiente del sistema) y recursos totales destinados al pago de pensiones y jubilaciones de adultos mayores

En la década actual, la política pública muestra un mayor compromiso en cuanto a la protección frente a eventos de pérdida de ingresos familiares, pobreza de ingresos y exclusión, como se vio en la sección anterior. Esta inflexión responde, además, en la mayoría de los casos, a una concepción de igualdad de derechos, no solo de oportunidades. Dada la condición de universalidad de los derechos, se transita desde una racionalidad de la focalización hacia una vocación más universalista, y desde modelos centrados en la capitalización individual hacia sistemas que incluyen más claramente mecanismos de

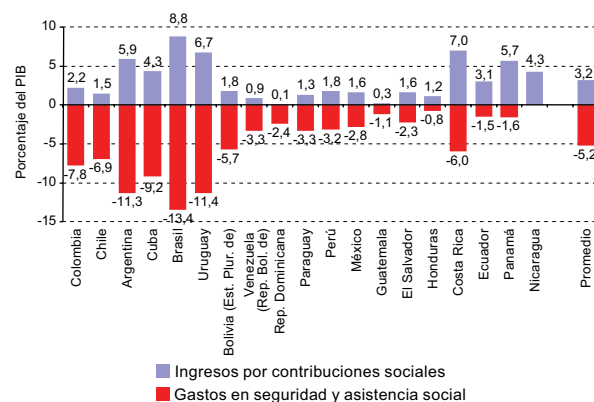
solidaridad para quienes no pueden financiar su bienestar. Con las nuevas perspectivas, se busca, pues, combinar el combate contra la pobreza con el combate contra la desigualdad y la promoción de la cohesión social. Esto se intenta lograr por medio de la articulación y ejecución de diversos programas sociales que coordinan los alcances de la seguridad social tradicional, la provisión de servicios sociales y la oferta de programas asistenciales. Por dicho motivo, se ha instalado en el debate y la agenda pública la importancia del pilar solidario o no contributivo en los sistemas de protección social.

Este debate tiene un claro sentido. Los recursos recaudados por los sistemas contributivos públicos son superados con creces por los gastos públicos en seguridad social. Si a esto se le agregan los gastos asociados a otros programas de protección social, el financiamiento público por la vía de las contribuciones sociales es claramente deficitario, motivo por el cual es necesario recurrir a recursos provenientes de rentas generales del Estado (véase el gráfico V.10). Esto ocurre en contadas excepciones, precisamente en los países donde hay una menor proporción de adultos mayores que reciben pensiones y jubilaciones.

Más aún, cuando se analizan los ingresos y gastos públicos en su conjunto, es posible apreciar las grandes restricciones de recursos e incluso las situaciones de déficit fiscal que enfrentan la mayoría de los países de la región al ejecutar los presupuestos totales, lo que reduce aún más la posibilidad de aumentar el financiamiento de programas de protección social con mecanismos no contributivos (CEPAL, 2011). Para incrementar en forma significativa el volumen de recursos destinados a la protección social no contributiva, dichas restricciones obligarían a reestructurar los gastos públicos o aumentar la carga tributaria. Una de las vías para aumentarla es el fortalecimiento y la formalización del mercado de trabajo, lo que permitiría incrementar la recaudación de contribuciones sociales y de recursos provenientes de impuestos directos e indirectos. Esto debería implicar, en varios países, volver a efectuar una reforma significativa de los sistemas de seguridad social, que hoy están, en gran medida, privatizados y solo admiten la introducción de componentes solidarios para la

población más vulnerable, pero dificultosamente permiten que se destinen recursos a otros programas de protección social con bases no contributivas.

Gráfico V.10
AMÉRICA LATINA (19 PAÍSES): INGRESOS PÚBLICOS POR CONTRIBUCIONES SOCIALES Y GASTOS PÚBLICOS EN SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL, PROMEDIO DE 2008-2009^a
(En porcentajes del PIB)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales de los países.

^a Las coberturas institucionales de los ingresos públicos por contribuciones sociales corresponden al gobierno general en el caso de la Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), el Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba y el Ecuador. En los restantes casos, corresponde al gobierno central. Con respecto a los gastos en seguridad y asistencia social, los primeros representan entre el 80% y el 85% del total. Las coberturas institucionales corresponden al gobierno central en Chile, Colombia, Cuba, el Ecuador, Guatemala, Panamá, la República Dominicana, el Uruguay (gastos consolidados) y Venezuela (República Bolivariana de) (gastos pagados); al gobierno central presupuestario en Honduras y el Paraguay; al gobierno general en la Argentina, El Salvador y el Perú; al sector público presupuestario en México; al sector público no financiero en Bolivia (Estado Plurinacional de) y el Brasil, y al sector público en Costa Rica. Los países se presentan ordenados de mayor a menor déficit de recursos. No se cuenta con información sobre el gasto en seguridad social en el caso de Nicaragua.

4. Ingresos potenciales por contribuciones sociales

En la mayoría de los países coexisten sistemas públicos, mixtos y privados. En general, los recursos recaudados son administrados por una o varias entidades públicas autónomas o por organizaciones privadas que otorgan las diversas prestaciones definidas por ley (aunque no necesariamente el monto de la prestación), invierten los activos en diversos instrumentos de renta fija o variable y cobran algún gasto de administración. Dependiendo del país, los aportes a la seguridad están a cargo del trabajador, en ocasiones también del empleador y, en menor proporción, del Estado. Estas contribuciones se destinan a uno o varios fondos o entidades, según el país, que otorgan distintos tipos de prestación específica. En ocasiones, está definido algún porcentaje del aporte para fines solidarios, particularmente en los países donde el Estado también efectúa un aporte.

Sobre la base salarial imponible del trabajador, es posible estimar, de manera aproximada, el potencial de

recursos de los que se puede disponer para financiar el conjunto de prestaciones de seguridad social y pensiones. A efectos analíticos, se realizó la estimación sobre la base de los parámetros y la composición de la contribución que utiliza cada país, y no se incluyeron las contribuciones destinadas a prestaciones de salud (véase el recuadro V.2). Esta estimación de la capacidad contributiva refiere solamente a la recaudación potencial y no efectiva, habida cuenta de la variabilidad del desempleo y las lagunas contributivas que puede generar, así como el no cumplimiento del pago contributivo obligatorio y voluntario en que pueden incurrir tanto empresas como trabajadores. Por lo tanto, no se pretende calcular con exactitud los recursos contributivos disponibles, sino establecer órdenes de magnitud que sirvan de referencia para efectuar comparaciones entre países y en el tiempo.

Recuadro V.2
PROCEDIMIENTO DE ESTIMACIÓN Y PROYECCIÓN DEL VOLUMEN TOTAL DE CONTRIBUCIONES POTENCIALES
A LA SEGURIDAD SOCIAL A PARTIR DE ENCUESTAS DE HOGARES

Las estimaciones y proyecciones del volumen potencial de recursos recaudables en materia de seguridad social (contribuciones sociales) incluidas en el presente capítulo se

obtuvieron utilizando información recabada de cada país sobre las contribuciones tanto de seguridad social como de salud. En particular, se obtuvieron las contribuciones

que por ley debe realizar cada trabajador afiliado a los sistemas de seguridad social y de salud, valor que se consigna en el siguiente cuadro:

CONTRIBUCIÓN DE LOS TRABAJADORES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y AL SISTEMA DE SALUD Y CONTRIBUCIÓN DE OTROS AGENTES A LA SEGURIDAD SOCIAL
(En porcentajes de la remuneración bruta)

País	Factor para obtener remuneración imponible	Porcentaje de aporte de cada agente respecto de la remuneración imponible del trabajador			Suma de aportes
		Trabajador	Empleador	Estado	
<i>En porcentajes de la remuneración bruta</i>					
Argentina	17	11	16	0	27
Bolivia (Estado Plurinacional de)	12,21	10	1,71	0	11,71
Brasil	8	8	20	0	28
Chile	17	10	0	0	10
Colombia	7,875	3,875	11,625	0	15,5
Costa Rica	8	2,5	4,75	0,25	7,5
Ecuador	8,64	6,64	3,1	0	9,74
El Salvador	6,25	3,25	6,75	0	10
Guatemala	4,83	1,83	3,67	0	5,5
Honduras	3,5	1	2	1	4
México	3,84	1,125	5,15	0,1125	6,3875
Nicaragua	6,25	4	7	0	11
Panamá	9	8,5	4,5	0,8	13,8
Paraguay	9	9	14	0	23
Perú	14	10	0	0	10
República Dominicana	5,91	2,87	7,1	0	9,97
Uruguay	18	15	7,5	0	22,5
Venezuela (República Bolivariana de)	4,22	1,93	4,82	0	6,75
Promedio simple (excluye los aportes iguales a 0)	9,1	6,1	7,5	0,5	12,9

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información oficial de los países.

Las encuestas de hogares registran, por lo general, las remuneraciones netas de los trabajadores, por lo que se efectuó

una estimación de las remuneraciones brutas entre los ocupados que declararon estar afiliados a sistemas de seguridad

social y de salud, mediante la siguiente fórmula:

$$Y_b = \frac{Y_n}{(1 - (F/100))}$$

donde Y_b es la remuneración imponible, Y_n es la remuneración neta declarada en cada encuesta de hogar y F es el factor correspondiente a los descuentos porcentuales que se aplican a la remuneración del trabajador (primera

columna del cuadro). F se compone del descuento de seguridad social (segunda columna) y de salud (primera columna menos segunda columna).

A continuación, se aplicaron los porcentajes de descuento o pago a

la seguridad social de cada agente (trabajador, empleador y Estado) en función de la remuneración imponible, se anualizaron y se expresaron en dólares de 2005:

$$V_i = ((Y_b \cdot (A_i/100)) \cdot 12) / (IPC_{ref} / IPC_{2005}) / TC_{2005}$$

donde V_i es el monto de la contribución A_i del agente i (columnas segunda, tercera y cuarta de la tabla) obtenido a partir de la remuneración imponible de cada trabajador afiliado, expresado en dólares de 2005; IPC_{ref} es el valor del índice de precios al consumidor del período de referencia de la encuesta; IPC_{2005} es el IPC promedio del año 2005, y TC_{2005} es el tipo de cambio promedio del

año 2005 (serie "rf"). La sumatoria de todos los recursos potencialmente recaudables se convirtió a dólares de 2005 para expresarla como porcentaje del PIB en esa moneda. Este último se proyectó según las últimas estimaciones disponibles de la CEPAL y de Economist Intelligence Unit [en línea] www.eiu.com —actualizadas a fines de septiembre de 2011— hasta 2015. Desde

ese año hasta 2030, se utilizó como factor de proyección del PIB el crecimiento promedio anual estimado entre 2010 y 2015.

Cabe señalar que la recaudación estimada es potencial, ya que las encuestas no proveen información sobre la continuidad de pago de los trabajadores a lo largo del año, los episodios de desempleo y la cotización efectiva en los sistemas de seguridad social.

Recuadro V.2 (conclusión)

Además, cabe considerar la subdeclaración de ingresos que a menudo se observa en las encuestas de hogares, sobre todo de las ganancias de los trabajadores por cuenta propia, quienes además están afiliados voluntariamente y tienen mayor probabilidad de no hacer contribuciones efectivas.

Por otra parte, en los casos en que existen varios subsistemas de seguridad social o leyes diferenciales según tipos de trabajadores o niveles de remuneraciones, se utilizaron los parámetros de los regímenes generales o los porcentajes de cotización del grupo de trabajadores asalariados de mayor tamaño.

Las proyecciones se realizaron manteniendo fijo el porcentaje de trabajadores afiliados, así como las tasas de ocupación (variando, por tanto, solo el número de trabajadores). Los pagos de seguridad social se proyectaron manteniendo fijo el porcentaje de adultos mayores de 65 años y más con cobertura de jubilaciones o pensiones (variando solo el número de adultos mayores). Las remuneraciones imponibles, las contribuciones y los pagos de jubilaciones se proyectaron con una tasa de crecimiento real equivalente a la mitad de la tasa de crecimiento del PIB proyectado.

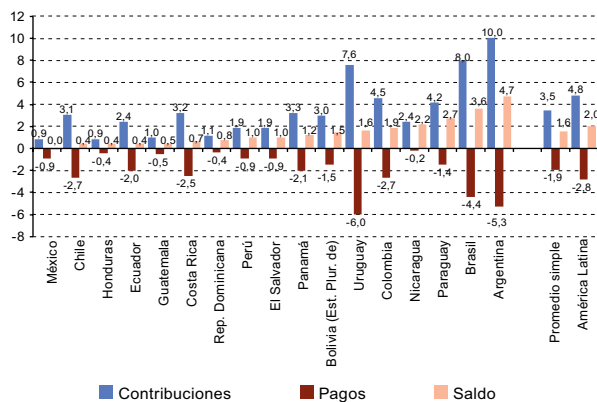
Debido a todas las consideraciones anteriores y al hecho de que en los diversos

países pueden coexistir sistemas públicos, privados o mixtos de seguridad social y, por tanto, las recaudaciones no necesariamente son administradas por un solo fondo de seguridad social, las cifras aquí estimadas y proyectadas solo son valores de referencia y representan órdenes de magnitud para realizar comparaciones entre un país y otro y dar cuenta de las capacidades y necesidades de financiamiento de la seguridad social a lo largo del tiempo, así como los posibles efectos de alterar el nivel de afiliación o los porcentajes de contribución, entre otros. En consecuencia, el nivel de precisión de estas proyecciones puede no ser elevado.

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información oficial de los países y Social Security Administration, *Social Security Programs Throughout the World: The Americas, 2007*, N° 13-11804, Washington, D.C., marzo de 2008.

De acuerdo con las proyecciones realizadas, en 2012 ningún país presentaría una situación de déficit entre el total de recursos potencialmente recaudables para seguridad social y el pago necesario para el conjunto de jubilados y pensionados. Los países registrarían un saldo positivo que en promedio simple alcanzaría el 1,6% del PIB proyectado (véase el gráfico V.11).

Gráfico V.11
AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): PROYECCIÓN DEL VOLUMEN TOTAL DE RECURSOS RECAUDABLES PARA SEGURIDAD SOCIAL Y DEL PAGO DE JUBILACIONES Y PENSIONES, 2012^a
(En porcentajes del PIB)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), estimaciones y proyecciones sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países, el PIB oficial de los países y proyecciones de crecimiento realizadas por la Economist Intelligence Unit (www.eiu.org).

^a Los países están ordenados según el saldo restante de las contribuciones luego de efectuado el pago. Se excluyen las contribuciones destinadas a financiar total o parcialmente prestaciones de salud.

El hecho de disponer de parte o la totalidad de los recursos adicionales depende en gran medida del diseño de los sistemas de seguridad social que, como se vio anteriormente, en casi todos los países están fragmentados

y, al menos en parte, privatizados. Pero suponiendo la posibilidad de volver a reformar los sistemas de seguridad social y administrar esos recursos en conjunto, se puede apreciar con claridad que la mayoría de los países estaría en condiciones de incorporar o fortalecer el pilar solidario para equilibrar las diferencias de las transferencias jubilatorias, extender la cobertura de estas y de las pensiones no contributivas, e incluso establecer un pilar no contributivo para complementar el financiamiento de otros componentes del sistema de protección social. Esto, sin descuidar la necesaria rentabilidad de los fondos para su sostenibilidad en el largo plazo, con un horizonte de envejecimiento poblacional y la inminencia del término del bono demográfico en muchos de los países de la región.

El futuro de mediano plazo en esta materia no se presenta negativo. Según proyecciones de largo plazo, suponiendo que no haya un aumento de la participación en el mercado de trabajo, del porcentaje de afiliación ni de la cobertura porcentual de la seguridad social de los adultos mayores, los efectos demográficos del cambio en el tamaño de la fuerza de trabajo y el número de adultos mayores no son suficientes para contrarrestar, al menos hasta 2030, el superávit de recursos contributivos en la mayoría de los países. Con la salvedad de Chile, Colombia, Costa Rica, el Ecuador y México, las proyecciones de largo plazo indican que el saldo anual de recursos destinados a seguridad social es positivo, aunque con tendencia a reducirse (véase el cuadro V.2). Precisamente, son los países menos envejecidos, pero a la vez con mayores tasas de pobreza y menores niveles de desarrollo relativo, los que tendrían, en forma progresiva, mayor margen de recursos disponibles, aun sin considerar la rentabilidad acumulada de esos recursos a lo largo del periodo analizado.

Cuadro V.2
AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): PROYECCIÓN DE LOS SALDOS ANUALES DE INGRESOS Y GASTOS EN
SEGURIDAD SOCIAL, 2012, 2015, 2020, 2025 Y 2030^a
(En porcentajes del PIB)

	2012	2015	2020	2025	2030	Situación de largo plazo
Argentina	4,7	4,6	4,1	3,6	3,1	Baja superávit
Bolivia (Estado Plurinacional de)	1,5	1,5	1,5	1,4	1,3	Se mantiene superávit
Brasil	3,6	3,2	2,3	1,4	0,3	Baja superávit
Chile	0,4	0,2	-0,2	-0,7	-1,3	Déficit progresivo
Colombia	1,9	1,6	1,0	0,3	-0,4	Déficit progresivo
Costa Rica	0,7	0,5	0,0	-0,6	-1,3	Déficit progresivo
Ecuador	0,4	0,4	0,1	-0,1	-0,4	Déficit progresivo
El Salvador	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	Se mantiene superávit
Guatemala	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	Se mantiene superávit
Honduras	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	Se mantiene superávit
México	0,0	-0,1	-0,2	-0,4	-0,6	Déficit progresivo
Nicaragua	2,2	2,3	2,3	2,3	2,2	Se mantiene superávit
Panamá	1,2	1,0	0,7	0,4	0,0	Baja superávit
Paraguay	2,7	2,7	2,6	2,4	2,1	Baja superávit
Perú	1,0	0,9	0,8	0,6	0,4	Baja superávit
República Dominicana	0,8	0,7	0,7	0,6	0,5	Baja superávit
Uruguay	1,6	1,5	1,2	0,8	0,4	Baja superávit
Promedio	1,4	1,3	1,1	0,8	0,5	...

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países; Economist Intelligence Unit [en línea] www.eiu.org para el PIB oficial de los países y las proyecciones de crecimiento.

^a Las proyecciones se hicieron suponiendo los mismos niveles de afiliación y cobertura de la seguridad social observados en las encuestas, así como la misma tasa de participación y parámetros de contribución, con variaciones en el PIB, la cantidad de ocupados y de población adulta mayor, y con un incremento real de las remuneraciones y jubilaciones equivalente a la mitad del crecimiento del PIB.

5. Establecimiento de una pensión mínima universal para los adultos mayores

La protección social de los adultos mayores no puede descansar exclusivamente sobre la capacidad de los esquemas contributivos asociados al mundo laboral, lo que obliga a repensar los mecanismos de solidaridad (CEPAL, 2006). Ciertamente, la seguridad social ha tenido un alcance muy limitado entre la población rural. No obstante, más importante ha sido el límite impuesto por el elevado grado de informalidad de las economías. Asimismo, dada la incidencia de las mujeres en las edades más avanzadas y la escasez de carreras laborales que les permitan acceder a una jubilación, es necesario diseñar sistemas de pensiones que, o bien reconozcan el costo de la continuidad y la calidad de sus empleos por ser quienes sostienen la carga no remunerada del trabajo, o bien desvinculen una proporción importante de la pensión futura del nexo formal en el mercado laboral.

En el período posterior a las reformas de los sistemas de seguridad social anteriormente reseñadas, muchos gobiernos debieron hacerse cargo de morigerar los efectos

distributivos de la reforma mediante nuevos programas públicos. Se ha comenzado a debatir, en casi todos los casos de reforma, la modalidad más razonable de asegurar una cobertura para los que no alcanzan la densidad de contribuciones requerida por la legislación. Todo ello entraña un importante fortalecimiento del componente no contributivo y genera presiones sobre la situación fiscal.

Después de combinar la opción de regímenes contributivos estratificados de reparto y modelos de capitalización individual de administración privada, hoy se incorpora al debate y a las políticas la opción de sistemas no contributivos de pensión uniforme de base universal o focalizados (CEPAL, 2006; Filgueira y otros, 2006; Tanzi, 2008). Estos sistemas o instrumentos apuntan a garantizar un nivel básico de renta en forma sostenible desde el punto de vista fiscal y justa desde el punto de vista intergeneracional. En la Argentina, el Brasil, Chile, Bolivia (Estado Plurinacional de) y el Uruguay (a nivel provincial y nacional) así como en México (en el Distrito

Federal y otros estados) se está considerando que una garantía básica para los adultos mayores puede ser tanto fiscalmente prudente como socialmente deseable si, a la vez, se limitan los subsidios destinados a los jubilados y pensionistas (generalmente hombres) más privilegiados.

En el documento *La hora de la igualdad: brechas por cerrar, caminos por abrir*, presentado en su trigésimo tercer período de sesiones, la CEPAL hace una propuesta de pensión universal para todos los adultos mayores, independientemente de sus niveles de ingreso y las restantes prestaciones sociales recibidas. También estima el costo de una pensión focalizada, para adultos mayores en hogares con ingresos per cápita que los dejan en situación de vulnerabilidad (ingresos iguales o inferiores a 1,8 líneas de pobreza de cada país).

El costo anual de otorgar una pensión mínima universal equivalente al valor de la canasta de satisfacción de necesidades básicas de cada país (línea de pobreza nacional) varía entre el 0,84% y el 2,62% del PIB de 2012 (véase el cuadro V.3). Las diferencias entre países se deben sobre todo a la interacción entre el nivel de envejecimiento de la población, el costo individual de la transferencia y el nivel de desarrollo relativo. Por este motivo, entre los países que deberían destinar más recursos como porcentaje del PIB, se encuentran precisamente los más pobres de la región (Bolivia (Estado Plurinacional de), Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Paraguay) junto con el más envejecido (Uruguay).

Cuadro V.3
AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): SITUACIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES, ALREDEDOR DE 2009, Y ESTIMACIÓN DEL COSTO ANUAL DE PENSIONES UNIVERSALES Y FOCALIZADAS, 2012^a
(En porcentajes de personas y en porcentajes del PIB)

País	Adultos mayores alrededor de 2009 (En porcentajes)	Costo de la pensión mínima universal (En porcentajes del PIB de 2012)	Adultos mayores		Costo de la pensión mínima focalizada (En porcentajes del PIB 2012)	Contribuciones sociales menos pago de jubilaciones y pensiones actuales	
			En situación de pobreza (En porcentajes)	En situación de vulnerabilidad ^b (En porcentajes)		Con pago de pensión universal (En porcentajes del PIB 2012)	Con pago de pensión focalizada (En porcentajes del PIB 2012)
Argentina	10,6	1,53	3,0	11,9	0,08	3,21	4,67
Bolivia (Estado Plurinacional de)	5,8	1,99	51,2	71,0	1,37	-0,48	0,13
Brasil	7,9	1,14	4,9	17,0	0,16	2,45	3,43
Chile	10,8	1,03	5,8	25,3	0,26	-0,61	0,15
Colombia	6,7	1,76	39,7	61,7	1,06	0,11	0,82
Costa Rica	7,2	1,13	19,3	46,9	0,53	-0,43	0,18
Ecuador	8,1	2,60	29,1	56,2	1,34	-2,15	-0,89
El Salvador	7,4	2,08	42,7	72,4	1,50	-1,11	-0,53
Guatemala	4,7	2,27	43,3	68,4	1,51	-1,81	-1,05
Honduras	5,4	1,95	66,6	84,1	1,61	-1,51	-1,17
México	6,7	1,27	26,8	55,1	0,67	-1,28	-0,69
Nicaragua	5,1	2,62	52,5	78,8	2,01	-0,40	0,20
Panamá	8,3	0,84	21,9	44,6	0,38	0,36	0,82
Paraguay	7,0	2,38	51,6	77,0	1,86	0,34	0,86
Perú	8,2	1,25	29,1	55,8	0,68	-0,29	0,28
República Dominicana	7,1	1,32	45,9	65,6	0,85	-0,56	-0,09
Uruguay	14,5	2,29	2,1	13,1	0,74	-0,69	0,86
Venezuela (República Bolivariana de)	5,5	1,60	20,6	47,0	0,69
América Latina	7,5	1,33	18,3	37,2	0,48
Promedio simple	7,6	1,73	30,9	52,9	0,96

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países; Economist Intelligence Unit [en línea] www.eiu.org para el PIB oficial de los países y las proyecciones de crecimiento.

^a Se considera una pensión equivalente al valor de la línea de pobreza nacional. La pensión focalizada es para adultos mayores que residen en hogares con un ingreso per cápita igual o inferior a 1,8 líneas de pobreza.

^b Incluye a los adultos mayores en situación de pobreza.

Naturalmente, focalizar la transferencia en los adultos mayores en situación de vulnerabilidad implica la inversión de un conjunto bastante más reducido de recursos por año, aunque la diferencia entre el costo de universalización y el costo de una pensión focalizada en cada país depende sobre todo de la incidencia de la

pobreza y la vulnerabilidad en la población total, en particular entre los adultos mayores. Los países de menor desarrollo relativo son los que registran mayores niveles de vulnerabilidad por ingresos entre su población adulta mayor: Bolivia (Estado Plurinacional de), El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Paraguay.

Al analizar la disponibilidad de recursos anuales provenientes de la seguridad social como fuente de financiamiento de la pensión universal o focalizada en 2012 (últimas dos columnas del cuadro V.3), se aprecia que, en el caso de la primera, países como Bolivia (Estado Plurinacional de), Chile, Costa Rica, el Ecuador, El Salvador,

Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, el Perú, la República Dominicana y el Uruguay necesitarían, además, recursos provenientes de otras fuentes de recaudación. En cambio, en el caso de una pensión de carácter focalizado, solo el Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y la República Dominicana requerirían recursos adicionales.

Recuadro V.3

METODOLOGÍA DE ESTIMACIÓN DEL COSTO DE UNA PENSIÓN MÍNIMA UNIVERSAL PARA ADULTOS MAYORES

El ejercicio de simulación de costos de la pensión mínima universal para adultos mayores (de 65 años y más) se realizó inicialmente para el reciente documento *La hora de la igualdad: brechas por cerrar, caminos por abrir*, presentado en el trigésimo tercer período de sesiones de la CEPAL. Las cifras aquí expuestas corresponden a una actualización sobre

la base de microdatos de las encuestas de hogares de los años más recientes, parametrizadas con datos más actuales de cuentas nacionales a fin de estimar los costos con relación al PIB. El modelo consiste en asignar un monto equivalente a una línea de pobreza a cada adulto mayor elegible (en un escenario de universalidad y de focalización de la transferencia) y

computar el nuevo ingreso del hogar. Esto permite, además de efectuar una estimación agregada de la transferencia, volver a estimar la pobreza y la desigualdad y, en definitiva, simular los efectos de la transferencia en esos indicadores.

El procedimiento matemático utilizado es bastante simple:

$$\text{Costo}\% \text{ PIB} = \left(\frac{\left[\left(\sum_{i=1}^q p_i * B \right) * 12 \right] * TC}{\text{PIB}} \right) * 100$$

donde q representa a la población elegible, p_i representa a cada persona elegible y B es el beneficio estipulado para esa población. La cifra que surge de esta simulación se multiplica por 12 (mensualidad anualizada) y se expresa en dólares al ajustar por la tasa de cambio (TC). Ese monto se divide por el

PIB y se multiplica por 100 para expresar el costo fiscal de las prestaciones como porcentaje del PIB.

Estos costos se han proyectado hasta 2030 teniendo en consideración el aumento absoluto de la población adulta mayor y una disminución del porcentaje

de esta población que se encuentra en situación de vulnerabilidad, sobre la base de la elasticidad de la vulnerabilidad con respecto al crecimiento observada en el período 2002-2009, las encuestas de hogares y las proyecciones de crecimiento efectuadas hasta 2030.

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), *La hora de la igualdad: Brechas por cerrar, caminos por abrir* (LC/G.2432(SES.33/3)), Santiago de Chile, 2010.

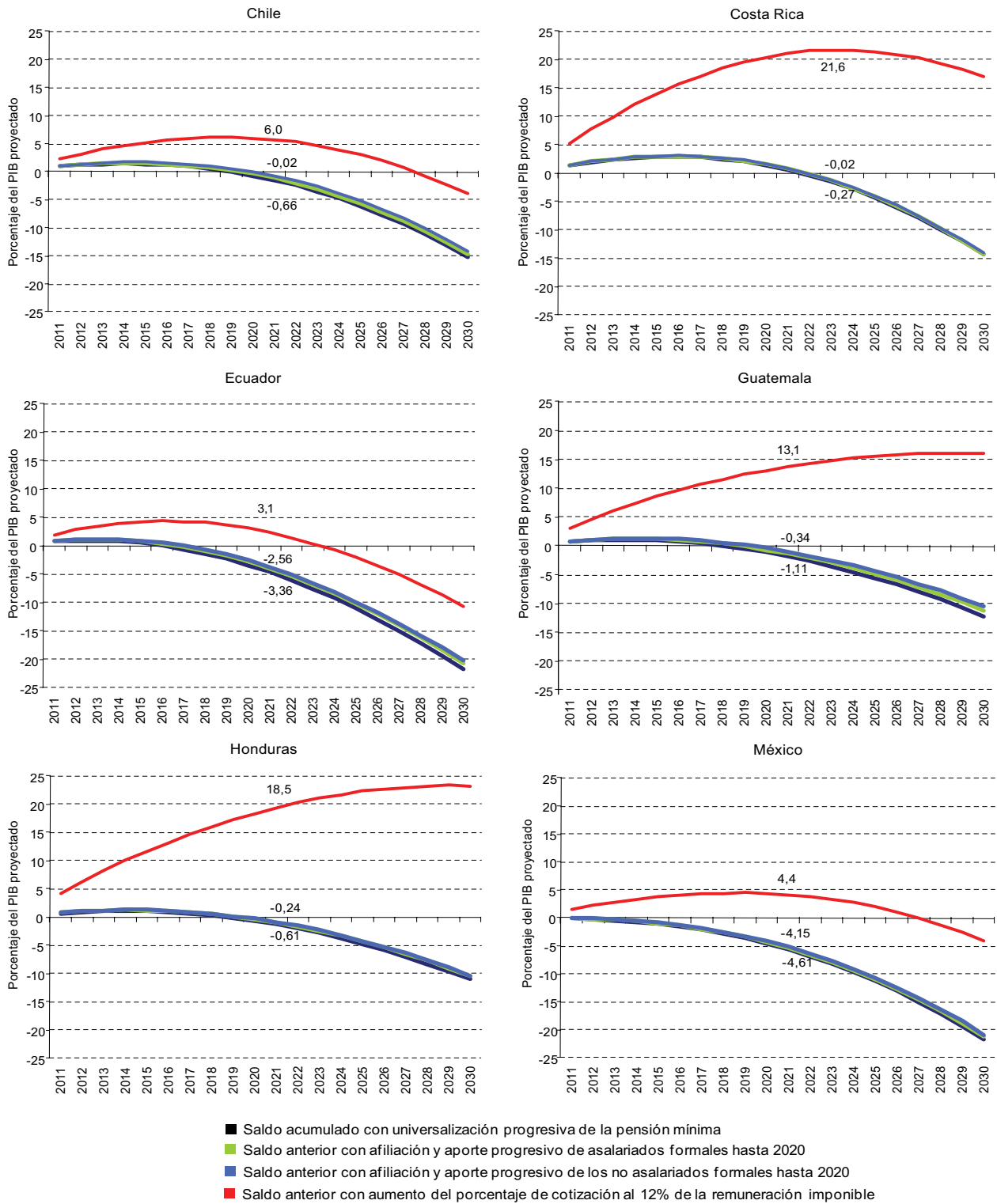
Al respecto, es importante prestar atención a que varios países podrían entrar en una situación deficitaria con respecto al pago de jubilaciones y pensiones con base contributiva (véanse los cuadros V.2 y V.4). En efecto, aun suponiendo una administración centralizada de las contribuciones sociales destinadas a la seguridad social y una rentabilidad acumulada en el tiempo equivalente al 2% anual sobre los fondos disponibles luego del pago de las obligaciones respectivas, en las condiciones actuales de funcionamiento del mercado de trabajo (desempleo, participación, informalidad y nivel de afiliación, entre otras), Chile entraría en situación de déficit en 2025, Costa Rica en 2028 y México en 2013, debiendo estos países recurrir a fuentes de financiamiento adicionales para el pago de las obligaciones de seguridad social.

En el escenario anterior, de una rentabilidad del 2% anual, pero con una extensión progresiva de la pensión mínima universal, hasta llegar a un 100% de cobertura en 2030, aumentaría la cantidad de países que caerían en algún momento en una situación deficitaria: México iniciaría un proceso deficitario en el corto plazo, mientras que el Ecuador lo haría hacia 2017, Guatemala y Honduras en 2019, Chile

en 2020, Costa Rica en 2022, Colombia y El Salvador en 2029, y la República Dominicana en 2030. En tanto, Panamá, el Perú y el Uruguay irían reduciendo paulatinamente sus fondos disponibles para el pago de pensiones a un nivel equivalente a alrededor del 3% del PIB proyectado para 2030.

Una posible forma de abordar el progresivo déficit que se produciría en los países señalados es el fortalecimiento de los mercados de trabajo fomentando la afiliación de los trabajadores asalariados y no asalariados que pertenecen a sectores de alta productividad. Por ejemplo, si se extendiera el nivel de afiliación de estos trabajadores (sin considerar a los sectores de baja productividad) hasta lograr la cobertura completa entre 2012 y 2020, en dicho año el déficit en Chile se reduciría del 0,7% del PIB al 0,02% del PIB, en el Ecuador del 3,4% al 2,6% del PIB, en Costa Rica del 0,3% al 0,02% del PIB (en 2022, primer año de déficit), en Guatemala del 1,1% del PIB al 0,3%, en Honduras del 0,6% al 0,2% del PIB y en México del 4,6% al 4,1% (véase el gráfico V.12). Los restantes países (Colombia, El Salvador y República Dominicana) prácticamente eliminarían su déficit con este tipo de medidas, al menos hasta 2030.

Gráfico V.12
AMÉRICA LATINA (6 PAÍSES): PROYECCIÓN DE LA ACUMULACIÓN DE FONDOS EN LA SEGURIDAD SOCIAL, 2011-2030^a
 (En porcentajes del PIB proyectado)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países; Economist Intelligence Unit [en línea] www.eiu.org para el PIB oficial de los países y las proyecciones de crecimiento.

^a Se consideró una rentabilidad del 2% anual, luego del pago de jubilaciones y una pensión mínima progresiva, extendiendo la afiliación a todos los trabajadores del sector formal y aumentando el porcentaje de contribución.

Teniendo en consideración la necesidad de avanzar gradualmente en el establecimiento de una pensión universal, ya sea extendiendo de manera progresiva su cobertura o aumentando el monto, y que los fondos de pensiones no destinados anualmente a estos u otros gastos pueden producir rentas en el mercado internacional, es posible diseñar una estrategia de financiamiento y gasto en el mediano y largo plazo para evitar arribar a una situación de déficit estructural en el pago de jubilaciones y pensiones ya comprometidas y que permita universalizar (o generalizar) la pensión mínima para adultos mayores e incluso financiar otros componentes no contributivos de un sistema de protección social basado en el enfoque de derechos en muchos de los países de la región.

Una posibilidad de obtener financiamiento en el largo plazo —sobre todo en los países que presentarían un déficit en los fondos destinados a pagar la seguridad social dentro del período analizado, aun fortaleciendo la afiliación a los respectivos sistemas— es efectuar algún tipo de reforma paramétrica, específicamente en lo referido al nivel de contribuciones (el porcentaje de contribución respecto de la remuneración bruta). En dicho sentido, en todos los países que caerían en déficit incluso fortaleciendo el mercado de trabajo, el porcentaje legal de descuento de la remuneración imponible está por debajo de la media de la región (un 12,8% de la remuneración bruta): Chile (10%), Costa Rica (7,25%), el Ecuador (9,74%), Guatemala (5,5%), Honduras (3%) y México (un 6,275%, con la excepción del Distrito Federal, donde el aporte estatal es mayor). Si estos países aumentaran el porcentaje de contribuciones al 12%, eliminarían su déficit, o bien lo postergarían al menos unos cuantos años, como se puede apreciar en el gráfico V.12 (línea roja). En los países donde el monto de los descuentos se acerca más a este valor referencial (Chile y Ecuador), el efecto de esa modificación permitiría solventar el déficit proyectado unos pocos años más, debiéndose utilizar otros mecanismos de financiamiento adicionales antes de 2030 para los pagos de la seguridad social contributiva y no contributiva.

En síntesis, la evidencia indica que varios países podrían empezar a generar déficits asociados al pago de jubilaciones y pensiones, sobre todo si introducen una pensión mínima, aunque su cobertura se extienda en forma paulatina. En el período analizado, la mayoría de los países no tendría mayores problemas para financiar tanto la seguridad social obligatoria como la pensión mínima mencionada e incluso otros programas de protección social, pero es esperable que en un horizonte de mayor tiempo encuentren dificultades en el financiamiento basado en las contribuciones provenientes del mercado de trabajo.

En este sentido, se hace absolutamente necesario repensar los sistemas de protección social sobre la base de sistemas no contributivos, ya que ni el funcionamiento actual de los mercados de trabajo latinoamericanos ni la formalización de una gran mayoría de trabajadores en el mediano plazo podrían asegurar en el futuro un sistema de protección social basado en derechos financiado solo mediante bases contributivas. En el largo plazo, se requerirá rediseñar las estructuras de los sistemas de seguridad social, efectuando también reformas de carácter paramétrico, no solo para fortalecer significativamente el pilar solidario, sino también para incorporar componentes no contributivos de financiamiento. Esto requiere ampliar la base de recursos que se recaudan por otras vías. En definitiva, requerirá formular nuevos pactos fiscales que hagan sostenible el desarrollo económico y social en el largo plazo.

La igualdad de derechos provee el marco normativo y sirve de base para pactos sociales que se reflejan en más oportunidades para quienes menos tienen, a la vez que favorece la integración y cohesión social y, por tanto, nuevos acuerdos sociales. Un pacto fiscal que contemple una estructura y una carga tributaria con mayor efecto redistributivo, capaz de fortalecer el papel del Estado y la política pública de modo de garantizar umbrales de bienestar, forma parte de la agenda de la igualdad en la que se incluye una institucionalidad laboral que proteja la seguridad del trabajo, pero que debe traspasar sus límites.

América Latina (17 países): Proyecciones del PIB, de las contribuciones potenciales a la seguridad social y de los pagos de jubilaciones y pensiones
 Cuadro V.4
 (En millones de dólares de 2005 y en porcentajes del PIB proyectado)

País	Indicador	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Argentina ^a	PIB en millones de dólares de 2005	253 746	275 588	289 071	300 634	312 058	323 292	334 607	349 110	364 241	380 027	396 498	413 683	431 613	450 320	469 837	490 201	511 447	533 614	556 742
	Contribuciones a la seguridad social	10,0	10,0	9,9	9,9	9,8	9,7	9,7	9,6	9,5	9,4	9,3	9,2	9,1	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5	8,4
	Pago de jubilaciones y pensiones	5,4	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,3
Bolivia (Estado Plurinacional de)	PIB en millones de dólares de 2005	11 954	12 480	12 967	13 511	14 030	14 569	15 128	15 709	16 312	16 938	17 589	18 264	18 965	19 694	20 450	21 235	22 050	22 897	23 776
	Contribuciones a la seguridad social	3,0	3,0	3,0	3,0	3,1	3,1	3,1	3,1	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
	Pago de jubilaciones y pensiones	1,4	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8	1,9	1,9
Brasil	PIB en millones de dólares de 2005	1 092 702	1 132 039	1 175 057	1 230 285	1 291 799	1 347 346	1 407 977	1 468 348	1 510 522	1 564 562	1 620 535	1 678 511	1 738 561	1 800 760	1 865 183	1 931 912	2 001 027	2 072 616	2 146 765
	Contribuciones a la seguridad social	8,0	7,9	7,8	7,8	7,7	7,7	7,6	7,6	7,5	7,4	7,4	7,3	7,3	7,2	7,1	7,0	7,0	6,9	6,8
	Pago de jubilaciones y pensiones	4,2	4,3	4,4	4,5	4,5	4,6	4,7	4,8	4,9	5,1	5,2	5,3	5,4	5,6	5,7	5,8	6,0	6,1	6,2
Chile	PIB en millones de dólares de 2005	138 703	147 996	155 100	162 700	170 510	178 694	187 093	194 058	201 283	208 777	216 550	224 612	232 974	241 648	250 644	259 975	269 654	279 694	290 107
	Contribuciones a la seguridad social	3,1	3,1	3,0	3,0	2,9	2,9	2,9	2,9	2,8	2,8	2,8	2,7	2,7	2,6	2,6	2,6	2,5	2,5	2,4
	Pago de jubilaciones y pensiones	2,6	2,6	2,7	2,7	2,7	2,8	2,8	2,8	2,9	3,0	3,0	3,1	3,1	3,2	3,3	3,4	3,4	3,4	3,5
Colombia	PIB en millones de dólares de 2005	183 150	192 307	201 923	211 009	220 083	229 546	239 187	248 963	259 139	269 730	280 754	292 229	304 173	316 604	329 544	343 013	357 033	371 625	386 814
	Contribuciones a la seguridad social	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,4	4,4	4,4	4,3	4,3	4,3	4,2	4,2	4,1	4,1	4,0	4,0	4,0	3,9
	Pago de jubilaciones y pensiones	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	2,9	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	4,1
Costa Rica	PIB en millones de dólares de 2005	24 760	25 726	26 806	27 932	29 217	30 532	31 875	33 227	34 637	36 107	37 639	39 236	40 901	42 636	44 445	46 331	48 297	50 346	52 483
	Contribuciones a la seguridad social	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,1	3,1	3,1	3,1	3,0	3,0	3,0	2,9	2,9	2,9	2,8	2,8	2,7	2,7
	Pago de jubilaciones y pensiones	2,4	2,4	2,5	2,5	2,6	2,7	2,7	2,8	2,9	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9
Ecuador	PIB en millones de dólares de 2005	44 021	46 222	48 210	50 293	52 596	55 015	57 326	59 833	62 450	65 182	68 033	71 008	74 114	77 356	80 739	84 271	87 957	91 804	95 819
	Contribuciones a la seguridad social	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
	Pago de jubilaciones y pensiones	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,1	2,1	2,2	2,2	2,2	2,3	2,3	2,4	2,4	2,5	2,5	2,5	2,6	2,6
El Salvador	PIB en millones de dólares de 2005	18 352	18 756	19 225	19 821	20 475	21 294	22 103	22 521	22 947	23 380	23 822	24 272	24 731	25 198	25 674	26 160	26 654	27 158	27 671
	Contribuciones a la seguridad social	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	Pago de jubilaciones y pensiones	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1
Guatemala	PIB en millones de dólares de 2005	32 530	33 506	34 544	35 635	36 884	38 112	39 381	40 693	42 048	43 449	44 896	46 391	47 936	49 533	51 182	52 887	54 648	56 488	58 349
	Contribuciones a la seguridad social	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3
	Pago de jubilaciones y pensiones	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7
Honduras	PIB en millones de dólares de 2005	11 576	12 004	12 484	12 992	13 519	14 069	14 640	15 235	15 854	16 499	17 169	17 867	18 593	19 348	20 135	20 953	21 804	22 690	23 612
	Contribuciones a la seguridad social	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Pago de jubilaciones y pensiones	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6

Cuadro V.4 (conclusión)

País	Indicador	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
México	PIB en millones de dólares de 2005	924 040	955 458	985 077	1 023 495	1 059 317	1 097 453	1 136 961	1 157 775	1 178 970	1 200 553	1 222 531	1 244 912	1 267 702	1 290 910	1 314 542	1 338 607	1 363 112	1 388 066	1 413 477
	Contribuciones a la seguridad social	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,8
	Pago de jubilaciones y pensiones	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3	1,4
Nicaragua	PIB en millones de dólares de 2005	5 563	5 786	5 983	6 198	6 379	6 566	6 757	6 955	7 158	7 367	7 582	7 804	8 032	8 267	8 508	8 757	9 013	9 276	9 547
	Contribuciones a la seguridad social	2,4	2,4	2,4	2,4	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	Pago de jubilaciones y pensiones	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Panamá	PIB en millones de dólares de 2005	22 978	24 931	26 427	28 081	29 838	31 705	33 688	35 796	38 036	40 416	42 945	45 632	48 487	51 521	54 745	58 170	61 810	65 678	69 787
	Contribuciones a la seguridad social	3,3	3,2	3,2	3,1	3,1	3,1	3,0	3,0	2,9	2,9	2,8	2,8	2,7	2,7	2,6	2,6	2,5	2,5	2,4
	Pago de jubilaciones y pensiones	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,3	2,3	2,3	2,3	2,4
Paraguay	PIB en millones de dólares de 2005	9 746	10 330	10 816	11 248	11 697	12 165	12 651	13 157	13 682	14 229	14 798	15 389	16 004	16 643	17 308	18 000	18 719	19 467	20 245
	Contribuciones a la seguridad social	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,2	4,2	4,2	4,2
	Pago de jubilaciones y pensiones	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5	1,5	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,8	1,8	1,8	1,9	1,9	1,9	2,0	2,0
Perú	PIB en millones de dólares de 2005	112 101	119 051	125 003	131 879	139 528	146 504	156 027	164 854	174 180	184 034	194 445	205 445	217 068	229 348	242 323	256 032	270 516	285 820	301 989
	Contribuciones a la seguridad social	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5
	Pago de jubilaciones y pensiones	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
República Dominicana	PIB en millones de dólares de 2005	47 247	49 184	51 446	54 121	56 773	59 782	59 782	62 947	66 280	69 788	73 483	77 373	81 469	85 782	90 323	95 105	100 140	105 441	111 023
	Contribuciones a la seguridad social	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9
	Pago de jubilaciones y pensiones	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5
Uruguay	PIB en millones de dólares de 2005	23 493	24 832	25 900	26 806	27 757	28 741	29 760	30 815	31 908	33 039	34 210	35 423	36 679	37 979	39 326	40 720	42 164	43 659	45 207
	Contribuciones a la seguridad social	7,6	7,5	7,4	7,3	7,2	7,2	7,1	7,0	6,9	6,8	6,8	6,7	6,6	6,5	6,4	6,4	6,3	6,2	6,1
	Pago de jubilaciones y pensiones	6,1	6,0	6,0	5,9	5,9	5,8	5,8	5,8	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países; Economist Intelligence Unit [en línea] www.eiu.org para el PIB oficial de los países y las proyecciones de crecimiento.

^a Las estimaciones y proyecciones basadas en la encuesta de hogar refieren a zonas urbanas.

Capítulo VI

La juventud en el Caribe: Núcleos de exclusión y vulnerabilidad

A. Introducción

El Caribe, como América Latina, vive un momento de grandes desafíos en materia de inclusión juvenil. Es preciso adoptar nuevas medidas para mejorar e igualar logros en la educación que permitan un tránsito fluido hacia el empleo. La transición demográfica marca oportunidades para el grupo etario correspondiente a la juventud, pero debe aprovecharse en el corto plazo antes de que el envejecimiento de la población implique una mayor restricción de recursos para invertir en el desarrollo de capacidades y productividad de la población joven. La juventud se desplaza geográficamente con mayor facilidad que la población infantil y la de mayor edad, muy especialmente en el Caribe, lo que puede ser tanto una fuente de oportunidades como de riesgos. La población joven goza de mejor salud y menor riesgo de enfermar que la de otros grupos etarios, pero está muy expuesta a riesgos por causas exógenas, sobre todo accidentes y agresiones. La persistencia de altos niveles de maternidad adolescente y la exposición a enfermedades de transmisión sexual, en especial el SIDA, pone una señal de alerta que es preciso atender con energía.

En el campo del reconocimiento público y político, hubo avances en las últimas décadas, con la creación de instituciones de gobierno encargadas del desarrollo de planes y programas para la juventud. También se han puesto en marcha instrumentos para aumentar el conocimiento y la percepción acerca de los

jóvenes, y mejorar la eficacia y orientación de las políticas públicas destinadas a ellos. Las políticas públicas de juventud han tenido una evolución favorable durante los últimos años, pero falta avanzar en enfoques integrales que puedan trascender las lógicas sectoriales en virtud de la naturaleza

misma del actor joven, en quien se combinan dimensiones de riesgos, capacidades, oportunidades, sistemas de pertenencia y formas de participación.

Concluido el Año Internacional de la Juventud¹, en este capítulo se evalúan las principales tendencias demográficas y socioeconómicas de este grupo poblacional en el Caribe, especialmente, las condiciones que llevan a su mayor exclusión o inclusión en las dinámicas de la sociedad. Al cabo de un año internacional nutrido de debates sobre políticas orientadas a los jóvenes, es claro el reconocimiento de la juventud como actor clave del desarrollo, así como el imperativo de que los jóvenes sean incluidos explícitamente como un grupo de atención dentro de las políticas de combate a la pobreza, el desarrollo de capacidades y el fortalecimiento del empleo (Naciones Unidas, 2010a).

Cabe recordar que el Año Internacional de la Juventud concluyó oficialmente con la reunión de Alto Nivel en Juventud², en la que se destacó la necesidad de avanzar en políticas y programas integrales y multisectoriales que aborden complementariamente las diversas dimensiones que causan la vulnerabilidad y la exclusión de los jóvenes. A ello se suma el desafío de incorporar las políticas orientadas a la juventud en la agenda marcada por los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y la del trabajo decente. La juventud adquiere presencia en los Objetivos mediante metas explícitas que les afectan o benefician: lograr el empleo pleno y decente para todos, incluidos las mujeres y los jóvenes (meta 1B); asegurar que, para el año 2015, los niños y niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria (meta 2A); eliminar las desigualdades entre los sexos en la enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza para el año 2015 (meta 3A); lograr, para el año 2015, el acceso universal a la salud reproductiva (meta 5B), y haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la propagación del VIH/SIDA (meta 6A). El empleo, la educación, la salud reproductiva y la eliminación de las brechas de género son metas y objetivos explícitos en el marco de una agenda mundial de inclusión de la juventud. En el presente capítulo, se abordan los tres primeros temas y se consideran los factores demográficos y de la agenda política de juventud en los países del Caribe.

Asimismo, en este capítulo se retoman algunos de los temas planteados en capítulos precedentes, ahora centrados en la población joven de los países del Caribe, en particular, la fecundidad adolescente, la inserción laboral y los desafíos de protección social que plantean riesgos específicos para la juventud, sobre todo asociados

a la salud sexual y reproductiva. Como es propio del eje transversal sobre desigualdad que recorre esta edición del *Panorama social*, se destaca aquí que los jóvenes son receptores de herencias diferenciadas por aspectos socioeconómicos en el acceso a activos esenciales para el desarrollo de sus capacidades. La acumulación efectiva de activos que realicen en el presente tiene efectos en su realidad como jóvenes y determinará su realidad futura como adultos, tanto en esferas de la vida personal como de la vida comunitaria.

En este marco, la sociedad debe asegurar oportunidades a la juventud para que pueda participar en los procesos de desarrollo, entendiendo estos procesos como las acciones e inversiones que permiten a los jóvenes realizar la transición de forma consistente con la etapa de adultez, aprovechando y apropiándose de las oportunidades para desarrollarse, y utilizar su capital humano durante estas fases (Naciones Unidas, 2007). En caso contrario, puede presentarse un escenario en donde los jóvenes sean sujetos de exclusión y marginación, privando a la sociedad de su dinamismo y capacidad de innovación. Inversiones insuficientes en educación, programas de protección social inapropiados o restricciones en el acceso a los mercados de trabajo son algunos de los factores que imposibilitan el adecuado desarrollo de este grupo y su participación en la mejora del bienestar de sus comunidades, y la subregión del Caribe no es ajena a ello.

Por lo tanto, es necesaria una acción decisiva de parte de los gobiernos caribeños para incorporar a la juventud en la agenda de desarrollo, comprendiendo las dinámicas de exclusión y las posibilidades con las que efectivamente cuentan los jóvenes para realizar o modificar sus medios de vida. Los niveles efectivos de inclusión juvenil en nuestras sociedades deben conjugar el reconocimiento de los derechos de los jóvenes y la apropiación y el ejercicio de esos derechos por parte de ellos. Varios gobiernos han reconocido tácitamente que las formas en las que se aborden los problemas y las posibilidades de la juventud en las políticas influyen en las condiciones sociales y económicas actuales y en el bienestar y los medios de subsistencia de las generaciones futuras (Naciones Unidas, 1996)³.

¹ El año correspondió al período comprendido entre el 12 de agosto de 2010 y el 11 de agosto de 2011. Véase [en línea] <http://social.un.org/youthyear/unapproach.html>.

² Véase [en línea] http://iseek.un.org/webpgdept2001_3.asp.

³ El Programa de Acción Mundial para los Jóvenes hasta el año 2000 y años subsiguientes constituye una de las referencias normativas más importantes al respecto. Esta resolución brinda un marco de política y directrices prácticas para la adopción de medidas a fin de incrementar la calidad y la cantidad de oportunidades que tienen los jóvenes de participar de manera plena, efectiva y constructiva en la vida de la sociedad. Este programa se centra en diez esferas prioritarias: la educación, el empleo, el hambre y la pobreza, la salud, el medio ambiente, el uso indebido de drogas, la delincuencia juvenil, las actividades recreativas, las niñas y los jóvenes, y la plena y efectiva participación de los jóvenes en la vida de la sociedad y en la adopción de decisiones (Naciones Unidas, 1996).

En este sentido, en el presente capítulo se analiza la situación, sobre la base de datos disponibles, de la población joven en la subregión del Caribe —de manera particular, en los países caribeños de habla inglesa— poniendo especial énfasis en aspectos como la educación y el trabajo, así como las políticas públicas que los gobiernos han instrumentado para brindar atención a los jóvenes. En primer lugar, se

presentan algunos aspectos generales y demográficos e información sobre la situación educativa y laboral de los jóvenes. Posteriormente, se examina el papel de las políticas públicas en la atención a la población joven, haciendo hincapié en la importancia de fortalecer, acrecentar y expandir la apropiación de activos (como la educación, el empleo y la participación) en el desarrollo y la inclusión de la juventud.

B. Perfil demográfico, pobreza y salud de la juventud del Caribe

1. Dinámica y bono demográfico

Las restricciones y dificultades que presentan las distintas definiciones de ser joven, así como la delimitación del rango de edades de las personas comprendidas en esta categoría, han sido ampliamente discutidas en la literatura especializada. En la subregión del Caribe, no hay un rango homogéneo de edades en las categorizaciones oficiales de joven. En algunos casos, como en Dominica, Guyana y Trinidad y Tabago, el rango de edad abarca de los 15 a los 30 años. Algunos autores señalan que la razón para establecer este rango amplio de edades es la alta tasa de desempleo de la población joven, lo que les impide adquirir las responsabilidades y el estatus de adultos (Danns, Henry y LaFleur, 1997, citados en Banco Mundial, 2003). En otros países (Belice o Jamaica, por ejemplo) la categorización de joven sigue el criterio demográfico establecido por las Naciones Unidas, que involucra a las mujeres y hombres de entre 15 y 24 años de edad.

En general, en este capítulo se contempla el rango de edad de 15 a 29 años para agrupar a la población joven. Esto permite abarcar un marco más amplio de cambios entre algunos procesos claves en la vida del joven, como la conclusión del proceso educativo y la inserción laboral. Sin embargo, dentro de este grupo de edad existen diferencias considerables y, por ello, en diversos casos se segmentan los datos por subgrupos.

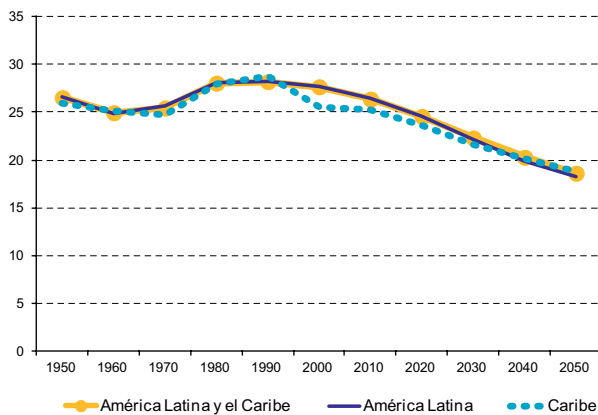
El Caribe no es ajeno al fenómeno mundial de declinación poblacional. La CEPAL estima que en 2011 viven en la subregión 42.649.000 personas (un incremento de 4 millones de personas respecto del año 2000). No

obstante, las tasas de crecimiento anuales medias por cada 100 habitantes han descendido notoriamente (0,76 en el período 2010-2015), debido en parte a la marcada disminución de la tasa bruta de natalidad (17,9 por cada 1.000 habitantes en el período 2010-2015) respecto de la registrada años atrás (CEPAL, 2010b).

En cuanto a la población joven caribeña (de 15 a 29 años), esta representó en 2010 un cuarto de la población total de la subregión, una proporción apenas inferior al promedio de América Latina. Sin embargo, en este caso, la media no brinda una adecuada aproximación a la tendencia central de la composición de la población

joven del Caribe, ya que hay varios países y territorios con porcentajes alejados del promedio. Por ejemplo, en países como Belice (29,4%), Haití (30,1%), la República Dominicana (27,3%), San Vicente y las Granadinas (27%), Santa Lucía (28,2%) y Trinidad y Tobago (27,8%), los porcentajes de personas jóvenes respecto del total de población se ubican varios puntos porcentuales por encima de la media regional; en otros casos, como Barbados (20,9%), Cuba (20,6%), las Islas Vírgenes de los Estados Unidos (21,4%) y Puerto Rico (20,9%), se hallan varios puntos por debajo (CEPAL, 2010b).

Gráfico VI.1
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PROPORCIÓN DE JÓVENES
(15 A 29 AÑOS) EN LA POBLACIÓN TOTAL, 1950-2050
(En porcentajes)



Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL, revisión 2008.

Cuadro VI.1
EL CARIBE (PAÍSES Y TERRITORIOS SELECCIONADOS):
POBLACIÓN DE 15 A 29 AÑOS DE EDAD Y
POBLACIÓN TOTAL, 2010
(En miles)

País o territorio	Población de 15 a 29 años de edad	Población total
Bahamas	88	346
Barbados	55	257
Belice	93	313
Cuba	2 303	11 203
Haití	3 032	10 089
Islas Vírgenes de los Estados Unidos	24	109
Jamaica	725	2 730
Puerto Rico	864	3 998
República Dominicana	2702	9 899
San Vicente y las Granadinas	30	109
Santa Lucía	50	174
Trinidad y Tabago	378	1 344
El Caribe ^a (24 países)	10 715	43 312

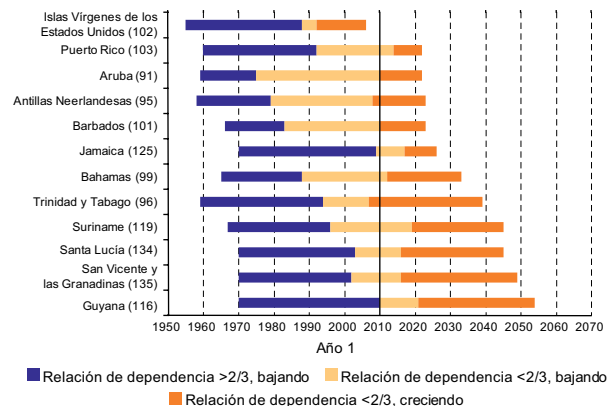
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), *Anuario estadístico de América Latina y el Caribe* (LC/G.2483-P/B), Santiago de Chile, 2010.

^a Se listan separadamente solo los países o áreas que poseían 100.000 o más habitantes en 2010; el resto se incluye en los agregados regionales pero no se lista separadamente. Por lo tanto, estos agregados regionales no corresponden a la suma de los países.

Las proyecciones para los próximos años indican que en la subregión la población joven disminuirá paulatinamente respecto del total de población, con excepción de Trinidad y Tabago y Santa Lucía, en cuyos casos para 2020 el descenso será marcado (de ocho y cinco puntos porcentuales, respectivamente) en comparación con 2010 (CEPAL, 2010b). Este hecho forma parte de lo que se conoce como bono demográfico.

El bono demográfico alude específicamente al período en que la relación de dependencia es inferior a dos personas dependientes por cada tres en edad de trabajar. Incluye el período en el que la relación de dependencia decrece y también el primer período en que vuelve a elevarse, pero cuando el equilibrio entre las edades es todavía beneficioso para la inversión. Todos los países del Caribe han iniciado este período. En las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, el bono ya ha concluido y se espera que solo en Guyana se extienda hasta 2050 (véase el gráfico VI.2). Este bono ofrece oportunidades únicas para los sectores más jóvenes de la población si se acompaña de políticas que promuevan la inversión social en los jóvenes y fortalezcan decididamente su acceso a la educación, la salud y la capacitación, entre otras áreas.

Gráfico VI.2
EL CARIBE: EXTENSIÓN Y ESTRUCTURA
DEL BONO DEMOGRÁFICO
(En número de años)



Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL, estimaciones y proyecciones de población 2010.

Otro fenómeno con efectos significativos en los jóvenes y en la dinámica poblacional del Caribe es su elevada tasa de migración. En los últimos 50 años, se estima que aproximadamente cinco millones de caribeños han emigrado (CDB, 2010). Sin embargo, la información actualizada sobre este fenómeno no es muy amplia. Por ello, aunque los datos disponibles permiten la formulación de hipótesis, es aventurado realizar aseveraciones contundentes al respecto. En general, en el Caribe la migración de jóvenes es menor en términos relativos que

la de los adultos. No obstante, la mayor concentración de migrantes se encuentra en el conjunto poblacional que incluye jóvenes y adultos: más de la mitad (55%) de la población migrante tiene entre 22 y 40 años (CDB, 2010), aunque podría haber casos en los que los jóvenes migrantes que dejan su lugar de origen integren una mayor proporción, si la tendencia no ha sufrido modificaciones

marcadas en el último decenio. Por ejemplo, los datos de 2000 apuntan a que las personas de 15 a 24 años en Belice, Jamaica y Trinidad y Tabago representan casi un cuarto del total de la población migrante (Thomas-Hope, 2009). Es posible inferir que el flujo migratorio de los pobladores jóvenes acelera el grado de envejecimiento de sus comunidades de origen.

Cuadro VI.2
EL CARIBE (PAÍSES SELECCIONADOS): EMIGRACIÓN POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO, 2000-2001
(En porcentajes)

Países seleccionados	Grupo etario masculino					Grupo etario femenino				
	Menos de 15 años	15 a 24 años	25 a 44 años	45 a 64 años	65 años y más	Menos de 15 años	15 a 24 años	25 a 44 años	45 a 64 años	65 años y más
Antigua y Barbuda	5	8	35	34	18	6	10	40	29	15
Bahamas	...	13	49	25	13	...	16	56	21	7
Barbados	...	4	20	38	38	...	4	21	41	34
Belice	...	22	46	24	8	...	25	49	19	7
Bermudas	...	7	41	38	14	...	7	40	38	15
Dominica	12	10	36	24	18	13	11	36	23	17
Granada	4	5	32	32	27	4	8	30	31	27
Jamaica	10	25	42	10	4	10	23	38	14	5
Montserrat	...	11	25	32	32	...	15	27	24	34
Saint Kitts y Nevis	...	8	39	33	20	...	11	38	29	22
Santa Lucía	...	13	37	29	21	...	16	39	26	19
San Vicente y las Granadinas	...	7	38	33	22	...	11	41	28	20
Islas Turcas y Caicos	...	8	42	38	12	...	12	47	29	12
Trinidad y Tabago	...	26	41	24	9	...	25	38	26	11

Fuente: E. Thomas-Hope, "Regional special topic monography on international migration, based on the analysis of the 2000 round census data of eighteen Caribbean countries", Greater Georgetown, Secretaría de la Comunidad del Caribe (CARICOM), 2009.

2. Juventud y pobreza: Los riesgos de la emancipación juvenil temprana

Para los jóvenes, al igual que para el resto de la población, la relación entre los ingresos y el consumo de sus hogares, como indicador del bienestar, no representa el único elemento relevante. Sin embargo sí constituye uno de los activos principales con los que cuentan para satisfacer sus necesidades básicas y es una variable necesaria para caracterizar la situación de indigencia y pobreza.

En el Caribe de habla inglesa, la estimación comparable de los niveles de pobreza presenta dificultades debido a la escasa información uniforme que existe en la subregión sobre la magnitud y la evolución de este fenómeno. Si bien diversos institutos y gobiernos han generado información sobre la incidencia de la pobreza de ingreso según el nivel de consumo basada en líneas nacionales de pobreza por ingresos, la heterogeneidad de fuentes y metodologías de medición dificulta el análisis comparativo de los datos (CEPAL, 2010c). No obstante, considerando estas salvedades, es posible obtener un panorama general de la incidencia de la pobreza en la población joven de esta subregión.

Al igual que en América Latina, la pobreza en el Caribe de habla inglesa, en general, tiene una mayor incidencia en la población infantil (menor de 15 años de edad), lo que no implica que se puedan desestimar los niveles de pobreza en los jóvenes. Por ejemplo, a principios de la década de 2000, casi una quinta parte del total de la población pobre en las Islas Vírgenes Británicas tenía entre 15 y 24 años de edad (CDB/Gobierno de las Islas Vírgenes Británicas, 2003). Cálculos más recientes indican que en Antigua y Barbuda el 25,4% del total de la población en situación de indigencia y el 22,6% del total de pobres tienen entre 15 y 29 años de edad. Segmentando a este último grupo, se obtiene que el 40%, el 33% y el 22% del total de jóvenes de 15 a 19, de 20 a 24 y de 25 a 29 años de edad, respectivamente, se sitúan por debajo de la línea de pobreza correspondiente (CDB/KCL, 2007a). En Santa Lucía, poco más de la cuarta parte de los individuos identificados como pobres son jóvenes (de 15 a 29 años). Este porcentaje es menor en las Islas

Caimán (22%) pero no así en Granada y Trinidad y Tabago, en donde una tercera parte de la población en situación de pobreza es joven (de 15 a 29 años), lo que expresa, a diferencia de otros países, una clara sobrerrepresentación proporcional de jóvenes en la población pobre (CDB/KCL, 2007b, 2008, 2009a; KCL, 2007).

En Dominica y Anguila, el 16,4% y el 22,3% de la población que se encuentra por debajo de la línea de pobreza tiene entre 15 y 24 años de edad, y diferenciando entre Nevis y Saint Kitts, se obtiene que el 15,8% y el 25,7% del total de la población pobre, respectivamente, tiene esas mismas edades (CDB/KCL, 2010a, 2010b, 2009b). Para Belice, el 21% del total de pobres está en ese mismo rango de edad; sin embargo, poco más de la mitad del total de beliceños de 14 a 17 años de edad viven en condiciones de pobreza (Gobierno de Belice/CDB, 2010), lo que ratifica la tendencia general a que, si bien la juventud no suele tener una incidencia de pobreza mayor que el promedio general de la población, sí la tienen los adolescentes.

Desde la perspectiva de ciclo de vida, resulta muy importante considerar la correlación entre el incremento de la probabilidad de estar en situación de pobreza y la emancipación a edades tempranas de la etapa de la juventud, acompañada de la adopción de la función de jefe o jefa de hogar o cónyuge del jefe. Los datos de algunos países muestran que en los primeros quintiles de ingresos la proporción de jóvenes con edades que rondan los 20 años que son jefes o jefas de hogar o cónyuges es

muy superior al porcentaje de jóvenes con estas mismas edades de los quintiles superiores. Por ejemplo, en Granada, el 58% de los jóvenes del primer quintil de ingresos que son jefes de hogar o cónyuges del jefe tienen 24 años o menos, mientras que solo el 19% de los jóvenes del último quintil tienen estas edades. En Guyana, el 12% del total de jóvenes con ese estatus del primer quintil tienen entre 15 y 19 años, mientras que el 2,5% del total de jóvenes del quinto quintil que son jefes de hogar o cónyuges tienen 19 o menos años de edad. Algo similar ocurre en Belice, donde del total de personas de 16 a 20 años que son jefes de hogar o cónyuges, la mitad proviene de los primeros dos quintiles y el 27% de los últimos⁴.

Este fenómeno refuerza los hallazgos planteados en el capítulo IV, en el sentido de que la protección social presenta vacíos de cobertura en determinados segmentos de la población y del ciclo de vida en los que la vulnerabilidad es particularmente alta, y castiga a sectores de bajos ingresos. En el caso de países del Caribe, donde la emancipación temprana está muy asociada a los bajos ingresos familiares, se podría inducir la debilidad o ausencia de esquemas de protección social ante la adquisición de mayores responsabilidades por parte de jóvenes que se emancipan tempranamente y adquieren la función de proveedores de hogar. En este caso, la falta de redes de protección social es especialmente problemática, por cuanto se trata de una edad, dentro del ciclo de vida, en que los jóvenes deberían contar con apoyo para seguir adquiriendo capacidades y activos.

3. Mortalidad juvenil

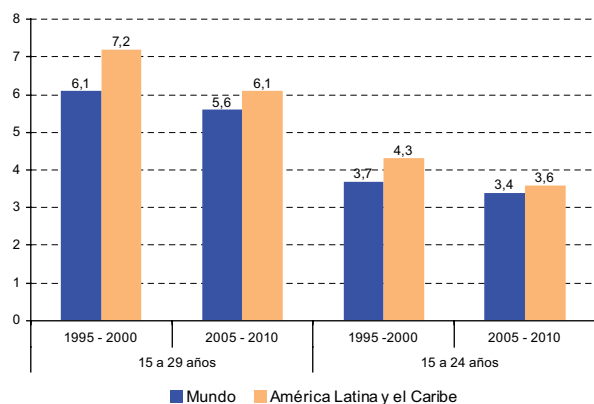
La población en la etapa de juventud constituye el grupo con menor incidencia de enfermedades y tasas de mortalidad, no solo en la subregión caribeña, sino en todo el mundo (véase el gráfico VI.3). Sin embargo, durante estos años se registra un mayor número de incidentes negativos por exposición a riesgos externos relacionados con las actividades y conductas de los jóvenes, en comparación con otros grupos de edad. Es decir que las principales causas de muertes de jóvenes no son producto de enfermedades degenerativas o microbiológicas, sino de exposición a situaciones violentas y accidentes evitables. En el Caribe, poco más de la mitad de las muertes de jóvenes de 15 a 29 años corresponden a causas exógenas (homicidios, accidentes y suicidios). En este contexto, llama la atención que la proporción de defunciones de jóvenes en América Latina y el Caribe sea mayor que el promedio mundial, pues esto coincide con el hecho de que la tasa de homicidios de la región sea también superior al promedio mundial y que la violencia esté bastante focalizada en la

juventud (véase el gráfico VI.3). Como se observa en el cuadro VI.3, para un total de 25 países y territorios del Caribe, la presencia de agresiones, accidentes y suicidios entre las causas de muerte es claramente una marca distintiva en la población de 15 a 29 años de edad.

Si bien no hay evidencia contundente, es importante señalar que diversos estudios apuntan a que si se segmenta a la población joven y se analizan los patrones de las tasas de mortalidad, existen factores relacionados con inequidades sociales y situaciones de exclusión social que incrementan la posibilidad de fallecer de los individuos en situación de pobreza en comparación con sus pares no pobres. En otras palabras, los jóvenes pobres enfrentan una mayor exposición a patologías, accidentes y violencia, por lo que sus tasas de mortalidad son más altas (CEPAL/OIJ, 2004).

⁴ Calculado sobre la base de tabulaciones de las encuestas de hogares de los respectivos países.

Gráfico VI.3
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: DEFUNCIONES DE JÓVENES
(AMBOS SEXOS), 2005-2015
(En porcentajes)



Fuente: Naciones Unidas, "World Population Prospects, the 2010 Revision", Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, 2011.

Existen evidencias de que la violencia asociada a actos criminales, a diferencia de la violencia general, está relacionada con los niveles de desarrollo: altos niveles

delictivos generan bajos niveles de desarrollo humano y económico (UNODC, 2011). La violencia asociada al crimen es un problema común a varias sociedades del Caribe. Aparte de los altos costos económicos que acarrearán a los países, los niveles de violencia provocan repercusiones negativas en el bienestar de las personas, particularmente en la gente joven. Este grupo presenta una sobrerrepresentación tanto en las víctimas como en los perpetradores del crimen y la violencia (UNODC/Banco Mundial, 2007). Datos recientes indican que las problemáticas asociadas a esta situación merecen un lugar relevante en la agenda de los gobiernos del Caribe. Esta subregión, junto con Centroamérica, América del Sur y África meridional, es una de las zonas con mayores tasas de homicidios y, a diferencia de otras regiones del mundo en las que se han obtenido descensos en esas tasas en los últimos 25 años, en el Caribe se han incrementado, registrando un solo período de disminución alrededor de 2006. Países como Jamaica, la República Dominicana y Trinidad y Tabago han sido especialmente afectados por este fenómeno (UNODC, 2011).

Cuadro VI.3
EL CARIBE (25 PAÍSES Y TERRITORIOS): PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD DE LA POBLACIÓN JOVEN Y DE LA POBLACIÓN ADULTA, 2009
(En porcentajes)

15 a 29 años		30 años y más	
Causa de mortalidad	Porcentaje	Causa de mortalidad	Porcentaje
Agresiones y homicidios	13,70	Enfermedades isquémicas del corazón	18,02
Accidentes de transporte terrestre	13,22	Enfermedades cerebrovasculares	10,99
Lesiones autoinflingidas intencionalmente y suicidios	9,69	Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	6,61
Ahogamiento y sumersión accidentales	4,78	Influenza y neumonía	5,65
Neoplasia maligna del tejido linfático, hematopoyético y tejidos afines	4,08	Demencia y mal de Alzheimer	4,07
Enfermedad por virus de inmunodeficiencia humana (VIH)	3,88	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	3,64
Embarazo, parto y puerperio	2,63	Diabetes mellitus	3,15
Malformaciones, congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	2,21	Enfermedades hipertensivas	2,99
Influenza y neumonía	2,01	Neoplasia maligna de la próstata	2,97
Neoplasia maligna del encéfalo	1,80	Insuficiencia cardíaca, complicaciones y enfermedades mal definidas del corazón	2,97
Enfermedades isquémicas del corazón	1,38	Neoplasia maligna del colon, sigmoide, recto y ano	2,55
Causas mal definidas	1,25	Causas mal definidas	0,73

Fuente: Organización Panamericana de la Salud (OPS), "Causas de mortalidad en las Américas" [en línea] http://ais.paho.org/phis/viz/mort_causasprincipales_lt_oms.asp.

4. Salud sexual y reproductiva

Entre los temas relevantes vinculados a la juventud, se encuentran sin duda la sexualidad y la reproducción. Es común que estos tópicos se aborden desde una óptica unidimensional, vinculándolos a temas exclusivos de salud. De esta forma, se hace hincapié en aspectos tales como la fecundidad, la natalidad, las enfermedades de transmisión sexual y otros. Por ende, las iniciativas que

surgen de estas aproximaciones limitan la sexualidad y reproducción al acto físico en sí y a sus consecuencias, cuando en realidad estos temas alcanzan también otras esferas. La reproducción y la sexualidad tienen conexiones con variados aspectos del bienestar e implicaciones en diversas áreas del desarrollo (Cornwall y Jolly, 2006; Jolly, 2010).

Los temas de juventud, sexualidad y reproducción son especialmente relevantes para la subregión del Caribe, dada la corta edad a la que un porcentaje considerable de la población inicia su vida sexual activa. Se estima que cerca del 30% de los adolescentes de ambos sexos del Caribe de habla inglesa han tenido relaciones sexuales, muchos de ellos a edades muy tempranas. En promedio, los hombres que tienen relaciones durante el período de adolescencia lo hacen a partir de la edad de 11 años y, en el caso de las mujeres, desde los 14 a 15 años. Además, cerca de la mitad de las adolescentes sexualmente activas manifiestan que su primera experiencia sexual fue forzada, y casi un tercio de los adolescentes de ambos sexos de esta misma subregión con sexualidad activa tienen múltiples parejas sexuales (Pilgrim y Blum, 2011). Lo anterior plantea enormes desafíos en materia de políticas relativas a la adolescencia, tanto de información oportuna como de prevención de la violencia sexual y atención a las víctimas.

En cuanto a la maternidad adolescente, las dinámicas de América Latina y el Caribe se caracterizan por la resistencia a la baja, en contraste con las tasas de fecundidad para el conjunto de la población. Por otra parte, la región presenta una intensidad notablemente mayor de maternidad adolescente en mujeres de menor nivel educacional y, por lo mismo, de estratos socioeconómicos de menores ingresos. (CEPAL/OIJ, 2008; Rodríguez, 2009). Si bien

se han registrado descensos en los últimos años, las tasas de fecundidad de las adolescentes (de 15 a 19 años) para el conjunto de América Latina siguen siendo muy elevadas y muy superiores al promedio mundial (véase el cuadro VI.4).

Cuadro VI.4
MUNDO Y PRINCIPALES REGIONES: TASA ESPECÍFICA DE FECUNDIDAD DE MUJERES DE 15 A 19 AÑOS, 2000-2015
(En número de nacimientos por 1.000 mujeres)

	2000-2005	2005-2010	2010-2015
África	110,87	101,43	91,75
Mundo	60,36	55,68	51,96
Oceania	33,96	33,38	29,26
Asia	51,07	45,92	42,37
América Latina y el Caribe	81,19	73,39	70,50
América del Norte	40,49	38,62	25,89
Europa	19,68	19,29	15,42

Fuente: Naciones Unidas, "World Population Prospects, 2010 Revision", Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, 2011 [en línea] <http://esa.un.org/unpd/wpp/Excel-Data/fertility.htm>.

Sin embargo, en el Caribe, la tasa de fecundidad de mujeres adolescentes (cociente entre el número de nacimientos y el número total de mujeres de ese grupo de edad) es notoriamente más baja que en América Latina: 17 de los 19 países de América Latina y el Caribe con tasas por debajo de 61 nacimientos por cada 1.000 habitantes entre mujeres de 15 a 19 años pertenecen a la subregión del Caribe, y solo Belice, Guyana y San Vicente y las Granadinas están cerca del promedio latinoamericano (véase el cuadro VI.5).

Cuadro VI.5
EL CARIBE: TASA DE FECUNDIDAD DE LAS ADOLESCENTES Y VARIACIÓN PORCENTUAL, ALREDEDOR DE 1990 Y 2000^a
(En número de nacimientos por 1.000 mujeres)

País o territorio	Alrededor de 1990	Alrededor de 2000	Años de referencia ^b	Variación porcentual ^c
Anguila	50,6	42,1	1996-2006	-16,8
Antigua y Barbuda	70,4	66,8	1991-2001	-5,1
Antiguas Antillas Neerlandesas	50,2	34,2	1991-2006	-31,9
Aruba	39,8	41,2	1997-2007	+3,5
Bahamas	58,4	38,7	1997-2007	-33,7
Barbados	56,2	50,8	1998-2007	-9,6
Belice	110,2	90,7	1992-2002	-17,7
Bermudas	36,2	16,0	1998-2008	-55,8
Cuba	49,8	50,1	1998-2008	+0,6
Dominica	58,2	47,1	1998-2006	-19,1
Granada	99,3	53,9	1990-2000	-45,7
Guyana	81,6	101,0	2000-2008	+23,8
Islas Caimán	65,7	...	1994	...
Islas Turcas y Caicos	33,9	25,5	2001-2005	-24,8
Islas Vírgenes Británicas	46,7	27,4	1997-2007	-41,3
Islas Vírgenes de los Estados Unidos	83,2	51,5	1997-2007	-38,1
Jamaica	88,0	60,3	1996-2006	-31,5
Montserrat	31,6	33,7	1994-2004	+6,6
Puerto Rico	76,3	60,1	1996-2006	-21,2
República Dominicana	115,0	50,8	1994-2005	-55,8
Saint Kitts y Nevis	81,2	67,3	1991-2001	-17,1
Santa Lucía	89,5	49,7	1994-2004	-44,5
San Vicente y las Granadinas	93,8	71,6	1993-2003	-23,7
Trinidad y Tabago	44,3	32,5	1994-2004	-26,6

Fuente: Naciones Unidas, "World Population Prospects: 2010 revision", Departamento de Asuntos Económicos y Sociales 2011, actualización para 2011 sobre la base de cifras de la base de datos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio [en línea] <http://esa.un.org/unpd/wpp/Excel-Data/fertility.htm>.

^a Los datos provienen de distintas fuentes, incluidas estimaciones oficiales publicadas por la División de Estadística del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, la Encuesta de Demografía y Salud de Macro International, la Encuesta de Salud Reproductiva, la Secretaría de la Comunidad Caribeña (CARICOM) y estadísticas nacionales.

^b Se tomó como referencia el dato más reciente disponible para la década de 2000 y el correspondiente a la década anterior que estuviera disponible, para procurar mostrar los cambios en un período de diez años.

^c En relación con el año inicial.

En la mayor parte de los países del Caribe, las tasas fecundidad de adolescentes ha experimentado una disminución de diversos órdenes en los años recientes, llegando incluso a variaciones cercanas a los 40 puntos porcentuales en varios casos, aunque hay excepciones. Aruba, Guyana y Montserrat han experimentado incrementos de esta tasa (en el caso de Guyana, el incremento implica casi un 24% de la tasa registrada a principios de la década de 1990) (véase el cuadro VI.5).

El hecho de que la maternidad adolescente tenga una incidencia mucho más alta entre las mujeres pobres y de menor nivel educativo resulta muy preocupante, porque implica, en primer lugar, una desigualdad en el pleno ejercicio de los derechos reproductivos, sobre todo cuando se trata de embarazos involuntarios. En segundo lugar, reproduce la desigualdad y la exclusión intergeneracional, pues la maternidad temprana en condiciones de pobreza y baja educación merma en gran medida las perspectivas laborales a lo largo de la vida (porque las madres difícilmente seguirán estudiando y difícilmente contarán con redes sociales para el cuidado del o de los hijos). De este modo, se perpetúa la exclusión de una generación a la siguiente.

Sin duda, esta desigualdad de oportunidades y perspectivas de ciclo de vida plantea serios desafíos a los sistemas de protección social y de cuidado, pues se trata de un grupo poblacional (madres jóvenes con hijos pequeños) que, como se vio en el capítulo IV, muchas veces se ve excluido de esos sistemas y no tiene recursos para adquirir servicios de cuidado en el mercado.

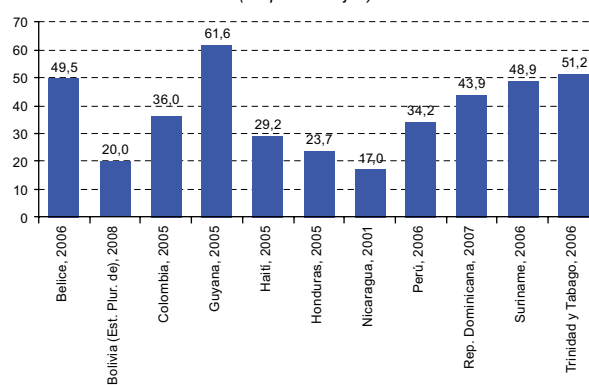
El VIH/SIDA es un tema de máxima importancia para los países del Caribe, dada su alta incidencia. Si bien en el último decenio se han registrado leves descensos en el número de casos nuevos de personas infectadas con VIH en esta subregión (se estima que en 2001, aproximadamente 20.000 personas contrajeron el VIH, cifra que se redujo a cerca de 17.000 personas en 2009), se calcula que entre 220.000 y 270.000 personas portan el virus, de las cuales aproximadamente el 53% son mujeres. Es importante señalar que la subregión del Caribe, junto con el África subsahariana, son las únicas dos regiones del mundo donde el número de mujeres portadoras de VIH sobrepasa al de los varones en la misma situación (ONUSIDA, 2010). Por ejemplo, en Trinidad y Tabago las mujeres constituyen el 75% de los nuevos casos entre personas de 15 a 24 años, y en Jamaica la relación de mujeres infectadas para ese mismo grupo etario en relación con los hombres es de 3 a 1 (CDB, 2010).

Cabe resaltar también que la prevalencia de VIH/SIDA entre personas jóvenes y adultas (de 15 a 49 años) en el Caribe —equivalente al 1% de la población total— es la segunda mayor del mundo, solo por detrás del África subsahariana. En comparación, el promedio en Centroamérica y América del Sur equivale a la mitad de la cifra correspondiente a la subregión caribeña (ONUSIDA, 2010). Sin embargo, la heterogeneidad de las tasas de

prevalencia no se presenta exclusivamente entre las distintas subregiones del continente americano: también se da dentro de ellas, incluida la zona del Caribe. De este modo, la prevalencia en Cuba (0,1%) contrasta con las de otros países que superan del 1% como las Bahamas (3,1%), Barbados (1,4%), Belice (2,3%), Haití (1,9%), Jamaica (1,7%) y Trinidad y Tabago (1,5%) (OMS, 2011).

Para la población joven del Caribe, el VIH tiene particular relevancia. Aproximadamente el 83% de los casos de VIH son diagnosticados en personas con edades comprendidas entre los 15 y 54 años, y una tercera parte de los casos nuevos se da en personas de entre 25 y 34 años de edad. Si se considera un período de incubación de la enfermedad de ocho años, se infiere que cerca de un tercio de los casos nuevos de personas infectadas tienen entre 15 y 24 años de edad (Banco Mundial, 2003). En cuanto al uso del preservativo, estudios recientes indican que, aun cuando un 90% de los adolescentes de la subregión caribeña de habla inglesa con sexualidad activa dice haber usado preservativo, solo entre el 16% y el 25% manifiesta utilizarlo de forma recurrente (Pilgrim y Blum, 2011). Circunscribiendo el grupo de análisis a las mujeres de entre 15 y 24 años de edad de países caribeños como Belice, Guyana, la República Dominicana y Trinidad y Tabago, se obtiene que cerca del 50% usaron preservativo en su última relación sexual, porcentaje relativamente alto en comparación con algunos países latinoamericanos.

Gráfico VI.4
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (11 PAÍSES): USO DE PRESERVATIVOS EN LA ÚLTIMA RELACIÓN SEXUAL DE ALTO RIESGO DECLARADO POR MUJERES DE 15 A 24 AÑOS
(En porcentajes)



Fuente: División de Estadística de las Naciones Unidas, Base de Datos de los indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en CEPALSTAT.

La concentración de VIH/SIDA en la población joven caribeña también causa repercusiones económicas adversas para los países, ya que tiene incidencias negativas en el grupo poblacional con mayor potencial productivo. Además, dado que en varios casos estos jóvenes sostienen económicamente sus hogares o contribuyen a los ingresos, algunas implicaciones de vivir con esta enfermedad aumenta su propia vulnerabilidad y la de sus hogares, manteniéndolos o impulsándolos a situaciones de pobreza (CDB, 2010).

C. Acceso a la educación

La relevancia de la educación en la vida de las personas y en la sociedad es incuestionable. Los aspectos educativos no están solo relacionados con la generación futura de ingresos, sino con el uso de habilidades adquiridas para ejercer nuevas formas de ciudadanía, convivir constructivamente en el multiculturalismo y combinar el vínculo inmediato con el vínculo mediático (CEPAL/OIJ, 2004, pág.165). Además, su importancia se acrecienta en el caso de los jóvenes, ya que, para ellos, la educación es uno de los factores centrales que les permiten adquirir los medios para realizar sus vidas.

La educación formal moderna y sus sistemas de impartición fueron desarrollados primordialmente teniendo en consideración a los niños y jóvenes, bajo la premisa de que estos se encuentran en una fase primigenia de aprendizaje y que pueden absorber los saberes necesarios y adecuados de manera paulatina en grupos de edades homogéneas. Sin embargo, muchos de los indicadores educativos no revelan demasiado sobre los jóvenes como fenómeno social y como población destinataria de la educación formal, ya que se centran en la participación de las personas en los procesos institucionales de aprendizaje. Esto se debe, en parte, a que es complicado precisar e interpretar los resultados educativos, sobre todo en forma comparativa, ya que son altamente dependientes del contexto; los accesos y avances educativos varían y la información es heterogénea en términos de cantidad y calidad (Naciones Unidas, 2003). No obstante, los datos sí permiten entretejer un panorama en el que las diferencias e inequidades que emergen desde niveles de educación primaria y que continúan y se incrementan en los niveles terciarios de educación trascienden el ámbito meramente educativo y repercuten en los modos de vida de las personas. Una menor segmentación del aprendizaje por cuestiones socioeconómicas contribuye a disminuir las brechas de desigualdad entre generaciones y brinda mejores opciones de movilidad e integración social y ocupacional a lo largo del ciclo de vida, con la consecuente reducción de futuras disparidades salariales y de bienestar (CEPAL, 2010a).

América Latina y el Caribe se caracteriza por sus altos grados de matriculación en los primeros niveles de educación, que bajan sustancialmente conforme se avanza hacia los niveles secundario y terciario. Esto es particularmente notorio en el Caribe. En esta subregión en particular, el porcentaje de alfabetos jóvenes de 15 a 24 años es del 89%, índice

que se ubica por debajo del promedio de América Latina (97%). La matrícula bruta a nivel primario y secundario es alta: la mayoría de los países de la subregión con datos disponibles para 2008 registran tasas iguales o mayores al 98%, con excepción de Dominica, que posee una de las tasas de matriculación más bajas en este nivel (82%), así como Anguila, las Islas Caimán y Jamaica, con tasas cercanas al 93,5% (Naciones Unidas, 2010).

Las tasas de matriculación de la educación secundaria presentan una tendencia a la baja, si bien no en todos los casos (por ejemplo, la tasa de matriculación en este nivel en Dominica (105%) es mayor que en el nivel primario, y países como Antigua y Barbuda, Granada, las Islas Vírgenes Británicas, Montserrat y San Vicente y las Granadinas tienen tasas de matriculación en secundaria iguales o mayores a 100%). Los casos más notorios de descenso de la matriculación bruta en secundaria respecto del nivel inferior inmediato son Anguila (de 94% a 80%), Aruba (de 114% a 95%), las Bahamas (de 103% a 93%), Belice (de 120% a 75%), Cuba (de 104% a 90%), la República Dominicana (de 104% a 75%) y Trinidad y Tabago (de 103% a 89%). Por su parte, Santa Lucía (de 98% a 93%) y Jamaica (de 93% a 91%) registran disminuciones leves de matriculación bruta entre ambos niveles de estudios (UNESCO, 2011). Sin embargo, los índices de conclusión de secundaria son muy inferiores: por ejemplo, para la población de 20 a 24 años, la conclusión de secundaria ronda en Jamaica el 85% para las mujeres y el 75% para los hombres, en Guyana el 68% en mujeres y el 60% en hombres, y en Belice apenas el 24% en mujeres y el 19% en hombres⁵.

⁵ Sobre la base de tabulaciones de las encuestas de hogares de los respectivos países.

En la educación terciaria es donde se registran descensos drásticos en las tasas brutas de matriculación, con excepción de Cuba, que tiene una tasa mayor a 100%. De los países de la subregión con datos disponibles para 2008, Granada registra una de las tasas brutas de matriculación más altas en este nivel educativo (59%). Le siguen las Islas Caimán, Aruba, Jamaica y Montserrat, con 36%, 33%, 24% y 17%, respectivamente. Santa Lucía y Belice presentaron tasas apenas por encima de los 10% (15% y 11%, respectivamente), y Anguila, Dominica y las Islas Vírgenes Británicas por debajo de los 6 puntos (5%, 4% y 1%, respectivamente) (UNESCO, 2011). Sin embargo, una parte de las bajas tasas de matriculación bruta en el nivel terciario puede obedecer a las elevadas tasas de movilidad de estudiantes de este nivel hacia el extranjero. Por ejemplo, en Antigua y Barbuda y las Bermudas, la totalidad de nacionales que estudian en el nivel terciario lo hacen en el extranjero. Esta misma tasa de movilidad alcanza 88,4 puntos porcentuales en Santa Lucía y 32,6 puntos en las Islas Vírgenes Británicas. Varios otros países caribeños registran tasas de movilidad por encima del promedio de América Latina y el Caribe (1%), como son los casos de Trinidad y Tabago (29,6%), Barbados (12,7%) y Aruba (6,7%) (UNESCO, 2009). Por otra parte, la conclusión de la educación universitaria (cinco años) es mucho más baja. A modo de ejemplo, este índice solo alcanza, para jóvenes de 25 a 29 años, en torno al 3% en Jamaica y el 4% en Guyana⁶.

Los datos anteriores presentan pocas variaciones por sexo. Incluso, en muchos casos, las tasas de matriculación son mayores para las mujeres que para los hombres, por lo que el género ha perdido peso específico para explicar las inequidades en materia de educación, y al parecer son otras inequidades sociales, como las diferencias de ingresos o el asilamiento territorial, las que influyen con mayor prominencia en las diferencias de oportunidades educativas. Por ejemplo, en Santa Lucía, la proporción de personas de 15 o más años de edad que no poseen un certificado de educación postsecundaria decrece de forma progresiva conforme avanzan los quintiles de consumo. De esta forma, en el quintil de consumo más bajo, el 69% de las personas del rango de edad mencionado no tienen un certificado postsecundario, mientras que en el último quintil, el porcentaje es del 51%. Si se considera solo el nivel terciario, se obtiene que el 1,1% de las personas del quintil más bajo han tenido acceso, en tanto que el porcentaje asciende al 25,6% en el quintil de consumo más alto (CDB/KCL, 2007b).

Un panorama similar se encuentra en Granada y en Saint Kitts y Nevis. En el primer caso, el 67%, el 11,3% y

el 16,6% de los jóvenes granadinos del quintil de consumo más alto con edades de 15 a 19 años, de 20 a 24 años y de 25 a 29 años, respectivamente, asisten a algún nivel de instrucción. En contrapartida, solo el 55,5%, el 6,8% y menos del 1% de los mismos grupos etarios respectivos del quintil más pobre asisten a la escuela (CDB/KCL, 2009a). Para Saint Kitts y Nevis, la diferencia del porcentaje de individuos que asisten a la escuela entre los jóvenes del grupo de edad de 15 a 19 años de los quintiles primero y quinto es de poco más de diez puntos (un 55% y un 67,9% para cada caso), pero se acrecienta entre los jóvenes de 20 a 29 años. De este modo, el 31% de las personas del grupo de edad de 20 a 24 años pertenecientes al quintil de consumo más alto van a la escuela, en comparación con el 5,9% de los jóvenes de esas edades del quintil más bajo, en tanto que el 4,9% de las personas del grupo de edad de 25 a 29 del primer quintil tiene acceso a la educación, en contrapartida con el 12,7% de los jóvenes del quintil más alto para esas mismas edades (CDB/KCL, 2009b).

En Dominica, casi la totalidad (95,3%) de los jóvenes de 15 a 19 años del quinto quintil están matriculados en la escuela, cifra que desciende de forma paulatina hasta llegar al 81,7% en el primer quintil. No obstante, de forma similar a otros países de la subregión, en niveles de educación superiores las brechas se ensanchan. Para las personas del grupo de edad de 20 a 24 años, la proporción de personas que asisten a la escuela en el quintil más bajo (5,9%) presenta una diferencia de casi 30 puntos con respecto a las del quintil más alto (34,7%) (CDB/KCL, 2010a). Las cifras de la asistencia escolar en Antigua y Barbuda también indican que las personas de los quintiles bajos de consumo tienen menos probabilidades de cursar y concluir estudios más allá del nivel secundario que sus contrapartes de los quintiles altos (CBD/KCL, 2007a).

De igual forma, los niveles de postsecundaria y terciaria en Belice presentan marcados sesgos a favor de las personas con mayores ingresos. Del total de estudiantes de postsecundaria y del nivel terciario, solo el 16% y el 11%, respectivamente, provienen de los dos quintiles más bajos. En general, el 23% de los jóvenes de entre 17 y 18 años de edad de los quintiles de ingreso primero y segundo están matriculados en un nivel postsecundario o terciario. El porcentaje para el mismo grupo poblacional en los dos últimos quintiles es del 80% (Gobierno de Belice/CBD, 2010). En Trinidad y Tabago, la diferencia de asistencia escolar es de 30 puntos porcentuales entre el primer quintil de ingreso y el último, considerando al grupo de población de 15 a 17 años (61,1% para el primer quintil y 90,7% para el quinto quintil) (CEPAL, 2011b).

El aspecto territorial también tiene incidencia en las brechas educativas de los jóvenes. Por ejemplo, en Belice, el 65% del total de jóvenes de zonas rurales con edades para asistir al nivel secundario de enseñanza (13 a 16 años)

⁶ Sobre la base de tabulaciones de las encuestas de hogares de los respectivos países.

lo hace, comparado con el 88% de los jóvenes de áreas urbanas (Gobierno de Belice/CBD, 2010). En Jamaica, el 11,6% de la población urbana con edades comprendidas entre los 19 y los 24 años va a la escuela; en contraste, solo el 8% de las personas con el mismo rango de edad que viven en áreas rurales asisten a un centro educativo (CEPAL, 2011b).

El tema de la educación de los jóvenes implica diversas aristas y retos, e involucra no solo aspectos de matriculación o inserción en las estructuras institucionales educativas, sino también de currículo y calidad. Una sociedad más y mejor educada puede sacar mayores provechos de las condiciones socioeconómicas y tecnológicas actuales. Por ello, y sin menoscabo de la enorme relevancia que la educación temprana y primaria tiene en la vida futura

de las personas, no puede dejarse de lado la importancia que la educación postsecundaria y terciaria —niveles tradicionalmente cursados por población joven— tiene para las personas y sus comunidades. Diversos estudios han demostrado que los niveles bajos de educación tienen una fuerte correlación con el riesgo de exclusión social (Naciones Unidas, 2003), y también se ha comprobado que la mejora de la oferta educativa puede contribuir a disociar los orígenes sociales de los individuos de su bienestar (CEPAL, 2010a). Por ello, es menester que los gobiernos y las sociedades de la subregión implementen acciones para disminuir el costo de oportunidad que significa para los jóvenes el seguir estudiando, sobre todo para aquellos situados en los primeros quintiles de ingreso y en zonas alejadas de los centros urbanos.

D. Desempleo juvenil

El empleo es uno de los factores con mayor relevancia en el proceso de desarrollo de los jóvenes. Contar con un empleo digno no solo provee de los ingresos monetarios necesarios para satisfacer ciertos aspectos ligados al bienestar, sino que constituye uno de los medios de afianzar, incrementar y consolidar el sentido de pertenencia de las personas, en la medida en que estas perciban que aportan al progreso colectivo y se sientan parte integrante de un sistema de aportes y retribuciones (CEPAL/OIJ, 2008, pág. 169). Aunado a ello, el acceso a numerosos sistemas de protección o de seguridad social está ligado a la posesión de un empleo formal. Es decir, la carencia de una fuente de empleo formal es un mecanismo de exclusión para ciertos sistemas de seguridad o protección social.

Por estas y otras razones, es menester contar con un trabajo digno, y es posible afirmar que esto es particularmente necesario en el caso de los jóvenes, ya que las características de su inserción en el mercado laboral repercuten directamente en su futuro. Por ello, resulta preocupante que el desempleo sea un fenómeno con alta incidencia entre la población juvenil.

Las estimaciones indican que la participación de los jóvenes en el empleo continuará descendiendo, como ha sido la tendencia en el último decenio: entre los años 2000 y 2009, la tasa de participación juvenil en la fuerza de trabajo pasó del 53,6% al 51,1%, y la reciente crisis económica develó la fragilidad de la situación de los jóvenes con respecto al empleo —77,7 millones de

jóvenes en el mundo con edades entre 15 y 24 años eran desempleados en 2010, lo que representa 4,2 millones jóvenes desempleados más que en el año previo a la crisis (2007) (OTI, 2011a). Asimismo, los jóvenes también tienen mayores probabilidades que la población adulta de ingresar al mercado laboral por medio de un empleo vulnerable (OTI, 2010).

En América Latina y el Caribe, la tasa de desempleo de los jóvenes del grupo de 15 a 24 años sufrió un incremento de 1,5 puntos porcentuales entre 2007 y 2009, para situarse en un 15,7%. En este sentido, la participación en la fuerza de trabajo se retrajo 0,5 puntos porcentuales en ese período para el mismo grupo poblacional, posicionándose en un 52,7% (OTI, 2011a).

Considerando solo a los países caribeños, a inicios de la década pasada, los jóvenes de 15 a 24 años conformaban entre el 40% y el 60% del contingente desempleado, a pesar de que representaban entre el 20% y el 30% de la fuerza de trabajo. Del mismo modo, las tasas de desempleo de ese grupo etario en algunos países de la subregión duplicaban o cuadruplicaban las registradas en la población adulta (Banco Mundial, 2003). Datos recientes indican que este escenario no ha sufrido variaciones significativas.

Por ejemplo, en Belice, la tasa de desempleo de jóvenes de 20 a 24 años en 2009 fue siete puntos porcentuales mayor al promedio nacional (13%) y con mayor incidencia en el caso de las mujeres: la tasa de desempleo de las jóvenes de 14 a 19 años es del 43% y la de los hombres de esas mismas edades es del 26%; para el grupo poblacional de 20 a 24 años, la tasa de desempleo de las mujeres asciende al 28% y la de sus contrapartes varones es del 16% (Gobierno de Belice/CBD, 2010). En Granada, más de la mitad de las personas desempleadas (54%) son jóvenes (de 15 a 29 años) (CDB/KCL, 2009a). Una encuesta sobre condiciones de vida efectuada en Santa Lucía también identifica una alta concentración del desempleo en el grupo poblacional con edades comprendidas entre los 19 y los 35 años (CDB/KCL, 2007c). En el caso de Dominica, un 34% de las personas desempleadas tienen entre 15 y 24 años de edad (CDB/KCL, 2010a).

Cuadro VI.6
EL CARIBE (8 PAÍSES Y TERRITORIOS): JÓVENES DE
15 A 24 AÑOS DESEMPLEADOS
(En porcentajes)

País o territorio	Año	Porcentaje
Bahamas	2008	33,2
Barbados	2003	33,7
Islas Caimán	2008	26,9
Guadalupe	2006	16,4
Jamaica	2008	37,2
Martinica	2008	19,0
Santa Lucía	2004	40,0
Trinidad y Tabago	2008	42,0

Fuente: Organización Internacional del Trabajo (OIT), base de datos LABORSTA Internet [en línea] <http://laborsta.ilo.org/>.

Los datos de la Organización Internacional del Trabajo muestran un panorama similar en otros países caribeños. Los jóvenes de 15 a 24 años representan alrededor del 31% del total de las personas desempleadas, destacándose Guadalupe y Martinica por situarse varios puntos porcentuales por debajo de la media, y Santa Lucía y Trinidad y Tabago por tener los porcentajes más altos de esa selección de países. No obstante, si se extiende la cohorte de edad estableciendo un rango de 15 a 29 años, los porcentajes de jóvenes sin empleo respecto del total de

desempleados aumentan en varios casos. De este modo, Martinica alcanza un porcentaje del 29% y Trinidad y Tabago se ubica cerca del 57% (OIT, 2011b).

La situación de elevados niveles de desempleo entre los jóvenes del Caribe no solo constituye un desperdicio del bono demográfico y de la ventana de oportunidades que la tendencia demográfica brinda a los países de la subregión, al tener altas proporciones de personas económicamente activas, además, lo que es más importante aún, la incapacidad de crear las condiciones para la inserción de los jóvenes en trabajos dignos disminuye las oportunidades de estos, limitando su desarrollo presente y futuro y exacerbando en varios casos los niveles de desigualdad y pobreza. Por ejemplo, en Antigua y Barbuda, el 80% de los varones desempleados de 25 a 29 años viven en condiciones precarias, con menos de 2,51 dólares al día (a nivel general, el 30,6% del total de la población desempleada en ese país vive con un monto menor) (CDB/KCL, 2007a).

Otro aspecto a analizar sobre el empleo juvenil es la sobrerrepresentación que tienen los jóvenes de los quintiles de consumos inferiores en la conformación de la fuerza de trabajo con respecto a sus pares de los quintiles altos y el cambio que se da en esta tendencia en las edades adultas. Por ejemplo, en Saint Kitts y Nevis, del total de jóvenes que trabajan, el 21,2% proviene del primer quintil y el 15,2% del último quintil. Si se considera al total de la población con 30 años de edad o más que forma parte de la fuerza laboral se obtiene que el 12,5% pertenece al primer quintil y el 27,4% al quinto quintil. En Antigua y Barbuda, si bien los porcentajes de jóvenes de 15 a 29 años de edad de los quintiles inferior y superior que forman parte de la fuerza de trabajo con relación al total de personas de esas edades que trabajan son similares (un 17% y un 15,5%, respectivamente), si se considera a las personas mayores (30 a 64 años) que trabajan, la brecha entre los porcentajes se amplía: un 13,5% para el primer quintil y un 30% para el quinto quintil respecto del total de adultos que forman parte de la fuerza laboral. En Granada, los jóvenes con edades comprendidas entre los 15 y los 24 años de niveles socioeconómicos bajos tienen mayor probabilidad de ser parte de la fuerza laboral que los jóvenes con esas mismas edades de grupos socioeconómicos altos (CDB/KCL, 2007a, 2009a, 2009b).

Aparte de los elevados costos de oportunidad de la educación para los jóvenes de hogares con bajos ingresos que estos datos hacen suponer, también son preocupantes las potenciales limitantes que enfrentarán en su futuro laboral. Su temprana inserción en el mercado de trabajo puede inhibir la adquisición y el desarrollo de los conocimientos necesarios para acceder a empleos más productivos durante el período de adultez, privarlos del desarrollo de sus capacidades y exponerlos a mayores niveles de vulnerabilidad a lo largo de la vida laboral.

E. Juventud y políticas públicas

1. Marco de análisis

Los jóvenes requieren de la consolidación y el desarrollo de capacidades y de la apropiación y generación de activos⁷. Las brechas y atrasos educativos, las limitantes para la incorporación en trabajos dignos, los inadecuados esquemas de protección y seguridad social y la escasez de espacios para la participación activa de la población joven son algunos de los obstáculos que impiden el adecuado tránsito durante este período de vida, y la acción del Estado es decisiva para allanarlos.

En los últimos años, en América Latina y el Caribe, se han implementado medidas de políticas públicas destinadas al desarrollo de la juventud y se han creado diversas instituciones encargadas de formular, instrumentar o coordinar planes y programas de juventud. Sin embargo, los avances han sido variados. La institucionalidad dispar de las políticas juveniles en la región y la falta de inclusión de los actores jóvenes en la configuración de las estrategias para posicionar sus intereses en la agenda pública han limitado las repercusiones de las acciones estatales (CEPAL/OIJ, 2004 y 2008).

En esta sección se examina el papel de las políticas públicas en la atención a la población joven de algunos países del Caribe, haciendo hincapié en la importancia de fortalecer, acrecentar y expandir la apropiación de activos (como la educación y el empleo) para el desarrollo de la juventud. Para ello, en primera instancia, se presentan los posibles enfoques con los que se puede abordar el diseño de programas y la elaboración de estrategias gubernamentales e integrar la temática de la juventud en las políticas públicas, así como las distintas formas en que los países de la subregión han institucionalizado o incorporado en sus estructuras de acción las políticas de juventud. Finalmente, se analiza la influencia de los activos en los medios de vida de las personas y la utilidad que su categorización brinda para identificar las áreas en las que las políticas públicas de juventud tienen o no incidencia alguna. En este contexto, la revisión e identificación que se efectúa en este apartado sobre las políticas públicas en materia de juventud de los gobiernos de la subregión no es exhaustiva ni pretende generar evaluaciones o conclusiones con respecto a los impactos efectivos de esas políticas en la población beneficiaria.

2. Enfoques e institucionalidad de los asuntos de juventud

Hace varios años que en la región latinoamericana y caribeña se han implementado mecanismos públicos para institucionalizar la atención de la población joven, ya sea mediante la creación de ministerios o departamentos de juventud, el diseño y la instrumentación de planes de acción transversales a varios sectores o modificando el entramado normativo y legal, entre otras medidas. Los enfoques utilizados por los responsables de las políticas públicas para integrar de mejor manera al sujeto joven en el espacio público y social han sido heterogéneos.

Más allá de las dificultades que conlleva el establecer un rango de edad para la categoría de joven, algunos de los mecanismos utilizados han sido conceptualizados considerando al joven como una unidad estándar, es decir, asumiendo una cierta homogeneidad entre los jóvenes y sus necesidades, con el objetivo de brindar prestaciones y ofertas programáticas, sin considerar las realidades y las oportunidades distintas que ellos enfrentan (enfoque de integración social). Otros ponen mayor atención en las desventajas de los jóvenes, enfocando las acciones de políticas públicas en aquellos con mayores rezagos y exclusiones sociales (enfoque de riesgo). En otros casos, hacen hincapié en el papel del joven como agente activo y participativo en las acciones tendientes a la mejora de

⁷ Por activos se entiende el acervo o la acumulación de capitales que pueden utilizarse de forma directa o indirecta para generar los medios de vida de una persona u hogar y mantener o modificar así sus distintos niveles de bienestar (Ellis, 2000).

sus condiciones de vida (enfoque activo o de jóvenes como actores estratégicos del desarrollo). Unos enfatizan más los aspectos de voz y participación de los jóvenes, buscando incrementar su capacidad de negociación ante los encargados de formular políticas (enfoque de capital social); finalmente, otros mecanismos ubican al joven como individuo en camino de lograr un mayor grado de independencia y, por ello, las políticas se centran en aspectos como el empleo o el acceso a la vivienda, por ejemplo (enfoque de emancipación) (CEPAL/OIJ, 2008, págs. 314-316).

Estos enfoques de políticas no son excluyentes unos de otros, sino que pueden ser complementarios o yuxtaponerse dentro de una estrategia de política pública. Aunado a ello, también es preciso analizar la situación de la temática de la juventud en el entramado institucional de la política, es decir, si los temas y acciones relacionados con los jóvenes son componentes a considerar de forma un tanto aislada o independiente en cada sector administrativo del Estado, o bien, si los asuntos de jóvenes constituyen un eje articulado y transversal a varios sectores. En el primer caso, el sujeto puede ser receptor o beneficiario de los programas que emprendan las distintas dependencias sectoriales (programas diseñados para satisfacer alguna necesidad o requerimiento que esté bajo la responsabilidad del respectivo sector), teniendo como eje no al joven en sí, sino los propósitos del sector. En el otro caso, si bien el joven sigue siendo sujeto o beneficiario de los programas instrumentados por dependencias de varios sectores, las intervenciones están articuladas por un eje rector —el joven—, no solo de los programas, sino de una política pública articulada e integral.

Por este motivo, algunos países del Caribe cuentan con departamentos encargados de establecer vínculos con otros organismos gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil encargados de temas relativos a la juventud, como es el caso de Anguila (CDB/KCL, 2010c). En ocasiones, dichos departamentos se ubican en la esfera de ministerios (comúnmente de educación o desarrollo social), como en las Islas Vírgenes Británicas y las Islas Caimán, y emprenden programas dirigidos a los jóvenes en materias de capacitación laboral y deportiva e integración comunitaria, entre otras (CDB/Gobierno de las Islas Vírgenes Británicas, 2003; CDB/KCL, 2008).

Existen algunos ministerios que, si bien sus funciones no contemplan exclusivamente los asuntos relacionados con los jóvenes, consideran estos temas como parte de sus objetivos primarios. En Saint Kitts y Nevis, dentro de los órganos de gobierno se encuentra el Ministerio de Empoderamiento Juvenil, Deportes, Tecnología de la Información, Telecomunicaciones y Correo. También está el Departamento de la Juventud, inserto en la estructura del

Ministerio de Educación, entidad responsable de coordinar las acciones que en materia de jóvenes se instrumenten en el país, a fin de evitar duplicidades. Algunas de las áreas en las que estas dependencias realizan actividades están relacionadas con temas como el VIH/SIDA y la participación juvenil (CDB/KCL, 2009c).

Otros ejemplos de órganos de gobierno cuya oferta programática sectorial incluye de forma explícita los asuntos destinados a la juventud, aunque no se limita a ellos, se encuentran en Barbados, Dominica, Granada y Santa Lucía. En el primer caso, la División de Asuntos Juveniles, perteneciente al Ministerio de la Familia, Cultura, Deportes y Juventud es la oficina responsable de verificar que los objetivos del gobierno en materia de jóvenes se materialicen. En Granada, el Ministerio de Empoderamiento Juvenil y Deportes tiene como parte de sus funciones el planificar y ejecutar programas para el desarrollo de los jóvenes y fomentar en estas acciones su participación activa. En Dominica, la División de Desarrollo Juvenil, adscrita al Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, opera programas de educación, liderazgo, voluntariado y capacitación (CDB/KCL, 2010b). Acciones similares desempeña en Santa Lucía el Ministerio de Transformación Social, Juventud y Deportes.

En algunos gobiernos caribeños, los asuntos de los jóvenes y la oferta institucional en la materia son transversales al área de jurisdicción de varias dependencias y se rigen por planes de acción que articulan en una política pública de juventud las distintas acciones del gobierno y también, en algunos casos, las privadas. En Belice, el Ministerio de Educación y Juventud es el órgano encargado de los temas de juventud; dentro de su jurisdicción recae la iniciativa Juventud para el futuro (*Youth for the Future*), desde la cual se coordinan las políticas gubernamentales de desarrollo juvenil y los proyectos de cooperación en esta materia con organizaciones civiles y organismos internacionales (Gobierno de Belice, 2011).

En Jamaica, se formuló una política nacional de juventud. En ella se definió el marco multisectorial para el desarrollo de los jóvenes y se delinearon los principales campos de acción, a saber: entorno del desarrollo, educación y capacitación, empleo y emprendimiento, salud, participación y empoderamiento, y cuidado y protección. El Centro Nacional para el Desarrollo de la Juventud, perteneciente al Ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, es la entidad responsable de verificar el cumplimiento de la política de juventud y tiene como objetivo la coordinación e integración de acciones y servicios orientados al desarrollo de jóvenes y la emisión de recomendaciones en materia de diseño y modificación de programas para mejorar e impulsar el desarrollo de la juventud (Gobierno de Jamaica, 2003; 2009).

Un caso similar al anterior es el de Trinidad y Tabago. En este país, también se definió una política nacional de juventud, que no establece programas *per se*, sino que provee un marco dentro del cual se deben insertar las acciones que en materia de jóvenes instrumenten los órganos estatales y las organizaciones de la sociedad civil. Algunos de los puntos de acción identificados están vinculados a temas como el empleo, la infraestructura y prestación de servicios, la capacitación, el liderazgo, la violencia, la creación de

espacios de expresión y la financiación (Gobierno de Trinidad y Tabago, 2006). La entidad rectora de la política juvenil es el Ministerio de Género, Juventud y Desarrollo Infantil.

Hay casos también, como el de Antigua y Barbuda, en los que no existen dentro de la estructura gubernamental oficinas dedicadas explícitamente a los asuntos de jóvenes; sin embargo, el gobierno brinda apoyo a organizaciones civiles que tengan esta temática como ámbito de acción (CDB/KCL, 2007a).

3. Activos y capitales: Mapeo de la incidencia de las políticas públicas para la juventud

Un aspecto a considerar en la esfera de las políticas públicas relativas a la juventud son los ámbitos de incidencia (al menos en forma programática) de las acciones de gobierno en el desarrollo de las oportunidades y capacidades de los jóvenes para mejorar sus medios de vida. Los medios de vida están relacionados no solo con las actividades que las personas y los hogares realizan con el fin de satisfacer diariamente sus necesidades básicas, sino que también están vinculados a los activos (el acervo de conocimientos, el acceso a determinados recursos y la apropiación de estos), las capacidades y las actividades necesarias para generar significados y concretar los modos de vida (Chambers y Conway, 1991). Por lo tanto, los activos son una parte intrínseca de los marcos conceptuales asociados con los medios de vida, en los que se recalca la importancia del capital y la apropiación de recursos tangibles e intangibles.

Los activos proveen significado a los contextos en los que se desenvuelven las personas, otorgándoles la capacidad para ser y hacer, y se transforman en vehículo para tres tipos de acciones: la acción como un medio (un medio de ganarse la vida o desarrollarse), la acción hermenéutica (para darle sentido a la vida) y la acción de emancipación (para modificar las estructuras en las que uno desarrolló la vida) (Bebbington, 1999, pág. 2022). Comúnmente, los activos son catalogados en cinco tipos: capital físico (producción de bienes y trabajo), capital financiero (relacionado con el dinero), capital humano (nutrición, educación, salud y otros), capital natural (vinculado a aspectos como la propiedad de tierra y el acceso al agua) y capital social (las instituciones formales e informales) (Ellis y Freeman, 2005; Ellis, 2006).

En este sentido, el papel que desempeñan los activos en las acciones y actividades que las personas realizan para construir su modo de vida es importante y sus condiciones y acumulación son fundamentales para ampliar las oportunidades de la gente joven para salir de situaciones de pobreza o mejorar

sus modos de vida. Sin embargo, el valor o significado de los activos no es homogéneo entre las personas o los hogares, y los procesos mediante los cuales las personas transforman los activos en apropiación y ejercicio de derechos, así como los modos en que optimizan su acervo de activos, varían en diversos grados. Lo anterior se articula con otros factores, como las instituciones y las relaciones sociales, que intervienen y modifican la manera en que los hogares y las personas utilizan los activos para determinar sus modos de vida, es decir, los alcances y limitaciones de ciertos modos de vida están sujetos a procesos institucionales formales e informales (Ellis, 2000; Scoones, 1998)⁸.

En consecuencia, el marco conceptual en el que se enfatizan los medios de vida trata de incentivar la instrumentación de políticas públicas dirigidas a incrementar la acumulación y el valor de los activos de la población y en la promoción y facilitación del uso óptimo de los activos existentes y subutilizados (Ellis, 2000 y 2006). Más allá del debate en torno a las distintas clasificaciones de los activos, su categorización permite distinguir aquellos que están comprendidos o son atendidos (ya sea de forma separada o interrelacionada) en las políticas públicas o las acciones sociales. En otras palabras, mediante la clasificación de los activos es posible trazar la relación entre los aspectos multidimensionales y los factores que tienen incidencia en las posibilidades y modos que tienen las personas —los jóvenes en particular— de hacer sus vidas.

En un informe del Banco Mundial se señaló que gran parte de los gobiernos del Caribe han identificado a los jóvenes como sujetos de los planes de desarrollo social, estableciendo para ello oficinas o departamentos

⁸ Hay aquí un paralelismo con el marco metodológico de apropiación de derechos desarrollado por Sen (1982), en el que establece que la apropiación de derechos depende de las características políticas, económicas, legales y sociales de una sociedad y de la posición que determinada persona ocupa dentro de ella.

gubernamentales y destinando recursos presupuestales para su acción, como se puede apreciar en la primera parte de esta sección. Sin embargo, se destaca que ha predominado un enfoque recreativo y de servicio comunitario y no una línea de acción que abarque los retos y la satisfacción de las necesidades del desarrollo juvenil (Banco Mundial, 2003). Esto parece no seguir siendo el caso, aunque es cierto que hay aspectos específicos del desarrollo de los jóvenes que han recibido una mayor atención por parte de los encargados de formular y llevar a la práctica las políticas públicas.

En todos los países de la subregión del Caribe, los respectivos gobiernos instrumentan acciones y estrategias con incidencia en el capital humano de los jóvenes. Esto resulta entendible, dada la alta relevancia que tienen factores como la salud y la educación en el desarrollo juvenil. En esta última área, son comunes los programas de becas y el apoyo a determinados aspectos, como la adquisición de libros y alimentos y el transporte para los estudiantes de nivel secundario, así como el desarrollo de programas deportivos. En ciertos casos, también operan iniciativas educativas dirigidas a sectores específicos de la población juvenil. Por ejemplo, en Granada hay programas dirigidos a madres jóvenes solteras para que no abandonen los estudios y en las Islas Caimán existen programas de apoyo para la realización de estudios universitarios.

La salud también es uno de los temas que ocupan espacios importantes en las agendas de los gobiernos, si bien, en general, los jóvenes son incluidos en estas acciones desde una óptica sectorial y no como un eje específico. Así pues, la mayoría de las acciones en materia de salud dirigidas específicamente a este grupo están vinculadas a aspectos preventivos, siendo preponderante el tema del VIH/SIDA. Los Gobiernos de las Bahamas, Belice, Granada, las Islas Caimán, Santa Lucía y Trinidad y Tabago instrumentan programas de salud sexual, VIH/SIDA y protección frente a enfermedades de transmisión sexual. La prevención y rehabilitación del consumo de drogas es otra de las vertientes que un número considerable de gobiernos de la subregión del Caribe cubren en sus estrategias dirigidas a jóvenes.

La capacitación laboral para jóvenes es una práctica generalizada en las acciones gubernamentales en la subregión caribeña. Aun cuando tienen repercusiones en el capital humano de la juventud, dado el enfoque eminentemente laboral de la instrucción que brindan, puede considerarse que estas acciones tienen incidencia en el capital físico. En países como Anguila, Antigua y Barbuda, las Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, las Islas Vírgenes Británicas, Jamaica, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía y Trinidad y Tabago se llevan a cabo iniciativas gubernamentales de capacitación laboral para jóvenes. Sin embargo, en algunos de estos programas predomina un enfoque de enseñanza de oficios y no de entrenamiento o actualización para acceder a mercados

de trabajo más sofisticados, que tradicionalmente ofrecen mejores salarios y prestaciones.

Las acciones para fomentar el desarrollo de negocios entre jóvenes son menos numerosas: Barbados, Belice, Dominica y Jamaica tienen dentro de su oferta institucional para la población joven algunas acciones vinculadas a ello. Más escasas aún son las iniciativas de fomento directo o creación de empleos para jóvenes. Las Islas Vírgenes Británicas, por ejemplo, tiene un proyecto de generación de ingresos para madres solteras, pero los programas de empleo para jóvenes son menos frecuentes que los destinados a la mera capacitación.

Existe poca información sobre políticas públicas dirigidas a jóvenes en las áreas de capital financiero y capital natural, pero esto no implica que sean inexistentes. Por ejemplo, en el Caribe hay numerosos programas de apoyo a actividades relacionadas con la pesca, temas agrarios, microcréditos u otra clase de servicios financieros. En sentido estricto, los jóvenes no están excluidos de la participación y de los beneficios de dichas políticas pero, dado que estas están formuladas considerando a los potenciales beneficiarios y usuarios de forma genérica, en muchos casos, se limita la participación de la juventud. Las posibilidades y realidades de los jóvenes difieren de las de los adultos, y considerar estos aspectos en la formulación e implementación de políticas públicas para el desarrollo de los capitales natural y financiero de la población joven podría tener consecuencias positivas en los programas en operación.

Muchos de los gobiernos han incorporado en sus estructuras áreas responsables de los asuntos de jóvenes. El grado de institucionalización gubernamental de los temas relacionados con jóvenes es variado, pero es una constante subregional. Además, puede haber diferencias en los enfoques de integración de los temas de juventud, y algunos gobiernos remarcan el papel de los jóvenes como agentes activos y participativos en las políticas enfocadas en ellos. Este tipo de iniciativas tienden a desarrollar en mayor medida el capital social de los jóvenes, ya que no solo inciden en las instituciones formales (estructuras de gobierno), sino también en las informales, al fomentar el empoderamiento político y participativo de la población juvenil. Algunos gobiernos del área del Caribe, como Belice y Jamaica, tienen en funcionamiento programas cuyo objetivo primario es fortalecer la voz de los jóvenes. Sin embargo, es necesario brindar mayores cauces institucionales para aprovechar el ímpetu natural de estas edades. Durante esta etapa de la vida, las personas adquieren algunos de los derechos políticos fundamentales —como la facultad de votar y ser votado en puestos de representación y elección popular—, y la formulación de políticas públicas para el desarrollo del capital social de los jóvenes son necesarias para fomentar que ellos participen en mayor grado en los procesos de los regímenes democráticos.

F. Conclusiones

Las diversas realidades que vive la juventud torna necesario analizar tanto las dinámicas sociales y económicas que fomentan los espacios de desarrollo de los jóvenes como las que los limitan. Aun cuando en la subregión del Caribe la población joven de hoy goza, en general, de mayores activos en comparación con sus pares de generaciones anteriores, existen estructuras de oportunidades desiguales que en la práctica funcionan como núcleos de exclusión. La adquisición y apropiación de activos por parte de los jóvenes están, en distintos grados, condicionadas y estratificadas por factores como el ingreso y el consumo de sus hogares, el lugar de residencia o el acceso a servicios básicos, entre otros.

Por ejemplo, los datos sugieren que el alto costo de oportunidad que tiene la educación en niveles superiores al secundario para los jóvenes de hogares de bajos ingresos o para los que se radican en lugares alejados de los centros urbanos implica su abandono escolar, lo que puede motivar su temprana inserción en los mercados de trabajo. El ingreso prematuro a la fuerza laboral —aparte de contravenir disposiciones internacionales en materia de trabajo infantil, si es que se realiza en los primeros años de la etapa de juventud— interrumpe el desarrollo de conocimientos y capacidades, lo que afecta el futuro al impedir a estos jóvenes el acceso a empleos mejor remunerados y confinar a gran parte de ellos a trabajos vulnerables.

La evidencia sugiere la necesidad de realizar acciones específicas que encaminen los esfuerzos de las políticas públicas en materia de juventud hacia el fortalecimiento de las capacidades y oportunidades, sobre todo para los jóvenes que padecen mayores niveles de exclusión socioeconómica y se ven privados de desarrollar sus capacidades. Esto no solo implica mejorar y nivelar logros y aprendizajes educativos, sino también promover el acceso de los sectores vulnerables de la juventud a esferas de protección social (salud, cuidados, transferencias de ingresos y otras), a la participación política, a la intermediación laboral y a los servicios financieros, y brindarles apoyo productivo.

La información aquí expuesta revela que, en la mayoría de los países de la subregión, algunos de los asuntos relativos a los jóvenes forman parte de la agenda de acciones oficiales y han sido incorporados a las estructuras institucionales de gobierno. Sin embargo, es necesario enfatizar aún más las intervenciones integrales en materia de juventud en detrimento de las acciones que operan simplemente con una lógica sectorial. En este sentido, es necesario diseñar y poner en marcha sistemas integrales de protección y promoción social para las juventudes caribeñas que respondan a los requerimientos específicos y principales obstáculos que los jóvenes enfrentan. Estas medidas deben sustentarse en la adquisición de activos y capacidades por parte de los jóvenes y en el ejercicio de sus derechos y garantías internacionalmente reconocidos.

Bibliografía

Capítulo I

- Barros, Ricardo y otros (2010a) “Determinantes da queda na desigualdade de renda no Brasil,” *IPEA texto para discussão*, N° 1460, Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA), enero.
- (2010b), “Markets, the state and the dynamics of inequality: the case of Brazil”, *Discussion Paper*, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), enero.
- (2006), “Uma análise das principais causas de queda recente na desigualdade de renda brasileira”, *Econômica*, vol. 8, N° 1, junio.
- Burchell, B. (2005), “The welfare costs of job insecurity: psychological well-being and family life”, *Reconciling Labour Flexibility with Social Cohesion. Facing the Challenge*, Consejo de Europa (ed.), Trends in Social Cohesion, vol. 15.
- CEDLAS (Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales) (2009), “Cambios en la desigualdad del ingreso en América Latina. Contribución de sus principales determinantes (1995 – 2006)”, *Investigación para la política pública, desarrollo incluyente* (ID-15-2009), Nueva York, Dirección Regional de América Latina y el Caribe (DRALC), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
- CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (2011a) *Estudio económico de América Latina y el Caribe 2010-2011*, documento informativo, Santiago de Chile, julio.
- (2011b), “Empleo y protección social. Borrador para comentarios”, inédito.
- (2010), *La hora de la igualdad: Brechas por cerrar, caminos por abrir* (LC/G.2432(SES.33/3)), Santiago de Chile.
- (2008), *Panorama social de América Latina 2007* (LC/G.2351-P), Santiago de Chile. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.07.II.G.124.
- (2007), *Un sistema de indicadores para el seguimiento de la cohesión social en América Latina y el Caribe* (LC/G.2362), Santiago de Chile, diciembre.
- (2006), *La protección social de cara al futuro: acceso, financiamiento y solidaridad* (LC/G.2294(SES.31/3)), Santiago de Chile.
- Esquivel, Gerardo, Nora Lustig y John Scott (2010), “Mexico: a decade of falling inequality, market forces or state action?”, *Declining Inequality in Latin America: A Decade of Progress?*, Luis Felipe Lopez-Calva y Nora Lustig (eds.), Brookings Institution Press/Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
- Gasparini, Leonardo y Guillermo Cruces (2010), “A distribution in motion: the case of Argentina”, *Declining Inequality in Latin America: A Decade of Progress?*, Luis Felipe Lopez-Calva y Nora Lustig (eds.), Brookings Institution Press/Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
- Katzman, R. (2010), “La dimensión espacial de la cohesión social en América Latina”, *Cohesión social en América Latina. Una revisión de conceptos, marcos de referencia e indicadores* (LC/G.2420), Santiago de Chile, junio.

- Lerman, Robert I. y Shlomo Yitzhaki (1985), “Income inequality effects by income source: a new approach and applications to the United States”, *The Review of Economics and Statistics*, vol. 67, N° 1, The MIT Press, 1 de febrero.
- Lopez-Calva, Luis Felipe y Nora Lustig (2010), “Explaining the decline in inequality in Latin America: technological change, educational upgrading and democracy”, *Declining Inequality in Latin America: A Decade of Progress?*, Luis Felipe Lopez-Calva y Nora Lustig (eds.), Brookings Institution Press/Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
- Lustig, Nora, Luis F. López-Calva y Eduardo Ortiz-Juarez (2011), “The decline in inequality in Latin America: how much, since when and why”, *Working Paper*, N° 1118, Tulane University.
- Moreno-Jiménez, M. y Carmen Hidalgo (2011), “Medición y predicción de la satisfacción con la vida en inmigrantes empleados en España. Diferencias según su situación administrativa”, *Anales de Psicología*, vol. 27, N° 1.
- OIT (Organización Internacional del Trabajo) (2010), *Negociación colectiva: la negociación por la justicia social. Reunión tripartita de alto nivel sobre la negociación colectiva Ginebra, 19-20 de noviembre de 2009*, Ginebra.
- Salama, P. (2005), “From flexibility to social cohesion through finance”, *Reconciling Labour Flexibility with Social Cohesion. Facing the Challenge*, Consejo de Europa (ed.), Trends in Social Cohesion, vol. 15.
- Tokman, V. (2006), “Inserción laboral, mercados de trabajo y protección social”, *serie Financiamiento del desarrollo*, N° 170 (LC/L.2507-P/E), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.06.II.G.39.
- Villatoro, P. (2011), “La medición del bienestar a través de indicadores subjetivos: una revisión”, inédito.
- Weller, J. (2009), *El nuevo escenario laboral latinoamericano: regulación, protección y políticas activas en los mercados de trabajo*, Buenos Aires, Siglo XXI/Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
- Bay, Giomar, Fabiana Del Popolo y Delicia Ferrando (2003), “Determinantes próximos de la fecundidad. Una aplicación a países latinoamericanos”, *Serie Población y desarrollo*, N° 43 (LC/L.1953-P), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.03.II.G.121.
- Binstock, Georgina y Edith Pantelides (2006), “La fecundidad adolescente hoy: Diagnóstico sociodemográfico”, documento presentado en la Reunión de Expertos sobre Población y Pobreza en América Latina y el Caribe, Santiago de Chile, Comisión Económica de América Latina y el Caribe (CEPAL) 14 y 15 de noviembre [en línea] www.eclac.cl/celade/noticias/paginas/5/27255/Binstock.pdf.
- Bongaarts, John (1982), “The fertility-inhibiting effects of the intermediate fertility variables”, *Studies in Family Planning*, vol. 13, N° 6/7.
- (1978), “A framework for analyzing the proximate determinants of fertility”, *Population and Development Review*, vol. 4, N° 1.
- Bozon, Michel (2003), « A quel âge les femmes et les hommes commencent-ils leur vie sexuelle? Comparaisons mondiales et évolutions récentes », *Population et sociétés*, N° 391, Institut national d'études démographiques (INED).
- Castro, Teresa y otros (2010), « La fecundidad no matrimonial en América Latina: indicadores y análisis comparativos a partir de datos censales », documento presentado en el IV Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población, La Habana, 16 a 18 de noviembre [en línea] www.alapop.org/Congreso2010/DOCSFINAIS_PDF/ALAP_2010_FINAL405.pdf.
- CELADE (Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía) (1974), *Boletín demográfico*, año VII, N°13, Santiago de Chile.
- (1983), *Boletín demográfico*, año VII, N°31.
- CELADE/CFSC (Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía/Community and Family Study Center) (1972), *Fertility and Family Planning in Metropolitan Latin America*, Chicago, University of Chicago.
- CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (2010a), “Economía generacional, sistemas de transferencias y desigualdad en América Latina”, *Panorama social de América Latina 2010* (LC/G.2481-P), Santiago de Chile. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.11.II.G.6.
- (2010b), *La hora de la igualdad: Brechas por cerrar, caminos por abrir* ((LC/G.2432(SSES.33/3)), Santiago de Chile.
- (2009), “Proyección de población”, *Observatorio demográfico*, N°7 (LC/G.2414-P), Santiago de Chile. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: No. E/S.09.II.G.65.

Capítulo II

- Alí, Mohamed y John Cleland (2005), “Sexual and reproductive behaviour among single women aged 15–24 in eight Latin American countries: a comparative analysis”, *Social Science & Medicine*, vol. 60, N° 6.
- Barro, Robert y Jong-Wha Lee (2010), “A new data set of educational attainment in the world, 1950-2010”, NBER Working Paper, N° 15902, abril.

- (2008a), “El bono demográfico: una oportunidad para avanzar en cobertura y progresión en educación secundaria”, *Panorama social de América Latina 2008* (LC/G.2402-P/E), Santiago de Chile.
- (2008b), *Transformaciones demográficas y su influencia en el desarrollo en América Latina y el Caribe* (LC/G.2378(SES.32/14)), Santiago de Chile.
- (2007), “Proyección de población”, *Observatorio demográfico*, N° 3
- (2005), *Panorama social de América Latina 2005* (LC/G.2288-P/E), Santiago de Chile.
- (2004), *Panorama social de América Latina 2004* (LC/G.2259-P), Santiago de Chile. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.04.II.G.148.
- (2003), *Panorama social de América Latina 2002-2003* (LC/G.2209-P/E), Santiago de Chile. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.03.II.G.185.
- CESDEM (Centro de Estudios Sociales y Demográficos) (2008), Encuesta Demográfica y de Salud, República Dominicana 2007 [en línea] <http://204.12.126.218/dhs/pubs/pdf/FR205/FR205.pdf>.
- Davis, Kingsley y Judith Blake (1956), “Social structure and fertility: An analytic framework”, *Economic and Cultural Change*, vol. 4, N° 2.
- Del Popolo, Fabiana, Mariana López y Mario Acuña (2009), *Juventud indígena y afrodescendiente en América Latina: inequidades sociodemográficas y desafíos de políticas*, Madrid, Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ).
- Di Cesare, Mariachiara y Jorge Rodríguez (2006), “Análisis micro de los determinantes de la fecundidad adolescente en Brasil y Colombia”, *Papeles de población*, N° 48, Toluca.
- Enge, Kjell (1998), “Salud y reproducción: qué piensan, sienten y desean los mayas”, *Documento de trabajo*, N° 20, Population Council.
- Esteve, Albert, Luis López y Jeroen Spijker (2010), “La estabilidad de la nupcialidad latinoamericana: aproximación desde los microdatos censales”, documento presentado en el IV Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población, La Habana, 16 a 18 de noviembre [en línea] www.alapop.org/Congreso2010/DOCSFINAIS_PDF/ALAP_2010_FINAL182.pdf.
- Furstenberg Jr., Frank (1998), “When will teenage childbearing become a problem? The implications of Western experience for developing countries”, *Studies in Family Planning*, vol. 29, N° 2.
- Fussell, Elizabeth y Alberto Palloni (2004), “Persistent marriage regimes in changing times”, *Journal of Marriage and Family*, vol. 66.
- García, Brígida y Olga Rojas (2003), “Las uniones conyugales en América Latina: transformaciones sociales en el marco de la desigualdad social y de género”, *La fecundidad en América Latina: ¿transición o revolución?*, serie Seminarios y conferencias, N° 36 (LC/L.2097-P), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.04.II.G.34.
- Gómez, Pío, Ramiro Molina y Nina Zamberlin (2011), *Factores relacionados con el embarazo y la maternidad en menores de 15 años*, Lima, Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología (FLASOG), Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos.
- González, H., Y. Palma y M. Montes (2007), “Análisis regional de los determinantes próximos de fecundidad en México”, *Papeles de población*, N° 051, Toluca, Universidad Autónoma del Estado de México.
- Grant, Monica y Jr. Frank Furstenberg (2007), “Changes in the transition to adulthood in less developed countries”, *European Journal of Population*, vol. 23.
- Greene, Margaret y Ann Biddlecom (2000), “Absent and problematic men: accounts of male reproductive roles”, *Population and Development Review*, vol. 26, N° 1.
- Guzmán, José y otros (2001), *Diagnóstico sobre salud sexual y reproductiva de adolescentes en América Latina y el Caribe*, México, D.F., Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
- INJUV (Instituto Nacional de la Juventud de Chile) (2010), “VI Encuesta Nacional de Juventud (ENAJU)” [en línea] www.injuv.gob.cl/injuv2010/6_encuesta.
- Jiménez, Maren y Jorge Rodríguez (2009), “Evaluating the Millennium Development Goal target on universal access to reproductive health: a view from Latin America and the Caribbean”, *Demographic Transformations and Inequalities in Latin America. Historical trends and recent patterns*, Suzana Cavenaghi (org.), serie Investigaciones, N° 8, Río de Janeiro, Asociación Latinoamericana de Población (ALAP).
- Lutz, Wolfgang y K.C. Samir (2011), “Global human capital: Integrating education and population”, *Science*, vol. 333, N° 6042.
- Mario, Silvia y Edith Pantelides (2008), “Estimación de la magnitud del aborto inducido en la Argentina”, *Notas de población*, N° 87 (LC/G.2405-P), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.09.II.G.08.
- Miller, Tim (2006), “Demographic models for projections of social sector demand”, *serie Población y desarrollo*, N° 66 (LC/L.2477-P/I), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
- Ministerio de Salud del Brasil (2008), *Relatório Final da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher (PNDS) 2006*, Brasília.

- Naciones Unidas (1994), Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (A/CONF.171/13), El Cairo, 5 a 13 de septiembre.
- (2011a), “World Population Prospects: The 2010 Revision” [CD-ROM], División de Población.
- (2011b), *Objetivos de Desarrollo del Milenio. Informe de 2011*, Nueva York [en línea] [http://www.un.org/es/comun/docs/?path=/spanish/millenniumgoals/pdf/11-31342\(S\)MDG_Report_2011_Book_LR.pdf](http://www.un.org/es/comun/docs/?path=/spanish/millenniumgoals/pdf/11-31342(S)MDG_Report_2011_Book_LR.pdf).
- Olavarría, José y Sebastián Madrid (2005), *Sexualidad, fecundidad y paternidad en varones adolescentes en América Latina y el Caribe*, México, D. F., Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
- Oliveira, M.C. y J. Vieira (2010), “Gravidez na adolescência e bem-estar infantil: evidências para o Brasil em 2006”, *Revista latinoamericana de población (RELAP) Asociación Latinoamericana de Población (ALAP)*, vol. 3, N° 6.
- Oyarce, Ana María, Bruno Ribotta y Malva Pedrero (2010), “Salud materno-infantil de pueblos indígenas y afrodescendientes de América Latina: aportes para una relectura desde el derecho a la integridad cultural”, *Documento de proyecto*, N° 347 (LC/W.347), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
- Rodríguez, Grissel (2006), “La fecundidad cubana a partir de 1990. Las perspectivas sociales e individuales”, tesis para optar al grado de doctorado en ciencias económicas, Universidad de La Habana, Centro de Estudios Demográficos (CEDEM).
- Rodríguez, Jorge (2009), *Reproducción adolescente y desigualdades en América Latina y el Caribe: un llamado a la reflexión y a la acción*, Madrid, Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ).
- (2005), “Reproducción en la adolescencia: el caso de Chile y sus implicaciones de política”, *Revista de la CEPAL*, N° 86 (LC/G.2282-P/E), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
- (2011), “Latin America: high adolescent fertility amid declining overall fertility”, documento presentado en la reunión del Grupo de Expertos sobre adolescencia, juventud y desarrollo, Nueva York, 21 a 22 de julio [en línea] http://www.un.org/esa/population/meetings/egm-adolescents/p01_rodriguez.pdf.
- Rodríguez, Jorge y Martin Hopenhayn (2007), “Maternidad adolescente en América Latina y el Caribe. Tendencias, problemas y desafíos”, *Desafíos*, N° 4, Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)/Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), enero.
- Rodríguez, Lily (2010), “Políticas públicas para el reconocimiento de la diversidad cultural y étnica y el ejercicio del derecho a la salud: Modelos interculturales de salud Ecuador”, documento presentado en el IV Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población, La Habana, 16 a 18 de noviembre.
- Ruiz, S. y otros (2005), “Anticoncepción y salud reproductiva en España: crónica de una (r)evolución”, Colección de Estudios ambientales y Socioeconómicos, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid.
- Schuler, S. M. Choque y S. Rance (1994), “Misinformation, mistrust, and mistreatment: family planning among Bolivian market women”, *Studies in Family Planning*, vol. 25, N° 4.
- Stern, Claudio (1997), “El embarazo en la adolescencia como problema público: una visión crítica”, *Salud pública de México*, vol. 39, N° 2.
- Stover, John (1998), “Revising the proximate determinants of fertility framework”, *Studies in Family Planning*, vol. 29, N° 3, septiembre.
- Tobío, Constanza (2005), *Madres que trabajan: Dilemas y estrategias*, Madrid, Cátedra.
- UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) (2011), “UNESCO Data Centre” [en línea] <http://www.uis.unesco.org>.
- UNFPA/CENEP (Fondo de Población de las Naciones Unidas/Centro de Estudios de Población) (2005), *Salud sexual y reproductiva adolescente en el comienzo del siglo XXI en América Latina y el Caribe*, Equipo de Apoyo Técnico para América Latina y el Caribe, diciembre.
- Vargas, M. Fabiola (2008), “Disminución acelerada de la fecundidad en Colombia y sus regiones, factores directos que inciden sobre la tasa que se acerca al nivel de reemplazo”, documento presentado en el III Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población (ALAP), Córdoba, septiembre.
- Welti, Carlos (ed.) (1998), *Demografía II*, México, D.F., Programa Latinoamericano de Actividades de Población (PROLAP)/Universidad Nacional Autónoma de México.

Capítulo III

- Arriagada, I. (1998), “Familias latinoamericanas: Convergencias y divergencias de modelos y políticas”, *Revista de la CEPAL*, N° 65 (LC/G.2033-P), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
- CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (2011a), *Panorama social de América Latina*

- 2010 (LC/G.2481-P), Santiago de Chile. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.11.II.G.6.
- (2011b), “Empleo y protección social”, documento del Grupo de trabajo sobre empleo y protección social, Santiago de Chile, inédito.
- (2010a), *La hora de la igualdad: Brechas por cerrar, caminos por abrir* (LC/G.2432(SES.33/3)), Santiago de Chile.
- (2010b), *Panorama social de América Latina 2009* (LC/G.2423-P), Santiago de Chile. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.09.II.G.135.
- (2010c), *El progreso de América Latina y el Caribe hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Desafíos para lograrlos con igualdad* (LC/G.2460), Santiago de Chile.
- (2010d), *¿Qué Estado para qué igualdad?* (LC/G.2450/Rev.1), Santiago de Chile.
- (2009), *Panorama social de América Latina 2008* (LC/G.2402-P/E), Santiago de Chile. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.08.II.G.89.
- (2004), “Una década de desarrollo social en América Latina, 1990-1999”, *Libros de la CEPAL*, N° 77 (LC/G.2212-P), Santiago de Chile, marzo. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.03.II.G.143. CEPAL/OIJ (Comisión Económica para América Latina y el Caribe/Organización Iberoamericana de Juventud) (2008), *Juventud y cohesión social en Iberoamérica: Un modelo para armar* (LC/G.2391), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
- (2004), *La juventud en Iberoamérica. Tendencias y urgencias* (LC/L.2180), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). CEPAL/OIT (Comisión Económica para América Latina y el Caribe/Organización Internacional del Trabajo) (2011), “Políticas contracíclicas para una recuperación sostenida del empleo”, *Coyuntura laboral en América Latina y el Caribe*, Boletín, N° 5, Santiago de Chile, junio.
- (2009), “Crisis en los mercados laborales y respuestas contracíclicas”, *Coyuntura laboral en América Latina y el Caribe*, Boletín, N° 2, Santiago de Chile, septiembre.
- Durán, G. (2011), “Institucionalidad laboral para un desarrollo inclusivo” *Desarrollo inclusivo en América Latina y el Caribe. Ensayos sobre políticas de convergencia productiva para la igualdad*, R. Infante (coord.), Libros de la CEPAL, N°112 (LC/G.2500-P), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.11.II.G.56.
- Esping-Andersen, G. (1999), *Social Foundations of Postindustrial Economies*, Oxford, Oxford University Press.
- (1990), *The Three Worlds of Welfare Capitalism*, Princeton, Princeton University Press.
- Filgueira, F. (2007), “Cohesión, riesgo y arquitectura de protección social en América Latina”, *serie Políticas sociales*, N° 135 (LC/L.2752-P/E), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
- Infante, R. (2011), “América Latina en el “umbral del desarrollo”. Un ejercicio de convergencia productiva”, Documento de trabajo, N° 14, proyecto Desarrollo inclusivo, Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), junio.
- Martínez Franzoni, J. y K. Voreend (2010), “Transferencias condicionadas, regímenes de bienestar e igualdad de género: ¿blancos, negros o grises?”, *Revista de ciencias sociales (CR)*, Universidad de Costa Rica, vol. 4, N° 122.
- Maurizio, R. (2010), “Enfoque de género en las instituciones laborales y las políticas del mercado de trabajo en América Latina”, *serie Macroeconomía del desarrollo*, N° 104, Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
- Molyneux, M. (2008), “Conditional cash transfers: a ‘pathway to women’s empowerment’?”, *Pathways Working Paper*, N° 5
- Naciones Unidas (2003), *World Youth Report 2003. The global situation of young people* (ST/ESA/287), Nueva York, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: E.03.IV.7.
- OIT (Organización Internacional del Trabajo) (2009), *Panorama laboral 2008. América Latina y el Caribe*, Lima, Oficina Regional para América Latina y el Caribe.
- OIT/PNUD (Organización Internacional del Trabajo/Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) (2009), *Trabajo y familia: Hacia nuevas formas de conciliación con corresponsabilidad social*, Lima.
- Pautassi, L. y N. Rico (2011), “Licencias para el cuidado infantil. Derecho de hijos, padres y madres”, *Boletín Desafíos*, N° 12, Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)/Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), julio.
- Pinto, A. (1975), “Heterogeneidad estructural y modelo de desarrollo reciente en América Latina”, *Inflación: raíces estructurales*, México, D.F., Fondo de Cultura Económica.
- (1965), “Concentración del progreso técnico y de sus frutos en el desarrollo de América Latina”, *El trimestre económico*, vol. 32(1), N° 125, enero-marzo.
- PNUD (Programa de las Naciones Unidas) (2001), *Desarrollo humano en Uruguay 2001. Inserción internacional, empleo y desarrollo humano*, Montevideo.

- PREALC (Programa Regional del Empleo para América Latina y el Caribe) (1987), “Notas sobre la segmentación de los mercados laborales urbanos”, Santiago de Chile.
- Rico, N. y C. Maldonado (2011), “¿Qué muestra la evolución de los hogares sobre la evolución de las familias en América Latina?” *Las familias latinoamericanas interrogadas. Hacia la articulación del diagnóstico, la legislación y las políticas*, serie Seminarios y conferencias, N° 61 (LC/L.3296-P), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.11.II.G.17.
- Tokman, Víctor (2007), “Informalidad, inseguridad y cohesión social en América Latina”, *serie Políticas sociales*, N° 130 (LC/L.2694-P/E), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.07.II.G.45.
- (2006), “Inserción laboral, mercados de trabajo y protección social”, *Documentos de proyecto*, N° 82 (LC/W.82), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
- (1997), “El trabajo de los jóvenes en el post-ajuste latinoamericano”, *Boletín Técnico interamericano de formación profesional. Jóvenes, Formación y Empleabilidad*, N° 139-140, Montevideo, Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional (CINTERFOR), abril-setiembre.
- Weller, J. (2009), “Avances y retos para el perfeccionamiento de la institucionalidad laboral en América Latina”, *El nuevo escenario laboral latinoamericano: Regulación, protección y políticas activas en los mercados de trabajo*, Buenos Aires, Siglo Veintiuno Editores/Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
- Weller, J. y C. Roethlisberger (2011), “La calidad del empleo en América Latina”, *serie Macroeconomía del desarrollo*, N° 110, Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
- para América Latina y el Caribe (CEPAL). Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.11.II.G.23.
- CEPAL (2011), *Panorama social de América Latina 2010* (LC/G.2481-P), Santiago de Chile. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.11.II.G.6.
- CEPAL (2010a), *La hora de la igualdad: Brechas por cerrar, caminos por abrir* (LC/G.2432(SES.33/3)), Santiago de Chile.
- CEPAL (2010b), *Panorama social de América Latina 2009* (LC/G.2423-P), Santiago de Chile. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.09.II.G.135.
- CEPAL (2010c), *El progreso de América Latina y el Caribe hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Desafíos para lograrlos con igualdad* (LC/G.2460), Santiago de Chile.
- CEPAL (2010d), *¿Qué Estado para qué igualdad?* (LC/G.2450/Rev.1), Santiago de Chile.
- CEPAL (2009a), *Panorama social de América Latina 2008* (LC/G.2402-P/E), Santiago de Chile. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.08.II.G.89.
- CEPAL (2009b), *La reacción de los gobiernos de las Américas frente a la crisis internacional: una presentación sintética de las medidas de política anunciadas hasta el 30 de septiembre de 2009* (LC/L.3025/Rev.5), Santiago de Chile, 30 de octubre.
- CEPAL (2006), *La protección social de cara al futuro: acceso, financiamiento y solidaridad* (LC/G.2294(SES.31/3)), Santiago de Chile.
- CEPAL (2005), *Panorama social de América Latina 2004* (LC/G.2259-P), Santiago de Chile. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.04.II.G.148.
- CEPAL/OIT (Comisión Económica para América Latina y el Caribe/Organización Internacional del Trabajo) (2011), “Políticas contracíclicas para una recuperación sostenida del empleo”, *Coyuntura laboral en América Latina y el Caribe*, Boletín, N° 5, Santiago de Chile, junio.
- (2009), “Crisis en los mercados laborales y respuestas contracíclicas”, *Coyuntura laboral en América Latina y el Caribe*, Boletín, N° 2, Santiago de Chile, septiembre.
- Esping-Andersen G. y otros (2002), *Why We Need a New Welfare State*, Nueva York, Oxford.
- Esping-Andersen, G. (1999), *Social Foundations of Postindustrial Economies*, Oxford, Oxford University Press.
- Filgueira, F. (2007), “Cohesión, riesgo y arquitectura de protección social en América Latina”, *serie Políticas sociales*, N° 135 (LC/L.2752-P/E), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
- Hopenhayn, M. (2006), “La juventud latinoamericana en sus tensiones y sus violencias”, *Juventudes, violencia y exclusión. Desafíos para las políticas públicas*, J. Moro (ed.), Guatemala, Magna Terra.

Capítulo IV

- Bertranou, Evelina (2008), “Tendencias demográficas y protección social en América Latina y el Caribe”, *serie Población y desarrollo*, N° 82 (LC/L.2864-P), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.08.II.G.9.
- Cecchini, S. y R. Martínez (2011), “Protección social inclusiva en América Latina: una mirada integral, un enfoque de derechos”, *Libros de la CEPAL*, N° 111 (LC/G.2488-P), Santiago de Chile, Comisión Económica

- Huenchuan, S. (2009), (ed), “Envejecimiento, derechos humanos y políticas públicas”, *Libros de la CEPAL*, N° 100 (LC/G.2389-P), Santiago de Chile. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.08.II.G.94.
- Huenchuan, S. y J.M. Guzmán (2007), “Políticas hacia las familias con personas mayores: el desafío del cuidado en la edad avanzada”, *Familias y políticas públicas en América Latina: una historia de desencuentros*, Libros de la CEPAL, N° 96 (LC/G.2345-P), Santiago de Chile. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.07.II.G.97.
- Jaccoud, L. (2010), “Envejecimiento, dependencia y oferta de servicios asistenciales: Un nuevo desafío para los sistemas de protección social”, *Envejecimiento en América Latina. Sistemas de pensiones y protección social integral*, Antonio Prado y Ana Sojo (eds.) *Libros de la CEPAL*, N° 110 (LC/G.2475-P), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.10.II.G.71.
- Marco, F. (2004), *Los sistemas de pensiones en América Latina: un análisis de género*, Cuadernos de la CEPAL, N° 90 (LC/G.2262-P/E), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Publicación de las Naciones Unidas. N° de venta: S.04.II.G.129.
- Martínez Franzoni, J. (2008), *Domesticar la incertidumbre en América Latina. Mercado laboral, política social y familia*, San José, Editorial Universidad de Costa Rica.
- Mesa-Lago, Carmelo (2009), “Efectos de la crisis global sobre la seguridad social de salud y pensiones en América Latina y el Caribe y recomendaciones de política”, *serie Políticas sociales*, N° 150 (LC/L.3104-P), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), octubre. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.09.II.G.85.
- (2005), “Las reformas de salud en América Latina y el Caribe: su impacto en los principios de la seguridad social”, *Documentos de proyectos*, N° 63 (LC/W.63), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
- Pierson, P. (2001), “Coping with permanent austerity. Welfare state restructuring in affluent democracies”, *The New Politics of the Welfare State*, P. Pierson (ed), Oxford, Oxford University Press.
- Prado, A. y A. Sojo (2010) (eds), “Envejecimiento en América Latina. Sistemas de pensiones y protección social integral”, *Libros de la CEPAL*, N° 110 (LC/G.2475-P), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.10.II.G.71.
- Tokman, Víctor (2006), “Inserción laboral, mercados de trabajo y protección social”, *Documentos de proyectos*, N° 82 (LC/W.82), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
- OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos) (2010), *OECD Employment Outlook: Moving Beyond the Jobs Crisis*, París.
- (2009), *Society at a Glance 2009: OECD Social Indicators*, París.
- (2007a), *OECD Employment Outlook 2007*, París.
- (2007b), *Babies and Bosses. Reconciling Work and Family Life: A Synthesis of Findings for OECD Countries*, París.
- (1999), *Implementing the OECD Jobs Strategy: Assessing Performance and Policy*, París.
- Rico, Nieves y Carlos Maldonado (2011), “¿Qué muestra la evolución de los hogares sobre la evolución de las familias en América Latina?”, *Las familias latinoamericanas interrogadas. Hacia la articulación del diagnóstico, la legislación y las políticas*, N. Rico y C. Maldonado (eds.), serie Seminarios y conferencias, N° 61 (LC/L.3296-P), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.11.II.G.17.
- Uthoff, Andras, Cecilia Vera y Nora Ruedi (2006), “Relación de dependencia del trabajo formal y brechas de protección social en América Latina y el Caribe”, *serie Financiamiento del desarrollo*, N° 169 (LC/L.2497-P), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Publicación de las Naciones Unidas. N° de venta: S.06.II.G.29.

Capítulo V

CEPAL, 2011: *Estudio económico de América Latina y el Caribe 2010-2011*, documento informativo, Santiago de Chile, julio.

CEPAL, 2010a: *Panorama social de América Latina 2010* (LC/G.2481-P), Santiago de Chile. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.11.II.G.6.

CEPAL, 2010b: *La reacción de los gobiernos de las Américas frente a la crisis internacional: unapresentación sintética de las medidas de política anunciadas hasta el 31 de diciembre de 2009*(LC/L.3025/Rev.5), Santiago de Chile, diciembre.

CEPAL (2010c), *Estudio económico de América Latina y el Caribe, 2009-2010* (LC/G.2458-P), Santiago de Chile. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.10.II.G.3.

CEPAL, 2010d *La hora de la igualdad: Brechas por cerrar, caminos por abrir* (LC/G.2432(SES.33/3)), Santiago de Chile.

CEPAL, 2008: *Panorama social de América Latina 2007* (LC/G.2351-P), Santiago de Chile. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.07.II.G.124

CEPAL, 2006: *La protección social de cara al futuro: acceso, financiamiento y solidaridad* (LC/G.2294(SES.31/3)), Santiago de Chile.

Filgueira, F. y otros (2006), “Universalismo básico: una alternativa posible y necesaria para mejorar las condiciones de vida en América Latina”, *Documentos de trabajo del INDES*, N° I-57, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), abril.

Mesa-Lago, 2009 Efectos de la crisis global sobre la seguridad social de salud y pensiones en América Latina y el Caribe y recomendaciones de política”, *serie Políticas sociales*, N° 150 (LC/L.3104-P), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), octubre. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.09.II.G.85.

Tanzi, Vito (2008), “The role of the State and public finance in the next generation”, *OECD Journal on Budgeting*, vol. 8, N° 2.

Capítulo VI

Banco Mundial (2003), “Caribbean youth development. Issues and policy directions”, *World Bank Country Study*, N° 25955, Washington, D.C.

— (2009), *Global Economic Prospects 2009. Forecast Update*, Washington, D.C.

Bebbington, A. (1999), “Capitals and capabilities: a framework for analyzing peasant viability, rural livelihoods and poverty”, *World Development*, vol.27, N° 12.

CDB (Banco de Desarrollo del Caribe) (2010), “Biennial Social Development Report-2010”, Barbados.

CDB (Banco de Desarrollo del Caribe)/Gobierno de las Islas Vírgenes Británicas (2003), “Country Poverty Assesment”, *Main Report*, vol I.

CDB/KCL (Banco de Desarrollo del Caribe/Kairi Consultants Limited) (2007a), “Living Conditions in Antigua and Barbuda: Poverty in a Service Economy in Transition”, *Main Report*, vol I.

— (2007b), “Trade Adjustment and Poverty in St. Lucia 2005/06”, *Quantitative Assesment*, vol. III.

— (2007c), “Trade Adjustment and Poverty in St. Lucia 2005/06”, *Main Report*, vol I.

— (2008), “The Cayman Islands National Assessment of Living Conditions 2006/2007”, *Main Report*, vol I.

— (2009a), “Country Poverty Assessment: Grenada, Carriacou and Petit Martinique”, *Main Report*, vol I.

— (2009b), “Country Poverty Assessment St. Kitts and Nevis 2007/08. Living Conditions in a Carribbean Small Island Developing State”, vol. I.

— (2009c), “Country Poverty Assessment St. Kitts and

Nevis 2007/08. Living Conditions in a Carribbean Small Island Developing State”, apéndice del vol. II.

— (2010a), “Country Poverty Assessment Dominica: Reducing Poverty in the Face of Vulnerability”, *Final Report*, vol I.

— (2010b), “Draft Report. Country Povert Assesment Anguilla 2007/2009”, *Main Report*.

— (2010c), “Country Poverty Assessment Dominica: Reducing Poverty in the Face of Vulnerability”, *Institutional Assesment*, vol. III.

CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (2010a), *La hora de la igualdad: Brechas por cerrar caminos por abrir* (LC/G.2432(SES.33/3)), Santiago de Chile.

— (2010b), *Anuario estadístico de América Latina y el Caribe* (LC/G.2483-P/B), Santiago de Chile. Publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: E/S.10.II.G.1.

— (2010c), *El progreso de América Latina y el Caribe hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Desafíos para lograrlos con igualdad* (LC/G.2460), Santiago de Chile.

— (2011a), *Panorama social de América Latina 2010*, Santiago de Chile.

— (2011b), “Caribbean Indicators System (CIS) for social statistics and Millennium Development Goals monitoring”, Santiago de Chile.

CEPAL/OIJ (Comisión Económica para América Latina y el Caribe/Organización Iberoamericana de Juventud) (2004), *La juventud en Iberoamérica. Tendencias y urgencias* (LC/L.2180), Santiago de Chile.

— (2008), *Juventud y cohesión social en Iberoamérica: Un modelo para armar* (LC/G.2391), Santiago de Chile.

Chambers, R. y R. Conway (1992), “Sustainable rural livelihoods: Practical concepts for the 21st Century”, *IDS Discussion Paper*, N° 296, Instituto de Estudios para el Desarrollo.

Cornwall, A. y S. Jolly (2006), “Introduction: Sexuality Matters”, *IDS Bulletin*, vol. 37, N° 5, Instituto de Estudios para el Desarrollo.

Danns, G. K, B. I. Henry y P. LaFleur (1997), “Tomorrow’s Adults. A Situational Analysis of Youth in the Commonwealth Caribbean”, Londres, Secretaría del Commonwealth.

Ellis, F. (2006), “Livelihoods approach”, *The Elgar Companion to Development Studies*, D. Clarke (ed.), Cheltenham, Edward Elgar.

— (2000), *Rural Livelihoods and Diversity in Developing Countries*, Oxford, Oxford University Press.

Ellis, F. y A. Freeman (2005), “Conceptual framework and overview of themes”, *Rural Livelihoods and Poverty*

- Reduction Policies*, Routledge Studies in Development Economics, Routledge.
- Gobierno de Belice (2011), “Youth for the Future. Tomorrow Starts Today”, Ministry of Education and Youth.
- Gobierno de Belice/CDB (Banco de Desarrollo del Caribe) (2010), “Country Poverty Assessment”, *Main Report*, vol I.
- Gobierno de Jamaica (2009), “Assignment of subjects and departments to Cabinet Ministers”, Cabinet Office.
- (2003), “National Youth Policy”, National Centre for Youth Development, Ministry of Education, Youth and Culture.
- Gobierno de la República de Trinidad y Tabago (2006), “National Youth Policy”, Ministry of Sports and Youth Affairs.
- Jolly, S. (2010), “Poverty and Sexuality: What are the connections? Overview and Literature Review”, Estocolmo, Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (ASDI).
- KCL (Kairi Consultants Limited) (2007), “Analysis of the Trinidad and Tobago Survey of Living Conditions-2005”, Puerto España.
- Naciones Unidas (2011a), *The Global Social Crisis. Report on the World Social Situation (ST/ESA/334)*, Nueva York, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales.
- (2011b), “World Population Prospects, The 2010 Revision”, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales.
- (2010a), “Joint statement by heads of UN entities for the launch of the International Year of Youth”, Nueva York [en línea] http://www.unifem.org/news_events/story_detail.php?StoryID=1152.
- (2010b), “Statistical Annex”, *World Youth Report: Youth and Climate Change*, Nueva York, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales.
- (2011c), *Objetivos de Desarrollo del Milenio. Informe 2011*, Nueva York.
- (2007), *World Youth Report 2007. Young People's Transition to Adulthood: Progress and Challenges*, Nueva York.
- (2003), *World Youth Report 2003. The global situation of young people*, Nueva York, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales.
- (1996), “Programa de Acción Mundial para los Jóvenes hasta el año 2000 y años subsiguientes” (A/RES/50/81), resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su quincuagésimo período de sesiones.
- OIT (Organización Internacional del Trabajo) (2011a), *Global Employment Trends 2011*, Ginebra.
- (2011b), Base de datos LABORSTA Internet [en línea] <http://laborsta.ilo.org/default.html>.
- (2010), *Global Employment Trends for Youth. Special issue on the impact of the global economic crisis on youth*, Ginebra.
- OMS (Organización Mundial de la Salud) (2011), “Global Health Observatory Data Repository. HIV/AIDS Indicators”, Ginebra.
- ONUSIDA (Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA) (2010), *Global Report. UNAIDS Report on the Global AIDS Epidemic, 2010*, Ginebra.
- Pilgrim, A. y Blum, R. (2011), “Protective and risk factors associated with adolescent sexual and reproductive health in the English-speaking Caribbean: a literature review”, *Journal of Adolescent Health*, en prensa.
- Rodríguez, Jorge (2009), *Reproducción adolescente y desigualdades en América Latina y el Caribe: un llamado a la reflexión y a la acción*, Madrid, Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ).
- Scoones, I. (1998), “Sustainable rural livelihoods: a framework for analysis”, *IDS Working Paper*, N° 72, Instituto de Estudios para el Desarrollo.
- Sen, A. (1982), *Poverty and Famines. An Essay on Entitlement and Deprivation*, Nueva York, Oxford University Press.
- Thomas-Hope, E. (2009), “Regional special topic monography on international migration, based on the analysis of the 2000 round Census data of eighteen Caribbean countries”, Greater Georgetown, Secretaría de la CARICOM.
- UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) (2009), *Compendio mundial de la educación 2009. Comparación de las estadísticas de educación en el mundo*, Instituto de Estadística, Canadá.
- (2011), “Data Centre”, Instituto de Estadística de la UNESCO [en línea] <http://stats.uis.unesco.org/unesco/tableviewer/document.aspx?ReportId=143>.
- UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) (2011), *2011 Global Study on Homicide. Trends, Contexts, Data*, Viena.
- UNODC/Banco Mundial (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito/Banco Mundial) (2007), “Crime, Violence, and Development: Trends, Costs, and Policy Options in the Caribbean”, *Report*, N° 37820.



Anexo estadístico

Cuadro A-1
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: EVOLUCIÓN DE ALGUNOS INDICADORES ECONÓMICOS, 1990-2010

País	Año	PIB por habitante (en dólares de 2000)	Ingreso por habitante (en dólares de 2000) ^a	Desempleo (en porcentajes)	Variación anual del índice de precios al consumidor ^b	Variaciones medias anuales del período				
						Período	PIB por habitante	Ingreso por habitante ^a	Salario medio real	Salario mínimo urbano real
Antigua y Barbuda	1990	10 017,6					
	1999	10 990,9	1990-1999	1,0	
	2002	10 528,3	2002	1,0	
	2008	14 898,3	2008	-0,4	
	2009	13 071,2	2009	-12,3	
	2010	12 252,6	2010	-6,3	
Argentina	1990	3 405,3	3 252,1	7,4	1 343,9					
	1999	4 584,4	4 317,4	14,3	-1,8	1990-1999	3,4	3,2	0,0	14,9
	2002	3 756,2	3 470,2	19,7	41,0	2002	-11,8	-14,2	-19,4	-19,6
	2008	5 771,1	5 901,6	7,9	7,2	2008	5,7	8,4	8,8	15,3
	2009	5 762,2	5 745,6	8,7	7,7	2009	-0,2	-2,6	11,7	15,3
	2010	6 228,7	6 235,4	7,7	10,9	2010	8,1	8,5	12,9	10,0
Bahamas	1990	21 800,9					
	1999	23 184,7	...	7,8	...	1990-1999	0,7
	2002	24 452,8	...	9,1	...	2002	1,4
	2008	23 675,1	...	8,7	...	2008	-2,8
	2009	22 139,8	...	14,2	...	2009	-6,5
	2010	22 024,3	2010	-0,5
Barbados	1990	12 462,0	...	14,7	3,4					
	1999	13 174,7	...	10,4	2,9	1990-1999	0,6
	2002	13 124,7	...	10,3	0,9	2002	0,3
	2008	15 462,4	...	8,1	7,3	2008	-0,2
	2009	14 760,4	...	10,0	4,4	2009	-4,5
	2010	14 788,8	...	10,8	6,5	2010	0,2
Belice	1990	2 860,7					
	1999	3 130,0	...	12,8	...	1990-1999	1,0
	2002	3 597,4	...	10,0	...	2002	2,7
	2008	4 098,5	...	8,2	...	2008	1,7
	2009	4 016,9	...	13,1	...	2009	-2,0
	2010	4 034,4	2010	0,4
Bolivia (Estado Plurinacional de)	1990	849,5	815,3	7,3	18,0					
	1999	982,0	909,8	7,2	3,1	1990-1999	1,6	1,2	2,1	10,2
	2002	986,8	925,6	8,7	2,5	2002	0,4	2,8	3,3	4,7
	2008	1 145,8	1 232,4	6,7	11,8	2008	4,3	7,4	-7,4	-1,5
	2009	1 164,0	1 203,1	7,9	0,3	2009	1,6	-2,4	3,8	8,3
	2010	1 191,7	1 278,0	6,5	7,2	2010	2,4	6,2	...	2,5
Brasil	1990	4 002,2	3 900,2	4,3	2 101,3					
	1999	4 293,3	4 146,8	7,6	8,9	1990-1999	0,8	0,7	0,2	3,1
	2002	4 464,6	4 311,9	11,7	12,5	2002	1,2	1,3	-2,1	4,1
	2008	5 325,7	5 292,5	7,9	5,9	2008	4,1	4,6	2,1	3,9
	2009	5 266,2	5 193,6	8,1	4,3	2009	-1,1	-1,9	1,3	7,4
	2010	5 622,0	5 653,3	6,7	5,9	2010	6,8	8,9	2,1	5,4
Chile	1990	3 927,8	3 535,3	7,8	27,3					
	1999	6 051,3	5 313,9	10,1	2,3	1990-1999	4,9	4,6	4,0	5,5
	2002	6 443,9	5 610,4	9,8	2,8	2002	1,0	1,7	2,0	2,9
	2008	7 980,5	7 780,0	7,8	7,1	2008	2,6	0,8	-0,2	-0,2
	2009	7 769,6	7 577,3	9,7	-1,4	2009	-2,6	-2,6	4,8	5,4
	2010	8 095,7	8 501,3	8,2	3,0	2010	4,2	12,2	2,3	2,4
Colombia	1990	2 827,7	2 657,5	10,5	32,4					
	1999	3 049,0	2 913,4	19,4	9,2	1990-1999	0,8	1,0	2,6	-0,1
	2002	3 112,9	2 954,0	18,1	7,0	2002	0,9	0,6	3,0	0,7
	2008	3 845,8	3 805,4	11,5	7,7	2008	2,0	3,4	-1,9	-1,6
	2009	3 846,2	3 714,6	13,0	2,0	2009	0,0	-2,4	1,1	3,2
	2010	3 955,8	3 880,3	12,4	3,2	2010	2,9	4,5	2,5	1,2
Costa Rica	1990	3 200,4	3 097,3	5,4	27,3					
	1999	4 179,1	3 985,5	6,2	10,1	1990-1999	3,0	2,8	2,2	1,1
	2002	4 149,5	4 178,3	6,8	9,7	2002	0,8	2,3	4,1	-0,7
	2008	5 329,6	5 127,0	4,8	13,9	2008	1,4	2,1	-2,0	-1,3
	2009	5 193,0	4 949,3	8,5	4,0	2009	-2,6	-3,5	7,7	3,8
	2010	5 340,2	5 173,6	7,1	5,8	2010	2,8	4,5	2,1	2,4
Cuba	1990	3 648,2	...	5,4	...					
	1999	2 853,4	2 795,1	6,3	...	1990-1999	-2,7	...	-9,5	...
	2002	3 138,2	3 011,2	3,3	7,3	2002	1,2	0,8	9,3	5,2
	2008	4 764,3	...	1,6	-0,1	2008	4,1	...	0,1	-1,6
	2009	4 833,4	...	1,7	-0,1	2009	1,4	...	4,6	1,2
	2010	4 932,7	...	2,5	1,6	2010	2,4	...	3,0	-1,3

Cuadro A-1 (continuación)

País	Año	PIB por habitante (en dólares de 2000)	Ingreso por habitante (en dólares de 2000) ^a	Desempleo (en porcentajes)	Variación anual del índice de precios al consumidor ^b	Variaciones medias anuales del período				
						Período	PIB por habitante	Ingreso por habitante ^a	Salario medio real	Salario mínimo urbano real
Dominica	1990	3 766,1					
	1999	4 817,7	1990-1999	2,8
	2002	4 820,9	2002	-1,8
	2008	6 371,7	2008	6,6
	2009	6 343,3	2009	-0,4
	2010	6 346,9	2010	0,1
Ecuador	1990	2 310,6	2 101,2	6,1	49,5					
	1999	2 269,6	2 065,8	14,4	60,7	1990-1999	-0,2	-0,2	3,7	2,1
	2002	2 463,2	2 262,2	8,6	9,4	2002	2,2	3,5	10,9	0,9
	2008	3 140,2	3 258,8	6,9	8,8	2008	6,1	11,3	...	8,6
	2009	3 118,7	3 097,5	8,5	4,3	2009	-0,7	-4,9	...	3,6
	2010	3 196,2	3 298,9	7,6	3,3	2010	2,5	6,5	...	6,3
El Salvador	1990	1 821,6	1 754,7	10,0	19,3					
	1999	2 521,7	2 476,3	6,9	-1,0	1990-1999	3,7	3,9	...	0,1
	2002	2 642,4	2 605,9	6,2	2,8	2002	1,9	1,5	-0,7	-1,9
	2008	3 045,7	2 955,5	5,5	5,5	2008	0,8	0,6	-3,1	0,2
	2009	2 936,4	2 846,4	7,1	-0,2	2009	-3,6	-3,7	3,5	9,7
	2010	2 963,9	2 871,0	...	2,1	2010	0,9	0,9	1,0	-1,0
Granada	1990	3 866,9					
	1999	4 702,4	1990-1999	2,2
	2002	5 537,1	2002	3,6
	2008	6 894,2	2008	0,5
	2009	6 318,9	2009	-8,3
	2010	6 266,5	2010	-0,8
Guatemala	1990	1 758,1	1 702,8	...	59,6					
	1999	2 063,2	2 063,0	...	4,9	1990-1999	1,8	2,2	5,4	-7,4
	2002	2 112,6	2 101,3	5,4	6,3	2002	1,3	0,4	-0,9	0,3
	2008	2 299,9	2 218,4	...	9,4	2008	0,8	0,2	-2,6	-4,9
	2009	2 256,1	2 198,0	...	-0,3	2009	-1,9	-0,9	0,1	5,2
	2010	2 262,8	2 202,6	...	5,4	2010	0,3	0,2	2,8	3,7
Guyana	1990	1 099,6					
	1999	1 782,4	1990-1999	5,5
	2002	1 801,3	2002	0,7
	2008	2 007,0	2008	1,7
	2009	2 070,8	2009	3,2
	2010	2 143,3	2010	3,5
Haití	1990	600,8	616,5	...	26,1					
	1999	502,1	508,6	...	9,7	1990-1999	-2,0	-2,1	...	-7,3
	2002	475,5	474,3	...	14,8	2002	-1,8	-2,3	...	-8,9
	2008	453,3	440,9	...	17,0	2008	-0,8	-3,7	...	-13,0
	2009	458,8	458,2	...	2,1	2009	1,2	3,9	...	28,0
	2010	428,6	428,8	...	6,2	2010	-6,6	-6,4	...	58,0
Honduras	1990	1 147,8	1 068,8	7,8	36,4					
	1999	1 204,1	1 269,7	5,3	10,9	1990-1999	0,5	1,9	...	-1,1
	2002	1 275,2	1 259,1	6,1	8,1	2002	1,7	-0,1	...	2,0
	2008	1 570,9	1 431,9	4,1	10,8	2008	2,2	-1,0	...	0,2
	2009	1 507,2	1 424,8	4,9	3,0	2009	-4,1	-0,5	...	70,5
	2010	1 518,9	1 449,1	6,4	6,5	2010	0,8	1,7	...	-4,5
Jamaica	1990	4 041,1	...	15,3	29,8					
	1999	3 994,4	...	15,7	6,8	1990-1999	-0,1
	2002	4 009,1	...	14,2	7,3	2002	0,1
	2008	4 250,4	...	10,6	16,9	2008	-1,0
	2009	4 107,9	...	11,4	10,2	2009	-3,4
	2010	4 040,7	...	12,4	11,8	2010	-1,6
México	1990	6 528,7	6 281,5	2,7	29,9					
	1999	7 410,2	7 196,7	3,7	12,3	1990-1999	1,4	1,5	0,7	-4,1
	2002	7 650,6	7 423,9	3,9	5,7	2002	-0,5	-0,1	1,9	0,8
	2008	8 573,8	8 520,3	4,9	6,5	2008	0,2	0,9	2,2	-2,1
	2009	7 953,1	7 865,2	6,6	3,6	2009	-7,2	-7,7	0,6	-1,5
	2010	8 333,5	8 287,4	6,4	4,4	2010	4,8	5,4	...	0,8

Cuadro A-1 (conclusión)

País	Año	PIB por habitante (en dólares de 2000)	Ingreso por habitante (en dólares de 2000) ^a	Desempleo (en porcentajes)	Variación anual del índice de precios al consumidor ^b	Variaciones medias anuales del período				
						Período	PIB por habitante	Ingreso por habitante ^a	Salario medio real	Salario mínimo urbano real
Nicaragua	1990	722,5	599,4	7,6	1 3490,2					
	1999	798,4	781,9	10,7	7,2	1990-1999	1,1	3,0	3,1	0,8
	2002	824,5	793,1	11,6	4,0	2002	-0,6	-0,0	3,5	3,7
	2008	952,3	900,9	8,0	12,7	2008	1,4	-0,5	-3,7	7,6
	2009	926,2	897,6	10,5	1,8	2009	-2,7	-0,4	5,8	16,9
	2010	955,6	926,0	9,7	9,1	2010	3,2	3,2	1,3	5,5
Panamá	1990	3 170,1	3 236,7	20,0	0,8					
	1999	4 214,5	4 149,7	13,6	1,5	1990-1999	3,2	2,8	0,7	1,7
	2002	4 205,2	4 261,5	16,5	1,8	2002	0,4	2,3	-3,0	-1,1
	2008	6 096,0	5 428,3	6,5	6,8	2008	8,3	5,3	-4,1	2,7
	2009	6 230,2	5 695,9	7,9	1,9	2009	2,2	4,9	2,7	-2,5
	2010	6 600,8	5 948,8	7,7	4,9	2010	5,9	4,4	1,9	6,4
Paraguay	1990	1 299,7	1 335,7	6,6	44,0					
	1999	1 300,7	1 363,1	9,4	5,4	1990-1999	0,0	0,2	1,3	-1,3
	2002	1 206,1	1 216,8	14,7	14,6	2002	-2,0	-4,1	-5,0	-0,8
	2008	1 412,3	1 509,6	7,4	7,5	2008	3,9	9,2	-0,7	-2,5
	2009	1 334,2	1 392,6	8,2	1,9	2009	-5,5	-7,8	4,5	0,7
	2010	1 508,6	1 581,7	7,8	7,2	2010	13,1	13,6	0,7	0,5
Perú	1990	1 999,2	1 889,0	8,3	7 646,8					
	1999	2 453,4	2 343,5	9,2	3,7	1990-1999	2,3	2,4	0,6	2,3
	2002	2 543,3	2 399,5	9,4	1,5	2002	3,6	3,5	4,6	-0,2
	2008	3 544,5	3 436,4	8,4	6,6	2008	8,5	6,5	2,2	2,5
	2009	3 534,6	3 405,3	8,4	0,2	2009	-0,3	-0,9	3,1	-2,9
	2010	3 800,7	3 763,0	7,9	2,1	2010	7,5	10,5	2,6	-1,0
República Dominicana	1990	2 180,1	2 119,3	...	79,9					
	1999	3 168,3	3 153,8	13,8	5,1	1990-1999	4,2	4,5	...	2,6
	2002	3 440,0	3 389,7	16,1	10,5	2002	4,2	4,2	...	-0,6
	2008	4 397,6	4 165,4	14,1	4,5	2008	3,8	4,2	...	-6,5
	2009	4 488,0	4 323,3	14,9	5,7	2009	2,1	3,8	...	7,1
	2010	4 772,9	4 579,9	14,3	6,3	2010	6,3	5,9	...	-0,4
Suriname	1990	2 627,6	...	15,8	...					
	1999	2 348,1	...	14,0	...	1990-1999	-1,2
	2002	2 490,6	...	10,0	...	2002	1,2
	2008	3 044,2	2008	3,3
	2009	3 080,3	2009	1,2
	2010	3 185,2	2010	3,4
Trinidad y Tabago	1990	5 827,6	...	20,1	9,5					
	1999	7 936,4	...	13,2	3,4	1990-1999	3,5
	2002	9 429,1	...	10,4	4,3	2002	7,5
	2008	14 691,8	...	4,6	14,5	2008	2,0
	2009	14 118,7	...	5,3	1,3	2009	-3,9
	2010	14 419,6	...	5,8	13,4	2010	2,1
Uruguay	1990	3 964,6	4 118,6	8,5	128,9					
	1999	5 092,0	5 164,5	11,3	4,2	1990-1999	2,8	2,5	1,4	-5,3
	2002	4 286,6	4 447,8	17,0	25,9	2002	-11,0	-10,5	-10,7	-10,1
	2008	6 302,6	6 139,0	7,9	9,2	2008	8,3	8,3	3,6	10,8
	2009	6 444,1	6 318,5	7,6	5,9	2009	2,2	2,9	7,3	9,9
	2010	6 967,0	6 876,9	7,1	6,9	2010	8,1	8,8	3,3	1,2
Venezuela (República Bolivariana de)	1990	5 286,9	4 326,7	10,4	36,5					
	1999	5 168,5	3 781,7	15,0	20,0	1990-1999	-0,3	-1,5	-3,9	-0,8
	2002	4 772,3	3 741,0	15,8	31,2	2002	-10,5	-10,8	-11,0	-5,5
	2008	6 509,4	7 591,3	7,3	31,9	2008	3,5	9,5	-4,5	-6,4
	2009	6 198,9	6 350,1	7,8	26,9	2009	-4,8	-16,3	-6,6	-7,2
	2010	6 010,1	6 437,0	8,6	27,4	2010	-3,0	1,4	-5,2	-5,6
América Latina y el Caribe ^c	1990	3 970,9	3 687,3	...	1 376,8					
	1999	4 456,1	4 214,4	11,0	9,7	1990-1999	1,3	1,5
	2002	4 514,5	4 272,3	11,1	12,2	2002	-0,9	-0,9
	2008	5 478,2	5 373,2	7,3	8,2	2008	2,8	2,1
	2009	5 309,6	5 120,2	8,1	4,7	2009	-3,1	-4,7
	2010	5 571,1	5 473,1	7,3	6,5	2010	4,9	6,9

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información oficial suministrada por los países.

^a Se refiere al ingreso bruto nacional real por habitante.

^b Corresponde al promedio simple de las variaciones de diciembre a diciembre de cada año.

^c La información agregada de América Latina y el Caribe se obtiene por medio de ponderaciones de todos los países de los que se dispone de información en cada indicador.

Cuadro A-2
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POBLACIÓN TOTAL DE LA REGIÓN POR PAÍSES, 1980-2020
(En miles a mitad de año)

País	1980	1985	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2020
América Latina									
Argentina	28 094	30 305	32 581	34 835	36 896	38 747	40 738	42 676	44 486
Bolivia (Estado Plurinacional de)	5 355	5 964	6 669	7 482	8 317	9 182	10 031	10 854	11 638
Brasil	121 618	136 124	149 527	161 620	174 167	186 110	195 498	202 954	209 090
Chile	11 174	12 102	13 179	14 395	15 412	16 294	17 133	17 914	18 606
Colombia	26 881	29 984	33 186	36 436	39 763	43 046	46 299	49 385	52 278
Costa Rica	2 347	2 697	3 076	3 475	3 929	4 327	4 639	4 962	5 255
Cuba	9 823	10 064	10 564	10 885	11 075	11 189	11 203	11 213	11 193
Ecuador	7 961	9 099	10 272	11 397	12 305	13 060	13 773	14 550	15 349
El Salvador	4 660	4 996	5 326	5 724	5 942	6 057	6 192	6 381	6 616
Guatemala	7 014	7 935	8 908	10 004	11 229	12 709	14 376	16 195	18 076
Haití	5 691	6 388	7 109	7 837	8 578	9 295	10 089	10 918	11 752
Honduras	3 634	4 236	4 901	5 589	6 234	6 898	7 621	8 392	9 141
México	69 321	76 808	83 906	91 621	98 957	105 001	110 675	115 735	120 099
Nicaragua	3 250	3 709	4 137	4 658	5 100	5 455	5 822	6 189	6 529
Panamá	1 949	2 176	2 411	2 670	2 950	3 231	3 508	3 773	4 027
Paraguay	3 198	3 702	4 248	4 799	5 349	5 904	6 460	7 007	7 533
Perú	17 324	19 519	21 765	23 927	25 997	27 833	29 495	31 197	32 881
República Dominicana	5 808	6 487	7 179	7 888	8 560	9 237	9 899	10 515	11 077
Uruguay	2 914	3 009	3 106	3 218	3 318	3 324	3 372	3 430	3 493
Venezuela (República Bolivariana de)	15 091	17 317	19 731	22 078	24 402	26 724	29 043	31 291	33 412
América Latina	353 109	392 620	431 779	470 537	508 479	543 622	575 867	605 531	632 530
El Caribe									
Anguila	7	7	8	10	11	14	15	17	17
Antigua y Barbuda	70	66	62	69	78	84	89	93	97
Antillas Neerlandesas	173	182	191	190	180	186	201	208	212
Aruba	60	63	62	80	90	101	107	109	111
Bahamas	211	235	256	280	298	319	343	363	383
Barbados	249	254	260	263	268	271	273	276	279
Belice	144	166	190	220	251	281	312	344	377
Dominica	75	74	71	71	70	69	68	68	68
Granada	89	100	96	100	102	103	104	107	108
Guyana	777	752	725	728	733	746	754	763	773
Islas Caimán	17	20	26	33	40	52	56	59	60
Islas Turcas y Caicos	8	10	12	15	19	31	38	41	43
Islas Vírgenes Británicas	11	13	16	18	20	22	23	24	25
Islas Vírgenes de los Estados Unidos	98	105	103	107	109	109	109	108	106
Jamaica	2 132	2 297	2 365	2 462	2 582	2 682	2 741	2 790	2 828
Montserrat	12	11	11	10	5	6	6	6	6
Puerto Rico	3 196	3 379	3 529	3 702	3 814	3 782	3 749	3 742	3 747
Saint Kitts y Nevis	43	42	41	43	46	49	52	56	59
San Vicente y las Granadinas	100	104	107	108	108	109	109	109	110
Santa Lucía	118	126	138	147	157	165	174	183	190
Suriname	366	376	407	436	467	499	525	548	569
Trinidad y Tabago	1 078	1 173	1 215	1 261	1 292	1 315	1 341	1 363	1 373
El Caribe ^a	29 695	31 903	34 205	36 439	38 441	40 177	41 646	43 041	44 322
América Latina y el Caribe ^b	362 326	402 393	443 032	482 647	521 429	557 038	590 082	622 437	652 182

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), base de datos CEPALSTAT y Base de Estadísticas e Indicadores Sociales (BADEINSO); Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL, revisión 2010 y Naciones Unidas, "World Population Prospects: The 2010 Revision", Nueva York [en línea] <http://esa.un.org/unpd/wpp/index.htm>.

^a Incluye 24 economías: Anguila, Antigua y Barbuda, Antillas Neerlandesas, Aruba, Bahamas, Barbados, Cuba, Dominica, Granada, Guadalupe, Haití, Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Jamaica, Martinica, Montserrat, Puerto Rico, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tabago.

^b Incluye 46 economías: Anguila, Antigua y Barbuda, Antillas Neerlandesas, Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Guyana Francesa, Haití, Honduras, Islas Caimán, Islas Malvinas (Falklands), Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Jamaica, Martinica, México, Montserrat, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Suriname, Trinidad y Tabago, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de).

Cuadro A-3
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: TASAS GLOBALES DE FECUNDIDAD ESTIMADAS SEGÚN QUINQUENIOS, POR PAÍSES, 1980-2020
(En número de hijos por mujer)

País	1980-1985	1985-1990	1990-1995	1995-2000	2000-2005	2005-2010	2010-2015	2015-2020
América Latina								
Argentina	3,15	3,05	2,90	2,63	2,35	2,25	2,16	2,08
Bolivia (Estado Plurinacional de)	5,30	5,00	4,80	4,32	3,96	3,50	3,09	2,75
Brasil	3,80	3,10	2,60	2,45	2,25	1,90	1,70	1,60
Chile	2,67	2,65	2,55	2,21	2,00	1,94	1,89	1,85
Colombia	3,68	3,24	3,00	2,75	2,55	2,45	2,30	2,19
Costa Rica	3,53	3,37	2,95	2,58	2,28	1,96	1,97	1,85
Cuba	1,85	1,85	1,65	1,61	1,63	1,50	1,54	1,57
Ecuador	4,70	4,00	3,40	3,10	2,82	2,58	2,38	2,22
El Salvador	4,80	4,20	3,73	3,30	2,60	2,35	2,22	2,13
Guatemala	6,10	5,70	5,45	5,00	4,60	4,15	3,71	3,29
Haití	6,21	5,70	5,15	4,62	4,00	3,54	3,19	2,91
Honduras	6,00	5,37	4,92	4,30	3,72	3,31	2,95	2,66
México	4,25	3,63	3,19	2,67	2,40	2,21	2,04	1,89
Nicaragua	5,85	5,00	4,50	3,60	3,00	2,76	2,55	2,37
Panamá	3,52	3,20	2,87	2,79	2,70	2,56	2,41	2,29
Paraguay	5,20	4,77	4,31	3,88	3,48	3,08	2,76	2,51
Perú	4,65	4,10	3,57	3,10	2,80	2,60	2,38	2,22
República Dominicana	4,15	3,65	3,31	2,98	2,83	2,67	2,48	2,32
Uruguay	2,57	2,53	2,49	2,30	2,20	2,12	2,03	1,96
Venezuela (República Bolivariana de)	3,96	3,65	3,25	2,94	2,72	2,55	2,39	2,26
América Latina	3,95	3,44	3,04	2,74	2,50	2,27	2,09	1,98
El Caribe								
Antillas Neerlandesas	2,36	2,30	2,28	2,12	2,09	1,98	1,90	1,84
Aruba	2,36	2,30	2,17	1,95	1,82	1,74	1,67	1,63
Bahamas	3,05	2,65	2,64	2,33	1,87	1,91	1,88	1,85
Barbados	1,92	1,77	1,73	1,64	1,50	1,53	1,58	1,62
Belice	5,40	4,70	4,35	3,85	3,35	2,94	2,68	2,48
Granada	4,23	4,14	3,46	2,81	2,43	2,30	2,17	2,06
Guyana	3,26	2,70	2,55	2,50	2,43	2,33	2,19	2,07
Islas Vírgenes de los Estados Unidos	3,70	3,09	3,09	2,50	2,15	2,05	1,94	1,85
Jamaica	3,55	3,10	2,84	2,67	2,54	2,40	2,26	2,15
Puerto Rico	2,46	2,26	2,18	1,99	1,84	1,83	1,76	1,70
San Vicente y las Granadinas	3,64	3,10	2,85	2,55	2,24	2,13	2,00	1,88
Santa Lucía	4,20	3,65	3,15	2,60	2,10	2,05	1,91	1,79
Suriname	3,70	3,00	2,60	2,80	2,60	2,42	2,27	2,14
Trinidad y Tabago	3,22	2,80	2,10	1,73	1,61	1,64	1,63	1,62
El Caribe ^a	3,41	3,14	2,84	2,62	2,49	2,36	2,25	2,15
América Latina y el Caribe ^b	3,93	3,42	3,02	2,73	2,53	2,30	2,17	2,05

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), base de datos CEPALSTAT y Base de Estadísticas e Indicadores Sociales (BADEINSO); Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL, revisión 2010 y Naciones Unidas, "World Population Prospects: The 2010 Revision", Nueva York [en línea] <http://esa.un.org/unpd/wpp/index.htm>.

^a Incluye 24 economías: Anguila, Antigua y Barbuda, Antillas Neerlandesas, Aruba, Bahamas, Barbados, Cuba, Dominica, Granada, Guadalupe, Haití, Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Jamaica, Martinica, Montserrat, Puerto Rico, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tabago.

^b Incluye 46 economías: Anguila, Antigua y Barbuda, Antillas Neerlandesas, Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Guyana Francesa, Haití, Honduras, Islas Caimán, Islas Malvinas (Falklands), Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Jamaica, Martinica, México, Montserrat, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Suriname, Trinidad y Tabago, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de).

Cuadro A-4
AMÉRICA LATINA: MAGNITUD DE LA POBREZA Y LA INDIGENCIA, 1990-2010
 (En porcentajes)

País	Año	Población bajo la línea de pobreza ^a					Población bajo la línea de indigencia				
		Total país	Zonas urbanas			Zonas rurales	Total país	Zonas urbanas			Zonas rurales
			Total	Área metropolitana	Resto urbano			Total	Área metropolitana	Resto urbano	
Argentina	1990	21,2	5,2
	1999	...	23,7	19,7	28,5	6,7	4,8	8,8	...
	2006	...	21,0	19,3	22,8	7,2	6,7	7,9	...
	2009	...	11,3	9,6	13,3	3,8	3,1	4,5	...
	2010	...	8,6	7,3	10,1	2,8	2,3	3,3	...
Bolivia (Estado Plurinacional de)	1989	...	52,6	23,0
	1999	60,6	48,7	45,0	63,9	80,7	36,4	19,8	17,5	29,0	64,7
	2002	62,4	52,0	48,0	58,2	79,2	37,1	21,3	18,8	25,0	62,9
	2007	54,0	42,4	40,6	44,9	75,8	31,2	16,2	15,4	17,4	59,0
Brasil	1990	48,0	41,2	70,6	23,4	16,7	46,1
	1999	37,5	32,9	55,3	12,9	9,3	27,1
	2002	37,8	34,4	55,7	12,6	10,0	26,4
	2008	25,8	22,8	41,2	7,3	5,5	16,5
	2009	24,9	22,1	39,3	7,0	5,5	15,2
Chile	1990	38,6	38,5	32,1	43,5	38,8	13,0	12,5	9,3	14,9	15,6
	1998	21,7	20,7	14,6	25,0	27,5	5,6	5,1	3,3	6,4	8,6
	2003	18,7	18,5	12,4	22,7	20,0	4,7	4,4	2,8	5,6	6,2
	2006	13,7	13,9	10,4	16,4	12,3	3,2	3,2	2,4	3,7	3,5
	2009	11,5	11,7	8,4	14,0	10,4	3,6	3,5	2,5	4,1	4,4
Colombia	1991	56,1	52,7	60,7	26,1	20,0	34,3
	1999	54,9	50,6	43,1	53,1	61,8	26,8	21,9	19,6	22,7	34,6
	2008 ^b	46,1	40,0	22,6	44,8	65,3	17,9	13,1	3,9	15,7	32,7
	2009 ^b	45,7	39,7	22,1	44,7	64,5	16,5	12,4	4,1	14,7	29,2
	2010 ^b	44,3	38,5	20,2	43,7	62,7	14,8	11,1	3,3	13,3	26,7
Costa Rica	1990	26,3	24,9	22,8	27,7	27,3	10,1	6,9	5,7	8,4	12,5
	1999	20,3	18,1	17,5	18,7	22,3	7,8	5,4	4,3	6,5	9,8
	2008	16,4	15,6	13,9	22,3	17,5	5,5	4,3	3,7	6,4	7,3
	2009	18,9	18,5	16,7	25,4	19,5	6,9	5,4	4,9	7,3	9,1
	2010	18,5	17,0	15,3	24,5	20,8	6,8	4,8	4,3	7,3	9,9
Ecuador	1990	...	62,1	26,2
	1999	...	63,5	31,3
	2008	42,7	39,0	50,2	18,0	14,2	25,6
	2009	42,2	40,2	46,3	18,1	15,5	23,3
	2010	39,2	37,1	43,2	16,4	14,2	20,8
El Salvador	1995	54,2	45,8	34,7	55,1	64,4	21,7	14,9	8,8	20,1	29,9
	1999	49,8	38,7	29,8	48,7	65,1	21,9	13,0	7,7	19,0	34,3
	2004	47,5	41,2	33,2	48,6	56,8	19,0	13,8	8,4	18,8	26,6
	2009	47,9	42,3	32,6	49,5	57,6	17,3	12,8	7,3	16,8	25,2
	2010	46,6	41,1	29,7	49,3	55,8	16,7	12,7	6,4	17,2	23,5
Guatemala	1989	69,4	53,6	77,7	42,0	26,4	50,2
	1998	61,1	49,1	69,0	31,6	16,0	41,8
	2002	60,2	45,3	68,0	30,9	18,1	37,6
	2006	54,8	42,0	66,5	29,1	14,8	42,2
Honduras	1990	80,8	70,4	59,9	79,5	88,1	60,9	43,6	31,0	54,5	72,9
	1999	79,7	71,7	64,4	78,8	86,3	56,8	42,9	33,7	51,9	68,0
	2002	77,3	66,7	56,9	74,4	86,1	54,4	36,5	25,1	45,3	69,5
	2007	68,9	56,9	47,8	64,0	78,8	45,6	26,2	18,0	32,5	61,7
	2010	67,4	56,3	46,2	64,2	76,5	42,8	26,0	18,3	31,9	56,8
México	1989	47,7	42,1	56,7	18,7	13,1	27,9
	1998	46,9	38,9	58,5	18,5	9,7	31,1
	2002	39,4	32,2	51,2	12,6	6,9	21,9
	2008	34,8	29,2	44,6	11,2	6,4	19,8
	2010	36,3	32,3	42,9	13,3	8,5	21,3

Cuadro A-4 (conclusión)

País	Año	Población bajo la línea de pobreza ^a					Población bajo la línea de indigencia				
		Total país	Zonas urbanas			Zonas rurales	Total país	Zonas urbanas			Zonas rurales
			Total	Área metropolitana	Resto urbano			Total	Área metropolitana	Resto urbano	
Nicaragua	1993	73,6	66,3	58,3	73,0	82,7	48,4	36,8	29,5	43,0	62,8
	1998	69,9	64,0	57,0	68,9	77,0	44,6	33,9	25,8	39,5	57,5
	2001	69,3	63,8	50,8	72,1	77,0	42,4	33,4	24,5	39,1	55,1
	2005	61,9	54,4	48,7	58,1	71,5	31,9	20,8	16,4	23,7	46,1
Panamá	1991	...	31,0	10,8
	1999	...	19,5	5,5
	2008	27,7	17,0	46,3	13,5	4,7	28,8
	2009	26,4	16,3	43,9	11,1	4,6	22,3
	2010	25,8	15,1	44,8	12,6	4,7	26,6
Paraguay	1990	43,2	13,1
	1999	59,0	49,1	39,6	61,2	70,4	31,8	17,1	8,9	27,7	48,8
	2008	56,9	50,3	45,7	57,4	66,3	30,1	20,9	17,4	26,2	43,1
	2009	56,0	48,2	43,9	54,9	67,1	30,4	19,0	15,8	23,9	46,6
	2010	54,8	46,5	46,5	46,5	66,6	30,7	19,4	19,0	20,0	46,8
Perú	1997	47,5	33,6	72,7	25,0	9,7	52,7
	1999	48,6	36,1	72,5	22,4	9,3	47,3
	2008 ^c	36,2	23,5	59,8	12,6	3,4	29,7
	2009 ^c	34,8	21,1	60,3	11,5	2,8	27,8
	2010 ^c	31,3	19,1	54,2	9,8	2,5	23,3
República Dominicana	2002	47,1	42,4	55,9	20,7	16,5	28,6
	2008	44,3	42,0	49,1	22,6	19,5	29,0
	2009	41,1	39,3	44,7	21,0	19,4	24,3
	2010	41,4	39,6	45,2	20,9	18,1	26,5
Uruguay	1990	...	17,9	11,3	24,3	3,4	1,8	5,0	...
	1999	...	9,4	9,8	9,0	1,8	1,9	1,6	...
	2008	13,7	14,0	15,2	13,1	9,4	3,4	3,5	4,6	2,7	2,4
	2009	10,4	10,7	12,8	9,1	5,9	1,9	2,0	3,1	1,1	1,3
	2010	8,4	8,6	10,5	7,2	4,2	1,4	1,4	2,3	0,7	1,1
Venezuela (República Bolivariana de) ^d	1990	39,8	38,6	29,2	41,2	46,0	14,4	13,1	8,0	14,5	21,3
	1999	49,4	49,4	21,7	21,7
	2002	48,6	48,6	22,2	22,2
	2008	27,6	27,6	9,9	9,9
2010	27,8	27,8	10,7	10,7	
América Latina ^e	1980	40,5	29,5	59,8	18,6	10,6	32,7
	1990	48,4	41,4	65,2	22,6	15,3	40,1
	1999	43,8	37,1	64,1	18,6	12,0	38,7
	2009	33,0	27,3	54,9	13,1	8,4	31,4
	2010	31,4	26,0	52,6	12,3	7,8	30,0

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información oficial proporcionada por los países.

^a Incluye a las personas bajo la línea de indigencia o en situación de extrema pobreza.

^b Cifras del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de Colombia. Las cifras desde 2002 en adelante no son estrictamente comparables con las anteriores, debido a cambios metodológicos efectuados por el DNP-DANE.

^c Cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) del Perú. Las cifras desde 2004 en adelante no son estrictamente comparables con las anteriores, debido a cambios metodológicos efectuados por el INEI.

^d A partir de 1997 el diseño muestral de la encuesta no permite el desglose urbano-rural. Por lo tanto, las cifras corresponden al total nacional.

^e Estimación para 18 países de la región más Haití.

Cuadro A-5
AMÉRICA LATINA: LÍNEAS DE INDIGENCIA (LI) Y DE POBREZA (LP)
 (En valores mensuales por persona)

País	Año	Período de referencia de los ingresos	Moneda ^a	Urbano		Rural		Cambio ^b	Urbano		Rural	
				LI	LP	LI	LP		LI	LP	LI	LP
				Moneda corriente					Dólares			
Argentina	1990 ^c	Septiembre	A	255 928	511 856	5 791,0	44,2	88,4
	1999	Septiembre	\$	72	143	1,0	71,6	143,3
	2006	2º semestre	\$	138	276	3,1	45,1	90,2
	2009	Año	\$	165	342	3,7	44,6	92,1
	2010	Año	\$	194	389	3,9	49,7	99,7
Bolivia (Estado Plurinacional de)	1989	Octubre	Bs	68	137	2,9	23,8	47,5
	1999	Oct.-nov.	Bs	167	333	130	228	5,9	28,0	56,1	21,9	38,3
	2002	Oct.-nov.	Bs	167	334	133	234	7,4	22,6	45,2	18,1	31,6
	2007	Año	Bs	232	449	180	307	7,9	29,6	57,2	22,9	39,1
Brasil	1990	Septiembre	Cr\$	3 109	6 572	2 634	4 967	75,5	41,2	87,0	34,9	65,8
	1999	Septiembre	R\$	51	126	43	91	1,9	26,7	66,2	22,7	48,1
	2002	Septiembre	R\$	63	155	54	114	3,35	18,9	46,3	16,3	34,0
	2008	Septiembre	R\$	96	225	84	177	1,80	53,2	125,3	46,7	98,6
	2009	Septiembre	R\$	100	238	88	188	1,82	54,8	130,7	48,2	103,4
Chile	1990	Noviembre	Ch\$	9 297	18 594	7 164	12 538	327,4	28,4	56,8	21,9	38,3
	1998	Noviembre	Ch\$	18 944	37 889	14 598	25 546	463,3	40,9	81,8	31,5	55,1
	2003	Noviembre	Ch\$	21 856	43 712	16 842	29 473	625,5	34,9	69,9	26,9	47,1
	2006	Noviembre	Ch\$	23 549	47 099	18 146	31 756	527,4	44,7	89,3	34,4	60,2
	2009	Noviembre	Ch\$	31 422	56 383	24 213	38 638	507,8	61,9	111,0	47,7	76,1
Colombia	1991	Agosto	Col\$	18 093	36 186	14 915	26 102	645,6	28,0	56,1	23,1	40,4
	1999	Agosto	Col\$	69 838	139 716	57 629	100 851	1 873,7	37,3	74,6	30,8	53,8
	2008	Año	Col\$	124 310	292 973	92 449	195 775	1 967,7	63,2	148,9	47,0	99,5
	2009	Año	Col\$	128 600	305 781	95 319	204 448	2 166,8	59,4	141,1	44,0	94,4
	2010	Año	Col\$	129 398	312 989	95 407	208 886	1 898,6	68,2	164,9	50,3	110,0
Costa Rica	1990	Junio	¢	2 639	5 278	2 081	3 642	89,7	29,4	58,9	23,2	40,6
	1999	Junio	¢	10 708	21 415	8 463	14 811	285,3	37,5	75,1	29,7	51,9
	2008	Junio	¢	31 325	58 245	24 423	40 165	519,7	60,3	112,1	47,0	77,3
	2009	Junio	¢	34 514	63 099	26 910	43 626	576,7	59,9	109,4	46,7	75,7
	2010	Junio	¢	36 475	67 171	28 403	46 300	535,1	68,2	125,5	53,1	86,5
Ecuador	1990	Noviembre	S/.	18 465	36 930	854,8	21,6	43,2
	1999	Octubre	S/.	301 716	603 432	15 656,8	19,3	38,5
	2008	Noviembre	US\$	49	91	34	57	1,0	48,7	90,6	34,3	56,5
	2009	Noviembre	US\$	50	94	36	59	1,0	50,4	94,2	35,6	58,7
	2010	Noviembre	US\$	53	98	38	61	1,0	53,4	1,8	20,5	3,0
El Salvador	1995	Ene.-dic.	¢	254	508	158	315	8,8	29,0	58,1	18,0	35,9
	1999	Ene.-dic.	¢	293	586	189	378	8,8	33,5	66,9	21,6	43,2
	2001	Ene.-dic.	¢	305	610	197	394	8,8	34,9	69,7	22,5	45,0
	2009	Año	¢	417	829	270	536	8,8	47,7	94,8	30,8	61,2
	2010	Año	¢	420	837	271	541	8,8	48,0	95,6	31,0	61,8
Guatemala	1989	Abril	Q	64	127	50	88	2,7	23,6	47,1	18,7	32,7
	1998	Dic. 1997-dic. 1998	Q	260	520	197	344	6,4	40,7	81,5	30,8	54,0
	2002	Oct.-nov.	Q	334	669	255	446	7,7	43,6	87,2	33,3	58,2
	2006	Mar.-sept.	Q	467	935	362	633	7,6	61,5	123,0	47,6	83,3
Honduras	1990	Agosto	L	115	229	81	141	4,3	26,5	52,9	18,6	32,6
	1999	Agosto	L	561	1 122	395	691	14,3	39,3	78,6	27,7	48,4
	2002	Agosto	L	689	1 378	485	849	16,6	41,6	83,3	29,3	51,3
	2007	Agosto	L	945	1 872	665	1 155	18,9	50,0	99,1	35,2	61,1
	2010	Abril	L	1 145	2 263	806	1 396	18,9	60,6	119,7	42,6	73,9

Cuadro A-5 (conclusión)

País	Año	Período de referencia de los ingresos	Moneda ^a	Urbano		Rural		Cambio ^b	Urbano		Rural	
				LI	LP	LI	LP		LI	LP	LI	LP
				Moneda corriente					Dólares			
México	1989	3 ^{er} trimestre	\$	86 400	172 800	68 810	120 418	2 510,0	34,4	68,8	27,4	48,0
	1998	3 ^{er} trimestre	MN\$	537	1 074	385	674	9,5	56,8	113,6	40,7	71,3
	2002	3 ^{er} trimestre	MN\$	742	1 484	530	928	9,9	75,0	150,1	53,6	93,8
	2008	Ago.-nov.	MN\$	1 006	1 955	719	1 227	11,6	87,1	169,3	62,2	106,3
	2010	Ago.-nov.	MN\$	1 147	2 100	819	1 330	12,7	90,4	165,6	64,6	104,9
Nicaragua	1993	21 feb.-12 jun.	C\$	167	334	129	225	4,6	36,6	73,3	28,2	49,4
	1997	Octubre	C\$	247	493	9,8	25,3	50,5
	1998	15 abr.-31 ago.	C\$	275	550	212	370	10,4	26,4	52,7	20,3	35,5
	2001	30 abr.-31 jul.	C\$	369	739	284	498	13,4	27,6	55,2	21,3	37,2
	2005	Jul.-oct.	C\$	491	981	378	661	16,9	29,1	58,2	22,4	39,2
Panamá	1991	Agosto	B	35,0	70,1	1,0	35,0	70,1
	1999	Julio	B	40,7	81,4	1,0	40,7	81,4
	2008	Julio	B	54,8	103,1	42,4	70,5	1,0	54,8	103,1	42,4	70,5
	2009	Julio	B	57,4	105,8	44,5	72,6	1,0	57,4	105,8	44,5	72,6
	2010	Julio	B	59,2	109,3	45,9	74,9	1,0	59,2	109,3	45,9	74,9
Paraguay	1990 ^d	Jun., jul., ago.	G	43 242	86 484	1 207,8	35,8	71,6
	1999	Jul.-dic.	G	138 915	277 831	106 608	186 565	3 311,4	42,0	83,9	32,2	56,3
	2008	Oct.-dic.	G	295 998	562 817	226 691	379 950	4 712,7	62,8	119,4	48,1	80,6
	2009	Oct.-dic.	G	312 371	580 796	239 191	393 347	4 786,9	65,3	121,3	50,0	82,2
	2010	Oct.-dic.	G	348 002	628 577	266 431	427 538	4 724,3	73,7	133,1	56,4	90,5
Perú	1997	4 ^o trimestre	N\$	103	192	83	128	2,7	42,2	84,3	31,6	55,3
	1999	4 ^o trimestre	N\$	109	213	89	141	3,5	31,2	61,2	25,5	40,5
	2008	4 ^o trimestre	N\$	146	280	128	194	3,1	47,3	90,6	41,5	62,9
	2009	4 ^o trimestre	N\$	150	286	133	203	2,9	52,1	99,3	46,2	70,5
	2010	4 ^o trimestre	N\$	155	293	137	208	2,8	55,3	104,8	48,9	74,4
República Dominicana	2002	Septiembre	RD\$	793	1 569	714	1 285	18,8	42,2	83,5	38,0	68,4
	2008	Septiembre	RD\$	2 091	4 010	1 882	3 263	35,0	59,7	114,5	53,8	93,2
	2009	Septiembre	RD\$	2 080	3 933	1 872	3 206	36,2	57,5	108,6	51,7	88,6
	2010	Septiembre	RD\$	2 204	4 152	2 062	3 465	37,1	59,4	111,8	55,5	93,3
Uruguay	1990	2 ^o semestre	NUr\$	41 972	83 944	1 358,0	30,9	61,8
	1999	Año	\$	640	1 280	11,3	56,5	112,9
	2008	Año	\$	1 588	2 957	1 223	2 013	21,0	75,8	141,1	58,4	96,1
	2009	Año	\$	1 652	3 095	1 298	2 148	22,6	73,2	137,1	57,5	95,2
	2010	Año	\$	1 801	3 370	1 387	2 293	20,1	89,8	168,0	69,1	114,3
Venezuela (República Bolivariana de)	1990	2 ^o semestre	Bs	1 924	3 848	1 503	2 630	49,4	39,0	77,9	30,4	53,2
	1999 ^e	2 ^o semestre	Bs	48 737	95 876	626,3	77,8	153,1
	2002 ^e	2 ^o semestre	Bs	80 276	154 813	1 161,0	69,2	133,4
	2008 ^e	2 ^o semestre	Bs	301 540	525 958	2 147,0	140,5	245,0
	2010 ^e	2 ^o semestre	Bs	515 529	865 826	2 582,0	199,7	335,3

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

^a Monedas nacionales:

Argentina: (A) Austral; (\$) Peso
 Bolivia (Estado Plurinacional de): (Bs) Boliviano
 Brasil: (Cr\$) Cruzeiro; (R\$) Real
 Chile: (Ch\$) Peso
 Colombia: (Col\$) Peso
 Costa Rica: (¢) Colón
 Ecuador: (S/.) Sucre período 1990-2001. Desde 2002, dólar estadounidense (US\$).
 El Salvador: (¢) Colón
 Guatemala: (Q) Quetzal

^b Serie "rf" del Fondo Monetario Internacional.^c Gran Buenos Aires.^d Asunción.^e Total nacional.

Honduras: (L) Lempira
 México: (\$) Peso; (MN\$) Nuevo Peso
 Nicaragua: (C\$) Córdoba
 Panamá: (B./) Balboa
 Paraguay: (G./) Guaraní
 Perú: (N\$) Peso
 República Dominicana: (RD\$) Peso
 Uruguay: (NUr\$) Nuevo Peso; (\$) Peso
 Venezuela (República Bolivariana de): (Bs) Bolívar

Cuadro A-6
**AMÉRICA LATINA: TASA DE PARTICIPACIÓN DE HOMBRES Y MUJERES EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA,
 SEGÚN TRAMOS DE EDAD, 1990-2010**

País	Año	Edad									
		Hombres					Mujeres				
		Total	15 a 24 años	25 a 34 años	35 a 49 años	50 años y más	Total	15 a 24 años	25 a 34 años	35 a 49 años	50 años y más
Argentina ^a	1999	74	53	94	97	59	44	36	62	61	27
	2002	72	48	93	96	60	46	35	64	67	27
	2006	75	54	94	96	64	50	38	67	69	34
	2009	74	51	93	96	61	49	34	68	70	33
	2010	74	50	94	96	61	48	33	68	68	32
Bolivia (Estado Plurinacional de)	1997	82	60	94	99	83	60	46	66	73	56
	1999	81	59	94	98	82	62	48	67	75	61
	2002	83	64	94	98	85	62	46	72	75	58
	2007	82	61	94	99	82	62	44	69	77	62
Brasil	1990	84	81	96	95	63	44	47	54	52	22
	1999	82	75	95	94	64	54	52	67	66	33
	2002	81	73	94	94	63	56	53	69	68	33
	2008	80	72	95	94	63	58	54	73	71	36
	2009	80	71	95	94	62	58	54	74	72	36
Chile	1990	74	51	94	95	58	33	27	44	42	18
	1998	75	46	93	96	64	39	30	54	50	23
	2003	73	42	92	96	64	42	30	58	56	27
	2006	73	43	92	95	65	43	30	61	59	29
	2009	71	43	91	94	62	42	30	64	59	28
Colombia	1991	85	71	97	98	76	44	40	57	52	25
	1999	81	64	97	97	71	50	44	66	63	26
	2008	79	58	95	96	68	51	39	67	66	32
	2009	81	61	96	97	71	54	43	70	70	36
	2010	81	62	97	97	72	56	44	73	72	38
Costa Rica	1990	83	74	96	96	64	33	35	41	39	12
	1999	82	68	96	96	64	39	37	48	49	18
	2008	78	60	96	97	66	45	38	62	57	25
	2009	77	58	96	96	64	45	36	62	58	27
	2010	76	57	95	95	63	43	34	62	58	26
Cuba ^b	2002	65	40	82	86	47	35	19	46	54	18
	2008	68	43	89	94	48	41	31	59	62	20
Ecuador	2004	84	66	97	98	79	56	48	67	68	44
	2007	83	64	96	98	81	54	42	64	67	45
	2008	82	62	96	98	78	52	40	63	65	42
	2009	80	60	95	98	77	51	39	63	65	43
	2010	78	55	94	97	75	48	34	63	62	40
El Salvador	1995	82	70	95	96	75	42	32	55	57	29
	1999	78	65	93	94	70	44	34	58	59	31
	2001	79	67	93	95	70	44	33	59	61	32
	2009	79	63	95	96	71	46	32	61	63	34
	2010	79	61	95	96	71	46	31	60	62	35
Guatemala	1989	90	82	98	98	84	28	28	32	32	22
	1998	88	79	97	98	84	46	41	49	55	38
	2002	91	87	97	99	85	48	44	53	57	38
	2006	88	80	97	98	84	47	41	54	57	39
Honduras	1990	87	78	96	97	81	32	26	39	42	25
	1999	87	78	98	97	81	44	36	52	57	34
	2007	83	70	95	97	80	40	28	51	52	33
	2009	82	72	93	93	80	42	30	51	56	36
	2010	82	71	92	93	79	43	31	53	58	38

Cuadro A-6 (conclusión)

País	Año	Edad									
		Hombres					Mujeres				
		Total	15 a 24 años	25 a 34 años	35 a 49 años	50 años y más	Total	15 a 24 años	25 a 34 años	35 a 49 años	50 años y más
México	1989	79	64	94	94	73	30	26	38	35	21
	1998	82	68	94	94	73	41	37	48	48	31
	2002	81	65	94	95	75	43	34	51	54	32
	2008	81	65	96	97	71	45	36	55	58	32
	2010	81	64	96	97	70	43	34	55	57	30
Nicaragua	1993	77	62	89	91	70	36	24	47	51	26
	1998	85	77	95	94	77	43	31	56	56	31
	2001	86	79	97	96	77	46	36	55	61	36
	2005	84	74	95	95	79	44	32	53	59	34
Panamá	2002	80	63	97	97	67	45	34	61	61	24
	2008	82	67	98	98	69	47	34	62	65	31
	2009	81	65	97	97	69	48	34	63	65	34
	2010	80	63	98	97	69	48	33	63	65	33
Paraguay	1999	85	73	96	96	80	48	39	59	60	38
	2001	85	76	96	97	77	53	46	64	64	42
	2008	85	73	97	97	78	55	46	65	67	44
	2009	85	77	96	96	76	56	50	67	67	45
	2010	83	71	96	97	75	54	44	66	67	42
Perú	1997	85	70	97	98	83	64	56	74	76	53
	2001	79	61	92	95	75	59	47	69	72	48
	2008	84	68	94	97	80	66	55	75	78	57
	2009	84	68	94	97	81	66	55	75	80	58
	2010	83	67	94	97	80	67	55	75	80	60
República Dominicana	2002	75	54	91	94	68	39	29	54	54	22
	2008	75	56	90	93	66	40	29	52	57	24
	2009	73	50	90	93	66	39	26	53	56	24
	2010	72	50	89	92	65	41	29	57	58	27
Uruguay	2007	75	64	96	97	58	54	46	76	77	35
	2008	75	61	95	96	59	54	45	78	78	36
	2009	75	61	96	97	60	55	45	79	78	36
	2010	75	61	95	97	59	55	45	79	80	36
Venezuela (República Bolivariana de)	1990	79	59	93	96	74	35	23	48	49	20
	1999	83	66	97	97	74	47	35	60	63	30
	2008	79	56	95	97	72	50	31	65	69	37
	2009	79	56	94	97	72	51	31	66	70	37
	2010	78	54	95	97	71	50	29	66	71	37

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de encuestas de hogares de los respectivos países.

^a Total urbano.

^b Oficina Nacional de Estadística (ONE) de Cuba, sobre la base de tabulaciones de la Encuesta Nacional de Ocupación.

Cuadro A-7
**AMÉRICA LATINA: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA OCUPADA,
 SEGÚN INSERCIÓN LABORAL, 1990-2010**
(Población de 15 años y más, en porcentajes)

País	Año	Empleadores	Asalariados					Trabajadores por cuenta propia y familiares no remunerados	
			Total	Sector público	Sector privado				Total ^b
					Total ^a	Profesionales y técnicos	No profesionales ni técnicos		
Argentina ^c	1999	4,4	72,6	15,5	57,1	10,7	46,3	23,0	
	2002	4,0	72,0	21,7	50,3	10,5	39,8	24,0	
	2006	4,1	75,8	16,2	59,5	9,4	50,2	20,1	
	2009	4,4	75,9	15,9	60,0	10,3	49,7	19,7	
	2010	4,5	76,4	16,0	60,4	10,9	49,5	19,1	
Bolivia (Estado Plurinacional de)	1997	5,2	28,5	6,7	21,8	3,7	18,1	66,3	
	1999	2,8	29,8	6,6	23,2	4,1	19,1	67,4	
	2002	4,3	30,4	6,7	23,7	3,3	20,4	65,3	
	2007	5,2	36,2	8,3	27,9	5,4	22,5	58,5	
Brasil	1990	4,7	65,5	...	65,5	17,2	48,2	29,9	
	1999	4,1	58,8	11,1	47,7	8,8	39,0	37,1	
	2002	4,2	61,9	11,0	50,9	7,1	43,8	33,8	
	2008	4,5	65,8	11,3	54,5	8,0	46,5	29,7	
	2009	4,3	66,4	11,6	54,8	8,2	46,6	29,3	
Chile	1990	2,6	73,0	...	73,0	11,4	61,6	24,5	
	1998	4,0	74,6	...	74,6	15,3	59,3	21,4	
	2003	3,9	74,4	10,6	63,8	11,0	52,8	21,6	
	2006	3,1	75,7	9,8	65,9	10,3	55,6	21,3	
	2009	3,1	76,3	11,6	64,7	12,6	52,1	20,6	
Colombia	1991	5,1	58,6	6,6	52,0	3,9	48,0	36,3	
	1999	4,0	53,6	6,8	46,7	4,3	42,5	42,4	
	2008	4,8	49,4	5,2	44,1	4,7	39,4	45,8	
	2009	5,0	47,2	4,6	42,7	4,1	38,5	47,8	
	2010	5,0	46,3	4,2	42,1	4,8	37,4	48,6	
Costa Rica	1990	5,3	70,0	17,0	53,0	3,6	49,4	24,7	
	1999	8,1	71,0	13,0	58,0	5,8	52,2	20,9	
	2008	7,5	72,9	14,1	58,7	12,9	45,8	19,6	
	2009	7,2	72,7	15,6	57,1	12,3	44,8	20,1	
	2010	3,5	76,1	11,1	65,0	14,5	50,5	20,4	
Ecuador	2004	5,6	49,4	7,8	41,6	6,0	35,6	44,9	
	2007	5,0	52,7	7,3	45,4	6,4	39,0	42,3	
	2008	5,2	54,9	8,0	46,8	6,4	40,4	40,0	
	2009	4,1	53,4	8,1	45,3	6,0	39,3	42,5	
	2010	3,4	54,8	9,3	45,5	6,1	39,4	41,8	
El Salvador	1995	6,1	56,2	8,7	47,5	4,6	42,8	37,7	
	1999	4,4	59,8	9,1	50,7	6,1	44,6	35,8	
	2001	4,6	56,4	8,5	48,0	5,6	42,4	39,0	
	2009	4,1	55,4	7,6	47,8	5,8	42,1	40,5	
	2010	3,9	56,5	7,7	48,8	5,4	43,4	39,6	
Guatemala	1989	1,5	48,6	7,3	41,3	2,8	38,4	49,9	
	1998	3,2	49,8	4,5	45,3	4,8	40,6	47,1	
	2002	6,5	42,3	3,3	39,0	4,2	34,8	51,2	
	2006	3,5	48,5	5,0	43,5	5,8	37,6	48,1	

Cuadro A-7 (conclusión)

País	Año	Empleadores	Asalariados					Trabajadores por cuenta propia y familiares no remunerados
			Total	Sector público	Sector privado		Total ^b	
					Total ^a	Profesionales y técnicos		
Honduras	1990	1,0	48,2	8,5	39,7	2,4	37,3	50,8
	1999	4,6	46,1	6,6	39,6	4,1	35,5	49,3
	2007	2,3	47,5	6,5	41,0	6,6	34,4	50,2
	2009	2,3	45,6	6,0	39,6	5,9	33,6	52,1
	2010	2,5	43,1	6,0	37,1	5,9	31,2	54,4
México	1989	3,0	67,0	...	67,0	6,2	60,8	30,0
	1998	4,7	62,0	10,9	51,1	4,3	46,8	33,4
	2002	3,9	65,1	11,2	53,9	4,5	49,4	31,0
	2008	5,0	71,9	11,3	60,6	6,5	54,1	23,1
	2010	9,6	72,9	11,0	57,4	9,5	47,9	17,5
Nicaragua	1993	0,5	50,9	14,2	36,7	4,2	32,5	48,6
	1998	3,6	52,4	...	52,4	9,3	43,1	44,1
	2001	5,0	49,6	7,6	42,0	5,1	37,0	45,4
	2005	4,5	48,5	6,9	41,5	4,8	36,8	47,1
Panamá	2002	2,9	62,0	16,1	45,9	6,1	39,8	35,1
	2008	3,1	65,2	14,6	50,7	6,8	43,9	31,6
	2009	3,1	63,9	14,6	49,2	7,0	42,2	33,1
	2010	3,2	65,2	15,6	49,6	7,3	42,3	31,6
Paraguay	1999	5,2	46,4	8,0	38,4	3,2	35,2	48,4
	2001	5,8	44,9	7,1	37,8	4,7	33,1	49,3
	2008	5,2	50,8	9,2	41,6	5,4	36,2	44,1
	2009	5,5	48,1	8,4	39,7	4,5	35,2	46,3
	2010	5,1	51,6	8,8	42,7	4,5	38,3	43,4
Perú	1997	5,6	41,8	8,6	33,3	5,2	28,0	52,5
	2001	5,0	41,0	7,8	33,2	4,4	28,8	53,9
	2008	5,5	42,8	8,1	34,7	5,5	29,2	51,7
	2009	5,5	42,9	8,2	34,7	5,6	29,1	51,7
	2010	5,8	42,7	8,1	34,7	5,5	29,1	51,5
República Dominicana	2002	3,2	53,1	12,0	41,1	7,0	34,1	43,8
	2008	4,0	51,9	11,2	40,7	8,3	32,4	44,1
	2009	4,8	50,8	12,2	38,6	7,1	31,6	44,3
	2010	3,7	50,4	13,0	37,4	6,8	30,5	45,9
Uruguay	2007	4,9	69,8	15,0	54,8	6,5	48,3	25,3
	2008	4,8	70,1	15,0	55,2	6,6	48,6	25,0
	2009	4,8	70,4	14,5	56,0	6,9	49,1	24,7
	2010	4,8	71,7	14,6	57,1	7,1	50,0	23,5
Venezuela (República Bolivariana de)	1990	7,5	66,6	20,0	46,6	5,0	41,6	25,9
	1999	5,2	57,8	15,3	42,6	4,9	37,7	37,0
	2002	5,4	54,6	13,9	40,6	4,0	36,7	40,0
	2008	4,1	57,8	18,1	39,8	5,3	34,5	38,1
	2010	3,4	56,5	19,1	37,4	5,6	31,8	40,0

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de encuestas de hogares de los respectivos países.

^a En las cifras del Brasil (1990), Chile (1990, 1994 y 1998), México (1989, 2004-2006) y Nicaragua (1998) se incluye a los asalariados del sector público.

^b Incluye profesionales y técnicos.

^c Total urbano.

Cuadro A-8
AMÉRICA LATINA: POBLACIÓN URBANA OCUPADA EN SECTORES DE BAJA PRODUCTIVIDAD DEL MERCADO DE TRABAJO, 1990-2010
(En porcentajes del total de la población urbana ocupada)

País	Año	Total	Microempresas ^a				Empleo doméstico	Trabajadores independientes no calificados ^b		
			Empleadores	Asalariados		Total ^c		Industria y construcción	Comercio y servicios	
				Total	Profesionales y técnicos					No profesionales ni técnicos
Argentina ^d	1990	44,1	3,8	11,7	0,4	11,4	5,7	23,0	6,9	16,1
	1999	40,1	3,2	15,1	1,4	13,6	5,3	16,5	5,0	11,5
	2006	40,2	2,7	14,7	1,0	13,3	7,5	15,2	5,0	10,1
	2009	38,9	3,0	14,8	1,4	13,2	6,6	14,4	5,0	8,9
	2010	37,8	3,0	14,4	1,6	12,6	6,4	14,0	4,9	8,5
Bolivia (Estado Plurinacional de) ^e	1989	56,5	...	10,1	0,9	9,2	5,2	41,2	9,8	30,0
	1999	63,0	2,6	12,9	1,0	11,7	2,7	44,9	12,1	30,2
	2002	66,0	3,4	14,7	0,9	13,0	3,7	44,2	12,4	28,2
	2004	71,0	4,2	19,2	1,5	16,7	4,6	42,9	10,9	28,2
	2007	61,8	5,4	15,5	1,6	13,6	5,3	35,5	8,4	24,0
Brasil ^f	1990	47,9	...	20,9	5,4	15,5	5,8	21,3	3,5	15,7
	1999	46,7	2,3	10,1	1,7	8,3	8,5	25,8	5,1	16,1
	2002	44,4	2,3	10,6	1,1	9,5	8,6	23,0	6,7	12,2
	2008	40,1	2,4	10,1	1,1	9,1	7,8	19,9	5,9	10,6
	2009	41,0	2,4	10,3	1,2	9,2	8,4	19,8	6,1	10,6
Chile	1990	38,9	0,8	10,3	0,9	9,4	7,0	20,9	5,7	14,0
	1998	34,2	2,6	10,7	1,0	9,7	5,8	15,1	4,1	10,0
	2003	31,9	2,4	8,0	0,8	7,1	6,5	14,9	4,9	9,1
	2006	30,6	1,7	7,2	0,7	6,5	5,8	15,9	4,8	9,9
	2009	30,0	1,1	7,1	0,8	6,3	5,0	16,8	4,1	11,7
Colombia	1991	5,3	27,1	6,4	19,9
	1999	5,2	35,5	7,5	26,6
	2008	58,7	3,9	11,5	0,6	10,9	4,0	39,2	8,3	28,9
	2009	59,9	4,1	11,2	0,5	10,7	4,2	40,4	8,2	29,7
	2010	59,7	4,1	10,8	0,6	10,3	4,1	40,7	8,2	30,1
Costa Rica	1990	37,3	4,4	11,1	0,8	9,6	4,3	17,5	6,4	10,1
	1999	41,9	6,0	13,8	1,4	11,7	5,1	17,1	4,4	11,8
	2008	37,2	5,7	12,1	1,6	10,0	4,4	15,0	3,4	11,0
	2009	36,5	5,5	11,7	1,9	9,4	4,5	14,8	3,6	10,5
	2010	36,0	2,4	12,2	1,8	10,2	7,1	14,3	2,9	10,4
Ecuador	1990	54,5	3,7	12,6	0,6	11,1	4,3	34,0	7,8	23,9
	1999	57,4	7,2	14,9	1,0	13,8	5,4	30,0	5,6	22,4
	2008	56,9	4,9	16,0	1,2	14,9	4,2	31,8	5,2	24,5
	2009	56,4	3,6	15,9	1,1	14,8	4,1	32,8	5,6	24,6
	2010	54,9	3,1	15,8	0,9	14,9	3,4	32,5	5,6	24,6
El Salvador	1995	50,8	4,8	10,1	0,2	9,8	4,3	31,6	8,4	20,6
	1999	51,5	4,2	14,3	0,7	13,4	4,2	28,8	6,5	19,8
	2001	53,6	4,5	14,2	0,8	13,4	4,2	30,7	6,4	22,3
	2009	56,4	4,0	14,7	0,8	13,8	4,6	33,0	6,1	23,7
	2010	55,0	3,9	14,8	0,9	13,8	3,8	32,5	6,0	23,5
Guatemala	1989	53,7	2,1	14,9	0,8	13,7	6,6	30,0	7,2	14,8
	1998	56,0	3,7	24,5	3,0	19,2	3,7	24,0	7,1	12,1
	2002	56,9	5,9	14,1	1,1	12,2	3,9	33,0	8,5	19,3
	2006	55,9	4,5	16,1	1,5	13,7	3,9	31,4	7,5	18,4
Honduras	1990	52,6	1,1	13,7	0,7	12,9	6,5	31,3	8,7	18,5
	1999	53,4	5,3	12,0	0,7	11,3	4,6	31,5	7,1	20,7
	2007	42,9	2,9	10,3	1,1	9,2	3,8	25,8	9,1	12,7
	2009	46,8	3,3	12,7	1,2	11,5	3,6	27,2	9,6	13,1
	2010	50,8	3,2	12,8	1,5	11,3	4,0	30,8	9,4	16,6

Cuadro A-8 (conclusión)

País	Año	Total	Microempresas ^a				Empleo doméstico	Trabajadores independientes no calificados ^b		
			Empleadores	Asalariados				Total ^c	Industria y construcción	Comercio y servicios
				Total	Profesionales y técnicos	No profesionales ni técnicos				
México ^g	1989	2,7	18,6	2,9	12,5
	1998	44,6	3,6	16,9	1,0	14,8	4,1	20,0	3,1	16,2
	2002	46,8	3,3	18,3	1,3	16,9	4,0	21,2	4,1	16,5
	2008	44,4	3,5	21,3	1,8	18,4	4,4	15,2	2,7	12,1
	2010	45,1	6,4	22,9	3,0	17,7	3,7	12,1	2,1	9,8
Nicaragua	1993	48,9	0,6	13,5	1,7	11,8	6,3	28,5	7,7	17,0
	1998	59,4	3,1	16,3	1,8	14,5	6,2	33,8	4,4	25,4
	2001	58,6	3,8	17,4	1,4	15,5	4,2	33,2	5,5	24,1
	2005	57,6	4,7	14,8	0,7	14,1	4,1	34,0	7,8	22,4
Panamá	1991	32,3	1,8	5,9	0,8	5,1	7,4	17,2	3,9	11,5
	1999	33,9	2,2	7,0	0,8	6,2	6,0	18,8	4,3	13,7
	2008	35,2	2,7	7,9	0,9	7,0	6,3	18,4	3,8	13,8
	2009	35,0	2,5	7,7	0,9	6,9	5,5	19,2	4,3	14,0
	2010	34,3	2,5	8,1	1,2	7,0	5,1	18,6	4,1	13,8
Paraguay	1990 ^h	54,9	7,0	16,6	1,1	15,4	10,0	21,4	5,3	15,5
	1999	58,9	5,0	16,3	0,9	14,3	9,0	28,6	5,3	20,7
	2008	54,7	5,4	15,0	1,4	12,7	9,0	25,3	4,6	18,1
	2009	59,8	5,1	19,4	1,7	15,8	8,4	26,9	5,4	18,0
	2010	54,3	4,8	15,8	1,3	13,5	9,5	24,2	4,7	17,1
Perú	1997	60,3	4,9	13,0	1,3	11,7	4,3	38,2	5,4	28,6
	2001	63,0	4,1	14,5	1,1	13,4	5,2	39,3	5,0	28,7
	2008	59,5	4,6	12,9	1,0	11,9	4,4	37,6	5,0	27,9
	2009	58,2	4,9	12,1	1,0	11,1	4,3	36,9	4,9	27,7
	2010	58,9	5,2	12,1	1,0	11,1	4,1	37,6	4,8	28,4
República Dominicana	2002	46,1	2,4	6,9	0,7	6,2	4,3	32,5	7,4	21,8
	2008	49,8	3,4	5,7	0,9	4,8	5,6	35,1	8,2	22,9
	2009	49,8	3,5	5,9	0,6	5,3	5,8	34,6	7,6	22,9
	2010	50,2	3,1	5,3	0,5	4,8	5,4	36,4	7,6	24,3
Uruguay	1990	35,2	2,8	8,1	1,3	6,4	6,9	17,4	5,5	11,6
	1999	39,8	2,1	9,6	0,5	9,1	7,5	20,6	7,0	12,6
	2008	39,1	2,9	11,9	0,6	11,2	7,4	17,0	6,0	9,5
	2009	38,8	3,0	11,6	0,6	11,1	7,6	16,6	5,9	9,2
	2010	38,0	2,9	11,9	0,6	11,3	7,5	15,7	5,7	8,6
Venezuela (República Bolivariana de) ⁱ	1990	36,7	4,9	8,6	0,2	8,2	1,9	21,3	4,2	15,3
	1999	53,4	3,9	12,2	0,5	11,7	2,1	35,2	6,7	23,9
	2008	51,2	3,4	10,5	0,6	9,9	1,8	35,6	6,9	24,2
	2009	51,7	3,2	10,4	0,6	9,8	1,5	36,5	7,6	24,5
	2010	51,9	2,8	10,1	0,7	9,4	1,4	37,5	7,6	25,2

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de encuestas de hogares de los respectivos países.

^a Se refiere a los establecimientos que ocupan hasta a cinco personas. En los casos de Bolivia (Estado Plurinacional de) (1999 y 2002), Chile (1996), El Salvador, Panamá (hasta 2002), la República Dominicana, el Uruguay (1990) y Venezuela (República Bolivariana de) se incluye a los que tienen hasta cuatro empleados.

^b Se refiere a trabajadores por cuenta propia y familiares no remunerados sin calificación profesional ni técnica.

^c Incluye a los ocupados en agricultura, silvicultura, caza y pesca.

^d Gran Buenos Aires.

^e Ocho ciudades capitales de departamento y El Alto.

^f En 1990 se clasificó bajo el encabezamiento "Microempresa" a los asalariados sin contrato de trabajo. Desde 1993 esta categoría comprende a los asalariados en establecimientos que ocupan hasta a cinco personas.

^g En las encuestas correspondientes a 1989 y 1994 no se dispuso de información sobre el tamaño de los establecimientos en que trabajan los asalariados.

^h Área metropolitana de Asunción.

ⁱ A partir de 1997 el diseño muestral de la encuesta no permite el desglose urbano-rural. Por lo tanto, las cifras corresponden al total nacional.

Cuadro A-9
**AMÉRICA LATINA: TASAS DE DESEMPLEO ABIERTO, SEGÚN SEXO Y EDAD, EN ZONAS URBANAS,
 ALREDEDOR DE 1990, 1999, 2008, 2009 Y 2010^a**

País	Sexo	Grupos de edad																									
		Total					15 a 24 años					25 a 34 años					35 a 44 años					45 años y más					
		1990	1999	2008	2009	2010	1990	1999	2008	2009	2010	1990	1999	2008	2009	2010	1990	1999	2008	2009	2010	1990	1999	2008	2009	2010	
Argentina (Gran Buenos Aires)	Total	5,9	14,7	...	9,1	8,2	13,0	24,3	...	21,8	20,0	4,9	12,0	...	8,3	7,1	4,1	11,6	...	5,7	5,1	3,8	12,9	...	6,0	5,6	
	Hombres	5,7	13,4	...	8,1	6,7	11,5	22,8	...	19,5	16,6	5,0	11,3	...	7,5	5,7	3,9	8,0	...	4,4	3,4	4,2	12,7	...	5,6	5,0	
	Mujeres	6,4	16,5	...	10,4	10,2	15,6	26,3	...	25,1	24,8	4,9	13,0	...	9,3	9,1	4,3	16,1	...	7,5	7,3	3,0	13,2	...	6,6	6,5	
Bolivia (Estado Plurinacional de)	Total	9,2	7,1	7,7	17,5	15,2	19,2	8,5	6,3	8,6	5,2	3,8	2,6	6,7	3,7	2,5	
	Hombres	9,4	6,0	6,3	18,5	12,5	16,4	7,6	4,8	6,2	5,6	2,3	2,5	8,5	4,9	2,1	
	Mujeres	8,9	8,5	9,4	16,4	18,5	23,2	9,8	8,2	11,5	4,5	5,5	2,8	3,9	1,8	3,2	
Brasil	Total	4,5	11,4	8,0	9,2	...	8,3	21,7	17,4	19,7	4,4	10,5	8,0	9,4	...	2,4	7,0	4,9	5,8	...	1,5	5,5	3,4	4,2	...
	Hombres	4,8	9,4	5,9	7,0	...	8,7	18,4	13,8	15,9	4,7	8,0	5,2	6,4	...	2,8	5,5	3,2	4,0	...	2,0	5,3	2,8	3,3	...
	Mujeres	3,9	14,1	10,5	12,0	...	7,7	26,2	22,0	24,5	3,8	13,8	11,3	12,8	...	1,7	9,0	6,8	7,9	...	0,6	5,8	4,1	5,3	...
Chile	Total	8,7	10,1	...	10,5	...	17,9	21,9	...	25,5	8,3	9,9	...	11,5	...	5,1	7,3	...	7,4	...	5,3	6,3	...	5,8	...
	Hombres	8,1	9,3	...	9,2	...	17,0	20,5	...	23,3	7,4	9,2	...	10,6	...	4,6	6,3	...	6,1	...	5,6	6,6	...	5,0	...
	Mujeres	9,7	11,2	...	12,3	...	19,3	23,8	...	28,5	9,7	10,9	...	12,6	...	5,8	8,9	...	9,1	...	4,7	5,6	...	7,1	...
Colombia	Total	9,3	19,2	12,1	13,2	12,7	19,7	36,6	24,6	26,3	25,7	8,3	17,8	12,5	12,9	12,7	4,2	13,2	8,3	9,4	9,0	3,8	10,3	7,0	8,1	7,7	
	Hombres	6,7	16,2	10,2	11,1	10,6	15,3	32,0	21,2	22,6	22,2	5,5	14,0	9,9	9,8	9,5	2,8	10,5	6,3	6,8	6,6	3,7	10,6	7,1	8,3	7,5	
	Mujeres	13,0	23,0	14,4	15,7	15,2	24,8	41,6	28,8	30,9	30,0	11,8	22,1	15,6	16,5	16,3	6,2	16,4	10,7	12,3	11,5	3,9	9,7	7,0	7,9	7,9	
Costa Rica	Total	5,3	6,1	4,8	7,7	7,1	10,5	14,8	11,3	18,0	17,1	4,9	5,3	5,1	7,7	5,9	2,5	3,0	2,5	4,9	5,3	2,9	2,3	1,9	3,2	3,5	
	Hombres	4,9	5,3	4,3	6,5	6,0	9,8	14,8	10,8	16,0	15,6	4,1	3,8	3,8	6,5	3,9	2,3	2,1	2,1	3,7	4,3	3,1	1,9	1,9	2,7	3,2	
	Mujeres	6,2	7,4	5,6	9,3	8,8	11,6	14,9	12,0	21,0	19,3	6,2	7,4	6,6	9,4	8,4	2,8	4,2	3,0	6,2	6,6	2,3	2,9	2,0	4,2	4,0	
Cuba ^b	Total	5,4	6,3	1,6	3,8	2,2	1,5	0,7
	Hombres	3,6	4,3	1,5	3,5	1,9	1,4	0,7
	Mujeres	8,5	9,6	1,8	4,1	2,6	1,6	0,6
Ecuador	Total	6,1	14,2	7,3	7,9	6,1	13,5	25,9	18,0	17,9	15,3	6,4	13,6	6,7	9,6	7,0	2,7	9,0	3,9	4,3	3,9	1,3	8,3	3,9	3,5	2,7	
	Hombres	4,2	10,5	5,6	6,5	5,3	11,2	20,0	15,2	15,3	13,9	3,2	8,0	4,8	7,1	4,9	1,7	5,5	1,6	2,9	3,0	1,3	8,6	3,3	3,3	2,8	
	Mujeres	9,2	19,5	9,6	9,8	7,2	17,2	33,9	22,1	21,8	17,4	11,3	21,3	9,2	13,0	9,7	4,5	13,6	6,7	6,0	5,0	1,4	7,7	4,7	3,7	2,6	
El Salvador	Total	...	6,9	...	7,1	6,8	...	13,9	...	15,5	15,4	...	6,1	...	7,0	6,8	...	4,4	...	5,1	3,7	...	3,8	...	3,5	3,7	
	Hombres	...	8,9	...	9,1	8,3	...	16,2	...	17,0	15,7	...	7,0	...	8,5	7,4	...	6,0	...	6,6	5,2	...	6,1	...	6,0	6,2	
	Mujeres	...	4,6	...	4,9	5,1	...	10,6	...	13,5	14,9	...	5,1	...	5,4	6,2	...	2,6	...	3,4	2,0	...	1,0	...	0,7	0,9	
Guatemala	Total	3,5	2,8	7,1	4,8	2,9	3,8	1,6	1,8	1,2	0,9	
	Hombres	3,3	3,6	7,2	6,0	2,6	4,5	1,5	2,4	1,4	1,3	
	Mujeres	3,8	1,9	7,0	3,4	3,4	2,8	1,8	1,0	0,9	0,4	
Honduras	Total	6,9	5,3	3,9	5,0	6,5	11,2	9,0	7,6	9,8	12,7	7,0	4,7	3,7	5,5	7,3	4,3	2,9	2,3	2,9	3,7	3,7	3,0	1,8	1,6	2,4	
	Hombres	7,6	6,2	4,0	4,7	5,9	11,5	10,3	7,4	8,3	10,6	6,6	5,3	3,6	4,7	5,9	6,0	3,6	2,4	3,1	3,5	5,3	4,3	2,5	2,4	3,2	
	Mujeres	5,9	4,0	3,7	5,3	7,2	10,7	7,4	7,9	12,0	15,7	7,6	4,1	4,0	6,5	9,0	2,0	2,2	2,2	2,7	3,9	0,7	1,1	0,7	0,6	1,4	
México	Total	3,3	3,2	4,8	...	6,3	8,1	7,4	10,7	...	12,8	2,4	2,8	4,6	...	6,2	0,7	1,5	2,5	...	3,6	0,8	1,1	2,8	...	4,4	
	Hombres	3,4	3,6	5,7	...	7,6	8,4	8,1	11,8	...	14,3	2,5	3,1	5,1	...	6,9	0,9	1,8	2,8	...	4,2	1,0	1,5	4,1	...	6,3	
	Mujeres	3,1	2,6	3,5	...	4,3	7,6	6,2	9,0	...	10,1	2,0	2,3	3,9	...	5,4	0,2	0,8	2,0	...	2,9	0,1	0,4	0,7	...	1,3	
Nicaragua	Total	...	13,8	20,9	11,0	12,3	10,5	
	Hombres	...	14,0	17,9	10,3	14,3	12,9	
	Mujeres	...	13,6	25,8	11,7	9,9	7,0	

Cuadro A-9 (conclusión)

País	Sexo	Grupos de edad																								
		Total					15 a 24 años					25 a 34 años					35 a 44 años					45 años y más				
		1990	1999	2008	2009	2010	1990	1999	2008	2009	2010	1990	1999	2008	2009	2010	1990	1999	2008	2009	2010	1990	1999	2008	2009	2010
Panamá	Total	20,0	13,6	6,5	7,9	7,7	38,8	28,3	16,6	18,8	18,0	21,7	13,5	6,7	8,3	8,5	10,4	8,4	3,6	5,3	5,5	8,1	5,9	2,3	3,6	3,4
	Hombres	17,9	11,4	5,4	6,3	6,5	37,0	24,3	14,1	15,7	15,2	17,8	9,7	4,9	5,6	6,7	8,4	6,5	2,4	3,7	4,9	9,1	6,8	2,3	3,6	2,9
	Mujeres	22,8	16,7	7,9	9,9	9,3	41,0	33,6	20,9	23,8	22,3	26,5	19,0	9,1	11,7	10,9	12,7	10,5	5,0	7,4	6,3	6,4	4,5	2,4	3,6	4,1
Paraguay ^c	Total	6,3	9,1	7,1	8,3	6,9	15,5	16,7	15,2	17,1	15,8	4,8	6,7	5,1	6,0	5,3	2,3	5,9	3,2	3,5	3,1	1,4	6,8	4,5	5,1	3,8
	Hombres	6,2	9,0	6,2	7,9	6,2	14,7	17,3	13,5	16,0	14,0	5,0	5,5	2,7	4,3	3,8	3,2	6,2	2,8	4,3	2,7	2,0	7,5	5,5	5,5	4,1
	Mujeres	6,5	9,2	8,3	8,8	7,8	16,5	16,1	17,4	18,5	18,5	4,7	8,4	8,1	8,1	7,2	1,1	5,4	3,6	2,5	3,6	0,0	5,8	3,3	4,6	3,3
Perú	Total	...	7,3	5,9	5,6	5,0	...	15,3	12,9	12,2	12,2	...	5,5	5,6	5,3	4,6	...	4,1	3,0	3,1	2,4	...	4,5	3,2	3,4	2,7
	Hombres	...	7,0	5,1	5,4	4,4	...	15,3	12,2	12,9	11,5	...	4,7	4,1	4,5	4,0	...	3,8	2,2	2,0	1,5	...	5,0	3,0	3,5	2,1
	Mujeres	...	7,7	6,8	5,9	5,8	...	15,2	13,7	11,4	13,0	...	6,3	7,3	6,3	5,4	...	4,5	3,9	4,3	3,3	...	3,7	3,4	3,1	3,5
República Dominicana	Total	5,1	6,2	5,6	10,5	15,0	10,9	5,9	6,2	5,9	3,8	3,4	4,7	1,2	2,6	2,3
	Hombres	3,8	4,5	4,6	7,1	9,5	8,7	5,4	5,2	4,3	2,1	2,1	4,6	1,2	2,6	2,2
	Mujeres	7,2	8,7	7,0	16,0	24,2	13,9	6,7	7,6	8,0	6,5	5,1	5,0	1,3	2,6	2,5
Uruguay	Total	8,9	11,2	7,8	7,6	7,0	24,4	25,8	21,5	20,8	20,4	8,2	10,0	7,5	7,8	6,6	4,3	7,2	4,8	4,6	4,4	3,5	6,1	3,9	3,8	3,2
	Hombres	7,3	8,6	5,7	5,5	5,2	22,2	21,4	17,6	16,8	16,7	6,0	7,2	4,3	4,7	3,9	2,5	3,7	2,5	2,3	2,5	3,0	4,9	2,8	2,8	2,3
	Mujeres	11,1	14,5	10,4	10,0	9,1	27,5	32,0	26,9	26,2	25,6	11,0	13,5	11,2	11,0	9,4	6,4	11,2	7,4	7,1	6,4	4,4	7,7	5,2	4,9	4,3
Venezuela (República Bolivariana de) ^d	Total	9,6	14,4	6,8	8,0	8,4	17,8	25,8	13,6	16,1	17,2	10,7	14,5	7,3	8,1	9,0	5,6	9,9	4,6	5,5	5,6	4,1	7,8	3,9	5,2	5,0
	Hombres	10,2	13,5	6,4	7,4	7,7	17,8	22,1	12,4	13,7	15,1	11,3	12,6	6,3	6,7	7,2	6,5	9,8	4,3	5,2	5,3	4,9	9,4	4,3	5,6	5,4
	Mujeres	8,2	15,8	7,3	8,9	9,3	17,8	32,5	15,9	20,4	21,2	9,4	17,5	8,6	9,9	11,4	3,9	10,1	5,0	5,8	6,0	1,7	4,6	3,2	4,6	4,5

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de encuestas de hogares de los respectivos países.

^a Los años exactos a los que corresponden las encuestas de cada país figuran en el cuadro A-5.

^b Oficina Nacional de Estadística (ONE) de Cuba; los datos de 1990-1999 corresponden al desempleo total (urbano y rural) y los de 2003-2008, al desempleo urbano; sobre la base de tabulaciones de la Encuesta Nacional de Ocupación.

^c Total urbano, a excepción de 1990, que corresponde al área metropolitana de Asunción.

^d A partir de 1997 el diseño muestral de la encuesta no permite el desglose urbano-rural. Por lo tanto, las cifras corresponden al total nacional.

Cuadro A-10
**AMÉRICA LATINA: INGRESO MEDIO DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA OCUPADA,
 SEGÚN INSERCIÓN LABORAL, ZONAS URBANAS, 1990-2010**
 (En múltiplos de las respectivas líneas de pobreza per cápita)

País	Año	Total	Empleadores	Asalariados							Trabajadores por cuenta propia y familiares no remunerados	
				Total	Sector público	Sector privado				Total ^b	No profesionales ni técnicos	
						Total ^a	Profesionales y técnicos	En establecimientos de más de cinco personas	En establecimientos de hasta cinco personas			Empleo doméstico
Argentina ^c	1990	6,5	20,6	4,7	...	4,7	9,4	4,5	3,6	2,5	8,4	7,6
	1999	7,0	23,8	5,6	6,9	5,3	9,4	4,8	3,5	2,4	8,5	6,5
	2006	6,0	21,0	4,8	5,7	4,6	7,4	4,9	3,4	1,7	7,8	6,6
	2009	9,5	28,6	7,8	11,1	7,2	11,9	7,2	5,0	2,7	12,1	10,1
	2010	10,5	31,4	8,7	11,6	8,1	12,7	8,1	5,8	3,2	13,4	11,0
Bolivia (Estado Plurinacional de)	1989 ^d	4,6	16,6	3,8	4,2	3,6	8,0	3,6	2,7	1,5	4,9	4,5
	1999	3,8	8,2	4,2	4,7	4,0	7,4	3,9	2,5	2,0	2,8	2,7
	2002	3,6	7,3	4,1	5,2	3,8	9,3	3,2	2,4	2,1	2,6	2,4
	2007	3,8	7,7	4,1	5,4	3,7	6,6	3,6	2,5	1,9	2,4	2,3
Brasil	1990 ^e	4,9	16,1	4,2	...	4,2	7,5	3,3	2,5	1,0	4,3	3,9
	1999	4,7	14,8	4,1	6,6	3,5	6,9	3,2	2,1	1,4	4,2	3,7
	2002	4,5	14,3	4,0	6,6	3,4	8,4	3,0	2,1	1,4	3,8	3,0
	2008	5,0	15,0	4,6	7,7	3,9	8,6	3,5	2,4	1,7	4,2	3,4
	2009	5,1	15,0	4,7	7,9	4,0	8,7	3,6	2,6	1,8	4,1	3,3
Chile	1990	4,9	26,2	4,0	...	4,0	7,7	3,6	2,5	1,8	5,7	5,3
	1998	7,8	35,5	6,0	...	6,0	12,6	4,4	3,1	2,4	9,0	6,8
	2003	7,8	38,1	6,0	8,3	5,6	13,1	4,2	3,1	2,6	8,1	6,0
	2006	7,8	31,0	6,5	9,1	6,1	13,7	5,0	3,6	2,6	9,2	6,9
	2009	8,7	38,3	7,1	10,2	6,6	13,2	5,2	3,7	2,9	10,4	7,9
Colombia	1991	2,9	7,4	2,8	3,9	2,5	5,3	2,4	...	1,2	2,7	2,4
	1999	3,4	9,5	3,7	6,3	3,2	6,8	2,8	...	2,1	2,3	2,0
	2008	4,4	12,0	4,4	8,1	3,8	8,7	3,7	2,2	1,9	3,6	2,9
	2009	4,2	10,9	4,2	8,1	3,8	9,0	3,7	2,1	1,8	3,3	2,8
	2010	4,2	10,4	4,3	8,4	3,9	9,2	3,7	2,0	1,9	3,3	2,7
Costa Rica	1990	5,3	6,8	5,4	7,3	4,5	9,0	4,4	3,2	1,5	4,2	3,9
	1999	6,1	10,5	6,0	8,8	5,1	9,7	4,8	3,7	1,8	4,8	4,4
	2008	6,0	12,2	5,9	8,9	5,0	8,5	4,1	3,2	1,7	4,0	3,0
	2009	6,3	10,7	6,3	9,4	5,3	9,6	4,3	3,1	1,7	4,1	3,0
	2010	5,8	10,7	5,9	9,2	5,3	9,8	4,2	3,2	2,1	4,2	3,1
Ecuador	1990	3,1	4,8	3,3	4,1	2,9	6,1	2,9	2,3	0,8	2,3	2,3
	1999	3,1	7,6	2,8	3,8	2,6	5,6	2,6	1,7	0,9	2,2	2,0
	2008	4,1	11,6	3,8	6,4	3,3	5,8	3,1	2,3	1,9	3,1	2,9
	2010	4,2	14,0	4,1	6,7	3,5	6,0	3,4	2,5	2,2	2,9	2,7
El Salvador	1995	3,7	9,2	3,6	5,3	3,2	6,9	2,9	2,1	1,0	2,6	2,5
	1999	4,4	9,6	4,5	6,9	4,0	8,3	3,7	2,4	2,1	3,0	2,8
	2001	4,4	10,5	4,4	6,7	3,9	8,7	3,5	2,3	2,0	3,2	3,0
	2009	3,6	8,3	3,8	6,5	3,3	6,9	2,9	2,0	2,0	2,4	2,2
	2010	3,4	7,4	3,6	6,3	3,0	5,6	3,0	2,0	2,0	2,4	2,2
Guatemala	1989	3,8	17,7	3,1	4,8	2,6	5,2	2,7	1,8	1,4	4,0	3,7
	1998	3,8	16,0	3,3	4,5	3,1	6,3	2,9	1,9	1,3	2,9	2,4
	2002	4,1	11,2	3,6	5,8	3,2	6,5	2,8	1,6	1,7	3,1	2,8
	2006	3,9	17,0	2,8	4,7	2,5	4,9	2,3	1,5	1,3	3,7	3,4
Honduras	1990	3,0	16,4	3,1	4,9	2,6	6,5	2,8	1,6	0,8	2,0	1,8
	1999	2,1	5,1	2,1	2,9	1,9	3,7	2,0	1,2	0,5	1,6	1,5
	2007	2,8	5,8	3,2	5,2	2,7	5,0	2,4	1,5	1,3	1,8	1,4
	2009	2,8	6,0	3,3	5,3	2,8	4,8	2,7	1,6	1,4	1,7	1,5
	2010	2,8	5,0	3,3	5,6	2,8	4,8	2,7	1,5	1,4	1,6	1,3

Cuadro A-10 (conclusión)

País	Año	Total	Empleadores	Asalariados								Trabajadores por cuenta propia y familiares no remunerados	
				Sector privado							Total ^b	No profesionales ni técnicos	
				Total	Sector público	Total ^a	Profesionales y técnicos	No profesionales ni técnicos					
								En establecimientos de más de cinco personas	En establecimientos de hasta cinco personas	Empleo doméstico			
México	1989	4,5	21,7	3,4	...	3,4	6,8	3,1	...	1,4	5,8	5,4	
	1998	4,2	18,0	3,5	5,1	3,1	6,7	3,1	1,9	1,2	3,7	3,3	
	2002	4,3	15,7	3,6	5,3	3,2	6,9	3,3	2,1	1,4	4,4	4,0	
	2008	4,0	17,0	3,3	5,2	2,9	5,8	3,0	1,9	1,3	3,9	3,4	
	2010	3,3	6,0	3,2	5,0	2,8	5,5	2,5	1,7	1,2	2,6	2,4	
Nicaragua	1993	3,8	8,6	3,3	3,4	3,3	6,2	3,1	2,4	2,1	4,5	3,8	
	1998	3,5	11,1	3,3	...	3,3	6,3	2,7	2,0	1,7	2,8	2,7	
	2001	3,6	14,3	3,1	4,2	2,8	6,3	2,6	1,8	1,5	2,7	2,5	
	2005	3,1	9,9	3,0	4,2	2,7	5,6	2,6	1,7	1,6	2,2	2,1	
Panamá	1991	5,9	15,4	6,0	8,0	4,8	9,9	4,3	2,9	1,3	3,5	3,2	
	1999	6,4	12,6	6,8	9,2	5,9	11,4	5,0	2,9	2,1	3,9	3,6	
	2008	6,0	19,2	5,4	7,5	4,8	8,5	4,6	3,1	1,9	5,7	5,2	
	2009	6,3	19,3	5,8	7,8	5,1	9,3	4,8	3,3	2,0	5,9	5,1	
	2010	6,2	18,4	5,7	7,3	5,1	9,2	4,7	3,3	2,1	6,1	5,2	
Paraguay	1990 ^f	3,5	10,3	2,5	3,4	2,3	4,7	2,6	1,8	0,8	3,9	3,7	
	1999	3,5	8,6	3,3	4,8	2,9	6,7	3,1	2,1	1,6	2,5	2,2	
	2008	2,9	6,7	2,8	4,0	2,5	4,4	2,6	1,9	1,4	2,0	1,8	
	2009	2,8	6,1	2,7	3,9	2,5	4,6	2,5	2,0	1,4	2,0	1,7	
	2010	3,1	8,9	2,8	3,9	2,5	4,5	2,6	2,0	1,5	2,5	2,3	
Perú	1997	3,5	7,9	3,8	4,2	3,7	6,5	3,8	2,3	2,4	2,3	2,1	
	2001	3,2	6,9	3,5	4,1	3,3	6,8	3,3	1,9	2,2	2,2	2,1	
	2008	3,6	7,8	3,9	4,9	3,7	6,6	3,8	2,1	2,0	2,3	2,2	
	2009	3,8	7,5	4,3	5,2	4,1	7,4	4,2	2,2	2,3	2,4	2,2	
	2010	3,7	7,3	4,1	5,1	3,8	6,7	3,9	2,2	2,2	2,3	2,2	
República Dominicana	2002	4,3	15,6	4,0	4,7	3,7	7,8	3,1	2,2	1,3	3,6	3,4	
	2008	4,9	17,9	3,0	3,8	2,8	5,1	2,4	1,5	1,1	6,3	5,6	
	2009	5,4	21,1	3,2	4,2	2,8	5,3	2,4	1,8	1,2	6,9	5,9	
	2010	5,1	22,5	3,0	3,7	2,8	5,3	2,4	1,6	1,2	6,3	5,4	
Uruguay	1990	4,5	18,0	3,7	4,0	3,5	5,4	3,4	2,3	1,5	3,4	3,1	
	1999	5,5	14,1	5,3	6,7	4,9	11,2	4,8	3,1	2,1	4,4	3,9	
	2008	4,3	11,8	4,2	5,7	3,8	8,1	3,8	2,2	1,8	3,0	2,0	
	2009	4,6	11,5	4,6	6,3	4,1	8,6	4,2	2,4	2,0	3,1	2,1	
	2010	4,6	10,8	4,6	6,4	4,1	8,3	4,4	2,5	2,1	3,2	2,2	
Venezuela (República Bolivariana de) ^g	1990	4,6	11,9	3,7	3,9	3,6	6,6	3,6	2,3	1,4	4,8	4,6	
	1999	3,6	9,2	3,2	3,7	3,0	6,4	2,9	2,0	1,4	3,6	3,4	
	2008	4,0	7,5	4,1	5,2	3,5	5,2	3,7	2,7	1,8	3,5	3,4	
	2009	4,0	7,4	4,1	5,3	3,5	4,9	3,6	2,7	1,9	3,7	3,5	
	2010	3,8	7,1	3,8	4,7	3,3	4,5	3,4	2,6	1,9	3,4	3,3	

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de encuestas de hogares de los respectivos países.

^a En los casos de la Argentina (1990-1997), el Brasil (1990), Chile (1990, 1994 y 1998), México (1989, 2004-2006) y Nicaragua (1998) se incluye a los asalariados del sector público. Además, en los casos de Bolivia (Estado Plurinacional de) (1999 y 2002), Chile (1996), El Salvador, Panamá (hasta 2002), la República Dominicana, el Uruguay (1990) y Venezuela (República Bolivariana de) se incluyen —cuando se trata de los trabajadores no profesionales ni técnicos— los establecimientos que tienen hasta cuatro empleados. En los casos en que no se disponía de información sobre el tamaño de los establecimientos no se proveen cifras para el conjunto de las personas ocupadas en sectores de baja productividad.

^b Incluye a los trabajadores por cuenta propia profesionales y técnicos.

^c Gran Buenos Aires.

^d Ocho ciudades capitales de departamento y El Alto.

^e No se dispone de información sobre el tamaño de los establecimientos para 1990. En la columna correspondiente a establecimientos que ocupan a más de cinco personas se incluyó a los asalariados con contrato de trabajo (carteira) y en los establecimientos que ocupan hasta a cinco personas, a los empleados sin contrato de trabajo.

^f Área Metropolitana de Asunción.

^g A partir de 1997 el diseño muestral de la encuesta no permite el desglose urbano-rural. Por lo tanto, las cifras corresponden al total nacional.

Cuadro A-11
**AMÉRICA LATINA: INGRESO MEDIO DE LAS MUJERES, COMPARADO CON EL DE LOS HOMBRES,
 SEGÚN GRUPOS DE EDAD, ZONAS URBANAS, 1990-2010**
(En porcentajes)

País	Año	Disparidad de los ingresos laborales por grupos de edad ^a						Disparidad salarial por grupos de edad ^b					
		Total	15 a 24 años	25 a 34 años	35 a 44 años	45 a 54 años	55 años y más	Total	15 a 24 años	25 a 34 años	35 a 44 años	45 a 54 años	55 años y más
Argentina ^c	1990	65	87	77	61	59	52	65	87	77	61	59	52
	1999	65	94	76	64	58	54	65	94	76	64	58	54
	2006	65	78	76	62	62	52	65	78	76	62	62	52
	2009	72	79	74	69	70	71	72	79	74	69	70	71
	2010	72	80	79	71	68	63	72	80	79	71	68	63
Bolivia (Estado Plurinacional de)	1989 ^d	59	71	65	54	54	62	59	71	65	54	54	62
	1999	63	72	70	55	68	54	63	72	70	55	67	54
	2002	61	80	69	57	53	44	61	80	68	56	53	44
	2007	63	75	71	54	67	52	63	75	71	54	67	52
Brasil	1990	56	73	64	54	47	35	55	73	64	53	47	35
	1999	65	81	72	63	57	55	64	80	71	62	57	54
	2002	67	84	77	64	57	55	66	83	77	64	57	54
	2008	68	83	75	67	63	57	68	82	75	67	62	56
	2009	68	83	74	66	64	58	68	83	74	66	63	57
Chile	1990	62	87	70	61	57	51	62	87	70	61	57	51
	1998	66	90	76	68	59	54	66	90	76	68	59	54
	2003	64	88	79	64	55	55	64	88	79	64	55	55
	2006	68	89	78	66	63	60	68	89	78	66	63	60
	2009	64	85	81	62	63	50	64	85	81	62	63	50
Colombia	1991	69	88	77	64	56	55	68	88	77	64	56	55
	1999	75	101	87	69	68	56	75	101	86	69	68	55
	2008	73	90	84	71	67	53	72	89	83	70	67	54
	2009	75	92	83	71	70	60	75	91	83	71	70	61
	2010	72	90	84	69	63	58	72	89	83	69	63	58
Costa Rica	1990	72	86	75	66	60	61	72	86	75	66	60	61
	1999	70	87	75	67	64	58	70	87	75	67	64	59
	2008	70	94	82	59	66	51	70	94	82	59	66	51
	2009	76	91	81	75	75	57	76	91	81	75	75	57
	2010	79	86	86	74	73	77	79	86	86	74	73	78
Ecuador	1990	66	80	70	61	60	64	66	80	70	61	60	64
	1999	67	99	82	61	51	55	67	99	82	61	51	55
	2008	69	90	80	62	65	64	69	90	80	62	65	64
	2009	71	91	74	72	64	64	71	91	74	72	64	64
	2010	74	93	82	68	69	68	74	93	82	68	69	68
El Salvador	1995	62	76	70	57	51	46	62	76	70	57	51	46
	1999	76	84	79	71	69	64	76	84	79	71	69	64
	2001	73	87	79	73	62	51	73	87	79	73	62	51
	2009	81	95	86	78	70	77	81	95	86	78	70	77
	2010	84	93	92	76	84	72	84	93	92	76	84	72
Guatemala	1989	68	80	81	65	62	55	68	78	80	65	61	55
	1998	55	88	76	51	34	39	55	87	74	51	34	39
	2002	56	80	60	54	41	45	56	78	59	54	41	46
	2006	58	91	64	55	55	42	58	89	65	55	55	42

Cuadro A-11 (conclusión)

País	Año	Disparidad de los ingresos laborales por grupos de edad ^a						Disparidad salarial por grupos de edad ^b					
		Total	15 a 24 años	25 a 34 años	35 a 44 años	45 a 54 años	55 años y más	Total	15 a 24 años	25 a 34 años	35 a 44 años	45 a 54 años	55 años y más
Honduras	1990	59	77	68	51	56	43	59	77	68	51	56	43
	1994	63	80	73	69	48	42	63	80	73	69	48	42
	1997	60	81	72	58	47	37	60	81	72	58	47	37
	2007	81	96	84	75	76	64	81	96	84	75	76	64
	2009	80	97	87	78	66	65	80	97	87	78	66	65
	2010	84	104	85	82	64	86	84	104	85	82	64	86
México	1989	55	72	64	53	45	48	55	72	64	53	45	48
	1998	58	84	73	51	54	40	58	84	73	51	54	40
	2002	62	83	66	62	56	42	62	83	66	62	56	42
	2008	62	83	69	66	48	49	62	83	69	66	48	49
	2010	70	85	74	68	63	60	70	85	74	68	63	60
Nicaragua	1993	77	107	87	62	64	67	77	107	87	62	64	67
	1998	65	93	73	61	47	43	65	93	73	61	47	43
	2001	69	87	85	72	34	85	69	87	85	72	34	85
	2005	71	87	73	80	48	53	71	87	73	80	48	53
Panamá	1991	78	73	89	81	68	78	78	72	88	80	67	77
	1999	78	98	87	74	73	57	78	97	86	74	73	57
	2008	74	83	81	76	67	54	74	83	81	76	67	54
	2009	78	86	87	81	72	62	78	86	87	81	72	62
	2010	76	85	82	79	65	72	76	85	82	79	65	72
Paraguay	1990 ^e	55	63	68	52	50	60	55	63	68	52	50	60
	1999	71	96	84	67	69	43	71	96	84	67	69	43
	2008	71	83	79	68	68	54	71	83	80	68	67	53
	2009	75	85	82	65	76	69	75	85	82	64	75	68
	2010	71	89	75	69	75	44	70	89	75	69	75	44
Perú	1997	60	84	69	58	49	37	59	80	67	58	49	41
	2001	68	94	76	59	59	56	68	94	76	59	59	56
	2008	61	76	73	55	55	48	61	76	73	55	55	48
	2009	63	73	66	65	62	46	63	73	66	65	62	46
	2010	60	79	63	58	53	55	60	79	63	58	53	55
República Dominicana	2002	72	92	74	70	63	62	72	92	74	70	63	62
	2008	61	72	72	53	57	55	61	72	72	53	57	55
	2009	62	67	67	66	47	59	62	67	67	66	47	59
	2010	70	84	75	57	79	63	70	84	75	57	79	63
Uruguay	1990	44	63	60	46	37	30	44	63	60	46	37	30
	1999	68	81	78	64	65	55	67	79	77	63	65	54
	2008	68	84	76	67	65	58	67	80	75	66	63	57
	2009	69	83	77	68	65	58	68	80	75	67	65	57
	2010	71	81	78	69	68	61	70	78	76	68	67	61
Venezuela (República Bolivariana de)	1990	66	81	72	65	57	48	66	80	72	64	57	48
	1994	70	95	75	64	56	56	69	95	75	64	56	56

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

^a Se refiere a las diferencias de ingreso en el total de la población ocupada. Esta diferencia se calcula como el cociente entre el ingreso medio de las mujeres sobre el de los hombres, multiplicado por 100.

^b Se refiere a las diferencias de ingreso total entre los asalariados. Esta diferencia se calcula como el cociente entre el ingreso medio de las mujeres sobre el de los hombres, multiplicado por 100.

^c Gran Buenos Aires.

^d Ocho ciudades capitales de departamento y El Alto.

^e Área metropolitana de Asunción.

Cuadro A-12
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (21 PAÍSES): GASTO PÚBLICO SOCIAL PER CÁPITA, 1990-2010
 (En dólares de 2005)

País	Período										
	1990-1991	1992-1993	1994-1995	1996-1997	1998-1999	2000-2001	2002-2003	2004-2005	2006-2007	2008-2009	2010 ^a
Argentina	680	823	906	903	982	954	757	885	1153	1493	...
Bolivia (Estado Plurinacional de) ^b	115	138	157	168	186	184	186	211	...
Brasil	661	640	831	850	934	936	986	1052	1203	1371	...
Chile	486	584	638	758	875	953	967	936	933	1213	1266
Colombia ^c	168	209	324	441	384	344	349	399	454	520	539
Costa Rica	498	529	580	621	667	745	792	795	876	1097	1224
Cuba	944	851	690	615	620	722	843	1122	1523	1946	1876
Ecuador ^d	92	90	103	97	86	88	106	124	200	261	314
El Salvador ^e	...	61	120	149	203	258	287	322	351	379	...
Guatemala	66	85	87	95	136	143	155	156	168	172	...
Honduras	73	77	66	68	76	104	123	137	150	176	183
Jamaica ^f	339	327	343	373	...	383	356	367	404	450	...
México	393	505	544	527	619	686	697	739	810	879	943
Nicaragua	47	44	49	48	60	67	78	95	107	119	...
Panamá	247	328	310	339	406	400	353	371	493	609	...
Paraguay	42	88	107	119	120	99	108	98	123	133	147
Perú ^g	78	103	151	169	208	222	246	266	279	332	378
República Dominicana	85	108	117	130	162	213	218	236	326	362	347
Trinidad y Tabago ^h	405	417	393	406	...	783	970	1170	1219	1770	...
Uruguay	677	832	950	1061	1038	1057	944	992	1195	1434	...
Venezuela (República Bolivariana de) ⁱ	483	536	433	479	475	613	530	610	795
América Latina y el Caribe ^j	315	350	375	404	438	473	478	526	616	748	...
América Latina y el Caribe ^k	459	494	581	600	655	678	685	740	853	981	...

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información proveniente de la base de datos sobre gasto social de la Comisión.

^a Serie bienal a partir de datos oficiales provenientes de los ministerios de hacienda o desarrollo social o de las direcciones de presupuesto de los países de América Latina y el Caribe.

^b La cifra relativa al bienio 1994-1995 corresponde a 1995 y la de 2008-2009, a 2008.

^c Cifras desde el año 2000 del Ministerio de Hacienda, no comparables con las anteriores. Los datos de la serie anterior provienen del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

^d Entre los datos de gasto social no se incluye el gasto en seguridad social. Las cifras hasta el bienio 2006-2007 corresponden a la administración central y las relativas al período 2008-2010, al presupuesto general del Estado.

^e La cifra de 1992-1993 corresponde a 1993. Serie ajustada por cambio metodológico desde 2004.

^f La cifra de 1996-1997 corresponde a 1996.

^g Desde 1990 hasta 1998 las cifras corresponden a datos del gobierno central presupuestario, y desde 1999 en adelante a datos del gobierno general. La cifra de 1998-1999 corresponde a 1999.

^h La cifra de 1996-1997 corresponde a 1996.

ⁱ La cifra de 2006-2007 corresponde a 2006.

^j Promedio simple de los países. Se incluyen estimaciones en casos de países sin información disponible.

^k Promedio ponderado de los países. Se incluyen estimaciones en casos de países sin información disponible.

Cuadro A-13
**AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (21 PAÍSES): GASTO PÚBLICO SOCIAL COMO
 PORCENTAJE DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO, 1990-2010**
 (En porcentajes)

País	Período										
	1990-1991	1992-1993	1994-1995	1996-1997	1998-1999	2000-2001	2002-2003	2004-2005	2006-2007	2008-2009	2010 ^a
Argentina	19,1	20,1	21,1	20,0	21,0	21,8	19,4	19,4	21,8	25,9	...
Bolivia (Estado Plurinacional de) ^b	12,4	14,4	15,8	17,1	18,8	17,9	17,1	18,4	...
Brasil	16,6	16,1	19,5	19,4	21,6	21,2	22,1	22,4	24,1	25,9	...
Chile	12,0	12,4	12,2	12,8	14,3	15,1	14,8	13,2	12,2	15,4	15,6
Colombia ^c	5,9	7,0	10,2	13,6	12,2	11,1	11,1	11,9	12,4	13,5	13,6
Costa Rica	15,6	15,2	15,8	16,8	16,4	18,0	18,7	17,6	17,2	20,9	22,9
Cuba	27,6	32,8	28,5	23,1	22,4	23,7	26,5	31,0	34,5	40,7	38,2
Ecuador ^d	3,9	3,8	4,3	4,0	3,6	3,7	4,2	4,5	6,8	8,3	9,8
El Salvador ^e	...	2,9	5,4	6,3	8,2	10,0	10,8	11,6	11,8	12,7	...
Guatemala	3,7	4,6	4,6	4,8	6,7	6,8	7,3	7,3	7,5	7,5	...
Honduras	6,3	6,3	5,5	5,5	6,2	8,4	9,5	9,9	10,0	11,5	12,0
Jamaica ^f	8,4	8,0	8,2	9,0	...	9,5	8,7	8,8	9,4	10,7	...
México	5,9	7,4	8,1	7,7	8,4	8,9	9,1	9,3	9,6	10,6	11,3
Nicaragua	6,6	6,5	7,2	6,5	7,6	8,1	9,3	10,8	11,5	12,6	...
Panamá	7,5	8,9	8,3	8,8	9,7	9,5	8,3	8,0	9,2	9,9	...
Paraguay	3,2	6,6	7,8	8,7	9,1	8,0	8,9	7,7	9,2	9,7	11,0
Perú ^g	3,9	5,1	6,5	6,9	8,5	9,0	9,5	9,6	8,9	9,4	10,0
República Dominicana	3,9	4,5	4,6	4,6	5,2	6,4	6,4	6,7	8,0	8,1	7,3
Trinidad y Tabago ^h	6,9	7,3	6,6	6,4	...	9,1	9,7	9,9	8,7	12,1	...
Uruguay	16,8	18,9	20,2	21,3	20,0	21,6	21,8	19,6	21,2
Venezuela (República Bolivariana de) ⁱ	8,8	9,2	7,8	8,6	8,8	11,6	11,7	11,7	13,5
América Latina y el Caribe ^j	9,3	10,3	10,8	11,0	11,6	12,3	12,7	12,8	13,5	15,2	...
América Latina y el Caribe ^k	11,3	11,9	13,5	13,5	14,5	14,6	14,9	15,2	16,1	17,9	...

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información proveniente de la base de datos sobre gasto social de la Comisión.

^a Serie bienal a partir de datos oficiales provenientes de los ministerios de hacienda o desarrollo social o de las direcciones de presupuesto de los países de América Latina y el Caribe.

^b La cifra relativa al bienio 1994-1995 corresponde a 1995 y la de 2008-2009, a 2008.

^c Cifras desde el año 2000 del Ministerio de Hacienda, no comparables con las anteriores. Los datos de la serie anterior provienen del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

^d Entre los datos de gasto social no se incluye el gasto en seguridad social. Las cifras hasta el bienio 2006-2007 corresponden a la administración central y las relativas al período 2008-2010, al presupuesto general del Estado.

^e La cifra de 1992-1993 corresponde a 1993. Serie ajustada por cambio metodológico desde 2004.

^f La cifra de 1996-1997 corresponde a 1996.

^g Desde 1990 hasta 1998 las cifras corresponden a datos del gobierno central presupuestario, y desde 1999 en adelante a datos del gobierno general. La cifra de 1998-1999 corresponde a 1999.

^h La cifra de 1996-1997 corresponde a 1996.

ⁱ La cifra de 2006-2007 corresponde a 2006.

^j Promedio simple de los países. Se incluyen estimaciones en casos de países sin información disponible.

^k Promedio ponderado de los países. Se incluyen estimaciones en casos de países sin información disponible.

Cuadro A-14
**AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (21 PAÍSES): GASTO PÚBLICO SOCIAL
 COMO PORCENTAJE DEL GASTO PÚBLICO TOTAL ^a, 1990-2010**
(En porcentajes)

País	Período										
	1990-1991	1992-1993	1994-1995	1996-1997	1998-1999	2000-2001	2002-2003	2004-2005	2006-2007	2008-2009	2010 ^b
Argentina	62,2	63,4	65,7	65,6	64,4	62,9	66,3	64,2	63,7	63,5	...
Bolivia (Estado Plurinacional de) ^c	36,3	43,4	43,9	45,6	51,3	52,6	45,1	40,8	...
Brasil	48,9	47,2	58,6	51,0	55,8	62,1	70,4	73,2	73,4	73,6	...
Chile	61,2	63,0	64,5	65,5	66,4	68,4	68,1	67,3	66,3	67,0	66,7
Colombia ^d	28,8	32,2	36,5	74,8	71,5	69,5	68,7
Costa Rica	38,9	41,2	38,2	42,0	40,7	40,5	37,8	36,1	36,0	37,2	39,2
Cuba	35,6	34,7	39,4	45,7	44,8	47,0	51,4	53,0	52,4	53,0	54,5
Ecuador ^e	25,3	26,0	24,0	20,0	16,2	15,6	19,2	20,5	30,3	23,9	26,3
El Salvador ^f	...	22,2	23,2	28,1	32,5	46,6	39,5	45,4	45,0	42,9	...
Guatemala	29,9	33,3	41,3	42,7	45,1	47,3	50,4	53,8	51,8	54,1	...
Honduras	40,7	36,6	40,6	40,5	39,5	45,4	49,9	52,8	53,6	49,2	51,9
Jamaica ^g	26,8	23,2	20,6	19,2	...	17,1	17,3	17,1	20,9	21,3	...
México	41,3	50,2	53,1	52,7	60,5	61,3	56,6	58,8	57,9	54,4	55,9
Nicaragua	34,0	38,5	39,9	37,0	37,1	38,4	42,0	47,9	50,2	54,4	...
Panamá	45,7	52,4	52,0	48,3	50,8	46,8	44,9	42,1	46,8	48,5	...
Paraguay	39,9	42,9	43,3	47,1	44,5	38,3	40,4	39,3	47,8	51,3	50,9
Perú ^h	33,0	35,0	39,4	39,6	54,3	48,6	48,2	48,7	49,4	47,4	46,3
República Dominicana	40,4	39,9	42,9	41,2	42,1	48,7	47,1	44,7	47,5	44,4	44,2
Trinidad y Tabago ⁱ	40,6	40,6	42,8	40,7	...	43,5	44,6	37,9	29,4	34,4	...
Uruguay	62,3	67,7	70,8	70,8	67,3	68,1	61,4	61,8	67,5	79,4	...
Venezuela (República Bolivariana de) ^j	32,8	40,1	35,3	35,4	36,6	37,8	38,6	41,0	44,0
América Latina y el Caribe ^k	39,4	41,7	44,3	45,3	46,2	47,5	48,3	49,0	50,1	50,3	...
América Latina y el Caribe ^l	44,9	47,2	54,2	52,0	55,7	58,3	61,2	62,8	63,0	62,2	...

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información proveniente de la base de datos sobre gasto social de la Comisión.

^a Los montos oficiales de gasto público total provienen de las clasificaciones funcionales del gasto público de los países, pero pueden diferir de otros informes, también de carácter oficial, basados en clasificaciones de tipo distinto.

^b Serie bienal con datos oficiales provenientes de los ministerios de hacienda o desarrollo social o direcciones de presupuesto de los países de América Latina y el Caribe.

^c La cifra relativa al bienio 1994-1995 corresponde a 1995 y la de 2008-2009, a 2008.

^d Cifras desde el año 2000 del Ministerio de Hacienda, no comparables con las anteriores. La serie anterior proviene del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Serie sin continuidad. La cifra del bienio 1994-1995 corresponde a 1994 y la de 2004-2005, a 2005.

^e Las cifras hasta el bienio 2006-2007 corresponden a la administración central y las de 2008 a 2010, al presupuesto general del Estado.

^f La cifra de 1992-1993 corresponde a 1993. Serie ajustada por cambio metodológico desde 2004.

^g La cifra de 1996-1997 corresponde a 1996.

^h Desde 1990 hasta 1999 las cifras corresponden a datos del gobierno central presupuestario, y de 2000 en adelante, a datos del gobierno general.

ⁱ La cifra de 1996-1997 corresponde a 1996.

^j La cifra de 2006-2007 corresponde a 2006.

^k Promedio simple de los países. Se incluyen estimaciones en casos de países sin información disponible.

^l Promedio ponderado de los países. Se incluyen estimaciones en casos de países sin información disponible.

Cuadro A-15
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE : GASTO PÚBLICO SOCIAL EN EDUCACIÓN
COMO PORCENTAJE DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO, 1990-2010
(En porcentajes)

País	Período										
	1990-1991	1992-1993	1994-1995	1996-1997	1998-1999	2000-2001	2002-2003	2004-2005	2006-2007	2008-2009	2010 ^a
Argentina	3,6	4,0	4,2	4,2	4,7	5,1	4,2	4,5	5,3	6,3	...
Bolivia (Estado Plurinacional de) ^b	5,3	5,8	6,2	6,6	7,7	7,4	7,5	8,0	...
Brasil	3,4	2,8	5,1	4,3	5,5	5,0	4,7	4,6	5,0	5,6	...
Chile	2,3	2,4	2,6	3,0	3,6	3,9	4,0	3,6	3,3	4,4	4,4
Colombia ^c	2,4	2,9	3,0	4,2	4,1	3,3	3,8	3,2	3,0	2,9	3,1
Costa Rica	3,9	4,2	4,2	4,6	4,4	5,1	5,7	5,5	5,2	6,4	7,5
Cuba	10,8	11,9	9,0	7,3	7,7	9,1	11,1	13,3	14,6	17,9	17,1
Ecuador ^d	2,6	2,8	2,6	2,5	2,4	2,0	2,6	2,6	4,3	4,5	5,5
El Salvador ^e	...	1,8	2,0	2,5	3,0	3,4	3,5	3,2	3,1	3,5	...
Guatemala	1,8	2,0	1,9	1,9	2,5	2,9	2,9	2,9	3,0	3,2	...
Honduras	3,6	3,6	3,1	3,3	3,8	5,2	6,0	6,6	6,7	7,6	7,7
Jamaica ^f	4,1	4,0	4,1	4,9	...	5,8	5,1	5,2	5,6	6,5	...
México	2,4	3,2	3,6	3,4	3,5	3,6	3,5	3,4	3,5	3,7	3,8
Nicaragua	2,6	2,2	2,8	2,9	3,4	3,7	4,4	4,7	5,1	5,8	...
Panamá	3,6	3,7	3,5	4,0	4,1	4,2	4,1	3,8	4,0	3,9	...
Paraguay	1,3	2,9	3,6	4,2	4,4	4,3	4,0	3,9	4,0	4,3	4,7
Perú ^g	1,6	2,0	2,7	2,5	2,9	2,8	3,0	3,0	2,8	3,0	3,1
República Dominicana	1,1	1,3	1,6	1,8	2,2	2,5	2,6	1,8	2,3	2,5	2,5
Trinidad y Tabago ^h	3,2	3,3	3,0	3,0	...	4,1	4,4	4,4	3,8	5,0	...
Uruguay	2,5	2,5	2,5	3,0	3,0	3,0	3,3	3,3	3,9	4,7	...
Venezuela (República Bolivariana de) ⁱ	3,5	4,0	3,8	3,2	4,0	5,1	5,1	5,0	5,5
América Latina y el Caribe ^j	3,2	3,5	3,6	3,7	4,0	4,3	4,6	4,5	4,8	5,5	...
América Latina y el Caribe ^k	3,1	3,2	4,1	3,8	4,4	4,3	4,2	4,1	4,4	4,9	...

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información proveniente de la base de datos sobre gasto social de la Comisión.

^a Serie bienal a partir de datos oficiales provenientes de los ministerios de hacienda o desarrollo social o de las direcciones de presupuesto de los países de América Latina y el Caribe.

^b La cifra relativa al bienio 1994-1995 corresponde a 1995 y la de 2008-2009, a 2008.

^c Cifras desde el año 2000 del Ministerio de Hacienda, no comparables con las anteriores. Los datos de la serie anterior provienen del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

^d Entre los datos de gasto social no se incluye el gasto en seguridad social. Las cifras hasta el bienio 2006-2007 corresponden a la administración central y las relativas al período 2008-2010, al presupuesto general del Estado.

^e La cifra de 1992-1993 corresponde a 1993. Serie ajustada por cambio metodológico desde 2004.

^f La cifra de 1996-1997 corresponde a 1996.

^g Desde 1990 hasta 1998 las cifras corresponden a datos del gobierno central presupuestario, y desde 1999 en adelante a datos del gobierno general. La cifra de 1998-1999 corresponde a 1999.

^h La cifra de 1996-1997 corresponde a 1996.

ⁱ La cifra de 2006-2007 corresponde a 2006.

^j Promedio simple de los países. Se incluyen estimaciones en casos de países sin información disponible.

^k Promedio ponderado de los países. Se incluyen estimaciones en casos de países sin información disponible.

Cuadro A-16
**AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (21 PAÍSES): GASTO PÚBLICO SOCIAL EN SALUD
 COMO PORCENTAJE DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO, 1990-2010**
 (En porcentajes)

País	Período										
	1990-1991	1992-1993	1994-1995	1996-1997	1998-1999	2000-2001	2002-2003	2004-2005	2006-2007	2008-2009	2010 ^a
Argentina	4,3	4,6	4,9	4,6	4,9	5,0	4,4	4,3	4,7	5,7	...
Bolivia (Estado Plurinacional de) ^b	3,1	2,5	2,8	3,1	3,3	3,5	3,3	3,2	...
Brasil	3,3	2,4	4,1	3,8	3,8	4,1	4,0	4,3	4,6	5,0	...
Chile	1,8	2,1	2,3	2,4	2,7	2,9	3,0	2,8	2,9	3,7	3,9
Colombia ^c	0,9	1,1	2,6	2,9	3,3	2,2	1,8	2,0	1,9	1,9	1,9
Costa Rica	4,9	4,5	4,7	4,7	4,8	5,2	5,7	5,0	5,0	6,2	6,6
Cuba	5,0	6,6	5,6	4,9	5,4	5,6	5,7	6,5	8,5	10,8	9,7
Ecuador ^d	1,0	0,8	0,8	0,9	0,7	0,8	1,1	1,1	1,3	1,7	2,1
El Salvador ^e	...	1,1	2,6	2,8	3,2	3,3	3,4	3,7	3,9	3,9	...
Guatemala	1,0	1,1	1,0	0,8	1,2	1,2	1,1	1,1	1,2	1,3	...
Honduras	2,4	2,4	2,2	2,0	2,0	2,8	3,2	3,0	2,8	3,1	3,5
Jamaica ^f	2,2	2,4	2,2	2,3	...	2,2	2,3	2,3	2,3	2,8	...
México	2,7	3,1	2,1	2,0	2,1	2,1	2,2	2,3	2,4	2,6	2,7
Nicaragua	2,8	2,5	2,8	2,5	2,7	2,9	3,3	3,3	3,6	3,9	...
Panamá	1,6	1,9	1,8	1,9	2,0	2,3	2,0	2,3	2,1	2,2	...
Paraguay	0,3	1,1	1,2	1,3	1,4	1,2	1,4	1,2	1,7	1,9	2,3
Perú ^g	0,9	0,9	1,3	1,4	1,2	1,4	1,5	1,4	1,3	1,5	1,6
República Dominicana	0,9	1,0	1,0	1,1	1,2	1,6	1,4	1,2	1,4	1,4	1,8
Trinidad y Tabago ^h	2,6	2,8	2,2	2,0	...	2,1	2,3	2,6	2,3	3,4	...
Uruguay	2,9	3,0	3,4	2,5	3,2	3,5	3,4	3,3	3,8	4,7	...
Venezuela (República Bolivariana de) ⁱ	1,6	1,7	1,1	1,1	1,4	1,5	1,6	1,6	1,8
América Latina y el Caribe ^j	2,2	2,4	2,5	2,4	2,6	2,7	2,8	2,8	3,0	3,4	...
América Latina y el Caribe ^k	2,7	2,6	3,0	2,8	3,0	3,0	3,0	3,1	3,3	3,7	...

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información proveniente de la base de datos sobre gasto social de la Comisión.

^a Serie bienal a partir de datos oficiales provenientes de los ministerios de hacienda o desarrollo social o de las direcciones de presupuesto de los países de América Latina y el Caribe.

^b La cifra relativa al bienio 1994-1995 corresponde a 1995 y la de 2008-2009, a 2008.

^c Cifras desde el año 2000 del Ministerio de Hacienda, no comparables con las anteriores. Los datos de la serie anterior provienen del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

^d Entre los datos de gasto social no se incluye el gasto en seguridad social. Las cifras hasta el bienio 2006-2007 corresponden a la administración central y las relativas al período 2008-2010, al presupuesto general del Estado.

^e La cifra de 1992-1993 corresponde a 1993. Serie ajustada por cambio metodológico desde 2004.

^f La cifra de 1996-1997 corresponde a 1996.

^g Desde 1990 hasta 1998 las cifras corresponden a datos del gobierno central presupuestario, y desde 1999 en adelante a datos del gobierno general. La cifra de 1998-1999 corresponde a 1999.

^h La cifra de 1996-1997 corresponde a 1996.

ⁱ La cifra de 2006-2007 corresponde a 2006.

^j Promedio simple de los países. Se incluyen estimaciones en casos de países sin información disponible.

^k Promedio ponderado de los países. Se incluyen estimaciones en casos de países sin información disponible.

Cuadro A-17
**AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (20 PAÍSES): GASTO PÚBLICO SOCIAL EN SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL
 COMO PORCENTAJE DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO, 1990-2010**
 (En porcentajes)

País	Período										
	1990-1991	1992-1993	1994-1995	1996-1997	1998-1999	2000-2001	2002-2003	2004-2005	2006-2007	2008-2009	2010 ^a
Argentina	9,6	9,9	10,3	9,8	9,9	10,3	9,7	9,2	10,0	12,0	...
Bolivia (Estado Plurinacional de) ^b	1,4	4,0	5,2	5,6	6,0	5,3	4,7	5,7	...
Brasil	8,5	9,7	10,0	10,6	11,7	11,2	12,0	12,1	12,8	13,4	...
Chile	7,7	7,6	7,1	7,1	7,6	7,9	7,5	6,5	5,8	6,9	7,0
Colombia ^c	2,3	2,6	4,0	5,4	3,8	4,8	4,9	6,0	7,0	7,8	7,8
Costa Rica	4,9	4,7	5,2	5,8	5,7	6,1	5,5	5,3	5,2	6,0	6,6
Cuba	7,0	9,9	8,6	7,0	7,0	6,5	7,1	8,2	8,7	9,2	8,7
Ecuador ^d	0,3	0,2	0,4	0,4	0,3	0,5	0,4	0,5	0,9	1,5	1,9
El Salvador ^e	...	0,0	0,8	0,9	1,1	1,1	2,2	3,8	3,9	4,4	...
Guatemala	0,8	0,9	0,8	0,8	1,0	1,2	1,3	1,2	1,1	1,1	...
Honduras	0,3	0,3	0,2	0,3	0,4	0,4	0,3	0,3	0,5	0,8	0,6
Jamaica ^f	0,6	0,4	0,4	0,3	...	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	...
México	0,1	0,1	1,2	1,7	2,0	2,3	2,1	2,2	2,3	2,8	3,1
Panamá	1,2	1,8	1,5	1,0	1,9	1,6	1,2	1,1	1,5	1,6	...
Paraguay	1,2	2,3	2,4	2,7	3,1	2,1	3,3	2,5	3,2	3,3	3,9
Perú ^g	1,3	2,2	2,5	2,8	3,5	4,0	4,4	4,4	3,7	3,2	3,4
República Dominicana	0,3	0,3	0,3	0,5	0,6	1,1	1,3	2,1	2,2	2,4	1,8
Trinidad y Tabago ^h	0,1	0,1	0,1	0,1	...	1,4	1,8	1,5	1,2	1,8	...
Uruguay	11,2	13,1	13,9	15,3	12,6	13,7	13,6	11,7	12,0	11,3	...
Venezuela (República Bolivariana de) ⁱ	2,0	2,1	2,3	3,0	2,5	3,7	4,1	4,1	4,6
América Latina y el Caribe ^j	3,0	3,5	3,7	4,0	4,1	4,3	4,4	4,4	4,6	5,1	...
América Latina y el Caribe ^k	4,4	4,9	5,6	6,0	6,3	6,4	6,6	6,7	7,1	7,9	...

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información proveniente de la base de datos sobre gasto social de la Comisión.

^a Serie bienal a partir de datos oficiales provenientes de los ministerios de hacienda o de desarrollo social o de las direcciones de presupuesto de los países de América Latina y el Caribe.

^b La cifra relativa al bienio 1994-1995 corresponde a 1995 y la de 2008-2009, a 2008.

^c Cifras desde el año 2000 del Ministerio de Hacienda, no comparables con las anteriores. Los datos de la serie anterior provienen del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

^d Entre los datos de gasto social no se incluye el gasto en seguridad social. Las cifras hasta el bienio 2006-2007 corresponden a la administración central y las relativas al período 2008-2010, al presupuesto general del Estado.

^e La cifra de 1992-1993 corresponde a 1993. Serie ajustada por cambio metodológico desde 2004.

^f La cifra de 1996-1997 corresponde a 1996.

^g Desde 1990 hasta 1998 las cifras corresponden a datos del gobierno central presupuestario, y desde 1999 en adelante a datos del gobierno general. La cifra de 1998-1999 corresponde a 1999.

^h La cifra de 1996-1997 corresponde a 1996.

ⁱ La cifra de 2006-2007 corresponde a 2006.

^j Promedio simple de los países. Se incluyen estimaciones en casos de países sin información disponible. No incluye Nicaragua.

^k Promedio ponderado de los países. Se incluyen estimaciones en casos de países sin información disponible. No incluye Nicaragua.

Cuadro A-18
**AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (21 PAÍSES): GASTO PÚBLICO SOCIAL EN VIVIENDA Y OTROS RUBROS
 COMO PORCENTAJE DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO, 1990-2010**
 (En porcentajes)

País	Período										
	1990-1991	1992-1993	1994-1995	1996-1997	1998-1999	2000-2001	2002-2003	2004-2005	2006-2007	2008-2009	2010 ^a
Argentina	1,7	1,6	1,6	1,4	1,5	1,4	1,1	1,5	1,8	1,9	...
Bolivia (Estado Plurinacional de) ^b	2,5	2,0	1,6	1,9	1,7	1,8	1,6	1,5	...
Brasil	1,4	1,3	0,4	0,8	0,6	1,1	1,5	1,4	1,7	1,9	...
Chile	0,2	0,2	0,2	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4
Colombia ^c	0,5	0,5	0,7	1,0	1,0	0,9	0,6	0,7	0,5	0,9	0,8
Costa Rica	1,9	1,8	1,7	1,8	1,5	1,6	1,8	1,8	1,8	2,2	2,3
Cuba	4,8	4,4	5,3	4,0	2,3	2,6	2,6	3,0	2,8	2,8	2,7
Ecuador ^d	0,5	0,5	0,4	0,2	0,1	0,4	0,2	0,2	0,3	0,7	0,4
El Salvador ^e	0,0	0,0	0,0	0,2	0,8	2,1	1,7	0,9	0,9	0,9	...
Guatemala	0,1	0,6	0,8	1,3	1,9	1,6	1,9	2,1	2,2	1,9	...
Honduras	0,3
Jamaica ^f	1,5	1,2	1,6	1,4	...	1,1	0,9	0,9	1,1	0,9	...
México	0,8	1,1	1,2	0,7	0,8	1,0	1,2	1,3	1,4	1,4	1,6
Nicaragua	1,2	1,8	1,5	1,2	1,5	1,5	1,6	2,7	2,8	3,0	...
Panamá	1,1	1,4	1,4	1,9	1,7	1,3	1,0	0,8	1,5	2,1	...
Paraguay	0,5	0,3	0,6	0,4	0,2	0,5	0,2	0,2	0,4	0,3	0,2
Perú ^g	0,1	0,1	0,1	0,2	0,9	0,8	0,6	0,7	1,1	1,7	1,9
República Dominicana	1,6	1,9	1,8	1,3	1,2	1,2	1,2	1,7	2,0	1,9	1,2
Trinidad y Tabago ^h	1,0	1,1	1,3	1,3	...	1,5	1,3	1,4	1,3	1,8	...
Uruguay	0,3	0,4	0,5	0,5	1,2	1,4	1,5	1,4	1,6	1,8	...
Venezuela (República Bolivariana de) ⁱ	1,7	1,4	0,6	1,3	0,9	1,3	0,9	1,0	1,4
América Latina y el Caribe ^j	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	1,3	1,2	1,3	1,4	1,5	...
América Latina y el Caribe ^k	1,2	1,2	0,9	0,9	0,9	1,1	1,2	1,3	1,4	1,6	...

Fuente: Comisión económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información proveniente de la base de datos sobre gasto social de la Comisión.

^a Serie bienal a partir de datos oficiales provenientes de los ministerios de hacienda o desarrollo social o de las direcciones de presupuesto de los países de América Latina y el Caribe.

^b La cifra relativa al bienio 1994-1995 corresponde a 1995 y la de 2008-2009, a 2008.

^c Cifras desde el año 2000 del Ministerio de Hacienda, no comparables con las anteriores. La serie anterior proviene del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

^d Entre los datos de gasto social no se incluye el gasto en seguridad social. Las cifras hasta el bienio 2006-2007 corresponden a la administración central y las relativas a período 2008-2010, al presupuesto general del Estado.

^e La cifra de 1992-1993 corresponde a 1993. Serie ajustada por cambio metodológico desde 2004.

^f La cifra de 1996-1997 corresponde a 1996.

^g Desde 1990 hasta 1998 las cifras corresponden a datos del gobierno central presupuestario, y desde 1999 en adelante a datos del gobierno general. La cifra de 1998-1999 corresponde a 1999.

^h La cifra de 1996-1997 corresponde a 1996.

ⁱ La cifra de 2006-2007 corresponde a 2006.

^j Promedio simple de los países. Se incluyen estimaciones en casos de países sin información disponible.

^k Promedio ponderado de los países. Se incluyen estimaciones en años de países sin información disponible.

Cuadro A-19
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: EVALUACIÓN DEL PROGRESO HACIA EL LOGRO DE LAS METAS DEL MILENIO^a
 (En porcentajes)

País	Objetivo 1 Erradicar la extrema pobreza y el hambre					
	Meta 1.A Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas cuyos ingresos sean inferiores a 1 dólar por día					
	Indicador 1.1 Población en extrema pobreza según líneas nacionales ^b		Indicador 1.2 Coeficiente de la brecha de extrema pobreza		Indicador 1.3 Proporción del consumo nacional que corresponde al quintil más pobre de población	
	Nivel 1990	Nivel 2008	Nivel 1990	Nivel 2008	Nivel 1990	Nivel 2008
América Latina y El Caribe^c	22,5	12,9	8,6	4,4	3,2	3,5
América Latina^c	22,5	12,9	8,6	4,4	3,2	3,5
Argentina ^d	8,2	5,8	1,6	2,6	4,2	3,7
Bolivia (Estado Plurinacional de)	39,5	32,4	9,7	4,5	3,2	4,3
Brasil	23,4	7,3	9,7	3,3	2,1	2,6
Chile	13,0	3,7	4,4	1,1	3,5	4,1
Colombia	26,1	22,9	13,8	8,3	2,0	2,9
Costa Rica	10,1	5,5	4,8	2,2	4,3	4,4
Cuba
Ecuador ^d	26,2	14,2	9,2	4,7	4,8	4,4
El Salvador	27,7	18,2	9,1	8,1	3,4	3,4
Guatemala	41,8	29,3	18,5	11,3	2,7	2,8
Haití
Honduras	60,9	47,1	31,5	23,9	2,3	1,9
México	18,7	11,2	5,9	3,2	3,9	4,0
Nicaragua	51,4	33,8	24,3	12,3	2,1	3,5
Panamá	16,2	13,5	5,2	1,6	3,2	4,6
Paraguay	35,0	30,8	3,6	5,7	5,2	5,0
Perú	25,0	12,6	10,1	4,0	3,0	4,0
República Dominicana	...	22,6	8,8	8,8	3,2	2,9
Uruguay ^d	3,4	3,5	0,9	0,9	4,8	4,9
Venezuela (República Bolivariana de)	14,4	9,9	5,0	3,5	4,3	5,2
El Caribe^c
Anguila
Antigua y Barbuda
Antillas Neerlandesas
Aruba
Bahamas
Barbados
Belice ^e	13,4
Dominica
Granada
Guadalupe
Guayana Francesa
Guyana ^e	5,8	7,7
Islas Caimán
Islas Turcas y Caicos
Islas Vírgenes Británicas
Islas Vírgenes de los Estados Unidos
Jamaica ^e	2	2
Martinica
Montserrat
Puerto Rico
Saint Kitts y Nevis
San Vicente y las Granadinas
Santa Lucía ^e	20,9
Suriname ^e	15,5
Trinidad y Tabago ^e	4,2

Fuente: Naciones Unidas, *El progreso de América Latina y el Caribe hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Desafíos para lograrlos con igualdad* (LC/G.2460), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), agosto de 2010.

^a El orden de los indicadores corresponde a la enumeración oficial y la ausencia de alguno de ellos se debe a la falta de información.

^b No se incluye la República Dominicana. Los niveles de 1990 no son comparables con los de 2000 en adelante.

^c Promedios ponderados.

^d Las cifras corresponden a zonas urbanas.

^e Corresponde a la proporción de población con ingresos inferiores a 1 dólar PPA (paridad del poder adquisitivo) por día. Disponibles en el sitio oficial de las Naciones Unidas para los indicadores del Milenio [en línea] <http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Default.aspx>.

Cuadro A-20
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: EVALUACIÓN DEL PROGRESO HACIA EL LOGRO DE LAS METAS DEL MILENIO^a
 (En porcentajes)

País	Objetivo 1 Erradicar la extrema pobreza y el hambre							
	Meta 1.B Lograr empleo pleno y productivo, y trabajo decente para todos, incluyendo mujeres y jóvenes							
	Indicador 1.4 Tasa de crecimiento del PIB por persona empleada		Indicador 1.5 Relación empleo- población		Indicador 1.6 Proporción de la población ocupada en extrema pobreza según líneas nacionales ^b		Indicador 1.7 Proporción de la población ocupada que trabaja por cuenta propia o en una empresa familiar ^c	
	Nivel 1992-1997	Nivel 2003-2008	Nivel 1990	Nivel 2008	Nivel 1990	Nivel 2008	Nivel 1990	Nivel 2008
América Latina y El Caribe^d	0,3	2,2	54,3	59,5	17,8	11,3	32,0	31,1
América Latina^d	0,3	2,2	54,5	59,6	17,8	11,3	32,0	31,2
Argentina ^c	3,5	6,0	52,5	57,0	25,6	19,3
Bolivia (Estado Plurinacional de)	0,1	1,1	53,5	58,7	...	30,7	43,7	36,0
Brasil	-0,5	1,8	61,1	63,7	15,8	3,9	28,9	29,1
Chile	5,8	2,7	47,7	53,1	6,5	1,2	24,5	21,3
Colombia	0,9	1,7	58,6	56,9	18,7	13,3	44,6	45,6
Costa Rica	1,8	3,0	54,7	57,9	4,5	1,9	24,3	19,5
Cuba	...	5,3	70,1	73,6	2,8
Ecuador ^c	-1,4	2,3	57,1	61,1	...	12,1	35,6	36,2
El Salvador	3,5	1,0	55,8	55,5	13,4	11,9	36,2	35,3
Guatemala	3,9	-1,1	56,5	64,9	30,4	20,2	48,0	44,5
Haití	-6,1	-1,7	56,0	55,9
Honduras	-0,4	4,0	56,1	58,0	49,6	37,0	49,6	48,9
México	-0,6	1,5	52,1	59,4	12,9	7,1	29,4	22,6
Nicaragua	0,8	-0,2	49,6	60,4	34,4	24,5	46,5	44,9
Panamá	0,6	4,2	48,1	60,3	11,4	8,0	33,8	30,7
Paraguay	-1,2	0,3	61,4	63,8	...	22,5	22,9	26,4
Perú	2,4	4,0	67,9	71,3	19,5	10,8	52,4	51,4
República Dominicana	1,4	4,1	52,9	54,5	...	10,7	41,7	43,8
Uruguay ^c	3,0	6,9	52,6	58,8	...	1,5	20,1	24,9
Venezuela (República Bolivariana de)	-1,2	2,5	51,6	60,8	5,4	4,3	25,7	37,5
El Caribe^d	0,9	2,0	47,3	51,2	32,2	27,1
Anguila
Antigua y Barbuda	14,6	...
Antillas Neerlandesas	49,0	53,5	8,1	11,2
Aruba	3,9	...
Bahamas	-0,6	0,0	63,0	66,6
Barbados	-0,9	1,9	56,9	66,9	11,7	...
Belice ^e	-1,2	0,9	47,6	56,8	23,5
Dominica	29,1	...
Granada
Guadalupe	44,5	43,1
Guayana Francesa
Guyana ^e	5,1	1,6	51,7	58,9
Islas Caimán
Islas Turcas y Caicos
Islas Vírgenes Británicas
Islas Vírgenes de los Estados Unidos
Jamaica ^e	1,7	0,1	61,5	58,2	42,3	35,4
Martinica	46,2	42,5
Montserrat	12,6	...
Puerto Rico	38,1	42,4
Saint Kitts y Nevis	12,1	...
San Vicente y las Granadinas	20,2	...
Santa Lucía ^e	23,5	...
Suriname	-0,3	4,3	44,6	44,7	15,6	...
Trinidad y Tabago	-2,4	5,7	45,0	61,5	21,7	15,6

Fuente: Naciones Unidas, *El progreso de América Latina y el Caribe hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Desafíos para lograrlos con igualdad*, (LC/G.2460), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), agosto de 2010.

^a El orden de los indicadores corresponde a la enumeración oficial y la ausencia de alguno de ellos se debe a la falta de información.

^b No se incluye la República Dominicana. Los niveles de 1990 no son comparables con los de 2000 en adelante.

^c Las cifras corresponden a zonas urbanas.

^d Promedios ponderados.

^e Corresponde a la proporción de población con ingresos inferiores a 1 dólar PPA (paridad del poder adquisitivo) por día. Disponibles en el sitio oficial de las Naciones Unidas para los indicadores del Milenio: <http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Default.aspx> [en línea].

Cuadro A-21
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: EVALUACIÓN DEL PROGRESO HACIA EL LOGRO DE LAS METAS DEL MILENIO ^a
(En porcentajes)

País	Objetivo 1 Erradicar la extrema pobreza y el hambre			
	Meta 1.C Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padecen hambre			
	Indicador 1.8 Proporción de niños menores de 5 años con insuficiencia ponderal		Indicador 1.9 Proporción de la población por debajo del nivel mínimo de consumo de energía alimentaria	
	Nivel 1989-1999	Nivel 1996-2008	Nivel 1990-1992	Nivel 2007
América Latina y El Caribe ^b	10,1	7,3	15,7	12,2
América Latina ^b	10,1	7,6	18,1	13,9
Argentina ^c	1,9	3,8	<=5	<=5
Bolivia (Estado Plurinacional de)	11,2	5,9	24	27
Brasil	7,0	4,6	10	6
Chile	0,9	0,6	7	<=5
Colombia	10,1	6,9	15	9
Costa Rica	2,8	4,0	<=5	<=5
Cuba	6,1	4,0	5	<=5
Ecuador ^c	14,6	8,6	24	15
El Salvador	11,2	8,6	9	9
Guatemala	26,6	22,7	14	22
Haití	26,8	22,2	63	57
Honduras	18,0	11,4	19	12
México	7,5	5,0	<=5	<=5
Nicaragua	11,0	6,9	52	19
Panamá	6,1	6,8	18	15
Paraguay	3,7	4,2	16	10
Perú	10,8	7,6	28	16
República Dominicana	10,3	4,3	27	24
Uruguay ^c	4,4	6,0	5	<=5
Venezuela (República Bolivariana de)	7,7	4,6	10	7
El Caribe ^b	9,7	6,0	11,8	9,7
Anguila
Antigua y Barbuda	...	1,6	...	21
Antillas Neerlandesas	14	<=5
Aruba
Bahamas	9	6
Barbados	<=5
Belice	6,2	6,1	7	<=5
Dominica	4	<=5
Granada	9	21
Guadalupe
Guayana Francesa
Guyana	18,3	12,4	21	8
Islas Caimán
Islas Turcas y Caicos
Islas Vírgenes Británicas
Islas Vírgenes de los Estados Unidos
Jamaica	4,6	4,0	11	<=5
Martinica
Montserrat
Puerto Rico
Saint Kitts y Nevis	13	16
San Vicente y las Granadinas	22	<=5
Santa Lucía	8	8
Suriname	13	15
Trinidad y Tabago	...	5,9	11	11

Fuente: Naciones Unidas, Indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio [en línea] <http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx>; *El progreso de América Latina y el Caribe hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Desafíos para lograrlos con igualdad* (LC/G.2460), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), agosto de 2010.

^a El orden de los indicadores corresponde a la enumeración oficial y la ausencia de alguno de ellos se debe a la falta de información.

^b Promedios simples.

^c Las cifras corresponden a zonas urbanas.

Cuadro A-22
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: EVALUACIÓN DEL PROGRESO HACIA EL LOGRO DE LAS METAS DEL MILENIO^a
(En porcentajes)

País	Objetivo 2 Lograr la enseñanza primaria universal					
	Meta 2.A Asegurar que, para el año 2015, los niños y niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria					
	Indicador 2.1 Tasa neta de matriculación en la enseñanza primaria		Indicador 2.2 Proporción de alumnos que comienzan el primer grado y llegan al último grado de enseñanza primaria		Indicador 2.3 Tasa de alfabetización de las personas de 15 a 24 años, mujeres y hombres	
	Nivel 1991	Nivel 2007-2009	Nivel 1992-1999	Nivel 2004-2008	Nivel 1991	Nivel 2007-2009
América Latina y El Caribe^b	84,8	94,3	78,8	88,7	90,4	96,1
América Latina^b	81,0	95,1	78,2	90,2	89,5	95,8
Argentina	...	99,1	97,1	97,8	98,3	99,2
Bolivia (Estado Plurinacional de)	...	95,0	67,1	96,4	93,9	99,1
Brasil	85,4	95,1	82,2	94,7	91,8	97,8
Chile	89,4	95,1	95,5	98,7	98,4	98,9
Colombia	69,5	93,1	85,6	93,6	90,5	97,9
Costa Rica	87,6	...	84,6	94,1	97,4	98,2
Cuba	98,6	99,3	96,0	99,3	96,2	100,0
Ecuador	99,2	97,4	89,8	96,2	96,2	96,8
El Salvador	...	95,6	69,0	76,1	84,9	95,0
Guatemala	...	96,4	52,2	62,6	76,0	86,5
Haití	22,0	...	38,4	...	54,8	81,7
Honduras	87,6	97,2	61,7	79,2	79,7	93,9
México	98,6	99,5	86,7	95,7	95,4	98,5
Nicaragua	69,0	93,4	60,2	70,8	68,2	87,0
Panamá	...	97,5	89,3	94,6	95,1	96,4
Paraguay	92,8	85,6	78,3	95,0	95,6	98,8
Perú	...	97,3	85,4	93,9	95,4	97,4
República Dominicana	54,6	82,4	76,3	88,3	87,5	96,0
Uruguay	92,4	99	96,2	96,7	98,6	99,0
Venezuela (República Bolivariana de)	88,9	93,9	88,3	93,5	95,4	98,4
El Caribe^b	91,4	93,4	79,8	86,1	93,3	96,6
Anguila	...	92,9	77,4
Antigua y Barbuda	...	89,7
Antillas Neerlandesas	82,2	...	97,0	98,4
Aruba	...	96,8	95,6	91,4	...	99,4
Bahamas	90,3	91,6	...	90,7
Barbados	84,3	...	91,2	95,8	99,8	99,8
Belice	94,4	99,6	74	94,7	76,4	84,2
Dominica	...	97,5	80,9	88,9
Granada	...	98,5
Guadalupe	93,4	99,9
Guayana Francesa
Guyana	95,4	98,8	65,1	83,5
Islas Caimán	...	82,2	99,9
Islas Turcas y Caicos	44
Islas Vírgenes Británicas	...	95
Islas Vírgenes de los Estados Unidos
Jamaica	97,1	80,5	85,4	81	91,2	95,2
Martinica	99,8
Montserrat
Puerto Rico	96,1	87,2
Saint Kitts y Nevis	...	93,7	...	67,4
San Vicente y las Granadinas	...	98,3
Santa Lucía	96,4	93,1	88,4	92,8
Suriname	82,1	90,1	...	67,8	...	99,4
Trinidad y Tabago	91,1	95,8	...	93,1	99,3	99,5

Fuente: Naciones Unidas, Indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio [en línea] <http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx>; *El progreso de América Latina y el Caribe hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Desafíos para lograrlos con igualdad* (LC/G.2460), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), agosto de 2010.

^a El orden de los indicadores corresponde a la enumeración oficial y la ausencia de alguno de ellos se debe a la falta de información.

^b Promedios simples.

Cuadro A-23
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: EVALUACIÓN DEL PROGRESO HACIA EL LOGRO DE LAS METAS DEL MILENIO^a
 (En porcentajes)

País	Objetivo 3 Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer									
	Meta 3.A Eliminar las desigualdades entre los sexos en la enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza para el año 2015									
	Indicador 3.1 Relación entre niños y niñas matriculados en la enseñanza primaria		Indicador 3.1 Relación entre niños y niñas matriculados en la enseñanza secundaria		Indicador 3.1 Relación entre niños y niñas matriculados en la enseñanza superior		Indicador 3.2 Proporción de mujeres entre los empleados remunerados en el sector no agrícola		Indicador 3.3 Proporción de escaños ocupados por mujeres en los parlamentos nacionales	
	Nivel 1991	Nivel 2008-2009	Nivel 1991	Nivel 2008-2009	Nivel 1991	Nivel 2008-2009	Nivel 1990-2002	Nivel 2008-2009	Nivel 1990-1992	Nivel 2011
América Latina y el Caribe^b	0,98	0,97	1,14	1,06	1,02	1,75	40,95	45,34	9,20	18,01
América Latina^b	0,98	0,97	1,12	1,07	1,01	1,37	38,18	41,46	9,17	21,10
Argentina	...	0,99	...	1,14	...	1,52	37,1	...	6,3	38,5
Bolivia (Estado Plurinacional de)	0,92	0,99	...	0,98	35,2	...	9,2	25,4
Brasil	...	0,93	...	1,11	1,11	...	35,1	...	5,3	8,6
Chile	0,98	0,95	1,07	1,03	...	1,03	34,7	36,9	7,5	14,2
Colombia	1,02	1,00	1,19	1,10	1,07	1,05	41,8	47,5	4,5	12,7
Costa Rica	0,99	0,99	1,06	1,06	37,2	41,3	10,5	38,6
Cuba	0,92	0,95	1,10	0,90	1,34	1,72	39,6	42,6	34,3	43,3
Ecuador	0,99	1,01	...	1,03	...	1,15	34,1	...	4,5	32,3
El Salvador	1,01	0,97	1,22	1,02	...	1,09	45,6	...	11,7	19,0
Guatemala	0,87	0,94	...	0,93	36,8	...	7,0	12,0
Haití	0,95	...	0,94	44,2	...	3,6	11,1
Honduras	1,04	1,00	1,23	1,27	0,79	1,51	33,3	...	10,2	18,0
México	0,97	0,98	0,99	1,06	0,74	0,97	36,5	39,4	12,0	26,2
Nicaragua	1,06	0,98	1,20	1,13	0,96	14,8	20,7
Panamá	...	0,97	...	1,08	...	1,54	45,4	42,1	7,5	8,5
Paraguay	0,97	0,97	1,05	1,05	...	1,43	41,0	39,5	5,6	12,5
Perú	0,97	1,00	0,94	0,99	37,2	...	5,6	27,5
República Dominicana	1,00	0,86	...	1,13	31,0	...	7,5	20,8
Uruguay	0,99	0,97	...	1,13	...	1,75	42,3	...	6,1	15,2
Venezuela (República Bolivariana de)	1,03	0,97	1,38	1,09	...	1,69	35,2	41,6	10,0	17,0
El Caribe^b	0,98	0,97	1,16	1,05	1,03	2,08	43,4	49,2	9,3	13,3
Anguila	...	1,00	...	0,95	...	5,01	42,8
Antigua y Barbuda	...	0,94	...	1,00	...	2,21	...	50,6	0,0	10,5
Antillas Neerlandesas	1,19	42,7	51,0
Aruba	...	0,97	...	1,03	...	1,40	43,9
Bahamas	1,03	1,00	...	1,03	49,6	50,2	4,1	12,2
Barbados	1,00	1,24	...	46,8	50,7	3,7	10,0
Belice	0,98	0,97	1,15	1,08	...	1,85	33,9	...	0,0	0,0
Dominica	...	0,99	...	1,06	...	3,22	39,7	...	10,0	12,5
Granada	0,85	0,94	1,16	1,01	...	1,36	40,4	...	20,0	13,3
Guadalupe	46,6
Guayana Francesa	36,1
Guyana	0,99	0,99	1,06	1,01	...	0,96	38,5	...	36,9	30,0
Islas Caimán	...	0,94	...	1,10	...	2,16	50,0	50,5
Islas Turcas y Caicos	0,90	43,1
Islas Vírgenes Británicas	...	0,94	...	1,03	...	1,64	49,9
Islas Vírgenes de los Estados Unidos
Jamaica	0,99	0,97	1,06	1,04	0,74	2,22	46,2	48,2	5,0	13,3
Martinica	45,4	50,8
Montserrat	43,4
Puerto Rico	1,56	46,5	41,7
Saint Kitts y Nevis	1,02	1,02	1,11	1,08	...	2,10	6,7	6,7
San Vicente y las Granadinas	0,98	0,93	1,24	1,04	9,5	14,3
Santa Lucía	0,94	0,97	1,45	1,03	1,35	2,58	51,8	...	0,0	11,1
Suriname	1,03	0,95	1,16	1,28	39,5	...	7,8	9,8
Trinidad y Tabago	1,00	0,96	1,04	1,07	0,78	...	35,6	...	16,7	28,6

Fuente: Naciones Unidas, Indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio [en línea] <http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx>; *El progreso de América Latina y el Caribe hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Desafíos para lograrlos con igualdad* (LC/G.2460), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), agosto de 2010.

^a El orden de los indicadores corresponde a la enumeración oficial y la ausencia de alguno de ellos se debe a la falta de información.

^b Promedios simples.

Cuadro A-24
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: EVALUACIÓN DEL PROGRESO HACIA EL LOGRO DE LAS METAS DEL MILENIO^a

País	Objetivo 4					
	Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años					
	Meta 4.A Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de los niños menores de 5 años					
	Indicador 4.1		Indicador 4.2		Indicador 4.3	
Tasa de mortalidad de niños menores de 5 años (por 1.000 nacidos vivos)		Tasa de mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos)		Proporción de niños de 1 año vacunados contra el sarampión (en porcentajes)		
Nivel 1991	Nivel 2009	Nivel 1990	Nivel 2009	Nivel 1990	Nivel 2007	
América Latina y el Caribe^b	45,9	23,4	34,4	18,3	79,7	90,9
América Latina^b	57,3	27,4	42,9	21,0	77,6	90,1
Argentina	30,1	14,9	25,8	12,9	93,0	99,0
Bolivia (Estado Plurinacional de)	114,6	57,1	82,6	42,6	53,0	81,0
Brasil	60,1	27,6	47,5	22,5	78,0	99,0
Chile	19,1	8,5	16,3	7,0	97,0	91,0
Colombia	42,5	25,3	31,5	18,7	82,0	95,0
Costa Rica	18,4	11,2	16,0	9,7	90,0	90,0
Cuba	13,4	6,1	10,7	4,5	94,0	100,0
Ecuador	65,5	24,4	49,9	20,0	60,0	99,0
El Salvador	64,8	24,6	47,1	20,0	98,0	98,0
Guatemala	85,5	36,5	61,0	27,6	68,0	93,0
Haití	137,3	68,2	92,7	46,6	31,0	58,0
Honduras	70,8	40,2	48,0	27,2	90,0	89,0
México	44,2	18,9	36,3	15,6	75,0	96,0
Nicaragua	75,9	23,8	56,5	20,0	82,0	99,0
Panamá	35,9	22,9	28,3	17,5	73,0	89,0
Paraguay	57,8	37,0	44,8	31,0	69,0	80,0
Perú	85,1	30,7	57,8	18,5	64,0	99,0
República Dominicana	64,2	31,3	55,3	28,0	96,0	96,0
Uruguay	24,3	15,8	21,4	12,7	97,0	96,0
Venezuela (República Bolivariana de)	31,6	21,1	25,0	16,4	61,0	55,0
El Caribe^b	31,7	18,8	24,4	15,3	83,1	92,3
Anguila
Antigua y Barbuda	89,0	99,0
Antillas Neerlandesas	...	13,4	16,1	12,4
Aruba	21,2	17,4	18,3	14,9
Bahamas	24,7	11,2	16,6	8,0	86,0	96,0
Barbados	17,8	10,1	15,1	9,5	87,0	75,0
Belice	38,5	19,8	30,6	15,9	86,0	96,0
Dominica	88,0	96,0
Granada	40,5	14,1	33,0	12,8	85,0	98,0
Guadalupe	20,4	8,7	15,6	6,7
Guayana Francesa	26,3	14,4	22,5	13,0
Guyana	90,2	52,4	64,9	40,3	73,0	96,0
Islas Caimán
Islas Turcas y Caicos
Islas Vírgenes Británicas
Islas Vírgenes de los Estados Unidos	18,3	9,7	15,8	8,8
Jamaica	33,9	27,1	27,8	22,5	74,0	76,0
Martinica	12,4	7,7	9,8	6,5
Montserrat
Puerto Rico	14,9	8,7	12,7	6,9
Saint Kitts y Nevis	99,0	99,0
San Vicente y las Granadinas	39,3	26,8	32,3	22,3	96,0	99,0
Santa Lucía	24,4	15,1	18,5	12,0	82,0	94,0
Suriname	49,4	30,4	36,5	21,7	65,0	85,0
Trinidad y Tabago	35,2	32,1	28,7	25,1	70,0	91,0

Fuente: Naciones Unidas, Indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio [en línea] <http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx>; *El progreso de América Latina y el Caribe hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Desafíos para lograrlos con igualdad (LC/G.2460)*, Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), agosto de 2010.

^a El orden de los indicadores corresponde a la enumeración oficial y la ausencia de alguno de ellos se debe a la falta de información.

^b Promedios ponderados.

Cuadro A-25
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: EVALUACIÓN DEL PROGRESO HACIA EL LOGRO DE LAS METAS DEL MILENIO^a
 (En porcentajes)

País	Objetivo 5 Mejorar la salud materna												
	Meta 5.A Reducir, entre 1990 y 2015, la mortalidad materna en tres cuartas partes					Meta 5.B Lograr, para el año 2015, el acceso universal a la salud reproductiva							
	Indicador 5.1 Tasa de mortalidad materna	Indicador 5.2 Proporción de partos con asistencia de personal sanitario especializado	Indicador 5.3 Tasa de uso de anticonceptivos	Indicador 5.4 Tasa de natalidad entre las adolescentes	Indicador 5.5 Cobertura de atención prenatal (al menos una consulta)	Indicador 5.5 Cobertura de atención prenatal (al menos cuatro consultas)	Indicador 5.5 Cobertura de atención prenatal (al menos cuatro consultas)	Indicador 5.6 Necesidades insatisfechas en materia de planificación familiar	Indicador 5.6 Necesidades insatisfechas en materia de planificación familiar	Indicador 5.6 Necesidades insatisfechas en materia de planificación familiar			
	Nivel 2000-2001	Nivel 1984-2005	Nivel 1999-2008	Nivel 1990-2001	Nivel 1990-2008	Nivel 1990-1995	Nivel 1994-2006	Nivel 1990-2006	Nivel 1993-2008	Nivel 1996-2004	Nivel 1991-2008	Nivel 1995-1999	Nivel 1995-2005
América Latina y el Caribe^b	71,2	78,3	88,9	59,5	69,6	77,5	70,4	83,6	95,0	77,6	87,2	12,9	10,4
América Latina^b	71,2	78,1	88,8	59,4	69,7	77,5	70,7	83,4	95,0	77,6	87,2	12,9	10,4
Argentina	35,0	95,8	99,4	...	65,3	68,3	62,6	62,6	95,0	...	89,3
Bolivia (Estado Plurinacional de)	...	37,8	65,8	45,3	60,6	96,0	88,0	52,5	77,0	...	72,1	26,1	22,7
Brasil	73,3	81,0	97,0	60,7	64,2	64,8	48,8	85,7	97,4	75,9	87,0	...	7,3
Chile	18,7	98,4	99,8	66,1	78,2	92,0	96,2	82,7	95,0	...	83,1	...	5,8
Colombia	104,9	93,7	96,4	66,1	78,2	92,0	96,2	82,7	95,0	...	83,1
Costa Rica	35,8	19,1	97,0	75,0	80,0	91,1	62,7	95,0	91,7	...	86,0
Cuba	40,4	99,9	99,9	74,5	77,6	77,5	41,8	100,0	100,0
Ecuador	...	66,3	99,1	56,8	72,7	101,0	100,0	74,7	84,2	...	66,5	28,0	22,9
El Salvador	...	52,0	92,4	53,3	72,5	102,0	67,0	68,7	94,0	71,2	78,6	10,0	7,4
Guatemala	...	35,0	41,4	31,4	43,3	119,6	92,1	52,5	84,3	...	65,9	14,2	8,9
Haití	...	23,0	26,1	18,0	32,0	79,0	68,6	67,7	84,5	...	53,8	24,3	27,6
Honduras	...	40,5	66,9	46,7	65,2	136,0	107,9	87,8	91,7	...	80,8	...	39,8
México	72,6	83,8	93,4	63,1	70,9	97,8	82,1	...	86,1	18,0	11,2
Nicaragua	87,0	61,0	73,7	54,5	72,4	158,0	108,5	71,5	90,2	71,6	77,8	...	14,6
Panamá	...	85,8	91,0	88,0	84,8	...	72,2
Paraguay	164,0	66,0	77,1	48,4	79,4	107,0	65,0	83,9	96,0	78,8	78,7	...	6,6
Perú	...	52,5	71,0	59,0	71,3	68,0	59,0	63,9	91,0	86,0	91,6	19,2	8,8
República Dominicana	69,0	92,4	97,8	56,4	72,9	115,0	98,0	96,9	99,0	89,5	94,5	12,5	10,9
Uruguay	...	99,6	99,6	...	77,0	64,7	91,3	94,0	97,1
Venezuela (República Bolivariana de)	60,1	95,3	95,0	58,0	70,3	104,6	61,3	...	94,1
El Caribe^b	...	88,3	95,2	62,8	67,1	79,2	57,1	94,6	92,1
Anguila	...	100,0	100,0	...	43,0	43,4	40,1
Antigua y Barbuda	...	0,0	99,9	82,5	66,8	82,0	100,0
Antillas Neerlandesas	55,5	40,0
Aruba	57,0	43,0
Bahamas	...	99,0	99,0	67,6	44,2	98,0	98,0
Barbados	...	100,0	100,0	55,1	47,7	100,0	100,0
Belize	...	83,8	95,8	46,7	34,3	135,2	94,1	95,9	94,0	...	76,4
Dominica	...	99,9	99,0	105,5	51,0	90,0	100,0
Granada	...	99,0	100,0	54,3	54,3	99,4	52,9	100,0	100,0
Guadalupe
Guayana Francesa
Guyana	112,5	95,0	83,3	38,2	34,2	94,8	90,0	80,9	81,4
Islas Caimán	88,7	58,7
Islas Turcas y Caicos
Islas Vírgenes Británicas	...	100,0	100,0	28,3	43,2
Islas Vírgenes de los Estados Unidos	...	0,0	78,4	73,6	53,9
Jamaica	95,0	79,0	96,7	62,0	69,0	93,6	58,2	99,0	90,5	87,2	...	12,7	...
Martínica	12,8
Montserrat	...	100,0	100,0
Puerto Rico	77,7	84,1	53,6	33,7
Saint Kitts y Nevis	...	99,4	100,0	75,4	60,0
San Vicente y las Granadinas	...	99,3	100,0	82,1	68,1	100,0	100,0
Santa Lucía	...	99,7	100,0	96,7	57,4	91,8	95,0
Suriname	...	91,0	89,8	48,0	42,1	99,9	52,7	100,0	99,2
Trinidad y Tabago	...	97,9	97,8	38,2	42,5	74,8	63,4	92,4	89,9

Fuente: Naciones Unidas, *El progreso de América Latina y el Caribe hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Desafíos para lograrlos con igualdad* (LC/G.2460), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), agosto de 2010.

^a El orden de los indicadores corresponde a la enumeración oficial y la ausencia de alguno de ellos se debe a la falta de información.

^b Promedios ponderados.

Cuadro A-26
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: EVALUACIÓN DEL PROGRESO HACIA EL LOGRO DE LAS METAS DEL MILENIO^a
 (En porcentajes)

País	Objetivo 6 Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades											
	Meta 6.A Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la propagación del VIH/SIDA											
	Indicador 6.1 Prevalencia del VIH entre las personas de 15 a 24 años (serie disponible para el grupo etario de 15 a 49 años)		Indicador 6.2 Uso de preservativos en la última relación sexual de alto riesgo (mujeres)		Indicador 6.2 Uso de preservativos en la última relación sexual de alto riesgo (hombres)		Indicador 6.3 Proporción de la población de 15 a 24 años que tiene conocimientos amplios y correctos sobre el VIH/SIDA (mujeres)		Indicador 6.3 Proporción de la población de 15 a 24 años que tiene conocimientos amplios y correctos sobre el VIH/SIDA (hombres)		Indicador 6.4 Relación entre la asistencia escolar de niños huérfanos y de niños no huérfanos de 10 a 14 años	
	Nivel 1990-2006	Nivel 2007	Nivel 1996-2000	Nivel 2001-2007	Nivel 1996-2000	Nivel 2003-2007	Nivel 2000-2006	Nivel 2000-2007	Nivel 1996-2000	Nivel 2003-2007	Nivel 1994-1998	Nivel 1996-2006
América Latina y el Caribe^b	0,3	0,5	18,6	29,2	19,9	22,2	27,4	38,1	25,3	36,8	0,9	0,8
América Latina^b	0,3	0,5	18,6	29,2	19,9	22,2	25,9	37,6	25,3	36,8	0,9	0,8
Argentina	0,2	0,5	...	44,0	...	48,0	0,82	0,74
Bolivia (Estado Plurinacional de)	0,1	0,2	15,0	...	18,0	...	0,96
Brasil	0,4	0,6
Chile	0,1	0,3	...	18,0	...	30,0	0,85
Colombia	0,1	0,6	22,0	31,0
Costa Rica	0,1	0,4	...	11,0	...	15,0
Cuba	0,1	0,1	3,4	33,0	7,9	41,0	60,8	61,6	30,4	54,9	1,0	1,0
Ecuador	0,1	0,3
El Salvador	0,1	0,8
Guatemala	0,1	0,8
Haití	1,2	2,2	30,0	21,0	21,0	34,0	15,0	34,0	28,0	40,0	0,76	0,86
Honduras	1,3	0,7	...	32,0	...	38,0	...	30,0	1,08
México	0,2	0,3	20,0	1,06
Nicaragua	0,1	0,2	...	19,0	22,0
Panamá	0,4	1,0
Paraguay	0,1	0,6
Perú	0,1	0,5	15,0	31,0	19,0	0,85
República Dominicana	0,6	1,1	19,0	33,0	9,0	42,0	36,0	41,0	23,0	34,0	0,96	0,77
Uruguay	0,1	0,6	...	65,0	...	69,0
Venezuela (República Bolivariana de)	0,6	1,8
El Caribe^b	0,6	1,8	53,0	50,0	...	47,0
Anguila
Antigua y Barbuda
Antillas Neerlandesas
Aruba
Bahamas	3,8	3,0
Barbados	0,5	1,2
Belize	0,1	2,1	40,0
Dominica	68,0
Grenada	52,0
Guadalupe
Guayana Francesa
Guayana	1,3	2,5	...	56,0	...	53,0	53,0	50,0	...	47,0
Islas Caimán
Islas Turcas y Caicos
Islas Virgenes Británicas
Islas Virgenes de los Estados Unidos
Jamaica	0,3	1,6	...	53,0	...	67,0	...	60,0
Martínica
Montserrat
Puerto Rico
Saint Kitts y Nevis
San Vicente y las Granadinas	52,0	...	62,0
Santa Lucía	39,0	...	48,0
Suriname	0,1	2,4	41,0
Trinidad y Tabago	0,2	1,5	54,0

Fuente: Naciones Unidas, *El progreso de América Latina y el Caribe hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Desafíos para lograrlos con igualdad*, (LC/G.24(60)), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), agosto de 2010.

^a El orden de los indicadores corresponde a la enumeración oficial y la ausencia de alguno de ellos se debe a la falta de información.

^b Promedios ponderados.

Cuadro A-27
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: EVALUACIÓN DEL PROGRESO HACIA EL LOGRO DE LAS METAS DEL MILENIO^a
 (En porcentajes)

País	Objetivo 6 Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades													
	Meta 6.C Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la incidencia del paludismo y otras enfermedades graves													
	Indicador 6.5 Proporción de la población portadora del VIH con infección avanzada que tiene acceso a medicamentos antirretrovirales		Indicador 6.8 Proporción de niños menores de 5 años con fiebre que reciben tratamientos con los medicamentos adecuados contra el paludismo		Indicador 6.9 Tasa de incidencia asociada a la tuberculosis		Indicador 6.9 Tasa de prevalencia asociada a la tuberculosis		Indicador 6.9 Tasa de mortalidad asociada a la tuberculosis		Indicador 6.10 Proporción de casos de tuberculosis detectados con el tratamiento breve bajo observación directa		Indicador 6.10 Proporción de casos de tuberculosis curados con el tratamiento breve bajo observación directa	
Nivel 2006	Nivel 2009	Nivel 2006	Nivel 2009	Nivel 1990	Nivel 2009	Nivel 1990	Nivel 2009	Nivel 1990	Nivel 2009	Nivel 1994-2001	Nivel 2009	Nivel 1994-2003	Nivel 2008	
América Latina y el Caribe^b	46,5	49,1	...	60,5	40,7	123,2	66,2	14,7	4,8	53,2	77,3	72,8	79,0	
Argentina	47,1	47,2	...	101,5	56,2	135,4	76,3	16,2	5,8	36,6	80,8	74,5	80,0	
Bolivia (Estado Plurinacional de)	18	19	...	255	140	290	216	37	1,8	39	64	66	84	
Brasil	78	60	...	84	45	98	50	12	2,1	4	86	91	71	
Chile	68	63	...	38	11	11	15	3	1,4	73	130	83	72	
Colombia	34	17	...	53	35	59	49	7,5	2,7	30	70	74	76	
Costa Rica	95	68	...	18	10	35	11	4	1,3	31	93	81	89	
Cuba	100	100	...	5,1	5,9	62	5,0	0,5	0,4	92	90,3	86	88	
Ecuador	24	30	...	167	36	310	112	36	6,9	5	51	82	78	
El Salvador	46	53	...	92	30	104	103	8,8	0,8	46	92	77	91	
Guatemala	31	44	...	74	62	120	104	14	3,6	43	33	62	83	
Haití	26	43	...	306	238	280	312	28	30,0	2	60	73	82	
Honduras	41	33	...	98	58	140	81	17	7,4	2	68	93	85	
México	61	54	...	130	19	15	15	15	0,6	13	99	75	85	
Nicaragua	26	40	...	108	44	130	53	17	2,9	72	90	81	89	
Panamá	42	37	...	47	48	44	54	5,7	9,4	12	94	51	79	
Paraguay	25	37	...	60	47	13	66	3,7	4,5	14	78	46	81	
Perú	42	37	...	117	113	450	126	5,2	5,2	102	97	81	75	
República Dominicana	24	47	...	114	70	350	107	39	11,0	9	60	81	82	
Uruguay	55	49	...	28	22	9,8	23	1,8	1,0	76	96	83	83	
Venezuela (República Bolivariana de)	35	33	32	48	4,3	3,1	73	68	68	83	
El Caribe^b	44,5	58,5	...	19,4	24,4	74,5	56,5	8,8	3,8	78,6	72,4	70,3	77,6	
Anguila	24	21	...	53	...	7,9	
Antigua y Barbuda	10	5,1	...	8,8	...	8,5	44	67	50	100	
Antillas Neerlandesas	14	0	...	0,0	
Aruba	
Bahamas	44	15	...	14	...	1,3	67	...	72	74	
Barbados	67	7	0,9	...	0,8	...	0,1	118	89	100	100	
Belize	42	40	...	40	40	16	51	3,1	12,0	98	72	88	83	
Dominica	15	13	...	13	...	0,7	94	46	100	100	
Granada	5	4,1	...	4,7	...	0,3	...	120	...	33	
Guadalupe	
Guayana Francesa	
Guyana	37	95	...	27	112	200	127	22	14,0	11	90	91	69	
Islas Caimán	7	30	...	0,8	130	...	100	...	
Islas Turcas y Caicos	13	...	33	...	4,9	
Islas Vírgenes Británicas	19	9,9	...	94	...	3,4	
Islas Vírgenes de los Estados Unidos	19	8,6	...	0	...	0,0	
Jamaica	33	46	...	7	6,6	5,2	7,7	1	0,7	92	78	67	64	
Martinica	
Montserrat	9	7,8	...	474	...	17,0	0	...	0	...	
Puerto Rico	11	1,8	1,4	2	1	0,1	72	89	63	63	
Saint Kitts y Nevis	20	9,2	...	11	...	0,6	84	25	80	80	
San Vicente y las Granadinas	27	24	...	25	...	1,2	18	34	86	100	
Santa Lucía	16	14	...	16	...	0,6	113	41	67	94	
Suriname	35	53	...	66	135	150	208	17	2,4	...	25	67	59	
Trinidad y Tabago	53	11	23	...	23	...	2,7	...	89	...	67	

Fuente: Naciones Unidas, Indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio [en línea] <http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx>; *El progreso de América Latina y el Caribe hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Desafíos para lograrlos con igualdad* (LC/G.2460), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), agosto de 2010.

^a El orden de los indicadores corresponde a la enumeración oficial y la ausencia de alguno de ellos se debe a la falta de información.

^b Promedios simples.

Cuadro A-28
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: EVALUACIÓN DEL PROGRESO HACIA EL LOGRO DE LAS METAS DEL MILENIO^a
(En porcentajes)

País	Objetivo 7 Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente										Meta 7.B Haber reducido significativamente la tasa de pérdida de biodiversidad para el año 2010									
	Meta 7.A Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales e invertir la pérdida de recursos del medio ambiente					Objetivo 7.2 Emisiones de dióxido de carbono (en kg por cada dólar del PIB, en dólares constantes de 2000)					Indicador 7.3 Consumo de sustancias que agotan la capa de ozono (desagregado, en toneladas métricas)		Indicador 7.5 Proportión de los recursos hídricos utilizada		Indicador 7.6 Proportión de las áreas terrestres y marinas protegidas (desagregado)		Indicador 7.7 Proportión de especies en peligro de extinción (plantas)		Indicador 7.7 Proportión de especies en peligro de extinción (animales)	
	Indicador 7.1 Proportión de la superficie cubierta por bosques	Indicador 7.2 Emisiones de dióxido de carbono (total, en miles de toneladas métricas)	Indicador 7.2 Emisiones de dióxido de carbono (en toneladas métricas per cápita)	Indicador 7.2 Emisiones de dióxido de carbono (en kg por cada dólar del PIB, en dólares constantes de 2000)	Indicador 7.3 Consumo de sustancias que agotan la capa de ozono (desagregado, en toneladas métricas)	Indicador 7.5 Proportión de los recursos hídricos utilizada	Indicador 7.6 Proportión de las áreas terrestres y marinas protegidas (desagregado)	Indicador 7.7 Proportión de especies en peligro de extinción (plantas)	Indicador 7.7 Proportión de especies en peligro de extinción (animales)	Nivel	Nivel	Nivel	Nivel	Nivel	Nivel	Nivel	Nivel	Nivel	Nivel	Nivel
América Latina y el Caribe^b	41,80	43,4	1 078 371	1 651 877	4,30	5,30	0,40	0,30	77 139,9	10 403,3	6,9	8,1	7,5	12,6	0,60	0,60	0,90	0,90	0,60	0,60
América Latina^b	40,60	35,8	1 033 802	1 565 843	1,70	2,20	0,30	0,30	75 884,0	5 284,3	7,8	4,4	10,6	17,4	0,60	0,60	0,90	0,90	0,60	0,60
Argentina	12,89	10,7	112 607	192 378	3,46	4,82	0,46	0,36	1 514,5	395,4	3,5	3,6	5,0	6,2	0,93	0,93	0,93	0,93	0,74	0,74
Bolivia (Estado Plurinacional de)	57,91	52,7	5 504	12 835	0,83	1,32	0,27	0,34	76,7	4,4	0,7	0,2	8,9	21,2	0,97	0,97	0,97	0,97	0,68	0,68
Brasil	61,47	62,4	208 875	393 220	1,40	2,04	0,19	0,21	39 337,3	1 459,4	0,7	0,7	9,0	28,9	0,64	0,64	0,93	0,93	0,64	0,64
Chile	20,38	21,7	35 486	73 109	2,69	4,35	0,41	0,32	1 015,5	246,5	0,4	1,4	13,6	14,0	0,92	0,92	0,92	0,92	0,55	0,55
Colombia	59,15	54,5	57 336	67 700	1,64	1,50	0,29	0,18	2 152,7	320,9	0,4	0,5	24,5	30,3	0,92	0,92	0,92	0,92	0,61	0,61
Costa Rica	50,22	51,0	2 955	8 016	0,96	1,77	0,15	0,17	549,3	211,5	5,1	2,4	16,3	22,9	0,66	0,66	0,94	0,94	0,66	0,66
Cuba	18,74	26,7	33 889	24 243	3,20	2,20	0,30	0,26	975,7	11,7	18,3	16,0	12,9	5,6	0,76	0,76	0,76	0,76	0,66	0,66
Ecuador	49,91	35,6	16 834	26 824	1,64	1,98	0,30	0,26	646,6	82,2	4,0	4,0	15,1	1,0	0,96	0,96	0,96	0,96	0,71	0,71
El Salvador	18,10	13,9	2 618	6 113	0,51	0,99	0,17	0,16	425,7	11,9	2,9	5,1	1,0	1,0	0,96	0,96	0,96	0,96	0,71	0,71
Guatemala	43,79	33,7	5 086	11 914	0,57	0,87	0,17	0,29	360,9	249,3	...	1,8	26,1	31,0	0,92	0,92	0,92	0,92	0,65	0,65
Haití	4,21	3,7	994	2 435	0,14	0,24	0,09	0,24	170,5	1,9	7,0	7,1	0,1	0,1	0,84	0,84	0,84	0,84	0,53	0,53
Honduras	66,00	46,4	2 592	8 672	0,53	1,18	0,20	0,33	114,8	153,9	...	0,9	10,8	16,1	0,93	0,93	0,93	0,93	0,46	0,46
México	36,16	33,3	384 659	475 834	4,58	4,38	0,46	0,36	21 488,9	1 769,6	...	17,0	2,6	8,8	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
Nicaragua	53,86	25,7	2 644	4 331	0,64	0,76	0,34	0,30	86,5	8,6	...	0,7	3,7	15,3	0,96	0,96	0,96	0,96	0,65	0,65
Panamá	58,79	43,7	3 135	6 912	1,30	2,03	0,21	0,17	269,6	25,0	...	0,6	12,9	18,5	0,95	0,95	0,95	0,95	0,83	0,83
Paraguay	53,25	44,3	2 282	4 118	0,53	0,66	0,13	0,15	240,0	25,9	...	0,1	3,1	6,0	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
Perú	54,81	53,1	21 164	40 535	0,97	1,40	0,22	0,18	892,9	27,3	1,0	1,1	4,7	13,2	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
República Dominicana	28,44	40,8	9 570	21 617	1,31	2,17	0,39	0,29	287,9	76,8	39,7	16,0	0,3	0,3	0,86	0,86	0,86	0,86	0,58	0,58
Uruguay	5,17	10,0	3 993	8 328	1,29	2,48	0,18	0,21	464,8	36,8	...	2,3	0,3	0,3	0,89	0,89	0,89	0,89	0,77	0,77
Venezuela (República Bolivariana de)	58,98	52,5	122 151	169 533	6,19	6,02	0,65	0,52	4 808,6	165,3	...	0,7	41,6	65,7	0,95	0,95	0,95	0,95	0,77	0,77
El Caribe^b	42,80	49,6	44 569	86 034	6,20	8,00	0,80	0,50	1 255,9	75,0	9,1	11,2	2,7	5,9	0,95	0,95	0,95	0,95	0,7	0,7
Anguila	71,40	60,0	...	59	...	3,97
Antigua y Barbuda	20,46	22,2	301	447	4,86	5,15	0,38	0,28	425,5	0,5	3,3	0,0	0,7	1,2	0,94	0,94	0,94	0,94	0,45	0,45
Antillas Neerlandesas	1,50	1,3	6 215	6 219	32,60	31,80
Aruba	2,20	0,0	1 841	2 288	28,91	21,69
Bahamas	51,45	51,4	1 951	2 156	7,64	6,38	65,8	3,5	0,4	1,0	0,93	0,93	0,93	0,93	0,73	0,73
Barbados	4,65	18,6	1 074	1 353	3,96	5,30	25,5	4,5	112,5	0,1	0,94	0,94	0,94	0,94	0,50	0,50
Belize	72,50	61,1	312	425	1,68	1,41	0,39	0,21	22,9	2,5	0,6	0,8	14,8	30,2	0,96	0,96	0,96	0,96	0,59	0,59
Bolivia	66,67	60,0	59	128	0,85	1,91	0,14	0,21	1,5	0,4	3,7	4,4	0,94	0,94	0,94	0,94	0,57	0,57
Dominica	11,77	50,0	121	246	1,26	2,37	0,25	0,29	4,1	0,8	0,1	0,1	0,92	0,92	0,92	0,92	0,47	0,47
Guadalupe	49,40	39,8	1 294	2 200	3,31	4,74
Guayana Francesa	91,80	98,3	814	913	6,99	4,14
Guyana	76,73	77,2	1 140	1 525	1,99	1,99	1,04	0,70	19,3	0,9	0,6	0,7	0,0	2,2	0,98	0,98	0,98	0,98	0,80	0,80
Islas Caimán	48,40	50,0	253	557	9,62	10,00
Islas Turcas y Caicos	80,00	79,1	...	158	...	4,83
Islas Vírgenes Británicas	24,70	25,0	48	103	2,89	4,51
Islas Vírgenes de los Estados Unidos	35,00	58,8	...	103	2,89	4,51
Jamaica	31,86	31,1	7 964	12 204	3,36	4,50	0,65	0,63	431,0	19,5	9,6	4,4	1,7	7,1	0,87	0,87	0,87	0,87	0,56	0,56
Martínica	43,90	45,7	2 068	1 918	5,74	4,75
Montserrat	35,00	20,0	33	77	3,07	13,03
Puerto Rico	45,50	62,2
Saint Kitts y Nevis	13,89	42,3	66	249	1,62	4,87	0,19	0,35	6,6	0,4	11,2	12,1	0,8	0,8	0,94	0,94	0,94	0,94	0,75	0,75
San Vicente y las Granadinas	23,08	69,2	81	202	0,74	1,85	0,17	0,22	2,5	0,4	0,3	0,3	0,94	0,94	0,94	0,94	0,60	0,60
Santa Lucía	27,87	77,0	165	396	1,20	2,32	0,18	0,25	11,5	0,4	2,2	2,2	0,93	0,93	0,93	0,93	0,65	0,65
Suriname	94,72	94,6	1 811	2 439	4,50	4,73	0,85	0,69	43,1	2,7	3,9	13,2	0,98	0,98	0,98	0,98	0,75	0,75
Trinidad y Tabago	45,81	44,1	16 958	49 772	13,86	37,32	1,36	1,55	196,6	38,5	7,7	8,1	8,4	8,5	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86

Fuente: Naciones Unidas, Indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (en línea) (<http://mdgs.un.org/indicators/mdg/Data.aspx>); *El Progreso de América Latina y el Caribe hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Desafíos para lograrlos con igualdad* (LC/G.2460), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), agosto de 2010.

^a El orden de los indicadores corresponde a la enumeración oficial y la ausencia de alguno de ellos se debe a la falta de información. Salvo indicación contraria las cifras son porcentajes. Las fuentes, años y detalles correspondientes a cada uno de los indicadores se presentan al final del cuadro.

^b Promedios simples.

Cuadro A-29
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: EVALUACIÓN DEL PROGRESO HACIA EL LOGRO DE LAS METAS DEL MILENIO^a
 (En porcentajes)

País	Objetivo 7 Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente					
	Meta 7.C Reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento				Meta 7.D Haber mejorado considerablemente, para el año 2020, la vida de por lo menos 100 millones de habitantes de tugurios	
	Indicador 7.8 Proporción de población con acceso a fuentes mejoradas de abastecimiento de agua potable		Indicador 7.9 Proporción de población con acceso a servicios de saneamiento mejorados		Indicador 7.10 Proporción de población urbana que vive en tugurios	
	Nivel 1990-1995	Nivel 2008	Nivel 1990-1995	Nivel 2008	Nivel 1990	Nivel 2001-2007
América Latina y el Caribe^b	86,4	92,9	77,1	82,5	32,2	25,1
América Latina^b	80,5	89,9	67,7	75,1	42,4	28,7
Argentina	94,0	97,0	81,0	90,0	30,5	23,5
Bolivia (Estado Plurinacional de)	72,0	86,0	33,0	25,0	70,0	48,8
Brasil	83,0	97,0	71,0	80,0	45,0	28,0
Chile	91,0	96,0	84,0	96,0	4,0	9,0
Colombia	89,0	92,0	68,0	74,0	26,0	16,1
Costa Rica	96,0	97,0	94,0	95,0	11,9	10,9
Cuba	78,2	92,4	88,7	96,1	...	0,6
Ecuador	73,0	94,0	71,0	92,0	28,1	21,5
El Salvador	69,0	87,0	73,0	87,0	44,7	28,9
Guatemala	79,0	94,0	70,0	81,0	65,8	40,8
Haití	52,0	63,0	29,0	17,0	84,9	70,1
Honduras	72,0	86,0	45,0	71,0	24,0	34,9
México	88,0	94,0	56,0	85,0	23,1	14,4
Nicaragua	70,0	85,0	42,0	52,0	80,7	45,5
Panamá	90,0	93,0	72,0	69,0	30,8	23,0
Paraguay	52,0	86,0	60,0	70,0	36,8	17,6
Perú	75,0	82,0	55,0	68,0	60,4	36,1
República Dominicana	84,0	86,0	68,0	83,0	56,4	16,2
Uruguay	100,0	100,0	100,0	100,0
Venezuela (República Bolivariana de)	89,0	...	83,0	...	40,7	32,0
El Caribe^b	92,7	97,2	87,7	93,4	18,0	20,1
Anguila	60,0	...	99,0	99,0	40,6	36,7
Antigua y Barbuda	91,0	...	96,0	...	6,9	4,8
Antillas Neerlandesas
Aruba	100,0	100,0
Bahamas	96,0	...	100,0	100,0
Barbados	100,0	100,0	100,0	100,0
Belice	91,0	99,0	47,0	90,0	54,2	47,3
Dominica	97,0	...	83,0	...	16,6	14,0
Granada	95,0	...	97,0	97,0	6,9	6,0
Guadalupe	98,0	...	64,0	...	6,9	5,4
Guayana Francesa	84,0	...	78,0	...	12,9	10,5
Guyana	83,0	94,0	69,0	81,0	4,9	33,7
Islas Caimán	...	95,0	...	96,0
Islas Turcas y Caicos	100,0	100,0	96,0
Islas Vírgenes Británicas	98,0	98,0	100,0	100,0
Islas Vírgenes de los Estados Unidos
Jamaica	92,0	94,0	83,0	83,0	29,2	60,5
Martinica	2,0	1,6
Montserrat	100,0	100,0	96,0	96,0
Puerto Rico
Saint Kitts y Nevis	99,0	99,0	96,0	96,0
San Vicente y las Granadinas
Santa Lucía	98,0	98,0	89,0	...	11,9	11,9
Suriname	91,0	93,0	92,0	84,0	6,9	3,9
Trinidad y Tabago	88,0	94,0	93,0	92,0	34,7	24,7

Fuente: Naciones Unidas, Indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio [en línea] <http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx>; *El progreso de América Latina y el Caribe hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Desafíos para lograrlos con igualdad* (LC/G.2460), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), agosto de 2010.

^a El orden de los indicadores corresponde a la enumeración oficial y la ausencia de alguno de ellos se debe a la falta de información.

^b Promedios simples.

Cuadro A-30
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: EVALUACIÓN DEL PROGRESO HACIA EL LOGRO DE LAS METAS DEL MILENIO ^a

País	Objetivo 8 Fomentar una alianza mundial para el desarrollo					
	Meta 8.F En colaboración con el sector privado, dar acceso a los beneficios de las nuevas tecnologías, en particular los de las tecnologías de la información y de las comunicaciones					
	Indicador 8.14 Líneas de teléfono fijo por cada 100 habitantes		Indicador 8.15 Abonados a teléfonos celulares por cada 100 habitantes		Indicador 8.16 Usuarios de Internet por cada 100 habitantes	
	Nivel 1990-1992	Nivel 2010	Nivel 2000	Nivel 2010	Nivel 2000	Nivel 2010
América Latina y el Caribe ^b	14,4	25,3	11,1	110,6	6,4	35,6
América Latina ^b	5,2	15,0	9,5	97,9	3,8	27,9
Argentina	9,3	24,7	17,6	141,8	7,1	36,0
Bolivia (Estado Plurinacional de)	2,7	8,5	7,0	72,3	1,4	20,0
Brasil	6,3	21,6	13,3	104,1	2,9	40,7
Chile	6,6	20,2	22,1	116,0	16,5	45,0
Colombia	6,9	14,7	5,4	93,8	2,1	36,5
Costa Rica	9,2	31,8	5,4	65,1	5,8	36,5
Cuba	5,6	10,4	0,1	8,9	0,5	16,0
Ecuador	4,8	14,4	3,9	102,2	1,5	24,0
El Salvador	2,5	16,2	11,8	124,3	1,1	15,0
Guatemala	2,1	10,4	7,7	125,6	0,7	10,5
Haití	0,7	0,5	0,7	40,0	0,3	8,4
Honduras	1,8	8,8	2,4	125,1	1,2	11,1
México	6,4	17,5	14,1	80,6	5,1	31,0
Nicaragua	1,2	4,5	1,8	65,1	1,0	10,0
Panamá	9,0	15,7	13,9	184,7	6,6	42,8
Paraguay	2,7	6,3	15,0	91,6	0,7	23,6
Perú	2,6	10,9	4,9	100,1	3,1	34,3
República Dominicana	4,8	10,2	8,5	89,6	4,0	39,5
Uruguay	13,4	28,6	12,3	131,7	10,5	43,4
Venezuela (República Bolivariana de)	7,5	24,4	22,3	96,2	3,4	35,6
El Caribe ^b	22,8	34,7	12,7	124,0	9,2	43,3
Anguila	30,5	41,0	19,3	156,3	22,3	48,0
Antigua y Barbuda	25,2	47,1	28,8	184,7	6,5	80,0
Antillas Neerlandesas	24,7	44,9	1,1	...
Aruba	28,2	32,6	16,3	122,6	15,2	42,0
Bahamas	27,4	37,7	10,5	124,9	4,4	43,0
Barbados	28,1	50,3	10,7	128,1	3,8	70,2
Belize	9,3	9,7	6,9	62,3	6,2	14,0
Dominica	16,2	22,9	1,5	144,9	7,7	47,5
Granada	15,8	27,2	4,2	116,7	4,1	33,5
Guadalupe
Guayana Francesa
Guyana	2,2	19,9	5,4	73,6	6,7	29,9
Islas Caimán	46,9	66,4	27,0	177,6	44,4	66,0
Islas Turcas y Caicos	24,8	9,7
Islas Vírgenes Británicas	39,3	86,5	...	105,4	...	39,0
Islas Vírgenes de los Estados Unidos	45,6	69,5	31,6	...	13,5	27,4
Jamaica	4,4	9,6	14,2	113,2	3,1	26,1
Martinica
Montserrat	34,5	43,8	12,5	70,8	...	35,0
Puerto Rico	27,8	23,8	24,2	78,3	10,4	45,3
Saint Kitts y Nevis	23,9	39,3	3,0	161,4	6,7	32,9
San Vicente y las Granadinas	12,0	19,9	2,0	120,5	3,0	69,6
Santa Lucía	12,4	23,6	1,6	102,9	5,2	36,0
Suriname	9,1	16,2	9,5	169,6	2,7	31,6
Trinidad y Tabago	13,6	21,9	12,6	141,2	7,8	48,5

Fuente: Naciones Unidas, Indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio [en línea] <http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx>; *El progreso de América Latina y el Caribe hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Desafíos para lograrlos con igualdad* (LC/G.2460), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), agosto de 2010.

^a El orden de los indicadores corresponde a la enumeración oficial y la ausencia de alguno de ellos se debe a la falta de información.

^b Promedios simples.



Publicaciones de la CEPAL / ECLAC publications

Comisión Económica para América Latina y el Caribe / *Economic Commission for Latin America and the Caribbean*

Casilla 179-D, Santiago de Chile. E-mail: publications@cepal.org

Véalas en: www.cepal.org/publicaciones

Publications may be accessed at: www.eclac.org

Revista CEPAL / CEPAL Review

La Revista se inició en 1976 como parte del Programa de Publicaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, con el propósito de contribuir al examen de los problemas del desarrollo socioeconómico de la región. Las opiniones expresadas en los artículos firmados, incluidas las colaboraciones de los funcionarios de la Secretaría, son las de los autores y, por lo tanto, no reflejan necesariamente los puntos de vista de la Organización.

La Revista CEPAL se publica en español e inglés tres veces por año.

Los precios de suscripción anual vigentes para 2010 son de US\$ 30 para ambas versiones. El precio por ejemplar suelto es de US\$ 15 para ambas versiones. Los precios de suscripción por dos años son de US\$ 50 para ambas versiones.

CEPAL Review first appeared in 1976 as part of the Publications Programme of the Economic Commission for Latin America and the Caribbean, its aim being to make a contribution to the study of the economic and social development problems of the region. The views expressed in signed articles, including those by Secretariat staff members, are those of the authors and therefore do not necessarily reflect the point of view of the Organization.

CEPAL Review is published in Spanish and English versions three times a year.

Annual subscription costs for 2010 are US\$ 30 for both versions. The price of single issues is US\$ 15 in both cases. The cost of a two-year subscription is US\$ 50 for both versions.

Informes periódicos institucionales / Annual reports

Todos disponibles para años anteriores / Issues for previous years also available

- *Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe, 2009, 184 p.*
Preliminary Overview of the Economies of Latin America and the Caribbean, 2009, 166 p.
- *Estudio económico de América Latina y el Caribe 2008-2009, 154 p.*
Economic Survey of Latin America and the Caribbean 2008-2009, 144 p.
- *Panorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe, 2008-2009. Crisis y espacios de cooperación regional, 112 p.*
Latin America and the Caribbean in the World Economy, 2008-2009. Crisis and opportunities for regional cooperation, 108 p.
- *Panorama social de América Latina, 2009, 218 p.*
Social Panorama of Latin America, 2009, 208 p.
- *La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe, 2009, 162 p.*
Foreign Direct Investment of Latin America and the Caribbean, 2009, 158 p.
- *Anuario estadístico de América Latina y el Caribe / Statistical Yearbook for Latin America and the Caribbean (bilingüe/bilingual), 2009, 316 p.*

Libros de la CEPAL

108 *Alianzas público-privadas. Para una nueva visión estratégica del desarrollo*, Robert Devlin y Graciela Moguillansky, 2010, 196 p.

105 *Regulation, Worker Protection and Active Labour-Market Policies in Latin America*, Jürgen Weller (ed.), 2009, 236 p.

104 *La República Dominicana en 2030: hacia una sociedad cohesionada*, Víctor Godínez y Jorge Máttar (coords.), 2009, 582 p.

103 *L'Amérique latine et les Caraïbes au seuil du troisième millénaire*, 2009, 138 p.

102 *Migración interna y desarrollo en América Latina entre 1980 y 2005*, Jorge Rodríguez y Gustavo Busso, 2009, 272 p.

101 *Claves de la innovación social en América Latina y el Caribe*, Adolfo Rodríguez Herrera y Hernán Alvarado Ugarte, 2009, 236 p.

100 *Envejecimiento, derechos humanos y políticas públicas*, Sandra Huenchuan (ed.), 2009, 232 p.

99 *Economía y territorio en América Latina y el Caribe. Desigualdades y políticas*, 2009, 212 p.

- 98 *La sociedad de la información en América Latina y el Caribe: desarrollo de las tecnologías y tecnologías para el desarrollo*, Wilson Peres y Martin Hilbert (eds.), 2009, 388 p.
- 97 *América Latina y el Caribe: migración internacional, derechos humanos y desarrollo*, Jorge Martínez Pizarro (ed.), 2008, 375 p.
- 96 *Familias y políticas públicas en América Latina: una historia de desencuentros*, Irma Arriagada (coord.), 2007, 424 p.
- 95 *Centroamérica y México: políticas de competencia a principios del siglo XXI*, Eugenio Rivera y Claudia Schatan (coords.), 2008, 304 p.
- 94 *América Latina y el Caribe: La propiedad intelectual después de los tratados de libre comercio*, Álvaro Díaz, 2008, 248 p.
- 93 *Tributación en América Latina. En busca de una nueva agenda de reformas*, Oscar Cetrángolo y Juan Carlos Gómez-Sabaini (comps.), 2007, 166 p.
- 92 *Fernando Fajnzylber. Una visión renovadora del desarrollo en América Latina*, Miguel Torres Olivos (comp.), 2006, 422 p.
- 91 *Cooperación financiera regional*, José Antonio Ocampo (comp.), 2006, 274 p.
- 90 *Financiamiento para el desarrollo. América Latina desde una perspectiva comparada*, Barbara Stallings con la colaboración de Rogério Studart, 2006, 396 p.
- 89 *Políticas municipales de microcrédito. Un instrumento para la dinamización de los sistemas productivos locales. Estudios de caso en América Latina*, Paola Foschiato y Giovanni Stumpo (comps.), 2006, 244 p.
- 88 *Aglomeraciones en torno a los recursos naturales en América Latina y el Caribe: Políticas de articulación y articulación de políticas*, 2006, 266 p.
- 87 *Pobreza, desertificación y degradación de los recursos naturales*, César Morales y Soledad Parada (eds.), 2006, 274 p.

Copublicaciones recientes / Recent co-publications

- Sesenta años de la CEPAL. Textos seleccionados del decenio 1998-2008*, Ricardo Bielschowsky (comp.), CEPAL/Siglo Veintiuno, Argentina, 2010.
- El nuevo escenario laboral latinoamericano. Regulación, protección y políticas activas en los mercados de trabajo*, Jürgen Weller (ed.), CEPAL/Siglo Veintiuno, Argentina, 2010.
- Internacionalización y expansión de las empresas eléctricas españolas en América Latina*, Patricio Rozas, CEPAL/Lom, Chile, 2009.
- Gobernanza corporativa y desarrollo de mercados de capitales en América Latina*, Georgina Núñez, Andrés Oneto y Germano M. de Paula (coords.), CEPAL/Mayol, Colombia, 2009.
- EnREDos. Regulación y estrategias corporativas frente a la convergencia tecnológica*, Marcio Wohlers y Martha García-Murillo (eds.), CEPAL/Mayol, Colombia, 2009.
- Desafíos y oportunidades de la industria del software en América Latina*, Paulo Tigre y Felipe Silveira Marques (eds.), CEPAL/Mayol, Colombia, 2009.
- ¿Quo vadis, tecnología de la información y de las comunicaciones?*, Martin Hilbert y Osvaldo Cairó (eds.), CEPAL/Mayol, Colombia, 2009.
- O Estructuralismo latino-americano**, Octavio Rodríguez, CEPAL/Civilização Brasileira, 2009.
- L'avenir de la protection sociale en Amérique latine. Accessibilité, financement et solidarité**, CEPALC/Eska, France, 2009.
- Fortalecer los sistemas de pensiones latinoamericanos. Cuentas individuales por reparto*, Robert Holzmann, Edward Palmer y Andras Uthoff (eds.), CEPAL/Mayol, Colombia, 2008.
- Competition Policies in Emerging Economies. Lessons and Challenges from Central America and Mexico**, Claudia Schatan and Eugenio Rivera Urrutia (eds.), ECLAC/Springer, USA, 2008.
- Estratificación y movilidad social en América Latina. Transformaciones estructurales en un cuarto de siglo*, Rolando Franco, Arturo León y Raúl Atria (coords.), CEPAL/Lom, Chile, 2007.
- Economic growth with equity. Challenges for Latin America**, Ricardo Ffrench-Davis and José Luis Machinea (eds.), ECLAC/Palgrave Macmillan, United Kingdom, 2007.
- Mujer y empleo. La reforma de la salud y la salud de la reforma en Argentina*, María Nieves Rico y Flavia Marco (coords.), CEPAL/Siglo XXI, Argentina, 2006.
- El estructuralismo latinoamericano*, Octavio Rodríguez, CEPAL/Siglo XXI, México, 2006.
- Gobernabilidad corporativa, responsabilidad social y estrategias empresariales en América Latina*, Germano M. de Paula, João Carlos Ferraz y Georgina Núñez (comps.), CEPAL/Mayol, Colombia, 2006.
- Desempeño económico y política social en América Latina y el Caribe. Los retos de la equidad, el desarrollo y la ciudadanía*, Ana Sojo y Andras Uthoff (comps.), CEPAL/Flacso-México/ Fontamara, México, 2006.

Coediciones recientes / Recent co-editions

- The United Nations Regional Commissions and the Climate Change Challenges**, ECLAC/ECA/ECE/ESCAP/ESCWA, 2009.
- Hacia un desarrollo inclusivo. El caso de Chile*, Osvaldo Sunkel y Ricardo Infante (eds.), CEPAL/OIT/Fundación Chile 21, Chile, 2008.
- Reformas para la cohesión social en América Latina. Panorama antes de la crisis*, Alicia Bárcena y Narcis Serra (eds.), CEPAL/SEGIB/CIDOB, Chile, 2008.
- El envejecimiento y las personas de edad. Indicadores sociodemográficos para América Latina y el Caribe*, CEPAL/UNFPA, 2009.
- Espacios iberoamericanos: la economía del conocimiento*, CEPAL/SEGIB, Chile, 2008.
- Hacia la revisión de los paradigmas del desarrollo en América Latina*, Oscar Altimir, Enrique V. Iglesias, José Luis Machinea (eds.), CEPAL/SEGIB, Chile, 2008.
- Por uma revisão dos paradigmas do desenvolvimento na América Latina**, Oscar Altimir, Enrique V. Iglesias, José Luis Machinea (eds.), CEPAL/SEGIB, Chile, 2008.

Hacia un nuevo pacto social. Políticas económicas para un desarrollo integral en América Latina, José Luis Machinea y Narcís Serra (eds.) CEPAL/CIDOB, España, 2008.

Espacios iberoamericanos: comercio e inversión, CEPAL/SEGIB, Chile, 2007.

Espaços Ibero-Americanos: comércio e investimento, CEPAL/SEGIB, Chile, 2007.

Visiones del desarrollo en América Latina, José Luis Machinea y Narcís Serra (eds.), CEPAL/CIDOB, España, 2007.

Cohesión social: inclusión y sentido de pertenencia en América Latina y el Caribe, CEPAL/SEGIB, Chile, 2007.

Social Cohesion. Inclusion and a sense of belonging in Latin America and the Caribbean, ECLAC/SEGIB, Chile, 2007.

Cuadernos de la CEPAL

94 *El cuidado en acción. Entre el derecho y el trabajo*, Sonia Montaña Virreira y Coral Calderón Magaña (coords.), 2010, 236 p.

93 *Privilegiadas y discriminadas. Las trabajadoras del sector financiero*, Flavia Marco Navarro y María Nieves Rico Ibáñez (eds.), 2009, 300 p.

92 *Estadísticas para la equidad de género: magnitudes y tendencias en América Latina*, Vivian Milosavljevic, 2007, 186 pp.

91 *Elementos conceptuales para la prevención y reducción de daños originados por amenazas naturales*, Eduardo Chaparro y Matías Renard (eds.), 2005, 144 p.

Cuadernos estadísticos de la CEPAL

36 *Clasificaciones estadísticas internacionales incorporadas en el Banco de Datos de Comercio Exterior de América Latina y el Caribe de la CEPAL (Revisión 3)*. Solo disponible en CD, 2008.

35 *Resultados del Programa de Comparación Internacional para América del Sur*. Solo disponible en CD, 2007.

34 *Indicadores económicos del turismo*. Solo disponible en CD, 2006.

33 *América Latina y el Caribe. Balanza de pagos 1980-2005*. Solo disponible en CD, 2006.

32 *América Latina y el Caribe. Series regionales y oficiales de cuentas nacionales, 1950-2002*. Solo disponible en CD, 2005.

31 *Comercio exterior. Exportaciones e importaciones según destino y origen por principales zonas económicas. 1980, 1985, 1990, 1995-2002*. Solo disponible en CD, 2005.

Observatorio demográfico ex Boletín demográfico / Demographic Observatory formerly Demographic Bulletin (bilingüe/bilingual)

Edición bilingüe (español e inglés) que proporciona información estadística actualizada, referente a estimaciones y proyecciones de población de los países de América Latina y el Caribe. Incluye también indicadores demográficos de interés, tales como tasas de natalidad, mortalidad, esperanza de vida al nacer, distribución de la población, etc.

El Observatorio aparece dos veces al año, en los meses de enero y julio. Suscripción anual: US\$ 20.00. Valor por cada ejemplar: US\$ 15.00.
Bilingual publication (Spanish and English) providing up-to-date estimates and projections of the populations of the Latin American and Caribbean countries. Also includes various demographic indicators of interest such as fertility and mortality rates, life expectancy, measures of population distribution, etc.

The Observatory appears twice a year in January and July. Annual subscription: US\$ 20.00. Per issue: US\$ 15.00.

Notas de población

Revista especializada que publica artículos e informes acerca de las investigaciones más recientes sobre la dinámica demográfica en la región, en español, con resúmenes en español e inglés. También incluye información sobre actividades científicas y profesionales en el campo de población.

La revista se publica desde 1973 y aparece dos veces al año, en junio y diciembre.

Suscripción anual: US\$ 20.00. Valor por cada ejemplar: US\$ 12.00.

Specialized journal which publishes articles and reports on recent studies of demographic dynamics in the region, in Spanish with abstracts in Spanish and English. Also includes information on scientific and professional activities in the field of population.

Published since 1973, the journal appears twice a year in June and December.

Annual subscription: US\$ 20.00. Per issue: US\$ 12.00.

Series de la CEPAL

Comercio internacional / Desarrollo productivo / Desarrollo territorial / Estudios estadísticos y prospectivos / Estudios y perspectivas (Bogotá, Brasilia, Buenos Aires, México, Montevideo) / **Studies and Perspectives** (The Caribbean, Washington) / *Financiamiento del desarrollo / Gestión pública / Informes y estudios especiales / Macroeconomía del desarrollo / Manuales / Medio ambiente y desarrollo / Mujer y desarrollo / Población y desarrollo / Políticas sociales / Recursos naturales e infraestructura / Seminarios y conferencias.*

Véase el listado completo en: www.cepal.org/publicaciones / A complete listing is available at: www.cepal.org/publicaciones

كيفية الحصول على منشورات الأمم المتحدة

يمكن الحصول على منشورات الأمم المتحدة من المكتبات ودور التوزيع في جميع أنحاء العالم. استعلم عنها من المكتبة التي تتعامل معها أو اكتب إلى : الأمم المتحدة ، قسم البيع في نيويورك أو في جنيف .

如何获取联合国出版物

联合国出版物在全世界各地的书店和经售处均有发售。请向书店询问或写信到纽约或日内瓦的联合国销售组。

HOW TO OBTAIN UNITED NATIONS PUBLICATIONS

United Nations publications may be obtained from bookstores and distributors throughout the world. Consult your bookstore or write to: United Nations, Sales Section, New York or Geneva.

COMMENT SE PROCURER LES PUBLICATIONS DES NATIONS UNIES

Les publications des Nations Unies sont en vente dans les librairies et les agences dépositaires du monde entier. Informez-vous auprès de votre libraire ou adressez-vous à : Nations Unies, Section des ventes, New York ou Genève.

КАК ПОЛУЧИТЬ ИЗДАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Издания Организации Объединенных Наций можно купить в книжных магазинах и агентствах во всех районах мира. Наводите справки об изданиях в вашем книжном магазине или пишите по адресу: Организация Объединенных Наций, Секция по продаже изданий, Нью-Йорк или Женева.

COMO CONSEGUIR PUBLICACIONES DE LAS NACIONES UNIDAS

Las publicaciones de las Naciones Unidas están en venta en librerías y casas distribuidoras en todas partes del mundo. Consulte a su librero o diríjase a: Naciones Unidas, Sección de Ventas, Nueva York o Ginebra.

Las publicaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y las del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) se pueden adquirir a los distribuidores locales o directamente a través de:

Publicaciones de las Naciones Unidas
2 United Nations Plaza, Room DC2-853
Nueva York, NY, 10017
Estados Unidos
Tel. (1 800)253-9646 Fax (1 212)963-3489
E-mail: publications@un.org

Publicaciones de las Naciones Unidas
Sección de Ventas
Palais des Nations
1211 Ginebra 10
Suiza
Tel. (41 22)917-2613 Fax (41 22)917-0027

Unidad de Distribución
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
Av. Dag Hammarskjöld 3477, Vitacura
7630412 Santiago
Chile
Tel. (56 2)210-2056 Fax (56 2)210-2069
E-mail: publications@cepal.org

Publications of the Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC) and those of the Latin American and the Caribbean Institute for Economic and Social Planning (ILPES) can be ordered from your local distributor or directly through:

United Nations Publications
2 United Nations Plaza, Room DC2-853
New York, NY, 10017
USA
Tel. (1 800)253-9646 Fax (1 212)963-3489
E-mail: publications@un.org

United Nations Publications
Sales Sections
Palais des Nations
1211 Geneva 10
Switzerland
Tel. (41 22)917-2613 Fax (41 22)917-0027

Distribution Unit
Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC)
Av. Dag Hammarskjöld 3477, Vitacura
7630412 Santiago
Chile
Tel. (56 2)210-2056 Fax (56 2)210-2069
E-mail: publications@eclac.org